

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN**



**TESIS DOCTORAL**

**El derecho de rectificación o respuesta: integrante  
del derecho a la información y a la comunicación.  
Abordaje jurídico-comunicacional. Su aplicación  
comparada en el derecho español y argentino**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR

**Analía Graciela Eliades**

DIRECTOR

**Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva**

**Madrid, 2017**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN



TESIS DOCTORAL

EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA:  
INTEGRANTE DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A  
LA COMUNICACIÓN. ABORDAJE JURÍDICO-  
COMUNICACIONAL. SU APLICACIÓN COMPARADA EN  
EL DERECHO ESPAÑOL Y ARGENTINO.

**Analía Graciela ELIADES**

DIRECTOR

Dr. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva

Madrid, Octubre 2015



**Resumen:**

El derecho de rectificación o respuesta integra el amplio contenido del derecho a la información y a la comunicación, vigorizando el diálogo público y fortaleciendo la democracia. Su estudio requiere un abordaje jurídico-comunicacional que tenga en cuenta su estatus legal y su proyección en la información, permitiendo escuchar otra versión de los hechos.

Este instituto posee una histórica raigambre en la normativa europea, y en particular se abordará el caso de España, con una perspectiva de derecho comparado. Podemos preguntarnos si es útil, adecuado y pertinente comparar dos sistemas jurídicos que en principio son tan diferentes como el español y el argentino, que, de movida, pertenecen a dos continentes distintos y tienen trayectorias normativas muy disímiles desde su forma de gobierno, una con monarquía parlamentaria y la otra como república federal. Y la respuesta, es positiva, sí es posible, en principio por las contribuciones históricas del derecho indiano y español en las colonias del Río de la Plata, y en las huellas de pensamiento indelebles del derecho continental europeo que presenta la legislación civil y comercial argentina, las fuentes de derecho comparado español presentes en las sentencias que se analizan en el presente trabajo y en los fundamentos de los proyectos de ley sobre el derecho de rectificación o respuesta que consideran y retoman la experiencia y la normativa española.

A diferencia del Convenio de Roma de 1950, el sistema interamericano de derechos humanos, posee una consagración específica del derecho de rectificación o respuesta en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos

La ausencia de normativa nacional en la materia en Argentina, ha hecho que la jurisprudencia lo considerara operativo, fundando su recepción en el sistema interamericano de derechos humanos y en el derecho comparado. Sin embargo, el reconocimiento de su operatividad recién se produjo en la jurisprudencia en el año 1992 con el caso “Ekmekdjian c. Sofovich” que marcó un hito en la historia de los derechos humanos en Argentina y sirvió de base para la reforma constitucional del año 1994, en la que se consideró la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos en su artículo 75 inc. 22. Sin embargo, en cuanto al tema en particular, sigue aún una deuda no

saldada sobre el alcance, el contenido, la legitimación activa, las implicancias y el procedimiento del derecho de rectificación o respuesta en Argentina.

Es necesario tener presente que la Convención Americana de Derechos Humanos manda a cada Estado Parte que regule por ley el derecho de rectificación o respuesta. Sin embargo, la mora legislativa sobre el instituto en Argentina deja en desamparo a quien pretende una rectificación, provoca una situación de inseguridad jurídica para el afectado quien debe emprender un largo camino judicial que en por el tiempo que insume un litigio de estas características, si llega a tener una sentencia a favor que reconozca el derecho a rectificar llegará a ser muy tarde e ineficaz, desvirtuando la esencia misma de la respuesta.

La necesidad de una ley que regule su procedimiento en el ámbito nacional argentino en el actual escenario de la Sociedad de la Información y el Conocimiento implicaría un avance concreto en pos de la democratización de la palabra auspiciada por los sistemas protectores de los derechos humanos, con especial referencia al derecho a la libertad de expresión. Por ello, con esta perspectiva se aportan criterios, fundamentos y directrices concretas para una ley que reglamente el derecho de rectificación o respuesta.

**Abstract:**

The right of reply is content of the wide right of information and communication, encouraging the public dialogue and strengthening the democracy. The study and the investigation about the right of reply requires the consideration of its legal status and the meaning for the communication, allowing listen others versions of the facts.

This right has historical antecedents and tradition in the European regulation, and particularly this investigation will try the Spanish case, with a comparative law perspective. In this context, the interrogation may be if it is helpful, suitable and relevant compare two normative systems that by principle are totally different like the cases of Spain and Argentina, considering that at first they belong to different continents and they have normative trajectories with its own characters and their forms of government are in the case of Spain is a parliamentary monarchy and Argentina is a federal republic. And the answer is positive, yes, is possible compare both systems considering the historical contributions of the Indian and Spanish law in the colonies of the River Plate and the indelible traces of the European continental law that presents the civil and commercial argentine law, and the sources of comparative Spanish law that are in the jurisprudence, sentences and in the foundations of the bills about the reply right that considers, have in consideration and returns to the contributions of the Spanish Law.

So, this right has historical antecedents in Spain and in the American system of human rights it is established in the article 14 of the American Convention of Human Rights. This is a remarkable contrast with the Rome Convention of 1950.

The absence of national regulation in the national level in Argentina, sets up that the jurisprudence considers the operational character of the reply right, founding its reception in the inter American human rights system and in the comparative Law. However the recognition of the operability of the reply right was for first time recognized by the jurisprudence of the Argentine Supreme Court in 1992 with “Ekmekdjian vs. Sofovich” case that meant a milestone in the human rights system in Argentina and was the base for

the constitutional reform of 1994, which established the constitutional level of the human rights treaties and conventions in its article 75 n. 22.

Nevertheless, in reference to the particular issue of reply right continues a doubt about the scope, the content, the active legitimation, the implications and the procedure of the right in Argentina.

It is necessary to consider that the American Human Rights Convention ordered to each Party State to regulate the reply right, by its own laws. For that reason, the legislative delay in order to have a law by the Argentine Congress implies an abandonment of each citizen that is affected by wrong and tortious information that needs and wants the possibility of an answer and it is obliged to present to the courts in order to obtain that denied action. So, it is a situation of legal uncertainty that the citizen have in order to exercise his right of reply. For these reasons this investigation pretends to give some instructions in order to have a reply right law in Argentina, a law that is necessary with the proposal of establish the procedure of the right of reply in the national level, that, in the contemporary Information Society would be a remarkable success towards the democratization of the speech support from the protective systems of human rights with special consideration of the freedom of expression.

## **Agradecimientos**

Para que la realización de una tesis doctoral sea posible, son muchos y muchas los que han intervenido en la formación académica para el arribo a esta instancia. Por eso, podría ser injusto, por temor a alguna omisión involuntaria, un detallado recuerdo de todos los que han pasado por nuestra vida académica y han permitido llegar aquí. Por ello mi agradecimiento apunta al colectivo que me identifica y al que pertenezco, constituido por los compañeros y compañeras de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, República Argentina quienes me han permitido realizarme en mi labor docente y de investigación.

En lo individual, agradecer profundamente la experiencia vivida en la Universidad Complutense de Madrid con sus docentes de Doctorado, a quienes tanto valoramos por sus aportes al derecho a la información y a la comunicación y especialmente al Dr. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, por su consejo certero, su presencia ineludible, su paciente espera, su comprometido acompañamiento académico y su energía positiva motivadora de logros.



**Dedicado a**

**Todos aquello/as que lucharon, luchan y lucharán por un auténtico derecho a  
comunicar.**

**A todo/as los silenciado/as y excluido/as a quienes se les ha negado el derecho a  
responder.**

**A todo/as aquellos que en cualquier idioma o lengua, en la comunicación cotidiana y en el  
ejercicio del periodismo creen en el poder vital de la  
palabra.**

## Índice

<b>Capítulo I. Introducción.....</b>	<b>Pág. 15</b>
--------------------------------------	----------------

## **Capítulo II**

<b>El derecho a la información y a la comunicación en Argentina y España.....</b>	<b>Pág. 26</b>
---	----------------

II.1. Preliminar.....	Pág. 26
-----------------------	---------

II.2. El devenir histórico de la libertad de expresión al derecho a la comunicación.....	Pág. 30
---	---------

II.2.1. El absolutismo monárquico: la información en poder del rey, la censura y su concepción actual. Viejas y nuevas máscaras de la censura.....	Pág. 32
---	---------

II.2.1.1. La censura en la dictadura militar argentina.....	Pág. 35
---	---------

II.2.1.2. Vías o medios indirectos de censura en el sistema interamericano de derechos humanos.....	Pág. 39
--	---------

II.2.1.2. a) La discriminación en la distribución de la publicidad oficial.....	Pág. 40
---	---------

II.2.1.2.b) Los monopolios y oligopolios como forma de censura.....	Pág. 43
---	---------

II.3. La concepción empresarista de la información.....	Pág. 47
---	---------

II.4. La concepción profesionalista de la información.....	Pág. 51
--	---------

II.4.1. La Colegiación Obligatoria de Periodistas es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.....	Pág. 60
---	---------

II.4.2. Derechos del sujeto profesional de la información en España.....	Pág. 61
--	---------

II.5. La concepción universalista del derecho a la libertad de expresión.....	Pág. 65
---	---------

II.5.1. El derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación en la Constitución Argentina.....	Pág. 71
--	---------

II.5.2. El derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación en la Constitución Española.....	Pág. 80
---	---------

### **Capítulo III**

#### **El derecho a la información en los sistemas europeo e interamericano de derechos**

**humanos**.....Pág. 87

##### **III.1. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos**

**humanos**.....Pág. 87

##### **III.1.1. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en**

**Argentina**.....Pág. 87

##### **III.1.2. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en**

**España**.....Pág. 92

##### **III.2. El derecho a la libertad de expresión en los sistemas europeo e interamericano de**

**derechos humanos**.....Pág. 96

##### **III.2.1. El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de**

**Derechos Humanos**.....Pág. 98

##### **III.2.2. El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana**

**de Derechos Humanos**.....Pág. 122

**III.3. Conclusiones comparativas**.....Pág. 130

### **Capítulo IV**

**El derecho de rectificación o respuesta**.....Pág. 133

**IV.1. Antecedentes**.....Pág. 133

**IV.2. Terminología. Interpretación**.....Pág. 139

**IV.2.1. Análisis conceptual semántico**.....Pág. 139

**IV.2.2. Análisis conceptual jurídico**.....Pág. 142

**IV.2.3. Análisis conceptual comunicacional**.....Pág. 167

##### **IV.2.3.1. El derecho de rectificación o respuesta en la matriz del pensamiento político**

**liberal**.....Pág. 168

**IV.2.3.2. La información en la teoría del Estado absoluto**.....Pág. 170

**IV.2.3.3. La libertad de prensa en la teoría del Estado representativo liberal**.....Pág. 171

**IV.2.3.4. Clásicos liberales de la libertad de prensa**.....Pág. 174

**IV.2.3.5. La libertad de prensa en el liberalismo económico**.....Pág. 178

**IV.2.3.6. La libertad de prensa en la matriz de pensamiento marxista**.....Pág. 182

IV.2.3.7. La teoría de la responsabilidad social de la prensa.....	Pág. 184
IV.3. La concepción universalista de los derechos humanos.....	Pág. 192
IV.4. Derecho de rectificación o respuesta: su naturaleza y estatus jurídico.....	Pág. 196
IV.5. Bien jurídico protegido.....	Pág. 200

## Capítulo V

### **Fundamentos del derecho de rectificación o respuesta.**

<b>Su relación con el derecho a la comunicación. Críticas y defensas en el periodismo y en el Derecho argentino .....</b>	<b>Pág. 203</b>
---	-----------------

V.1. Fundamentos del derecho de rectificación o respuesta.....	Pág. 203
V.2. Libertad de pensamiento y derecho de respuesta.....	Pág. 204
V.3. Libertad de expresión y derecho de respuesta.....	Pág. 206
V.4. Libertad de prensa o imprenta y derecho de respuesta.....	Pág. 207
V.5. Derecho a la información y derecho de respuesta.....	Pág. 210
V.6. El derecho a la comunicación y el derecho de respuesta.....	Pág. 214
V.7. El derecho a la igualdad y el derecho de respuesta.....	Pág. 220
V.8. El derecho de acceso a la información y el derecho de respuesta.....	Pág. 223
V.9. Derecho a la comunicación y derecho de rectificación: diatribas y aportes a la doctrina argentina.....	Pág. 224

## Capítulo VI

<b>Derecho de rectificación y ética. Desafíos éticos comunicacionales ante los nuevos medios de comunicación.....</b>	<b>Pág. 235</b>
---	-----------------

VI.1. Derecho de rectificación y ética. Los medios deciden sus mensajes y sus silencios.....	Pág. 235
VI.1.1. Códigos deontológicos del periodismo y nuevas modalidades de pautas éticas del periodismo y la comunicación.....	Pág. 235
VI.1.2. Estándares de Hetero-Regulación.....	Pág. 240
VI.1.3. Autorregulación.....	Pág. 243

VI.1.4. Sin autorregulación comprometida, avanza los límites impuestos externamente.....	Pág. 245
VI.1.5. Razones de los códigos deontológicos y el autocontrol.....	Pág. 249
VI.2. Ética y derecho de rectificación o respuesta. Recepción del derecho de rectificación en Códigos de Ética Periodística, Estatutos de Redacción y declaraciones deontológicas.....	Pág. 252
VI.3. Desafíos éticos comunicacionales ante los nuevos medios de comunicación...	Pág. 276

## Capítulo VII

<b>El status questionis</b> .....	Pág. 285
VII.1. El derecho de rectificación o respuesta en Argentina. Su interpretación doctrinaria y jurisprudencial. El derecho de rectificación en las constituciones provinciales.....	Pág. 285
VII.1.1. El derecho a la libertad de expresión y el derecho de rectificación en la Constitución Argentina. Interpretación a partir de la reforma constitucional de 1994.....	Pág. 285
VII.1.2. El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.....	Pág. 291
VII.1.2. 1. Caso “Fernández Valdez”.....	Pág. 294
VII.1.2.2. Caso “Sarotto”.....	Pág. 298
VII.1.2.3. Caso “Sánchez Abelenda”.....	Pág. 299
VII.1.2.4. Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Neustadt, Bernardo y otros”.....	Pág. 304
VII.1.2.5. Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros”: el <i>leading case</i> que cambió la jurisprudencia argentina: la constitucionalidad y operatividad del derecho de rectificación o respuesta.....	Pág. 307
VII.1.2.6. Caso “Conesa Mones Ruiz, Horacio c. Diario Pregón” .....	Pág. 314
VII.1.2.7. Caso “Petric Domagoj, Antonio c. Página 12”.....	Pág. 317
VII.1.2.8. Caso “Rozenblum, Horacio r. c. Vigil Constancio y otros”.....	Pág. 329
VII.1.2.9. Caso “Perini, Carlos A. y otro c. Herrera de Noble y otro”.....	Pág. 332
VII.1.2.10. Caso “Tierno, Juan Carlos c. La Arena”.....	Pág. 341

VII.2. El derecho de rectificación o respuesta en las Constituciones de las Provincias argentinas en el marco del sistema federal de gobierno.....	Pág. 347
VII.3. Las constituciones provinciales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.....	Pág. 357
VII.4. Sistema interamericano de derechos humanos y derecho de rectificación o respuesta. Carácter vinculante de sus pronunciamientos.....	Pág. 358
VII.4.1. Reconocimiento del derecho de rectificación en la Convención Americana de Derechos Humanos.....	Pág. 358
VII.4.2. La exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	Pág. 364
VII.5. Regulación del derecho de rectificación o respuesta en España. Su interpretación doctrinaria y jurisprudencial en el contexto del sistema europeo de derechos humanos.....	Pág. 384
VII.5.1. Caso “Bengoechea Calvo”. STC 35/1983.....	Pág. 385
VII.5.2. Caso “Mercorsa”. STC 168/1986.....	Pág. 390
VII.5.3. Caso “Cambio 16”. TC Auto N° 1243/1988.....	Pág. 395
VII.5.4. Caso “Palazuelos”- Informe Semanal TVE. STC 40/1992.....	Pág. 396
VII.5.5. Caso Francisco Domínguez Galindo vs. Diario “Europa Sur”. STC 66/2000.....	Pág. 403
VII.5.6. Caso Francisco Álvarez-Cascos Fernández vs. “Cadena Ser”. STC 51/2007.....	Pág. 405
VII.5.7. Caso Pedro José Ramírez Codina vs. “El Mundo”. STC 99/2011.....	Pág. 406
VII.5.8. Caso Florentino vs “La Razón”. STS 2044/2012.....	Pág. 415
VII.5.9. Caso Luis María vs. “ABC”. STS 3847/2014.....	Pág. 417
VII.6. El derecho de rectificación o respuesta en el sistema europeo de derechos humanos.....	Pág. 421
VI.6.1. Las críticas al Canciller B. Kreisky: la sentencia “Lingens” de 8 de julio de 1986.....	Pág. 422
VI.6.2. La Resolución 74 del Comité de Ministros del Consejo de Europa.....	Pág. 427

## **Capítulo VIII.**

<b>Procedimiento</b> .....	Pág. 431
VIII.1. El procedimiento en la legislación española.....	Pág. 435
VIII.2. Garantías jurisdiccionales.....	Pág. 438
VIII.3. La cuestión probatoria.....	Pág. 445

## **Capítulo IX**

<b>Propuesta de lege ferenda o ¿cómo regular el derecho de rectificación en Argentina de forma que la libertad y la igualdad se acrecienten?</b> .....	Pág. 451
--	----------

IX.1. Antecedentes y recopilación de proyectos, anteproyectos, propuestas e intentos de reglamentación .....	Pág. 451
--	----------

IX.2. Conclusiones.....	Pág.488
-------------------------	---------

IX.3. Propuesta de lege ferenda. Contribuciones a la reglamentación del derecho de rectificación o respuesta en Argentina. Comprobación de que la propuesta cumple los requerimientos internacionales.....	Pág. 495
a. Supuestos para el ejercicio.....	Pág. 496
b. Legitimación.....	Pág. 498
c. Procedimiento y plazos.....	Pág. 519

<b>Bibliografía y fuentes consultadas</b> .....	Pág..529
---	----------

## Capítulo I

### Introducción

La presente tesis se propone analizar el contenido e implicancias del derecho de rectificación o respuesta como integrante del derecho a la información y a la comunicación, desde una óptica de Derecho Comparado, considerando los regímenes jurídicos español y argentino, abordando su interpretación doctrinaria y jurisprudencial, no exenta de controversias y confusiones en su aplicación práctica y desde el ejercicio del periodismo.

Aquí cabe tener en cuenta, tal como trataremos en profundidad, que incluso existen detractores de este derecho, especialmente el sujeto empresario de la información en Argentina que argumenta públicamente e incluso ante los propios tribunales que el derecho de rectificación sería inconstitucional porque promueve la “autocensura”, es una amenaza a la libertad de expresión y cercena el derecho a la propiedad<sup>1</sup>.

En este sentido, ante la falta de una ley en Argentina que regule la aplicación de este derecho, es necesario relevar e indagar sobre su operatividad. El derecho de rectificación o respuesta, llamado comúnmente en la jerga periodística “derecho a réplica” presenta la particularidad de ser al mismo tiempo un derecho, integrante del derecho humano a la

---

<sup>1</sup> Badeni, Gregorio. “Un retroceso grave para la Argentina”. Clarín, Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48.

“La Corte Suprema decidió avalar el derecho a réplica”. Para ADEPA, la sentencia conocida ayer implica “un avance peligrosísimo contra la libertad de prensa”. Clarín. Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48.

La Nación, 19 de septiembre de 1998. “Advirtió ADEPA acerca de los embates a la libertad de prensa”.

“La libertad de prensa vigente en la Argentina desde 1983 ha soportado múltiples embates en los últimos doce meses. A la ya recurrente intolerancia de ciertos funcionarios públicos se ha sumado la peligrosa posición asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para la cual el llamado derecho de réplica está vigente en la Argentina”. <http://www.lanacion.com.ar/111086-advirtio-adeпа-acerca-de-los-embates-a-la-libertad-de-prensa>

Sobre “autocensura”: Agravio de Página 12 en el caso “Petric Demagoj c. Página 12”. Declaraciones de Guillermo Ignacio, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Clarín, 20 de agosto de 1998.



libertad de expresión, (consagrado en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica) y también una responsabilidad ulterior, ya que surge como tal a partir de la emisión de un mensaje que contiene información inexacta y/o agravante. A su vez, al integrar el derecho a la información y a la comunicación, vigoriza su efectivo ejercicio en una sociedad democrática, al permitir la multiplicidad de voces.

Así como Argentina carece de una ley que regule el derecho de rectificación, en España, el mismo tiene una histórica raigambre. En este sentido, cabe tener en cuenta que en dicho país europeo, hasta la sanción de la Ley Orgánica 2/1984, en la Ley de Prensa de 1966, se diferenciaba entre réplica y respuesta. Así se aludía al «control rectificativo» de la información a través de dos figuras: Derecho de respuesta o réplica, cuando es ejercido por particulares, y derecho de rectificación cuando es ejercido por autoridades u organismos oficiales<sup>2</sup>. En la actualidad el derecho de rectificación, equivale al antiguo derecho de réplica.

Asimismo, se suma a estas particularidades la concepción del derecho de rectificación o respuesta como un deber ético del periodismo, tomado como tal en numerosos Códigos de Ética o en Códigos Deontológicos como pauta autorregulada.

La interpretación jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, considera especialmente los aportes del derecho comparado y de la jurisprudencia española, por lo cual el análisis de las fuentes de la jurisprudencia argentina en su aplicación presenta un destacado interés, máxime teniendo en cuenta la inexistencia de estudios, relevamientos y sistematizaciones en la materia.

Ahora bien, también se presentan en la actualidad desafíos ante el desarrollo de las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales y los nuevos modos de información y

---

<sup>2</sup> Sobrao Martínez, Francisco. “El derecho de rectificación”, en Revista Persona y Derecho. Vol. 05, 1978. España. Pág. 146. Disponible en Dadum. Depósito académico digital de la Universidad de Navarra. <http://dadun.unav.edu/handle/10171/12335>

comunicación que nos invitan a repensar el derecho de rectificación o respuesta en estos ámbitos. Es por ello que en este marco se alude al “derecho de rectificación en la interactividad<sup>3</sup>” que se caracteriza por la instantaneidad que gobierna en Internet y en las redes sociales y que presenta nuevos contornos del derecho a la información.

Se parte de la premisa de que el derecho de rectificación o respuesta es parte integrante del derecho a la libertad de expresión, y que su reconocimiento efectivo consolidará, vigoriza y permite la multiplicidad de voces en democracia, promoviendo un auténtico derecho a la comunicación. Tal como sostiene el Prof. Manuel Sánchez de Diego: “Libertad de expresión, libertad de información, derecho a la información, derecho a la comunicación, derecho a una comunicación pública libre, libertad de palabra, libertad de expresión de la opinión... son algunos de los términos que se usan, pero “con independencia de cuál sea la expresión que se emplee, todas ellas se están refiriendo a la protección jurídica del proceso de comunicación. Esto es, el derecho de las personas a emitir mensajes por diferentes canales y el derecho a recibirlos” (Sánchez de Diego, 2009:78)”.

La presente tesis trata de responder a diferentes interrogantes en relación al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta: ¿Qué entendemos por derecho de rectificación? ¿Cuál es la terminología que se emplea y qué diferencias presentan? ¿Es un derecho humano? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué relación tiene con la verdad? ¿Y con la otra versión de los hechos? ¿Qué vinculación tiene con los derechos de la personalidad? Y, en concreto ¿con el derecho al honor?

Existe alguna regulación del derecho de rectificación en Argentina ¿normativa? ¿jurisprudencial? ¿Qué piensa la doctrina al respecto? ¿Cuál es la situación en la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Vincula de alguna forma a Argentina? ¿Cuáles son los debates actuales en torno a su aplicación? ¿Por qué genera controversia en Argentina un derecho humano consagrado en la Convención Americana de Derechos

---

<sup>3</sup> Benito García, José María (2004) “*La universalización del acceso a la información en el derecho de rectificación*”. Tesis doctoral. Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo II, leída el 19-12-2001. Dirigida por Javier Fernández del Moral. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/inf/ucm-t25426.pdf>

Humanos y de alta raigambre e historia en el Derecho Comparado? ¿Cuáles son las interpretaciones en torno al derecho de interpretación o respuesta que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y los tribunales españoles? ¿Cuáles son las fuentes en las que basa sus decisiones la Corte Argentina y por qué acude a las enseñanzas del Derecho Comparado?

En este marco, el abordaje de la presente investigación se llevará adelante por medio de los siguientes pasos metodológicos

1. Planteamiento de las cuestiones o preguntas que quieren responderse, tal como las hemos expuesto ut supra, con la previa contextualización, descripción de antecedentes y fundamentaciones en torno al derecho de rectificación o respuesta.
2. Exposición de la legislación, jurisprudencia y doctrina sobre dichas cuestiones en los ámbitos de los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos y en España y Argentina.
3. Propuesta de *lege ferenda*, es decir, se plantean criterios mínimos a tener en cuenta tendientes a la sanción de la legislación correspondiente del instituto en Argentina.

La problemática que gira alrededor de la libertad de expresión fue desde siempre un tópico que inquietó a gobernantes y gobernados, políticos y tratadistas, empresarios y trabajadores de prensa, y en fin, aún con más énfasis en la actualidad, al sujeto universal en general.

La evolución histórica de los derechos, y particularmente, el derecho de dar y recibir información requieren un abordaje que supere el mero debate teórico para adentrarse en las garantías y protección efectiva del mismo, atravesando la mirada jurídica con la comunicacional. A su vez, el análisis particularizado de los institutos que hacen al derecho de la información se constituye en una necesidad académica que aporte renovadas visiones a los medios, a los periodistas y al público.

La Constitución Argentina (1853) establece en el artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa...”.

Por otra parte, el artículo 32 (1860) establece: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Es necesario recordar que la Constitución Argentina tuvo como modelo a la Constitución de los Estados Unidos de América<sup>4</sup>, y de ahí, entre otras razones que luego explicaremos, el artículo 32 de la Constitución Nacional muy similar a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la que se inspiró<sup>5</sup>.

Los artículos 14 y 32, y el espíritu liberal de la Constitución, marcaron la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos aquellos casos en los que se presentaba el entendimiento de la libertad de prensa y sus responsabilidades ulteriores, con los matices hermenéuticos propios del pensamiento jurídico político liberal y sus distintas coyunturas sociopolíticas.

En el año 1984, la República Argentina ratifica mediante la Ley N° 23.054<sup>6</sup> la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, que consagra expresamente el derecho de rectificación en el Artículo 14, y sujeta las condiciones de implementación del mismo conforme lo establezca la ley. Téngase presente que tal adhesión a dicha Convención Internacional marcó un hito en la historia de los derechos humanos en Argentina, con su consecuente correlato en la

---

<sup>4</sup> “Nuestra Constitución Nacional de 1853 debe ser también incluida como clara expresión de esta etapa (en referencia al constitucionalismo liberal). Redactada sobre la base del clásico modelo norteamericano e inspirada en su misma ideología, recibió las adaptaciones necesarias que requería nuestra realidad y, desde luego, las influencias históricas e ideológicas de sus inspiradores”. Ziulu, Adolfo G. “Derecho Constitucional”. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014. pág. 58.

<sup>5</sup> “*Congress shall make no law an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances*”. Adoptada el 16 de diciembre de 1791, como la primera de las diez enmiendas de la Carta de Derechos.

<sup>6</sup> Ley N° 23.054. B.O.: 27/03/1984.

protección del derecho a la libertad de expresión, atento a que recién había transcurrido unos meses desde el advenimiento de la democracia en diciembre de 1983, luego de una larga dictadura militar que azotara al país desde 1976.

La ausencia de ley a nivel nacional en Argentina sobre el instituto llevó a la Corte a desestimar los recursos que se presentaron en defensa del mismo, hasta que en el año 1992, con una Corte ya de nueve miembros, el *leading case* “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich Gerardo y otros s/ amparo”<sup>7</sup> implicó la admisión de la operatividad del derecho de rectificación o respuesta, a pesar de la carencia normativa y por primera vez, el tribunal se apartó de la interpretación dualista de los tratados internacionales.

En el año 1994, la Reforma de la Constitución Nacional Argentina, introduce importantes modificaciones en la Carta Magna, en la que cabe destacar, en el caso que nos ocupa, el Artículo 75 inc. 22, el cual determina, entre otros puntos, la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. De esta manera, la Convención Americana de Derechos Humanos integra nuestro ordenamiento jurídico con tal jerarquía, en la que se consagra expresamente el derecho de rectificación o respuesta en estos términos, el que será objeto de pormenorizado tratamiento en este trabajo:

1. *“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.*
2. *En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.*
3. *Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.*

---

<sup>7</sup> Fallos 315:1492, L.L. 1992-C-543.

Ahora bien, hasta el presente y a pesar de la jerarquía constitucional del Pacto de San José de Costa Rica, el ordenamiento jurídico argentino a nivel nacional no tiene una ley específica que regule el ejercicio del derecho en nuestro país. Los proyectos presentados en el Congreso Nacional han sido invariablemente atacados por los empresarios de los medios, quienes argumentan que el derecho de rectificación sería inconstitucional por afectar el derecho de propiedad consagrado en el Artículo 17 de la Constitucional y el Artículo 14 en cuanto promovería una “autocensura” y por ende menoscabaría la libertad de prensa.

Sin embargo, en virtud del régimen federal de gobierno, numerosas provincias han consagrado este derecho en el texto mismo de sus constituciones, o bien han dictado leyes específicas, poniéndose a la vanguardia en el ejercicio de un derecho a la información con su doble dimensión individual y social y transformándolo en una herramienta de participación ciudadana activa.

La pertinencia de este derecho, en este estado legal de la cuestión, teniendo por una parte jerarquía constitucional en virtud del Artículo 75 inc. 22 y por otro, la ausencia de una ley reguladora y de desarrollo del derecho de respuesta, ocasiona un debate jurídico y una interpretación jurisprudencial diversa que requiere un análisis, un estudio particular, un abordaje considerando los aportes del Derecho Comparado y una propuesta de ley que facilite el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, superando las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales encontradas.

Cabe tener en cuenta como faro guía de la jurisprudencia española, que tal como analizaremos, es tomada por la jurisprudencia argentina como fuente, en cuanto el Artículo 20 de la Constitución Española<sup>8</sup>, consagra el derecho a la libertad de expresión en los siguientes términos, el que en esta instancia presentamos a fin de su análisis posterior:

## ***Artículo 20***

### ***1. Se reconocen y protegen los derechos:***

---

<sup>8</sup> Publicada en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978. Vigencia desde 29 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 27 de Septiembre de 2011.

- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*
- b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.*
- c) A la libertad de cátedra.*
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*
- 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.*
- 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.*
- 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.*
- 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.*

A su vez, tal como analizaremos en profundidad, España sí cuenta con una Ley Orgánica que regula el derecho de rectificación. Se trata de la Ley Orgánica 2/1984<sup>9</sup>, reguladora del derecho de rectificación. A partir de allí se ha desarrollado una jurisprudencia emanada de los tribunales españoles que resulta de especial interés, y amerita su consideración, en tanto y en cuanto, será tomada como referencia y fuente por parte de los tribunales argentinos.

El presente trabajo pretende entonces abordar el estudio de este instituto jurídico en forma particular, ya que el material existente se encuentra desperdigado o no se encuentra

---

<sup>9</sup> Publicada en BOE de 27 de Marzo de 1984. Vigencia desde 16 de Abril de 1984.

sistematizado<sup>10</sup>, y aunar, de esta forma el análisis de su evolución doctrinaria y jurisprudencial, el estudio de su condición de derecho y su funcionamiento como responsabilidad ulterior del ejercicio del derecho a la información, las controversias y el debate que ha generado y las implicancias del mismo para el ejercicio de la profesión. Además, la propuesta se propone realizar un abordaje jurídico comunicacional, atravesando el estudio de la figura con una mirada interdisciplinaria, ausente por lo general de las visiones que hasta el momento lo han tratado y que se atienen solamente a las implicancias normativas, omitiéndose las comunicacionales, o apegándose sólo a alguna teoría en particular.

Aquí radica por ende el aporte que se pretende brindar con el estudio particularizado de este instituto jurídico, contribuyendo con una visión sistemática en el contexto actual de lo que se ha dado en llamar la “Sociedad de la información”.

El objetivo es en este contexto, contribuir o al menos realizar un pequeño y humilde aporte en la superación de los planteamientos teóricos y doctrinarios sobre la consagración del derecho de rectificación o respuesta para analizar particularmente su aplicación concreta y efectiva protección; el abordaje crítico de las interpretaciones y argumentos esgrimidos por los jueces en la resolución de casos en los que se ha puesto en juego la concurrencia de este derecho; la mirada para el ejercicio profesional y las implicancias en el trabajo cotidiano como así también la instalación social del instituto.

La claridad de la consagración de la libertad de expresión y del derecho a la información como derecho humano, debe abordarse dialécticamente con otras libertades y derechos fundamentales que pueden concurrir con el mismo. El carácter no absoluto nos

---

10 Puntualmente en Argentina, el Dr. Eliel Ballester, en 1987, publicó un libro específico sobre el tema, titulado “Derecho de Respuesta. Réplica y Rectificación. El público, la información y los medios”, publicado por Editorial Astrea en Buenos Aires en 1987. Por cierto hay numerosos artículos y capítulos de libros dedicados a la temática que se citan en forma actualizada en el presente trabajo. En el derecho español, se ha destacado la obra del catedrático González Ballesteros, “El derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y televisión”, es anterior a la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación en España y aún a la obra argentina citada, pues fue publicado por Editorial REUS, en Madrid hacia 1981. Asimismo, se destacan capítulos de libros, artículos, ensayos, y documentos referidos al derecho de rectificación en la bibliografía actualizada del derecho a la información.



conduce al interrogante sobre los límites que puede tener este derecho y el alcance de las responsabilidades ulteriores.

Normalmente, el planteo de esta cuestión, suscita la posibilidad del conflicto jurídico entre dos derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, nos conduce a una confrontación dialéctica que se da por el carácter no absoluto de los derechos. Esta situación resulta ser consustancial a la vida en sociedad, en la cual, los valores humanos, personales y subjetivos, como la libertad, la dignidad, la intimidad y la propia opinión son derechos que muchas veces se ven condicionados o afectados de alguna forma en su ejercicio, por la posible lesión que pueden producir a otros.

La concurrencia de dos garantías constitucionales en un determinado hecho, no tienen por qué entenderse como colisionantes u opuestas, requiere de precisiones teóricas, conceptuales, fácticas y contextuales; de concesiones y límites, para preferenciar una interpretación de armonía, que las equilibre en convergencia dentro del cuadro que las auspicia y preserva la ley fundamental. Una adecuada y justa ponderación valorativa, un razonable equilibrio de los derechos concurrentes, que contemple la convergencia del derecho social a la información y los derechos personales en juego<sup>11</sup>.

El derecho de rectificación no tiene por qué presentarse de una forma reñida y opuesta a la libertad de prensa y de expresión, y el marco constitucional nos ofrece un

---

11 La aplicación de criterios de ponderación viene siendo resaltadas en el ámbito judicial, superando la visión de derechos en colisión o en pugna. Así, en el “Caso Kimel vs. Argentina” pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2 de mayo de 2008, el mencionado tribunal señaló: “La Corte reconoce que tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, acogidos por la Convención, revisten suma importancia. Es necesario garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio”.

En el campo de la filosofía jurídica, Robert Alexy promueve la doctrina o ley de ponderación, quien sostiene que la cuestión acerca de cuáles son los derechos fundamentales sociales que el individuo posee definitivamente es una cuestión de ponderación entre principios. Por un lado se encuentra sobre todo, el principio de la libertad fáctica. Por el otro, se encuentran los principios formales de competencia de decisión del legislador democráticamente legitimado, de la división de poderes, de la libertad jurídica y derechos fundamentales sociales de otros así como a bienes colectivos. Alexy, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pág. 494.

escenario en el cual es posible mantener un equilibrio armónico que conjugue los derechos en concurrencia<sup>12</sup>.

El estudio y el abordaje del derecho de rectificación o respuesta, se nos aparece de una forma fascinante, por encerrar en sí mismo, controversias, opiniones encontradas, contradicciones y pasiones dependiendo desde el lugar del que se lo mire. Lleva ínsito la posibilidad y existencia del disenso, del criterio no compartido, y de algo más trascendente aún, de permitir escuchar, de oír, de expresar una versión distinta de los hechos informados. Por sí mismo no implica descubrir la “verdad”, ni tomar partido por una u otra visión, sino nada más, y nada menos, contribuye y forma parte del derecho de saber, de conocer una voz diferente, que se expresa, quebrando exclusivismos mediáticos.

En este sentido, como primer paso, proponemos la presentación del panorama normativo del derecho a la comunicación en Argentina y España, y los aportes de los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos a los que pertenecen dichos Estados, lo cual nos facilitará el análisis pormenorizado que proponemos y la búsqueda de respuesta a la formulación de los interrogantes que guían el presente trabajo.

---

<sup>12</sup> En reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución como juicios de los constituyentes. “En efecto, así lo han juzgado al hacer referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución, pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al Constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir”. Confr. Causas M. 399.XXXII, “Monges, Analía M. C. U.B.A.-res. 2314/95, del 26 de diciembre de 1996; C.278.XXVIII, “Chocobar, Sixto Celestino c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad”, del 27 de diciembre de 1996; Petric Domagoj, Antonio c. Página 12, CS, abril 16-998.

## Capítulo II

### El derecho a la información y a la comunicación en Argentina y España.

*“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también **conditio sine qua non** para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.*

*Corte Interamericana de Derechos Humanos  
Opinión Consultiva 5/85, 13-11-1985. Cons 70.*

#### II.1.- Preliminar

Con particular énfasis, en los últimos años, en Argentina la sociedad toda ha puesto en discusión el papel de los medios de comunicación, se pregunta por las fuentes informativas, ha comenzado a leer entre líneas, requiere saber quiénes son los propietarios de los medios, cuestiona la labor del periodismo, identifica a los periodistas y a los medios, indaga sobre la conformación de la agenda mediática e incluso se moviliza por estos temas que nos atañen en lo individual y en lo social.

Valga recordar entre muchos otros ejemplos, la movilización por la llamada “Ley de Medios”<sup>13</sup> o por la inclusión de la señal de televisión infantil PakaPaka<sup>14</sup> en la grilla de

---

<sup>13</sup> En rigor de verdad, aludimos a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley N° 26.522, B.O.: 10 de octubre de 2009. Los medios de comunicación social y la jerga periodística la suelen denominar “Ley de Medios”, aunque técnicamente tal denominación es incorrecta, ya que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual regula como su nombre lo dice, los servicios audiovisuales: radio, T.V. abierta y por suscripción. No regula Internet ni medios impresos.

<sup>14</sup> *Pakapaka* quiere decir en voz quechua juego de las escondidas y es el primer canal infantil público y educativo del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. <http://www.pakapaka.gob.ar/> Conforme lo establece el Artículo 65. 3. a, los servicios de televisión por suscripción de recepción fija “deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, todas las emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas aquellas en las que el Estado nacional tenga participación”. Por lo tanto, al ser PakaPaka una señal de cable gratuita, de titularidad del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, los cableoperadores debían incluirla en su grilla de programación. La empresa Cablevisión S.A., propiedad del Grupo Clarín S.A. y con mayor cobertura en todo el territorio nacional se oponía a la inclusión de este y otros canales (INCAA TV, TELESUR, CN23,360) en su grilla de programación, por lo que demandó al Estado Argentino. Finalmente Sala IV de la Cámara Nacional de

canales de los servicios de comunicación audiovisual por suscripción, en Argentina, manifestaciones que cobraron inusitada fuerza desde 2008 a 2012 especialmente.

En consonancia con lo expuesto, Horacio Verbitsky sostiene: “Durante las últimas décadas, las batallas por la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo de la comunicación constituyeron episodios significativos de una lucha más vasta por la gobernabilidad democrática, que excedió los límites de la Argentina y tuvo entre sus consecuencias la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Declaración de Principios. Si algunas de las mayores disputas culturales del país giraron en ese período alrededor de tales asuntos, fue porque el derecho de cada uno a expresarse confluye en el del pueblo a ser informado, imprescindible para el autogobierno. Así lo establecen la jurisprudencia y la doctrina europea e interamericana<sup>15</sup>”.

La discusión sobre el derecho a la comunicación y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual ha sido centro de debate en América, destacándose la aprobación de leyes en Uruguay, Ecuador, México, Venezuela y con tratamiento actual en Brasil y Chile<sup>16</sup>.

Todos estos hechos, entre muchos otros, indican que el derecho a la libertad de expresión, ya no es un tema exclusivo de investigadores, del ámbito académico, del empresariado mediático ni de los periodistas, y que vamos caminando hacia la concreción de una concepción universalista del derecho a la comunicación, en la que tod@s se ven, se

---

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se pronunció, con fecha 6 de junio de 2013, a favor de la constitucionalidad de la ley y por ende la empresa Cablevisión reordenó su grilla de programación. El caso estuvo precedido de numerosas movilizaciones y reclamos de la ciudadanía a favor del pluralismo y la diversidad de señales. La condenada se resistió al cumplimiento del fallo y fue denunciada por desobediencia. Más información en:

<http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=121614&referente=docentes>

<sup>15</sup> Verbitsky, Horacio. “Los espejos y las ventanas de la comunicación”, prólogo al libro de Loreti, Damián y Lozano, Luis “El derecho a comunicar”. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2014, pág. 11.

<sup>16</sup> <http://portaldelsur.info/2013/05/leyes-en-sintonia/>

“Leyes en sintonía. Un breve repaso por las normas regionales de comunicación”; Luciano Beccaria, 12 de enero de 2015, Portal del Sur. Agencia Latinoamericana de Noticias.

sienten, se conciben y actúan como auténticos titulares del derecho a informar y a ser informado, ya no desde una actitud pasiva ni individual, sino activa y colectiva.

La democracia argentina es aún joven, y la discusión sobre la libertad de expresión y su alcance es parte esencial de su construcción y fortalecimiento en toda América. Así, vale recordar que en la visita que realizara a nuestro país, la Dra. Cecilia Medina Quiroga, en julio de 2008, por entonces Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una entrevista<sup>17</sup> declaró que las cuestiones atinentes a la libertad de expresión constituyen la problemática que mayor preponderancia tiene en el sistema regional interamericano protectorio de los derechos humanos y que incluso son los casos que más llegan y por los que más se pide.

Sin duda, ese dato, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también fundamentalmente desde el cualitativo, constituye un parámetro para analizar el carácter democrático de los Estados que integran el sistema.

También nos habla del recorrido hacia una madurez democrática, ya que desde el resurgimiento de los gobiernos democráticos durante los años 80, la Justicia debió ocuparse y dar prioridad a otros temas trascendentales de derechos humanos, tales como la desaparición forzada de personas, los genocidios de las dictaduras, los crímenes de lesa humanidad, las torturas, la búsqueda de identidad, la memoria, la verdad, el debido proceso, el derecho a la vida misma. Como los derechos humanos conforman un conjunto indivisible, el derecho a la información, la verdad y la justicia, constituyen un todo coherente<sup>18</sup> que también nos ha permitido en esta instancia llegar a preguntarnos sobre el sentido, el alcance y las dimensiones, del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación. El “derecho a saber” sobre nuestra historia, nos abrió la puerta al “derecho a

---

<sup>17</sup> Entrevista realizada por Diego Martínez a Cecilia Medina Quiroga, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada por el diario argentino *Página 12*, 1° de julio de 2008.

<sup>18</sup> *"La expresión, la información y la comunicación requieren una mirada integradora de los múltiples aspectos que conforman la vida (desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo jurídico, lo antropológico, lo psicológico, etc.), con una perspectiva que reconozca que los derechos humanos constituyen un conjunto coherente, cuyo carácter indivisible debe ser protegido".* Bernard, A. (1994). “Una barrera contra la barbarie”. *El Correo de la UNESCO. Derechos Humanos: Una larga marcha*, 15-17.

la información y a la comunicación” en nuestro quehacer cotidiano, e irrumpió positivamente en la participación social, ciudadana y en el fortalecimiento de la democracia.

Europa, con una larga tradición de normas, jurisprudencia, doctrina, legislación y políticas a favor del derecho a la comunicación, no está exenta de los ataques que este derecho humano tiene diariamente en el mundo. Pero también, la participación social y la protesta como forma concreta del derecho a la libertad de expresión, sale rápidamente al cruce de toda atrocidad. Así, llamó a la reflexión y al debate cómo el mundo se movilizó ante lo padecido por los trabajadores y editores de la revista “Charlie Hebdo” ante una masacre inexplicable ocurrida en París en enero de 2015<sup>19</sup>”. Cuando un pueblo sale a la calle para hacer oír su voz, la democracia se encuentra soberanamente resguardada. Esto no implica la impunidad de la palabra sino el pleno respeto de las diversas religiones y creencias, lo que de ningún modo puede sacrificar vidas humanas.

En España, fuente normativa y de jurisprudencia para América Latina y con particular énfasis en Argentina, tal como analizaremos a lo largo de este trabajo, ha dado su marca, en principio con los aportes y las instituciones del derecho indiano<sup>20</sup>, luego con el desarrollo del constitucionalismo en general<sup>21</sup> y también como modelo para la legislación argentina desde sus inicios<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> <http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad63aa22601d3c1e8b456b.html>

Diario “El Mundo”, España. “Más de cien mil personas se manifiestan en Francia por la libertad de expresión”. Consulta de página 12 de enero de 2015.

<sup>20</sup> Sobre las huellas hasta la actualidad del Derecho Indiano, ver: Alejandro Guzmán-Brito (Editor Académico), *El derecho de las Indias occidentales y su pervivencia en los derechos patrios de América*. Actas del Decimosexto Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile, desde el 29 de septiembre al 2 de octubre de 2008, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010, 1.031 págs., 2 tomos.

<sup>21</sup> Ziulu destaca el aporte del Derecho Español al constitucionalismo occidental.: “Durante los siglos XI, XII y XIII, cuando el pueblo español se debatía en una ardua lucha por recuperar su país luego de la dominación musulmana, comenzó una paulatina introducción del derecho romano en España. Ello, de todas maneras, no significó un desarraigo inmediato de las antiguas costumbres, sino que generó una lenta transformación. Lo característico de esta época fue el incipiente proceso de codificación, que cobró notable vigor durante el gobierno de Alfonso X el Sabio, por medio del Fuero Viejo de Castilla (1212), el Fuero Real (1254) y las Siete Partidas (1263).

En medio del proceso de atomización del poder que caracterizó a esta etapa histórica, los fueros constituían estatutos jurídicos privilegiados otorgados por el rey o algún importante señor feudal a cierto núcleo de vasallos. Algunos de ellos serían antecedentes relevantes del constitucionalismo al reconocérseles el valor de

## II. 2. - El devenir histórico: de la libertad de expresión al derecho a la comunicación.

En el ensayo “Más allá del capitalismo informativo”, el español Carlos Soria<sup>23</sup>, en base a los aportes del Profesor José María Desantes Guanter<sup>24</sup>, indaga sobre el devenir histórico de la libertad de expresión al derecho a la información en base al interrogante: ¿A quién pertenece la información?, planteando etapas por las que atraviesa el ser humano respecto de la libertad y la información, según quiénes tuvieran legítimo acceso al ejercicio de tal libertad. En la doctrina jusinformativa argentina, el Dr. Damián Loreti, ha tomado el estudio de esta perspectiva en su libro “El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas”<sup>25</sup>, que tanto ha nutrido a los estudiantes de las carreras de comunicación y periodismo en Argentina y que aún sigue siendo material de estudio y

---

verdadera ley suprema y estaban, en ciertos casos, por encima de la voluntad real. Representaron, tal vez, las primeras limitaciones concretas al poder real hasta entonces incontrolado y absoluto.

Algunos autores piensan que se debe reconocer la prioridad española en la formulación de los derechos constitucionales. Merecen ser citados los fueros de León (1020), Burgos (1073), Toledo (1085), Zaragoza (1115) y Aragón (1283). Este último estableció dos instrumentos que son considerados valiosos precedentes del constitucionalismo: *el Justicia de Aragón* y *el juicio de manifestación*.

El justicia de Aragón era un funcionario público que tenía la misión de asegurar el cumplimiento del fuero. Si bien su poder derivaba del monarca, en la práctica adquirió autonomía propia hasta constituirse en defensor de las leyes del reino, aun frente al propio monarca, evitando el abuso de poder. De allí que se lo considere un antecedente del principio de supremacía constitucional. En la Convención de Filadelfia de 1787, que redactó la Constitución de los Estados Unidos, se hizo referencia expresa a este antecedente.

El juicio de manifestación era un medio para asegurar la defensa de los derechos de la persona ante abusos de cualquier autoridad pública. Es considerado uno de los primeros antecedentes del hábeas corpus”. Ziulu, Adolfo Gabino. “Derecho Constitucional”, Abeledo Perrot Edic., Buenos Aires, 2014. Págs.. 48 y 49.

<sup>22</sup> Entre otros estudios al respecto se destaca el elaborado por Luis Moisset de Espanés en referencia al Derecho Civil. Moisset de Espanés, Luis. “La codificación española y su influencia en el Código Civil Argentino”. Investigación efectuada para presentarse en el Congreso Internacional de Lima en Homenaje al Centenario del Código civil español: 1889 - 1989, y publicada en A.D.C., 1990 - III, p. 713-735.

Sobre los aportes del derecho continental europeo y en especial del español sobre el Derecho Administrativo Argentino, se encuentra el trabajo realizado por Aberastury, Pedro: “La influencia del Derecho Continental en el Derecho Administrativo Argentino”. Conferência proferida no Seminário Internacional “A Tutela Judicial no Sistema Multinível”, realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do

Conselho da Justiça Federal, nos dias 20 e 21 de setembro de 2004, no auditório do Instituto Rio Branco, em Brasília-DF. R. CEJ, Brasília, n. 27, p. 38-46, out./dez. 2004.

<sup>23</sup> Soria, Carlos. Lección inaugural del Curso 1987-1988, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra.

<sup>24</sup> Desantes Guanter, José María. “La cláusula de conciencia”. Ed. Eunsá. Pamplona, España, 1978, Pág.118 y ss.

<sup>25</sup> Loreti Damián. Editorial Paidós, 1995.

obligada referencia bibliográfica en los programas de las asignaturas que conforman los planes de estudio de los referidos estudios universitarios<sup>26</sup>.

En este marco se presentan cuatro etapas: 1. La de la soberanía regia o la etapa monárquica o absolutista; 2. La del sujeto empresario o etapa empresarista de la información; 3. La del sujeto profesional o etapa profesionalista de la información y 4. La del sujeto universal o etapa universalista de la información.

Una de las aclaraciones previas que debe reconocerse al respecto, es que las etapas referidas y que profundizaremos a continuación, de ninguna manera implican un desarrollo lineal, sino que suelen resurgir, reaparecer e incluso convivir, según las características que las van definiendo y la conformación paulatina del alcance y el sentido del derecho a la libertad de expresión y la información en cada una de ellas. Además, el desarrollo teórico, conceptual y jurídico que las etapas han tenido, no implican necesariamente un correlato en los hechos, pudiéndose advertir en muchos casos, la brecha existente entre el “deber ser” normativo y el “ser” de la realidad, que tantos desvelos provoca aún en la filosofía jurídica<sup>27</sup>.

Tal como sostiene Manuel Sánchez de Diego: “Los derechos fundamentales también sufren el devenir histórico. Se transforman (derecho a una comunicación pública libre), surgen nuevos (derecho a la protección de datos personales) o, pierden su razón de ser (derecho de petición). Y esta evolución afecta al mismo concepto de Estado ya que “los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con que cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará

---

<sup>26</sup> “El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas” y su producción académica integra la bibliografía de las asignaturas sobre libertad de expresión en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras.

<sup>27</sup> La relación entre el “ser” y el “deber ser” fue tratada por Hans Kelsen en su “Teoría Pura del Derecho”. (...) Enseguida descubrimos que ese ideal, que esa ficción, que ese supuesto *deber ser*, no es en los hechos ni tan real, ni tan cierto, ni efectivo ni eficiente, ni eficaz como lo habíamos soñado. Que a ese Derecho adulón que nos prometía tanto, se le da por desoír y desobedecer sistemáticamente del primero al último de los mandatos normativos”. Bastons, Jorge L. “Las claves conceptuales del empleo público en Argentina”, en “Derecho Público para Administrativistas”, Bastons, Jorge L. Director. LEP, Librería Editora Platense. La Plata, 2008. Pág. 289/290.



hacia el respeto y la promoción de la persona humana en su estricta dimensión individual (Estado liberal de Derecho) o conjugando ésta con la exigencia de solidaridad corolario de la componente social y colectiva de la vida humana (Estado social de Derecho)” (Pérez Luño, 1995: 20). Hay otra consideración al respecto y es que “la constitución del Estado democrático de derecho es una norma entre cuyas funciones está la de crear espacios públicos de confrontación. Y lo hace a través, especialmente, de los derechos fundamentales, el sistema de partidos y la institución parlamentaria” (Villaverde, 2007: 21). Esto es, los derechos constitucionales son uno de los factores que vienen a delimitar el campo de juego político y social, lugar de confrontación pero, nos atrevemos a apuntar que ese espacio también lo es de encuentro<sup>28</sup>”.

Ahora bien, tomando como punto de partida el planteo de las etapas históricas mencionadas, proponemos a continuación una mirada panorámica y actualizada de las mismas, adaptándolas también al contexto normativo de Argentina, preguntándonos a su vez sobre los alcances, implicancias y concepciones en torno a la libertad de expresión hasta llegar a la formulación actual del derecho a la comunicación.

### **II.2.1. El absolutismo monárquico: la información en poder del rey, la censura y su concepción actual. Viejas y nuevas máscaras de la censura.**

Según las crónicas históricas, en 1631 apareció el primer periódico francés, “La Gazette”, fundado por Renaudot. La imprenta era el único medio existente por entonces y constituirá por siglos el medio por excelencia para la difusión de las ideas. Claro está que muy pocos podían acceder a tales conocimientos. El nacimiento de la prensa periódica se produjo en el tiempo histórico del desarrollo y apogeo de la doctrina monárquica absolutista. En la persona del Rey estaba residenciada la soberanía de forma máxima, única y exclusiva. La lógica social y política de aquellos momentos generó la integración de los

---

<sup>28</sup> Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”. Revista Diálogos de la Comunicación. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. N° 82. Septiembre- Diciembre 2010. Pág. 3. Disponible en: <http://dialogosfelafacs.net/una-nueva-libertad-de-expresion-para-una-nueva-sociedad-2/>  
Última Fecha de consulta: 2 de mayo de 2015.

nacientes medios informativos en el Poder Real, algo así como una marca más de su soberanía regia, señala Carlos Soria.

Durante esta etapa, en la que la libertad de expresión no existía, ya que el único que tenía el derecho a la palabra era el rey, nacen o más bien se consolidan, tres institutos jurídicos que permitirían el control absoluto de la información: la censura previa, conocida desde la época de la Grecia Antigua, la licencia real, que posibilitaba explotar una imprenta y el privilegio real<sup>29</sup>, puesto que no se reconocían los derechos de autor.

Cabe aquí tener en presente qué era para los griegos la libertad de expresión, que, como nos recuerda el Prof. González Ballesteros se la designaba con el término “*parresia*”, que aludía a la posibilidad de ejercitar el natural impulso de expresar con sinceridad absoluta y sin inhibición alguna los juicios personales. Isócrates (436-338 a. C.) en “*La Areopagítica*”, que inspiró la obra del mismo título del inglés John Milton, consideraba que Grecia era el lugar del mundo donde más libertad de palabra existía, aunque monopolizada por los tribunos, los autores teatrales y los filósofos. No obstante, pronto se advierte, o interpreta, que la *parrhesia* sin trabas degenera en las asambleas públicas en simple demagogia; en la vida privada o en el teatro, en difamación; y en las escuelas en la posibilidad de inculcar doctrinas corruptas para la juventud. Y comienzan a hacerse ensayos de cortapisas a su desarrollo, por sus teóricos excesos, en las asambleas, la Academia y las artes. Legalmente, la limitación a esta libertad de expresión se justifica con la traslación del término religioso *asebeia* (cosa sagrada) que se traduce por impiedad, según la definición del historiador Polibio (203-120 a. C.). Por este delito, castigado con el destierro o la muerte, fue acusado Pericles y sus colaboradores; hubo de huir de Atenas el filósofo Anaxágoras (500-428 a. C.) y se denunció al mismo Fidias (490-430 a. C.), el más

---

<sup>29</sup> “En España, desde comienzos del siglo XVI, para realizar cualquier publicación se requería de un privilegio, cuya obtención demandaba largas tramitaciones; recién después de haberse hecho la censura y enmendado el manuscrito se enviaba a la imprenta; una vez impreso, el libro se remitía al Tribunal correspondiente para que se hiciera la comprobación con el manuscrito original, el cual se destinaba al archivo. (...) Los privilegios eran concedidos por el poder gubernativo y consistían en monopolios de explotación otorgados por un tiempo limitado; su obtención estaba condicionada a la aprobación de la censura-de modo que permitían el control de las doctrinas que se difundían- y al registro de la obra publicada”. Villalba, Carlos – Lipszyc, Delia. “El Derecho de Autor en la Argentina”, La Ley, Buenos Aires, 2005. Pág. 1.

grande escultor de la antigua Grecia. El comienzo del proceso a Sócrates (469-399 a. C.) se debe a la gravedad de los ataques que le dirige el comediógrafo Aristófanes (446-386 a. C.) en “*Las nubes*”. Al tiempo comienzan a promulgarse normas coercitivas, así el Decreto de Siracosiso (414 a. C.) que prohibía a poetas y comediantes ridiculizar a los miembros del gobierno y a cualquier persona citándola por su nombre, o el Decreto de Eucrátēs (337 a. C.) que extiende la *asebeia* a las expresiones contra la seguridad del Estado, en términos actuales”. (...) “Tras el hundimiento de la *polis* clásica se vuelven a ensayar métodos de gobierno semejantes a los primitivos griegos: las tiranías. Es el fin de la *parrhesia*. El que critique o ataque al rey incurre en *asebeia*. Después del apogeo de la democracia en la Grecia antigua con la guerra viene su decadencia. Hasta la Edad Moderna no habría regímenes similares al de Atenas”<sup>30</sup>.

El ejercicio de la censura, se caracterizaba por la existencia de un censor, o censores, funcionarios en el ámbito del régimen, que realizaban el control previo de las publicaciones.

Desde la expresión literaria, quien mejor ha retratado la valentía de la palabra ante el censor, ha sido Francisco de Quevedo, el gran poeta del Siglo de Oro español. Perseguido y luego encarcelado, Quevedo le dedica a su censor, el Conde Duque de Olivares la famosa letrilla satírica “No he de callar...”<sup>31</sup> que data de 1630:

*No he de callar, por más que con el dedo,  
ya tocando la boca o ya la frente,  
silencio avises o amenazas miedo.*

*¿No ha de haber un espíritu valiente?  
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?  
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?*

---

<sup>30</sup> González Ballesteros, Teodoro. Catedrático del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Democracia y comunicación (reflexiones)”, Madrid, 2013. Pág. 9 y 10. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-10-09-Lecci%C3%B3n%20Inaugural%202013-2014%20%28Gonz%C3%A1les%20Ballesteros%2933.pdf>

<sup>31</sup> Poema completo disponible en: <http://www.poesi.as/indx1001.htm>

*Hoy sin miedo que libre escandalice,  
puede hablar el ingenio, asegurado  
de que mayor poder le atemorice.*

*En otros siglos pudo ser pecado  
severo estudio, y la verdad desnuda,  
y romper el silencio el bien hablado.*

*Pues sepa, quien lo niega y quien lo duda,  
que es lengua, la verdad, de Dios severo,  
y la lengua de Dios nunca fue muda.*

### **II.2.1. 1. La censura en la dictadura militar argentina**

Lamentablemente, Argentina sabe de dictaduras y censuras en demasía. Si nos concentramos en la última dictadura cívico militar de 1976-1983, al cumplirse más de 30 años de democracia, la memoria colectiva viva nos conmina a revisar y a tener presente el papel de los medios de comunicación social en el contexto de la dictadura cívico militar que contara con la puesta en marcha de estrategias informativas distorsionadoras, ocultadoras de la realidad y moldeadoras de una opinión pública acorde a sus nefastos fines.

Periodistas y medios sufrieron censura, clausuras, persecución y desaparición forzada. Paco Urondo, Haroldo Conti, Raymundo Gleyzer, Leonardo Bettanin, Rodolfo Walsh, son parte del largo listado de 130 periodistas cuyas vidas fueron arrebatadas y sus letras y expresiones mutiladas.

Pero también hubo medios y periodistas afines y cómplices de los crímenes perpetuados por la dictadura cívico militar.

Recién en el año 2012, en el marco de la causa “Bayón” y en la sentencia pronunciada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, ciudad situada al

sur de la Provincia de Buenos Aires, se reconoce en el ámbito judicial y expresamente la responsabilidad en los delitos de lesa humanidad de un medio de comunicación social y sus directivos. Luego de analizar minuciosamente las pruebas del caso y la información suministrada por el diario “La Nueva Provincia” en torno a la causa, el Tribunal concluyó en la “evidente conexión entre los directivos de “La Nueva Provincia” y el 5° Cuerpo de Ejército afinidad en la obtención y proporción de datos obtenidos por la prensa, sobre los casos en examen; su apoyo psicológico conforme lo expresara el General Vilas, como difundir comunicados en parte falsos” y entendió que correspondía por aplicación del Art. 177, inc. 1° del CPP, remitir fotocopia de la documentación respectiva al Sr. Juez Federal en turno, respecto de la posible comisión de delitos de acción pública de directa relación con este juicio”. A partir de allí se produjo un hecho inédito en los juicios por la Verdad y la Justicia en Argentina. Por primera vez se inició una causa judicial para investigar la participación del propietario de un medio de comunicación, Vicente Massot en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar<sup>32</sup>.

Alejandrina Barry, tenía tan solo tres años cuando sus padres Juan Alejandro Barry y Susana Matta fueron asesinados por un grupo de tareas de la armada en el Uruguay en el marco del Plan Cóndor. La Editorial Atlántida, a través de sus publicaciones Gente, Somos y Para Ti, publicó la fotos de la pequeña asegurando que la habían dejado sola en el mundo, que sus padres fueron asesinos y fabricantes de huérfanos en claro apoyo a la dictadura militar y encubriendo la realidad del crimen perpetrado. Apropiada, su tierna imagen de niña fue utilizada acompañada con títulos como “Los hijos del terror” y sosteniendo falsamente: “Su madre, dirigente montonera en el Uruguay, se suicidó frente a ella cuando iba a ser detenida. Su padre murió en un enfrentamiento. La niña espera que alguien la reclame”. En la actualidad Alejandrina lleva adelante un juicio contra Editorial Atlántida, sus directivos y responsables periodísticos por la utilización de su imagen como parte de la propaganda y la “acción psicológica” de la dictadura en connivencia con los medios y por encubrimiento del crimen de lesa humanidad del que fueron víctimas sus padres<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Para más información: <http://www.telam.com.ar/tags/7779-vicente-massot/noticias>  
Consulta de información de 15 de enero de 2015.

<sup>33</sup> Página 12, diario argentino, “Las acciones de propaganda”, 11 de noviembre de 2014,

“La alianza entre la dictadura y los dueños de la verdad publicada, con eje comercial en Papel Prensa, quedó asentada en diferentes documentos secretos y en 18 declaraciones tomadas por la justicia de la democracia. (...) Estos documentos comprueban, por ejemplo, que mientras la familia Graiver sufría la tortura, la desaparición y el asesinato de sus miembros, la Junta Militar accedió a todas las peticiones de *Clarín*, *La Nación* y *La Razón* en aras de crear un monopolio, aun cuando estas perjudicaran al propio Estado Nacional y al resto de los diarios del país (...). Los tres diarios querían Papel Prensa y las tres armas hicieron lo imposible para satisfacerlos. Y aún más. Conviene prestar atención a los nombres y apellidos, los movimientos accionarios y la simultaneidad de operaciones militares y campañas psicológicas que, finalmente, concretaron la utopía militar empresaria: generar una prensa adicta a un modelo de país que tenía como principal víctima a la democracia y a sus ciudadanos. Eran oficialistas del terror”, nos revelaron en una profunda y extensa investigación Cynthia Ottaviano y Juan Alonso desde las páginas de *Tiempo Argentino* a partir de sus publicaciones del 6 de junio de 2010. La justicia tendrá la última palabra en la investigación que en la actualidad se está desarrollando sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la transferencia accionaria de la empresa Papel Prensa del Grupo Graiver al conglomerado empresario Clarín, La Nación y la Razón.

El diario “El Día” de La Plata, histórico periódico de la capital de la Provincia de Buenos Aires, en su edición del 24 de marzo de 1976, hace suyas en las crónicas periodísticas y en su supuesta información palabras propias de la Junta Militar tales como “subversivos” y “extremistas” o “caos institucional que vivía la República”, en clara referencia al gobierno democrático o “presunta quiebra constitucional”, y por ende justifica el Golpe cívico militar de 1976. Titula “El gobierno fue derrocado” y no admite la existencia de un golpe de Estado y el ataque letal a la democracia. Informa que “un senador de Estados Unidos elogia a las Fuerzas Armadas Argentinas y en la bajada dice: “Las

---

<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259571-2014-11-11.html>

Disponible en formato digital. Consulta de información de 15 de enero de 2015.

calificó como único elemento constitucional que todavía puede garantizar las libertades y derechos<sup>34</sup>”.

En su editorial, titulada “Acción depredadora de la maleza”, habla de los perjuicios de la maleza en el “productor campesino” y las fórmulas para combatirla y la necesidad de optimizar el rendimiento de los suelos, al día siguiente su editorial trata el tema de los accidentes que se pueden evitar en el hogar. La pregunta surge inevitable: ¿Acaso no hubo un golpe de Estado? ¿Por qué el silencio negador?

19 de septiembre de 1980. Se publica en el Boletín Oficial el Decreto Ley 22.285. La llamada “Ley de Radiodifusión” que recién se derogara en democracia el 10 de octubre de 2009 por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, N° 26.522 que pudiera entrar en plena vigencia el 29 octubre de 2013 y reconocida su completa constitucionalidad.

Es necesario tener presente que la ley de radiodifusión de la dictadura, centralista; discriminatoria pues no permitía la prestación del servicio a los sin fines de lucro; autoritaria por su apego a la doctrina de la seguridad nacional, y obsoleta en los aspectos técnicos sólo concebía al servicio como una actividad comercial y excluía al sector público y al comunitario. Las reformas noventistas propiciaron la existencia de monopolios y fomentaron la censura por medios indirectos al estar el derecho a la palabra concentrada en pocas manos.

Un nuevo paradigma comunicacional propio de la democracia inauguró la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual recién reconocida con su constitucionalidad plena el 29 de octubre de 2013, al concebir a la actividad que prestan los mismos como parte integrante del derecho a la comunicación por ser los vehículos a través de los cuales se concreta el derecho a dar y recibir información conforme los estándares que en la materia establece el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Los exclusivismos empresaristas ya no son admisibles en la concepción indivisible del derecho

---

<sup>34</sup> Diario El Día, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Edición de 24 de marzo de 1976. Pág. 2.

humano a comunicar del sujeto universal, que somos todos y todas, cada uno y cada una por nuestra condición de seres humanos.

Tal como veremos a continuación, la consagración de la libertad de expresión, implicó además, sostener o consagrar la prohibición de la censura previa, tal como lo establece la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14, prohijado en el marco de la matriz de pensamiento liberal.

#### **II.2.1.2. Vías o medios indirectos de censura en el sistema interamericano de derechos humanos.**

El instituto jurídico de la censura previa es propio de esta concepción absolutista y autocrática de la información. La censura es incompatible con la libertad de expresión y la democracia. Sin embargo, aún con la consagración del derecho humano a la información, y la prohibición absoluta de la censura, la misma puede adquirir vigencia incluso en la democracia (aunque esto desde el punto de vista lógico no sería posible). Tan es así, que la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica – que en Argentina tiene jerarquía constitucional, conforme el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- advierte su posibilidad de existencia en el artículo 13.3 en estos términos: “3. *No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones*”.

Este mandato normativo es propio del sistema interamericano de derechos humanos y no se encuentra presente en el sistema europeo, es decir, en el Convenio de Roma de 1950.

De esta forma, la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce que la “vieja” censura directa, se traviste de nuevas formas, queriendo ocultarse bajo otros



ropajes, pero con la marca indeleble que la instituyó el pasado mismo o caracterizó a la historia de la humanidad<sup>35</sup>.

#### **II.2.1.2. a) La discriminación en la distribución de la publicidad oficial**

Las formas de censura indirecta pueden ser diversas, incluso porque las modalidades establecidas en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son enunciativas y no taxativas. Así, entre otras de las formas que adoptan las vías o medios indirectos de censura, se destaca la discriminación en la distribución de la publicidad o pauta oficial. Esta modalidad ya ha sido reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión como Principio 13, el cual establece:

*“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad*

---

<sup>35</sup> “El poeta no debe componer nada contrario a las ideas de lo legal, lo justo, lo bello o lo bueno admitidas en el Estado. Ni se ha de permitir que muestre sus composiciones a ningún particular antes que las haya presentado al censor y a los guardianes de la ley y de que éstos se muestren satisfechos”. El mismo Platón que nos contó cómo los atenienses amantes de la libertad castigaron a Sócrates por el crimen de hacer declaraciones subversivas, es el mismo Platón defensor de la censura. Pero no fue el único en caer en esta contradicción.

Durante siglos, se pensó que la censura, lejos de oponerse a la libertad de expresión, constituía un aspecto inseparable de ella. Maquiavelo, en pleno Renacimiento, al mismo tiempo que defendía el derecho de todo hombre a “*pensar todas las cosas, decir todas las cosas, escribir todas las cosas*”, añadía que de ellas se debía hablar a los Príncipes con “*reserva y respeto*”. Y hasta Milton, que en 1644 pedía solemnemente en su *Areopagitica* “*dadme la libertad de conocer, de expresarme y de razonar libremente según mi conciencia, por encima de todas las libertades*”, llegó a ser censor oficial bajo Cromwell.

Chrétien Guillaume de Malesherbes, en su libro *La Liberté de la Presse* sostenía que “*un hombre que hubiera leído únicamente los libros publicados con expreso consentimiento del gobierno estaría casi un siglo detrás de sus contemporáneos*”. A pesar de ello, hasta los volúmenes de la célebre *Enciclopedia* fueron sometidos a una rigurosa censura entre 1750 y 1763 cuando fue el encargado del Departamento de censura en Francia.

La censura es tan antigua como el pensamiento y la expresión. La lucha por la libertad de la palabra siempre fue acompañada de la lucha por acallarla.

La historia de la humanidad y aún la actualidad, presentan incontables muertes, asesinatos, persecuciones, destierros, desapariciones, torturas, encarcelamientos, utilizados como instrumentos para silenciar voces, cercenar la creatividad, arremeter contra las ideas disidentes, borrar la memoria y arrebatar el pensamiento y la palabra.

*de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.*

El Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en el año 2003 tuvo, por primera vez, una dedicación de estudio e investigación especial sobre el tema. ¿Por qué la distribución oficial despertó especial interés para el sistema interamericano? Precisamente porque se comenzó a considerar que la concentración de los medios de comunicación en las Américas fomentó históricamente el abuso de poder por parte de los gobernantes en la canalización del dinero destinado a la publicidad. A partir de ese año, todos los informes anuales de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA dedican un capítulo específico, país por país a este tema<sup>36</sup>.

En este sentido, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Open Society Justice Initiative, ha relevado los siguientes abusos relacionados con la publicidad oficial en América Latina<sup>37</sup>:

- Uso indebido de la publicidad oficial para condicionar contenidos: son aquellos casos en los que los gobiernos a nivel local y nacional utilizan la publicidad oficial para influir sobre aquello que se difunde en los medios.
- Pagos por publicidad efectuados directamente a periodistas: son aquellos pagos publicitarios hechos directamente a periodistas individuales –en concepto de servicios publicitarios reales o ficticios- que se utilizan de modo abusivo para adquirir coberturas periodísticas favorables o silencio frente a temas conflictivos.
- Utilización de la publicidad oficial con fines propagandísticos: consiste en usar la publicidad del sector público para promocionar la imagen de funcionarios o candidatos oficiales. Además de constituir una malversación de los recursos

---

<sup>36</sup> Para más información y consulta de los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: [www.oas.org/es/cidh/expresion/](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/)

<sup>37</sup> Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Open Society Justice Initiative; “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina”, Colección Reformas Legales, Buenos Aires, 2008.

públicos, los pagos publicitarios hecho con tales fines se prestan para la asignación abusiva y, en última instancia, afectan la libertad de expresión.

- Otras formas de censura indirecta: presiones a periodistas y dueños de medios para modificar los contenidos; negativa de acceso a las instituciones y a la información pública como represalia; asignación inequitativa de licencias de radio y TV.

En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas causas sobre la distribución de la publicidad oficial. “La función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas<sup>38</sup>”.

También hay una serie de fallos emblemáticos en materia de distribución de la publicidad oficial sobre los que se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, así en los siguientes:

- Caso “Emisiones Platenses S.A. c. Municipalidad de La Plata”, CSJN 12/06/1997.
- Caso “Diario Río Negro c. Provincia del Neuquén” – CSJN 5/09/07.
- Caso “Editorial Perfil S.A. y otro c. Estado Nacional JGM amparo”, CSJN 2/03/2011.
- Caso “ARTEAR S.A. c. Estado Nacional, JGM y SMC s/ amparo”, CSJN 11/02/2014<sup>39</sup>.

Aún hoy en Argentina, al igual que ocurre con el derecho de rectificación o respuesta y el derecho de acceso a la información pública, no se cuenta con una ley nacional y leyes provinciales que establezcan pautas o criterios objetivos para la regulación de la distribución de publicidad oficial a fin de evitar “premios” y “castigos”. Este es un

---

<sup>38</sup> Acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín SA, Arte Radiotelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital SA contra los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sentencia pronunciada el 29 de octubre de 2013.

<sup>39</sup> La totalidad de los fallos señalados se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: <http://www.csjn.gov.ar/>

déficit normativo que incide negativamente en la plena aplicación del derecho a la comunicación democrática.

#### **II.2.1.2.b) Los monopolios y oligopolios como forma de censura**

Tal como hemos señalado, la Convención Americana de Derechos Humanos es el único instrumento jurídico internacional que reconoce la posibilidad de existencia de vías o medios indirectos de censura, los cuales se encuentran prohibidos. Pero nótese que la Convención no refiere solamente a la posibilidad de censura que pueden ejercer los Estados, sino también “los particulares”.

En esta línea, la ya citada Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000, establece en el Principio 5:

*“La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.*

Asimismo, el Punto 12 de la mencionada Declaración sostiene que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

De esta manera se introduce un concepto de “censura” que atañe no solamente al Estado, sino también a los particulares, al sector empresario.

Al respecto, cabe tener en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la existencia de la censura por parte de los particulares,

en el Caso “Ríos y otros vs. Venezuela”, en sentencia pronunciada el 28 de enero de 2009. En este sentido, el máximo tribunal regional de derechos humanos, ha dicho:

*“El artículo 13.3 de la Convención Americana dispone que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Una interpretación literal de esta norma permite considerar que protege en forma específica la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones, de modo que queda prohibido el empleo de “vías o medios indirectos” para restringirlas. La enunciación de medios restrictivos que hace el artículo 13.3 no es taxativa ni impide considerar “cualesquiera otros medios” o vías indirectas derivados de nuevas tecnologías. **Además, el artículo 13.3 de la Convención impone al Estado obligaciones de garantía, aún en el ámbito de las relaciones entre particulares, pues no sólo abarca restricciones gubernamentales indirectas, sino también “controles... particulares” que produzcan el mismo resultado. Para que se configure una violación al artículo 13.3 de la Convención es necesario que la vía o el medio restrinjan efectivamente, aunque sea en forma indirecta, la comunicación y la circulación de ideas y opiniones**”<sup>40</sup>.*

De la lectura y análisis de la interpretación de la Corte Interamericana sobre el alcance y contenido del artículo 13.3 del Pacto de San José de Costa Rica, queda claro entonces que el bien a proteger es la comunicación, la difusión y circulación de ideas y opiniones, y que la misma no puede ser restringida obviamente por los Estados parte, que a su vez tiene el deber de garantizarla sino también no puede ser violada por particulares, por las empresas, porque también las mismas pueden ser “censores” en la medida que obstaculicen el derecho a dar y recibir información.

Esto implica una mirada renovada sobre la clásica concepción de la prohibición de la censura, que históricamente se ha puesto sobre los Estados.

---

<sup>40</sup> Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Sentencia 28 de enero 2009. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Considerando 340.. El resaltado en negrita nos pertenece.

En esta línea de análisis, Owen Fiss, en su trabajo “The Censorship of Television”<sup>41</sup>, advierte y analiza la cuestión de lo que da en llamar, la censura “empresaria” o, según sus términos en inglés “*managerial censorship*”. En el mismo, sostiene que las decisiones de la Corte estadounidense tienen una extensa y bien establecida tradición en el entendimiento de la Primera Enmienda relacionada con la censura ejercida por el Estado, pero sostiene que el desarrollo de la censura ejercida por las empresas resulta llamativa y llama a la Corte norteamericana a desafíos de un orden totalmente diferente.

Bajo el modelo de la censura estatal, la acción de las autoridades y de los funcionarios públicos limita la libertad de una estación de televisión en una forma que también limita la información disponible para el público. En este caso la “amenaza” de esa censura es externa. Pero en el caso de la censura “empresaria” la amenaza es interna: surge de la toma de decisiones de la propia empresa que interfiere o evita, impide y excluye el acceso público a determinada información.

Tomando en cuenta los parámetros reseñados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se pronunció en la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín SA, Arte Radiotelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital SA contra los artículos 41; 45; 48, segundo párrafo; 161 y concordantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pronunciada el 29 de octubre de 2013<sup>42</sup>, en la que básicamente la actora cuestionaba los límites a la multiplicidad de licencias impuesto por la norma.

Por mayoría, el máximo tribunal constitucional argentino, destacó la dimensión individual y social o colectiva simultáneas del derecho a la libertad de expresión y sostiene la necesidad de la intervención del Estado en la dimensión social. Así, en el considerando

---

<sup>41</sup> Fiss, Owen M. Yale Law School. “The Censorship of Television” (1999). Faculty Scholarship Series, Paper 1318. [http://digitalcommons.law.yale.edu/fiss\\_papers/1318](http://digitalcommons.law.yale.edu/fiss_papers/1318)

<sup>42</sup> Para acceder a la lectura completa de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ver: <http://www.cij.gov.ar/nota-12394-La-Corte-Suprema-declar--la-constitucionalidad-de-la-Ley-de-Medios.html>  
Página web del Centro de Información Judicial – Agencia de Noticias del Poder Judicial. Argentina.

24 la Corte sostiene “que a diferencia de lo que sucede con la libertad de expresión en su dimensión individual donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, **la faz colectiva exige una participación activa por parte del Estado**, por lo que su intervención aquí se intensifica. (El resaltado pertenece a la sentencia).

En el punto que estamos analizando, sobre los monopolios como vía indirecta de censura, la Corte expresó: “La ley, al limitar la cantidad de licencias y registros persigue el enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los individuos. En otras palabras, la regulación en examen apunta a favorecer políticas competitivas y antimonopólicas para preservar un derecho fundamental para la vida de una democracia como lo es la libertad de expresión y de información” (del Considerando 44).

Asimismo, añadió: “En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”.

Del voto del Dr. Enrique S. Petracchi, destacamos sus fundamentos basados en la jurisprudencia y directivas europeas en cuanto a evitar la concentración mediática. De este modo, en el Considerando 14, última parte, tiene en cuenta: “Así el Parlamento Europeo<sup>43</sup> ha instado a la Comisión Europea y a los Estados a tratar de evitar la concentración considerando el compromiso de la Unión Europea con la defensa y la promoción del pluralismo de los medios de comunicación como un pilar fundamental del derecho a la información y la libertad de expresión. Señaló además, “que la experiencia demuestra que una concentración ilimitada de la propiedad pone en peligro el pluralismo y la diversidad cultural”, y que un sistema basado exclusivamente en la libre competencia del mercado no puede garantizar tales valores”.

---

<sup>43</sup> El Dr. Petracchi citó la siguiente fuente; Resolución Parlamento Europeo 25 de septiembre de 2008 sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea (2007/2253. INI. Diario Oficial de la Unión Europea 8 E/85, 14/01/2010. También apoyó su voto en el caso Informationsverein Lentia vs. Austria. Sentencia TEDH del 24 de noviembre de 1993.

Desde esta perspectiva, Owen Fiss, Profesor de la Yale Law School, sostiene que los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era el enemigo natural de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era al Estado a quien había que poner límites. Sin embargo, en la actualidad, explica, hay una serie de temas en los cuales el Estado es necesario para ser un amigo o más aún, garantizar las libertades. Una de ellas se refieren al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre la libertad de expresión y la necesidad del Estado para contrarrestar esas fuerzas. Así, el estado está obligado a actuar para promover el debate público cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones, y de este modo: “Habrá que asignar recursos públicos –repartir megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública”.

Este es el marco, la esencia y el punto de partida de la norma democrática con la que ahora contamos para una verdadera democratización de los medios y para que todos y todas, cada uno y cada una podamos expresarnos: la información como derecho humano con universalidad de sujetos, mensajes y medios. Y la necesidad de un Estado activo que con políticas públicas garantice el efectivo ejercicio del derecho a la información.

### **II.3. La concepción empresarista de la información**

Los cambios constitucionales que introducen en la sociedad nuevas ideas de libertad personal son a menudo secuelas de rupturas históricas, como guerras civiles o revoluciones. En 1688, el año de la llamada “Revolución gloriosa”, el Parlamento británico promulgaba una “Ley de Derechos”, iniciándose así un proceso que iba a culminar a fines del siglo XVIII con la rebelión de las colonias inglesas de América y con la Revolución Francesa. En ambos casos los revolucionarios consideraron necesario y digno exaltar los valores que les habían inspirado en su lucha contra su respectivo antiguo régimen, incorporándolos en uno o más textos fundamentales: la Declaración de Independencia y la Ley de Derechos en América del Norte y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en



Francia<sup>44</sup>. En estos instrumentos jurídicos, se consagra la libertad de expresión en estos términos: “*X. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.*”

*XI. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.*

Por supuesto que esa “libertad de expresión”, así reconocida era solamente para los “hombres” y los “ciudadanos”, excluyéndose a las mujeres, a los niños, cuya histórica lucha para el reconocimiento de sus derechos se realizó en el plano jurídico recién en el siglo XX.

A partir de la Revolución Francesa, y su Declaración, se reconoce a la expresión como una libertad, y acuñada en esa matriz liberal, se centrará esencialmente en el individuo. A su vez, proclamaba un abstencionismo total del Estado en materia de libertad de prensa. Si en el plano económico se propugnaba el “laissez-faire, laissez-passer”, en materia informativa el lema será “laissez-faire, laissez-dire<sup>45</sup>”.

También es necesario destacar los aportes que la Constitución de Cádiz de 1812 hizo en el marco del desarrollo constitucional en general, los cimientos sobre la libertad de expresión que sentó en España y su influencia en nuestro derecho de neto corte liberal. Así, el artículo 371 establecía: “Todos los españoles tienen **libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas** sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Darbshire, Helen. “Libertad de expresión, libertad primordial”. Artículo publicado en “El Correo de la UNESCO”. Marzo 1994. Año XLVII. Pág. 18 a 22.

<sup>45</sup>P. Albert, “1881-1981, Le passé et le présent de la liberté de la Presse”, en “Presse Actualité”, 154,1981, pág. 23, citado por Soria, Carlos, op.cit.

<sup>46</sup> Constitución Política de la Monarquía Española. Manuscrito original con todas las firmas suscrito en Cádiz, el 18 de marzo de 1812. Constituciones Españolas 1812-1978. Congreso de los Diputados.

En nuestro país, desde la Gazeta de Buenos Ayres, Mariano Moreno dirá: “Los pueblos yacerán en el embrutecimiento más vergonzoso, si no se da absoluta franquicia y libertad en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto. Los pueblos correrán de error en error, y de preocupación en preocupación, y harán la desdicha de su existencia presente y sucesiva. No se adelantarán las artes, ni los conocimientos útiles, porque no teniendo libertad el pensamiento, se seguirán respetando los absurdos que han consagrado nuestros padres, y ha autorizado el tiempo y la costumbre”<sup>47</sup>.

Ese ideario libertario, fue tomado primeramente en nuestra historia, por el Reglamento sobre la Libertad de Imprenta de 1811, que si bien propiciaba la libertad de las expresiones políticas, cercenaba tal potestad en materia religiosa<sup>48</sup>.

La Constitución de 1853-1860, tal como veremos seguidamente, siguió ese pensamiento consagrando la “libertad de prensa o imprenta”, y conteniendo en el artículo 14 la prohibición expresa de la censura previa.

Retomando el análisis de la consagración de la libertad de expresión, como apuntáramos, su carácter era esencialmente individual, tal como caracteriza a los llamados derechos humanos de primera generación, centrados esencialmente en el individuo, pero además en lo que hoy llamaríamos términos comunicacionales, la libertad de expresión estaba centrada en el emisor de la información y en la facultad de difundir o dar información, así se hablaba de “publicar las ideas por la prensa”, “expresarse”, y fue necesario una larga lucha en el campo de los derechos humanos hasta reconocer que el derecho a la libertad de expresión, es simultáneamente un derecho humano individual y social o colectivo, y que a su vez, tiene un carácter bifronte: dar y recibir información, y por supuesto, todas las implicancias presentes en ellas: acceder a la misma, investigar, difundir, por cualquier tipo de medios, y de soportes. En fin, universalidad de mensajes.

---

<sup>47</sup> Moreno, Mariano. Gazeta de Buenos Ayres, N° 3, jueves 21 de junio de 1810.

<sup>48</sup> Badeni, Gregorio. “Libertad de Prensa”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997. Págs. 85/85.

El desarrollo y consolidación del capitalismo, en el ámbito de la información, implicó a su vez, la concepción de la libertad de prensa trastocada en libertad de empresa, en el que el único propietario, amo y señor de la información es la empresa informativa, desdeñando no solamente del público sino también de la labor de los propios trabajadores de prensa.

“La libertad de prensa será insensiblemente libertad para la prensa; a su vez, esta libertad para la prensa se entenderá reductivamente como libertad de constitución de empresas de prensa; y finalmente la libertad para la empresa únicamente querrá decir libertad para el empresario, es decir, para la persona que rige y controla la organización informativa”, nos explica Carlos Soria.

Esa concepción “empresarista” de la información, concebida como “mercancía”, se mantiene hasta nuestros días, y entre los múltiples ejemplos que ilustran esta postura, se encuentra la reticencia de los grandes grupos mediáticos, en reconocer al derecho humano de rectificación o respuesta, consagrado por el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, porque consideran que afecta su “derecho a la propiedad”; o también en la concepción empresarista de la actividad radiodifusora como una actividad meramente comercial, tal como lo reconocía la hoy derogada Ley de Radiodifusión de la dictadura, Ley N° 22.285, y no como parte integrante del derecho a dar y recibir información. En este sentido, el pilar fundamental de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual<sup>49</sup>, se encuentra en el artículo 2° en cuanto determina que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual “se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles”.

---

<sup>49</sup> Ley N° 26.522. B.O.10-10-2009.

En este marco libertario, también se inscribe el artículo 20 de la Constitución Española<sup>50</sup> el que consagra el derecho a la libertad de expresión y será motivo de pormenorizado análisis en su apartado específico.

#### **II.4.- La concepción profesionalista de la información**

Soria, nos enseña que “en medio de los síntomas de agotamiento del planteamiento liberal de la Información —del que había vivido en buena parte la etapa empresarista- hará acto de presencia la etapa profesionalista de la Información. Con ella, en síntesis, se pondrá de manifiesto todo el valor que hay que conceder a los que no son titulares del capital económico, pero sí lo son del capital intelectual y humano que existe y se condensa en las redacciones de los medios informativos”, es decir, los trabajadores de prensa, el sujeto profesional de la información.

El constitucionalismo social y el reconocimiento de los derechos sociales, trajo consigo también la lucha de los trabajadores de prensa, quienes no sólo van a reivindicar sus derechos laborales y sociales, sino también, que aportarán un concepto fundamental: la información no es una mercancía, sino un bien social, en el que los trabajadores del sector tienen una responsabilidad social que cumplir. También nacerán los códigos de ética periodística, los Consejos de Prensa, y la organización gremial de los trabajadores del sector.

“Con la etapa profesionalista de la Información comienza a cobrar fuerza, por el contrario, que la jerarquización de los bienes informativos es, sobre todo, una cuestión jurídica. Es el fin —es decir, la Información- lo que ha de prevalecer en la cúspide de la jerarquización. El informador no trabaja para la empresa, sino para la Información, aunque lo haga -eso sí- en la empresa, con la empresa y desde la empresa”<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978. Vigencia desde 29 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 27 de Septiembre de 2011.

<sup>51</sup> Soria, Carlos. Op. Cit.

En Argentina, el reconocimiento jurídico formal de esta etapa la encontramos con y a partir del Estatuto del Periodista Profesional Decreto Ley 7618/44, ratificado por Ley N° 12.908<sup>52</sup>, que aún sigue vigente y que ha resistido, gracias a la lucha de los trabajadores los intentos de su derogación en el marco de las políticas neoliberales y de flexibilización laboral de los noventa.

Asimismo, por Decreto 13.839/46, de 15 de mayo de 1946, ratificado por Ley N° 12.291, con posteriores reformas por leyes 13.502 y 15.535, se sancionó el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.

Juan Domingo Perón fue central para la aprobación de estas normas laborales, tanto como Secretario de Trabajo y Previsión Social como luego Presidente de la Nación.

El Estatuto del Periodista Profesional, es el instrumento jurídico que, con una interpretación dinámica, permite la defensa de los derechos de los trabajadores no sólo de “prensa” sino del amplio campo del periodismo y la comunicación en la actualidad.

No se niega su falta de aplicación en la práctica y su incumplimiento por parte de las empresas mediáticas pero como norma laboral siempre viene en auxilio de los derechos de los trabajadores. Quizá en ningún otro ámbito encontramos semejante incumplimiento o abismo entre el ser y el deber ser que propugna la norma.

También se ha notado la falta de conocimiento que muchas veces los periodistas y comunicadores en ejercicio tienen para con él, lo que requiere denodados esfuerzos de su difusión, defensa, propuestas de actualización, reflexión y análisis de la jurisprudencia más reciente en la materia.

---

<sup>52</sup> Estatuto del Periodista Profesional Decreto Ley 7618/44, B.O. de la Nación Argentina: 25-03-44 y ratificado por Ley N° 12.908. B.O.: 11-09-1947.

El Estatuto del Periodista Profesional constituyó no sólo una medida favorable para el reconocimiento de salarios dignos para los trabajadores del sector, sino fundamentalmente, el reconocimiento de sus tareas específicas y de sus derechos.

La sanción del Estatuto fue el logro fundamental de una serie de luchas gremiales ya históricas por aquel entonces. “El año 1939 será clave para las conquistas gremiales del periodismo argentino. El 27 de junio es aprobada la ley nacional 12.581, de jubilaciones y pensiones para periodistas, proyecto formulado por el Círculo de Prensa y que fuera girado a la Cámara de Diputados por el presidente Roberto Ortiz, y aprobado por Senadores en junio. El informe de la Comisión de Legislación General de la Cámara alta, lo firman Carlos Serry, Laureano Landaburu y Alfredo Palacios<sup>53</sup>”.

Será, aunque meritoria, una conquista parcial. La norma recién se logrará poner en práctica un lustro más tarde, cuando el coronel Juan Perón eleve el decreto ley N° 14.535 del 3 de junio de 1944, firmado por el presidente Edelmiro Farrell, siendo de esta manera la de los periodistas, la cuarta institución gremial en contar con tal beneficio, seguida por la caja de los empleados de comercio.

Para 1944 expiraba el plazo que la ley establecía para dar vigencia definitiva a la ley de jubilaciones y pensiones de los periodistas, meses antes las empresas periodísticas acordaron visitar al coronel Perón a la cartera laboral para reclamarle su anulación, argumentando que de promulgarse “traería la ruina de las mismas”, al tiempo que trataron de dilatar la sanción del Estatuto. Cuando las ganancias de los empresarios periodísticos se encontraban en su mejor momento, dejaron trascender que de llegar a aplicarse el Estatuto Profesional apelarían a la Corte Suprema de Justicia. Los convenios colectivos del sector serán denunciados como de origen fascista, y acusarán a los periodistas de “ejercer la profesión como un medio y no como un fin”.

---

<sup>53</sup> Ensayo de Senén González (hijo) citado en “Los trabajadores de prensa. Ladrilleros del periodismo”, Vol. I, Ediciones Corregidor, 2010, Buenos Aires, pág. 79.

La implantación del Día del Periodista era desconocido y obviado por los medios, a excepción del Diario Crítica, dirigido por Natalio Botana, y luego que la FAP (Federación Argentina de Periodistas) les enviara una carta donde la manifestaba su extrañeza por tomar la misma determinación al respecto “colocándose en el mismo plano que los diarios de la oligarquía, siendo un diario popular con hondo arraigo en la opinión pública<sup>54</sup>”.

Cuentan las reseñas de época y la historia gremial de los trabajadores de prensa que cuando Perón tuvo en sus manos el proyecto de Estatuto y luego de haberse interesado por la categorización que el mismo establece respondió “Me parece bueno, vamos a darle manija<sup>55</sup>”. Ese compromiso se tornó en realidad legal.

En Argentina, la sanción del Estatuto del Periodista Profesional significó la incorporación de la etapa profesionalista del derecho a la comunicación, concibiendo a la información como bien social y reconociendo el rol fundamental de los periodistas como los intermediarios entre el público y la información.

Nótese que la jurisprudencia laboral anterior a la sanción del Estatuto respondía cabalmente al modelo empresarista de la información, a tal punto que se consideraba a los periodistas “empleados de comercio”.

Al respecto nos reseña Rocco que “la jurisprudencia se inclinó por considerar que el periodismo en general, en su actual organización, reviste las características de una actividad comercial. (...) En cambio, y sin perjuicio de los móviles de bien público que persiguen los diarios, éstos constituyen jurídicamente una empresa mercantil cuando emplean la obra de numerosos colaboradores, dividiéndola según sus varias aptitudes, y obtienen ganancias con la diferencia entre lo que gastan en retribuciones y materiales, y lo que recaudan con la

---

<sup>54</sup> Ernesto Barabraham. “Octavio Palazzolo. Una voluntad en el periodismo argentino”. Pág. 72, 1962, Bs. As., AHPBA-FATPREN. Citado en Parcero, Daniel. “Los trabajadores de prensa. Ladrilleros del periodismo”, Vol. I, Ediciones Corregidor, 2010, Buenos Aires, pág. 99.

<sup>55</sup> Parcero, Daniel. “Los trabajadores de prensa. Ladrilleros del periodismo”, Vol. I, Ediciones Corregidor, 2010, Buenos Aires, pág. 102.

publicación de avisos y venta de ejemplares. Con un criterio similar se consideró comerciales a las agencias noticiosas y a las radioemisoras”<sup>56</sup>.

Esa jurisprudencia equiparó entonces a los periodistas con los empleados de comercio, bajo una estructura netamente empresarista de la comunicación en general. Fue así necesaria la sanción del Estatuto para reconocer al periodista en sus tareas específicas y como sujeto esencial en el derecho a la información.

La jurisprudencia de la justicia laboral argentina actual en relación a la aplicación y cumplimiento del Estatuto del Periodista Profesional, da cuenta de trascendentes cambios que se están produciendo en el campo laboral periodístico, o al menos que se manifiestan en tensión, y se ponen en evidencia en los conflictos judiciales entre empleadores y periodistas, y que podríamos identificar de la siguiente manera:

- Encubrimiento formal de la existencia de relación de dependencia laboral con la implementación de contratos de locación de obra, de servicios y facturación: se supera judicialmente por la aplicación del principio de primacía de la realidad y presunción de existencia de relación laboral. Pero en los hechos hay una recurrencia en ocultar la relación laboral existente.
- Interpretación dinámica y amplia del artículo 2 de la Ley 12.908 que comprende realizaciones comunicacionales en general.
- Interpretación dinámica y amplia del artículo 2 de la Ley 12.908 que comprende a otras empresas que no sean estrictamente periodísticas, es decir, la naturaleza jurídica de la empleadora no determina la existencia de trabajo periodístico sino la índole del trabajo que se presta.
- Reconocimiento de nuevos entornos periodísticos y comunicacionales: Internet, trabajo a distancia, remisión de material periodístico vía electrónica, trabajos en portales de Internet, etc.

---

<sup>56</sup> Rocco, Orlando. Título VI. “Régimen del Personal de Empresas Periodísticas”, en Tratado del Derecho del Trabajo. Tomo III, dirigido por Mario Deveali. La Ley. Buenos Aires, 1965. Págs. 433/434.



- Reconocimiento de múltiples tareas del periodista más allá del medio para el que regularmente preste tareas, salvo pacto de exclusividad, el que debe probarse y ser expreso.
- Reconocimiento paulatino del pago de adicional por título universitario, tanto en el ámbito privado como público.

Mención aparte merece el análisis de la prestación de tareas periodísticas y comunicacionales en los ámbitos públicos, ya que salvo específicas adhesiones al Estatuto del Periodista. Tales como Radio Nacional, TELAM, Canal 7, Telesur, entre otras empresas periodísticas, se verifica que en la mayoría de las situaciones, los periodistas que se desempeñan en ámbitos públicos, como en las Legislaturas, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerios, Radio Provincia, entre otros, se les aplica la Ley de Empleo Público o contratos de locación de servicios propios de la jurisdicción en la que desarrolle sus tareas, lo cual va en desmedro del reconocimiento de sus tareas profesionales específicas, aunque en ellos, en la mayoría de los casos hay reconocimiento del pago de la bonificación de adicional por título.

En este marco, es ineludible considerar que el campo laboral del comunicador se ha ampliado significativamente. Ya no sólo comprende al clásico trabajo periodístico en una redacción o un medio, sino que se ha expandido hasta cubrir las más esenciales necesidades comunicacionales de toda organización, ya sea pública o privada.

A ello se suma la incorporación de las nuevas tecnologías y el acceso a la tecnología que posibilitan la transportación *on line* de información, entre otras cuestiones, y además porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, abre caminos en pos de garantizar la libre expresión, el acceso a la información, y el fomento de producciones locales.

En este contexto de profundas transformaciones teniendo en cuenta la importancia económica y simbólica de las industrias culturales es necesario preguntar, indagar e investigar el alcance de los derechos del sujeto profesional de la información.

Además, encontramos que el ejercicio profesional se encuentra condicionado en su práctica profesional por la figura que Granero denomina “periodista multiplataforma”.

En ese sentido, el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Gustavo Granero, reconoce que “lo que se ha producido es la explotación del periodista en esa búsqueda de que sea multiplataforma, sobre todo en los diarios más concentrados. Si les exigen escribir una nota para diferentes soportes, el sueldo tendría que ser otro”<sup>57</sup>.

“La concentración de medios en pocas manos hace, a su vez, que los trabajadores realicen la cobertura de un hecho para distintos medios del grupo. En algunos casos-entre ellos Costa Rica- implica el registro imágenes, audio y escritura de notas posteriores que suelen ver la luz no sólo en medios gráficos sino también electrónicos. En el mismo sentido en Paraguay: los compañeros tienen que manejar el vehículo, sacar las fotos, realizar la cobertura, hacer la crónica y luego sus materiales son publicados en uno, dos o más diarios y en internet sin que se les abone por la publicaciones en multimedios que realizan.

Por otra parte, la existencia de pocos medios, concentrados, hacen improbable obtener un nuevo empleo si acaso el trabajador se enfrentara a sus patrones. República Dominicana es un ejemplo de ello: cuando un trabajador deja de trabajar en los medios por cualquier cuestión se dificulta entrar a otros medios, porque los medios están en tan pocas manos que, a medida que te vas yendo de un medio se dificulta entrar a otro”. Esto se desprende de una investigación publicada en Santiago de Chile el 3 de mayo de 2011 por la

---

<sup>57</sup>Entrevista realizada por Lorena Retegui a Gustavo Granero, Secretario General de la FATPREN, realizada en 2011 en el marco de su trabajo final, “Digitalización y cambios en las rutinas laborales en la prensa gráfica: ¿qué pasa con el marco jurídico?”, dirigido por Analía Eliades en el marco de la asignatura a su cargo, Derecho a la Información, la Comunicación y la Cultura, Maestría en Industrias Culturales, Universidad Nacional de Quilmes.

Federación Internacional de Periodistas (FIP), titulada “La concentración mediática y su impacto en la libertad de expresión y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa”.

Por su parte, Luis Albornoz sostiene que “el periodismo digital revela un escenario informativo cada vez más complejo y competitivo, donde los canales y modalidades de información no se sustituyen sino que se multiplican<sup>58</sup>”. Siguiendo con esta línea de análisis se ha comprobado que en el ejercicio de la profesión periodística, consecuentemente, las tareas, actividades y coberturas del profesional de la información se multiplican en producción pero no en remuneración.

Así, no podemos soslayar que en auxilio y apoyo legal de los derechos del sujeto profesional de la información, el marco jurídico que se sigue aplicando en Argentina es el Estatuto del Periodista Profesional, Ley N° 12.908, que data del año 1946 y sigue vigente hasta la actualidad. Si bien como hemos apuntado, los tribunales laborales, con una interpretación dinámica de la norma, incorporan bajo su protección a los entornos digitales, Internet, las nuevas tecnologías e incluso el trabajo on line, lo que ha cambiado profundamente es la forma, la manera y el ejercicio de la profesión en sí, y por ello es dable advertir los cambios y tensiones producidos en las rutinas laborales de los periodistas, a partir del proceso de digitalización iniciado en los diarios a fines de los '90 y con mayor intensificación expandidos a las modalidades radiales y televisivas en la última década.

Esos cambios en las rutinas laborales conducen, en muchos casos, a una declinación de los derechos del sujeto profesional.

Ya Azpillaga, Miguel de Bustos y Zallo<sup>59</sup>, en un artículo publicado en la revista Zer, señalan que la introducción masiva de la informática en las empresas informativas

---

<sup>58</sup> Albornoz, Luis A. “Los grandes diarios online en español”. La Crujía Revista. Año 1, Número 3, Octubre 2006. Buenos Aires. Pág. 19. Ver también Albornoz, Luis A. “Periodismo digital. Los grandes diarios en la red”. Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2007.

<sup>59</sup> AZPILLAGA, Patxi; MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos; ZALLO ELGUEZABAL, Ramón; (1998): "Las industrias culturales en la economía informacional I Evolución de sus formas de trabajo y valorización ", En: ZER Revista de Estudios de Comunicación, n°5. Bilbao: UPV/EHU, pp. 53-74. Disponible en

cambió los modos de organización del trabajo, el taylorismo y el fordismo. Entre los cambios destacan la aparición de nuevos oficios, la reducción de los costos mediante la simplificación de las fases de trabajo, la flexibilización de las plantillas y la descualificación de algunos oficios desplazados por la información almacenada.

Ignacio Ramonet señaló tres características de la información en un contexto de revolución tanto tecnológica como económica: hay superabundancia de información, esa información es extremadamente rápida y es, ante todo, una mercancía que está sometida a las leyes del mercado. Así, el autor destacó que “la calidad del trabajo de los periodistas se encuentra en regresión, al igual que su estatus social. Se está produciendo una taylorización del trabajo de los periodistas”. Ramonet, incluso va más allá: “En nuestro tiempo, el periodista está en vías de desaparición. Pienso que es un tema de actualidad y todos somos conscientes de que lo que se está produciendo hoy en día, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, concierne directamente a esta profesión<sup>60</sup>”.

No es necesario reformar en su totalidad los textos normativos básicos de los derechos laborales del periodista en Argentina para entender que el periodismo online e internet como herramienta de trabajo, forman parte de la rutina diaria de los profesionales de la información, más allá de las modificaciones precisas que puedan realizarse y para abordar otros derechos que debieran consagrarse tales como la cláusula de conciencia, la que lamentablemente hasta la actualidad no ha sido incorporada a la legislación vigente ni a los convenios colectivos en Argentina, a diferencia de España que desde el año 1997 cuenta con la Ley Orgánica 2/1997<sup>61</sup>, reguladora de la cláusula de conciencia para los profesionales de la información. Las tecnologías no son malas ni buenas por sí mismas y, por lo tanto, la convergencia mediática no debería decantar, necesariamente, en precarización laboral.

---

<http://www.ehu.es/zer/es/hemeroteca/articulo/las-industrias-culturales-en-la-economia-informacional-ievolucion-de-sus-formas-de-trabajo-y-valorizacion/59>

<sup>60</sup> Ramonet, Ignacio (2002): “Los periodistas están en vías de extinción”, en Revista Semana N° 46. Disponible en <http://www.saladeprensa.org/art382.htm>

<sup>61</sup> Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio de 1997. Reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. B.O.E.: 20/06/1997.

Sin embargo, queda pendiente que el Estatuto se aplique en las redacciones, en las instituciones, en los organismos, en las dependencias administrativas, en el día a día con el reclamo individual y colectivo correspondiente en defensa de los derechos de los propios profesionales del periodismo y la comunicación.

Además de las normas protectorias laborales del sujeto profesional de la información, es necesario considerar otros derechos que los periodistas poseen, tales como los derechos de autor, los cuales se han establecido en normas especiales en el marco de la Ley de Propiedad Intelectual, Ley N° 11.723 y modificatorias. Por su parte, la jurisprudencia respeta el secreto profesional periodístico o reserva de la fuente que se encuentra constitucionalmente protegida por el artículo 43 y no reglamentado por ley<sup>62</sup>. Asimismo Argentina carece de la protección jurídica de la cláusula de conciencia<sup>63</sup>.

#### **II.4.1. La Colegiación Obligatoria de Periodistas es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.**

Una de las diferencias más notorias entre el sistema europeo de derechos humanos y el interamericano lo encontramos en relación al reconocimiento de la colegiación obligatoria de periodistas. En la Opinión Consultiva 5/85<sup>64</sup>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó con claridad señera que la colegiación obligatoria de periodistas es incompatible con el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto atentaría contra el derecho humano a la libertad de pensamiento y de expresión si se

---

<sup>62</sup> Hemos abordado el alcance del secreto profesional periodístico en Argentina, con mayor detalle, con el el Prof. Manuel Larrondo: “Secreto periodístico: ¿debe revelarse ante un pedido de informe de un letrado? Publicado en Revista Jurídica La Ley, Suplemento Argentina, Buenos Aires, 6 de abril de 2007.

<sup>63</sup> Al respecto corresponde advertir que ha habido diversos proyectos de ley en pos de la consagración de la cláusula de conciencia, los que por el momento no han logrado sanción.

<sup>64</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. “La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicitada por el Gobierno de Costa Rica. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_05\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf) Ultima consulta 15 de enero de 2015.

pretendiera imponer un título habilitante y la pertenencia a la corporación colegial para ejercer este derecho humano.

Esto no significa de ningún modo desdeñar la preparación académica para el ejercicio de la actividad comunicacional y periodística, que día a día requiere más preparación y formación, sino que implica no imponer una restricción o limitación previa al ejercicio del derecho a comunicar. Así, la Corte concluyó que “no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. Una ley semejante contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir información sin trabas”.

Por tales condiciones, el Estatuto del Periodista Profesional en Argentina y la jurisprudencia laboral en la materia de los tribunales laborales argentinos es plenamente compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos que posee jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna argentina.

#### **II. 4.2. Derechos del sujeto profesional de la información en España**

En el plano de los derechos del sujeto profesional de la información encontramos profundas diferencias en el régimen jurídico de España y Argentina.

Así, tal como hemos apuntado previamente, mientras Argentina carece de una ley que proteja la cláusula de conciencia, en España tiene hondo arraigo, consagrada por la Ley Orgánica 2/1997<sup>65</sup>, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, que constituye en Argentina, una referencia obligada para los proyectos de ley que se han presentado.

---

<sup>65</sup> Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio de 1997. Reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. B.O.E.: 20/06/1997.

Debemos aquí partir de la diferencia que resulta de la protección expresa que la Constitución Española de 1978 tiene en su parte dogmática, en el artículo 20.1.d), junto al secreto profesional. En virtud de esta manda constitucional, España cuenta con la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio<sup>66</sup>, por la cual se regula la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. En su Exposición de motivos, se destaca que “si bien es cierto que este derecho estaba ya reconocido por la legislación ordinaria, con diferentes grados de garantía, en diversos estados democráticos, la aportación al texto constitucional español ha sido la de integrarlo como elemento constitutivo del derecho fundamental a recibir y comunicar información”.

La razón fundamental de la que surge la cláusula de conciencia para los periodistas es el peculiar carácter intelectual de la profesión. Por ello la finalidad de la figura es la de ofrecer una cierta garantía de la independencia moral del periodista.

Azurmendi sostiene al respecto: “Las circunstancias de que el profesional de la información esté integrado habitualmente en una empresa, supone una serie de limitaciones en su actividad. La línea editorial del medio, lo marcado por los estatutos de la redacción – si los hubiere- y los usos profesionales de la empresa configuran una peculiar idiosincrasia que el periodista debe integrar en su trabajo. Su adaptación a este conjunto de pautas no supone una supresión de su independencia moral, aunque desde luego sí le exigen un acuerdo básico, cuando menos una aceptación, de los principios ideológicos y profesionales del medio<sup>67</sup>”.

También entre los fundamentos de la Ley Orgánica 2/97, se sostiene que los elementos de la misma “tienen un doble punto de partida: en primer lugar, la consideración del profesional de la información como agente social de la información, que ejerce su trabajo bajo el principio ineludible de la responsabilidad; y, en segundo lugar, la

---

<sup>66</sup> B.O.E.: 20 de junio de 1997.

<sup>67</sup> Azurmendi, Ana. “Derecho de la información. Guía Jurídica para profesionales de la Comunicación”. Ediciones EUNSA. 1997, Pág. 171.

concepción de las empresas de comunicación como entidades que, más allá de su naturaleza jurídica –empresas públicas o privadas–, participan en el ejercicio de un derecho constitucional, que es condición necesaria para la existencia de un régimen democrático”.

Cabe tener en cuenta que en el ámbito europeo, la primera regulación legal sobre la cláusula de conciencia de los periodistas es la que se produce en Francia, en un momento de grandes convulsiones sociales y políticas en toda Europa. La Ley francesa de 29 de marzo de 1935, que reconoce la cláusula de conciencia de los periodistas, tiene dos antecedentes inspiradores: de una parte, el informe realizado en 1928 por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones laborales de los periodistas, en el que se señalaba la ausencia de un régimen regulador que garantizase los derechos básicos de los informadores. De otra parte, el proyecto de Estatuto del Periodista, redactado en 1933 por Georges Bourdan, secretario general del Sindicato de periodistas franceses, que fue llevado por el diputado Emile Brachard al parlamento. El hoy conocido como Informe Brachard provocó la inclusión en el Código de Trabajo de la cláusula de conciencia (art. 761.7), norma que prevé la posibilidad de que los empleados de una empresa periodística puedan rescindir su contrato de trabajo obteniendo la indemnización del despido improcedente cuando se produzca: «1) Cesión del diario o publicación. 2) Cese de la publicación o del diario por cualquier causa. 3) Cambio notable en el carácter u orientación del diario o publicación si éste supone en la persona empleada una situación que atente a su honor, a su fama o de una manera general a sus intereses morales». De esta manera, el texto francés hace depender la utilización de este derecho de que el cambio vulnere la conciencia subjetiva del profesional, cosa que se excluye del texto español. En la Ley Orgánica española, no se quiere que el trabajador recurra a un supuesto conflicto entre la línea editorial del medio y sus propias convicciones ideológicas, basta con el dato objetivo de «un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica»<sup>68</sup>. Lógicamente, si es el periodista el que cambió de manera de pensar, él será quien haya de soportar las

---

<sup>68</sup> Marchante, Navarro y Rodríguez Bores, Rodrigo F. “La cláusula de conciencia de los profesionales de la información. La Ley Orgánica 2/1997”. Revista Latina de Comunicación Social 49, abril de 2002. Disponible en

<http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina49abril/4906navarro.htm>

Fecha de consulta 10 de enero de 2015.



consecuencias gravosas del cambio en tanto desee ser honesto a sus propias y alteradas convicciones<sup>69</sup>.

Así, ya en su contenido explícito, la Ley Orgánica establece que el objeto de la cláusula de conciencia consiste en garantizar la independencia en el desempeño de la función profesional de los periodistas.

En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen:

- a) Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica.
- b) Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.

2. El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la Ley para el despido improcedente” (Art. 2º).

También es esencial tener en cuenta que la norma establece: “Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio”.

Asimismo, España carece de ley orgánica que regule el secreto profesional periodístico.

Ahora bien, si la cláusula de conciencia es una importante norma faltante en Argentina, este país sí tiene una sólida e histórica legislación laboral de protección de la

---

<sup>69</sup> Ruiz Vadillo, E. «El derecho constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia». En *Poder Judicial*, nº especial XII, Madrid, 1990, p. 151.

relación laboral del periodista, norma de la que carece España, en donde se aplican las normas laborales generales, el Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos.

Éste déficit de la legislación española es reclamada por los periodistas y los gremios de prensa, así encontramos que la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP)<sup>70</sup> y la FAPE<sup>71</sup>, entre otras organizaciones, ha denunciado y advertido sobre la grave precariedad laboral de los periodistas en España incluso en comparación con otros países europeos.

Un excelente y pormenorizado abordaje del estatuto jurídico del profesional de la información la encontramos en la tesis doctoral de Pablo Alfonso Fernández Fernández, titulada “Estatuto Jurídico del Profesional de la información: los Colegios Profesionales de Periodistas”, dirigida por el Dr. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, presentada ante esta Universidad Complutense de Madrid, en 2010<sup>72</sup>.

## **II.5. La concepción universalista del derecho a la libertad de expresión**

Los aportes, formulaciones y luchas del sujeto profesional de la información, sin duda son cruciales para un entendimiento totalmente nuevo de la clásica concepción de la libertad de expresión, que la ampliará de modo tal en su alcance, contenidos, facultades e interpretación, abarcando los más amplios conceptos ya contenidos en la formulación “derecho a la comunicación”.

Ya no hay exclusivismos mediáticos, empresarios ni profesionales. La información es un derecho humano de todos y todas, de cada uno y cada una, por nuestra sola condición

---

<sup>70</sup> <http://www.fesp.org/>

Ver documentos, comunicados, ponencias a Congresos y noticias entre otra información.

Fecha de consulta: 14 de enero de 2015.

<http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1160498978Ponencia2.pdf>

Entre otros, se remite al documento elaborado por Enric Bastardes (FeSP), titulado “La necesidad de una ley de regulación laboral de los periodistas en España”

<sup>71</sup> <http://www.europapress.es/nacional/noticia-periodistas-lamentan-precariidad-laboral-acoso-poderes-profesion-ofertas-trabajo-indignas-20140503114134.html>

Consulta realizada el 15 de enero de 2014.

<sup>72</sup> <http://eprints.ucm.es/10659/1/T31600.pdf>

Consulta realizada el 14 de enero de 2015.

de seres humanos. La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos en Argentina, en virtud del artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna ha afianzado esta interpretación con un impacto altamente positivo en el derecho interno argentino.

La Declaración Universal de Derechos humanos de 1948 será fundamental en este entendimiento, así su artículo 19 establece: *“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”*.

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH) en Europa, suscrito en Roma en 1950 establece en su artículo 10: Libertad de pensamiento y expresión

1. *“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.*
2. *El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”*.

A partir de la consagración con carácter universal del derecho humano a la libertad de expresión, se sumarán otros convenios y tratados internacionales que irán reforzando y enfatizando esta interpretación universalista.

Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece asimismo en el artículo 19:

- 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*
- 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:*
  - a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;*
  - b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) establece:

**Artículo 13:** *1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.*

- 2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:*
  - a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o*
  - b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.*

**Artículo 14:** *1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.*

*2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.*

*3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la*

*seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.*

En el ámbito interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) establece en su Art. IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969), tal como hemos apuntado, el derecho a la información tendrá una consagración especial, instaurando un sistema altamente protectorio y generoso a favor de la libertad de expresión:

***Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión***

*“ 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.*

*2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:*

*a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o*

*b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.*

*3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.*

*4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.*

*5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.*

Sin duda, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos aporta una mirada señera en materia del derecho a la información, sentido que se realza en los tiempos de la llamada Sociedad de la Información.

Así el derecho a la información se manifiesta en su carácter bifronte, como derecho individual y como derecho colectivo, como derecho a dar información y como derecho a recibirla, con implicancia pluralista y de apertura. Esta doble condición fue especialmente enfatizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85:

“Las dos dimensiones mencionadas –individual y social- de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. **Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.** Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, *a priori*, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, *inter alia*, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera

**sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas<sup>73</sup>”.**

Desde esta perspectiva, el ya citado Profesor Owen Fiss, sostiene que los debates del pasado asumían como premisa que el Estado era el enemigo natural de la libertad. Era el Estado el que estaba tratando de silenciar al individuo, y era al Estado a quien había que poner límites. Sin embargo, en la actualidad, explica, hay una serie de temas en los cuales el Estado es necesario para ser un amigo o más aún, garantizar las libertades. Una de ellas se refiere al impacto que las concentraciones privadas de poder tienen sobre la libertad de expresión y la necesidad del Estado para contrarrestar esas fuerzas. Así, el Estado está obligado a actuar para promover el debate público cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones, y de este modo: “Habrá que asignar recursos públicos – repartir megáfonos- a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública”<sup>74</sup>.

Por su parte, el Profesor español Manuel Chaparro Escudero, señala: “(...) cuando hablamos de libertad de expresión parece que hablamos únicamente de libertad de mercado y ni siquiera de Derecho de Comunicación, de garantía de derechos. Un gran condicionante para la acción política de un país y los derechos ciudadanos. Si no hay libertad de mercado parece que no puede haber libertad de expresión. Un gran error evidentemente. Una cosa es el mercado y otra cosa es la libertad de expresión y el ejercicio de un derecho universal cuando se ocupa un espacio que es patrimonio de todos [en referencia al espectro radioeléctrico]. Es necesario garantizar el acceso universal y el buen uso para hacer posible la pluralidad de opiniones. No tiene nada que ver con el concepto de libertad de mercado<sup>75</sup>”.

---

<sup>73</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 5/85, Serie A, n° 5. “La Colegiación obligatoria de periodistas”. Puntos 33 y 34. El destacado nos pertenece.

<sup>74</sup> Fiss, Owen. “La Ironía de la Libertad de Expresión”. Gedisa Editorial, Barcelona, 1999.

<sup>75</sup> Chaparro Escudero, Manuel. En “Los nuevos escenarios de la comunicación audiovisual y el fortalecimiento de la democracia”. Libro Colección Comunicación resultado de la Jornada Internacional del mismo título celebrada en Buenos Aires, Argentina el 23 y 24 de octubre de 2008. COMFER-TELAM. Buenos Aires, 2008. Págs. 36 y 37.

Este es el marco, la esencia y el punto de partida de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina, que de este modo cumple con la interpretación universalista del derecho a la comunicación, promotora una verdadera democratización de los medios y para que todos y todas, cada uno y cada una podamos expresarnos: la información como derecho humano con universalidad de sujetos, mensajes y medios. Y la necesidad de un Estado activo que con políticas públicas garantice el efectivo ejercicio del derecho a la información.

En el marco de la concepción universalista del derecho a la comunicación, es necesario también recordar los aportes del Informe MacBride, “Un solo mundo, voces múltiples”, que ya en 1980 nos aportaba este concepto:

“...presentamos una formulación de este derecho (en alusión al derecho a la comunicación), que indica la diversidad de sus elementos y el espíritu que le inspira: “Todo el mundo tiene derecho a comunicar. Los elementos que integran este derecho fundamental del hombre son los siguientes, sin que sean en modo alguno limitativos: a) el derecho de reunión, de discusión, de participación y otros derechos de asociación; b) el derecho de hacer preguntas, a ser informado, a informar y otros derechos de información; y c) el derecho a la cultura, el derecho a escoger, el derecho a la protección de la vida privada y otros derechos relativos al desarrollo del individuo. Para garantizar el derecho a comunicar sería preciso dedicar todos los recursos tecnológicos de comunicación a atender las necesidades de la humanidad al respecto<sup>76</sup>”.

### **II.5.1. El derecho a la libertad de expresión, la información y la comunicación en la Constitución Argentina**

Resulta una obviedad advertir que la Constitución Nacional, redactada originariamente en 1853-1860, aludía solamente a la imprenta, porque era el único medio conocido por entonces, y no preveía el surgimiento y desarrollo de la radio y la televisión y menos aun de las nuevas tecnologías, como Internet, entre otras.

---

<sup>76</sup> Sean MacBride y otros. Un solo mundo, voces múltiples. Unesco. Comunicación e Información en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, México/UNESCO, París. 1980. Págs. 301/302.



En este sentido, el artículo 14<sup>77</sup> de la Constitución Nacional consagra el derecho de publicar las ideas por la “prensa” sin censura previa y el artículo 32<sup>78</sup> incorporado a la norma fundamental a instancias de la Provincia de Buenos Aires en 1860 alude a la “libertad de imprenta”. De todos modos, la interpretación dinámica de la Constitución incluye a los diversos soportes y medios actuales<sup>79</sup>.

En este marco, se destaca la Ley N° 26.032, que estableció que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión<sup>80</sup>”.

Según Bidart Campos en el texto de la Constitución formal se halla normada la libertad de prensa y en cambio, no encontramos expresamente ninguna norma que se refiera a la libertad de expresión en cualquiera de sus modos, incluso los diferentes a la prensa, "decimos que respecto a la expresión a través de medios que `no son prensa` hay una carencia histórica de norma, o sea, una laguna en el orden normativo. Esa laguna suscita la integración del orden normativo para llenar el vacío" y "nos remite en primer lugar a la

---

<sup>77</sup> Artículo 14 Constitución Nacional, en su parte pertinente establece: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las Leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (...) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (...)”.

<sup>78</sup> Artículo 32 Constitución Nacional: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

<sup>79</sup> La jurisprudencia, antes aún de la sanción de la Ley N° 26.032 reconoció a Internet como medio de comunicación protegido por las normas constitucionales clásicas. Entre otros, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en la Causa Nro. 33.628 "Vita, Leonardo G. y González Eggers, Matías s/procesamiento"(13/03/2002) sostuvo respecto a Internet: “En efecto, más allá de las discusiones doctrinarias sobre el alcance de la libertad de prensa, es claro que nos encontramos ante un nuevo medio de comunicación, "Internet", en el que conviven y mediante el cual se expresan -entre otras- actividades científicas, comerciales, periodísticas y personales. Por ello, corresponde, a la luz de los hechos del caso, y al amparo de la Ley Fundamental, considerar a la "red de redes" como otro medio comunicacional público y masivo, en el que se vierten diversas formas de expresión, lo cual incluye a la prensa”.

Cabe aclarar que aún con anterioridad, en el ámbito normativo, el Decreto 1279/97 (1/12/1997) declaró que Internet constituye un medio de comunicación y debe interpretarse que el mismo está comprendido en los Artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional en cuanto los mismos consagran el derecho a la libertad de expresión.

<sup>80</sup> Ley N° 26.032. B.O.: 17-06-2005.

norma análoga, (es decir a la más parecida que hallamos en la Constitución, que es la referida a la prensa) y a los valores y principios generales del derecho constitucional”<sup>81</sup>.

También sostiene Bidart Campos en tal dirección, y haciendo una interpretación dinámica en el tiempo de la Constitución que toma los cambios y formas de expresión actuales que no eran conocidos por el constituyente histórico, que se puede, sin dudas, concluir que la Ley Fundamental argentina establece claro resguardo a la libertad de expresión. Ello a partir de los principios de libertad que contiene la Constitución desde su mismo Preámbulo.

En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el fallo "Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida", de modo claro ha establecido que lo estatuido sobre la libertad de prensa en la Ley Fundamental, no debe ser apreciado en un sentido literal, sino de un modo amplio y abarcativo de la libre expresión e información por otros medios diferentes a la prensa escrita<sup>82</sup>.

Con tal espíritu interpretaron la cuestión los constituyentes de 1853, ya que esa concepción sobre la prensa primaba a la hora de la introducción del artículo 32 en 1860, a pedido de la Provincia de Buenos Aires para que, al incorporarse a la Confederación, el Estado Nacional no controlara “sus” medios de prensa.

Esa comprensión amplia de la libertad de prensa ya había sido anunciada en la Convención, pues el informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal

---

<sup>81</sup> Bidart Campos, Germán. Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 1998, p. 12.

<sup>82</sup> Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida S. A., C.S.J.N, Fallos, 306:1892. Considerando 7º: “Que las profundas transformaciones producidas como consecuencia del tránsito de la sociedad tradicional, de tipo rural y agrícola, a la sociedad industrial, de tipo urbano, y los avances de la ciencia y de la técnica y el consecuente proceso de masificación, influyeron en los dominios de la prensa toda vez que las nuevas formas de comercialización e industrialización afectaron el ejercicio de publicar, la iniciativa y la libre competencia, hasta entonces concebidos en términos estrictamente individuales. El desenvolvimiento de la economía de la prensa y la aparición de las nuevas técnicas de difusión e información –cine, radio, televisión–, obligan a un reexamen de la concepción tradicional del ejercicio autónomo del derecho individual de emitir y expresar el pensamiento. De este modo, se hace necesario distinguir entre el ejercicio del derecho de la industria o comercio de la prensa, cine, radio y televisión; el derecho individual de información mediante la emisión y expresión del pensamiento a través de la palabra impresa, el sonido y la imagen; y el derecho social a la información. Es decir, el derecho empresario, el derecho individual y el derecho social, que se encuentran interrelacionados y operan en función de la estructura de poder abierto que caracteriza a la sociedad argentina”.

consideraba a la “palabra escrita o hablada uno de los derechos naturales de los hombres, que derivan de la libertad de pensar”.

Los constituyentes tuvieron en cuenta que, en la medida en que la prensa –hoy diríamos toda tecnología informativa- fuera pasible de regulación, el Estado podría, bajo el pretexto de determinar normas para una actividad industrial, afectar o condicionar la posibilidad de expresar públicamente las ideas que la prensa ofrece.

El artículo 32 de la Constitución garantiza esa libertad, por la que se ordena que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

Creemos necesario detenernos particularmente en el artículo 32 de la Constitución Nacional en el marco de la prohibición de la jurisdicción federal sobre la “libertad de imprenta”. La libertad de expresión abarca a la libertad de imprenta, pero no puede llegarse al reduccionismo de pensar que la prensa es el único modo de ejercicio del derecho a la información, de hecho, tal como hemos destacado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la expresión puede ejercerse por todos los medios y procedimientos, sin limitación alguna.

En materia de radiodifusión, es necesario tener presente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a las atribuciones de las provincias en la materia. Así, la Corte ya ha negado en forma reiterada la posibilidad de que las Provincias puedan normar en materia de radiodifusión, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico debe estar sometido al control del Estado federal, que es parte en los Convenios Internacionales suscriptos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que la adjudicación de frecuencias sin intervención de la autoridad nacional puede provocar interferencias hacia y desde estaciones de otros países.

En este sentido, en el caso “Comité Federal de Radiodifusión c. Provincia de Río Negro” (CS, febrero 18-988<sup>83</sup>) la Corte sostuvo que “si bien por vía de principio no procede la impugnación ante la Corte Suprema de actos administrativos o legislativos provinciales, habida cuenta de la presunción de validez que ostenta, tal doctrina debe ceder cuando se lo impugna sobre bases “prima facie” verosímiles, como contrarios a disposiciones emanadas de la autoridad y jurisdicción nacionales, como es el caso de la ley 22.285. Y ello con mayor razón cuando, la impugnación que se formula a los actos administrativos provinciales no constituye un planteo abstracto, sino que se dirige contra concesiones de ondas de radiodifusión otorgadas a particulares y organismos oficiales que la citada ley reserva al gobierno nacional”. Con tales fundamentos, el máximo tribunal constitucional hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el COMFER y ordenó a la Provincia de Río Negro “se abstenga en forma inmediata y continua, tanto de aplicar la ley provincial 2185, y las demás disposiciones dictadas en su consecuencia, como también de concretar cualquier acto vinculado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional, y no cuente con ella”<sup>84</sup>.

Otro caso sobre la facultad de las provincias para legislar en materia de radiodifusión lo encontramos con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del COMFER contra la Provincia de Buenos Aires<sup>85</sup> a raíz de la sanción de la Ley 12.338<sup>86</sup>, en 1999, norma que preveía entre otras cuestiones la creación de la “Autoridad Provincial de Radiodifusión en Modulación de Frecuencia” que funcionaría como organismo de planificación, diseño y desarrollo de políticas provinciales en la

---

<sup>83</sup> Cuaderno de Fallos, Universidad Austral, Master en Derecho Administrativo. Master en Derecho de la Empresa. Págs. 417/418. La Ley, Buenos Aires, 1997.

<sup>84</sup> En el mismo sentido, cabe mencionar los precedentes tenidos en cuenta por la Corte para la resolución del mencionado caso: A. 492. XX “Comité Federal de Radiodifusión c. Provincia del Neuquén s/ Inconstitucionalidad”, resolución del 17 de enero de 1986; y C. 706. XXI “Comité Federal de Radiodifusión c. Provincia de Formosa s/ nulidad”, resolución del 7 de julio de 1987. Ver Revista La Ley, T. 1987-E, p. 476. Fallo 37.805-S.

<sup>85</sup> Corte Suprema Justicia de la Nación, CSJN. C. 1082. XXXV. Originario: “Comité Federal de Radiodifusión c. Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad”. Sentencia 29/04/2004. Publicada en RAP Provincia de Buenos Aires, N° 14, Mayo 2004 – Año II, págs. 99 a 102.

<sup>86</sup> Ley 12.338. Provincia de Buenos Aires. Fecha de sanción: 02/09/1999; Promulgada: 01/10/1999 y publicada en el Boletín Oficial: 15/10/1999.

materia, previniendo conductas anticompetitivas, monopólicas o indebidamente discriminatorias (Art. 1º).

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina sostuvo “Que la cuestión debatida resulta sustancialmente análoga a la resuelta en Fallos: 319:998<sup>87</sup>, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en razón de brevedad. En efecto, tal como acontece en el presente, en aquel caso se impugnaba la constitucionalidad de una ley local por contrariar las disposiciones de la Ley Nº 22.285 y las restantes normas de carácter federal que regulan los servicios de radiodifusión. Allí el Tribunal, sobre la base de su jurisprudencia acerca de la “cláusula comercial” del artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional –que incluye a la actividad radiofónica-, como en atención a las distintas normas que a lo largo del tiempo han sometido a la jurisdicción nacional la materia en conflicto, concluyó que la ley provincial era inconstitucional”.

“Para ello tomó en consideración tales argumentos, como también la influencia que la norma local podría generar en el ámbito de las relaciones internacionales, con la consiguiente responsabilidad internacional para el Estado argentino. Cabe recordar que igual solución se adoptó al resolver la causa C. 671.XXVI, “Comité Federal de Radiodifusión c. Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad” (sentencia del 2 de abril de 1998)”.

Además de los clásicos artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional como marco constitucional clásico de la libertad de expresión, debemos considerar otras normas fundamentales que fueran incorporadas a partir de la Reforma del año 1994.

En este sentido, cabe destacar el artículo 75 inc. 19 que ordena al Congreso de la Nación dictar leyes que protejan los espacios culturales y audiovisuales, mandato

---

<sup>87</sup> Así se alude a la causa “COMFER contra la Provincia de Neuquén”.

constitucional que se cumple con la sanción de la Ley N° 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual (cfr. Art. 2, 2° párrafo<sup>88</sup>).

Asimismo, el Art. 75 inc. 22 tal como señaláramos, otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados de derechos humanos, y aquí es necesario resaltar la importancia del Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto consagran el derecho a la información.

“(…) La definición clásica de la libertad de expresión, contenida por el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, se amplía y complementa, con la definición que de ella formula el artículo 13 de la CADH, la que permite afirmar actualmente, conforme lo ha ratificado la jurisprudencia de la CSJN (Fallos 310:508, “Costa Héctor Rubén”) del derecho a la información, ya que la misma contiene no sólo la libertad de expresar las ideas, sino también, la de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. Es decir que con ello, no sólo se protege el derecho del emisor, sino también del receptor de las mismas, dándole un definido contenido social y de circulación de la información (CSJN, Fallos 306:1892, “Ponzetti de Balbín”, Cons. 7° y cfr. Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, sentencia del 05-02-2001, párrs. 65, 66 y 67)”, sostiene el Prof. Wlasic<sup>89</sup>.

El tratamiento y la interpretación que la jurisprudencia argentina han hecho de la actividad radiodifusora, como soporte de realización del derecho a la libertad de expresión, por cierto merece un análisis pormenorizado, pero en punto al abordaje más actualizado que aquí presentamos, creemos necesario considerar el antecedente marcado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia correspondiente al caso “Asociación

---

<sup>88</sup> “La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”.

<sup>89</sup> Wlasic, Juan Carlos. “Manual crítico de derechos humanos”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2011. Pág. 275.

Mutual Carlos Mujica c. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo” pronunciada en septiembre de 2003. En su fallo la Corte sostuvo:

*“Que entre la radiodifusión y la prensa escrita existe una diferencia técnica fundamental, lo que determina que el derecho a la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de expresión o comunicación admita mayor reglamentación y que ese derecho deba ser ejercido dentro de los límites que impone la naturaleza reducida del medio utilizado, los derechos de terceros y el interés público. Pero tal reglamentación no puede ser arbitraria y excluir de un modo absoluto, sin sustento en un criterio objetivo razonable, a determinadas personas jurídicas de la posibilidad de acceder a una licencia de radiodifusión por no haberse constituido en una sociedad comercial, pues ello importa, en definitiva, una irrazonable limitación al derecho a expresarse libremente y de asociarse o no hacerlo<sup>90</sup>”.*

Siguiendo esa línea interpretativa la Corte declaró la inconstitucionalidad del Art. 45 de la hoy derogada Ley de Radiodifusión N° 22.285, en tanto no permitía que la actividad radiodifusora fuera prestada por asociaciones sin fines de lucro y fundó su pronunciamiento en la violación de los arts. 14, 16, 28 y 75, inc. 23, de la Constitución Nacional y del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ese primer pronunciamiento de la Corte sobre el carácter discriminatorio de la ley de la dictadura sentó las bases para la sanción de la ley 26.053<sup>91</sup> que reformó el artículo 45 y finalmente para la sanción de la Ley N° 26.522 que reconoce como prestadores tanto a las personas de derecho público, como a las personas físicas y a las personas jurídicas con y sin fines de lucro.

En el nuevo marco del derecho a la información instaurado con la reforma constitucional de 1994, también es necesario destacar el artículo 41: *“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para*

---

<sup>90</sup> A. 215. XXXVII. Asociación Mutual Carlos Mujica c. Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional - COMFER) s/ amparo (Radio La Ranchada, de Córdoba). CSJN, 01/09/2003. Considerando 8°.

<sup>91</sup> Boletín Oficial: 15/09/2005.

*que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.*

*Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.*

*Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.*

*Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos”.*

En lo que atañe a la información ambiental, creemos necesario destacar que la Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675 B.O. 28/11/2002), ha establecido las pautas básicas de la información ambiental y la participación ciudadana (esta última forma parte del concepto amplio del derecho a la comunicación). Asimismo, en enero de 2004 se sancionó la Ley N° 25.831 (B.O. 7/01/2004) que ha establecido el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, normas que han marcado un avance fundamental en pos del ejercicio del derecho a la información.

En este breve recorrido constitucional y las normas que atañen al derecho a la información, también es necesario mencionar el artículo 42 en cuanto consagra el derecho de los consumidores y usuarios de bienes y servicios a contar con una “información adecuada y veraz”.

Asimismo, en el marco del artículo 43 se establece la salvaguardo del secreto de las fuentes de información periodística, derecho del sujeto profesional de la información a resguardar ante el ejercicio del habeas data. Al respecto, en el caso “Thomas Catan<sup>92</sup>”, la

---

<sup>92</sup> Causa n° 19.480 "Incidente de Thomas Catan en autos n° 14.829/2002" Juzg. Federal n° 11 — Secretaría n° 22 Registro n° 20.377, sala II, CNFed. Crim. y Correc. 28/10/02, La Ley, 1°/11/02. Horacio R. Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi.



Cámara de Apelaciones ha sostenido que la protección del sujeto profesional periodístico, forma parte esencial de la libertad de expresión y que la mención que el artículo 43 realiza sobre el mismo, reconoce su preexistencia.

## **II.5.2. El derecho a la libertad de expresión, la información y la comunicación en la Constitución Española**

Ya hemos apuntado que la libertad de expresión en España encuentra su basa constitucional en el artículo 20 de su Carta Magna. Vale recordar nuevamente aquí su contenido para facilitar su pertinente análisis:

### ***Artículo 20***

***1. Se reconocen y protegen los derechos:***

***a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.***

***b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.***

***c) A la libertad de cátedra.***

***d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.***

***2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.***

***3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.***

***4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.***

*5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.*

Tal como señala Sánchez de Diego, la redacción del artículo 20.1 “no ayuda a su comprensión. A simple vista, por un lado, parece agrupar libertades heterogéneas y, en otro sentido, puede antojársenos reiterativo. ¿Qué tiene que ver la libertad de cátedra con la libertad a la producción artística? ¿No vienen a decir prácticamente lo mismo el párrafo 1.a) y el 1.d)”<sup>93</sup>.

Razonadamente, Sánchez de Diego nos convoca a la reflexión sobre la lectura particular del mencionado artículo: “De la redacción de este artículo nos surgen múltiples preguntas ¿Quién es el titular de este derecho? ¿No dice prácticamente lo mismo el apartado a) y el d)? ¿En este párrafo existe uno, dos o varios derechos diferentes? ¿Qué pinta aquí la libertad de cátedra? Una primera interpretación distingue los apartados a) y d) en función del tipo de mensajes. Se trata de una interpretación gramatical: por un lado pensamientos, ideas y opiniones; por otro, información veraz. Tanto los pensamientos e ideas, como las opiniones, tienen su origen en una vivencia interior, mientras que las informaciones reflejan un hecho, una realidad exterior. Por ello, esta hipótesis mantendría que el párrafo a) del Art. 20.1 ampararía la comunicación de pensamientos, ideas y opiniones básicamente ideas y juicios, mientras que el d) lo haría con las noticias. Es esta la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional Español en más de ciento veinte resoluciones. Sirva de ejemplo la sentencia de 21 de enero de 1988 cuando al referirse los apartados a) y d) del artículo 20.1 dice: “...que, aunque algunos sectores doctrinales hayan defendido su unificación o globalización, en la CE se encuentran separados. Presenta un diferente contenido y es posible señalar también que sean diferentes sus límites y efectos, tanto ad extra como ad intra, en las relaciones jurídicas”<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”. Revista Diálogos de la Comunicación. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. N° 82. Septiembre- Diciembre 2010. Pág. 4.

<sup>94</sup> Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel “La función pública de la información como derecho fundamental”, en Pérez Herrero, Julio César y otros: La Teoría de la Información y de la Comunicación en el marco de Bolonia: un manual. Páginas 69 a 88. Editorial Universitas, 2009 (CL) ISBN 978-84-7991-252-9.

También explica Sánchez de Diego que en el artículo 20 de la Constitución Española, “la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor. El derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, en cambio, sobre hechos o, tal vez:

1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. Un confuso artículo de la Constitución Española más restringidamente, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables”.

Esta interpretación presenta, conforme aporta el Prof. Sánchez de Diego varios problemas:

1. La dificultad de encontrar mensajes de ideas, opiniones o hechos en estado puro
2. La estructura del propio párrafo 1º del artículo 20
3. La última frase del apartado d)

En el día a día, las opiniones, los pensamientos y las noticias no se encuentran en estado puro. Lo habitual es que en un mensaje se encuentren ideas, hechos, opiniones entremezclados. Así lo reconoce el propio Tribunal Constitucional en la citada sentencia, cuando dice: “Es cierto que, en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en narración de hechos y, a la inversa... Esto aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para calificar tales supuestos

y encajarlos en cada uno de los supuestos del Art. 20, al elemento que en ellos aparece como preponderante<sup>95</sup>".

“La Constitución de 1978 conecta por una parte con la tradición constitucional española del siglo XIX; no en vano se produjeron cuatro constituciones natas, Constitución de 1812, Constitución de 1837, Constitución de 1845, Constitución de 1870, además de dos *non natas* o de muy escasa vida, como fueron las constituciones de 1869, 1876 y ya en el siglo XX, la de 1931. En todas ellas se reconoce la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, aun admitiendo una continuidad con el constitucionalismo español, la Constitución de 1978, en lo que se refiere al derecho de la información, hay que situarla en una línea diferente, más cercana a la nueva doctrina de derechos humanos de los textos internacionales de Naciones Unidas y Consejo de Europa, y a las constituciones alemana – Ley Fundamental de Bonn de 1949, art. 5- e italiana de 1947, en su artículo 21”, sostiene Ana Azurmendi<sup>96</sup>.

La jurisprudencia sostiene en forma reiterada que “el art. 20 de la Norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza un interés constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas”. (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

---

<sup>95</sup> Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel “La función pública de la información como derecho fundamental”, en Pérez Herrero, Julio César y otros: La Teoría de la Información y de la Comunicación en el marco de Bolonia: un manual. Páginas 69 a 88. Editorial Universitas, 2009 (CL) ISBN 978-84-7991-252-9.

<sup>96</sup> Azurmendi, Ana. “Derecho de la información. Guía Jurídica para profesionales de la Comunicación”. Ediciones EUNSA. 1997, Pág. 55.

“Normalmente, la libertad de expresión encuadrada en el artículo 20.1.a) CE ha quedado asociada al campo informativo, pero su implicación en el ámbito comunicacional es una de las muchas posibles implicaciones que se derivan de la libertad de expresión como corolario de la libertad ideológica<sup>97</sup>”, afirma Abad-Alcalá.

El Tribunal Constitucional Español sienta las pautas interpretativas de la aplicación del artículo 20 de la Constitución, como base fundamental para la ponderación de constitucionalidad. Así se ha expresado sobre diferentes aspectos del contenido del artículo 20.

Sobre el “derecho de antena”, sobre la libertad de creación de medios audiovisuales ha recordado la interpretación aplicable en la STC 73/2014<sup>98</sup>, de 8 de mayo:

: “(...) nuestra doctrina sobre el contenido y alcance de las libertades de expresión e información reconocidas en el art. 20.1 a) y d) CE, especialmente en la vertiente de lo que ha venido en llamarse “derecho de antena”, como libertad de creación de medios de comunicación. Así, en la STC 12/1982, de 31 de marzo, ya declaramos que “no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible” (FJ 3), afirmación que reiteramos, entre otras, en las SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6, y 119/1991, de 3 de junio, FJ 5, y volvimos a enunciar, de forma más precisa, en la STC 31/1994, de 31 de enero, FJ 7, al sostener que “la Constitución al consagrar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción [art. 20.1 a) CE] y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) CE], consagra también el derecho a crear los medios de comunicación indispensables para el ejercicio de estas libertades”.

---

<sup>97</sup> ABAD-ALCALA, Leopoldo. “Sistema democrático y límites a la libertad de expresión”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y el derecho a la información”. 2004. Pág. 72.

<sup>98</sup> B.O.E 135. 04/062014. Texto disponible en: <http://www.tribunalconstitucional.es/>

Ciertamente también dijimos que el derecho a crear medios de comunicación tiene un carácter instrumental, “no pudiendo equipararse la ‘intensidad de protección de los derechos primarios, directamente garantizados por el art. 20 CE, y los que son en realidad meramente instrumentales de aquéllos. Respecto al derecho de creación de los medios de comunicación, el legislador dispone, en efecto, de mucha mayor capacidad de configuración, debiendo contemplar, al regular dicha materia, otros derechos y valores concurrentes, siempre que no restrinja su contenido esencial’ (STC 206/1990, fundamento 6)” (STC 119/1991, de 3 de junio, FJ 5)”.

También es necesario destacar que la distinción presente en el artículo 20 de la Constitución Española entre libertad de expresión (art. 20.1.a) y el derecho a comunicar libremente información veraz (art. 20.1.d) es considerada en forma reiterada por el Tribunal Constitucional Español, recordándonos que<sup>99</sup>: “Este Tribunal viene distinguiendo, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre el derecho que garantiza la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene una importancia decisiva a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término “información”, en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo “veraz” (SSTC 278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 50/2010, FJ 4).

---

<sup>99</sup> Sentencia STC 79/2014, de 28 de mayo de 2014. B.O.E. 158, 24/06/2014. Texto disponible en: <http://www.tribunalconstitucional.es/>

Asimismo, el Tribunal ha subrayado que en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, y la “expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una opinión” (SSTC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5; 174/2006, FJ 3; 29/2009, FJ 2; y 50/2010, FJ 4)”.

Una de las grandes diferencias notorias entre la Constitución Española y la Constitución Argentina es que la europea en el inc. d) del artículo 20 exige la condición de “veracidad” de la información, en cambio, la americana no establece esta condición, lo que es conteste con el sistema interamericano de derechos humanos. Así el Principio 7 de la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión (CIDH, 2000) determina que:

*“Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.*

La Constitución Argentina sólo exige que la información sea “adecuada y veraz” en relación a los derechos de los consumidores como usuarios de bienes y servicios, en el *Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.*

## Capítulo III

### El derecho a la libertad de expresión en el sistema europeo y en el sistema interamericano de derechos humanos

#### III.1. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos

##### III.1.1. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en Argentina

En Argentina, el carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos aparece como indiscutible a partir de la reforma constitucional de 1994. En este sentido, el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos de la siguiente forma:

*Art. 75-. Corresponde al Congreso:*

*22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.*

*La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo*



*nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.*

*Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.*

Al conjunto de tratados, pactos, convenciones y declaraciones de jerarquía constitucional que establece el Art. 75 inc. 22 debe sumarse la Ley N° 25.778<sup>100</sup>, sancionada en 2003, que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Hemos apuntado que la discusión sobre el carácter vinculante de los derechos humanos fue zanjada por la reforma constitucional argentina en 1994. Con anterioridad a dicha reforma, la cuestión no era pacífica y diversas posturas doctrinarias y jurisprudenciales había en torno a la aplicación de las normas internacionales. En la jurisprudencia, fue un fallo emblemático, justamente en materia de la operatividad del derecho de rectificación o respuesta, que analizaremos en el presente trabajo que por mayoría determinó la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos al derecho interno argentino, aplicando los criterios de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969). Se trató del caso “Ekmekdjian c. Sofovich”<sup>101</sup>.

La existencia, funcionamiento y consolidación del sistema interamericano de derechos humanos y el estatus constitucional de los tratados de derechos humanos han producido una consolidación del Estado de Derecho que ha revolucionado la aplicación del Derecho mismo.

Así, el Dr. Hitters, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de

---

<sup>100</sup> Ley 25.778, sancionada: agosto 20 de 2003. Promulgada: septiembre 2 de 2003. B.O.: 3 de septiembre de 2003.

<sup>101</sup> Fallos 315:1492, L.L. 1992-C-543.

Buenos Aires, destacado docente y doctrinario, que se ha especializado en la temática del impacto del sistema interamericano de derechos humanos en el ordenamiento jurídico argentino resalta: "Hace algunos años hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias jurídicas en general, y del derecho internacional en particular, imaginar que las "directivas" emitidas por entes cuasi judiciales y judiciales — en el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos— podrían "meterse" en la corriente sanguínea de los distintos países con tal fuerza como para lograr trastocar sensiblemente las normas locales.

Podemos señalar desde ese punto de mira que el modelo aquí abordado ha producido un doble efecto, es decir, por un lado la aparición de estos organismos trasnacionales "controladores" de la actividad de los Estados (en cualquiera de sus tres poderes) ; y por otro la incorporación de una serie de preceptos (los tratados y las convenciones internacionales) que se han colado en el ámbito nacional y que aparecen como directamente operativos (self executing).

¿Quién hubiera pensado hace apenas unas décadas en semejante evolución en favor del ser humano y contra los desbordes del Estado, que siempre resulta legitimado pasivo en estos andarieles que tramitan fuera de los limbos nacionales?. ¿A quién se le hubiera ocurrido en tal época que, por ejemplo, la propia Corte Suprema de la Nación Argentina — con muy buen tino— hubiera dicho en el Caso Simón <sup>102</sup> que el derecho local queda supeditado al Internacional de los Derechos Humanos en los delitos de lesa humanidad y que este último ejerce una especie de tutela sobre aquél; o que en el Caso Bulacio<sup>103</sup> ciertas decisiones firmes del más alto cuerpo de justicia del país (como por ejemplo la prescripción de la acción penal) pudieran derretirse al acatar pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

De ahí entonces que resulta menester recortar el rostro del nuevo sistema para verlo

---

<sup>102</sup> Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "Simon, Julio H. y otros", sent. 14-junio-2005, comentado por Gregorio Badeni, LA LEY, 2005-D, 639.

<sup>103</sup> Véase Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción", E.224.XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004, LA LEY, 2005-B, 161.

con nitidez y comprender a cabalidad estos notables y plausibles adelantos y reacomodamientos que han aparecido a raíz de la jurisprudencia parida por ejemplo por los órganos del Pacto de San José de Costa Rica; por supuesto sin olvidar en tal sentido las decisiones de los organismos de la ONU, de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Tribunal de la Unión Europea, las que directa o indirectamente vienen ejerciendo una notable influencia en el sector interno”<sup>104</sup>. Nótese aquí la importancia que la doctrina y ya veremos también la jurisprudencia argentina, otorga a los precedentes europeos.

Esta influencia de los tratados internacionales de derechos humanos en el Derecho de los Estados que lo adoptan es de tal impacto que incluso ha determinado, en el ámbito interamericano la reforma de una Constitución, como lo fue la Constitución de Chile en su artículo 19 a partir del fallo pronunciado por la Corte Interamericana, “Olmedo Bustos y otro vs. Chile<sup>105</sup>”, conocido como el caso “La última tentación de Cristo” y que más adelante analizaremos por su impacto asimismo en el alcance interpretativo del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

De esta manera, el impacto sobre el Derecho de los Estados Parte es altamente positivo, en tanto amplía la protección de las libertades fundamentales del ser humano, con independencia en el país en el que se encuentre.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el *corpus juris* de los derechos humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenidos y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones), de ahí que su evolución dinámica haya ejercido tan importante impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Añadió, que se debe adoptar un

---

<sup>104</sup> Hitters, Juan Carlos. “Los tribunales supranacionales”, publicado en LA LEY, 16 de agosto de 2006, Buenos Aires, Tomo 2006-E, 817.

<sup>105</sup> Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de fondo de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73

criterio adecuado para considerar las cuestiones que se le planteen, en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona en el derecho internacional contemporáneo <sup>106</sup>.

Esto significa que el principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación se erige como "un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia internacionales. "En la etapa actual de la evolución del Derecho Internacional el principio fundamental de igualdad y de no discriminación ha ingresado en el dominio del *ius cogens*, sobre el que descansa el andamiaje jurídico del orden público internacional y nacional y permea todo el ordenamiento jurídico"<sup>107</sup>.

De forma reiterada en la jurisprudencia que aquí analizaremos en relación a la libertad de expresión, y en general en otros pronunciamientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en cuenta que la obligatoriedad de lo normado en el Pacto de San José de Costa Rica para sus Estados Parte, surge asimismo de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, que obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1); debiendo "adoptar" las respectivas disposiciones internas al Pacto de San José (art. 2).

En este sentido, según la Corte, para cumplir con el mandato del art. 2 de la Convención, es necesario:

- 1) el dictado de normas y
- 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades en su texto.

---

<sup>106</sup> Caso "Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay" (cit.) párr. 128. Idem Caso "Tibi". Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C N° 114, párr. 144; Caso de los "Hermanos Gómez Paquiyauri". Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C N° 110, párr. 164; Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C N° 63, párrs. 192 y 193; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A N° 16, párr. 114.

<sup>107</sup> Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 101.

Por lo expuesto, resulta obligatorio para los Estados Parte, suprimir los preceptos y las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías previstas en la Convención<sup>108</sup>. "Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del *effet utile*), para el cual el Estado debe 'adaptar' su actuación a la normativa de protección de la convención<sup>109</sup>".

También la Corte Interamericana ha sostenido en forma inveterada que "en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías, y Estado de Derecho, constituyen una tríada", en la que cada componente se describe completa, y adquiere sentido, en función de los otros, criterio ratificado en cada momento<sup>110</sup>.

Por su parte, en reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se ha pronunciado sobre la armonía o concordancia entre los tratados y la Constitución como juicios de los constituyentes. "En efecto, así lo han juzgado al hacer referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución, pues esto sería un contrasentido insusceptible de ser atribuido al Constituyente, cuya imprevisión no cabe presumir"<sup>111</sup>.

### **III.1.1.2. Carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos en España**

---

<sup>108</sup> Caso "Yatama vs. Nicaragua" párr. 120; Caso "Caesar". Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C N° 123, párr. 91; Caso "Lori Berenson Mejía". Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C N° 119, párr. 219; Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112, párr. 206; y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 101. párr. 78.

<sup>109</sup> Hitters, Juan Carlos. Hitters, Juan Carlos. "Los tribunales supranacionales", publicado en LA LEY, 16 de agosto de 2006, Buenos Aires, Tomo 2006-E, 817. En su apoyo cita los siguientes antecedentes de la Corte Interamericana ya citados.

<sup>110</sup> Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño (cit.) párr. 92. Idem caso "Yatama vs. Guatemala" (cit.).

<sup>111</sup> Confr. Causas M. 399.XXXII, "Monges, Analía M. C. U.B.A.-res. 2314/95, del 26 de diciembre de 1996; C.278.XXVIII, "Chocobar, Sixto Celestino c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad", del 27 de diciembre de 1996; Petric Domagoj, Antonio c. Página 12, CS, abril 16-998, entre muchas otras.

Sostiene Biavati<sup>112</sup>: “Es difícil encontrar en los ordenamientos modernos un órgano judicial que haya contribuido al desarrollo de la Unión Europea como lo ha hecho la Corte que funciona dentro de dicho ámbito”. Añade el autor que el Derecho Comunitario — como hoy se la conoce— probablemente no existiría sin el esfuerzo eficaz y silencioso de tal cuerpo "ubicado en el palacio urbano de la periferia del Gran Ducado de Luxemburgo". Ese ejemplo, esos precedentes, esos logros previos logrados por el sistema europeo de derechos humanos fueron y son especialmente tenidos en cuenta, para su par interamericano, pero también para sus Estados Parte, con particular énfasis en Argentina, cuyas sentencias suelen tener en cuenta los aportes del Derecho europeo.

Al referirnos al sistema europeo de derechos humanos, es necesario recordar que el Consejo de Europa fue fundado en virtud de la firma del Tratado de Londres, en 1949, como una organización supranacional que tenía como principal objetivo alcanzar una mayor unidad entre sus miembros con la finalidad de salvaguardar y realizar los ideales y principios que constituían su tradición común así como facilitar su progreso económico social según establece el artículo 1.2 de su Estatuto, teniendo entre otros objetivos fundamentales, el de salvaguardar y desarrollar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Después de las aterradoras y genocidas guerras europeas, este Tratado plasmó la voluntad de los pueblos europeos de restituir ciudadanía y respeto a los derechos humanos.

En su marco, se firmó el 4 de noviembre de 1950<sup>113</sup>, en Roma, el Convenio de Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH), que implicó sentar el pilar o la base fundamental para la protección de los derechos humanos en Europa.

---

<sup>112</sup> BIAVATI, Paolo, "La Corte di Giustizia dell'Unione Europea", en Coloquio, Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas Judiciales Comparados, México, Octubre de 2005.

<sup>113</sup> Su entrada en vigor tuvo lugar al depositarse el 3 de septiembre de 1953 el décimo instrumento de ratificación ante el Secretario general del Consejo de Europa en Estrasburgo que correspondió al Gran Ducado de Luxemburgo.

Al respecto, sostiene Jimena Quesada<sup>114</sup>, lo más destacado de este sistema diseñado por el CEDH no será tanto la cantidad de derechos reconocidos sino un promotor y eficaz mecanismo de control basado inicialmente en dos órganos específicos (Comisión y Tribunal Europeos de Derechos Humanos) que vinieron a sumarse a los otros órganos ya previstos en el Estatuto del Consejo. Este sistema tutelar inicialmente tenía a la Comisión y al Tribunal como órganos competentes para la interpretación y aplicación del CEDH, sin que los ciudadanos particulares dispusiesen de legitimación activa para deducir la oportuna demanda a fin de denunciar la existencia de una violación del Convenio. Su desarrollo con el paso de los años y las oportunas modificaciones y reformas que fueron introduciéndose a la luz del constante incremento de los asuntos y la ampliación de los Estados parte, permitieron el reconocimiento a las víctimas o afectados por la violación de los derechos contemplados en el Convenio, de su legitimación para plantear la correspondiente demanda individual en exigencia de tal pretensión.

En España, el CEDH fue ratificado por el procedimiento previsto en el artículo 94 de Constitución Española y forma parte del derecho interno español con arreglo a las previsiones del art. 96.1 del texto constitucional<sup>115</sup>.

España, de este modo, como el resto de los países que han suscripto el CEDH se encuentran obligados por el contenido del mismo, especialmente a partir de 1959, fecha en la que se creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo funcionamiento, prerrogativas y miembros están regulados por el Convenio Europeo, el control sobre el cumplimiento o no de su contenido se ha hecho efectivo. El prestigio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha crecido en prestigio y constituye la máxima instancia europea para la protección de los derechos humanos.

---

<sup>114</sup> JIMENA QUESADA, L. Sistema Europeo de Derechos Fundamentales, Edic. Colex, Madrid 2006.

<sup>115</sup> Art. 96.1. Constitución Española: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”.

Si bien la Constitución Española de 1978 reconoce la libertad de expresión en el artículo 20, es importante tener en cuenta la repercusión que en el ordenamiento jurídico interno español tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<sup>116</sup>.

Si bien el texto constitucional se presenta, en principio, claro y preciso, es menester considerar las implicancias que la jurisprudencia del TEDH tiene sobre el ordenamiento español, en cuanto el artículo 10.2 de la Constitución Española otorga a los tratados internacionales valor interpretativo de las normas reguladoras de los derechos fundamentales, con lo cual el Convenio Europeo de Derechos Humanos aportará luz interpretativa en el sistema judicial español. A su vez, el artículo 45 del Convenio de Roma atribuye al TEDH la competencia para interpretar los preceptos del Convenio. Con este doble reenvío, se concluye que la jurisprudencia del TEDH ha adquirido una eficacia interpretativa de trascendental importancia en relación a la regulación constitucional de los derechos fundamentales y las libertades públicas reguladas en la Constitución Española. Por ello será común encontrar en los fundamentos jurídicos del Tribunal Constitucional remisiones continuas y basamentos en la jurisprudencia del TEDH. Este sería un tema muy interesante para indagar e investigar, y aunque no es el objeto propio del presente análisis, se cree necesario traerlo como reflexión y consideración particular.

De este modo, la impronta del Convenio de Roma en el derecho interno de los Estados Parte es fundamental, de tal modo que “la jurisprudencia del Tribunal Europeo ha

---

<sup>116</sup> Se cree oportuno recordar los términos del Artículo 20 de la Carta Magna, en la parte pertinente:

*Art. 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos:*

- a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.*
- d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.*
- 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.*
- 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.*
- 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.*



elevado notoriamente los niveles de protección de los derechos humanos efectivamente vividos en Europa”<sup>117</sup>.

Sin embargo, España sigue teniendo una deuda pendiente en su ordenamiento jurídico, esto es una ley orgánica, una norma, un cauce procedimental por el que se pueda realizar la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya ejecutividad ha sido objeto de un profundo debate en el seno del Tribunal Supremo Español, con particular énfasis en los últimos años. El 21 de octubre de 2014, el Pleno de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo adoptó por unanimidad un Acuerdo por el que entiende que: “En tanto no exista en el ordenamiento jurídico una expresa previsión legal para la efectividad de las sentencias dictadas por el TEDH que aprecien la violación de derechos fundamentales de un condenado por los tribunales españoles, el recurso de revisión del artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cumple este cometido”<sup>118</sup>.

### **III.2. El derecho a la libertad de expresión en los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos.**

A fin de comprender cabalmente el desarrollo y aplicación del derecho de rectificación o respuesta en Argentina y en España, se entiende necesario, así como hemos descripto el marco normativo del derecho a la información en ambos países, dar cuenta de las diferencias y semejanzas que poseen los sistemas protectores de derechos humanos interamericano y europeo, ya que sendos países pertenecen a dichos sistemas como Estados Parte.

Resulta pertinente delimitar un punto de partida, a partir del reconocimiento que ha hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 5/85, en la que ha sostenido que el artículo 13 de la Convención Americana es más generosa y amplia en su consagración del derecho a la libertad de expresión que el

---

<sup>117</sup> García de Enterría, Eduardo. “El valor en Derecho español de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Boletín del Colegio de Abogados de Madrid. Núm. 1 de 1987. Pags.9 y ss.

<sup>118</sup> <http://www.poderjudicial.es/>

artículo 10 del Convenio Europeo, así como es notorio el mayor margen de discrecionalidad que el régimen europeo otorga a los Estados miembros<sup>119</sup>.

En este marco, analizaremos si la aplicación por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del artículo 13 de la Convención Americana efectivamente se corresponde con la histórica afirmación expuesta en la Opinión Consultiva 5/85 en la que la Corte ha señalado: " (...) la comparación hecha entre el artículo 13<sup>120</sup> y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (art.10) demuestra claramente que las garantías de libertad de expresión contenidas en la Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de ideas" y que "(...) es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad de expresión mediante **vías o medios indirectos (...) encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones**. Ni la Convención Europea<sup>121</sup> ni el Pacto de Derechos Civiles<sup>122</sup> contienen una disposición comparable"<sup>123</sup>.

---

<sup>119</sup> El presente desarrollo parte del siguiente trabajo: "Los aportes del Sistema Interamericano en materia de prohibición de censura previa". Autor: Damián Loreti. Colaboradora: Analía Eliades. Publicado por la Revista CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Año I. Número I. Diciembre de 2005. ISSN 1659-2123. Págs. 75 a 83. Impresa en San José de Costa Rica, 15 de diciembre de 2005.

<sup>120</sup> Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

<sup>121</sup> Carta Europea de Derechos Humanos, Adoptada en Roma en 1950: Libertad de Expresión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. EL presente artículo no impide que los estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley que constituyan medidas necesarias, en una sociedad

Para ello tomaremos bajo análisis los casos más emblemáticos en materia de derecho a la libertad de expresión, resueltos por el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana y tratados por la Comisión.

### **III.2.1. El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos**

En primer lugar abordaremos, por su relevancia “el caso de los “niños de la talidomida” o “**asunto Sunday Times**”<sup>124</sup>, que se inicia con la publicación en el periódico británico de informaciones sobre las condiciones del acuerdo propuesto por la empresa Distillers a varias familias que habían utilizado medicamentos con talidomida durante el embarazo. El efecto de su uso fue la producción de daños irreparables en los niños que nacieron.

El diario criticaba las condiciones del acuerdo, incluso mencionaba que la oferta indemnizatoria debía ser más elevada, al mismo tiempo que cuestionaba la excesiva duración del pleito (más de seis años) sin que se hubiera llegado a una conciliación de intereses responsabilizando por ello a la empresa. En el mismo artículo, se anunciaba una próxima publicación referida al asunto.

---

democrática para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad e imparcialidad del poder judicial.”

<sup>122</sup> Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966: **Artículo 19**

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

<sup>123</sup> Corte IDH, *La Colegiación Obligatoria de Periodistas*. Arts.13 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva O C-5/85.

<sup>124</sup> “*Sunday Times v. United Kingdom*, Sentencia de TEDH de 26 de abril de 1979.

Como consecuencia de la nota, los tribunales ingleses prohibieron la difusión del siguiente artículo y sometieron por infracción al régimen de desacato al Tribunal al periódico Sunday Times.

El tribunal inferior analizó el texto proyectado para ser divulgado y entendió que de acuerdo al mismo no podía eliminarse la impresión de que la afirmación de la tesis de responsabilidad de la Distillers era manifiesta, por lo que declaró la existencia del *contempt* ya que del artículo surgía que una de las partes estaría sujeta a presiones que la exponen al peligro real de no tener una justicia imparcial. En base a estas consideraciones se prohibió al periódico publicar la nota en tanto se planteaba una tentativa deliberada de influir en el proceso.

Posteriormente la instancia de apelación levantó la prohibición de publicar impuesta al *Sunday Times* en virtud de la improcedencia alegada de la tentación de evitar la publicación de algo que estaba en dominio del conjunto de la sociedad por la repercusión del caso. Esta decisión fue recurrida ante la Cámara de los Lores y la prohibición fue confirmada.

En la Cámara de los Lores se mantuvo la orden de no publicar, entendiendo al respecto Rosa Rodríguez Bahamonde que “(...) *el derecho del Contempt no tiene como finalidad proteger los derechos de las partes en litigio, sino impedir las negligencias en la administración de justicia ... No se debía restringir la libertad de expresión en otra medida que no fuera ésta, pero tampoco se podía dejar que perjudicase a la administración de justicia ... el derecho del Contempt estaba destinado a preservar la autoridad de los Tribunales y a impedir las injerencias injustificadas, teniendo en cuenta el interés público en la libertad de expresión y no estableciendo otras restricciones que las absolutamente*

*necesarias ... .. Un Tribunal no constataría el Contempt más que ante un riesgo serio, real o importante de prejuicio ...”.*<sup>125</sup>.

La demanda ante el sistema europeo fue presentada por el editor, el redactor jefe y un grupo de periodistas del *Sunday Times* contra el Reino Unido. Dicha presentación ante las instancias supranacionales se apoyaba en solicitar la declaración de violación al Art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a causa de la prohibición de publicar, además de cuestionar la compatibilidad del régimen del “contempt” con el citado artículo 10.

La petición ante el Tribunal fue promovida previamente ante la Comisión Europea en enero de 1974, reclamando además la necesidad de reformar la legislación interna para asegurar la concordancia del derecho del “contempt” con el Convenio.

Posteriormente, el TEDH indica que el corpus en debate era el examen de la decisión que pone fin al juicio en los tribunales nacionales, es decir, si de la decisión de la Cámara de los Lores se deriva violación del Convenio, sin entrar a estudiar la indeterminación del derecho del “contempt”.

Por lo tanto, el Tribunal centró su análisis en determinar si la injerencia de los poderes públicos en la libertad de expresión supone o no una violación del artículo 10.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH).

El marco contextual para estos análisis es el listado de excepciones que prevé el artículo 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, vale decir:

- a) si responde a las finalidades establecidas como legítimas en el propio convenio;
- b) Si está prevista en la ley;
- c) Si cumple con el principio de necesidad de la medida en una sociedad democrática.

---

<sup>125</sup> RODRÍGUEZ BAHAMONDE, Rosa; “El Secreto del Sumario y La Libertad de información en el Proceso Penal”; Ed. Dickinson, España, 1999, pp. 144 y 145.

En este contexto, ni siquiera los peticionantes cuestionaron que el derecho del “contempt” estuviera destinado a proteger la administración de justicia. Antes bien, todas las partes reconocían –al menos en teoría- que está destinado también a proteger a quienes intervienen en el juicio, con excepción de la posición mayoritaria de la Comisión que le daba la primera interpretación.

El Tribunal compartió esta postura diciendo que en tanto se garantice la autoridad e imparcialidad del poder judicial, el respeto a los derechos de las partes viene implícitamente reconocido. Razón por la cual estimó que la prohibición de publicación del proyecto de artículo respondía a una de las legítimas razones previstas en el 10.2 de la Convención.

Ahora bien, en cuanto a la discusión sobre si era una restricción necesaria para garantizar la autoridad del poder judicial, el tribunal ponderó los extremos de la palabra “necesaria”. No se considera la “necesidad” como admisible, indispensable, imprescindible, conveniente o útil, sino aquélla que garantiza los fines para los cuales ha sido prevista la restricción, responde a una necesidad social imperiosa y que implique la menor afectación posible a la libertad de expresión.

Y, por supuesto, este análisis se hace de acuerdo a los patrones del Convenio Europeo y no de las legislaciones nacionales ni en los motivos en los que se hubieran fundado su sanción.

Analizando el fallo dice Aurora Romero Coloma: “Tras afirmar las posibilidades del tribunal nacional de fundar en tales principios una decisión tendiente a resguardar la autoridad del poder judicial, el TEDH resuelve que en el caso concreto, tras analizar el proyecto de artículo en sí, que las medidas adoptadas no se corresponden con una necesidad social imperiosa como para que sea preferido frente al interés público. Según el tribunal, el artículo hubiera tenido efectos distintos en los lectores si se hubiera publicado. Por tanto, incluso si hubiera podido conducir a ciertas personas a formarse una opinión sobre el problema de la negligencia, ésta no hubiera tenido consecuencias adversas para la autoridad

del poder judicial, ya que una campaña a nivel nacional se estaba llevando a cabo durante todo este tiempo, como ya se había señalado”<sup>126</sup> .

En particular, determina el Tribunal Europeo que la medida no fue proporcionada al fin legítimo alegado, por una mayoría estricta de 11 a 9 votos, admitiendo la demanda contra el Reino Unido por violación al artículo 10 del Convenio.

A los efectos de nuestro estudio comparado, notamos particularmente que el Tribunal Europeo admitió que la prohibición previa de la publicación era admisible en virtud del fin legítimo alegado en el marco del artículo 10.2 de la Convención Europea, aún cuando no hubiera una necesidad social imperiosa que permitiera ratificar la medida.

Más adelante contrastaremos esta posibilidad con la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana que da nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El segundo de los casos a los efectos de este breve estudio comparativo es el caso “**Wingrove.v. Reino Unido**”<sup>127</sup>, en el que el Tribunal Europeo recibió incluso –por su propio pedido – presentaciones de las ONGs Interights y Artículo 19 en las que aportaron elementos sobre el mérito de la cuestión en debate.

Las circunstancias fácticas se basan en la redacción de un guión y dirección de un trabajo audiovisual denominado “Visiones de Éxtasis”, de aproximadamente dieciocho minutos de duración y sin diálogos en su contenido. Solo música e imágenes.

De acuerdo a Nigel Wingrove, su director, la idea del film se deriva de la vida y escritos de Santa Teresa de Ávila, la religiosa de la Orden de las carmelitas que experimentó poderosas visiones extáticas de Jesucristo.

---

<sup>126</sup> ROMERO COLOMA, Aurelia María; “Libertad de información frente a otros derechos en conflicto: Honor, intimidad y presunción de inocencia”, Ed. Cuadernos Civitas, España, 2000, pp. 59, 60 y 61.

<sup>127</sup> Caso Wingrove vs. United Kingdom, Sentencia del 25 de noviembre de 1996.

El desarrollo del film se centra en una joven actriz vestida como religiosa representando a Santa Teresa haciéndose sangrar la mano y esparciendo la sangre sobre sus senos desnudos y los hábitos, además de beber vino del cáliz desde el suelo. En todo momento aparenta estar consciente. Pasada la mitad del corto cinematográfico, se muestra a Santa Teresa vestida en hábitos blancos con sus brazos atados por las muñecas por sobre la cabeza. Se aprecia una segunda figura de mujer desnuda que representa la psiquis de Santa Teresa que comienza a acariciarla. En secuencia siguientes Santa Teresa aparenta estar en una sensación erótica exquisita. Luego hay otras escenas con imágenes de quien representa a Cristo y con tomas de la actriz que representa a Santa Teresa realizando movimientos sensuales y desnudez bajo los hábitos. Finalmente toma la mano de Cristo y entrelaza sus dedos, tomándose con fuerza. Allí finaliza el film.

El Tribunal Europeo indica que con excepción del listado de los créditos finales, nada indica en las imágenes que se tratan de Santa Teresa o de otra persona o de su psiquis<sup>128</sup>.

“Visiones de Extasis” fue presentada al British Board of Film Classification a los efectos de la calificación correspondiente para su exhibición, organismo que rechazó la solicitud el 18 de setiembre de 1989 señalando que bajo la ley de “Video Recordings de 1994” el Board debe -previo a todo - determinar si la obra es apta para obtener un certificado de exhibición, teniendo especialmente en cuenta la calidad del trabajo visto en los hogares. En ese entendimiento se le manifestó que la obra era obscena de conformidad a lo dispuesto en las Obscene Publications Acts de 1959 y 1964 y que se evitaría su calificación por infringir las previsiones de la ley penal. Además de otras consideraciones, se le indicó la infracción a la legislación sobre blasfemia en la interpretación del Common Law. Por último, se agrega que no puede calificarse el conjunto de imágenes sexuales en los parámetros de una película sólo apta para mayores de 18 años, puesto que las mismas están enfocadas en la figura de Cristo<sup>129</sup>.

---

<sup>128</sup> Eur. Court H.R., *Case of Wingrove v. United Kingdom*, Judgement of 25 November 1996, parag. 15.

<sup>129</sup> *Case of Wingrove v. United Kingdom*, supra nota 10, para. 16.



Wingrove apeló en la instancia administrativa respectiva, en la cual se confirmó la decisión por tres votos a dos, tomando como base argumental las siguientes consideraciones: “Desde los escritos de la propia Santa Teresa y los subsiguientes escritos de otros, no se ve razón para dudar de que algunas de sus visiones eran de visualización del cuerpo glorificado de Cristo y sus heridas, pero, aún así, aparece claro que Wingrove se ha tomado una considerable licencia artística en este tema”.

Más adelante el Tribunal destaca un párrafo de la instancia resolutoria de la apelación. En tal sentido, se indica que el video no explora respecto de la devoción de Santa Teresa, sino que explota una devoción a Cristo puramente carnal<sup>130</sup>.

Por tales circunstancias, se resuelve, con disidencias, que el video es blasfemo y que un jurado razonable podría determinar una condena.

Así dispuesto, Wingrove recibe asistencia legal indicando que el caso no es susceptible de revisión judicial en los términos de la ley sobre blasfemia, salvo que se demostrara que cabe en las excepciones basadas en la irrazonabilidad de la decisión o que se sustenta en la falta de tratamiento de puntos legales planteados por el requirente de la calificación, pero no en ella misma.

Agotados los recursos internos, Wingrove recurre a la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1990 reclamando que la denegatoria del certificado de calificación se produce violando su libertad de expresión en el marco del artículo 10 de la Convención.

La Comisión decide por catorce votos a diez que sí hay violación al artículo 10, por lo que el caso es remitido al Tribunal Europeo. Wingrove reclama que las leyes sobre blasfemia del Reino Unido no son ni en teoría ni en la práctica “necesarias” en una democracia multicultural.

---

<sup>130</sup> *Case of Wingrove v. United Kingdom*, supra nota 10, para. 19.

En el tratamiento del fondo del tema y poniendo bajo análisis la presencia en el caso de los tres requisitos de legalidad, legítima finalidad y necesidad en la sociedad democrática, el Tribunal encuentra que:

a) la interferencia del Estado está previamente determinada por la ley ya que el rechazo por el British Board of Film Classification está legalmente sustentado ya que el organismo actuó dentro de los límites fijados por la 1984 Act y que en el Derecho inglés el concepto de blasfemia está suficientemente explicitado por la ley y el Common Law.

b) fue discutido si la interferencia del Estado persiguió en este caso un fin legítimo. El Estado de Gran Bretaña señaló que se denegaba la certificación para proteger el derecho de los ciudadanos a no ser ofendidos en sus sentimientos religiosos. Aquí el Tribunal Europeo entiende que el derecho de los otros, tal como indica el parágrafo 2 del artículo 10 de la Convención, se corresponde con el fin legítimo que dice defender la ley de blasfemia, así como es consistente con el derecho a la libertad religiosa prevista en el artículo 9 del mismo cuerpo legal.

En punto a tratar si la interferencia fue necesaria en una sociedad democrática, el Tribunal tuvo en cuenta que entre las responsabilidades y deberes del Art. 10.2 legítimamente pueden incluirse los referidos a la obligación de evitar expresiones relativas a los objetos de veneración gratuitamente ofensivas a otros así como las profanatorias<sup>131</sup>.

En el mismo sentido, observa que la denegación del certificado fue decidida con la intención de proteger el derecho de los demás y, más específicamente, la de proteger contra ataques seriamente ofensivos en cuestiones reconocidas como sagradas por los cristianos<sup>132</sup>.

Para tal conclusión, considera que aún, en varios de los Estados europeos se mantienen leyes de blasfemia, por lo que el Tribunal concluye que no hay bases comunes para concluir que un sistema que impone restricciones a la propagación de material

---

<sup>131</sup> *Case of Wingrove v. United Kingdom*, supra nota 10, para.37

<sup>132</sup> *Case of Wingrove v. United Kingdom*, supra nota 10, para. 41

blasfemo por su condición de tal es innecesario en una sociedad democrática e incompatible con la Convención<sup>133</sup>.

Aún cuando aparece claro que el debate político no debe tener cortapisas por los Estados, el Tribunal indica que existe un margen más amplio de apreciación para regular las cuestiones de libertad de expresión en aquellas temáticas que ofenden convicciones personales íntimas en las esferas de la moral y de la religión. Más aún, para los Estados europeos no pareciera – según el Tribunal – existir consenso respecto al alcance del concepto “la protección del derecho de otros” en relación a ataques a las convicciones religiosas. Luego formula una consideración de suma importancia en lo que a la verificación de situaciones cabe: las autoridades estatales están en mejor posición que los jueces internacionales para determinar la necesidad de una restricción en atención al directo y continuo contacto con las fuerzas vitales de sus países.

Aparece claro entonces, que el Tribunal flexibiliza la aplicación de principios –en este caso- guiándose por la opinión del Estado demandado, aunque advierte que esta posición no excluye la supervisión europea posterior. En este caso, respecto a la noción de blasfemia o a los riesgos de una excesiva interferencia por parte de las autoridades.

El Tribunal asume que su tarea en el caso concreto es determinar si las razones en las que descansa la autoridad nacional para justificar las medidas de interferencia con el derecho de libertad de expresión de Wingrove son relevantes y suficientes para los propósitos del art. 10 de la Carta Europea.

Dice entonces que las autoridades nacionales hicieron uso de facultades que de por sí no son incompatibles con la Convención. Teniendo en cuenta que la gravedad de la profanación está prevista en la ley de blasfemia, así como el Common Law también determina el margen de apreciación del Estado que no ha sido desbordado en el caso, las razones dadas para justificar las medidas de la autoridad son consideradas tanto relevantes

---

<sup>133</sup> *Case of Wingrove v. United Kingdom*, supra nota 10, para. 57

como suficientes para los postulados del art. 10. 2. Agrega que habiendo visto el video, el Tribunal reconoce que la decisión de las autoridades inglesas no puede ser referida como arbitraria o excesiva.

Por tanto, define que la medida impugnada estaba justificada como necesaria en una sociedad democrática en el marco del Art. 10.2 de la Convención.

Otro caso del TEDH que consideraremos para verificar los aportes de la Corte Interamericana es el caso “**Campbell y Fell vs. Reino Unido**”<sup>134</sup>.

Si bien aquí, se ratificó el principio general de la publicidad de los juicios, también terció la excepción prevista en el párrafo segundo del artículo 10 de la Convención Europea.

En el caso, y dadas las condiciones, el Tribunal Europeo tuvo en cuenta que se juzgaba las infracciones cometidas en el penal en que estaban encarcelados los peticionantes (supuestamente vinculados al IRA).

El Tribunal sostiene que no puede dejar de tener en cuenta los factores indicados por el Gobierno del Reino Unido, en particular, por las consideraciones de orden público y problemas de seguridad que podrían estar envueltos en un proceso de disciplina carcelaria si fuera realizado en público.

Este curso de acción indudablemente ocasionaría dificultades de las mayores magnitudes que podría enfrentar un proceso ordinario. Dado el carácter de los procesos disciplinarios de este tipo, habitualmente desarrollados en el ámbito de las prisiones, las dificultades respecto de la admisión del público aparecen obvias así como la eventual televisación de la audiencia a desarrollarse.

---

<sup>134</sup> Eur. Court H.R. *Case of Campbell and Fell v. United Kingdom* Jugdement of 28 June, 1984

Si fueran desarrollados fuera de la prisión, problemas similares importaría el transporte del prisionero para atender a la audiencia. “Requerir que los procedimientos disciplinarios vinculados a los prisioneros convictos deban ser realizados en público impondría a las autoridades una carga desproporcionada”<sup>135</sup>.

Por lo tanto, el TEDH acepta que existieron razones suficientes para justificar la exclusión de la prensa y del público en el proceso seguido contra Campbell, y que no hubo violación del art. 6.1. de la Carta Europea por parte de las autoridades.

Si bien pareciera que sólo se trata de una cuestión de publicidad judicial, en verdad, la participación de la televisión o no implica también una decisión sobre la vigencia de las excepciones del párrafo segundo del artículo 10 de la Convención y la posibilidad o no, de parte de las autoridades de establecer prohibiciones a la circulación de informaciones u opiniones por razones distintas al discurso del odio.

En el caso “**Plon (Societe) vs. Francia**”<sup>136</sup> se puso en consideración la compatibilidad con el artículo 10 de la Convención de la prohibición a la distribución del libro “El gran secreto”.

El libro relata las dolencias del Presidente Mitterrand y fue escrito por su médico apellidado Gubler. El libro fue objeto de una medida cautelar y otra de fondo. Ambas llegaron a la Corte Europea de Derechos Humanos.

El objeto de la petición se apoyaba en la ruptura de la confidencialidad que debe existir entre médico y paciente. Los tribunales franceses entendieron que la distribución del libro era manifiestamente ilegal y afectaba los derechos del Presidente Mitterrand a tenor del artículo 809 del Código de Procedimientos Civiles. Al concederse la medida, se ponía énfasis en que se trataba de una medida excepcional limitada en el tiempo y que las razones

---

<sup>135</sup> *Case of Campbell and Fell v. United Kingdom*, para. 87.

<sup>136</sup> Eur. Court H.R. *Case of Plon (société) v. France*, Judgement of 18 May, 2004.

eran suficientes y relevantes dada la muerte de Mitterrand pocos días antes de la puesta en distribución.

Entendiendo que en este caso la interferencia era proporcionada dada su limitación en el tiempo y el deceso reciente, la Corte Europea resolvió que no había habido violación al artículo 10 de la Convención y que la medida podía ser vista como necesaria en una sociedad democrática.

A distinta conclusión arriba la Corte cuando revisa la resolución de fondo que en la justicia francesa mantuvo la orden de no distribución. En esta oportunidad entiende que la decisión no es acertada en la medida en que habían pasado ya largos años desde la muerte de Mitterrand, y por lo tanto el contexto era notoriamente distinto, ya que cuanto más tiempo transcurre es mayor el interés público en conocer la historia de Mitterrand, prevaleciendo ello sobre los requerimientos de proteger la información reservada bajo confidencialidad médica que ya había sido violentada.

Agrega la Corte que al momento de resolver se encontraba la información en Internet y había 40000 copias vendidas, por lo que la preservación de la confidencialidad no era un requisito a considerarse.

Finalmente, destaca que así planteada, la resolución de la justicia francesa debe ser revocada por ser desproporcionada respecto del fin legítimo que intenta proteger y por no existir una necesidad social imperiosa que la justifique.

Otro de los casos tratados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que marca jurisprudencia en el propio sistema en cuanto el libre debate de ideas en una sociedad democrática en casos en los que puede haber mensajes difamatorios se encuentra

en el **caso Lingens v. Austria** de 8 de julio de 1986, también conocido por las críticas al Canciller B. Kreisky<sup>137</sup>.

Los hechos fueron sintéticamente los siguientes: el 9 de octubre de 1975, cuatro días después de las elecciones legislativas en Austria, S. Wiesenthal, presidente del Centro de Documentación Judía, acusó al Presidente del Partido Liberal de Austria de haber servido durante la segunda guerra mundial en la primera brigada de infantería de las SS, que había tomado parte en masacres de civiles tras las líneas alemanas en Rusia. M. Peter, el aludido presidente del Partido Liberal, no negaba haber pertenecido a aquella unidad, pero afirmaba que no había estado mezclado en las atrocidades cometidas por ella.

El canciller austríaco saliente B. Kreisky había tenido reuniones en la cancillería con M. Peter, en el marco de las conversaciones habituales entre jefes de partidos a los efectos de formación del gobierno; incluso se había especulado con la posibilidad de un gobierno de coalición Kreisky-Peter. Pero las elecciones dieron la mayoría absoluta a los socialistas y no hubo necesidad de ello.

No obstante, en una entrevista concedida por Kreisky un día después de las manifestaciones de Wiesenthal sobre Peter, los periodistas le preguntaron sobre este asunto y el canciller defendió vigorosamente a Peter calificando la organización y los métodos de Wiesenthal de “mafia política” y de “métodos de mafia”. Lo que fue publicado así al día siguiente.

En relación con estas entrevistas, el periodista P.M. Lingens publicó dos artículos en la revista *Profil* de Viena. En el primero, titulado “El asunto Peter”, relataba los acontecimientos citados, contaba las actividades de la primera brigada de infantería de las SS, e informaba del papel jugado por Peter en los procesos seguidos contra miembros de esa brigada. Concluía que si Peter tenía, sin duda, derecho a la presunción de inocencia, no era menos cierto que su pasado lo hacía inaceptable como hombre político. Por otro lado, el

---

<sup>137</sup> Resolución de 8 de julio de 1986 en “Publications of the European Court of Human Rights”. Serie A. 103 (1986).

periodista arremetía contra la actitud de Kreisky de proteger a Peter por razones políticas. En cuanto a las críticas de Kreisky contra Wiesenthal, decía el informador que “viniendo de cualquier otro, se hablaría sin duda del oportunismo más detestable”.

El segundo artículo, publicado una semana después, se titulaba “Reconciliarse con los nazis, pero ¿cómo?”. Dedicaba muchas páginas a reflexionar sobre este asunto, y de vez en cuando, picoteaba sobre el canciller: “A decir verdad, no se puede refutar el comportamiento del Sr. Kreisky de manera racional, sino solamente de manera irracional: es inmoral y desprovisto de dignidad”, además, decía, de superfluo, pues los austríacos no pueden reconciliar su pasado sin buscar ganarse el favor de los antiguos nazis, minimizar el problema de los campos de concentración o denigrar a Wiesenthal explotando el antisemitismo. Seguía luego una larga exposición sobre los diferentes tipos de responsabilidades encontrables en toda esta triste historia y concluía: “si Bruno Kreisky hubiera usado su reputación personal, como lo ha hecho para proteger al Sr. Peter, para alumbrar esta distinta y mejor Austria, hubiera dado a este país – treinta años después- aquello de lo que tiene más necesidad para dominar su pasado: una mayor confianza en sí mismo”. El artículo se cerraba con una nueva referencia al affaire Peter y una última valoración a la reacción de Kreisky. Sostenía que las circunstancias del asunto hacían a Peter indigno de la función de diputado, de hombre político y de miembro del gobierno; esto, para el periodista, era “una exigencia mínima de ética política”. “La monstruosidad”, terminaba diciendo, no residía en que Wiesenthal hubiera puesto la cuestión sobre el tapete, sino en que Kreisky deseara retirarla de él.

El canciller B. Kreisky siguió una acción penal contra el periodista P.M. Lingens invocando el artículo 111 del Código Penal austríaco, que sanciona con penas privativas de libertad de seis meses o más, o una sanción pecuniaria, a quien acuse a otro de tener un “carácter o una disposición de espíritu despreciable o lo declare culpable de una actitud contraria al honor o a las buenas costumbres susceptible por su naturaleza de hacerlo despreciable a los ojos de la opinión pública o de rebajarlo ante ella”. Según el artículo 112 del mismo Código “la prueba de la verdad y la de la buena fe no se admiten sino cuando el autor invoque la exactitud del aserto o su buena fe”.



En marzo de 1979 el Tribunal Regional de Viena declaró a Lingens culpable de difamación por haber utilizado las expresiones “el oportunismo más detestable”, “inmoral” y “desprovisto de dignidad”. Tanto Lingens como Kreisky apelaron. El Tribunal de Apelación anuló las actuaciones por motivos formales y devolvió el asunto al Tribunal Regional. Este, subsanados los defectos, repitió exactamente su fallo añadiendo ahora, sobre la alegación del periodista de que lo que había publicado era verdad, la consideración de que aunque en este caso (por tratarse de opiniones) la prueba de la verdad no era posible, incumbía al legislador y no al juez hacer más fácil esa prueba.

El Tribunal de Apelación de Viena redujo en una sentencia de 1981 la sanción económica impuesta al periodista, pero mantuvo la declaración de que sus artículos eran difamatorios para Kreisky. Aparecía en esta nueva sentencia la afirmación de que la misión de la prensa consiste en comunicar informaciones, mientras que su interpretación debe dejarse ante todo a los lectores.

Cuando Lingens planteó el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión lo declaró admisible y lo remitió al Tribunal, que lo falló en una sentencia del 8 de julio de 1986.

En su resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declara contrarias al artículo 10 del Convenio Europeo, que proclama la libertad de información, las resoluciones judiciales que condenaron a Lingens por difamación.

La argumentación jurídica de la sentencia gira sobre la interpretación misma del artículo 10 del Convenio. Se admiten en él las restricciones a la libertad de expresión que sean “*medidas necesarias en una sociedad democrática*”. El recurrente planteó, por tanto, inmediatamente si la limitación de la libertad de información que supone condenar a un periodista por criticar a un político era una medida necesaria en una sociedad democrática.

El TEDH contesta en primer lugar a esta cuestión, partiendo de sus argumentaciones en las sentencias “Handyside”, “Sunday Times”, y “Barthold”, explica que el adjetivo “necesario” debe entenderse como una exigencia de que medie una necesidad social imperiosa. Aun reconociendo el margen de discrecionalidad con que cuentan los Estados que han suscrito el Convenio Europeo para apreciar esa necesidad, el Tribunal reclama para sí la competencia para determinar si la injerencia atacada es “proporcionada al fin legítimo perseguido” y si los motivos invocados para aplicarla son “pertinentes y suficientes”.

Establecida la interpretación del artículo 10.2 del Convenio en el sentido indicado, el Tribunal desarrolla su argumentación para resolver el caso en tres bloques bien definidos: primero, explica la significación jurídica de la libertad de información; segundo, tiene en cuenta el objeto de la información (personas públicas, y debate público); y tercero, determina si la información consiste en hechos o en juicios de valor u opiniones, diferencia de la que extrae consecuencias acerca de la carga de la prueba.

En cuanto a lo primero, el TEDH afirma que la libertad de expresión y de información consagrada en el artículo 10.1 del Convenio, constituye “uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno”...ello vale no solamente para las “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente y consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieran, choquen o inquieten. Así lo quiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin el que no existe sociedad democrática. Estos principios, sigue diciendo la sentencia, “revisten una importancia particular para la prensa: si no debe franquear los límites fijados en vista, principalmente, de la protección de la reputación de los demás, le incumbe, sin embargo, comunicar informaciones e ideas sobre cuestiones debatidas en la arena política, o sobre aquellas que conciernen a otros sectores de interés público”. “A su función, que consiste en difundir, se suma el derecho del público de recibir esa comunicación”.

Llegado a este punto el Tribunal Europeo rechaza de forma expresa la opinión que mantuvo el Tribunal de Apelación de Viena, de que la misión de la prensa consista en

comunicar informaciones, dejando su interpretación al lector, es decir, divulgar hechos sin valorarlos ni opinar.

El segundo aspecto que considera la sentencia es la diferente configuración que la libertad de información debe tener cuando se tratan asuntos públicos o se refiere a personas públicas. “La libertad de prensa proporciona a la opinión pública los mejores medios de conocer y juzgar las ideas de los dirigentes. Más generalmente, el libre juego del debate político se encuentra en el corazón mismo de la noción de sociedad democrática que domina el convenio entero”. De lo que se sigue que la libertad de información prevalece sobre los demás derechos individuales y, en particular, al honor, cuando se ejerce legítimamente en relación con los mencionados asuntos y personas públicas: “los límites de la crítica admisible son más anchos respecto de un hombre político, considerado en esta cualidad, que de un simple ciudadano: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos, tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; debe, en consecuencia, mostrar mayor tolerancia”.

Todo ello no significa que el honor de los hombres públicos –aun considerados en su faceta pública- carezca de protección. Pero los derechos de éstos deben balancearse con los intereses de la libre discusión de cuestiones políticas. En esa ponderación, y antes de practicarla, debe tenerse en cuenta la singular importancia de la libre información en la sociedad democrática, para determinar si su uso se ha desenvuelto dentro de los límites legítimos en que puede imponerse al derecho al honor de un hombre público. El contenido de la información y el contexto en el que se produce, esto es una controversia postelectoral, a juicio del Tribunal, en el caso Lingens-Kreisky, son elementos de valoración necesarios. Las piezas que componen el núcleo preeminente de la libre información no se exponen en la sentencia con más detalle.

El tercero y último bloque de la argumentación de la sentencia se centra en aceptar la distinción entre “informaciones” y “juicios de valor” u opiniones, que como en el párrafo 3.3.1, había rechazado la Comisión en el primer asunto Lingens. Dice la

sentencia que “ha lugar a distinguir con cuidado entre hechos y juicios de valor.....si la materialidad de los primeros se puede probar, los segundos no se prestan a una demostración de su exactitud”.

Este criterio establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens de 196 es el precedente de numerosas sentencias posteriores al mismo y se mantiene hasta la actualidad<sup>138</sup>.

Otro caso de trascendencia, en relación a la difamación de funcionarios, políticos y personajes públicos en relación a la libertad de expresión, se encuentra en el **caso Otegi Mondragon c. España**<sup>139</sup>, Demanda N° 2034/07, sentencia TEDH de 15 de marzo de 2011. El demandante alegaba que la decisión del Tribunal Supremo que le declarara culpable de injurias graves al Rey constituía un ataque injustificado a su derecho a la libertad de expresión con arreglo al artículo 10 del Convenio. En la época de los hechos, el Sr. Mondragon era el portavoz de Sozialista Abertzaleak, grupo parlamentario de la izquierda independentista vasca en el Parlamento de la Comunidad autónoma del País Vasco. En ese carácter, expuso la evaluación política hecha por su grupo de la situación del Diario Egunkaria. En respuesta a una cuestión planteada por un periodista, afirmó, refiriéndose a la visita del rey al País Vasco, que “esto [era] patético” y que era una “verdadera vergüenza política” que el Presidente del Gobierno vasco inaugurara el proyecto (...) con Juan Carlos de Borbón, indicando que “esta imagen valía mas que mil de palabras”. Añadió que inaugurar un proyecto con el Rey de los Españoles, que era el jefe supremo último de la Guardia civil y el jefe supremo de las Fuerzas armadas españolas, era absolutamente lamentable. Con respecto a lo acontecido durante la operación policial

---

<sup>138</sup> Entre otros casos, que toman el precedente Lingens de 1986, se encuentra: Eur. Court H.R., Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June, 1998, Reports 1998-IV, para. 46; Eur. Court H.R., Case of Bowman v. The United Kingdom, judgment of 19 February, 1998, caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Belgica, de 2 de marzo de 1987, Serie A no. 113. Reports 1998-I, para. 42.

<sup>139</sup> Sentencia dictada por la Sección 3ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Otegi Mondragón c. España (demanda nº 2034/07). La sentencia devino firme el 15 de septiembre de 2011, tras el rechazo de la Gran Sala de la petición de revisión presentada por el Gobierno español, cfr. Communiqué de Presse du Greffier de la Cour CEDH 186 (2011) de 12.10.2011, p. 3. 3

contra el Diario Egunkaria, añadió que el Rey era el jefe de los que habían torturado a las personas detenidas en el marco de dicha operación. Se expresó en estos términos:

*“¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en día en Bilbao con el Rey español, cuando el Rey español es el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia?”*

Mediante dos sentencias del 31 de octubre de 2005, el Tribunal Supremo, en primer lugar, casó la sentencia dictada por la jurisdicción a *quo* basándose en numerosas referencias a la jurisprudencia del Tribunal y, en segundo lugar, condenó al demandante a una pena de un año de prisión, a la suspensión del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena y al pago de las costas, como autor penalmente responsable de un delito de injurias graves al Rey. El Tribunal Supremo consideró que las observaciones controvertidas eran juicios de valor y no declaraciones sobre hechos. Estas declaraciones, calificadas de “oprobiosas” por el Tribunal a *quo*, expresaban un menosprecio del Rey y la institución que representa, afectando al núcleo último de su dignidad, al atribuirle una de las manifestaciones delictivas más graves en un Estado de Derecho. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión había sido, por tanto, contrario al principio de proporcionalidad e innecesario, traspasando el límite a partir del cual se puede considerar que estamos en presencia de críticas hirientes y ofensivas. El Tribunal Supremo observó también que el contexto en el cual las afirmaciones se habían hecho no cambiaban en nada su carácter ofensivo. Por una parte, las denuncias por malos tratos de los detenidos en el marco de la operación contra el Diario *Egunkaria* se habían archivado por falta de pruebas. Por otra, las manifestaciones denunciadas no podían interpretarse como una reacción o una respuesta a un debate político con el Rey. Habida cuenta de la gravedad de las manifestaciones injuriosas y de la voluntad del demandante de hacerlas públicas, el Tribunal Supremo fijó la pena de un año de prisión.

El demandante interpuso un amparo ante el Tribunal Constitucional español, que lo declaró inadmisile, por carecer manifiestamente de contenido constitucional. Señaló que el derecho a la libertad de expresión no incluye el derecho al insulto. Recordó a este respecto

que la Constitución no prohíbe el empleo de expresiones ofensivas en cualquier circunstancia, pero la libertad de expresión no protege las expresiones vejatorias que, independientemente de su veracidad, sean ofensivas, ignominiosas y no pertinentes para expresar las opiniones o información en cuestión. Finalmente, estimó que la ponderación de los diferentes derechos en conflicto había sido realizada de manera adecuada por la sentencia del Tribunal Supremo, en la que se había concluido que las manifestaciones litigiosas eran desproporcionadas teniendo en cuenta el contexto en el cual se habían pronunciado, el carácter público del acto, el interés público del asunto en cuestión (la práctica de la tortura) así como el carácter público de las personas afectadas (un representante político y el Rey).

Llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, éste analiza el derecho interno e internacional pertinente, repasando el marco constitucional español y la legislación nacional aplicable.

En su apreciación, el Tribunal Europeo, sostuvo:

“44. No hay controversia entre las partes sobre que la condena del demandante constituye una “injerencia de las autoridades públicas” en su derecho a la libertad de expresión. Similar intromisión infringiría el Convenio si no cumple las exigencias del apartado 2 del artículo 10. Procede pues determinar si “estaba prevista por la ley”, inspirada por uno o más de los objetivos legítimos previstos en dicho apartado y “necesaria, en una sociedad democrática” para alcanzarlos.

a) “Prevista por la ley”

45. El Tribunal constata que la condena del demandante tiene por fundamento jurídico el texto del artículo 490 § 3 del Código penal, que castiga la injuria hecha al Rey. En cuanto a la cuestión de si esta disposición fue aplicada por los órganos jurisdiccionales del caso con el fin de defender el régimen monárquico, como lo sugiere el demandante, hasta el punto de reducir la previsibilidad de la norma jurídica aplicable, es una cuestión vinculada en realidad a la pertinencia y a la suficiencia de los motivos elegidos por los órganos jurisdiccionales internos para justificar la injerencia controvertida en el derecho a la libertad

de expresión del demandante; el Tribunal lo examinará en consecuencia en el marco de la evaluación de la “necesidad” de ésta.

46. El Tribunal concluye que la injerencia controvertida “estaba prevista por la ley” según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del Convenio.

b) Objetivo legítimo

47. Según el Tribunal, la injerencia perseguía uno de los objetivos enumerados en el artículo 10 § 2: la “protección de la reputación o los derechos de otros”, en este caso del Rey de España.

c) “Necesario en una sociedad democrática”

I. Principios generales

48. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 10, ampara no sólo para la “información” o las “ideas” recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que ofenden, chocan o perturban: así lo demanda el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una “sociedad democrática” (*Handyside c. el Reino Unido*, 7 de diciembre de 1976, § 49, serie A n 24, *Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. Francia* [GC], Nos. 21279/02 y 36448/02, § 45, CEDDH 2007 - XI, y *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suiza* (n 2) [GC], n 32772/02, § 96, CEDDH 2009 -...). Tal como consagra el artículo 10, esa libertad se combina con excepciones que requieren no obstante una interpretación restrictiva, y la necesidad de limitarla debe encontrarse establecida de manera convincente.

49. El adjetivo “necesaria”, según lo dispuesto en § 2 del artículo 10, implica una “necesidad social imperiosa”. El Tribunal tiene pues competencia para pronunciarse en último término sobre si una “restricción” es compatible con la libertad de expresión que protege el artículo 10.

El Tribunal no tiene por tarea, cuando efectúa su control, sustituir a los órganos jurisdiccionales internos competentes, pero sí comprobar desde el punto de vista del artículo 10 las decisiones que dictaron en virtud de su poder de valoración. No debe limitarse, por tanto, a analizar si el Estado demandado usó este poder de buena fe, con cuidado y de manera razonable: debe considerar la injerencia controvertida a la luz del

conjunto del asunto para determinar si “es proporcionada al objetivo legítimo perseguido” y si los motivos alegados por las autoridades nacionales para justificarlo parecen “pertinentes y suficientes”. Así, el Tribunal debe convencerse de que las autoridades nacionales han aplicado las normas conforme a los principios consagrados al artículo 10 y si al hacerlo, además, se basaron en una apreciación aceptable de los hechos relevantes (véanse, entre otras muchas, las sentencias *Mamère c. Francia*, n 12697/03, § 19, CEDDH 2006 - XIII, y *Lindon, Otchakovsky-Laurens y July*, antes citado, § 45).

50. El artículo 10 § 2 apenas deja lugar para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y el debate político -en el cual la libertad de expresión reviste la más alta importancia- o de las cuestiones de interés general. Preciosa para todos, la libertad de expresión lo es muy especialmente para un cargo electo del pueblo; representa a sus electores, manifiesta sus preocupaciones y defiende sus intereses. Por consiguiente, las injerencias en la libertad de expresión de un parlamentario obligan al Tribunal a realizar un control más estricto (*Castells c. España*, 23 de abril de 1992, § 42, serie A n° 236).

Además, los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un hombre político, contemplado en este carácter, que los de un particular: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos tanto por los periodistas como por el conjunto de los ciudadanos; debe, por lo tanto, mostrar una mayor tolerancia (*Lingens*, antes citado, § 42, *Vacío Aizsardzības Klubs c. Letonia*, n 57829/00, § 40, 27 de mayo de 2004, y *Lopes Gomas DA Silva c. Portugal*, n 37698/97, § 30, CEDDH 2000 - X). Tiene ciertamente derecho a ver protegida su reputación, incluso fuera del marco de su vida privada, pero los imperativos de esta protección deben ponderarse con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de expresión requieren una interpretación restrictiva (véase, en particular, *Pakdemirli*, antes citado, § 45, y *Artun y Güvener c. Turquía*, n° 75510/01, § 26, 26 y de junio de 2007)."

Asimismo, el TEDH tuvo en cuenta que en el caso las manifestaciones controvertidas no cuestionaban la vida privada del Rey (véase, *a contrario*, *Normal Verlags GmbH c. Austria* (n 2), n° 21277/5, 4 y de junio de 2009, asunto en el cual se cuestionaban los aspectos íntimos de la vida privada del Presidente austríaco; ver también *Von Hannover*



c. *Alemania*, nº 59320/00, § 64, CEDDH 2004 - VI) o su honor personal, y que no implicaban un ataque personal gratuito contra su persona (véase, *a contrario*, *Pakdemirli*, antes citado, § 46”.

Por último, el TEDH consideró, “en cuanto a la sanción, si bien es totalmente legítimo que las instituciones del Estado estén protegidas por las autoridades competentes en su calidad de garantes del orden público institucional, la posición dominante que estas Instituciones ocupan, obliga a las autoridades a demostrar contención en el uso de la vía penal (véase, *mutatis mutandis*, *Casstells*, antes citado, § 46; ver también los trabajos del Consejo de Europa, apartados 30 y 31 citados). A este respecto, el Tribunal destaca que la naturaleza y la dureza de las penas impuestas son también elementos que deben tenerse en cuenta cuando se trata de medir la “proporcionalidad” de la injerencia. Observa la severidad particular de la sanción pronunciada: se condenó al demandante a una pena de un año de prisión. Su condena, por otra parte, le supuso una suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento de la pena, cuando era un hombre político.

“60. Nada en las circunstancias del presente caso, donde las afirmaciones controvertidas se hicieron en el contexto de un debate sobre una cuestión que presentaba un interés público legítimo, podía justificar la imposición de una pena de prisión. Por su propia naturaleza, tal sanción produce inevitablemente un efecto disuasorio, a pesar del hecho de que se haya suspendido la ejecución de la pena del demandante. Si tal medida pudo aliviar la situación del demandante, no borra sin embargo su condena ni las repercusiones duraderas de toda inscripción en el registro de antecedentes penales (véase, *mutatis mutandis*, *Artun y Güvener*, antes citados, § 33, y *Martchenko c. Ucrania*, nº 4063/04, § 52, 19 de febrero de 2009).

61. Habida cuenta de lo que precede, suponiendo incluso que las razones alegadas por los órganos jurisdiccionales internos puedan considerarse pertinentes, no bastan para demostrar que la injerencia denunciada era “necesaria en una sociedad democrática”. A pesar del margen de apreciación de las autoridades nacionales, el Tribunal considera que la condena del demandante es desproporcionada al objetivo contemplado.

62. Por lo tanto, hay violación del artículo 10 del Convenio”.

Son múltiples las aristas que podemos tener en cuenta para el análisis de las resoluciones del Tribunal Europeo sobre el derecho a la información. Pero, uno de los hilos conductores esenciales a considerar es la argumentación que plantea el Tribunal para dirimir si se había respetado o no el artículo 10 del Convenio y es en base a la construcción de la noción de **interés público**, o el **interés público informativo**. Ese concepto jurídico indeterminado ha permitido delimitar qué aspectos de la vida pública, e incluso de la privada pueden aparecer en los medios de comunicación (Lingens); en atención al interés público informativo se considera lícita la difusión de unas noticias comprometedoras para las instituciones públicas (Sunday Times, The Observer and The Guardian); a la vez, en nombre del interés público informativo se limita la difusión de unos contenidos en función de las peculiaridades del público a quienes se dirigen –niños y adolescentes, (Handyside); el interés público informativo interviene no sólo en el contenido sino también en la forma en que se realiza la difusión de información (Jersield).

Si bien el Tribunal no define qué es el interés público informativo, sí ofrece unas pautas para comprenderlo como elemento integrante de cualquier valoración de la comunicación desde una perspectiva de “lo justo”. Así, el mismo estará presente mientras se ofrezca la información necesaria en una comunidad social y política para que el ciudadano se sienta partícipe de su devenir; la universalización de la sociedad contemporánea –de su economía, del derecho, de las artes y la cultura- ha supuesto también una universalización del interés informativo. Los medios de comunicación se hacen así imprescindibles en esa ampliación del horizonte social de cada hombre.

La trascendencia pública y la actualidad concurren como características exigidas a la comunicación periodística, imponiéndose así no sólo como exigencias profesionales y deontológicas del ejercicio del periodismo, sino también valoradas especialmente en la interpretación jurídica.

### III.2.2. El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Veamos entonces cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, han resuelto impugnaciones que se hicieron a decisiones de autoridades públicas gubernamentales o judiciales que ordenaron prohibiciones previas a la difusión de materiales filmicos o periodísticos.

En el caso “**La última tentación de Cristo**”<sup>140</sup>, se llevó la demanda a la Corte Interamericana como resultado de “la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película por la Corte Suprema de Chile con fecha 17 de junio de 1997”<sup>141</sup>.

Los hechos del caso se apoyan en la decisión judicial por la que se dejó sin efecto la Resolución del Consejo de Calificación Cinematográfica que admitió la exhibición de la película, no sin reconsideración administrativa previa.

Dicha medida fue ratificada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema de Chile.

Cabe recordar que el artículo 19 número 12 de la Constitución Política de Chile de 1980 establecía un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica que el Presidente Frei<sup>142</sup> intentó cambiar por un sistema de calificación

---

<sup>140</sup> Corte IDH. Caso “*La Última Tentación de Cristo*” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de fondo de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73

<sup>141</sup> Caso “*La Última Tentación de Cristo*” (Olmedo Bustos y otros), *supra* nota 20, parr.2.

<sup>142</sup> El Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, había presentado el 16 de abril de 1997, a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional. Tal proyecto establecía dos modificaciones al artículo 19, incisos primero y final, de la carta fundamental chilena. En el inciso primero la reforma establecía la libertad de emitir opiniones y de informar sin censura previa, lo que se extiende a las expresiones de carácter cultural y artístico. En el inciso final el proyecto reemplazaba la censura previa por un sistema de calificación en el que el destinatario de las exhibiciones cinematográficas elige si desea presenciar este tipo de espectáculos, conforme al principio de autorregulación y de libertad. El Estado chileno alegó que tal reforma constitucional podía ser acompañada de reformas a la legislación complementaria.

promoviendo una reforma constitucional a dicho articulado. Este proyecto se había tratado, pero a la fecha de la resolución de la Corte Interamericana aún no se había aprobado.

Llegado el reclamo a la Comisión Interamericana, esta concluyó que la decisión recaída en sistema judicial chileno es incompatible con la Convención Americana y viola lo dispuesto en los artículos 1(1) y 2 de la misma.

Seguidamente, la Comisión recomendó a Chile el levantamiento de la censura, y la adopción de las medidas de legislación interna para reformarla a fin de adecuarla a la Convención.

Resumidamente, en sus alegatos, la Comisión planteó que la prohibición de la película viola el artículo 13 de la Convención y que:

“d. hay tres mecanismos alternativos mediante los cuales se pueden imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión: las responsabilidades ulteriores, la regulación del acceso de los menores a los espectáculos públicos y la obligación de impedir la apología del odio religioso. Estas restricciones no pueden ir más allá de lo establecido en el artículo 13 de la Convención y no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes dictadas por razones de interés general y con el propósito para el cual fueron establecidas, tal y como lo establece el artículo 30 de la Convención (...)”<sup>143</sup> ;

f. los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a calificación con el objeto de regular el acceso de los menores de edad, tal y como lo señala el artículo 13.4 de la Convención. En el presente caso el Consejo de Calificación Cinematográfica permitió el acceso de la película a los mayores de 18 años. Sin

---

CIDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile Sentencia de 5 de febrero de 2001, (Fondo, Reparaciones y Costas), pág. 16.  
[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_73\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf)

<sup>143</sup> Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), *supra* nota 20, parr. 61

embargo, con posterioridad a esta calificación, los tribunales internos procedieron a prohibir de plano su exhibición; (...) <sup>144</sup>.

Al resolver la cuestión, la Corte Interamericana señaló sobre el fondo de la aplicación de la medida judicial que “el artículo 13.4 de la Convención establece una excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión.

En este contexto, indica que el sistema de censura previa para la exhibición y publicidad prohibió en principio la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” y luego, al recalificarla, permitió su exhibición para mayores de 18 años. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago tomó la decisión de dejar sin efecto lo resuelto por el Consejo de Calificación Cinematográfica en noviembre de 1996, siendo esta decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Chile.

La Corte Interamericana afirma que “la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” constituyó, por lo tanto, una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención” <sup>145</sup>.

También es necesario tener en cuenta un caso que si bien no llegó hasta la Corte Interamericana, sí fue tratado por la Comisión la que se expidió mediante informe N° 11/96, correspondiente al caso 11.230 de **Francisco Martorell c. el Estado de Chile** adoptado el 3 de mayo de 1996.

Los hechos del caso comienzan con la publicación del libro “Impunidad Diplomática” de autoría de Francisco Martorell y editado por la Editorial Planeta. En el

---

<sup>144</sup> Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), *supra* nota 20, párr. 61

<sup>145</sup> Caso “La Última Tentación de Cristo”. (Olmedo Bustos y otros), *supra* nota 20, párr. 71.

libro se relatan las circunstancias por las que el ex Embajador argentino en Chile Oscar Spinosa Melo debió dejar su cargo en Santiago de Chile.

Al día siguiente de la publicación, Andrónico Luksic Craig, empresario chileno nombrado por Martorell en su libro, promovió una medida cautelar pidiendo que se prohibiese la circulación del libro alegando que se violaba su derecho a la privacidad. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una "orden de no innovar" que prohibió temporalmente el ingreso, distribución y circulación del libro en Chile hasta que se adoptase una decisión definitiva sobre el caso. La Corte Suprema de la República de Chile confirmó la medida en sentencia recaída el 15 de junio de 1993<sup>146</sup>.

Posteriormente se iniciaron querellas penales contra Martorell por diversas personas por supuesta comisión de calumnias e injurias.

Tras fracasar las iniciativas para llegar a la apertura de un procedimiento de solución amistosa, y encontrándose las partes peticionaria y Estado de acuerdo en los hechos sobre los cuales se resolvería, aunque obviamente no sobre la interpretación jurídica de los mismos respecto a la compatibilidad de las decisiones con la Convención Americana, la Comisión produjo su Informe <sup>147</sup>.

Tras considerar – recordando lo dicho por la Corte Interamericana en la OC 5/85 – que el derecho a la información tiene una faz individual y otra social y que garantiza tanto el derecho a difundir como a recibir, la Comisión señala que el principio estipulado en el artículo 13 es claro en el sentido de que “la censura previa es incompatible con el pleno goce de los derechos protegidos por el mismo”<sup>148</sup>.

Destaca que la excepción es la norma contenida en el párrafo 4, que permite la censura de los "espectáculos públicos" para la protección de la moralidad de los menores y

---

<sup>146</sup> Martorell v. Chile, Caso 11.230, Informe No. 11/96, de 3 de mayo de 1996, I. Antecedentes.

<sup>147</sup> CIDH. Caso 11.230. Francisco Martorell. Chile. Informe de fondo No. 11/96 de 3 de mayo de 1996.

<sup>148</sup> CIDH. Caso 11.230. Francisco Martorell. Chile. Informe de fondo No. 11/96 de 3 de mayo de 1996. párr. 55

que la única restricción autorizada por el artículo 13 es la imposición de responsabilidad ulterior.

Posteriormente la Comisión indica que la “interdicción de la censura previa, con la excepción que prevé el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta. Esta prohibición existe únicamente en la Convención Americana. La Convención Europea y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos no contienen disposiciones similares. Constituye una indicación de la importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e ideas, el hecho de que no se prevea ninguna otra excepción a esta norma”<sup>149</sup>.

En particular, respecto a las vías de protección de los derechos a la intimidad y la honra, la Comisión entendió que las previsiones del artículo 11 de la Convención de ningún modo pueden sostener la procedencia de la violación del artículo 13 que prohíbe la censura previa.

Más aún, inequívocamente la Comisión indica que “la forma de proteger la honra que ha utilizado el Estado de Chile en el presente caso es ilegítima (porque) aceptar el criterio utilizado por Chile en el caso del señor Martorell implica dejar al libre arbitrio de los órganos del Estado la facultad de limitar, mediante censura previa, el derecho a la libertad de expresión que consagra el artículo 13 de la Convención Americana” ya que los únicos modos de proteger la honra y la intimidad deben ser aquellos que surgen del artículo 13.2 de la Convención, es decir, por medio de las responsabilidades ulteriores<sup>150</sup>.

Por último, para hacer el debido cotejo del “caso Lingens vs. Austria” de 1986 del sistema europeo, se estima pertinente traer a colación el **caso Ricardo Canese vs. Paraguay** resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 31 de agosto de 2004. Brevemente diremos que el ingeniero Ricardo Canse fue condenado

---

<sup>149</sup> CIDH. Caso 11.230. Francisco Martorell. Chile. Informe de fondo No. 11/96 de 3 de mayo de 1996. párr. 56

<sup>150</sup> CIDH. Caso 11.230. Francisco Martorell. Chile. Informe de fondo No. 11/96 de 3 de mayo de 1996. párr. 73

por la justicia paraguaya por difamación, como consecuencia de manifestaciones hechas mientras era candidato presidencial. Según los hechos denunciados por la Comisión Interamericana, en agosto de 1992, durante el debate de la contienda electoral para las elecciones presidenciales del Paraguay de 1993, el señor Ricardo Canese cuestionó la idoneidad e integridad del señor Juan Carlos Wasmosy, también candidato a la presidencia, al señalar que “fue el prestanombre de la familia Stro[e]ssner en CONEMPA” (Consortio de Empresas Constructoras Paraguayas), empresa que participó en el desarrollo del complejo hidroeléctrico binacional de Itaipú, cuyo presidente, al momento de las declaraciones, era el señor Wasmosy. Dichas declaraciones fueron publicadas en varios periódicos paraguayos. La Comisión señaló que a raíz de estas declaraciones y a partir de una querrela presentada por algunos socios de la empresa CONEMPA, quienes no habían sido nombrados en las declaraciones, el señor Canese fue procesado, el 22 de marzo de 1994 fue condenado en primera instancia y, el 4 de noviembre de 1997, fue condenado en segunda instancia por el delito de difamación a una pena de dos meses de penitenciaría y a una multa de 2,909,000 guaraníes (“equivalentes a US \$1.400”). Además, como consecuencia del proceso penal en su contra, el señor Canese fue sometido a una restricción permanente para salir del país, la cual fue levantada solamente en circunstancias excepcionales y de manera inconsistente.

La Corte Interamericana en su sentencia consideró que el Estado del Paraguay “violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 96 a 108 de la presente Sentencia<sup>151</sup>”.

En su Considerando 90, la corte Interamericana de Derechos Humanos recoge la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así:

“90. El Tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades

---

<sup>151</sup> Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia CorteIDH, 31 de agosto de 2004. Punto Resolutorio 1. F. 223.



estatales que gobernarán un Estado. La formación de la voluntad colectiva mediante el ejercicio del sufragio individual se nutre de las diferentes opciones que presentan los partidos políticos a través de los candidatos que los representan. El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos, así como disentir y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. En este sentido, el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí. Al respecto, la Corte Europea ha establecido que:

*Las elecciones libres y la libertad de expresión, particularmente la libertad de debate político, forman juntas el cimiento de cualquier sistema democrático (Cfr. Sentencia del caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Belgica, de 2 de marzo de 1987, Serie A no. 113, p.22, párr. 47, y sentencia del caso Lingens c. Austria de 8 de julio 1986, Serie A no. 103, p. 26, párrs. 41-42). Los dos derechos están interrelacionados y se refuerzan el uno al otro: por ejemplo, como ha indicado la Corte en el pasado, la libertad de expresión es una de las “condiciones” necesarias para “asegurar la libre expresión de opinión del pueblo en la elección del cuerpo legislativo” (ver la sentencia mencionada más arriba del caso Mathieu-Mohin y Clerfayt, p. 24, párr. 54). Por esta razón[,] es particularmente importante que las opiniones y la información de toda clase puedan circular libremente en el período que antecede a las elecciones”.*

Asimismo, en el Considerando 102, la Corte Interamericana vuelve a apoyarse en los fundamentos de su par europea:

“102. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido de manera consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de expresión, se debe distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando haga referencia a una persona pública como, por ejemplo, un político. Al respecto, la Corte Europea ha manifestado que:

*“Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el artículo 10, inciso 2 (art. 10-2) permite la protección de la reputación de los demás –es decir, de todas las personas- y esta protección comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de particulares, pero en esos casos los requisitos de dicha protección tienen que ser ponderados en relación con los intereses de un debate abierto sobre los asuntos políticos<sup>152</sup>”.*

El criterio sentado en el caso Canese, será fundamental para la resolución de diversos casos, entre otros, el caso **“Palamara Iribarne vs. Chile”**, sentencia de 22 de noviembre de 2005, y el caso **“Kimel vs. Argentina”**, sentencia de 2 de mayo de 2008, que implicó una condena tal para el Estado Argentino que debió modificar su Código Penal en materia de calumnias e injurias.

En el caso **“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”**, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de julio de 2004, también se tienen en cuenta especialmente los aportes del sistema europeo de derechos humanos en relación al derecho a la libertad de expresión. Así en su Considerando 113, sostiene:

“113. En iguales términos a los indicados por la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos se ha manifestado sobre la importancia que reviste en la sociedad democrática la libertad de expresión, al señalar que

*[...] la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo. Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales son las demandas del*

---

<sup>152</sup> H.R., Case of Lingens vs. Austria, para. 42.

*pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. [...] Esto significa que [...] toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue*<sup>153</sup>.

### **III.3. Conclusiones comparativas.**

Si bien de la comparación de ambas cartas de derechos humanos surgen diferencias en la consideración y alcance de los derechos de recibir, difundir e investigar informaciones por cualquier medio, notamos que las apreciaciones del sistema europeo de derechos humanos y del sistema interamericano han admitido opuestas soluciones a la aplicación de medidas preventivas y de censura por razones bien diferentes.

La principal es que si bien efectivamente la Convención Americana consigna claramente que no habrá censura previa ni restricciones indirectas, sino responsabilidades ulteriores, la Convención Europea sí permite actitudes diferentes por parte de los Estados ante ciertas circunstancias, de modo explícito.

Bajo los estándares del inciso segundo del artículo 10 de la Convención Europea, vemos cómo el principio de generalidad de los mensajes se ve ceñido por la posibilidad de sujeción a “formalidades, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática (...). Vale decir, es la propia Convención Europea la que permite esas tres soluciones (formalidades, restricciones o sanciones) en pos

---

<sup>153</sup> La Corte IDH cita como apoyo los siguientes precedentes: Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 85, párr. 152; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), supra nota 85, párr. 69; Eur. Court H.R., Case of Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria, Judgment of 13 February, 2004, para. 29; Eur. Court H.R., Case of Perna v. Italy, Judgment of 6 May, 2003, para. 39; Eur. Court H.R., Case of Dichand and others v. Austria, Judgment of 26 February, 2002, para. 37; Eur. Court. H.R., Case of Lehideux and Isorni v. France, Judgment of 23 September, 1998, para. 55; Eur. Court H.R., Case of Otto-Preminger-Institut v. Austria, Judgment of 20 September, 1994, Series A no. 295-A, para. 49; Eur. Court H.R. Case of Castells v Spain, Judgment of 23 April, 1992, Serie A. No. 236, para. 42; Eur. Court H.R. Case of Oberschlick v. Austria, Judgment of 25 April, 1991, para. 57; Eur. Court H.R., Case of Müller and Others v. Switzerland, Judgment of 24 May, 1988, Series A no. 133, para. 33; Eur. Court H.R., Case of Lingens v. Austria, Judgment of 8 July, 1986, Series A no. 103, para. 41; Eur. Court H.R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March, 1985, Series A no. 90, para. 58; Eur. Court H.R., Case of The Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 29 March, 1979, Series A no. 30, para. 65; y Eur. Court H.R., Case of Handyside v. United Kingdom, Judgment of 7 December, 1976, Series A No. 24, para. 49.

de la preservación de otros bienes jurídicos consignados en el inciso 2 en la medida en que se satisfagan los principios o requisitos de legalidad, fin legítimo y necesidad en una sociedad democrática.

En el caso de la Convención Americana, la presencia de estos requisitos será menester sólo para el caso de la aplicación de responsabilidades ulteriores. O sea que de las tres soluciones que permite la Convención Europea, sólo una fue tomada como posible para el continente americano<sup>154</sup>: la aplicación de responsabilidades post-facto.

Dicho ello, vemos cómo en los distintos casos que hemos considerado de la Corte Europea se resuelve puntualmente en base a la existencia del supuesto en el inciso 2 del artículo 10.

En “Sunday Times” el fin legítimo es la preservación de la actuación de la justicia y su autoridad e imparcialidad, al igual que en “Campbell y Fell” incluyendo en este caso la defensa del orden.

En “Plon” fue para impedir la revelación de informaciones confidenciales y en “Wingrove” los derechos de los demás.

En todos los casos, por supuesto, los tres principios o requisitos se consideraron debidamente cumplidos, aún con señalamientos del margen de actuación o interpretación que le caben a los Estados.

En el sistema interamericano estos supuestos no podrían darse ni por la inexistencia de los supuestos fácticos que avala el 10.2 de la Carta Europea ni por permitir márgenes de discrecionalidad.

---

<sup>154</sup> En tanto la Corte IDH aún no ha resuelto casos sobre la interpretación del inciso 5 del artículo 13 no nos detendremos a considerar las implicancias de la frase “estará prohibida (...)” con que se hace referencia al discurso del odio.

Es tan contundente el inicio del inciso 2 del artículo 13 de la Convención Americana cuando determina que no habrá censura, que tanto en “La última tentación de Cristo” como en “Martorell” las respuestas fueron de rechazo pleno a las cortapisas previas.

Pero además es importante enfatizar que en “Martorell” cuando se pone en crisis la interpretación sistémica del artículo 13 de la Convención por eventual conflicto con el 11, dado el planteo del Estado de Chile en orden a que el derecho al honor tendría una jerarquía mayor a la libertad de expresión, la Comisión refuta tal argumento de modo concluyente diciendo que no hay tal conflicto de bienes jurídicos entre los que haya que escoger y que no se puede dejar al arbitrio de los estados limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Lo propio ocurre con “La última tentación de Cristo”: la Corte dispone directamente la modificación de la normativa interna que permite la censura. No admite ni el más estrecho margen de interpretación por parte de los Estados.

Vemos así cómo, entonces, los cánones del artículo 13.2 CADH aparecen claramente distanciados de toda posibilidad de censura o prohibición previas.

Sobre difamación y libertad de expresión, y el debate libre de ideas en una sociedad democrática, surge, del cotejo del caso “Lingens vs. Austria”, de 1986, el caso “Otegi Mondragon vs. España” y del caso “Canese vs. Paraguay”, “Herrera Ulloa”, “Palamara Iribarne” y “Kimel vs. Argentina”, se encuentra uniformidad de criterios en cuanto a que los límites de la crítica aceptable, son, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular.

## **Capítulo IV**

### **El derecho de rectificación o respuesta.**

#### **IV.1. Antecedentes**

El derecho de rectificación no es una institución nueva ni en el Derecho ni en el campo del periodismo y la comunicación social. Con anterioridad a la actual inclusión en el ámbito de los derechos humanos y la recepción legislativa en diversos países, se encuentran previsiones y regulaciones a través de normas jurídicas de naturaleza diversa y bajo regímenes políticos heterogéneos.

Si pretendemos abordar el estudio del derecho de respuesta de una manera integral, analizando sus fundamentos, su consagración normativa, su operatividad fáctica y sus implicancias político-comunicacionales, es necesario tener presente los orígenes de este instituto y realizar una mirada retrospectiva para finalmente insertarlo en el escenario actual jurídico-comunicacional.

La Revolución Francesa, con la consagración de sus ideales libertarios y su plasmación en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 constituyó el puntapié inicial para la cristalización de la idea del derecho de respuesta.

En 1796, el gobierno francés envió a las Cámaras un proyecto de ley para el “establecimiento de la libertad de prensa y la represión de los abusos”; y durante la discusión, el diputado J.A. Delaure propuso –aunque no prosperó– el agregado tenido hoy por la doctrina como el más lejano antecedente formal en la materia.

El artículo 1º decía: “Todos los propietarios o redactores de diarios u obras periodísticas, cualquiera sea su denominación, que hubiesen publicado un artículo atentatorio a la reputación de uno o varios ciudadanos, estarán obligados a insertar la

respuesta al mismo, dentro de los cinco días que sigan a la recepción, bajo pena de clausura de los diarios u obras periódicas, y de condenárselos además a los gastos de impresión, del timbre y del franqueo postal de tres mil ejemplares de dicha respuesta”.

El artículo 2º establecía: “Los susodichos propietarios o redactores estarán también obligados, bajo idénticas penas, a entregar a cada ciudadano que se pretenda calumniado, o a quien lo represente, un recibo de la respuesta a insertar, en el cual se mencionará el número de líneas no tachadas de la misma y la fecha del día en que fue recibida”.

En 1822, se retoma la idea de Delaure, y se sanciona una ley de prensa que sería duramente atacada por ser reaccionaria y opresora de la libertad de prensa, y que en su marco, incluyó el establecimiento del derecho de respuesta en estos términos: “Los propietarios de todo diario o escrito periódico están obligados a insertar dentro de los tres días de la recepción o en el número más próximo, si éste no se publicase antes de la expiración de los tres días, la respuesta de toda persona nombrada o designada en el diario o escrito periódico, bajo pena de multa de cincuenta a quinientos francos, sin perjuicio de otras penas y daños o intereses a los que el artículo incriminado pudiera dar lugar. Esta inserción será gratuita y la respuesta podrá tener el doble de la extensión del artículo a que se refiera”<sup>155</sup>.

Es de destacar el carácter limitativo y negatorio de la libertad de prensa que contenía esta norma y que dista en mucho de la concepción actual del derecho de rectificación o respuesta. Se observa la amplitud para definir al legitimado activo en el ejercicio del derecho, pudiendo ser “toda persona nombrada o designada en el diario o escrito periódico”, sin definir en qué supuestos y ante qué tipo de información. La primitiva proposición de Delaure, en vez de corregirse, se empeora de una manera opresiva. La distancia conceptual y de contenido entre estas primeras consagraciones y la actual concepción del derecho, se convierte en un interesante punto en el cual las opiniones

---

<sup>155</sup> Artículo 11. Ley de prensa de 25 de marzo de 1822, “Derecho de Respuesta”. Ballester Eliel C. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1987.

encontradas y contradictorias, los argumentos a favor y en contra, se presentarán de manera constante.

Finalmente, con el estatuto de la imprenta, ley del 29 de julio de 1881 se afianza el derecho de respuesta con las características que hoy lo distinguen, y que aún sigue vigente a pesar de las numerosas modificaciones que ha tenido la misma.

Creemos necesario destacar que los antecedentes del derecho de respuesta no se abordan aquí como una mera reseña histórica, sino que en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia de la Nación la toma en cuenta como fuente interpretativa para sus decisiones, en este sentido, cabe transcribir las consideraciones previas que para fundar su voto, aporta el Juez Carlos Fayt en el caso “Petric c. Página 12”:

*“Que para comprender el sentido del derecho de respuesta, basta recordar que a lo largo de los siglos XVII y XVIII el debate acerca de la expresión del pensamiento se resolvió exclusivamente en la arena del antagonismo entre los individuos y el Estado. Las reivindicaciones individuales en ese campo se cristalizaron en el art. 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cuando allí se sostuvo que “la libre comunicación del pensamiento es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo individuo puede escribir, hablar e imprimir libremente”.*

*Que la idea de instaurar el derecho de respuesta aparece en Francia durante los años de la revolución, época en que la prensa escrita aumentó sustancialmente su tiraje, adquirió una diferente dimensión económica y en consecuencia incrementó su influencia. En el año VII (1796) el diputado Delaure presentó ante la “Asamblea de los Quinientos” un proyecto de ley que pretendía instaurar el derecho de respuesta a favor de los ciudadanos que hubiesen sido víctimas de “difamaciones”, con la intención de que se les permitiese expresar su punto de vista y posibilitar que el público pudiese formarse una opinión autónoma sobre el hecho informado. Los actores del debate al que se hacía alusión en el considerando anterior –el Estado y el ciudadano individual- habían aumentado y se sumaba como sujeto pasivo de la controversia con el lector, el medio de prensa.*



*Aunque el proyecto Delaure fue rechazado, la necesidad de una regulación sobre la cuestión se mantuvo latente hasta 1819, momento en el que la prensa pudo liberarse parcialmente de la “tutela estatal” que había regido su destino durante el “imperio”. Pocos años más tarde se reconoció este derecho a los particulares con una limitación genérica. En efecto, su ejercicio no podría exceder la difusa valla de “la legítima defensa”. (Considerando 17).*

Por su parte, el Dr. Vázquez, en su voto, también tomará los antecedentes del instituto en el Derecho francés, para demostrar, según él mismo expresa que el derecho de rectificación o respuesta “no es una creación antojadiza o arbitraria de las legislaciones contemporáneas”:

*“En Francia, el derecho de respuesta fue implantado por ley del 25 de marzo de 1822, y confirmado por las leyes del 29 de julio de 1881 y del 29 de septiembre de 1919.*

*Al debatirse esta ley el diputado Mestadie señaló, en la sesión del 1 de febrero de 1822, que “...el procedimiento más satisfactorio para el hombre honesto, ya sea funcionario o no y el antídoto más eficaz contra un veneno cuyo efecto es rápido, es el de poder rechazar el ultraje, empleando las mismas armas y disipar así las sospechas, en el espíritu de las personas que han leído el artículo que lo ha herido. Muy a menudo un simple desistimiento, una simple explicación, bastarán para el hombre ofendido...”.*

*Por su parte, cuando Portalis expuso los fundamentos de este derecho en la Cámara de los Pares, en la sesión del 27 de febrero, señaló que la ley que se pretendía sancionar aseguraba “...a toda persona que ha sido nombrada o designada en un diario, el derecho a insertar su respuesta. Este derecho está basado en las reglas de la más exacta justicia. Los periódicos sólo hablan a un sector de la opinión. Los lectores de una hoja no son generalmente los lectores de otra y por consiguiente la publicación se convertiría en un medio de opresión si se permitiera que se pudiera atacar la reputación de un ciudadano, sin que pueda defenderse en el mismo terreno de un agresor...”.*

A partir de la consagración de este instituto en Francia, el derecho de respuesta fue expandiéndose al resto de Europa.

Para tomar otro parámetro comparativo en los antecedentes del instituto, cabe decir que en España, una primera referencia legal en este sentido, aparece con la Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883, también conocida como Ley Gullón, promulgada durante el gobierno de Sagasta e inspirada en la ley francesa de 1881, que reconocía este derecho y establecía medios de defensa ante el incumplimiento de la inserción de la rectificación o aclaración basados, fundamentalmente, en otorgar a los Tribunales de Justicia la competencia para entender de los conflictos que por esta razón se produjesen.

Durante el régimen franquista, se reconocía el derecho de réplica mediante recurso ante la autoridad gubernativa, concretamente, el Servicio Nacional de Prensa a través de la llamada Ley de 22 de julio de 1938, cuya principal característica respecto a la Ley de 1883 consistió en el trasvase de competencia para entender sobre el conflicto deducible de una negativa de inserción de una réplica por una publicación de la jurisdicción ordinaria a la Administración, quien a partir de entonces decidiría sobre la procedencia de la inserción. El mencionado Servicio Nacional de Prensa estaba controlado por el partido único (FET de la JONS), y lógicamente, la virtualidad democrática de este derecho era nula por la propia esencia del nuevo Estado surgido de la guerra civil basado en la negación de todo tipo de derechos del ciudadano.

En 1953, estando vigente la Ley de 1938, se dicta el decreto de 13/3/1953, desarrollado por una O.M. de 25/5/1953, por el cual se regulaba de forma específica el derecho de rectificación sin que por ello pudiese deducirse que hubiesen variado en modo alguno las condiciones y el marco político generales.

En el marco también, de un régimen de facto, la Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966, o conocida como Ley Fraga, introdujo la distinción clásica del derecho francés, entre derecho de rectificación y derecho de réplica. El criterio diferenciador se basaba en la naturaleza pública o privada del sujeto activo del derecho: un depositario de la autoridad pública o bien, una persona natural o jurídica que se considere injustamente perjudicada. La Administración pública, seguía ostentando, en este caso a través del

Ministerio de Información y Turismo, la competencia para pronunciarse sobre la publicación de la réplica. No obstante, se introducía una nueva posibilidad, la de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución ministerial. De todos modos, el control preventivo de la libertad de expresión y la ambigüedad del su artículo 2º, presentaban un cuadro antagónico y contradictorio con la naturaleza de los derechos formalmente reconocidos.

A partir de la Constitución de 1978 el panorama cambia radicalmente y la protección del derecho de rectificación aparece clara con la promulgación de la Ley Orgánica 2/1984. Antes de esta ley, el Estatuto de la Radio y Televisión, regulado por la Ley 4/1980 de 10 de enero lo contemplaba para su propio y específico ámbito. El objeto del mismo era instrumentar un mecanismo de defensa frente a cualquier lesión directa y expresa de los legítimos intereses morales producida por datos o hechos concretos contrarios a la verdad y difundidos a través de una información radiofónica o televisiva<sup>156</sup>.

Deberá tenerse en cuenta que la Disposición Derogatoria de la LO 2/1984 dispuso:

*“Quedan derogados los artículos 58 a 62 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, el artículo 25 de la Ley 4/1980, de 10 de enero sobre el Estatuto de la Radio y la Televisión; los Decretos 745/1966, de 31 de marzo y 746/1966, de la misma fecha, y el número 1 del artículo 566 del Código Penal, así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley”.*

La actual regulación mediante ley orgánica de prolongada elaboración parlamentaria, tuvo su origen en un proyecto del gobierno y fue aprobada prácticamente por unanimidad<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> La disposición derogatoria de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación ha derogado el artículo 25 del Estatuto de RTVE así como también los artículos 58 a 62 de la ley 14/1966 de 18 de marzo sobre libertad de prensa, y los decretos reguladores de los derechos de réplica – Decreto 745/1966 de 31 de marzo- y 746/1966 de la misma fecha.

<sup>157</sup> Para la elaboración de este apartado sobre Antecedentes, presentado de forma sucinta, se ha consultado la siguiente bibliografía:

- Carrillo, Marc Carrillo, Marc. “Los límites a la Libertad de Prensa en la Constitución Española de 1978”. PPU. 1987, págs. 137 a 142

## IV.2. Terminología. Interpretación.

### IV.2.1. Análisis conceptual semántico

Rectificación. Respuesta. Réplica. Estos son los términos con los que suele aludirse a este derecho. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Cuál es su contenido? ¿Son equivalentes? ¿Hay diferencias entre ellas?

Por ello es necesario, como paso previo al abordaje conceptual jurídico del derecho de rectificación, analizar el significado de la rectificación como tal, y compararla con los términos réplica y respuesta, dado que la jerga periodística y el público en general, lo suelen denominar “derecho a réplica”, habiendo notorias diferencias técnicas en los términos desde el punto de vista jurídico.

Así, según el Diccionario de la Real Academia Española:

***Rectificación***: “Acción y efecto de rectificar. Rectificar: (del latín *rectificare*; de *rectus*, recto, y *facere*, hacer). Reducir una cosa a la exactitud que debe tener. Procurar uno reducir a la conveniente exactitud y certeza los dichos o hechos que se le atribuyen. Contradecir a otro en lo que ha dicho, por considerarlo erróneo. Modificar la propia opinión que se ha expuesto antes. Corregir las imperfecciones, errores o defectos de una cosa ya hecha”.

***Respuesta***: Satisfacción a una pregunta, duda o dificultad. Contestación al que nos llama o toca la puerta. Réplica, refutación o contradicción de lo que otro dice.

- 
- Cendan Pazos, Fernando. “Historia del derecho español de prensa e imprenta. (1502-1966), Ed. Nacional, Madrid, 1974
  - Gómez -Reino Carnota, Enrique. “Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1840-1966), I.E.A., Madrid, 1977.-

**Réplica:** Acción de replicar. Expresión, argumento o discurso con que se replica. Replicar: (del latín, replicare). Instar o argüir contra la respuesta o argumento. Responder oponiéndose a lo que se dice o manda.

Del significado semántico de los tres términos surge que el elemento distintivo de la rectificación es la referencia a la falta de exactitud o el carácter erróneo de determinados dichos o hechos que se le atribuyen, y la corrección que se pretende de los mismos. Esta característica no está presente ni en la réplica ni en la respuesta, de las que surge la posibilidad de contraopinar, u opinar distinto, sin referirse necesariamente a la exactitud o no de los términos vertidos, sino a una “oposición” a lo que se dice.

Desde la perspectiva de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo como fundamento el artículo 14 de la misma, la denominación correcta desde lo semántico, es la de derecho de rectificación o respuesta. En efecto, con la rectificación se procura dar la oportunidad de expresión del afectado para que dé su versión de los hechos e informaciones, de aquellos dichos o hechos que pueden comprobarse, estrictamente de ellos, no cubriendo las opiniones, las valoraciones ideológicas, las creencias. En la medida que la respuesta se la iguale a la rectificación con el disyuntivo “o” quedará claro que se entiende a la respuesta en los mismos términos y alcances que la rectificación.

Ahora bien, de todos modos, la denominación derecho de respuesta, desde lo semántico no aparece correcta para aludir al instituto, porque el que rectifica no está “satisfaciendo a una pregunta, duda o dificultad”. A su vez, en su tercera acepción, remite a la réplica y añade la posibilidad de “refutar” o “contradecir” lo que otro dice, lo cual incluiría tanto a la información en sentido estricto, a la alusión de hechos y también a las opiniones o diferencias de criterio.

Asimismo la denominación derecho de réplica no puede igualarse al derecho a rectificación, porque la réplica comprende lo valorativo, el opinar contrario, lo cual no es materia de rectificación, sino de disenso. En rigor, la posibilidad de la réplica no está dada

por este derecho sino más bien por la libertad de opinión, que no se encauza necesariamente por medio del derecho de rectificación.

Por su parte, en el sistema europeo de derechos humanos, como el Convenio de Roma no tiene una consagración expresa del derecho a réplica, cada Estado ha desarrollado su legislación específica tomando como parámetro el derecho a la libertad de expresión consagrado en su artículo 10. En España, los términos réplica y rectificación tuvieron su recepción legal, habiéndose superado las distinciones con la aprobación de la Ley Orgánica 2/1984<sup>158</sup>, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, que lo define a partir de una información difundida por cualquier medio de comunicación social y que el aludido considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio (Art. 1º).

Con la sanción de la Ley Orgánica 2/1984, se superó la dualidad que en materia de prensa e imprenta, daba lugar a dos derechos distintos: el derecho de réplica y el derecho de rectificación. “El primero era propio de las personas naturales o jurídicas; y el segundo, de la Administración Pública y las autoridades. Además de las diferencias de titularidad, ambos derechos presentaban importantes diferencias respecto a las condiciones y efectos de su ejercicio”<sup>159</sup>.

De esta manera, en España, se encuentra consagrado el “derecho de rectificación”, tal como se denomina la Ley Orgánica 2/1984.

En la práctica, en lo cotidiano, en la jerga periodística y de los medios, para quienes informan y para quienes se informan, en la bibliografía existente y hasta en las publicaciones de jurisprudencia en Argentina se suele llamar al instituto que estudiamos como derecho de réplica, incluso, igualando los términos.

---

<sup>158</sup> BOE Núm. 74, de 27/03/1984.

<sup>159</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de ello, y tal como se puede colegir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, se tiende a una denominación común: “derecho de rectificación o respuesta”. Porque esa es la denominación que consagra el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es de notar que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina sobre este tema, el caso “Petric c. Página 12”, a lo largo de toda la sentencia no se encuentra la denominación “réplica”. Sólo por una vez, y en su voto particular, el Juez Vázquez plantea que las denominaciones “rectificación”, “respuesta” y “réplica”, son indistintas y equivalentes (Consid. 7, 2º párrafo). Aunque termina contradiciéndose porque habla de la réplica como el medio para que el nombrado o designado pueda “dar a conocer sus explicaciones o desacuerdos en las mismas circunstancias y condiciones que han provocado su designación”. Eso sí es réplica, pero no necesariamente rectificación o respuesta.

#### **IV.2.2. Análisis conceptual jurídico**

*“Sin la existencia del derecho de réplica, la libertad de prensa para todos se convertiría en una simple afirmación dogmática<sup>160</sup>”, sostiene el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Dr. Carlos Fayt. Este pensamiento, invita a analizar el significado del derecho de rectificación o respuesta en el Derecho y su correlativo en su ejercicio efectivo.*

Abad-Alcalá define el derecho de rectificación como “la posibilidad para cualquier sujeto que se sienta perjudicado por una información que le afecte, de emitir su punto de vista sobre esos hechos en el medio en que se difundió<sup>161</sup>”. Este concepto está presente tanto en la legislación española como en el sistema interamericano de derechos humanos, aunque con la diferencia de la consagración explícita que el mismo tiene en la Convención Americana de Derechos Humanos.

---

<sup>160</sup> Carlos Fayt, “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo”. La Ley, 2001, Pág. 211.

<sup>161</sup> ABAD ALCALÁ, Leopoldo, El derecho de rectificación, en *Derecho de la Información*, BEL MALLÉN, Ignacio, Loreto CORREDOIRA Y ALFONSO, coords. Barcelona, Ariel, 2003. p. 397.

Es decir, en el sistema interamericano de derechos humanos, a diferencia del europeo, se parte de la base de una consagración explícita del derecho de rectificación. Así, el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo el título “Derecho de rectificación o respuesta” establece:

- 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.*
- 2. En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.*
- 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.*

De la lectura de la norma transcrita surge la definición contenida por ella sobre el derecho de rectificación o respuesta, lo cual nos facilita desagregar y analizar conjuntamente los elementos que hacen a su concepto.

Desde el campo doctrinario, nos parece adecuado citar el concepto dado por el Catedrático Teodoro González Ballesteros, quien luego de pasar revista por las distintas definiciones dadas por distintos juristas define al *derecho de réplica* como la “facultad que se concede a una persona, física, o jurídica, que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario, publicada en un medio de comunicación social y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido mediante la inserción de la correspondiente aclaración, en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado”<sup>162</sup>. Es notable señalar, que correctamente el autor europeo alude a las “personas jurídicas” como titulares de legitimación activa para el ejercicio de

---

<sup>162</sup> González Ballesteros, Teodoro. “El derecho de réplica y rectificación en prensa, radio y televisión”. Editorial REUS. Madrid, 1981 Pág. 30 y pág. 53.



este derecho. Esta es una de las diferencias notorias del sistema interamericano con la legislación española que admite la rectificación de las personas jurídicas.

#### ✓ **Responsabilidad ulterior**

Como paso previo al análisis que realizaremos a continuación, cabe aclarar que el derecho de rectificación o respuesta se encuadra dentro de las responsabilidades ulteriores del derecho a dar y recibir información. En efecto, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, establece bajo el numeral 2, en la parte pertinente: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente (libertad de pensamiento y expresión) no puede estar sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”.

La rectificación o respuesta surge como consecuencia de una información dada en forma inexacta o agravante hacia el involucrado en tal información, que se considera afectado por la misma. Surge a posteriori, nunca podría ser a priori, porque de otra manera estaríamos ante un caso de censura, y es una cuestión de pura lógica que así sea porque el lesionado puede rectificar o responder solamente cuando han hablado o se han expresado con falsedad sobre él y determinados hechos. Esta circunstancia, y la circunstancia de que el agraviado pueda expresarse hace que el derecho de rectificación o respuesta no atente contra el derecho a la información, sino que lo expanda y potencie. Desde esta perspectiva, la denostación de inconstitucional hacia el derecho de respuesta que pregonan parte de la doctrina argentina y ciertas empresas mediáticas resulta bizantina.

Como se establece en el apartado 2 del artículo 14, el derecho de rectificación no exime de las otras responsabilidades legales, civiles o penales, en que se hubiese incurrido. De esta forma se suma así, como instituto específico, entre las responsabilidades ulteriores del ejercicio del derecho a dar y recibir información.

El derecho de rectificación excede la noción de “resarcimiento” tal como está concebida en el marco de la responsabilidad civil, ya que permite al aludido en una información dar su propia versión del mismo hecho mediante la inserción de su respuesta en el medio que difundió aquélla, para que esa versión tome también estado público. Es decir, este derecho opera más allá del obrar con culpa o dolo por parte del medio, que eventualmente correrán por otros caminos y con otros remedios procesales<sup>163</sup>.

La finalidad del derecho de rectificación o respuesta es doble, por un lado la facultad de ejercitarlo posibilita la concreción del derecho a dar información, de la libertad de expresión, el derecho a ser oído, dotando al receptor de un rol activo; por otro constituye un medio necesario para asegurar el respeto al derecho del honor, la reputación, la dignidad.

El derecho de rectificación en este sentido, no es sólo individual, para asegurar los derechos avasallados de quien lo ejerce, sino que a su vez es social, porque al rectificar, el afectado está ofreciendo a los informados, otra versión de los hechos que lo involucraron, provoca la actitud de escuchar la “otra campana”. Y el oyente, receptor, lector, televidente o cibernauta podrá, de la escucha de las diferentes versiones, formar su propia conclusión, ya que se le ofrece “otra voz” sobre un mismo hecho.

✓ **Objeto: Informaciones, no opiniones.**

La cuestión acerca de quiénes pueden ejercitar el derecho de rectificación o respuesta, nos llevará al estudio particular de la legitimación para accionarlo, que abordaremos más adelante por razones metodológicas. En principio, y por ahora, digamos que el rectificante o respondiente, en el sistema interamericano, será “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su ejercicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados”.

---

<sup>163</sup> Zanonni, Eduardo y Biscaro. “Responsabilidad de los medios de prensa”, Edit. Astrea. Buenos Aires, 1993. Pág. 206.

Por su parte, para la Ley Orgánica 2/1984, en su artículo 1º habilita que el rectificante sea “toda persona natural o jurídica” la que tendrá derecho a “rectificar la información aludida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”. Con esta descripción legal puede concluirse, en una primera aproximación, que el derecho de rectificación depende de una condición objetiva: la difusión de una información de hechos en la que se aluda a una persona natural o jurídica; y de dos condiciones formuladas subjetivamente: la consideración, por parte de la persona aludida, de que los hechos son inexactos y que su difusión es susceptible de causarle perjuicio, describe Soria<sup>164</sup>.

Dicho esto, es necesario subrayar que el derecho de rectificación o respuesta tal como lo consagra el Pacto de San José de Costa Rica, se circunscribe a las “informaciones inexactas o agraviantes” emitidas en perjuicio del afectado. En cuanto al objeto entonces, la protección es la misma en el sistema interamericano y en la legislación española.

Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española, informar es “enterar, dar noticia de una cosa”. Desde este punto de vista, la terminología del precepto limita en principio claramente el ámbito de aplicación del derecho de rectificación a lo fáctico, al mundo de lo comprobable, es decir, a lo relativo a los hechos cuya existencia, inexistencia, exactitud o inexactitud pueden ser objeto de prueba judicial. Por ende, queda fuera de este ámbito, y por lo tanto no le es aplicable la rectificación al mundo de lo valorable, a las interpretaciones, al campo de las ideas, creencias, las opiniones, las conjeturas, los juicios críticos.

Ahora bien, si recurrimos al concepto de información según las teorías del periodismo, si bien encontraremos tantas definiciones como autores haya, diremos que en lo esencial del concepto periodístico se encuentra la noción de “dar noticia de una cosa”. No es el objetivo de este apartado adentrarnos en la conceptualización de la información

---

<sup>164</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid, pág. 31.

según las diversas teorías o matices, pero consideramos necesario al menos traer dos visiones que expresan consenso o base común. Al respecto, Lorenzo Gomis expresa: “La noticia sirve para comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo. La forma que ha llegado a adquirir con el tiempo responde perfectamente a la función que cumple. Su aportación al conjunto es conseguir que el lector u oyente se entere con claridad, exactitud y rapidez de hechos que han sucedido y que pueden interesarle. El estilo puramente informativo con que se escriben las noticias facilita la confianza del público. Los datos exactos son los que en este momento le interesan. Lo que en los medios se llama una información es una variante o extensión de la noticia y no es extraño que haya quienes prefieren hablar de noticias y quienes de informaciones y que, puesto que su función es la misma, correspondan básicamente al mismo género”<sup>165</sup>.

Para Luisa Santamaría, “la interpretación es un elemento básico en las tareas informativas, es un juicio apoyado en los antecedentes, el conocimiento de la situación y el análisis de un acontecimiento, y es parte esencial de las noticias”. Si hay una actitud “informativa”, los géneros periodísticos que se corresponden con esta actitud son: la noticia y el reportaje<sup>166</sup>. Si contrastamos esta visión con el ámbito que hemos definido para la aplicación del derecho de rectificación, la cuestión parecería complicarse, puesto que aquí encontramos entrelazados el mundo de lo comprobable y el mundo de lo valorable. Y es cierto, de una u otra forma, el periodista, al dar a conocer determinado hecho o al redactar una noticia está interpretando la realidad. Pero ello no es óbice para que la información sea susceptible de rectificación. En efecto, aun en el campo de las ideas y de las creencias también existen elementos de hecho, y aquí está lo esencial: la aceptación o rechazo que la base fáctica – no la opinión - provoca en el autor de la expresión.

---

<sup>165</sup> Gomis, Lorenzo. “Teoría del Periodismo. Cómo se forma el presente”. Paidós Comunicación. Barcelona, 1991. Pág. 45.

<sup>166</sup> Santamaría Suárez, Luisa. “Géneros para la persuasión en periodismo”. Editorial Fragua, Madrid. 1997. La citada autora habla del reportaje objetivo y de los juicios objetivos, postura que no compartimos dado que la objetividad en el periodismo no existe desde el momento en que el periodista media entre la información y el público con su lenguaje. Nótese de todos modos que en la rectificación y en su definición no hay mención ni alusión alguna al tema de la objetividad, puesto que habla de informaciones inexactas y no añade requisito alguno que deba reunir la información en su proceso de elaboración.

Si bien la noticia y el reportaje son los géneros clásicos dentro del llamado periodismo informativo, eso no significa que sólo estos géneros sean susceptibles de rectificación o respuesta. En realidad, lo que menos importa en este sentido es el género, sino la esencia fáctica de la información. El periodismo de opinión, que incluye a los artículos, editoriales, sueltos, columnas, críticas, y el periodismo de explicación o interpretativo que comprende a la crónica y al reportaje en profundidad, también están alcanzados por el derecho de rectificación o respuesta en tanto y en cuanto su base fáctica sea inexacta para el afectado.

Esto último no significa que las opiniones en sí sean alcanzadas por el derecho de respuesta. Habrá que ponderar cada caso en particular para analizar si se pretende responder a su base fáctica o a la opinión como tal. Siendo así, quedaría descartada la respuesta de opiniones, pues ello es más propio del debate, en la medida que el medio acepte la publicación. En principio los debates acerca de opiniones incluyen las ideas, y éstas implican la confrontación del pensamiento crítico, por lo cual los medios son libres de decidir su inserción o no. Pero la cuestión no es tan simple<sup>167</sup>.

Lo expresado vale tanto para las “informaciones inexactas” como para las “agravantes”. También en estas últimas el carácter de “agravante” debe provenir de los hechos en sí mismos de los que se da noticia – que el afectado pretenderá eventualmente rectificar- y no de la formulación de juicios de valor descalificantes. Una expresión fuertemente crítica podrá dar lugar a otro tipo de acciones legales, por ejemplo si se insulta, la acción por injurias será la vía adecuada; pero nunca dará ocasión al ejercicio del derecho previsto en el Artículo 14 del Pacto. En este sentido compartimos el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresado en el Fundamento 9 de la sentencia del caso “Petric c. Página 12”<sup>168</sup>.

---

<sup>167</sup> Zanonni, Eduardo y otro. Ob. cit. pág. 213.

<sup>168</sup> Caso “Petric Domagoj c. Página 12”. L.L. Tomo 1998-C.

A esta altura corresponde decir que si a muchos puede parecerles que esta explicación entre la división de informaciones y opiniones resultaría vana por su obviedad, no lo es así ya en la arena del litigio, donde precisamente se va a poner en juego el carácter informativo o no de los dichos que provocaron la rectificación. Así, en el caso recién citado, vemos que uno de los agravios esgrimidos por el diario Página 12, en su defensa, en el recurso de hecho presentado ante la Corte es el siguiente: la inaplicabilidad de la respuesta en el caso, pues lo publicado era de naturaleza política o ideológica. Cabe adelantar que tal argumento no prosperó, dado que se determinó la base fáctica de la información dada por el mencionado medio.

No sólo la letra expresa del artículo 14 de la Convención impone la exclusión de las opiniones para el accionar del derecho de rectificación. Para la Corte argentina, también es una cuestión de “sentido común”: “Un periódico o una emisora no son una plaza pública en donde cualquiera puede levantar su tribuna. Lo decisivo es que los responsables de los medios de difusión son los que determinan el contenido de las informaciones, noticias o programas que publican o emiten. A este principio sólo hacen excepción motivos de orden público o institutos como el derecho de rectificación o respuesta...Por el contrario, si se obligara a los medios a costear toda opinión adversa a lo que han difundido, se llegaría rápidamente al absurdo que sólo sería posible expresarse libremente a través de aquellos, a condición de poder financiar igual posibilidad a todos los eventuales contradictores. Parece innecesario abundar en la sinrazón de la postura. Impracticable económicamente e incoherente desde el punto de vista lógico, tal pretensión importaría un claro menoscabo al derecho de libre expresión. La realidad desmentiría a la utopía: no habría muchas voces, habría silencio” (disidencia de los jueces Petracchi y Moliné O Connor, consid. 25 en “Ekmekdjian c. Sofovich” y Fundamento 9, 4º párr. en Petric c. Página 12).

La distinción entre información basada en hechos o datos y juicios de valor, es esencial no sólo en el caso de la procedencia del derecho de rectificación o respuesta, sino también en la operatividad de la doctrina de la real malicia. “Se debe distinguir cuidadosamente entre hechos y juicios de valor”, resulta un argumento que ha sido destacado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens, de 8 de julio

de 1986 con el objetivo de ampliar la protección de la libertad de expresión más allá de las afirmaciones de hecho y alcanzar con ella a las opiniones o evaluaciones. Este argumento es tomado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso “Patitó c. La Nación<sup>169</sup>” (2008).

### ✓ **Perjuicio del afectado**

Para que la persona afectada pueda ejercer el derecho de rectificación es necesario que la información que se haya emitido lo aluda y lo perjudique, este es un requisito esencial que hace a la legitimación activa del derecho. El agravio puede resultar tanto de la información inexacta en la cual se lo involucra o bien en la base fáctica de los comentarios sobre el mismo. Es el afectado quien le atribuye inexactitud a la información o carácter agravante a su persona.

El artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, es claro al establecer que la información tiene que ser “en su perjuicio” –del afectado-, de quien rectificará, y por ende la información se refiere a él directamente o bien lo alude de tal forma, aportando tales datos que es posible su individualización.

Este elemento no es menor, porque si una de las finalidades del derecho de respuesta es la protección de la honra y el honor de las personas agraviadas, la ausencia de una mención particular o las afirmaciones genéricas, podrían dar lugar a innumerables argumentos contrarios que sí provocarían un menosprecio del derecho a la información.

Esta cuestión, se vio reflejada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich<sup>170</sup>”, que si bien su resolución es altamente meritoria por el reconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y su

---

<sup>169</sup> S.C. P. N° 2297, L. XL "Patitó José Ángel y otro c. Diario La Nación y otros". Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 24 de junio de 2008.

<sup>170</sup> Fallos 315:1492, L.L. 1992-C-543.

operatividad, nos resulta equívoco y no compartimos la interpretación de los hechos que motivaron la sentencia, es decir, los antecedentes fácticos de los cuales se agravia el actor no están encuadrados en los requisitos del derecho de rectificación.

En este sentido compartimos el siguiente análisis realizado en el aludido caso por los Dres. Pettracchi y Moliné O'Connor, en su voto en disidencia:

*“(...) El tipo de información que da origen al derecho de rectificación o respuesta es aquel que se refiere directamente al presunto afectado, o, al menos, lo alude de modo tal que resulta fácil su individualización. El fundamento de esta posición reside en que si –por vía de hipótesis- se reconociera este derecho sin el mencionado “requisito de individualización”, se abriría la posibilidad de infinitos cuestionamientos a expresiones ideológicas o conceptuales que, en definitiva, afectarían a la libertad de prensa.*

*(...) los precisos términos del pacto en modo alguno sustentan la posición del recurrente. Ello es así en razón de que éste en ningún momento fue aludido en el programa “La noche del sábado”, de modo tal que pudiera ser individualizado por los telespectadores.*

*(...) el apelante no ha comprendido lo que es derecho de réplica, pues le asigna un alcance que no encuentra apoyo, ni en la Convención (como se ha visto) , ni en el derecho comparado ni en las Constituciones de varios Estados provinciales. Efectivamente, su institución no ha tenido el propósito de crear un foro al que pueda abordar todo aquel que crea ver atacados valores, figuras o convicciones a los que adhiera. Aunque sea muy comprensible el disgusto (o aun la conmoción) que tales ataques –a veces desaprensivos- puedan producir, lo cierto es que lo que este derecho procura instituir es un modo de proteger ámbitos concernientes al honor, identidad e intimidad de personas que han sido aludidas en algún medio de comunicación, permitiéndoles acceder gratuitamente a ellos para dar su propia versión de los hechos”.*

Luego de realizar un abordaje particular de este requisito en el Derecho Comparado, citando la legislación de Francia, Alemania, Italia, España, U.R.S.S., Perú, Brasil, Uruguay y también la normativa provincial: Santiago del Estero, Neuquén, La Pampa, Formosa, Chubut, San Luis, Jujuy, Salta, San Juan y Tierra del Fuego, se concluye que también en el



derecho comparado y en las legislaciones provinciales, por regla se exige, como mínimo, que éstas contengan la alusión o mención a una persona que, justamente por ello, es facultada a “responder” o “rectificar”.

*“Resulta, entonces, imprescindible que la persona esté directamente aludida en la noticia, que, de ese modo, pone en cuestión la mismidad intransferible de aquélla. Se advierte fácilmente que esto hace al meollo del remedio que se otorga, al que se sacaría de su quicio si se permitiera su utilización para refutar ataques genéricos a creencias o a valores, con el único requisito de que alguien adhiriera a ellos.*

*No valdría alegar que, al atacarlos, se afecta profundamente a la persona adherente. Esta afirmación sólo es verdadera si se limita a traducir los explicables sentimientos que invaden al hombre cuando se impugna lo que ama, pero no lo habilita a considerar lesionado el núcleo de su personalidad toda vez que, genérica e indeterminadamente, se embiste contra las convicciones que profesa. En todo puede el ser humano depositar sus afectos. Nada hay –en este sentido- que le sea ajeno. Pera esa constatación no puede justificar la artificiosa utilización de un instrumento al que diversos ordenamientos conciben como un remedio singular para situaciones bien determinadas, en las que lo específico de cada individualidad resulta comprometido. Por consiguiente, si lo estricto y directamente personal no ha sido puesto en juego, el interesado deberá obtener satisfacción por otros medios”.*

El voto en disidencia, finalmente, retoma los hechos del caso Ekmekdjian c. Sofovich, para concluir que en el caso, *“el actor expresa que se ha sentido dolido como consecuencia de expresiones vertidas en un programa de televisión que habrían sido lesivas para la fe católica. Esta sería, en verdad, la eventual atacada. No lo ha sido, en cambio, el recurrente: éste no alega que se lo haya mencionado o aludido en el mencionado programa. En consecuencia, es palmaria la ausencia de legitimación del actor para ejercer el derecho de rectificación o respuesta en el presente caso”.*

Una de las preguntas que surgen al referirnos al sujeto activo del derecho de rectificación o respuesta es si ¿es posible hablar de un derecho de rectificación de las

instituciones públicas o órganos del poder? ¿Debe existir diferencias con el ejercicio por parte de un particular? Si bien este tema lo retomaremos al tratar la legitimación, en realidad los Estados deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de rectificación o respuesta en pos de fortalecer una opinión pública libre y comprometida con su democracia en la cual la riqueza de visiones vigoriza la vigencia efectiva de los derechos humanos. Los Estados y sus gobernantes deben someterse al escrutinio público y siempre tienen más oportunidad que un particular afectado de dar información oficial sobre determinados hechos. Aquí hay otro derecho que los Estados deben consolidar en pos de su transparencia y es el derecho de acceso a la información pública, que se constituye en la herramienta básica para garantizar el derecho a la igualdad.

#### ✓ **Información dada en medios legalmente reglamentados**

La amplitud y vaguedad de la expresión “medios legalmente reglamentados”, conforme el texto del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, trae diversas discusiones sobre su significado, a ello se suma la falta de una ley que reglamente el derecho de rectificación en Argentina.

Como contrapartida, la Ley Orgánica 2/1984 de España es clara al respecto y alude a “cualquier medio de comunicación social”. Lo cual es correcto y amplio, lo que posibilita también incluir a Internet y a todos los nuevos medios de comunicación social.

En principio, cabe tener en cuenta que los orígenes del derecho de respuesta, se remonta, como ya hemos tratado a los primeros tiempos de la prensa escrita.

Para dar la visión controvertida y concreta de esta cuestión en el Derecho argentino, es necesario una vez más traer el análisis del caso *Petric c.* Página 12 en este punto en concreto. En los fundamentos de la interposición del recurso de hecho ante la Corte, el periódico sostuvo como un agravio particular que “el derecho de respuesta sólo procede respecto de los medios de difusión legalmente reglamentados, esto es: cuando se trata de medios de propiedad del Estado y no de particulares”.

Este agravio, tuvo la consiguiente respuesta en la sentencia en los siguientes términos: “(...) aún cuando cabe reconocer que la expresión “medios de difusión legalmente reglamentados”...presenta dificultades de interpretación, la que al respecto realiza la apelante (por Página 12) es inadecuada. En efecto, no se advierte que el texto transcrito haga siquiera alusión a la propiedad de los medios; la norma habla de los órganos legalmente reglamentados y no de los que son del dominio del reglamentador.

Tampoco variaría la solución aunque se alegara que el derecho de rectificación o respuesta es imposible de invocar frente a los medios de difusión gráficos, por no encontrarse éstos “legalmente reglamentados” en el ámbito nacional. Esto es así, pues el inc. 3º del mismo art. 14, vale decir, uno de los tres incisos que integran el artículo que lleva por título “derecho de rectificación o respuesta”, dispone que “para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. Es fácil advertir que la expresa mención de las “publicaciones” en un precepto destinado a regir sobre el derecho de rectificación o respuesta, arroja luz más que suficiente sobre el punto e impide aceptar la exclusión de los medios gráficos del ámbito de aquél”.

En el voto en disidencia del Dr. Belluscio, con su visión particularmente restrictiva, sostiene que la prensa escrita no es un medio regulado por la ley, y por ende le es inaplicable el derecho de respuesta. Incluso va más allá y sostiene que el artículo 14 “denota un fuerte espíritu antidemocrático, ya que parece presuponer la legitimidad de reglamentaciones nacionales de la prensa que, en nuestro caso, son inadmisibles”.

Más allá de la discusión que el punto provoca, diremos que el artículo 14, como única norma que establece y consagra el derecho de rectificación o respuesta, debe leerse e interpretarse jurídicamente en su conjunto, y no provocar distinciones donde la norma no las instala, en fin, comprende a todos los medios, no importando el soporte técnico por el cual se emita la información.

En los debates de los proyectos de modificación de la ley de radiodifusión y luego con la discusión de la Ley N° 26.522 en Argentina han intentado regular el derecho de rectificación o respuesta para los medios audiovisuales, cuestión que fundadamente no tuvo recepción ya que ello hubiera contribuido a distorsiones en cuanto a los medios gráficos, vulnerando asimismo el derecho a la igualdad.

Propiciamos en este sentido la claridad en cuanto al ámbito en el que se expresa el derecho de rectificación siendo, como lo dice la norma española “cualquier medio de comunicación social”.

### ✓ **Protección de la Honra y la Reputación**

Se ha dicho que la información inexacta o agravante debe afectar los derechos subjetivos del respondiente. Desde la óptica del derecho civil, la doctrina mayoritaria se pronuncia en el sentido de que la rectificación tutela derechos personalísimos, como el honor, la intimidad, el nombre –eventualmente la imagen- la identidad personal, a los cuales podemos subsumir en un concepto que parte de la doctrina aborda como una categoría superior: la dignidad personal<sup>171</sup>.

Creemos en este aspecto que la tutela o protección del derecho de rectificación o respuesta va mucho más allá de la protección de los derechos personalísimos, por un lado, porque el derecho al honor reviste el carácter de derecho humano con todas las características que lo constituyen como tal y por otro, porque al mismo tiempo, la posibilidad de expresar la rectificación por parte del afectado hace a la realización de la libertad de expresión y al derecho de dar información, lo cual indudablemente tiene una repercusión social.

Si una noticia dada a conocer por un medio, involucra en forma inexacta a una persona en determinado hecho, cabe plantearse, ante el poder que hoy detentan los medios:

---

<sup>171</sup> Zanonni, Eduardo y otro. Ob. cit. pág. 221 y sgts.

¿cómo puede levantar el afectado la “condena social” que le generó tal información? La cuestión va más allá de los caminos jurídicos que posee para la reparación de su honor avasallado. También aquí hay otros factores y circunstancias que pueden ser diversas según la persona sea un “personaje público” o un “desconocido” hasta el momento de darlo a conocer por la noticia, y su posibilidad de “acceso” al medio también será diferente. Que el aludido pueda al menos expresar su versión de los hechos no implica que el medio ni el periodista se rectifiquen ni tampoco implica que el afectado se redima ante la “opinión pública”. Si en el plano social –mas no jurídico- el honor del afectado “está perdido”<sup>172</sup> la libertad de expresión, el derecho “provocado” de dar “su” información sobre los hechos que lo involucraron se revitaliza como derecho fundamental, lo cual no garantiza ni hacen en sí a la reparación del daño sufrido y queda la posibilidad de acudir a otras vías procesales. Pero permite ejercer su “derecho a ser oído” en el mismo medio que informó sobre él.

En este aspecto, la mayoría de la doctrina y también la legislación en sí, parecen perfilar sólo la finalidad del derecho de respuesta en la protección de la honra y la reputación. Es indudable que estos son los bienes jurídicamente protegidos por el derecho de rectificación, pero insistimos, no solamente ellos, sino también la libertad de expresión y el derecho a dar información por parte de “toda persona” también se hallan protegidos, porque con la rectificación el particular tiene el acceso al medio para dar su versión de los hechos. La información no es exclusiva de los periodistas ni de los medios, tiene alcance universal, y si no se garantizan mecanismos de llegada de los aludidos a los medios de información, el poder mediático terminaría siendo el único y absoluto poder.

Zanonni advierte que si se piensa solamente en la protección de la dignidad personal, se está presuponiendo la referencia a personas físicas o individuales afectadas por la información. Sin embargo, no parece que las personas jurídicas deban ser privadas de la rectificación ante informaciones que les causan un perjuicio, en tanto afecten su buena reputación, su buen nombre, el crédito o la confianza del público. Esta posibilidad no puede

---

<sup>172</sup> Hablamos de “honor perdido” en una forma literaria, ya que la cuestión planteada nos evoca al libro “El honor perdido de Katharina Blum”, de Heinrich Böll, novela que aborda el tema de los avatares de una mujer presionada por el poder judicial y el poder mediático.

confundirse con la problemática de la legitimación en estos casos, que consideraremos más adelante. Y por ende, compartimos el criterio de otorgar la posibilidad de rectificación a las personas jurídicas.

He aquí una de las diferencias sustanciales con respecto a la legislación española, ya que como hemos destacado, la Ley Orgánica 2/1984 incluye en el ejercicio del derecho de rectificación a las “personas jurídicas”.

✓ **El derecho de rectificación o respuesta no exime de otras responsabilidades ulteriores**

Los elementos y la finalidad que caracterizan al derecho de rectificación, hacen a la especificidad del instituto, que lo distinguen claramente de las acciones penales y civiles tendientes a la protección del honor.

El derecho de respuesta aparece más allá de la atribución de responsabilidad civil de los medios, excede la noción del resarcimiento propia de los daños en la vía civil. ¿Por qué lo excede? Porque opera aun cuando el medio que emitió la información aludiendo al afectado, haya obrado o no con culpa o dolo. Por cierto que si la noticia reputada errónea o falsa ha tomado estado público en razón del obrar culposos del medio, se atribuirá a éste responsabilidad civil y penal en su caso, lo que no obsta, además, a que el aludido ejerza, el derecho de responder<sup>173</sup>.

En este sentido, la publicación de la rectificación, importa tan solo la versión de los hechos dada por el ofendido, y es netamente distinta a la retractación del ofensor o a la publicación de la sentencia condenatoria por calumnias o injurias. La respuesta no implica un elemento de convicción categórico, cosa que sí ocurre con la obligatoriedad de la publicación de una sentencia civil o penal.

El alcance acotado y propio del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta como responsabilidad ulterior, surge manifiesto del artículo 14.2. del Pacto de San José de Costa Rica:

*“En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”.*

---

<sup>173</sup> Zannoni, Eduardo y Biscaro. “Responsabilidad de los medios de prensa”. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1993. Págs. 205 y ss.

Está claro que la proyección individual del derecho de rectificación en cuanto permite aclarar al afectado y defender por esta vía su derecho al honor, tiene un encuadre jurídico específico. “...*No se reduce a los delitos contra el honor ni requiere el ánimo de calumniar o de injuriar, ni el presupuesto de la criminalidad delictiva. No se trata de la querrela por calumnias o injurias, ni la acción por reconocimiento de daños y perjuicios*”<sup>174</sup>.

Respecto al ámbito jurídico propio de la respuesta, el voto del Dr. Antonio Boggiano en el caso “Petric Domagoj c. Página 12”, y reiterado en su disidencia en el fallo “Rozenblum c. Vigil”<sup>175</sup>, señala:

*“(...) las reglas jurídicas que gobiernan a la contestación no deben ser confundidas con las que lo hacen respecto de la responsabilidad jurídica.*

Es menester que dicha distinción resulte tenida muy especialmente en cuenta. La falta de deslinde entre uno y otro tema puede, por un lado, distorsionar seriamente el derecho de respuesta, volviéndolo poco menos que irreconocible, cuando no inservible, y, por el otro, sembrar de peligros el desempeño de los medios. La contestación no presupone ni obrar ilícito, ni culpabilidad, por parte del órgano; la respuesta no es sanción, ni reproche, quien la pide no exige responsabilidad jurídica ni tampoco la asume el que la concede. Publicar una respuesta no conlleva, para el órgano, retractación alguna, ni rectificación, ni implícito reconocimiento de la inexactitud de la información que difundió... so color de erigir entre medios y afectados un desequilibrio intolerable a favor de estos últimos. En suma, la contestación no consagra vencedores ni derrotados. Y si los hubiera, el veredicto provendría del “público en general”.

---

<sup>174</sup> Cf. “Ekmekdjian, Miguel Angel c. Sofovich, Gerardo y otros”. Fallos 315:1492. Mayoría. Consid. 23. Ver además, disidencia conjunta de Moliné O’Connor y López, en “Rozenblum c. Vigil”. E.D. T. 188. Consid. 7º, en el mismo caso disidencia del Dr. Vázquez. Considerandos 6º y 11º.

<sup>175</sup> Cf. Disidencia del Dr. Antonio Boggiano, en “Rozenblum Horacio c. Vigil, Constancio y otros”. E.D. Tomo 188. Considerandos 14 y 15. Pág. 213.



*Es por ello que la procedencia de la respuesta no exige la producción de un perjuicio cierto. Es suficiente, en tal sentido, que la información posea un potencial dañoso, vale decir, que pudiera llegar a lesionar un interés jurídicamente protegido.*

*Que los requerimientos relativos a la existencia de un daño cierto, así como los vinculados con la intencionalidad del agente (el informador) y la infracción de un deber jurídico conciernan a la teoría general de la responsabilidad civil; tienden a determinar en qué supuestos una persona debe reparar los daños inferidos a un derecho de otra persona. Pero la respuesta, como ya se ha expresado, no tiene esa finalidad. Podrá evitar o atenuar la configuración de un perjuicio, mas es extraña al ámbito sancionatorio en el que se emplaza el régimen de responsabilidad por daños. Es revelador, en este punto, el inc. 2º del art. 14, de la Convención: “en ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido”<sup>176</sup>.*

La rectificación o la respuesta es un elemento informativo aportado por el afectado, no hace cosa juzgada en cuanto a las responsabilidades civiles o penales que correspondieren a los medios, ni clausura la posibilidad para el afectado de recurrir a tales vías para buscar el resarcimiento a su honor ofendido, ni demuestra por sí sola la falsedad de la información que afecta a quien responde. El derecho de respuesta es, en realidad, “una acción como medio de defensa conveniente, extrajudicial y llegado el caso judicial, para lograr el resultado de la reposición; no es propiamente un derecho subjetivo, sino el remedio concedido a la persona para dar a conocer su verdad”<sup>177</sup>.

Dada entonces la independencia del derecho de rectificación de la órbita de la responsabilidad penal y civil, el afectado, tiene la opción y la posibilidad de interponer las correspondientes acciones. En el Código Penal argentino, el honor es protegido en su Título II, “Delitos contra el Honor” (arts. 109 a 117), que sanciona diferentes conductas delictivas<sup>178</sup>, como la calumnia (art. 109), la injuria (art. 110), y la publicación o

---

<sup>176</sup> Cf. Voto del Juez Antonio Boggiano, en Petric Domagoj c. Página 12. L.L. T. 1998-C. Considerandos 12 y 13. Págs. 299 y 300

<sup>177</sup> Cifuentes, Santos y Fernández, Marta. “Rectificación. Respuesta. Réplica”. L.L., 1990-E-872.

<sup>178</sup> Los delitos contra el honor son de acción privada (art. 71, 73, Código Penal). Esta sólo puede ser ejercitada por el ofendido y después de su muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes (art. 75 C.P.).

reproducción por cualquier medio de injurias o calumnias inferidas por otro (art. 113 del Código Penal).

A su vez, el Código Civil argentino, cuyo autor fue Dalmacio Vélez Sarsfield contemplaba las consecuencias resarcitorias de injurias y calumnias (art. 1089 C.C.) y de acusación calumniosa (art. 1090). En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que ha entrado en vigencia el 1º de agosto de 2015 se encuentra sólo para el caso de las calumnias en el artículo 1.771<sup>179</sup>.

Así como abordamos el procedimiento desde un parámetro comparativo, en la legislación española, estimamos útil indagar la temática del ámbito propio de la rectificación en ese país.

La legislación española considera, en coherencia con la naturaleza del derecho de rectificación, el objeto del proceso iniciado por la presentación de este tipo de acción es compatible con el ejercicio de acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieren asistir al perjudicado por los hechos difundidos, ello se colige de la misma LO 2/184, según el artículo 6º, último párrafo.

De esta forma, las acciones previstas por la Ley Orgánica 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen<sup>180</sup>; proceden con total independencia al ejercicio del derecho de rectificación, pues si no obstante que el bien jurídico protegido, sea el mismo, es decir, el honor; los efectos jurídicos que posibilita esta Ley Orgánica son totalmente distintos, pues a través de ella se

---

Sobre la protección penal del honor, ver: Soler, "Derecho Penal Argentino". Parte especial, 3ª edición, T. III, p. 183 y ss.; Núñez, "Derecho Penal Argentino". T. IV., pág. 22 y siguientes.

Para un enfoque general, ver Pizarro, Ramón Daniel. "Daño Moral", Prevención, Reparación, Punición. El daño moral en las diversas ramas del Derecho. Hammurabi. José Luis Depalma, Editor. Buenos Aires, 1996.

<sup>179</sup> Artículo 1771 Código Civil y Comercial. "Acusación calumniosa. En los daños causados por una acusación calumniosa sólo se responde por dolo o culpa grave.

El denunciante o querellante responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querrela si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado".

<sup>180</sup> Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. B.O.E. núm. 115, de 14 de mayo. "Leyes Políticas del Estado". Edit. Civitas, Madrid, 1996.

buscará el resarcimiento derivado de la intromisión ilegítima. Asimismo, se puede fundamentar la responsabilidad civil por la vía del artículo 1902 del Código Civil para demandar por las indemnizaciones o las reclamaciones por daños y perjuicios a través del procedimiento declarativo que proceda por razón de la cuantía.

Obviamente, por ser de distinta naturaleza y también plenamente compatibles, el perjudicado puede impetrar las acciones penales que se deriven de los supuestos de delitos de calumnias o de injurias, según se hallan tipificados en el Título XI “Delitos contra el Honor” del Código Penal, o en el Título X, si las conductas implicaran la comisión de delitos contra la intimidad<sup>181</sup>.

A este respecto, señala Concepción Rodríguez <sup>182</sup>:

“El ejercicio del derecho de rectificación constituye una mera facultad u opción conferida por la ley, a quien se considere perjudicado por la divulgación de informaciones difundidas por los medios de publicidad (art. 1 LO 2/84, de 26 de marzo); en consecuencia, el interesado puede hacer uso de dicha posibilidad, o acudir a cualesquiera otro de los medios que la ley establece para estos casos (Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y la LO 1/82, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), a pesar de que alguna resolución ha parecido otorgar a este derecho el carácter de paso previo para el ejercicio de otras acciones; así parece establecerlo la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 1983<sup>183</sup> que dice que “... *el análisis de la información para detectar la existencia o inexistencia de elementos que vulneren el derecho al honor; o más improbablemente a la presunción de inocencia, sólo resulta procedente si previamente se evidenciara que efectivamente los recurrentes se vieron impedidos en el ejercicio del derecho de rectificación*”.

---

<sup>181</sup> “Código Penal y Leyes Penales Especiales”. Edición preparada por: José Manuel Valle Muñiz. Aranzadi Editorial. Pamplona, 1997.-

<sup>182</sup> Concepción Rodríguez, José Luis. “Honor, Intimidad e Imagen. Un análisis jurisprudencial de la L.O. 1/1982”. Ediciones Bosch. Barcelona, mayo de 1996.-

<sup>183</sup> STC Sala 2ª de 11 de mayo de 1983. Ponente: Sr. Rubio Llorente, La Ley, 1983-4, 25 (157-TC).-

En cualquier caso, la jurisprudencia se ha encargado de declarar la compatibilidad entre ésta y cualesquiera otras acciones en defensa del honor de la persona perjudicada, al afirmar que “... *allí donde se ofrezca un hecho atentatorio al honor de la persona, debe aplicarse la LO 1/1982 de 5 de mayo que no resulta incompatible con el ejercicio del derecho de rectificación objeto de la LO 2/1984 de 26 de marzo, compatibilidad expresamente declarada por el artículo 6, párrafo último, de ésta*<sup>184</sup>”.

Surge manifiestamente del texto legal, y también de la naturaleza y objeto mismo de cada instituto la distinción procesal que tiende a la consecución de diversos fines jurídicos teniendo en cuenta la afectación al honor de la persona agraviada. Por afines que puedan parecer a primera vista las figuras procedimentales bajo estudio, es evidente que la vía de la LO 2/1984, la vía de la LO 1/1982 y la vía del artículo 1902 del Código Civil son totalmente distintas, pues si esto no fuera así, no se podrían ejercitar ambas conjuntamente, tendrían análoga finalidad e, incluso, la responsabilidad en que hubiese incurrido el autor de la intromisión ilegítima, quedaría exonerada por la simple rectificación hecha pública a instancia del perjudicado.

Este particular tema fue objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias:

“(...) Reconocida la existencia de una intromisión ilegítima en el honor de la actora, la conducta lesiva no queda exonerada de responsabilidad por la publicación, a petición de aquélla, de la rectificación solicitada al amparo de la LO 2/1984 de 26 de marzo; el derecho de rectificación regulado por esa Ley es una facultad que se otorga a la persona para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información puede irrogarle en su honor o en cualquier otro derecho o interés legítimo, y esta finalidad es independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que se revela objetivamente inexacta” (STS Sala 1ª de 3 de marzo de 1989. Ponente: SR. González Poveda, La Ley, 1989-2, 448).

---

<sup>184</sup> STC Sala 1ª, de 4 de noviembre de 1986. Ponente: Sr. Serena Velloso. La Ley 1987-1, 247 RAJ, 1986m 6205.-

*“(…) el derecho de rectificación regulado en la LO 2/1984 de 26 de marzo es una facultad que se otorga a la persona para prevenir o evitar un perjuicio que una determinada información puede irrogarle en su honor o en cualquier otro derecho o interés legítimo, cuando considera que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos, siendo tal finalidad independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que se revela objetivamente inexacta, tratándose de dos acciones de diferente contenido, por lo que el ejercicio del derecho de rectificación no excluye la facultad que se concede al ofendido de ejercitar las acciones penales o civiles o de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos como expresamente establece el artículo 6, párrafo último, de la LO 2/1984 de 26 de marzo (cf. TS1ª. St. 3 de marzo de 1989)” (STS Sala 1ª, de 11 de diciembre de 1989. Ponente: Sr. Fernández –Cid de Temes, La Ley, 1990-1,569).*

La postura sobre la compatibilidad del derecho de rectificación o respuesta con las acciones civiles o penales también es sostenida por Carlos Soria. Así sostiene: “El análisis fundamental del derecho de rectificación en el ordenamiento iusinformativo español, es decir, la razón e su legitimidad, el bien jurídico protegido, y las condiciones básicas para su ejercicio, no puede olvidar en ningún momento el punto de partida que afirma expresamente la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación: el ejercicio del derecho de rectificación es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudiera asistir al perjudicado por los hechos difundidos. ¿Qué significa, por tanto, esa compatibilidad? La Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 1986 no se plantea, como es lógico, todas las posibles consecuencias de esa compatibilidad pero, al menos, señala una consecuencia importante. Como “el ordenamiento jurídico establece las acciones penales y civiles y los procedimientos necesarios para investigar la verdad de los hechos publicados o difundidos, así como para obtener la debida reparación de los perjuicios causados por las informaciones inexactas o

falsas; acciones y procedimientos que los interesados pueden ejercitar en cualquier caso”<sup>185</sup>, la conclusión será ésta: la acción de rectificación tiene una finalidad y una eficacia diferente a las atribuidas a las acciones penales o civiles.

---

<sup>185</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid.

Más en concreto: no corresponde a la acción y procedimiento de rectificación —dirá la Sentencia del Tribunal Constitucional— investigar la verdad o exactitud de los hechos publicados o difundidos, ni determinar si los hechos son ciertos o inciertos, con los efectos de la cosa juzgada. Así pues, la compatibilidad de acciones se fundamenta, en la Sentencia Constitucional, en el carácter diferencial de la acción de rectificación: no anula ni extingue las acciones penales o civiles, simplemente porque la acción de rectificación tiene una naturaleza diferente. Se distingue de las acciones penales o civiles tanto por su fin como por sus efectos”<sup>186</sup>.

El Tribunal Constitucional Español, presenta un matiz en la diferenciación, y es la posibilidad de merituar a la rectificación como “atenuante”, así:

*“(…) si bien el derecho a la rectificación de una información no suplanta ni, por tanto, inhabilita ya por innecesaria la debida protección del derecho al honor, si la atenúa, pues constituye el mecanismo idóneo para reparar lo que sólo por omisión de los hechos relatados pudiera constituir intromisión en el derecho al honor imputable a quien sirve de soporte o vehículo para la difusión pública de tales hechos”.* (STC. Sala 2ª 40/1992, de 30 de marzo. Ponente: Sr. Rodríguez Bereijo, La Ley, 1992-3 (1883-TC).

---

<sup>186</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid, Págs. 30/31.

#### IV.2.3. Análisis conceptual comunicacional

*“Cuestionando a un ciudadano,  
un periódico asume el riesgo de verse obligado a dialogar con él”*

Del voto del Dr. Carlos Fayt en “Petric Domagoj c. Página 12”.

L.L. Tomo 1998-C, pág. 294.

La multiplicidad de corrientes teóricas, las disímiles fundamentaciones, líneas de interpretación y metodologías de análisis presentes en el campo social, evidencian la relatividad acerca de los abordajes socio-históricos, económicos, jurídicos, políticos y comunicacionales. Esa modalidad esencialmente polémica manifestada por el desarrollo histórico del pensamiento social, se deriva de la íntima vertebración entre estas formulaciones teóricas y determinados proyectos político-culturales, como expresión de visiones del mundo que impregnan los más diversos aspectos del acontecer de las sociedades.

El Derecho en general, y el derecho de rectificación o respuesta en particular, se deriva como medio o instrumento en el marco de una formulación teórica y de pensamiento y forma parte de un devenir histórico que responde a determinado proyecto político cultural. Pretender el análisis de la figura que analizamos de una manera estática, descontextualizada, atada solamente a lo normativo y desprovista de la perspectiva político comunicacional, equivaldría a una visión recortada y miope, carente de un marco conceptual esencial para su comprensión integral.

¿Cómo se inserta el derecho de rectificación en los debates políticos sustantivos que signan el desarrollo histórico y social de la comunicación? ¿Cuál es la función político comunicacional de este derecho? ¿Por qué y cómo se constituye desde lo teórico y se plasma normativamente?

El planteo de estos interrogantes nos conduce a la tarea de procurar dar una explicitación político comunicacional al derecho de rectificación o respuesta, que tantas



susceptibilidades despierta especialmente en el ámbito empresarial de los medios y que expresa crudamente intereses y conflictos en pugna. Ello nos obliga a tener en cuenta el lugar, la perspectiva desde donde se interpreta el derecho en cuestión.

Creemos que en el recorrido que se propone es necesario ser muy conscientes del contexto social en que se formulan las teorías. Insistir en esto no supone una posición totalmente relativista, según la cual la “validez” de determinada concepción se limitaría a las circunstancias que le dieron origen<sup>187</sup>, todo lo contrario, es menester considerar el ámbito en el que surgieron y analizar especialmente cómo se trasuntan o no en la actualidad.

#### **IV.2.3.1. El derecho de rectificación o respuesta en la matriz de pensamiento político liberal**

Como paso previo al análisis del derecho de respuesta en el pensamiento político, siguiendo la elaboración realizada en este sentido por Alcira Argumedo<sup>188</sup>, estimamos necesario conceptualizar qué entiende esta autora por matriz teórico-política para luego situar a nuestro objeto de estudio en la misma.

Una matriz teórico-política es la articulación de un conjunto de categorías y valores constitutivos, que conforman la trama lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos de una determinada corriente de pensamiento. Dentro de las coordenadas impuestas por esa articulación conceptual fundante se procesan distintas vertientes internas que expresan modos particulares de desarrollo teórico. Estas vertientes no se apartan de la matriz, sino que se constituyen como ramas de un tronco común que reconocen una única matriz, no obstante los múltiples y variados matices que pueden presentar. Las matrices de

---

<sup>187</sup> En este sentido, coincidimos con el planteo que realiza Anthony Giddens en “Capitalismo y la Moderna Teoría Social. Un análisis de los escritos de Marx, Durkheim y Max Weber”. Edic. Idea Universitaria, Madrid, 1998.

<sup>188</sup> El razonamiento y la elaboración de Alcira Argumedo, nos resultó revelador para el abordaje político comunicacional del instituto. Argumedo, Alcira “Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular”. Ediciones del pensamiento nacional. Buenos Aires, 1993. Ver especialmente los capítulos II y III. Págs. 67 a 134.

pensamiento son formas de reelaboración y sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen raigambre en procesos históricos y experiencias políticas de amplios contingentes de población y se alimentan de sustratos culturales que exceden los marcos estrictamente científicos o intelectuales.

¿Cómo se genera una matriz? El punto de partida de una matriz de pensamiento estaría dado por la forma como se concibe lo social.

¿Cuál es el contenido de una matriz de pensamiento? Definiciones acerca de la naturaleza humana, de la constitución de las sociedades, su composición y formas de desarrollo, diferentes interpretaciones de la historia, elementos para la comprensión de los fenómenos del presente y modelos de organización social que marcan los ejes fundamentales de los proyectos políticos. Asimismo, formulan planteos sobre los sujetos protagónicos del devenir histórico y social, hipótesis referidas a los comportamientos políticos, económicos, sociales y culturales y fundamentos para optar entre valores o intereses en conflicto. Constituyen los marcos más abarcadores que actúan como referencia explícita o implícita, manifiesta o encubierta de las corrientes ideológicas otorgando un “parecido de familia” a las vertientes y actualizaciones que procesan en su seno.

Es aquí, justamente en este punto, en el que pretendemos adentrarnos, en el contenido de una matriz de pensamiento con el fin de situar el derecho de y a la información, y como manifestación de éste el derecho de rectificación como contenido de esa matriz, como elemento componente y resultante de la expresión de determinado modelo y concepción social. Planteamos en este sentido un nuevo interrogante: ¿a quién pertenece la información en una matriz de pensamiento? La búsqueda de la respuesta nos lleva al mismo tiempo a la historia de la información, y lo más importante su consideración y contribución en la definición de las políticas comunicacionales.

Como concepto científico de lo social, la idea de sociedad es desarrollada en la Edad Moderna europea por los pensadores clásicos de las burguesías inglesa y francesa. Este desarrollo adopta como una de las formas principales, la *filosofía jurídico-política*,

para la cual la sociedad se constituye a partir de un contrato o un pacto voluntario entre los individuos racionales que la componen. Esta versión de la filosofía política, que sustenta su desarrollo teórico en la idea del *contrato social*, va a formular, sucesivamente, dos conceptos diferentes de Estado que, a su vez, se basan en dos visiones acerca de la *naturaleza humana* originaria: la teoría del estado absoluto y la teoría del estado representativo o liberal.

#### IV.2.3.2. La información en la teoría del Estado absoluto

El más destacado representante de esta teoría es Thomas Hobbes, para quien la sociedad se constituye ante la necesidad de superar el estado natural caracterizado por “una guerra de todos contra todos”. La constitución de la sociedad se realiza a través de un pacto; pero sólo es posible garantizar ese pacto si existe un gobierno fuerte y eficaz para castigar al incumplimiento. Como la razón es demasiado débil para frenar el egoísmo de los hombres en masa, su teoría identifica así el gobierno con la fuerza, que debe estar constantemente presente, como trasfondo o de manera efectiva, al tiempo que otorga al soberano una legitimidad ya no de origen divino, sino natural. La sociedad aparece de esta manera como un contrato entre individuos racionales en virtud del cual todos renuncian a tomarse justicia por sus propios medios y se someten a un soberano<sup>189</sup>, de ahí la necesidad de la monarquía absoluta, en tanto no existiría opción entre la anarquía total y el poder del soberano.

---

<sup>189</sup> Hobbes, Thomas, “Leviatán”. Edic. Sarpe, Madrid, 1983, págs. : “...se asigna al soberano el poder de recompensar con riquezas u honores, y de castigar con penas corporales o pecuniarias, o con la ignominia, a cualquier súbdito, de acuerdo con la ley que él previamente estableció, o si no existe ley, de acuerdo con lo que el soberano considera más conducente para estimular los hombres a que sirvan al Estado, o para apartarlos de cualquier acto contrario al mismo. Por último, considerando qué valores acostumbran los hombres a asignarse a sí mismos, qué respecto exigen de los demás, y cuán poco estiman a otros hombres (lo que entre ellos es constante motivo de emulación, querellas, disensiones y, en definitiva, de guerras, hasta destruirse unos a otros o mermar su fuerza frente a un enemigo común), es necesario que existan leyes de honor y un módulo oficial para la capacidad de los hombres que han servido o son aptos para servir bien al Estado, y que exista fuerza en manos de alguien para poner en ejecución estas leyes. Pero siempre se ha evidenciado que no solamente la militia entera, o fuerzas del Estado, sino también el fallo de todas las controversias es inherente a la soberanía. Corresponde, por lo tanto, al soberano dar títulos de honor y señalar qué preeminencia y dignidad debe corresponder a cada hombre, y qué signos de respeto, en las reuniones públicas o privadas, debe otorgarse cada uno a otro”.

En este marco, ¿a quién pertenece la información? Indudablemente, solamente al soberano, al poder real. La posesión exclusiva de la información es un elemento más, pero esencial, de la soberanía regia<sup>190</sup>.

Justamente aquí cabe recordar que el 30 de mayo de 1631 aparece el primer periódico francés, “La Gazette”, fundado por Renaudot. Y en torno a esta fecha harán su aparición los primeros periódicos en Inglaterra, España, Italia y Alemania. El nacimiento de la prensa periódica se produce entonces en el tiempo histórico del desarrollo y apogeo de la teoría del Estado absoluto. En la persona del monarca residía la soberanía de forma máxima, única y exclusiva. La lógica social y política de ese pensamiento político generó la integración de los nacientes medios informativos en el poder absoluto del soberano, dándose como un elemento más caracterizador del mismo.

Editar una publicación requería “licencia real”, esto es, en términos jurídicos, un privilegio otorgado discrecionalmente por el rey. El titular de una licencia asumía en consecuencia, una situación de cuasi monopolio. Todos estos hechos daban una cobertura legitimadora al control político de la publicación, la censura previa, la orientación de la prensa desde las instancias del poder absoluto, o el repliegue de las principales fuentes informativas a los circuitos de la política oficial.

En la teoría del Estado absoluto, entonces, las libertades en general y en particular, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a dar y recibir información, y menos aún el derecho a responder, pueden tener cabida, no existen ni tienen posibilidad de existir, son intrínsecamente contradictorios al modelo, y de permitirse atacaría la legitimidad natural del soberano, promoviendo la anarquía total. En efecto, su mera presencia haría añicos al contrato de sometimiento.

#### **IV.2.3.3. La libertad de prensa en la teoría del Estado representativo liberal**

---

<sup>190</sup> Soria, Carlos “Más allá del capitalismo informativo”. Lección inaugural del Curso 1987-1988 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra.

Luego de la Revolución inglesa de 1688, la monarquía parlamentaria, el Estado representativo, expresará el fundamento teórico de su legitimidad en John Locke, para quien el estado de naturaleza en que se encuentran los hombres es de completa igualdad y libertad para ordenar sus actos y disponer sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural.

La ley natural coincide con la razón y enseña que, siendo iguales e independientes, nadie debe dar a otro en su vida, libertad o posesiones, y para evitarlo es preciso castigar a los transgresores de manera tal que impida su violación. Para ello y dadas las deficiencias e inconvenientes que experimentan viviendo aisladamente, los hombres superan el estado de naturaleza a través de un pacto por el cual todos acuerdan formar una sola comunidad y un solo cuerpo político. Así, la sociedad es producto de un contrato entre individuos que tienen voluntad y conciencia para ingresar en él y se da sólo por consentimiento de sus miembros.

Ese orden social que se constituye a través de un pacto es un “orden jurídico”, en tanto la sociedad civil se manifiesta y concreta en las leyes o normas. Para ello, como acto primero, la sociedad debe constituir un poder legislativo, porque con ello provee a la permanencia de su unidad bajo la dirección de ciertas personas que harán los lazos de las leyes hechas por mandato expreso del pueblo. Al mismo tiempo, la sociedad política o civil sólo estará constituida cuando un cierto número de hombres se una renunciando al poder de ejecutar la ley natural. De esta manera, el Estado tiene el poder de hacer las leyes y con ellas la facultad de castigar las transgresiones cometidas por los miembros de esa sociedad o por alguien ajeno a ella –el poder de la paz y de la guerra- origen del poder ejecutivo<sup>191</sup>.

La soberanía radica en el pueblo, que tiene el derecho supremo de apartar o cambiar a los legisladores; en consecuencia los poderes legislativo y el ejecutivo, están subordinados a la comunidad política. La forma de gobierno del Estado dependerá de la manera como se otorgue el poder de hacer las leyes, y para que ese contrato se siga reproduciendo es necesario que los individuos interioricen las normas, pautas o valores y

---

<sup>191</sup> Locke, John, “Ensayo sobre el gobierno civil”. México, Lecturas Críticas. Nuevomar. 1984.

las transmitan a los nuevos miembros que se incorporan a la sociedad por el proceso biológico del hombre. La educación cívica es aquí esencial, dado que sólo se es “ciudadano” cuando se está preparado o maduro para participar en el pacto.

El pensamiento de Locke constituirá la matriz del liberalismo jurídico-político, asentado en la teoría del contrato social y la división de los poderes, posteriormente desarrolladas y profundizadas por Montesquie o Stuart Mill, entre otros.

Una de las claves de la matriz del liberalismo jurídico-político era la pretensión de conseguir la emancipación del individuo<sup>192</sup>, tanto en el plano humano como en el político. Este objetivo se expresaba, de un lado, en la idea de autodeterminación individual, y de otro, en la idea de democracia política, pero a su vez este postulado se propugna para servir los intereses de un individuo independiente y autónomo. Así, el liberalismo asume el trasfondo individualista de la democracia: enarbola la participación de ciudadanos libres en la gestión del Estado (soberanía popular) al servicio del hombre (autodeterminación individual).

Los liberales veían en el Estado el mayor peligro para la autodeterminación individual, por ello trataron de limitar su actuación, en la creencia de que el juego de las libertades individuales, limitándose mutuamente, produciría la satisfacción de los intereses de todos. La participación política debía tender a neutralizar el Estado y a potenciar al máximo la sociedad civil. La esfera pública estaba subordinada a la maximalización de la esfera privada.

Esta concepción liberal de la democracia ha sido, como se sabe, muchas veces criticada. Pero no se trata aquí de asumir ni de rechazar la doctrina liberal e individualista de la democracia, sino de mostrar sus fundamentos legitimadores y analizar en su marco a nuestro objeto de estudio.

---

<sup>192</sup> Saavedra López, Modesto. “La libertad de expresión en el estado de derecho. Entre la utopía y la realidad”. Ariel Derecho, Barcelona, 1987. Cap. II. “Visión normativa de los medios de comunicación de masas. La teoría democrático-liberal de la libertad de prensa”. Págs. 57 y ss.

Como contrapartida al Antiguo Régimen de prensa y como elemento esencial del nuevo modelo, surge el entendimiento de la información como una libertad, o en otros términos, el entendimiento liberal de la información. De esta forma, la libertad de expresión y la libertad de prensa tendrán como sentido objetivo el de producir publicidad política. También se las consideraba en función de necesidades meramente humanas, en tanto eran vehículo de expresión del individuo y cauce para su enriquecimiento espiritual. Pero sobre todo son propugnadas “para resolver problemas políticos y sociales. La prensa libre tiene una importante tarea que cumplir en la democracia política: crear un espacio público de reflexión y discusión para hacer posible una formación racional de la opinión y de la voluntad, capaces de mantener bajo control a los que ejercen el poder mediante la aprobación y la crítica. Está al servicio del ciudadano como plataforma política para controlar la gestión del Estado”<sup>193</sup>.

#### **IV.2.3.4. Clásicos liberales de la libertad de prensa**

Uno de los primeros defensores de la libertad de prensa fue John Milton, en el siglo XVII. Su obra “Aropagítica”, publicada en 1644, es una poderosa defensa de la libertad intelectual dentro de la tradición liberal. Criticó la censura y defendió la capacidad de la razón humana para distinguir entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal. Creía que, para ejercer esa capacidad, el hombre debía tener acceso ilimitado a las ideas y pensamientos de otros hombres. Tenía confianza en el “proceso autocorrectivo” y en el “mercado abierto de ideas” como plataforma para el encuentro de la verdad. El estado debía intervenir, tenía que abstenerse totalmente y quedar fuera en la lucha discursiva, de algún modo –a la manera del liberalismo económico, que más adelante trataremos- tal libertad podía entenderse como “*laissez-faire, laissez-dire*”. En el proceso discursivo libre, el error sería vencido, antes o después, por la verdad.

---

<sup>193</sup> Saavedra López, M. Op. cit., pág. 59.

Milton se revuelve contra la censura puritana de su época, que él mismo había padecido con sus escrito y contra la intolerancia política en el campo de la manifestación del pensamiento: “La batalla por la tolerancia está en el centro de la preocupación cultural o histórica de una Inglaterra que se debate entre los combates soterrados o abiertos entre católicos papales y protestantes puritanos”<sup>194</sup>. En este sentido, se suma a la lucha desplegada por otros intelectuales como Locke. Para Manuel Vázquez Montalbán, “si la reflexión de Bacon o Locke pertenece a la historia de la cultura en general, la de Milton se ciñe expresamente al campo de la libertad de comunicación del hombre como sujeto emisor de mensajes y como sujeto receptor”.

No obstante ello, Milton no aceptaba un derecho ilimitado a la libre discusión. Este sólo debía reconocerse a hombres honestos, por lo que el gobierno podía ejercer la censura contra los católicos de la Iglesia romana, que según él no alcanzaban un nivel de dignidad suficiente, así como contra los periodistas, a los que juzgaba “esclavos de lo efímero”<sup>195</sup>. Milton mantiene una actitud de respeto sagrado hacia la cultura noble y de menosprecio por el género periodístico. Esta consideración plebeya de la prensa se arrastrará hasta el siglo XVIII y servirá de coartada al absolutismo para mantener la censura.

Si se tiene sobre todo en cuenta esta última restricción, concluimos que lo que Milton realmente defiende es a la libertad de imprenta más que a la libertad de expresión. Y es aquí justamente donde radica la interpretación clave de la libertad de prensa en la matriz de pensamiento filosófica-jurídica –que se afianzará con el liberalismo económico- y que hará de fundamento a la concepción y posesión empresarista de la información.

En el siglo XVIII, será Thomas Jefferson uno de los más importantes defensores de la libertad de prensa, para quien la prensa libre era un elemento esencial de la democracia pues la concebía como fuente esencial de información y orientación para el individuo al mismo tiempo que como instrumento para precaver al gobierno contra posibles

---

<sup>194</sup> Vázquez Montalbán, Manuel. “Historia y comunicación social”, Ediciones Bruguera, Barcelona, 1980, p. 105.

<sup>195</sup> Saavedra López, M. Op. cit. pág. 60.



desviaciones de sus propósitos originales. Su pensamiento concordaba plenamente con la idea general de la libertad del liberalismo.

En esa época, la defensa de la libertad de prensa se añadió a la reivindicación general de la libertad del individuo frente a la represión de los poderes tradicionales, el Estado y la Iglesia. La lucha por la libertad de prensa acompañó a la lucha de la burguesía por las libertades políticas. La Ilustración reivindicó la abolición de la censura y la libertad de imprimir. Y es en el siglo XVIII, en el cual tales luchas comenzaron a plasmarse normativamente:

- **Declaración de Derechos del Estado de Virginia, de 12 de junio de 1776**: su art. 12 consagró la libertad de prensa.

Sobre esta Declaración, nos apunta el Catedrático González Ballesteros, cabe tener presente que está considerada la primera declaración de derechos humanos de la historia moderna, aunque tiene un importante antecedente en la inglesa “*Bill of Rights*”. Fue adoptada unánimemente por la Convención de Delegados de Virginia en el marco de la Revolución de 1776, en la que las trece colonias británicas del continente americano dispusieron su independencia. A través de la Declaración se animó a las demás colonias a independizarse de Inglaterra. Es un documento que proclama que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos de los cuales no pueden ser privados. Es el precedente directo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, elaborada en el marco de la Revolución Francesa; y de la Carta de Derechos de los Estados Unidos, que entró en vigor en 1791 como las diez primeras enmiendas a la Constitución. La Declaración está compuesta por dieciséis artículos en donde se enumeran derechos, “*pertenecientes al buen pueblo de Virginia... como la base y fundamento de su Gobierno*”, tales como el goce de la vida y de la libertad, a poseer propiedades, al debido proceso, o a la libertad de prensa y de religión. También proclama la soberanía popular, la prohibición de privilegios de nacimiento, la división de poderes y el juicio por jurados. Algunos especialistas destacan el hecho de que la Declaración convivió con la esclavitud y la falta de derechos para las mujeres.

- **Constitución de los Estados Unidos de América, 1791**: se añade la primera enmienda a la misma, en la que se establece que “el Congreso no hará ley alguna por la que (...) se limite la libertad de palabra, o la de prensa...”.

Al respecto, rememorar González Ballesteros: “Seguidamente el Congreso General de las Trece Colonias redactó y aprobó la *“Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”*, de 4 de julio de 1776. Su autor principal, Thomas Jefferson, la escribió como una explicación formal de por qué el Congreso había votado declarar la independencia respecto a Gran Bretaña, anunciando que las Trece Colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Filosóficamente, la Declaración hace énfasis en dos grandes temas: Libertad e Igualdad. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses e influenciaron particularmente a los revolucionarios franceses. Consta de cinco partes: “Introducción, Preámbulo, Acusación de Jorge III, Denuncia de los británicos y Conclusión”. El proceso constituyente norteamericano culmina con la *“Constitución de los Estados Unidos de América”*, de 17 de septiembre de 1787, y la *“Carta de Derechos”*, de 1791”<sup>196</sup>.

- **Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Francia, 1789**: formula en su artículo 11, que “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley”.

No podemos dejar de mencionar, en este contexto, el aporte de la Constitución de Cádiz de 1812. Al respecto señala González Ballesteros que “la Constitución de Cádiz, de 19 de marzo de 1812, después de establecer que: *“La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”* (art. 3º), disponía en el art. 371: *“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin*

---

<sup>196</sup> González Ballesteros, T. ob. cit. “Democracia y comunicación...”. Pág. 12.

*necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes*”. La forma en que se trata la libertad de expresión del pensamiento, tanto en el Decreto de 1810 como en la Constitución de 1812, son el reflejo de las corrientes ideológicas dominantes en Europa desde la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (citada), y su inmediato precedente americano, éste sin la cláusula de responsabilidad<sup>197</sup>”.

#### **IV.2.3.5. La libertad de prensa en el liberalismo económico**

En el siglo XVIII, asimismo, la otra forma fundamental que toma el concepto de sociedad en el pensamiento liberal es la desarrollada por la Economía Política, cuyos primeros representantes son Adam Smith y David Ricardo, quienes basándose en el concepto de naturaleza humana egoísta formulada por Hobbes, aunque con una idea distinta de lo social, propondrán el liberalismo económico como matriz teórica diferenciada de la filosofía jurídico-política liberal<sup>198</sup>.

Para la matriz del liberalismo económico, la sociedad aparece como un orden o estructura que los individuos crearían sin tener conciencia de ello, al perseguir sus fines particulares. En la búsqueda individual del lucro, los hombres, guiados por una “mano invisible” van conformando a través del mercado una estructura donde el comportamiento individual egoísta redundaría en el bienestar general. Este orden natural que se desarrolla a espaldas de los individuos, tiene una legalidad o necesidad propia de carácter objetivo, en tanto no es producto de la voluntad o de la conciencia subjetiva de cada uno de ellos. Es la naturaleza de este orden, y no la formulación de un pacto racional entre los individuos, el que otorga al Estado la función prioritaria de gobierno, siendo la forma política de éste secundaria respecto al papel principal de garantizar la seguridad de los bienes privados y promover la seguridad mercantil.

---

<sup>197</sup> González Ballesteros, T. ob. cit. “Democracia y comunicación...”. Pág. 23.

<sup>198</sup> Argumedo, Alcira. Op. cit. pág. 96 ss.

El Estado debe asumir el rol de mal necesario que garantiza la libre iniciativa de la sociedad, que sustenta la seguridad privada sin interferir en el sano despliegue de las leyes naturales del mercado.

En ambas matrices –la filosófico jurídica y la económica- el derecho natural de propiedad de los hombres sobre sus bienes, originados por el trabajo y transmitidos por herencia, sólo puede generar conflicto en tanto alguien pretenda arrebatarle a un hombre sus pertenencias. Ni aún el poder supremo o legislativo de una comunidad política puede disponer arbitrariamente de los bienes de sus súbditos, ya que quien detente el poder lo ha recibido para que los hombres puedan poseer con seguridad sus propiedades.

Las dos matrices eluden la desigualdad que genera el poder económico –por lo demás, no concebido como poder sino como derecho- y afirman una total independencia entre la economía y la política. Los individuos sólo se vinculan en tanto ciudadanos o en tanto propietarios de bienes intercambiables en el mercados, sin que estas actividades tengan ninguna relación entre sí: la igualdad jurídica y política de los ciudadanos no se ve afectada por eventuales diferencias legadas con su actividad económica. En todo caso, tales diferencias son sólo cuantitativas, lineales, vinculadas con la mayor o menor posesión de bienes que, en última instancia, depende de la mayor o menor “competencia” individual para alcanzarlos, sin que la riqueza de unos tenga nada que ver con la pobreza de otros. No hay, por lo tanto, contradicciones intrínsecas de lo social determinadas por diferencias económicas que se derivan de la propiedad. Los eventuales conflictos sociales aparecen como problemas puntuales, acotados, que no deben cuestionar ni el “orden natural” del mercado, ni el orden legislativo-político<sup>199</sup>.

En este marco de referencia, se sitúa la denominada etapa empresarista de la información<sup>200</sup>, a la cual se llega a través de un reduccionismo progresivo operado a lo largo de un siglo. La libertad de prensa será insensiblemente libertad para la prensa, se

---

<sup>199</sup> Argumedo Alcira, op. cit. pág. 98.

<sup>200</sup> Soria, Carlos. Op. cit., Desantes Guanter, J.M. “El derecho humano a la información en el contexto de los derechos humanos”, en Información y derechos humanos, Pamplona. 1987.

entenderá reductivamente como libertad de constitución de empresas de prensa; y finalmente la libertad para la empresa únicamente querrá decir libertad para el empresario, es decir, para la persona que rige y controla la organización informativa.

La dialéctica informativa se concibe como una relación estricta entre el poder político-administrativo y el empresario, únicamente ellos son los agentes de la actividad informativa.

Todo esto no significa sin embargo, que el Estado hubiera de mantenerse completamente al margen, respetando de todos modos el principio, los liberales eran conscientes de los inconvenientes del ejercicio individual ilimitado de la libertad de expresión. Como en lo relativo a las libertades en general, el primer límite estaba en los derechos de los demás. Así, por ejemplo, la difamación o la calumnia tenían ya una caracterización en la legislación penal, y los tribunales debían velar por su respeto. Los principios generales eran:

- 1) que en casos de mensajes erróneos o tendenciosos se suponía que el público sabría distinguir a la larga lo que favorecía sus intereses particulares y los de la sociedad a la que pertenecía. Habría más inconvenientes en que el Gobierno censurase el error o la mentira que en el caso contrario, por eso confiaban absolutamente en el proceso autocorrectivo de la libre expresión;
- 2) la moral pública y el Estado debían protegerse. La obscenidad y la sedición se concebían como disvalores en los que, si bien sin haber acuerdo acerca de su alcance, se basaba la intervención restrictiva del legislador sobre el ejercicio de la libertad de prensa.

La empresa informativa aceptará sin reservas, o con reservas simplemente tácticas, la regla áurea de que toda empresa se organiza para el lucro. La aceptación incondicional de esta regla lleva a considerar que la actividad informativa no se diferencia sustancialmente de cualquier otra actividad industrial, comercial o de servicios. La información, es otra mercancía, sin rasgos específicos diferenciadores. El público es puramente un consumidor.

La empresa de informaciones se rige de acuerdo con las simples leyes del mercado; y el empresario asume voluntariamente el oficio de “mercader de noticias”.

En el liberalismo económico informativo, en fin, la condición de propietario del capital se identifica con la noción misma de empresa. La empresa es el empresario y nada más que el empresa. La libertad de prensa es libertad de empresa. Las implicaciones de este planteamiento han sido nítidamente descritas por el Prof. Desantes Guanter. El propietario del capital, en todo caso, determina lo que es información y la información que se difunde: “El director, editor, responsable o a figura equivalente (...) no hace sino actuar como cabeza visible de un poder a veces críptico y asumir la responsabilidad de unas decisiones que no toma. Los redactores, o los informadores, ni eso”<sup>201</sup>. La relación jurídica que nace del contrato de trabajo se considera inespecífica, y permite deducir la degradante idea de que los hombres son simples medios dentro de la organización empresarial.

Las consecuencias normativas fundamentales de la libertad de prensa en la doctrina liberal, eran, entre otras: libertad total sin censura previa, posibilidad de publicar y distribuir abierta, sin permisos ni licencias; sólo los ataques a los individuos privados, la traición y las amenazas a la seguridad podrían castigarse una vez producidas, por el contrario, los ataques al gobierno, a los funcionarios o a los partidos políticos no se deben castigar, ni siquiera después de producidos; no debe obligarse a publicar ninguna cosa; la publicación del error está tan protegida como la de la verdad en cuestiones de opinión y creencias<sup>202</sup>.

No fue casual, que en pleno auge de la filosofía jurídico-liberal, Dulaure<sup>203</sup> haya propuesto en Francia el “droit de réponse”, el derecho de respuesta, y que no prosperara por “reaccionario” y violatorio de la libertad de prensa, para los opositores de entonces. Es decir, el antecedente más lejano conocido sobre el derecho de rectificación o respuesta, nació en el propio seno liberal francés, y en el mismo seno fue condenado. En efecto, fue

---

<sup>201</sup> Desantes G., op. cit.

<sup>202</sup> McQuail, Denis. “Introducción a la teoría de la comunicación de masas”, Paidós, Barcelona, 1985, p. 110.

<sup>203</sup> Ver Antecedentes, en este mismo trabajo.

natural el nacimiento del derecho de respuesta en el pensamiento liberal que propugnaba al individuo como sujeto de derechos, en igualdad de condiciones y con plena libertad; sin embargo, el trastocamiento conceptual de la libertad de prensa para la empresa, la férrea defensa individualista y utilitarista de los derechos, transformó a la expresión en privilegio de unos pocos.

A su vez, el derecho de respuesta, no puede aceptarse en esta matriz de pensamiento, pues ello implicaría violentar las consecuencias normativas fundamentales de la doctrina liberal: obligar a publicar al medio lo que no desea, arrebatarle su derecho de propiedad obligándolo a disponer un espacio en el medio lo que implica asumir un costo económico no querido; dejar al medio en indefensión y ejercer una censura encubierta.

Si estos postulados político-económicos liberales parecen propios de la discusión del pleno auge de esas ideas en el siglo XIX, en realidad hoy siguen presentes, renovadas y reforzadas. No tenemos más que remitirnos a las defensas que los medios esgrimen y los agravios que presentan ante una acción de rectificación, a los ataques que realizan al derecho de respuesta, y a las denostaciones a ultranza de los opositores a su existencia<sup>204</sup>.

#### **IV.2.3.6. La libertad de prensa en la matriz de pensamiento marxista**

La crítica de la libertad comercial de la prensa se hace patente en la voz de Marx. Es necesario tener presente que Marx apreciaba la libertad de prensa como algo positivo, como una condición básica de una sociedad libre y democrática, y de hecho ejerció asiduamente como publicista, llegando incluso a ser redactor jefe de la Rheinische Zeitung, de Colonia, órgano de oposición de la burguesía renana radical<sup>205</sup>.

---

<sup>204</sup> Creemos necesario tener en cuenta este planteo, en la lectura de la jurisprudencia argentina y en los ataques del derecho de respuesta, tal como lo analizaremos más adelante.

<sup>205</sup> Además de ese cargo, al que tuvo que renunciar en 1843 ante las dificultades de la censura prusiana, ejerció como periodista en 1848, como jefe de redacción de la Neue Rheinische Zeitung y en 1852 comenzó a colaborar en el New York Daily Tribune.

En sus comentarios periodísticos sobre los debates de la VI Dieta Renana, Marx elogia la libertad de prensa y critica a sus detractores. Considera que la prensa libre es un vínculo de unión entre el individuo y el Estado, contribuye a superar el enfrentamiento entre la esfera estatal y la social, y colabora a la autoconciencia de la sociedad: “La prensa libre es el ojo siempre vigilante del espíritu del pueblo, la confianza materializada de un pueblo en sí mismo, el nexo expresado en palabras que une al individuo con el Estado y con el mundo, la cultura incorporada que esclarece las luchas materiales como luchas espirituales e idealiza su tosca forma material. Es la confesión abierta y sin reservas de un pueblo ante sí mismo, y la confesión tiene, como se sabe, fuerza redentora. Es el espejo espiritual en que un pueblo ve reflejada su imagen, lo que constituye la condición primordial de su sabiduría”.

Sin una publicística crítica e ilustrada “el pueblo se hunde, parte en la superstición política, parte en el descreimiento político o, volviendo la espalda a la vida del Estado, se convierte en una chusma privada”. Los que combaten mediante la censura la libertad de prensa, contribuyen a bloquear la concientización del pueblo y a impedir su emancipación. Defendiendo la libertad de prensa mediante la ley, y en contra de la censura legal, Marx afirma que “en la ley de prensa se castiga la libertad. En la ley sobre la censura la libertad es castigada. La ley de censura es una ley nacida de la sospecha contra la libertad. La ley de prensa es un voto de confianza que la ley se da a sí misma. La ley de prensa castiga el abuso de la libertad. La ley de censura castiga la libertad como un abuso”.

Para Marx, la libertad de prensa no coincide con la libertad de empresa. “Libertad industrial, libertad de la propiedad, libertad de conciencia, libertad de la prensa o de los tribunales: son todas especies del mismo género, de la libertad por antonomasia. Pero sería caer en un craso error el olvidar la diferencia por debajo de la unidad y, más aún, el convertir una determinada especie en pauta, en norma, en esfera de las demás. Es la intolerancia de una especie de libertad, que sólo admite las otras cuando se derivan de ella y se declaran vasallos suyos (...) Hacer de la libertad de prensa una especie de libertad industrial es defenderla matándola, pues, ¿acaso no anulo la libertad de un carácter cuando



exijo que sea libre a la manera de otro? Tu libertad no es la mía, le grita la prensa a la industria. La primera libertad de la prensa consiste precisamente en no ser una industria”.

Con estas críticas a la libertad comercial de la prensa, Marx se distanciaba de las concretas demandas liberales, imperantes en su época, y percibe claramente lo que estaba llegando a ser la prensa<sup>206</sup>.

#### **V. 2.3.7. La teoría de la responsabilidad social de la prensa**

En el primer tercio del siglo XX, la degradación de la prensa se había hecho tan evidente que las apariencias de su régimen liberal ya no podían sostenerse por más tiempo. Fue necesario adaptar las concepciones liberales, en un intento de hacer frente a la evolución histórica, manteniendo la esencia de la iniciativa privada. Como el conjunto de derechos humanos, la libertad de expresión mediante la prensa, experimentó una transformación en la búsqueda del denominado “bien común”, “interés general” o el “bienestar social”. Si a la propiedad se le podían imponer límites en virtud de su necesaria “función social”, también a la libertad de prensa se le podrían imponer deberes y limitaciones en su ejercicio, para que dicha función social no quedase anulada.

Se intentó garantizar esta función social por distintos procedimientos, desde medidas económicas y fiscales hasta el reconocimiento de principios deontológico-profesionales para el ejercicio de la información periodística. La mayoría de estos procedimientos suponen una actuación del Estado, para corregir el principio liberal de la no intervención, aunque sin negarlo por completo. El Estado podrá intervenir para promover el

---

<sup>206</sup> Para abordar las lecturas críticas de Marx sobre la censura y la libertad de prensa, la encontramos, fundamentalmente en C. Marx y F. Engels: “Obras Fundamentales, T. I: Marx, Escritos de juventud”, Edic. Fondo de Cultura Económica, México, 1982, págs. 149 y ss. Ver también “La miseria de la filosofía”, Edic. Sarpe, Madrid, 1984. “Señores, no os dejéis suggestionar por la abstracta palabra libertad. ¿Libertad de qué? No se trata de la libertad de un simple individuo en presencia de otro individuo. Se trata de la libertad que tiene el capital para aplastar al trabajador”.

proceso de la libertad individual de expresión, pero sin hacerse cargo él mismo de la comunicación social en representación de los individuos<sup>207</sup>.

Esta intervención del Estado es coherente, además con la transformación experimentada por el Estado de derecho a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Del Estado abstencionista se pasa al Estado intervencionista, en un proceso que no nos corresponde tratar aquí. Pero sí vale decir que este proceso de transformación es paralelo al experimentado por los derechos humanos, y se produce por el establecimiento de límites al carácter absoluto e los derechos individuales por un lado, y por la aparición de nuevos derechos de carácter colectivo, económico y social, por otro. Los nuevos derechos económico-sociales se traducen en exigencias de prestaciones estatales, exigencias de carácter más político que jurídico, que se plasmará en los postulados del constitucionalismo social y darán lugar a servicios públicos y administrativos del Estado.

En este contexto, surge la llamada “teoría de la responsabilidad social de la prensa” que corrige algunos de los postulados de la doctrina liberal clásica. En este sentido, y teniendo en cuenta la definición que hemos dado de “matriz de pensamiento”, es necesario decir que la teoría de la responsabilidad social, es una vertiente de la matriz de pensamiento liberal, se genera y pertenece a la misma, y de ningún modo hace a una ruptura de ella, sino que es una ramificación del tronco común liberal y se constituye en un modo de desarrollo teórico que sigue legitimando el modelo liberal.

La formulación de la teoría, no exenta de contradicciones y de lagunas, tiene su origen en Estados Unidos en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en ella se destacaron Th. Perterson y Wilbur Schramm.

La teoría de la responsabilidad social parte de una definición de las funciones normativas de la prensa que coincide básicamente con las concepciones liberales: información, ilustración y control democrático del Estado. Esto significa que la prensa tiene

---

<sup>207</sup> Saavedra López, M. Op. cit. Capítulo IV. “Nueva visión normativa de los medios de comunicación de masas: la función social de la prensa”.

una función social y política que cumplir, “función social” que ahora se asume explícitamente y se intenta salvaguardar normativamente. La doctrina liberal daba por supuestos estos rendimientos de la prensa como consecuencia de la libre iniciativa individual. Para los teóricos de la responsabilidad social, esa libre iniciativa ha perdido credibilidad y, para conseguir el cumplimiento de aquellas funciones, hay que limitarla y completarla; hay que dirigirla, ya que su funcionamiento espontáneo no garantiza las buenas prestaciones que se esperaban de ella.

La actividad de la prensa comienza a girar en torno del público lector, cuya protección se percibe como una necesidad cada vez más urgente. Se insiste en el derecho del público a ser informado a partir de una pluralidad heterogénea de fuentes, sin manipulaciones, “con objetividad” –según sus propugnadores- y respetando ciertos valores morales y culturales representativos de la dignidad de la persona y el progreso de la civilización.

Siguiendo a Denis McQuail,<sup>208</sup> presentamos esta síntesis de los principios normativos de la teoría de la responsabilidad social:

- Los medios de información deben aceptar y cumplir determinadas obligaciones con la sociedad.
- Esas obligaciones deben cumplirse, sobre todo, estableciendo un nivel profesional o alto de información, veracidad, exactitud, “objetividad” y equilibrio.
- Al aceptar y aplicar estas obligaciones, los medios deben autorregularse dentro del marco legal y de las instituciones establecidas.
- Los medios deben evitar todo aquello que induzca al delito la violencia o el desorden civil, o bien que resulte ofensivo para las minorías étnicas o religiosas.
- **Los medios, en conjunto, deben ser pluralistas y reflejar la diversidad de la sociedad, concediendo acceso a los distintos puntos de vista y al derecho de rectificación o réplica.**

---

<sup>208</sup> Mc. Quail, Denis. “Introducción a la teoría de la comunicación de masas”, Paidós, Barcelona, 1985, págs. 112 y ss.

- La sociedad y el público, como se deduce del principio expuesto en primer lugar, tienen derecho a esperar buenos niveles técnicos, y estaría justificada la intervención para asegurar el bien público.

El derecho de rectificación o respuesta encontrará, entonces, dentro de la matriz liberal y específicamente en la teoría de la responsabilidad social, su explicación y fundamento político comunicacional, la justificación necesaria de su pertinencia y existencia, pero su esencia, no estará marcada tanto por el derecho a la libertad de expresión de quien rectifica, sino más bien, por la jerarquización profesionalista de quien informó responsablemente y de algún modo “aprende” y “responde” por el ejercicio de su actividad informadora. En este marco, se concibe al derecho de rectificación como “una técnica indirecta que contribuye a la difusión de una información no distorsionada ni distorsionante”<sup>209</sup>.

La teoría puede concretarse en otras medidas legales, entre las cuales figuran algunas de carácter económico y financiero y otras tendientes a proteger el ejercicio individual de la libertad de expresión y de obtención de la información, como el derecho de rectificación, el secreto profesional, el derecho de acceso, entre otros.

Estamos en plena etapa profesionalista de la información, en la cual el sujeto profesional y su responsabilidad como tal, señalará que el informador no trabaja para la empresa, sino para la información, aunque lo haga, eso sí, en la empresa, con la empresa y desde la empresa<sup>210</sup>.

La teoría que nos ocupa, como propia del liberalismo, afirma que los límites no son impuestos por la administración a su propio arbitrio ni en ejercicio de tutela alguna sobre la actividad desarrollada por los medios, sino que se derivan de la voluntad popular a través de la legislación parlamentaria y con las garantías democráticas comunes en su aplicación.

---

<sup>209</sup> Saavedra, L. op. cit. pág. 110.

<sup>210</sup> Soria, Carlos, op. cit. pág. 15.

Así pues, se expresa y se establece la prohibición de la censura previa, la definición en leyes ordinarias y su aplicación por tribunales ordinarios.

Las leyes protegen intereses individuales y sociales esenciales y en esto no hay diferencia respecto de las concepciones liberales. “Ninguna sociedad, por impregnada que esté de liberalismo, puede tolerar la divulgación de hechos o la expresión pública de opiniones que atenten contra los valores fundamentales o lesionen a sus miembros sin la justificación de un interés general. Todos los países democráticos recogen con más o menos extensión este tipo de límites al ejercicio de la libertad de expresión<sup>211</sup>”.

A esta altura, no cabe duda entonces, que el derecho de rectificación o respuesta se engarza en el modelo liberal, muy a pesar de que los empresarios de los medios, en las defensas de sus litigios en los que se pone en cuestionamiento la “concesión” de este derecho sostengan lo contrario, y lo vean como propio de “regímenes autoritarios”<sup>212</sup>.

No descubrimos la pólvora con el razonamiento expuesto, pero creemos que al menos ponemos de manifiesto, de una forma más sistemática, aquello que los opositores al derecho de rectificación se niegan a admitir u omiten considerar: el derecho de respuesta nace y se explica en la matriz del pensamiento liberal.

### *La teoría de la responsabilidad social en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina*

Los valores deontológicos de la teoría de la responsabilidad social y la autorregulación de los medios aparece citada por la Corte en el famoso fallo Ekmekdjian c. Sofovich, trayendo la protección del pluralismo religioso, protegido en forma controvertida en dicho caso. El considerando 27, segundo párrafo de la sentencia rescatará los valores

---

<sup>211</sup> Terrou, F. “La información”, Edic. Oikos-Tau, Barcelona, 1970, pág. 109.

<sup>212</sup> Ver al respecto, el ya citado caso “Petric Domagoj c. Página 12”. Incluso, y particularmente la disidencia del Dr. Belluscio, resulta llamativa en este sentido, por su consideración del “fuerte espíritu antidemocrático” del instituto a la vez que resalta la concepción del “país de indudable tradición democrática: los Estados Unidos”.

éticos expresados por W. Rivers y William Schramm, dos de los sostenedores más conocidos de esta teoría, cuyo libro “Responsabilidad y comunicación de masas”, publicado en 1973 explicita acabadamente los rasgos y elementos caracterizadores de la teoría conforme la hemos desarrollado.

En el mismo precedente, la Corte sostuvo que *“el acrecentamiento de la influencia que detentan los medios de información tiene como contrapartida una mayor responsabilidad por parte de los diarios, empresas editoriales, estaciones y cadenas de radio y televisión, las que se han convertido en colosales empresas comerciales frente al individuo, pues “si grande la libertad, grande también debe ser la responsabilidad”. Así entonces, frente a los avances y al uso que se dé a los medios de comunicación no parece inapropiado considerar que el porvenir de la sociedad contemporánea depende, en buena medida, del “equilibrio” entre el poder de los medios y la aptitud de cada individuo para actuar en la liza a la que es llevado por la información”*<sup>213</sup>. Este criterio, será sostenido y repetido de ahí en más en los fallos subsiguientes.

El recorrido histórico de las ideas políticas y la libertad de prensa, es tomado por Carlos Fayt, quien con cita de Georges Burdeau, dirá: *“las mutaciones ocurridas en el campo de la prensa en estos últimos siglos han obligado a procesar el alcance de las libertades y garantías que aseguran su cumplimiento. Los medios materiales y técnicos, las redes de información, la multiplicación exponencial de la producción, la difusión nacional e internacional de algunos medios, la publicidad y la propaganda, etc., han insertado a la prensa en el tejido de las complejas relaciones económicas en que se encuentran las empresas contemporáneas. La prensa ha seguido el movimiento que, de la empresa artesanal, ha desembocado en la sociedad capitalista”*<sup>214</sup>.

En el análisis del caso “Petric Domagoj c. Página 12” particularmente, el arraigo del derecho de rectificación en la doctrina liberal será reiterada. Por un lado, ese abordaje es

---

<sup>213</sup> Fallos: 310:508, La Ley, 1987-B, 269. Ver también “Ekmekdjian c. Sofovich” y voto del Dr. Nazareno en “Petric Domagoj c. Página 12”.

<sup>214</sup> Voto del Dr. Carlos Fayt en “Petric Domagoj c. Página 12”. La Ley. Tomo 1998-C. pág. 294. Considerando 21.

traído por el Dr. Vázquez, finalizando el considerando 17 de la siguiente manera: *“el movimiento legislativo en la materia es tan amplio y vasto que difícilmente pueda sostenerse con seriedad que no va de la mano del constitucionalismo moderno y de las ideas más arraigadas de origen liberal que cimientan las democracias occidentales”*.

La teoría de la responsabilidad social aparece renuientemente citada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y este dato, no es menor, teniendo en cuenta, las reticencias que siempre ha traído la cita de doctrina extraña al propio y esencial ámbito jurídico normativo. De alguna manera, podemos decir que las sentencias de la Corte tienen como guía y fuente a dicha teoría, y cabe en este marco analizar las señales de su recepción<sup>215</sup>.

En el citado caso “Petric c. Página 12”, es también el Juez Vázquez quien en su voto particular, traerá a la teoría de la responsabilidad social como fundamento para sostener la imbricación del derecho de respuesta en el pensamiento liberal. Citará para ello, al propio Peterson, a Saavedra López y a McQuail, autores que hemos mencionado para abordar los caracteres fundamentales de la teoría:

*“Que no resulta inadecuado sostener que el derecho de rectificación o respuesta, además de tener fundamento en el sistema internacional protectorio de los derechos humanos que nuestro país ha abrazado, lo tiene también en la moderna teoría de la responsabilidad social de la prensa, según la cual la libertad de prensa es abordada con una conciencia más social y menos individualista que la propia de tiempos pasados. En este sentido; la actividad de la prensa se concibe hoy en función del público, cuya protección se percibe como una necesidad cada vez más urgente. Nuevo sentido de la responsabilidad que se traduce, asimismo, en la formulación de códigos morales o de*

---

<sup>215</sup> Las fuentes interpretativas de los jueces argentinos en las sentencias en las cuales se controvierte el derecho a la información, presentan, cada vez con mayor asiduidad, citas y elaboraciones que parten de la teoría de las comunicaciones. Esta es una nota muy particular y propia del tribunal argentino, a diferencia de los tribunales europeos que carecen de citas de doctrina de juristas, y en general, ateniéndose a citas normativas. Este tema resulta por demás interesante y atractivo para el derecho de la comunicación pero es objeto de estudio de otro trabajo ajeno al presente. La cuestión es revelar hasta qué punto y cómo las teorías político comunicacionales influyen o apoyan los fundamentos jurídicos de los magistrados.

*conducta que reflejan obligaciones que acompañan al derecho de libertad de expresión, los que, a su vez, dan lugar a ciertas consecuencias jurídicas, sobre todo en aquellos casos que el derecho a la libertad de expresión se convierte en el privilegio de unos pocos frente a muchos por la misma naturaleza y forma de funcionamiento de los medios periodísticos. Y, en ese orden de ideas, uno de los rendimientos que la teoría de la responsabilidad social espera en la época de la prensa de masas es, según la Comisión sobre la Libertad de Prensa norteamericana, que la prensa se convierta en “un foro para el intercambio de comentarios y críticas” (confr. Th. Peterson, “The social responsibility theory of the press”, en Siebert y otros: “Four Therories of the Press”, pág. 89, University of Illinois Press, Urbana, 1963). Ello significa que los grandes instrumentos de comunicación de masas deben ser contemplados como medios de discusión publicada, dando entrada a puntos de vista contrarios a los suyos. Puesto que el control de la prensa está en un número de manos cada vez menor, ésta debería ser un vehículo de expresión plural de ideas y opiniones, incluso cuando las ideas y opiniones sean contrarias al propietario del medio (confr. Saavedra López, M. “La libertad de expresión en el Estado de Derecho, entre la utopía y la realidad”, p. 103, Barcelona, 1987). Consecuentemente, uno de los grandes principios y expresión misma de la teoría de la responsabilidad social de la prensa es que “...los medios de comunicación deben ser pluralistas y reflejar la diversidad de la sociedad, concediendo acceso a los distintos puntos de vista y al derecho de réplica...” (confr. Denis McQuail, “Introducción a la teoría de la comunicación de masas”, p. 112 y ss. , Barcelona, 1985).*

Que el derecho de rectificación o respuesta tiene raíz inclusive en los procesos de legitimación democráticos, pues como agudamente ha sido destacado, desde “...Max Weber hemos aprendido que uno de los aspectos centrales de la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna ha sido el cambio de una concepción de la legitimidad basada en un consenso que es obtenido comunicativamente, esto es, que es construido a través del debate público. El proceso de obtención del consenso por medio del debate público implica aceptar el dar razones a favor y razones en contra como el camino para resolver controversias... Esta práctica de evaluación crítica de razones ha sido considerada constitutiva de la idea de racionalidad...”. Y



es que “...el debate público es racional cuando los diferentes argumentos y opiniones que se exponen son evaluados y criticados. La racionalidad del debate exige el dar razones a favor y en contra de las ideas que se pretenden defender a través de los medios de comunicación...”, objetivo para el cual se hace imprescindible “...la remoción de aquellos obstáculos, institucionales o no, que afecten la posibilidad de un debate racional (confr. Bouzat, G. “Libertad de expresión y estructura social: el derecho de réplica”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales N° 3, págs. 88, 92 y 93, Madrid, 1989). En ese entendimiento, uno de los instrumentos para allanar el camino indicado es indudablemente el derecho de rectificación o respuesta”.

#### **IV.3. La concepción universalista de los derechos humanos**

La etapa universalista de los derechos humanos, y especialmente del derecho a la información, se abrirá paso, lentamente aunque en forma sostenida con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esa declaración, implicará un horizonte totalmente nuevo en el campo de los derechos humanos, y aunque en su momento su carácter meramente declamativo, la hizo sentir distante en la realidad concreta, su influjo, los compromisos internacionales que fue generando, y finalmente su inserción y aceptación normativa la elevaron como instrumento de defensa y de protección.

En el ámbito latinoamericano, el ya citado Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ratificado por el Congreso en 1984 y finalmente elevado a jerarquía constitucional, en 1994, junto a otros nueve tratados internacionales de derechos humanos –entre los que se encuentran la Declaración del 48- implicará una protección cierta, con mecanismos explícitos, de los derechos humanos y en lo que nos concierne, del derecho a la información.

Larga, dura y penosa sigue siendo la lucha por los derechos humanos “para todos”, sin embargo, este entendimiento, clausura la interpretación de que la

información es el objeto de una potestad del Estado; o como una libertad; o como un objeto de apropiación de las empresas informativas o de los periodistas. La idea de que la información es el objeto de un derecho humano y la libertad el único modo de ejercitarlo, llevará a una conclusión que provocará un viraje total en las concepciones hasta entonces existentes: la información es de todos, pertenece a todos, su titular es el sujeto universal.

Al respecto, Desantes Guanter, sostiene que “se culmina así un proceso histórico-informativo que primero situó el centro de gravedad en la idea de tener y, por lo tanto, en la empresa informativa: después en la idea de ser y, en consecuencia, en el profesional de la información; y, finalmente, en la idea de deber ser, de servir la satisfacción de un derecho”. Pero sólo tiene sentido que el ejercicio de este derecho y el cumplimiento del deber correlativo se den en un ámbito de libertad.

El derecho tiene por objeto la información en toda su amplitud, es decir, abarca las ideas, los hechos, las opiniones, las creencias, pero mientras el sujeto es universal, el objeto admite limitaciones. “No todo lo técnicamente informable es ética o jurídicamente informable. No todo lo comunicable es comunicado. No todo lo que físicamente puede incorporarse a un soporte es ya, por este simple hecho, un mensaje informativo. El objeto del derecho a la información no es universal sino general porque la información admite excepciones en su difundibilidad”<sup>216</sup>. De todos modos, las responsabilidades siempre serán ulteriores y así lo entiende el artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y como así también se entiende el derecho de rectificación conforme se consagra en el artículo 14 del mismo tratado internacional.

Las facultades jurídicas que se integran en el derecho a la información son básicamente tres: la facultad de investigar, de acceder, la facultad de difundir, y la

---

<sup>216</sup> Soria, C. op. cit. pág. 16.

facultad de recibir información. Es decir, el derecho de la información es bifronte, implica la posibilidad de dar y de recibir información, es derecho “a” y “de” la información.

Es necesario reconocer que la inercia del planteamiento liberal de la información o las dificultades concretas determinan, sin embargo, no en pocas oportunidades, que se reduzca el contenido del derecho a la información. Y así se habla únicamente del público –como titular del derecho a la información- como un sujeto pasivo que tuviera únicamente la facultad de recibir pero no las de investigar y difundir información. La teoría hipodérmica de la información, el funcionalismo contribuyeron a esta concepción.

Frente a las concepciones reduccionistas, como sostiene Soria, es preciso afirmar claramente que toda persona es titular de todo el derecho a la información, comprendidas sus tres facultades.

La titularidad universal del derecho a la información fundamenta también el rechazo ético jurídico a considerar al público como una masa informe, despersonalizada y enajenada. Desde el horizonte del derecho a la información no tiene sentido hablar de masas, ni de medios o comunicaciones de masas. La persona será siempre un núcleo titular activo de derechos humanos, libre y responsable.

“Es evidente que la concepción de las funciones de la información va mucho más allá que su utilización como instrumento para el desarrollo; ha de ser concebida como un elemento de y para la integración de los individuos y las colectividades, tanto a nivel nacional como internacional. El poder de la información no puede ser otro actualmente que el de contribuir a la participación de todos en los destinos colectivos, el de facilitar la información previa que posibilite la consecución libre de

los fines individuales y sociales. La información ha de ser un vehículo para la liberación popular”<sup>217</sup>.

El derecho de rectificación o respuesta hace y marca uno de los elementos esenciales del derecho a la información, porque sin su reconocimiento, el derecho a la información es un mero dogma.

La admisión del derecho de rectificación amplía y otorga carácter activo en el derecho a la información a las personas, que en los hechos pueden hacer un efectivo ejercicio de la libertad de expresión, con la posibilidad de rectificar, se restablece la notable desigualdad fáctica que existe entre quienes tienen fácil acceso a los medios y quienes normalmente son vistos sólo como sujetos pasivos de las noticias. Por eso, aquí se rompe la concepción de la “masa informe”.

A su vez, el derecho de rectificación o respuesta, no se limita a ser un instrumento o un medio de expresión individual, sino que es eminentemente social, en la medida que aporta en la comunidad, otra versión de los hechos dados por un medio. Acrecienta a la información, la ensancha en su ejercicio y hace al pluralismo y a las normales y saludables divergencias en una vida en democracia.

En este sentido, es necesario ampliar la interpretación del instituto y abordarlo no como la puesta en evidencia de derechos que colisionan, sino de derechos que concurren y cuya justa ponderación exige la existencia concurrente de ambos, es decir, no es que la libertad de prensa ejercida por el medio al informar, colisiona o choca con la libertad de expresión del aludido, sino que concurren, y su concurrencia real expande al derecho a la información.

Considerar no sólo el ámbito individual del derecho de rectificación que pretende proteger el derecho humano al honor sino también la dimensión

---

<sup>217</sup> Benito, Angel. “La socialización del poder de informar”, Ediciones Pirámide, Madrid, 1978. págs. 18/19.

eminentemente social del mismo, marca una pauta de apertura política comunicacional que sólo puede darse en una sociedad plenamente pluralista.

Tal como sostiene Abad-Alcalá, “la libertad de expresión es clave porque es principio esencial de desarrollo y mantenimiento de la pluralidad” y su defensa debe ir más allá de su institucionalización judicial como garante de la actividad de la prensa<sup>218</sup>.

Ante la reproducción del sistema social y político por parte de los medios, el derecho de rectificación al menos se presenta como herramienta, que no necesariamente de cuestionamiento, sino de ejercicio del derecho a ser oído, de aportar otra versión de los hechos informados en forma inexacta o agravante.

Esta concepción requiere también de posibilidades y prácticas reales culturales de concreción que permitan el ejercicio activo y no la proclama meramente formal de los derechos humanos.

#### **IV.4. Derecho de rectificación o respuesta: su naturaleza y estatus jurídico.**

Hemos remarcado que el único Convenio de Derechos Humanos que consagra explícitamente el derecho de rectificación o respuesta es el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 14.

Esta inclusión, le otorga estatus de derecho humano en el sistema interamericano. Pero vale preguntarse aquí: ¿es un derecho humano autónomo? o ¿forma parte del derecho humano a la información?

A su vez, el Convenio de Roma de 1950 no consagra explícitamente el derecho de rectificación o respuesta, y sin embargo, es un derecho de alta raigambre europea, tal como

---

<sup>218</sup> ABAD-ALCALA, Leopoldo. “Sistema democrático y límites a la libertad de expresión”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y el derecho a la información”. 2004. Pág. 72.

lo hemos analizado y es consagrado por los países que integran el sistema europeo protectorio de derechos humanos.

Tampoco hay una protección explícita del derecho a rectificación o respuesta en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos<sup>219</sup>, cuyo artículo 9 establece que todo individuo tendrá derecho a recibir información y tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley.

Debemos aquí tener en cuenta los llamados derechos implícitos, o también llamados “emergentes”, es decir, aquellos que surgen a partir de interpretaciones uniformes y pacíficas que se efectúan sobre las normas, respecto de situaciones no previstas en tal momento. Esta es, por otra parte, la forma usual de generar derecho internacional especialmente en derechos humanos, cuyo “desarrollo progresivo” tiene lugar precisamente a través de opinio juris y jurisprudencia de los órganos de protección que dan contenido enriquecedor a normas necesariamente escuetas. El hecho de que se trate de principios emergentes y no de normas convencionales claras (como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica que sí lo explicita en su artículo 14) no les resta eficacia como normas vinculantes (cf. Méndez, 1997:518; véanse también Naqvi, 2006 y Andreu-Guzmán, 2012)<sup>220</sup>.

Consideramos que el derecho de rectificación o respuesta no es un derecho autónomo, es decir, no hay necesidad de una consagración específica para su protección, es un derecho integrante del derecho humano a la información y a la comunicación en su amplia interpretación, incluso es una de sus facultades, la de dar y recibir información, la de ya que la información inexacta o agravante, en la facultad de dar, se ve contrastada por el rectificante que la responde, y a su vez da información una vez que la ha recibido. Por ello, es un derecho implícito o contenido en el derecho a la información.

---

<sup>219</sup> Carta de Banjul, aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya.

<sup>220</sup> Loreti, Damián y Lozano, Luis “El derecho a comunicar”. Editores Siglo XXI, Buenos Aires, 2014. Pág. 242.

En palabras del Juez Gross Espiell de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidiera en la Opinión Consultiva que le hiciera el Gobierno de Costa Rica y que a continuación analizaremos: “El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente”.

Esta relación intrínseca, juego armonioso y necesario, entre el derecho a la libertad de expresión es también sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 7/86<sup>221</sup>, solicitada por el Gobierno de Costa Rica, como Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que realizó una serie de preguntas a la Corte. Es necesario tener presente que las Opiniones Consultivas<sup>222</sup> resultan vinculantes cual si fueran sentencias, entonces esta consulta que brindó la Corte Interamericana al gobierno de Costa Rica resulta una indicación para todos los Estados Parte del sistema interamericano de Derechos Humanos. En lo que aquí interesa, Costa Rica preguntó a la CorteIDH si debía considerarse si “el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención está ya garantizado en su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro país contiene el artículo 1° de dicha Convención”.

Así, la Corte respondió entre otras cuestiones, que:

El derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la

---

<sup>221</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos, OPINIÓN CONSULTIVA OC-7/86 DEL 29 DE AGOSTO DE 1986. EXIGIBILIDAD DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA (ARTS. 14.1, 1.1 y 2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) solicitada por el gobierno de Costa Rica.

<sup>222</sup> La posibilidad de solicitar opiniones a la Corte Interamericana está establecida en el Artículo 64 de la Convención ADH. “Artículo 64: 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”.

Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (Convención Americana, Preámbulo; El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 74 y 75), Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 33) (Fundamento 24).

La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1 (**La colegiación obligatoria de periodistas, supra** 18). recuérdese que la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión”(Fundamento 25).

Se observa aquí la importancia que la Corte Interamericana otorga a su antecesor sistema europeo de derechos humanos y cómo tiene en cuenta para su determinación lo establecido por la Resolución (74) 26 del Comité de Ministros del Consejo de Europa<sup>223</sup> fundamentó el derecho de respuesta en el artículo 10 de la Convención Europea, sobre libertad de expresión y recomendó a los Estados miembros, que como mínimo garantizaran el derecho de rectificación o respuesta a los individuos de sus países con ciertos principios tales como la posibilidad de dar su versión ante hechos incorrectos relacionados a él y que la respuesta fuera por un procedimiento ágil y que tuviera la misma cobertura que la publicación original.

Cabe destacar que los adelantos tecnológicos y el paso del tiempo desde la emisión de la resolución mencionada fue tomada en cuenta por el Consejo de Europa, el que en el año

---

<sup>223</sup> Resolution N° (74 26 on the right of reply position of the individual in relation to the press. Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1974 at the 233rd meeting of the Ministers' Deputies.



2004 se expidió con la Recomendación 16 del Comité de Ministros<sup>224</sup> a sus Estados Miembros sobre el derecho de réplica en los nuevos medios de comunicación, contenido que analizaremos más adelante.

En España, no habiendo una consagración explícita en su Constitución sobre este derecho sí hay una Ley Orgánica, la 2/84 que reiteradamente hemos mencionado que regula su ejercicio. Esto implica su reconocimiento como derecho fundamental. En este sentido, Soria señala que “el legislador consideró que se trataba de una norma relativa al desarrollo de un derecho fundamental en sentido técnico, y en consecuencia le otorgó el rango de ley orgánica cuya aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso<sup>225</sup>”. Así, es necesario tener en cuenta que el artículo 81 de la Constitución Española de 1978 establece que “son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (...)”.

Asimismo, Soria entiende que “la ratio del derecho de rectificación en nuestro Ordenamiento es configurar, para las personas aludidas, un medio rápido, un procedimiento urgente y sumario, de combatir la desinformación<sup>226</sup>”.

#### **IV. 5. Bien jurídico protegido**

¿Cuál es el bien jurídico que protege el derecho de rectificación o respuesta?

En la doctrina hay quienes sostienen que el derecho de rectificación protege “la verdad”. Así encontramos la postura de Soria quien sostiene enérgicamente: “No es

---

<sup>224</sup> Recommendation Rec (2004)16<sup>1</sup> of the Committee of Ministers to member states on the right of reply in the new media environment (*Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 at the 909th meeting of the Ministers' Deputies*)

[https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec\(2004\)16&Sector=secCM&Language=lanEnglish&BackColorIntranet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)16&Sector=secCM&Language=lanEnglish&BackColorIntranet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679)

<sup>225</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid, pág. 27.

<sup>226</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional Español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de/a Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid, pág. 35.

información sino desinformación la comunicación de hechos inexactos o, con mucha más razón, falsos. La verdad de los hechos comunicados es un elemento constitutivo esencial de este tipo de mensajes, una *conditio sine qua non* de toda noticia, de todo hecho sobre el que se formula un juicio u opinión. La verdad de los hechos —no simplemente su verosimilitud— es, por tanto, una referencia básica. Precisamente por eso, el derecho de rectificación está limitado en nuestro ordenamiento a la comunicación de hechos, y no es invocable en la comunicación de ideas o de opiniones. Por eso también el derecho de rectificación no tiene por finalidad ofrecer pura y simplemente otra versión diferente a la difundida por el medio informativo, sino rectificar la desinformación producida. Esta rectificación —*rectificare*—, es decir, hacer recta y justa la pseudoinformación precedente, incide de modo directo sobre los anteriores hechos difundidos, los desvirtúa y enmienda<sup>227</sup>”.

Disentimos de esta postura. Lo que el derecho de rectificación o respuesta protege es el derecho a la información de aquél aludido en determinada información que considere inexacta o agravante. No hay oportunidad en el procedimiento de rectificación que evalúe la verdad de los hechos controvertidos. Por eso creemos que el bien jurídico protegido es la libertad de expresión. Podríamos afirmar que es un auténtico derecho a la comunicación pues supone o implica no un diálogo sino un contrapunto de información que el afectado considera inexacta o agravante. Todo ello en pos de proteger el derecho al honor del agraviado.

La finalidad del derecho de rectificación o respuesta es doble, por un lado la facultad de ejercitarlo posibilita la concreción del derecho a dar información, de la libertad de expresión, el derecho a ser oído, dotando al receptor de un rol activo; por otro constituye un medio necesario para asegurar el respeto al derecho del honor, la reputación, la dignidad.

---

<sup>227</sup> Soria, Carlos. “El derecho de Rectificación... op cit. Pág. 35.

He aquí también la esencia del ámbito propio del derecho de rectificación o respuesta, que, como hemos dicho, no exime de otras responsabilidades ulteriores, sean penales o civiles en los que sí hay prueba sobre la veracidad de la información brindada.

El derecho de rectificación o respuesta, ensancha y fortalece el derecho a la libertad de expresión al dar la palabra al afectado. El público sacará sus conclusiones, como opinión pública libre en una sociedad democrática. Y si el tenor de la información y el agravio lo ameritan, el proceso civil o penal correspondiente dará luz sobre los hechos controvertidos.

El derecho a rectificar al mismo tiempo garantiza el derecho de los ciudadanos a la libre información, y se instituye en uno de los instrumentos jurídicos más importantes y a la vez, más sencillos para garantizarla, sostiene Lazcano Brotóns<sup>228</sup>.

Recuérdese también que en el ámbito civil y penal se ponderarán las pruebas pertinentes, el daño efectivamente sufrido e incluso, de corresponder, la aplicación de la doctrina de la real malicia<sup>229</sup> que permite un margen de error en información sobre temas de interés público, siempre que lo controvierta un funcionario, personaje público o persona involucrada en un tema de interés público en el que éste tendrá que demostrar que la información fue emitida con dolo, intención de dañar o con total menosprecio a las reglas de diligencia de la profesión periodística.

---

<sup>228</sup> Lazcano Brotóns, Iñigo. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Universidad del País Vasco. "Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del derecho de rectificación", en "Comunicación y pluralismo", 2010, N° 9, Universidad Pontificia de Salamanca. Págs. 150. Salamanca, 2010.

<sup>229</sup> Sobre la doctrina de la real malicia ver: Caso New Times vs. Sullivan. Constitución y Derechos Humanos. Gelli, Cayuso y otros. Tomo I.

Caso "Patitó, José Angel c. La Nación y otros s/daños y perjuicios". Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. (CSJN) 24-06-2008.

Caso "Morales Solá". La Ley, Buenos Aires. 1996-E, 325.

Caso "Gesualdi c. El Porteño". (Gesualdi, dora M. C. Cooperativa Periodistas Independientes Ltda. y otros. C.S. Diciembre 17 de 1996). La Ley, Buenos Aires. T. 1997-B. Incluyendo Nota al fallo: Dimensiones de la "Real Malicia" y afectación del honor en el caso "Gesualdi", por María Angélica Gelli.

Doctrina de la Real Malicia, por Gregorio Badeni. La Ley, Buenos Aires. T.1997-B. Sec. doctrina.

## Capítulo V

### **Fundamentos del derecho de rectificación o respuesta.**

#### **Su relación con el derecho a la comunicación. Críticas y defensas en el periodismo y en el Derecho argentino**

##### **V.1. Fundamentos del derecho de rectificación o respuesta**

Las miradas controvertidas que ha presentado desde su primer antecedente el derecho de rectificación o respuesta suscitan la necesidad de un abordaje sobre los fundamentos del instituto conjuntamente con su inserción jurídica y fáctica en el ámbito de la libertad de expresión y los derechos humanos.

En este sentido, resulta útil acudir a la dogmática de los derechos para apreciar la relación conceptual existente entre la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación y el derecho de rectificación o respuesta; así como para percibir, en una primera aproximación, la extensión y relación intrínseca de las pretensiones normativas derivadas de la consagración constitucional de tales libertades en el Estado de Derecho.

Teniendo en cuenta entonces el planteo que antecede, es necesario examinar el derecho de respuesta integrándolo en el universo de derechos y libertades, que en el plano teórico se presenta en forma contundente, pero que en lo concreto sufre la eterna problemática de la práctica real, la protección efectiva –y no meramente declarativa– de los derechos humanos. En esta línea interpretativa, a la vez que abordemos el análisis de los fundamentos del derecho de rectificación o respuesta, realizaremos algunas precisiones terminológicas necesarias para el entendimiento integral del instituto.

Se suele incluir la libertad de expresión e información entre las libertades de pensamiento, junto a la libertad de opinión, de culto y de enseñanza. Hay quienes incluso sostienen que hay *una* libertad de pensamiento, constituida por la suma de aquellas

libertades particulares, tendentes todas a la misma finalidad: el mantenimiento de la independencia o autonomía del espíritu de la persona, la salvaguardia de la determinación individual de la conducta en todos los ámbitos de la vida<sup>230</sup>.

## **V2. Libertad de pensamiento y derecho de respuesta**

La libertad de pensamiento se manifiesta de distintas maneras, según el ámbito de actividad mental que se vea afectado por la imposición coactiva de determinadas opciones. Resulta obvio decir, que para que la libertad de pensamiento esté protegida y garantizada fácticamente, es necesario que se pueda manifestar, exteriorizar sin traba ni impedimento alguno. En estas múltiples y posibles manifestaciones, intrínsecamente entrelazadas, tenemos la libertad de opinión y de conciencia, concebida como el derecho a no ser molestado ni discriminado por adoptar determinadas ideas o creencias, que implica también la libertad de manifestación y comunicación de tales ideas y creencias: en el plano religioso, la libertad de cultos; en el plano educativo y científico, la libertad de enseñanza y el plano de la comunicación pública, la libertad de expresión. Esta última recibe denominaciones distintas en función de las técnicas utilizadas para ejercerla: la libertad de prensa e imprenta, libertad de radiodifusión y de televisión, de antena, del teatro y del cine.

Cabe resaltar que la historia del pensamiento universal y el desarrollo de las ciencias se han basado en gran medida en las contribuciones que los pensadores y científicos elaboraron y las respuestas, réplicas o discusiones que tales posturas generaron. Así, desde antiguo ya Sócrates, tal como se perfila en los Diálogos de Platón, busca que su interlocutor descubra la verdad sobre el concepto que se está debatiendo, no como resultado de la enseñanza, sino de la propia reflexión. Allí ya estaba presente la réplica. El camino hacia el conocimiento es un proceso gradual, en el cual la opinión y la creencia constituyen etapas intermedias. El aprendiz se esfuerza y participa activamente en el proceso, que termina

---

<sup>230</sup> Saavedra López, Modesto. “La libertad de Expresión en el Estado de Derecho. Entre la Utopía y la realidad”. Ariel Derecho. Barcelona, 1987.

cuando aquel inventa o descubre la respuesta adecuada a una pregunta bien formulada<sup>231</sup>. Y a partir de allí podríamos seguir analizando los avances del pensamiento y las ciencias expresadas en afirmaciones y concepciones del mundo, y sus consecuentes réplicas aún antes de que Copérnico superara a Ptolomeo con la elaboración de la teoría heliocéntrica. Así, en el siglo XX; la teoría de la relatividad con Einsten superó a la teoría de la mecánica clásica formulada por Newton; en la filosofía Engels cuestiona a Hegel; Piaget<sup>232</sup> le replica a Jerry Fodor en las discusiones de la corriente constructivista; en el campo de la economía la teoría keynesiana tiene la réplica neoclásica con las teorías del crecimiento de Solow y Schulz y por el marxismo; la réplica de Gadamer<sup>233</sup> a lo que interpreta como malentendidos de Habermas acerca de la tarea de la hermenéutica en relación con las ciencias sociales; o en el campo del Derecho la réplicas de Kelsen<sup>234</sup> y Cossio<sup>235</sup> sobre la teoría pura del derecho y la teoría egológica del Derecho respectivamente; o la réplica de Carlos Nino a María Inés Pazos y su respuesta a Bayón sobre Derecho, moral y política<sup>236</sup> y la réplica a sus críticos; en el ámbito de la teoría de la comunicación las réplicas que recibió el funcionalismo<sup>237</sup> del estructuralismo<sup>238</sup> y éste a su vez de la teoría crítica<sup>239</sup>; el concepto de

<sup>231</sup> De la Torre Gómez, Andrés. “El método socrático y el modelo de Van Hiele”. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. *Lecturas Matemáticas*, Volumen 24 (2003), páginas 99–121

<sup>232</sup> Piatelli–Palmarini, M.(ed.). “Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje”, Crítica, Barcelona, 1983.

<sup>233</sup> Al respecto explica García Guadarrama, José Luis: “El debate (ocurrido en Alemania) comienza en 1967, a partir del texto de Habermas “La lógica de las Ciencias Sociales”, y después, en 1970, con el artículo “La pretensión de universalidad de la hermenéutica”, ambos recogidos en el libro “La lógica de las ciencias sociales”, en 1970. Gadamer responde a Habermas en algunos textos que se recogerán más tarde en “Verdad y Método II” (1986), tales como “Retórica, hermenéutica y crítica de la ideología. Comentarios metacríticos a Verdad y Método I” (1967), y “Réplica a Hermenéutica y crítica de la ideología” (1971). Por las fechas de los artículos, correspondientes a su edición alemana, el debate tiene lugar en la época de los movimientos estudiantiles ocurridos en diferentes partes del mundo, época también de renovación teórica de la izquierda en que, a partir de la reinterpretación crítica de Marx y de Hegel hecha por la Escuela de Frankfurt, por un lado, y de la inclusión del psicoanálisis dentro de la teoría crítica, por el otro, se buscaba aportar elementos de reflexión crítica, que contribuyeran a la transformación de la sociedad”. García Guadarrama, José Luis. “El debate Gadamer-Habermas: interpretan o transforman el mundo?”. *Contribuciones desde Coatepec*, enero-junio número 010, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México, pp.11-21. Disponible en <http://www.uma.es/gadamer/resources/Garcia-Gadmer-habermas.pdf>

<sup>234</sup> Kelsen, H. (1953a). “Teoría pura del derecho y teoría egológica. Respuesta al artículo de Carlos Cossio: “Teoría Eológica y Teoría Pura” (Balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina), Buenos Aires, La Ley, t. 72, 749-764.

<sup>235</sup> Cossio, Carlos. (1954a). “La polémica anti-egológica (Respuesta al prof. Hans Kelsen)”, Buenos Aires, La Ley, tomo 76, 740-760.

<sup>236</sup> Nino, Carlos. “Derecho, Moral y Política I”, Gedisa Editorial. Barcelona, 2007.

<sup>237</sup> La teoría funcioanalista está asociada a Émile Durkheim y más recientemente a Talcott Parsons, además de otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton.

<sup>238</sup> El iniciador y más prominente representante de la corriente fue el antropología y etnógrafo Claude Lévi-Strauss, en la década de 1940.

desarrollo sostenido con avance despiadado sobre la naturaleza recibe su fundada réplica en la concepción del desarrollo sustentable amigable con el medio ambiente; y así podríamos seguir con múltiples ejemplos y citas y afortunadamente es dable esperar que sigamos, pues las réplicas, las rectificaciones, las respuestas son propias de la naturaleza humana, del pensamiento del ser humano y su desarrollo.

### **V.3. Libertad de expresión y derecho de respuesta**

En este sentido, podemos afirmar que la *libertad de expresión*, en general, es el derecho a difundir públicamente ante cualquier auditorio, cualquier contenido simbólico. Puede ejercerse verbalmente, a través de libros, periódicos, carteles o panfletos; a través de la radio, la televisión o Internet, las redes sociales, o mediante el sonido registrado en discos, cd, cualquier soporte digital, o por imágenes proyectadas en una pantalla, mediante la acción dramática de actores en presencia de un público, en fin, no importa el escenario o el soporte mediante el cual se realice y abarca todas las posibilidades expresivas. Como dice el Dr. Damián Loreti, ante las distintas formas que tiene la libertad de expresión, “debe primar - a la hora de las clasificaciones - el contenido y no el continente o los mecanismos de transmisión de información<sup>240</sup>”.

Conforme expresa Abad-Alcalá, “debe incluirse la libertad de expresión entre las libertades de pensamiento pues se trata, sin duda alguna, de una de sus dimensiones. Implica la exteriorización del pensamiento, la puesta en común –comunicación- de las posiciones personales, tras un proceso reflexivo de carácter individual. La libertad de pensamiento supone la posibilidad para el hombre de escoger o de elaborar las respuestas que cree pertinente dar a todas las cuestiones que plantea la conducción de su vida personal y social,

---

<sup>239</sup> Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse entre otros son los referentes de la teoría crítica que en el campo de la comunicación considera necesario estudiarla del amplio contexto social, cuestiona el rol de la comunicación en la desigualdad económica y el poder político, sus partidarios no son neutrales, se comprometen con el cambio social, cuestionan el rol de los medios en el refuerzo de la ideología dominante.

<sup>240</sup> Loreti, Damián. 1995. El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.

de conformar estas respuestas sus actitudes y sus actos y de comunicar a los otros lo que cree verdadero<sup>241</sup>”.

Planteada conceptualmente la libertad de expresión, encontramos que el derecho de rectificación o respuesta pone de manifiesto esta libertad, no pudiendo concretarse sin su existencia. El afectado por una información inexacta, al ejercer el derecho de respuesta concreta a su vez la libertad de expresión, expresando –valga la redundancia- su respuesta o rectificación del mensaje informativo dado erróneamente y que le ha producido daño.

Más allá de la eventual interposición de una acción o a las discusiones propias de las controversias judiciales, que tienen su propio ámbito de repercusión o reconocimiento, la persona agraviada tiene la posibilidad de difundir públicamente, por el mismo medio y ante el mismo auditorio al que le ha llegado la información inexacta, su respuesta o rectificación a la misma. Así la libertad de expresión, en sus múltiples manifestaciones se presenta como el género de las libertades y derechos, y el derecho de rectificación o respuesta es una especie de él, con matices y características propias.

#### **V.4. Libertad de prensa o imprenta y derecho de respuesta**

De todas las formas posibles de libertad de expresión, la libertad de prensa o imprenta, resulta trascendente por sus implicancias sociales en el proceso de evolución histórica y jurídica del Estado de Derecho. Sin embargo, tal denominación resulta vetusta, y como sostiene Ana Azurmendi<sup>242</sup>: .es un vestigio de la arqueología jurídica que, a pesar de ello, hoy se sigue empleando –aún por los juristas, los jueces, y los periodistas-, de una manera confusa, pues se pretende referir con ella al derecho a la información o bien a la libertad de expresión, cuando en realidad, y tal como venimos explicitando, los alcances y consecuencias conceptuales de cada uno de ellos deben quedar correctamente aclaradas dadas sus características diferenciadoras”.

---

<sup>241</sup> ABAD-ALCALA, Leopoldo. “Sistema democrático y límites a la libertad de expresión”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y el derecho a la información”. 2004.

<sup>242</sup> Azurmendi, Ana. “Derecho de la Información”. Guía Jurídica para profesionales de la comunicación. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1997. Pág. 29.



La libertad de prensa o imprenta, en su concepto y denominación es propia del constitucionalismo del siglo XIX, concebida como la facultad de difundir hechos, opiniones e ideas contenidas en una publicación periódica para quien escribiera en ellos o fuera dueño de periódicos o revistas. La característica distintiva de la libertad de imprenta radica en el acceso a tal libertad de una manera restringida, esto es, para quienes tenían sus propios medios, es aquellos tiempos, los gráficos. La libertad de prensa, se manifiesta particularmente con la primer etapa por la que atraviesa el hombre respecto de la libertad y la información, denominada la del “sujeto empresario”<sup>243</sup>.

La Constitución Argentina, en 1853, perteneciente a la etapa sobre la que comentamos, en el artículo 14 estableció el derecho de todo habitante de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” y posteriormente, en 1860, el artículo 32 ordenó que “el Congreso de la Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal”. Se adoptó tal denominación porque en aquella época, la prensa, la imprenta, era el único medio imaginable para la publicación de ideas. Tales denominaciones no son estáticas, ni puede aceptárselas restringidas a un soporte – el gráfico-, sino que es menester tener una interpretación dinámica y amplia, que abarque todo el universo posible de soportes tecnológicos<sup>244</sup>.

Presentado el concepto de la libertad de prensa o imprenta, en sentido dinámico, es pertinente trazar la trama que la vincula intrínsecamente al derecho de rectificación o respuesta. En este sentido, en principio, es necesario afirmar que la libertad de prensa o imprenta no es patrimonio exclusivo de la industria ni de la profesión periodística, así como el derecho de defensa no es patrimonio exclusivo de los abogados. Sería un error fundamental creer que la garantía constitucional de la libertad de expresión ha sido

---

<sup>243</sup> Desantes Guanter, José María. “La cláusula de conciencia”, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1978. Págs. 118 y ss.

<sup>244</sup> Este tema lo hemos abordado in extenso en el Capítulo 1 del presente trabajo, al cual nos remitimos breviter causae.

acordada en sus propios intereses a la prensa, a la radiodifusión o al cine<sup>245</sup>. Quien pretende rectificar o responder, no entra discrecional ni arbitrariamente en escena, sino sólo cuando el medio, o el fluir incontenible de las noticias, le provocan la imperiosa necesidad en su dignidad, de presentar la relación personal de los hechos que lo involucran. El editor o el director del medio, no pierden por ello independencia empresarial o intelectual.

En la mayoría de los regímenes democráticos occidentales, se recoge con más o menos extensión el derecho de rectificación o respuesta, como un tipo de responsabilidad ulterior al ejercicio de la libertad de expresión.

La publicación de una respuesta no significa atentar contra la libertad de imprenta, aunque más adelante se retomará esta consideración, vale aquí traer la reflexión del Dr. Boggiano en el fallo “Petric Domagoj, A. c. Diario Página 12”<sup>246</sup>, en el cual sostuvo, en el punto que nos interesa: “Publicar una respuesta no conlleva, para el órgano, retractación alguna, ni rectificación, ni implícito reconocimiento de la inexactitud de la información que difundió, pues la contestación no consagra vencedores ni derrotados, y si los hubiera, el veredicto provendría del público en general”<sup>247</sup>.

De todos modos veremos más adelante, que esta concepción mediante la cual propiciamos una visión social y positiva del derecho de respuesta que se engarza y funda en la libertad de pensamiento, de expresión, y de prensa no es compartida por muchos sectores de la doctrina y de la justicia, y menos aún por los empresarios de los medios de comunicación en Argentina que sostienen que el derecho de rectificación va en desmedro de la libertad de prensa y por ende lo tachan de “inconstitucional”. Este punto de conflicto se ha expuesto con vehemencia ante los tribunales, y las discusiones que ha provocado merecerán un estudio pormenorizado.

---

<sup>245</sup> Ballester, Eliel. “Derecho de respuesta”. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987. Pág. 11.

<sup>246</sup> Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. “Petric Domagoj, Antonio c. Página 12” 97.170. CS, abril 16-1998. L.L. T. 1998-C. Págs. 282 y ss.

<sup>247</sup> Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. “Petric Domagoj, Antonio c. Diario Página 12”. CS, abril 16-1998. La Ley. T. 1998. C. Pág. 282 y ss.

## V.5. Derecho a la información y derecho de respuesta

La denominación y concepción jurídica del “derecho a la información” se nos presenta por primera vez como tal en la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Si bien este documento fue en determinados momentos fue vapuleado por su carácter meramente declarativo, hoy a más de cincuenta años de su vigencia, nadie duda de que fue el puntapié inicial e instrumento esencial en la larga lucha para el reconocimiento efectivo de los derechos humanos, al punto de alcanzar en nuestro régimen jurídico jerarquía constitucional a partir de la Reforma de la Constitución en 1994 (Art. 75 inc. 22).

El valor esencial, en lo que nos concierne, de la Declaración de 1948 es situar a la información, y no ya sólo a la prensa o a las ideas y creencias, como objeto de un derecho humano: *“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”*.

Tal como destaca Ana Azurmendi<sup>248</sup>, “en el texto se identifica libertad de expresión con el derecho a investigar, recibir y difundir información y opiniones. Si se hace una interpretación literal del artículo, el derecho a la libertad de expresión, estaría integrado a su vez por otros dos derechos: el derecho a la información, cuyo contenido serían las facultades de investigar, recibir y difundir información, y un derecho de expresión al que no parece que pueda atribuírsele la facultad de investigar y sí las de recibir y difundir opiniones en sus más variadas manifestaciones. Si el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos supone realmente un paso adelante en la consolidación del derecho a la información, no es menos cierto que continúa la línea de las declaraciones de derechos del XVIII de no distinguir con claridad libertad de expresión-derecho a la información”. Sostiene la mencionada autora asimismo que “serán los textos posteriores,

---

<sup>248</sup> Azurmendi, Ana. Ob. Cit. Pág. 26.

las legislaciones de los países y su aplicación jurisprudencial los que establecerán de forma neta las fronteras entre uno y otro”. Con respecto a esta última observación, lamentamos decir que, salvo excepciones, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia argentina suelen seguir confundiendo los alcances y contenidos de los mismos, confusión que se reitera y se muestra en forma patente, con distintos matices en cada oportunidad en la cual se presenta un litigio relacionado con estos derechos y libertades o bien cuando las legislaturas o el Congreso tratan proyectos de ley. La confusión, creemos, no es sólo una cuestión de imprecisión terminológica, sino también de concepción político comunicacional que hace a una variación de posturas, conforme la expresión de los intereses en juego<sup>249</sup>.

Las innovaciones que aporta la Declaración de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 19 son las siguientes:

- a) Se abandona la idea de que el derecho a la información tenga como contenido esencial la capacidad de libertad; libertad para expresar, escribir, imprimir, en fin, libertad como espacio ganado por el individuo frente al Estado. Es indudable que para que exista el derecho a la información es necesario que exista libertad, pero exactamente en el mismo grado en que es necesaria para el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación, el derecho al voto o el derecho al trabajo.
- b) El contenido esencial del derecho a la información queda definido por las facultades de investigación, recepción y difusión.
- c) La mera enunciación de estas tres facultades: investigar, recibir y difundir, evidencian que no se trata de un derecho que periodistas o empresas informativas puedan ejercitar en forma exclusiva; y si las facultades de investigación y difusión han sido ejercidas tradicionalmente por quienes se dedican a las actividades periodísticas, la facultad de

---

<sup>249</sup> Al respecto, el doctrinario argentino, Dr. Jorge Zaffore, considera diversos factores: “En nuestro país se observa que en materia comunicacional subsisten no pocas imprecisiones en cuanto a las expresiones, palabras o giros más importantes, lo que revela la inexistencia de consenso al respecto. Así, vemos que muchos de ellos no sólo resultan equívocos, sino que además son utilizados —o desechados—, más que por razones prácticas o conceptuales, por motivaciones de naturaleza esencialmente ideológica. Es posible que esa falta de homogeneidad se origine también en la circunstancia de que el movimiento bibliográfico nacional es algo reducido, razón por la cual se usan giros y palabras utilizados en otras latitudes y otras experiencias, a veces con un insuficiente espíritu crítico que posibilite conformar o desechar su empleo”. Zaffore, J. “La Comunicación Masiva”. Edit. Depalma. Buenos Aires, 1990. Pág. 1.

recepción ha recordado en todo momento que el derecho a la información, en todas sus facultades, tiene como titular a la persona humana, por su sola condición de tal.

- d) Comienza a perfilarse la idea, que más tarde desarrollará la llamada “Teoría de la Responsabilidad Social”, de que la información tiene una función social, más allá de quien la difunda, e independientemente de que, en el caso de una empresa, la obtención de beneficios económicos sea también un objetivo prioritario. Ese avance irá de la mano de las conquistas de los derechos sociales y de la paulatina consolidación de los derechos humanos en el ámbito internacional<sup>250</sup>.
- e) Dentro de este planteamiento, el periodista realiza un papel de gestor, de intermediario<sup>251</sup> de la información; no puede desentenderse de la dimensión social de su profesión y convergen en él el derecho de dar y recibir información pero no como patrimonio exclusivo.
- f) Desde el punto de vista jurídico, según el Prof. José María Desantes Guanter<sup>252</sup>, el público se convierte en el destinatario natural del producto informativo de empresas y periodistas, puesto que gracias a ellos puede satisfacer su derecho a la información. Lo habitual ha sido que el público carezca del tiempo, organización y dinero necesarios para realizar las facultades de investigación y difusión. La justificación de la tarea de empresas informativas radica precisamente en la realización profesional de tal cometido.

---

<sup>250</sup> Esta cuestión la tratamos al realizar el Análisis Político Comunicacional del Derecho de Respuesta.

<sup>251</sup> Carlos Soria, en su trabajo “Más allá del capitalismo informativo”, aborda particularmente lo que ya el Prof. Desantes Guanter precisara sobre la idea del “mandato informativo”: “La plenitud, por tanto, del derecho a la información del público, sólo se alcanza por mediación de las organizaciones informativas y de los profesionales de la información. Y así esta idea de mediación, de intermediación natural, permite hablar de una delegación tácita del ejercicio de las facultades de investigar y difundir, y abre la vía para la adecuada construcción del deber profesional de informar. Los profesionales de la información –ha escrito Benito Jaén– “son los delegados del público para la delicada misión de administrar el poder de informar”. Martínez Albertos califica al informador profesional como “administrador y gerente” del derecho humano a la información (...) Mantiene Desantes que los informadores profesionales y las empresas informativas obran en nombre del público a modo de un mandato social, general y tácito. Se trata –advierte– de una delegación en sentido social, no en sentido estrictamente jurídico que llevaría, por ejemplo, a la conclusión inadmisibles o aberrante de pensar que informadores y empresas informativas están sometidos al mandato del público. Lo que el público delega es el desempeño de las facultades de investigar y difundir información; pero corresponde a los informadores y empresas fijar con autonomía y libremente el modo técnico y el modo ideológico de desempeñarlas, de cumplir –hic et nunc– la función de informar”.

<sup>252</sup> Desantes, J.M. “El derecho humano a la información en el contexto de los derechos humanos”, en Información y derechos humanos, Pamplona, 1987.

- g) La información aparece situada desde entonces como objeto central de las relaciones jurídico-informativas, al permitir calificar cada acto informativo teniendo en mira a quienes reciben información. La responsabilidad, que en las declaraciones del siglo XVIII se limitaba a una responsabilidad por daños o por traspasar los límites impuestos por la ley, ahora alcanza una proyección social que va más allá de lo jurídico-normativo.
- h) Ya no hay sólo una concepción del derecho cuyo sujeto titular es quien da información. Se expresa, difunde, opina, sino también un derecho del que recibe y por ende, el derecho a la información se va a constituir como un derecho bifronte, que contempla el dar y el recibir.
- i) A partir de la declaración nace una nueva concepción, entonces, sobre la persona humana respecto de la libertad y la información, ya no constreñida al sujeto empresario o al sujeto profesional, sino pertenecientes a todos y cada uno, por ello denominada “sujeto universal”<sup>253</sup>.

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, en el contexto posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados internacionales de derechos humanos que la fueron afianzando, surge la teoría sobre la responsabilidad social de la prensa, que ya no se atuvo al emisor de la información, sino que da relevancia al receptor e indica obligaciones para el sujeto empresario.

La teoría de la responsabilidad social corrigió algunos de los postulados de la doctrina liberal clásica, no por ello se apartó de ella en lo esencial, sino que agregó entre otros principios normativos, que los medios de comunicación, en su conjunto, deben ser pluralistas y reflejar la diversidad de la sociedad, concediendo acceso a los diferentes

---

<sup>253</sup> Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta la siguiente bibliografía:

- Soria Saiz, C. “Derecho de la información: análisis de su concepto”. Pamplona. 1994. Págs. 49-74.
- Soria Saiz, C. “La crisis de la identidad del periodista”, Pamplona. 1991. Págs. 19-24.
- Desantes Guanter, J.M. “El derecho humano a la información en el contexto de los derechos humanos”, en Información y derechos humanos. Pamplona, 1987. Págs. 15-58.

puntos de vista y al derecho de respuesta<sup>254</sup> como técnica indirecta que contribuye a la difusión de una información no distorsionada ni distorsionante.

Si bien para esta teoría, el derecho de rectificación aparecería como límite al derecho a la información, en el marco de la concepción de la doctrina de la inexistencia de los derechos absolutos, este concepto fue tomado normativamente en distintos ordenamientos jurídicos (como por ejemplo, en España), esta cuestión merece un análisis que realizaremos al abordar las conceptualizaciones del instituto.

Importa sí afirmar que el derecho de rectificación o respuesta se vigoriza a partir de la moderna concepción del derecho universal de la información, por cuanto quien rectifica o responde, habiendo ya recibido la información, la trasciende a un nivel activo, dando su propia información sobre los hechos en los que ha sido involucrado y brindando a su vez su versión fáctica de los mismos a esa misma comunidad, es decir, informando. La contestación de quien se rectifica aporta información, es decir, expande las posibilidades del derecho a la información, “acrecienta el volumen de la información, multiplica las fuentes, facilita la controversia”<sup>255</sup>.

## **V. 6. El derecho a la comunicación y el derecho de respuesta.**

La concepción ideológica del acto comunicativo es esencial para la conceptualizar el derecho a la comunicación, en este caso, siguiendo a Pasquali<sup>256</sup>, diremos que “por comunicación o relación comunicacional entendemos aquella que produce (y supone a la vez) una interacción biunívoca del tipo del con-saber, lo cual sólo es posible cuando entre

---

<sup>254</sup> McQuail, Denis. “Introducción a la teoría de la comunicación de masas”. Edit. Paidós, Barcelona, 1985. Pág. 112 y ss.

<sup>255</sup> Terrou, F. “La información”, Oikos-Tau, Barcelona 1970. Esta reflexión también la aporta el Dr. Boggiano con su voto en el fallo “Petric Domagoj, Antonio c. Diario Página 12”. CS, abril 16-1998. L.L. T. 1998. C. Pág. 299.

<sup>256</sup> Pasquali, Antonio. “Comunicación y cultura de masas”, Monte Ávila, Caracas, 1972. Capítulo I. “Teoría de la Comunicación: las implicaciones sociológicas entre información y cultura de masas. Definiciones”. Págs. 41 a 91.

los dos polos de la estructura relacional (transmisor-receptor) rige una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor”.

“Comunicación es, pues, término privativo de las relaciones dialógicas interhumanas o entre personas éticamente autónomas, y señala justamente el vínculo ético fundamental con un “otro” con quien “necesito comunicarme”; el “estado de abierto” como apertura a, o descubrimiento-aceptación de la alteridad en la interlocución, y, por reflejo, de una conciencia de mí mismo. Hay en esta situación una doble tensión dialéctica. La una, externa y secundaria, es dada por la conmutabilidad del transmisor-receptor y por el estar enfrentados dos polos bien definidos y con mutua capacidad de absorción. La otra, intrínseca y primaria, refleja la propia situación contradictoria al interior del comunicante.

Sólo es auténtica comunicación la que se asienta en un esquema de relaciones simétricas, en una paridad de condiciones entre transmisor y receptor y en la posibilidad de oír uno a otro o prestarse oídos, como mutua voluntad de entenderse. Esta última es la condición básica e insuprimible de la no-contradicción en toda relación de comunicación (que llamamos diálogo) pues “aun cuando aceptase la solicitud del otro de que me esforzara a no entenderlo, caería en una contradicción, ya que por eso mismo lo estaría entendiendo. En la experiencia del diálogo se constituye entre el otro y yo un terreno común; su pensamiento y el mío se entrelazan en solo tejido...insertándose en una operación común de la cual ninguno es el creador. Hay un ser a dos...; somos recíprocamente colaboradores en perfecta igualdad de condiciones, nuestras perspectivas se deslizan la una en la otra, y coexistimos a través de un mundo común. Una relación dialogal o de auténtica comunicación se reconoce en que la persona objeto de una interpelación discursiva “contrahabla” en virtud de un coherente e irresistible impulso, tendiente a reducir el “logos” ajeno a “dia-logo” inter-pares, y lo lleva a efectuación<sup>257</sup>”.

También en América, nos ha enseñado el pedagogo brasileño Paulo Freire: “Lo que caracteriza la comunicación, es que ella es diálogo, así como el diálogo es comunicativo”

---

<sup>257</sup> Pasquali, Antonio. Ob.cit.



(...) El mundo humano es un mundo de comunicación. Cuerpo consciente (conciencia intencionada al mundo, a la realidad), el hombre actúa, piensa y habla sobre esta realidad, que es la mediación entre él y otros hombres, que también actúan, piensan y hablan. (...) Tal vez, rigurosamente, podríamos decir que el verbo que designa el pensamiento, más que puramente transitivo, debería ser uno que comprendiese, como régimen sintático, el objeto de la acción y un *complemento de compañía*.

De este modo, más allá del sujeto pensante, del objeto pensado, habría, como exigencia (tan necesaria como la del primer sujeto y la del objeto), la presencia de otros sujetos pensantes, representados por el complemento de compañía. Sería un verbo “co-subjetivo-objetivo”, cuya función incidente en el *objeto*, sería, por esto mismo, coparticipada. La comunicación implica una reciprocidad, que no puede romperse.

No es posible, por lo tanto, comprender el pensamiento, fuera de su doble función: cognocitiva y comunicativa. Esta función, a su vez, no es la mera extensión del contenido signifiante del significado, objeto del pensar y del conocer. Comunicar es comunicarse en torno al significado signifiante. De esta forma, en la comunicación, no hay sujetos pasivos. Los sujetos, co-intencionados al objeto de su pensar, se comunican su contenido.

En relación dialógica-comunicativa, los sujetos interlocutores se expresan, como ya vimos, a través de un mismo sistema de signos lingüísticos.

Para que el acto comunicativo sea eficiente, es indispensable que los sujetos, recíprocamente comunicantes, estén de acuerdo. Esto es, la expresión verbal de uno de los sujetos, tiene que ser percibida, dentro de un cuadro significativo común, por el otro sujeto<sup>258</sup>.

Si la comunicación, entonces, definirá el intercambio de mensajes con posibilidad de retorno no- mecánico entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de comunicabilidad; la información definirá el envío de mensajes sin posibilidad de retorno no mecánico, con bajo coeficiente de comunicabilidad.

---

<sup>258</sup> Freire, Paulo (1973). *¿Comunicación o Extensión? La concientización en el medio rural*. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI.

Al decir del Prof. González Ballesteros, “el término (*communicatio-onis*) designa la acción y efecto de comunicar (*communicare*), hacer a otro partícipe de algo. La comunicación, referida a mensajes vehiculados mediante un instrumento o medio difusor, se interpreta usual y cotidianamente como la transmisión de informaciones y de opiniones (también de propaganda y de publicidad), y su contenido pretende que el ciudadano, sujeto universal de la comunicación, pueda formarse su propio criterio antes de decidir sobre cuestiones que afecten a la comunidad en general o a él en particular. No hay comunidad sin comunicación. La comunicación, constitucionalizada como el derecho a saber, a estar informado, es un derecho humano y fundamental de la persona y la sociedad, reconocido y proclamado en todos los textos nacionales e internacionales sobre los derechos de la persona y el ciudadano, que se nos hace efectivo a través de los medios masivos de difusión”<sup>259</sup>.

El ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, asumido comunicacionalmente por las partes, el medio y/o el periodista que dio la información y el aludido o afectado, implicaría una posibilidad de escucha cierta y una mutua voluntad de entenderse, pero insistimos, sólo si es asumida y aceptada desde esta perspectiva.

Los medios, al emitir información, no producen una interacción biunívoca del tipo del con-saber, sino una transmisión que llega a receptores que son solo eso: receptores pasivos. El derecho de respuesta, implicaría, una posibilidad concreta de que el receptor, sea a su vez transmisor, que reciba información y que tenga derecho a dar su información, la rectificación, por ende, sería parte del acto comunicativo.

Pero se considera esencial, en este apartado, y a esta altura de la historia de la humanidad, dar cuenta de que más allá de los matices señalados entre libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa o imprenta, derecho a la información, derecho a la comunicación, compartimos el criterio expresado por el Dr. Sánchez de Diego en cuanto a que “con independencia de cuál sea la expresión que se emplee, todas ellas se

---

<sup>259</sup> González Ballesteros, Teodoro. Catedrático del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Democracia y comunicación (reflexiones)”, Madrid, 2013. Pág. 17.

están refiriendo a la protección jurídica del proceso de comunicación. Esto es, el derecho de las personas a emitir mensajes por diferentes canales y el derecho a recibirlos”, y con ello se punta a la tesis unificadora en palabras de Carmona Salgado<sup>260</sup>.

Sánchez de Diego, a su vez, logra completar e ir más allá de los aportes de Desantes Guanter, dándonos nuevas luces sobre el derecho a la comunicación, y su interpretación más amplia, suministrándonos instrumentos para la más efectiva garantía de este derecho. Esto es ya no se trata del “sujeto universal” de la información, sino de la “universalidad de mensajes, de sujetos, de medios y espacial<sup>261</sup>”.

*Universalidad de mensajes* significa reconocer que la libertad de expresión “ampara cualquier tipo de mensaje, bien sea de hechos, de ideas o de opiniones. En su doble valencia personal e institucional todos podemos expresar no sólo nuestra ideas y opiniones, también los hechos de los que hemos tenido conocimiento<sup>262</sup>”.

*Universalidad subjetiva*, implica reconocer “por la vía de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre derechos humanos celebrados por España, tal y como está previsto en el párrafo 2º del artículo 10 CE. En todos ellos figura que es un derecho de “todo individuo” (art. 19 DUDH) o “toda persona” (art. 19 PIDCP y art. 10 CEPDH, expresión que también recoge el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos – CADH. Esto significa que no es un derecho propio de los nacionales españoles, ni de los mayores de edad... **es un derecho de todos y de cada una de las personas**<sup>263</sup>”. Este aporte es totalmente aplicable al derecho argentino teniendo en cuenta que el artículo

---

<sup>260</sup> Sánchez de Diego, M. “La función pública de la información como derecho fundamental”, en Pérez Herrero, Julio César et al. La Teoría de la Información y de la Comunicación en el marco de Bolonia: un manual. Madrid. Universitas, 2009. 77-96.

<sup>261</sup> Estas características y este aporte enriquecedor al tradicional concepto de derecho a la comunicación, lo rescatamos en las aulas académicas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) junto con el Dr. Damián Loreti, ámbitos en los que nos desempeñamos como docentes.

<sup>262</sup> Sánchez de Diego, M. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”, en Diálogos de la Comunicación. N° 82. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Septiembre-Diciembre de 2010. Pág. 8.

<sup>263</sup> Sánchez de Diego, M. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”, en Diálogos de la Comunicación. N° 82. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Septiembre-Diciembre de 2010. Pág. 9.

14 de la Constitución Nacional refiere a todos los habitantes (es decir, es general, no alude a la nacionalidad. Además debe tenerse en cuenta que los extranjeros gozan de los mismos derechos que los argentinos en virtud del artículo 20<sup>264</sup> de la Constitución Nacional Argentina, de brazos abiertos a la inmigración extranjera) y se amplía asimismo a los tratados internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional conforme artículo 75 inc. 22 de la referida Carta Magna.

En este marco no puede dejar de tenerse en cuenta al sujeto cualificado de la información y la dimensión del consumidor.

*Universalidad de medios*; que permiten el contacto entre emisor y receptor y que requiere tener en cuenta no sólo los medios tradicionales, sino los nuevos modos de difundir que derivan de la convergencia (radio o televisión por internet o viceversa) y el desarrollo de la televisión digital abierta, entre otras nuevas tecnologías<sup>265</sup>.

*Universalidad espacial*, sin limitación de fronteras, tal como expresan los tratados de derechos humanos como una constante (Art.19 DUDH; art. 19 PIDCP, art. 10 CEPDH y art. 13 CADH). Esto supone asumirla como una libertad no sólo del derecho interno, sino del Derecho Internacional<sup>266</sup>.

“En el plano de la realidad, Internet como nuevo espacio rompe las fronteras. Se puede escribir desde cualquier sitio y desde ninguno, se puede leer, comentar, compartir unas fotografías o, una película, obtener libros e informes, conocer lo que está pasando al

---

<sup>264</sup> Artículo 20 Constitución Argentina: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”.

<sup>265</sup> Sánchez de Diego, M. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”, en Diálogos de la Comunicación. N° 82. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Septiembre-Diciembre de 2010. Pág. 14.

<sup>266</sup> Sánchez de Diego, M. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”, en Diálogos de la Comunicación. N° 82. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Septiembre-Diciembre de 2010. Pág. 15.

otro lado del mundo o ver cómo está el tráfico en la avenida próxima. Cualquier actividad de censura, de control por parte del Estado como ocurre en la actualidad en China, debe ser considerada contraria al derecho a una comunicación pública libre<sup>267</sup>”.

Si bien en los hechos, el derecho a la comunicación y sus perspectivas se prestan para intensos debates en toda sociedad democrática, hemos presentado al menos en el plano teórico doctrinario especializado las interpretaciones más dinámicas sobre la libertad de expresión que, entre múltiples factores se ve enriquecida y fortalecida con el reconocimiento pleno del derecho de rectificación o respuesta, también como forma de comunicar.

#### **V.7. El derecho a la igualdad y el derecho de respuesta**

Ya hemos dicho que la facultad de informar no es atributo exclusivo de los profesionales ni de los medios, sino que es un derecho universal y no es un derecho absoluto, y es aquí fundamental realizar una justa ponderación de los derechos concurrentes que tiendan a un equilibrio. En presencia del poder del que disponen los medios, es menester establecer herramientas que puedan devolver el prudente equilibrio de quienes reciben la información, no como meros entes pasivos.

La forma republicana de gobierno consagrada por la Constitución Argentina, al incluir entre sus rasgos ineludibles la igualdad, proporciona asidero al derecho de rectificación como una exigencia de igual acceso de todos a la información y a la comunicación, también cuando están en juego el derecho al honor y la dignidad personal<sup>268</sup>. Asimismo, la Constitución Española, a la vez que consagrar el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20 también establece el derecho a la igualdad en su artículo 14 en

---

<sup>267</sup> Sánchez de Diego, M. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”, en Diálogos de la Comunicación. N° 82. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Septiembre-Diciembre de 2010. Pág.16.

<sup>268</sup> Bidart Campos, “Para la Corte los derechos implícitos no alojan el derecho de réplica ¿Por qué no?, El Derecho. E.D. 131-543. Buenos Aires, Argentina.

estos términos: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Entonces, el derecho a la igualdad, también pone en paridad a quien informa o comunica y a quien recibe esa información, que lo implica y lo agravia por su inexactitud. Entonces tiene tanto derecho a expresarse quien informa, como aquél aludido para acceder al medio (cualquiera sea éste) y poder expresar su respuesta.

“El derecho de respuesta es un medio instrumental idóneo para que todo aquel que se sienta afectado por la difusión de noticias o hechos que lo conciernan y a los que considere falsos, erróneos, tergiversados o lesivos a sus valores esenciales, pueda difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, su propia versión de la noticia”<sup>269</sup>.

El acrecentamiento de influencia que detentan los medios de información tiene como contrapartida una mayor responsabilidad por parte de los diarios, empresas editoriales, estaciones y cadenas de radio y televisión, las que se han convertido en colosales empresas comerciales frente al individuo, pues “si grande la libertad, grande también debe ser la responsabilidad (Fallos:310:508). Frente a los avances y al uso que se debe a los medios no parece inapropiado considerar que el porvenir de la sociedad contemporánea depende, en buena medida, del “equilibrio” entre el poder de los medios y la aptitud de cada individuo para actuar en la liza a la que es llevado por la información<sup>270</sup>.

El derecho de respuesta, al menos en el plano teórico-jurídico, ofrece una base de igualdad, para quien se vea afectado por una información errónea, otorga la posibilidad jurídica de responder ante el poder informador, trasladando y haciendo parte de ese poder a quien pretende rectificar, tiende hacia el equilibrio y la igualdad de las partes intervinientes.

---

<sup>269</sup> Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Voto del Dr. Carlos Fayt en autos “Petric Dogmagoj c. Página 12”, cit. Cons. 26. Pág. 294.

<sup>270</sup> En causa “Ekmekdjian c. Sofovich”. Fallos 315:1492. La Ley, 1992-C, 543; “Petric Domagoj c. Página 12”, Voto del Dr. Boggiano, Cons. 8. Pág. 297; “Servini de Cubría s/amparo”. Fallos: 315:1943-Voto del Dr. Fayt, con. 22.

Ahora bien, dicho esto, y ante la cotidianidad del agobiante y asimétrico poder de los medios, en el plano de los hechos nos preguntamos si ello es posible, interrogante que nos llevará a una reflexión y un abordaje que por el momento excede la pretensión de estas líneas pero que nos conducirá también a través del estudio de las implicancias de este instituto.

También es necesario preguntarnos, indagar, reflexionar, sobre las prácticas y la factibilidad del derecho de rectificación o respuesta en el ámbito de Internet y las redes sociales. Como dice Daniel Prieto Castillo: “Cada medio tiene su lógica, ligada directamente a la percepción de quienes se enfrentan a él. Estamos ante un juego de lenguajes que requiere un largo aprendizaje y que no se resuelve en un taller de unas pocas horas o en la lectura de algún documento. Todo este universo se nos ha vuelto aún más complejo con la irrupción de las tecnologías de la información y de la comunicación<sup>271</sup>”. Estos nuevos desafíos de la comunicación, el periodismo, la educación, también se presenta en el ámbito del Derecho y requiere de respuestas.

En el ámbito de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento también existen responsabilidades ulteriores por la emisión de mensajes. “Las responsabilidades incluyen asimismo adherirse a principios legales como la protección de los derechos y libertades individuales, por ejemplo con respecto al libelo o la protección del derecho de rectificación, así como seguir determinados estándares deontológicos y también adherirse a cualquier instrumento de autorregulación de la profesión. En los medios online, los tipos tradicionales de instrumentos de responsabilidad, como los códigos deontológicos, los defensores de los lectores y los consejos de prensa, han de complementarse cada día más con instrumentos relacionados con los comentarios de la audiencia en los blogs de los usuarios”, sostiene con acierto el Prof. González Ballesteros<sup>272</sup>.

---

<sup>271</sup> Prieto Castillo, Daniel. “La comunicación en la educación”. Editorial Stella. Ediciones La Crujía. Buenos Aires, segunda edición, 2004. Pág. 16.

<sup>272</sup> González Ballesteros. ob.cit. “Democracia y comunicación...”. Pág. 35.

## **V. 8. El derecho de acceso a la información y el derecho de respuesta**

La pretensión de acceder a los medios, para poder expresarse a través de ellos, por parte del público, los particulares, se enfrenta con el derecho de su titular de decidir, en razón del derecho de propiedad si difundirá o no el material cuya inserción solicita.

Intrínsecamente relacionado con las libertades y derechos que estamos abordando, los cuales son indivisibles, la admisión de la rectificación amplía la base subjetiva de las personas que en los hechos, pueden hacer un efectivo ejercicio de la libertad de expresión, no privativa ni exclusivista de quienes disponen de los medios, restableciendo la notable desigualdad que existe entre aquéllos, con fácil acceso a los medios y quienes normalmente sólo son vistos como sujetos pasivos de la noticia.

En este sentido, el acceso efectivo hace a esa relación comunicacional biunívoca que tratamos previamente. Asimismo, tengamos presente que el derecho a la información es bifronte, incluye la facultad de recibir información, el derecho a “conocer y saber”, pero también “el derecho a dar, a divulgar, a difundir información”. Sin acceso al medio, ello sería imposible. Es un requisito esencial y medio vital para la efectivización de la respuesta. Al mismo tiempo, multiplican la información, la diversifican y la expanden ante la opinión pública, otro de los conceptos tan vapuleados de acuerdo a los diversos discursos.

En este sentido, Lezcano Brotóns señala que el derecho de rectificación se configuraría como un derecho de acceso cualificado, por parte del aludido a los medios de comunicación social y como un instrumento de acceso, por la opinión pública, a una versión disidente de las informaciones publicadas por los medios de comunicación. “En suma, como una garantía del pluralismo informativo en el seno interno del propio medio de comunicación (Lax, 1989: 10), por la que se asegura la pluralidad de puntos de vista sobre un suceso, garantizando así un cierto equilibrio informativo y, en suma, el interés general a



una información, globalmente, lo más imparcial completa y objetiva (Bevere & Cerri, 1995: 169; Grandinetti, 1996: 563)<sup>273</sup>”.

Sería ilusoria la rectificación y el derecho a dar información con su alcance universal si no hubiera una verdadera posibilidad de acceso a los medios, como así también serían ilusorios los derechos en general y su defensa si no hay posibilidad cierta de acceso a la justicia.

#### **V.9. Derecho a la comunicación y derecho de rectificación: diatribas y aportes en la doctrina argentina.**

El derecho de rectificación o respuesta, vale reiterarlo, no está reglamentado por ley de alcance nacional en Argentina y por ende aún se encuentra incumplida la manda del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Su valor normativo aparece indubitable en virtud de la jerarquía constitucional que poseen los tratados de derechos humanos conforme el artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna, sin embargo la ausencia legislativa y su ejercicio despierta fuertes controversias, siendo objeto de las más diversas críticas y posiciones encontradas, teniendo defensores y enemigos acérrimos.

No exageramos. “El reconocimiento que la Corte otorga al derecho a réplica constituye un grave retroceso en el proceso de consolidación de la libertad de prensa en el

---

<sup>273</sup> Asimismo apunta: “Esta interpretación resulta adecuada porque, ni el ejercicio de este derecho de rectificación impide al medio difundir libremente la información veraz, ni le obliga a declarar que la información es incierta o a modificar su contenido, ni la inserción obligatoria del escrito puede considerarse una sanción jurídica derivada de la inexactitud de lo publicado (STC 168/1986, de 22 de diciembre, fj. 5). Para Solozábal (1991:82), en el derecho de rectificación se manifiesta que el derecho a rendir información del aludido y el del público a conocer una versión plural respecto de los hechos que fueron objeto de la crónica se imponen sobre la libertad de expresión (en este caso negativa) del medio a no contar lo que no quiere: el contenido de la rectificación”. Lazcano Brotóns, Iñigo. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Universidad del País Vasco. “Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del derecho de rectificación”, en “Comunicación y pluralismo”, 2010, N° 9, Universidad Pontificia de Salamanca. Págs. 169. Salamanca, 2010.

país”<sup>274</sup>, opina el Dr. Gregorio Badeni en Clarín a propósito de la noticia del fallo de la Corte Suprema “Rozenblum c. Vigil”.

“Nada indica que en los países en los que rige –el derecho de rectificación– se hayan producido efectos negativos para la libertad de expresión o se haya incrementado la autocensura de los medios periodísticos, lo que da por tierra con los pronósticos agoreros e los adversarios del instituto<sup>275</sup>”, sostiene la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en la sentencia “Petric Domagoj c. Página 12”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que nuclea a los empresarios de los medios privados, no deja de repudiar las sentencias que dan lugar al derecho de rectificación ya que para la misma representa “un paso previo a la censura<sup>276</sup>”.

El enfrentamiento es obvio y evidencia crudamente los intereses y valores que pretenden defender las partes en pugna. Decimos esto porque creemos que la discusión sobre el instituto ha revelado, como ha ocurrido con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley N° 26.522, los intereses en juego, al punto tal que el derecho humano de dar y recibir información puede aparecer peligrosamente trastocado.

Dada la diversidad de argumentos críticos y defensivos hacia el derecho de rectificación, estimamos necesario sistematizar del algún modo la dispersión existente y presentar las críticas y defensas de manera contrastada, para abordarlas dialécticamente, o si se prefiere, a tono con el tema de estudio, “los argumentos que se replican”.

### **Críticas al derecho de rectificación:**

#### ***Es inconstitucional:***

---

<sup>274</sup> Badeni, Gregorio. “Un retroceso grave para la Argentina”. Clarín, Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48.

<sup>275</sup> “Petric Domagoj c. Página 12”. L.L. T. 1998-C. Último párrafo Considerando 12 de la sentencia. Pág. 287.

<sup>276</sup> “La Corte Suprema decidió avalar el derecho a réplica”. Para ADEPA, la sentencia conocida ayer implica “un avance peligrosísimo contra la libertad de prensa”. Clarín. Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48.

En cuanto violenta los artículos 14, 32 y 17 de la Constitución Nacional. No obsta a tal conclusión la “jerarquía constitucional” que se le ha otorgado a ese instrumento internacional en la Reforma de 1994, puesto que, en definitiva y por propio mandato del nuevo texto de la Ley Fundamental, la Convención no deroga artículo alguno de la primera parte de la Constitución (Art. 75 inc. 22)<sup>277</sup>.

***Es un ataque a la libertad de prensa que constituye un derecho absoluto:***

La admisión del derecho de rectificación o respuesta está en pugna con el artículo 32 de la Constitución Nacional pues implica una restricción de la libertad de imprenta. Desde el ángulo de la libertad constitucional de prensa implicaría una indebida restricción de dicha libertad que está vedada al legislador. En la Constitución Nacional, la libertad de prensa es absoluta, no puede ser objeto de restricciones o reglamentaciones. Y la finalidad de ese carácter absoluto no es la de tutelar a los propietarios de los medios de comunicación social sino a toda la sociedad, evitando los riesgos que genera su reglamentación<sup>278</sup>.

***Lesiona la línea editorial:***

Se obliga a publicar lo que no se desea publicar. Si se comienza por recorrer el camino de obligar a publicar se puede llegar sin mucho esfuerzo al resultado de obligar a no publicar, cayendo en la violación de la también absoluta prohibición constitucional de la censura previa conforme lo impone el artículo 14<sup>279</sup>.

***Provoca la “autocensura”. Es un paso previo a la censura.***

Dado que es una imposición arbitraria a los medios, su secuela es propiciar la autocensura de los editores con la consecuente lesión para el derecho a la información de los ciudadanos<sup>280</sup>.

---

<sup>277</sup> Agravio expresado en el recurso extraordinario por Página 12 en el Caso “Petric Domagoj contra Página 12”. En concordancia, disidencia del Dr. Belluscio en el mismo caso. L.L. T. 1998-C. Consid. 7. Pág. 309, ver también, Badeni, G. artículo citado.

<sup>278</sup> Belluscio, Augusto. Disidencia en “Petric Domagoj c. Página 12”. L.L. T. 1998-C. Pág. 309.

<sup>279</sup> Página 12, agravio presentado en el recurso extraordinario aludido. Belluscio, disidencia citada. Badeni, G.

<sup>280</sup> Agravio de Página 12 en el citado caso Petric. Declaraciones de Guillermo Ignacio, Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Clarín, 20 de agosto de 1998.

### ***Lesiona el derecho de propiedad:***

Otorgar el derecho de rectificación de una manera compulsiva para los medios es una apropiación del espacio perteneciente a los medios y ataca a su propiedad, lo cual está vedado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Coarta el libre uso y goce de la propiedad. Carga a los medios con el costo de una publicación realizada contra su voluntad<sup>281</sup>. Es un ahogo económico para los medios, por cuanto cada centímetro o cada segundo tiene un apreciable valor en dinero<sup>282</sup>.

### ***Es una sanción***

Es una imposición sobre los medios, transgrediendo a la libertad de prensa. Obliga a publicar aquello que el medio no comparte, que no desea publicar.

### ***Estados Unidos, el país con la más amplia libertad de prensa y el más sólido sistema democrático constitucional, lo rechaza.***

La Suprema Corte estadounidense, en el caso “Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo”, del 25 de junio de 1974, por decisión unánime invalidó como violatoria de la Primera Enmienda la ley estadual de Florida que consagraba el derecho de respuesta, considerando inconstitucional que el gobierno ejerza coacción para obligar a un periódico a publicar lo que no desea<sup>283</sup>.

### ***Ofende al periodista y ataca al medio***

Menoscaba la dignidad profesional. El director de un medio y los periodistas reciben infinidad de textos con los que disiente, no hay fundamento para dar lugar a esas manifestaciones, máxime si son ofensivos<sup>284</sup>. Se agrede al medio, desvía a la información dada. Provoca que los ciudadanos sean adversarios de los medios.

### ***Causa indefensión:***

---

<sup>281</sup> Página 12, ADEPA, Badeni. Cit.

<sup>282</sup> Rivera, Julio César. “El derecho de réplica, rectificación o respuesta”. L.L. T. 1985-E. Sección Doctrina. Págs. 792 y ss. El autor trata en los argumentos en contra y en pro del derecho de réplica.

<sup>283</sup> Belluscio, disidencia citada. Badeni, G. artículo citado.

<sup>284</sup> Ballester, Eliel C. “Derecho de Respuesta”, Editorial Astrea. Buenos Aires, 1987.

Condena a efectuar inserciones sin oír al medio. Inhibe la posibilidad de comprobar la veracidad o exactitud de una información para conceder el derecho a rectificación. Excluye a la prensa de los jueces naturales. Se convierte al particular que pretende la publicación de la respuesta en el único juez de su procedencia<sup>285</sup>. Ataca al derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional<sup>286</sup>.

### **Es innecesario**

Es superfluo. Los medios suelen dar espacio para que la gente se exprese sin necesidad de ley específica. Depende de las circunstancias. La conveniencia de responder depende de las más diversas contingencias, por ejemplo, la gente notoria que tiene “buena prensa” difícilmente necesita de ella<sup>287</sup>.

### **Las adoptan regímenes autoritarios**

La regla, curiosamente introducida en un texto internacional destinado a preservar los derechos humanos, denota un fuerte espíritu antidemocrático, ya que parece presuponer la legitimidad de reglamentaciones nacionales de la prensa, que son inadmisibles<sup>288</sup>.

## **Defensas**

### **Es constitucional**

El artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, se armoniza con los artículos 14 y 32 y conforman una unidad coherente. El artículo 32 de la Constitución Nacional establece que el Congreso federal no dictará leyes “que restrinjan” la libertad de imprenta. El derecho de rectificación no es una restricción, sino una responsabilidad ulterior. No hay que confundir restringir con reglamentar. La reglamentación del derecho de respuesta no tiene por qué ser una restricción a la libertad de prensa. Los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y

---

<sup>285</sup> Rivera, J.C. op. cit.; Ballester, Eliel “Fundamentos y constitucionalidades del derecho de respuesta”, J.A., t. 1963-IV, pág. 51. Núm. 11.

<sup>286</sup> Ballester Eliel, C. op. cit., Clarín, cit. Declaraciones de ADEPA.

<sup>287</sup> Ballester, Eliel. Op.cit.

<sup>288</sup> Belluscio, Disidencia citada. Considerando 6.

han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o contradecir. El derecho de rectificación es un complemento de la libertad de prensa y posibilita que el sujeto universal, es decir, toda persona ejerza su derecho a dar información. Entre ambos derechos hay una relación de necesaria complementación en el común marco de protección de los derechos humanos fundamentales.

Asimismo, es necesario destacar que el derecho de rectificación o respuesta está consagrado y establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional y a su vez obliga al Estado argentino a reconocer y respetar los derechos y libertades de las personas, y también a proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías, vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia.

El cumplimiento obligatorio de los tratados internacionales, las responsabilidades internacionalmente asumidas, e incluso la obligatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterada y sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en múltiples sentencias, a partir del caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo” (L.L. 1992-C, 543) y posteriormente luego de la reforma de la Constitución de 1994, el caso “Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, del 7 de julio de 1993, en el caso “Cafés La Virginia S.A.”, del 13 de octubre de 1994 y en el caso “Girolidi”, del 7 de abril de 1995, entre otros<sup>289</sup>.

---

<sup>289</sup> En el caso “Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, del 7 de julio de 1993 F. 433.XXIII se dejó establecido que la aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede un tratado –además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional– vulnera el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. A partir de aquí se modifica la doctrina sostenida al respecto por la Corte, en el sentido de que el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impone a los órganos del Estado argentino –una vez resguardados los principios de derecho público constitucionales– asegurar primacía a los tratados ante un conflicto con una norma interna contraria pues esa prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. Ese criterio creciente de la internacionalización del derecho se reitera en “Cafés La Virginia S.A.” C.S, octubre 13 de 1994, 93.495. L.L. T. 1995 – D, en el que incluso se toma a la jurisprudencia supranacional como obligatorias en el plano interno. El caso Girolidi, de 7 de abril de 1995 debe tenerse especialmente en cuenta en tanto las opiniones consultivas de la Corte de San José son igualmente obligatorias. En la doctrina, se destaca el tratamiento de esta cuestión en un trabajo de Juan Antonio Travieso “Garantismo vs. Responsabilidad Internacional. Aplicación del Derecho Internacional por la Corte Suprema de la Nación”, L.L. Tomo 1998-C. Págs. 762 y ss.

**Ensancha a la libertad de expresión. Los derechos constitucionales absolutos no existen.**

Expande el marco reflexivo de la opinión pública. La libertad de expresión puede ser armonizada con el derecho de rectificación, de indudable raíz constitucional, máxime cuando los medios se exhiben y son al mismo tiempo enriquecedores y fundamentales para la convivencia democrática. La libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a dar información no es exclusivo de los medios ni de los profesionales que trabajan en ellos sino que su titularidad es universal. A su vez, el derecho de respuesta no es absoluto, y no puede constituirse en una vía para la ofensa o la comisión de un delito, los medios tienen el deber de examinar y ponderar a la rectificación. Es jurisprudencia constante de la Corte la que sostiene la inexistencia de derechos constitucionales absolutos<sup>290</sup>. En esta materia, así como en otras referidas a diversas garantías de igual rango, se han reconocido como respetuosos del orden constitucional límites al ejercicio de ese derecho con el debido resguardo de su naturaleza y de sus objetivos.

**No lesiona la línea editorial. La información que pretende rectificarse ha sido provocada por el medio.**

Con la admisión del derecho de respuesta no se indica cómo ni en qué oportunidad, ni cuál ha de ser la noticia que las empresas deben propalar, pero brinda oportunidad de ver la otra cara de una verdad que intenta ser revelada, lo que de tal manera, permite cumplir con mayor amplitud la acción positiva esperada de los comunicadores sociales.

La información que se presenta con fin de rectificar o responder es provocada por el propio medio, y por ende, no impone al mismo a que ingrese en asuntos que no hubieran sido ya escogidos o difundidos por el propio medio. Los medios siguen decidiendo sus mensajes y sus silencios.

---

<sup>290</sup> Fallos:290:83; 297:201; 300:700 –La Ley, 1978-D,117-; 304:319 y 1524, entre muchos otros.

### **Es una garantía del ejercicio profesional. Es una responsabilidad ulterior**

El ejercicio serio y responsable de la labor periodística no tiene por qué “amedrentar” al periodista, todo lo contrario, garantiza el ejercicio profesional y lo alienta en la debida diligencia que tiene que guiar al periodista en el desempeño de sus actividades. No puede tender de ningún modo a la censura porque es una responsabilidad ulterior, que siempre a posteriori y nunca a priori.

### **El derecho de propiedad tampoco es absoluto y tiene un fin social**

Ni siquiera una protección en grado máximo podría ir al punto de dejar desprotegido al perjudicado por una noticia agravante o inexacta, sumiéndolo en el más angustioso silencio y sin oportunidad de una defensa por el mismo medio que lo agredió al informar. Negar la oportunidad al afectado para que ejerza su respuesta bajo la excusa de la propiedad del medio periodístico y de que sólo sus dueños son jueces de su uso, implica negar a dicha propiedad el fin social que le es innegablemente propio, haciendo prevalecer una posición dominante en la generación de la información que lejos está de constituir un ejercicio regular del derecho amparado por la ley (artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina).

Asimismo, si enfocamos la cuestión desde la perspectiva del derecho de autor, es necesario considerar que éste “ya no está concebido solamente como un poder en manos de un titular, ni siquiera un poder que permite así negociar con él y contratarlo con otra persona o entidad que colabora al proceso de la comunicación, sino que hay que tener en cuenta el tercer lado de un triángulo: el sujeto destinatario del objeto de este derecho de autor, es decir, el público”.

Desde esta mirada, el derecho de autor –o conforme la denominación legal nacional la “propiedad intelectual”- integra el derecho a la información y requiere situarlo en una



posición de equilibrio, “tan alejado de un espíritu excesivamente individualista como de un espíritu excesivamente masificador o colectivista<sup>291</sup>”.

**No es una sanción al medio, sino la posibilidad de libertad de expresión y el derecho de acceso del afectado.**

Quien se rectifica es el afectado, el medio no está obligado ni a rectificarse, ni a ratificarse ni a retractarse. Así como el medio tuvo la posibilidad de expresarse con tal información, el aludido tiene el mismo derecho de dar su versión de los hechos. El derecho a la información no es un monopolio de los medios. A su vez, la comunidad que ha recibido ambas “caras” de la información sacará sus propias conclusiones, también como sujeto activo del derecho a la información.

**La concepción norteamericana no puede tomarse como antecedente.**

El caso “Tornillo” no puede ser tenido como antecedente no sólo por la distinta realidad cultural y social en la que se desenvuelve el fenómeno periodístico en Estados Unidos, sino especialmente por las particularidades que enmarcaban al caso indicado.

**No tiene por qué ofender al periodista ni atacar el medio. No le exigen que el medio ni el periodista se retracte ni que se rectifique, el que rectifica es el aludido.**

---

<sup>291</sup> Cfr. Desantes Guanter, José María. “La información como derecho”. Editorial Nacional, Madrid, 1974. Págs. 94 y ss. “El derecho de autor como derecho a la información”. En este marco consideramos ilustrativo agregar el pensamiento que atraviesa esta interpretación armónica: “El derecho a la información, no corresponde tan sólo al que informa, bien sea porque crea o porque traslada el contenido de la información, sino también al informado. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos completa el cuadro de todos aquellos que, de un modo o de otro, son destinatarios de la información, y que tienen un derecho reconocido y proclamado como humano. Este derecho ha de teñir desde su mismo origen el derecho originario del autor y todas las relaciones jurídicas que de él emanen. El principio in dubio pro libro, la condenación del abuso de su derecho por parte del autor o de sus causahabientes encuentran en la Declaración su fuerza jurídica. Y esto no sólo cuando el Documento más importante de la ONU define o describe el derecho a la información en el artículo 19, sino también cuando se ocupa en concreto del derecho de creación intelectual en el artículo 27, en cuyo párrafo 1, antes de ocuparse del autor, se preocupa del destinatario universal de su obra al proclamar que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. El derecho a la información y el hecho indiscutible de que el derecho de autor forme la sustancia de toda comunicación social, armoniza esta declaración hecha pensando en el público y la que hace situándose en el punto de vista del autor”.

El derecho de rectificación no busca el enfrentamiento, la existencia de vencedores y vencidos, sino el dar a conocer otros elementos de la información. Al mismo tiempo, descuenta la existencia de la buena fe, ya que cualquier otro camino judicial implica la invocación del dolo o la falta de diligencia o negligencia por parte del profesional de la información. Sin embargo en el ejercicio de la rectificación no se discute el ánimo ni la intencionalidad de quien dio la información, sino que se pretende hacer escuchar la “otra versión de los hechos” por parte del propio afectado. Tampoco cabe el reclamo de indemnización ni de reparación pecuniaria alguna, no hay ningún fin “lucrativo” sino que se busca rectificar la información que aludió al respondiente en forma inexacta o agravante.

No debe confundirse el derecho de rectificación con la retractación, circunstancia ésta última en la quien ha emitido el mensaje inexacto o agravante se retracta en sus términos.

El ejercicio de la respuesta concreta la universalización del derecho a dar y recibir información y eleva al informado como sujeto activo del proceso informativo, haciéndolo colaborador del medio. Los medios no tienen la presunción monopólica de la verdad, la información es un bien social. Ni los medios ni los periodistas son titulares exclusivos del derecho a la información y tanto unos como otros no tienen por qué sentirse ofendidos o atacados.

**Es un instrumento que concreta el derecho a la igualdad. La defensa está garantizada. No hay impunidad comunicativa.**

La libertad de expresión del medio está garantizada y dada. El derecho de respuesta posibilita que el afectado también se exprese, en un plano de igualdad. Si se silenciara a la rectificación se produciría un desequilibrio perjudicial privilegiando a sólo una de las partes. El derecho a la defensa también comprende al derecho a ser oído, el aludido en la noticia también tiene este derecho, no sólo el medio. Si el órgano de difusión entiende que no es un supuesto de aplicación del derecho de respuesta puede negarse a insertar la

respuesta, y decidirá el Poder Judicial, al cual están sometidos todos los ciudadanos del país.

### **Es necesaria en una sociedad democrática**

Morigeran el efecto dañoso de la repercusión social de la información inexacta. Permite dar y escuchar la otra versión de los hechos. Es voluntaria y hace a un crecimiento democrático de los ciudadanos, fortalece la comprensión de la importancia de la libertad de expresión en la cotidianidad. La carta de lectores u otras vías de acceso a los medios no son justamente dadas para rectificar. Es necesario prever las consecuencias de una negativa arbitraria.

### ***Pertenece y hace a la esencia de la democracia.***

Como ensancha y universaliza en lo concreto a la libertad de expresión, el derecho de rectificación solo puede darse en una sociedad democrática y pluralista, que de la oportunidad del disenso y la búsqueda cooperativa de la verdad de los hechos. Si los periodistas y los medios deben desempeñar sus tareas bajo un régimen totalitario, la libertad de expresión estará coartada y por ende la rectificación imposibilitada. Libertad de prensa y derecho de respuesta están en relación de conexión estrecha. Desde que el periodista no es más libre, el derecho de respuesta cesa<sup>292</sup>.

Oídas las dos versiones, que el lector saque sus conclusiones...

---

<sup>292</sup> Ballester, E. op. cit. Pág. 21. En tiempos de Mussolini era arriesgado en Italia, contradecir las noticias oficiales. A la ideología fascista no le interesaba transformar las relaciones entre los particulares, sino las relaciones del particular con la autoridad. En Alemania, Goebbels, siendo ministro de Propaganda del Reich durante el nazismo, anatematizó el derecho de rectificación, asociándolo al interés de los judíos “difamadores”.

## Capítulo VI

### Derecho de rectificación y ética.

#### Desafíos éticos comunicacionales ante los nuevos medios de comunicación.

### VI. 1. Derecho de rectificación y ética. Los medios deciden sus mensajes y sus silencios

#### VI.1.1. Códigos deontológicos del periodismo y nuevas modalidades de pautas éticas del periodismo y la comunicación

En el ámbito profesional del periodismo, el ejercicio del derecho a dar y recibir información ha generado, fuera del marco propiamente normativo, una serie de principios deontológicos, derivados especialmente de la teoría de la responsabilidad social de la prensa, que se han plasmado en diversos códigos, decálogos y manuales de estilo, en los que se reflejan pautas regulatorias de la profesión, consensuadas por los mismos periodistas. Dado el carácter ético, declarativo de los mismos, su cumplimiento deviene sólo en la voluntad de aquellos que los han formulado y adherido, no habiendo por ende, un accionar sancionatorio jurídicamente, sin reprochable moralmente.

En los últimos años, se han venido a sumar nuevas modalidades de pautas éticas, tales como “guías” o “protocolos de actuación” ante la cobertura de determinados hechos de interés público. Hay numerosos ejemplos en este sentido, tales como la elaboración de la “Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes” impulsada en Argentina por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual<sup>293</sup>; el “Manual de gestión de riesgos de desastre para comunicadores sociales. Una guía práctica para el comunicador social comprometido en informar y formar para salvar vidas<sup>294</sup>”, de

---

<sup>293</sup> Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes”. 1º edic. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EUDEBA, 2014.

<sup>294</sup> UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Perú, 2011.

Perú; o “VIH/ SIDA. Guía para la cobertura periodística. América Latina<sup>295</sup>”; el documento “Comunicación responsable. Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios<sup>296</sup>” referida a recaudos responsables a la hora de informar sobre salud mental y adicciones, suicidios y alcohol presentada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina; los “Criterios de calidad del CONACAI<sup>297</sup>. Niñez, adolescencia y medios audiovisuales” o, el “Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Recomendaciones” promovido por el Gobierno de Cantabria en España<sup>298</sup>; los Principios éticos de UNICEF para informar acerca de la Infancia<sup>299</sup>, las “Pautas de Estilo Periodístico sobre Discapacidad”, impulsadas en 2005 por el COMFER, en Argentina, entre muchos otros.

Estas nuevas modalidades de pautas éticas, son destacadas también por Aznar, quien recoge una larga lista de las mismas y rescata que “estos contenidos reflejan, por una parte, la centralidad que los medios de comunicación tienen en nuestras sociedades y cómo a partir de esta posición afectan a diferentes cuestiones de evidente interés para la sociedad. Pero lo más importante, aún desde nuestro punto de vista, es que reflejan-por decirlo así- el avance de la ética periodística, que viene de ese modo a complementar las obligaciones básicas y más tradicionales del periodismo con nuevas exigencias éticas acordes con un tratamiento riguroso y comprometido de todas estas cuestiones. Se trata por tanto, de propuestas éticas que vienen a complementar a las anteriores y a establecer un nivel de concreción deontológica mayor. Son este tipo de recomendaciones más concretas las que se

<sup>295</sup> VIH/ SIDA. Guía para la cobertura periodística. América Latina, Proyecto auspiciado por UNESCO y la Fundación Cultura UNESCO: Editor: Günther Cyranek Dirección y coordinación general: Horacio Knaeber, Buenos Aires, 2008.

<sup>296</sup> Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Argentina. “Comunicación responsable. Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios”, Buenos Aires, 2013.

<sup>297</sup> CONACAI (Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia). Argentina, Consejo creado por el artículo 17 de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. AFSCA. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 2013. Más información en [www.consejoinfancia.gob.ar](http://www.consejoinfancia.gob.ar) y [www.afsca.gob.ar](http://www.afsca.gob.ar)

<sup>298</sup> Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Recomendaciones”. Gobierno de Cantabria. Vicepresidencia. Dirección General de la Mujer, 2006. Disponible en formato digital en : [http://www.pilarlopezdiez.eu/documents/Protocolo\\_Cantabria.pdf](http://www.pilarlopezdiez.eu/documents/Protocolo_Cantabria.pdf)

<sup>299</sup> [http://www.unicef.org/spanish/media/media\\_tools\\_guidelines.html](http://www.unicef.org/spanish/media/media_tools_guidelines.html)

reúnen y facilitan ahora, de manera que los profesionales y el público en general puedan confiar en algo más que en su sentido común, su juicio personal o su experiencia particular a la hora de precisar los criterios para una información éticamente mejor y más comprometida socialmente con este tipo de cuestiones. Es así que la ética periodística avanza y debe seguir avanzando de modo complementario a como lo hace la relevancia de los medios y su influencia, equilibrando su creciente poder con un ejercicio responsable y comprometido de su amplia libertad de acción<sup>300</sup>”. Aznar también rescata otro factor novedoso en este tipo de declaraciones, la alta participación de la sociedad civil, y diversas organizaciones de la misma. Es decir, la elaboración de este tipo de documentos ya no es privativo de los periodistas, sus asociaciones y los empresarios mediáticos, sino que se inserta, surge y se trabaja socialmente.

En este marco es necesario tener en cuenta qué entendemos por deontología. “La deontología entraña el ejercicio de la libertad individual con apego a la razón, supone un parámetro de referencia para medir el grado de eticidad en el ejercicio profesional y representa un instrumento para alcanzar un fundamento humanístico en la tarea de informar”. Para plasmar esto se crean los códigos deontológicos en los que se “abstraen los valores éticos voluntariamente aceptados por un gremio profesional y los transforma en reglas de conducta obligatorias para los sujetos a ese ordenamiento deontológico”<sup>301</sup>. La deontología informativa “permite edificar parámetros para una mejor calidad de vida mediática, [...] Contribuye a optimizar el derecho a la información, [...] Optimiza el conocimiento del buen hacer periodístico de la propia comunidad de comunicadores, [...] Contribuye a garantizar la independencia del periodismo, [...] Establece importantes ámbitos de protección de los derechos ciudadanos al informar [...]”<sup>302</sup>.

---

<sup>300</sup> Aznar, Hugo. “Nuevas pautas y recomendaciones para unos medios más éticos”, en “Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. Valencia, 21 de septiembre de 2005. Pág. 157 a 168.

<sup>301</sup> AZNAR, Hugo y VILLANUEVA, Ernesto, ABOU ZEID, Farouk, et. Al. Deontología y autorregulación informativa, Universidad Iberoamericana / UNESCO / Fundación Manuel Buendía, México. 2000.

<sup>302</sup> AZNAR, Hugo y VILLANUEVA, Ernesto, ABOU ZEID, Farouk, et. Al. Deontología y autorregulación informativa, Universidad Iberoamericana / UNESCO / Fundación Manuel Buendía, México. 2000.

En este sentido, la ética periodística se basa en la idea del “autocontrol”, tal como lo sostiene el Prof. Desantes Guanter<sup>303</sup>. Esto es, frente a la tesis de que alguien (jueces, terceros, autoridades administrativas, etc.) establezcan controles, con los peligros que ello entrañaría, son los propios periodistas quienes mejor están preparados para delimitarse sus propias reglas. El autocontrol fluye desde dentro del grupo de periodistas hacia la comunidad, con esta metodología numerosas asociaciones de periodistas se han dado sus propias pautas de conducta. En cambio, el “hetero-control” devendría en peligrosos controles puestos desde afuera, lo cual abriría una puerta a la censura.

Las instituciones creadas por los profesionales y por los propios medios, en las que se ejerce autocontrol se caracterizan –al menos en el plano teórico- por la adopción libre de decisiones y por asumir la responsabilidad de los periodistas y editores ante su propia conciencia, cooperando entre sí a fin de preservar la existencia de relaciones equilibradas y leales entre los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad.

El autocontrol no es propiamente una regulación, sino más bien un sistema ideado para establecer unos baremos, unos mínimos de conducta, una forma de actuar que le sirve al periodista en todos los aspectos de su ejercicio profesional. No son técnicamente normas, sino “maneras de ser y de hacer” que se imponen los propios periodistas para actuar. Tiene una revisión a posteriori, y nunca previa. En toda iniciativa comunicacional seria, el destinatario es el público, no como un ente pasivo sino como parte activa de ese desarrollo. El autocontrol se constituye así en un medio positivo de defensa para evitar posibles abusos del derecho a la información.

El Estado, históricamente, siempre ha tenido la tendencia a regular el contenido y la actividad de la información, a controlar la actividad informativa. Por ello, si la actividad periodística, logra en consenso el establecimiento de un adecuado autocontrol, evitaría toda intervención del Estado. Al mismo tiempo, supone una mayor calidad de la información,

---

<sup>303</sup> Desantes Guanter, José María. “El autocontrol de la actividad informativa”. Edicusa, 1973. Serie Cuadernos para el diálogo, España, 1973.

porque donde existe ese intento de llevar certeza ética hay mayor creencia en los periodistas y en los medios.

Tal como sostiene Jareño Alarcón: “Para poder asumir de modo completo el compromiso que los códigos ponen de manifiesto para los profesionales, estimo que es prioritario saber qué es lo que previamente los dota de significado. La construcción de los modelos deontológicos que hoy conocemos es el resultado de la proyección de intereses morales más amplios. Por eso, el proceso que lleva de unos a otros se convierte en motivo fundamental de reflexión para comprender la racionalidad de nuestro desarrollo moral en sus manifestaciones concretas. En este sentido, no debemos olvidar que las exigencias públicas de la profesión periodística hacen que en dicho desarrollo se implique el individuo en su totalidad. El esquema de sentido al que corresponde nuestra identidad moral comprende no solamente una configuración de elementos que dan ese significado moral al individuo en cuanto tal. Igualmente concluye la relación con los otros individuos como elemento fundante del sentido. Los conceptos psicológicos básicos son conceptos relacionales. Su comprensión sólo es posible a la luz del contraste con otros individuos. Igual sucede en el terreno moral. La rectitud de nuestros actos tiene una intermediación en el prójimo: “La dimensión ética comienza cuando entran en escena los demás”. De aquí se deriva que la deontología impone también un compromiso integral, en la medida que existe una inevitable proyección pública de la profesión<sup>304</sup>”.

Este aporte que realiza el Profesor español nos convoca a la reflexión. Y podemos ir más allá. Quiénes, qué instituciones o personas (periodistas, gremios y/o sindicatos de periodistas, organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la libertad de expresión, instituciones gubernamentales, empresariado mediático, y todo el amplio abanico de posibilidades asociativas en torno a la ética informativa determinan el éxito o la mera declamación de principios que pueden o no ser tenidos en cuenta, que pueden o no ser creíbles) y qué contenido dota de significado a los códigos o pautas de autorregulación son

---

<sup>304</sup> Jareño Alarcón, Joaquín. “El itinerario filosófico para la enseñanza de la deontología”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005. Pág. 55.



condiciones básicas para asegurar la suerte o la desgracia de su cumplimiento. En este sentido, tal como veremos, y atento al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información es necesario revisar las antiguas pautas éticas informativas de los diversos códigos deontológicos nacionales e internacionales. En este sentido, UNESCO tiene un papel fundamental para tratar de amalgamar las diversas posturas a nivel internacional y requiere que el Código Internacional de Ética Periodística, adoptado en su seno el 20 de noviembre de 1983 tenga su reconocimiento, debate, y actualización correspondiente.

La idea de conformar pautas de autorregulación y de elaboración de códigos deontológicos está presente desde la consolidación de la profesión periodística, como un modo también de evitar la injerencia gubernamental, ya sea a través de la legislación o desde los estrados judiciales. Cuanto más comprometida sea la autorregulación y el respeto a las pautas éticas periodísticas menos probabilidad habrá de que se sancionen leyes que atentas contra la libertad de expresión y sentencias judiciales que obliguen a los periodistas. Y en el marco del tema bajo estudio diríamos que la operatividad del derecho de rectificación o respuesta y su respeto ético haría, en un supuesto extremo, innecesaria una legislación al respecto. Pero como este ideal lamentablemente no se da en los hechos, es necesario garantizar el derecho a la palabra del aludido en una información inexacta o agravante.

### **VI.1.2. Estándares de Hetero-Regulación**

Señala Rodríguez Pardo: “La necesidad del uso de estándares de control sobre el contenido difundido por los medios de comunicación resulta, hoy más que nunca, incuestionable, y existe un cierto consenso a la hora de admitir que tradicionalmente se ha perseguido la implantación de estos controles a través de tres modos básicos: por medio de leyes que establezcan límites a los citados contenidos; por medio de las propias licencias promotoras de los medios; y por medio de organismos independientes de control que, al

margen del Gobierno, el Poder Judicial y los medios, vigilen la actividad de estos<sup>305</sup>”. Esta última modalidad, a nuestro entender, y vistas las experiencias comparadas en distintos países admite matices. Por un lado, hay países en los que desarrollan su labor organismos autónomos, por ejemplo, en Argentina, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual<sup>306</sup>, que sin tener atribuciones sancionatorias atiende los reclamos de los televidentes y radioescuchas en cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No depende de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y su designación es propuesta por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual<sup>307</sup> del Congreso de la Nación Argentina (integrada por diputados y senadores de la mayoría y minorías). Otro ejemplo de estas características, sería la creación de la OFCOM<sup>308</sup> (Office of Communications) en Gran Bretaña, que desde agosto de 2003 es el organismo de vigilancia centralizado, entre cuyas misiones se encuentra la de control de las obligaciones de servicio público de los radiodifusores y el establecimiento de un código ético genérico por parte del organismo.

Y otros casos o modalidad de control o seguimiento, ya no como organismos oficiales autónomos, sino como organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, lo encontramos en la experiencia de las “Veedurías” y “Observatorios de Medios”.

---

<sup>305</sup> Rodríguez Pardo Julián, en “Autorregulación y hetero-regulación, una apuesta suficiente para el mercado actual?. El caso de Gran Bretaña” en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.. Pág. 273.

<sup>306</sup> Arts. 19 y 20 de la Ley 26.522. Título II - Capítulo IV. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. B.O.: 10/10/2009.

<sup>307</sup> Art. 18 a. de la Ley N° 26.522 – Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. B.O.: 10/10/2009.

<sup>308</sup> La creación de la OFCOM, que entró en funcionamiento a finales de 2003, obtuvo carta de naturaleza a través de la Office of Communications Act, de 2002, y configurada definitivamente en la Communications Act, de 2003, elaborada desde el Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Gobierno Británico de Tony Blair. Su objetivo se enmarcó en el deseo gubernamental de reformar el marco regulador de las comunicaciones en el Reino Unido, de cara a nuevo milenio, tal y como ya había anunciado en el “Libro Blanco A new future for communications”, de diciembre de 2000. Para ello se establecen dos líneas prioritarias de actuación: la concesión y renovación de estándares éticos sobre las emisiones de radio, televisión y los contenidos difundidos en Internet –sin duda una novedad importante al no existir hasta esa fecha instituciones de tal tipo para las comunicaciones electrónicas. La justificación de su misión se basa en las razones que, han motivado a lo largo de los últimos cincuenta años la constitución de los organismos precedentes y la puesta en marcha de medidas autorreguladoras: el interés de los ciudadanos y la protección de los consumidores. Para más información: <http://www.ofcom.org.uk/>

“Los observatorios y veedurías de medios no son sólo manifestaciones de la Política comunicativa sino lugares de la construcción de ciudadanía”<sup>309</sup>. Por su parte, Martha Paz aporta una distinción, definiendo a las veedurías como “las ‘agrupaciones de diversas instituciones sociales que fiscalizan permanentemente la conducta de los medios – en sentido cívico y cultural en general, y en sentido ético y de responsabilidad social en particular- mediante su evaluación periódica a fin de promover cambios en esa conducta por debate ciudadano, por regulación y por autorregulación. Este mecanismo cooperativo de investigación, reflexión y acción se asienta en la convicción de que, puesto que el pueblo tiene hoy derecho a la información, está facultado para participar de la orientación y del desempeño de los medios de comunicación mediante sus organizaciones sociales”<sup>310</sup>.

Por otra parte, los observatorios nacen en América Latina “como instancias de supervisión mediática que vigilan y controlan la actividad de los medios, han ido ganando, lenta pero progresivamente, una mayor presencia en el panorama mediático del continente”<sup>311</sup>. Aunque todavía ensayan “su propia figura” y sus trazos no están totalmente perfilados”<sup>312</sup>.

---

<sup>309</sup> REY, Germán, Ver desde la Ciudadanía. Observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina. En Veedurías y Observatorios. Colectivo la Tribu. Ed. La Tribu, 2003. Pág. 13.

<sup>310</sup> PAZ, Martha, La Autorregulación periodística sí se puede, En los zapatos de la pulga. Relato de una experiencia de la Defensoría del Lector en Bolivia, Centro para Programas de Comunicación, 2ª ed. La Paz, 2008, pág. 19-26. En <http://www.pieb.com.bo/blogs/paz/articulo1.php> pág. 5.

<sup>311</sup> Entre múltiples experiencias de observatorio, pueden señalarse los siguientes: el proyecto impulsado por la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social (ABOCCS) denominado Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), desde 2005. Asimismo, en el mismo país existen experiencias más particulares como las realizadas por ONG's, por ejemplo el Observatorio de Género, puesto en práctica por la Coordinadora de la Mujer, teniendo como una de sus tareas el seguimiento y análisis de noticias e información referentes a la realidad de la mujer en diferentes ámbitos.

A nivel internacional en el libro Veedurías y Observatorios del Colectivo La Tribu (Buenos Aires, 2003) se hace una recopilación de las diferentes experiencias pudiendo mencionar que en Argentina existe desde 2002 la Veeduría Ciudadana de Medios de Comunicación relacionado a organizaciones académicas y otras profesionales y sociales vinculadas a la problemática de los medios y la democracia. También desde el mismo año funciona el Observatorio Político, Social y Cultural de Medios iniciativa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Otro espacio de reflexión, diálogo y promoción de la calidad periodística es el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) impulsado por profesionales de los medios y profesores de periodismo. En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata también desarrollan sus tareas distintos observatorios, tales como el Observatorio de Medios con perspectiva de género; el Observatorio de Jóvenes, Medios y Comunicación; Observatorio de Políticas de Seguridad; entre otros.

En Brasil, se conocen las experiencias de la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) como organización no gubernamental que busca contribuir en la construcción de una cultura que priorice la promoción y defensa de los derechos de los niñas y adolescentes a partir de los medios de comunicación. En

### VI.1.3. Autorregulación

Si por un lado existen las instancias de control como responsabilidad ulterior, la autorregulación, en cambio, propone una vía alternativa basada en el autocontrol de los propios medios de comunicación, plasmado en una serie de principios recogidos en los códigos deontológicos. Sin embargo, “los códigos de conducta son sólo una parte, y quizá es una parte bastante pequeña, del marco regulador dentro del que trabajan los periodistas<sup>313</sup>”.

Señala Muñoz Saldaña: “La fórmula de la autorregulación constituye una de las cuestiones permanentes en los debates planteados en el ámbito del Derecho a la Información y, aún con mayor intensidad, en la disciplina de la Deontología periodística. Recurriendo a un esquema básico, son tres los elementos que determinan el marco jurídico

---

Colombia se identifican al Centro de Análisis de Información (CADI) que forma parte de la Asociación democrática para la defensa de los derechos humanos. El Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Javeriana y el Proyecto Antonio Nariño de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). En Ecuador está el Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central de Ecuador. En México se conoce a la Asociación Mexicana de Derecho de la Información (AMEDI) organización social sin fines de lucro que promueve una cultura jurídica para la reforma de los medios de comunicación y busca establecer una nueva relación entre el Estado, los medios y la sociedad. En Perú se lleva a cabo la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social “surge como un movimiento de indignación frente a la certeza de que los medios, especialmente la televisión, son factores claves en la legitimación del poder político y del no-poder ciudadano y frente a su influencia en los campos cultural y ético”. En Venezuela se pone en práctica el Observatorio Global de Medios Capítulo Venezuela enfocada en la vigilancia, protección y defensa de la libertad de expresión.

Finalmente, a nivel internacional también es importante mencionar que se forma la Red Latinoamericana de Observatorios de Medios que la conforman, entre otras algunas de las ya mencionadas, el Centro Civitas (Guatemala), Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social (Perú), FUCATEL (Chile), Observatorio de Prensa de Brasil (Brasil), Observatorio Nacional de Medios (Bolivia), Red Andi América Latina (Brasil), Instituto de Investigación de Medios (Argentina), Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y FundaMedios (Ecuador).

<sup>312</sup> PAZ, Martha, La Autorregulación periodística sí se puede, En los zapatos de la pulga. Relato de una experiencia de la Defensoría del Lector en Bolivia, Centro para Programas de Comunicación, 2ª ed. La Paz, 2008, pág. 19-26. En <http://www.pieb.com.bo/blogs/paz/articulo1.php> pág. 6.

<sup>313</sup> Harris, Nigel, “Codes of conduct of journalism”, capítulo en Bilsey, Andrew y Chadwick, Ruth, “Ethical issues in journalism and the media”, Routledg, 3º edl, Londres-Nueva York, p. 65. Citado por Rodríguez Pardo Julián, en “Autorregulación y hetero-regulación, una apuesta suficiente para el mercado actual?. El caso de Gran Bretaña” en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.. Pág. 273.

y deontológico que rodea a cualquier actividad profesional: usu definición, la cual determina el papel de dicha actividad en la sociedad y, por tanto, su finalidad o deber para con los ciudadanos; su régimen de funcionamiento, destinado a exponer las máximas que rigen el quehacer profesional; y, en tercer lugar, el establecimiento de un adecuado sistema de control o regulación cuya finalidad consiste en asegurar el correcto ejercicio de la profesión, la corrección de los posibles errores o desviaciones, y, en definitiva, su adecuación y respeto a la finalidad social que determina su puesto en la sociedad<sup>314</sup>”.

La dificultad preside la aplicación de esta triple tarea a la actividad de los profesionales de la comunicación y, gran parte del problema se deriva de la controvertida naturaleza de dicha profesión y de su repercusión en la sociedad. Como señala H. Aznar, las libertades de expresión e información, nacidas en gran medida para contrarrestar el poder de la Autoridad y para denunciar sus tentaciones, constituyen, probablemente, uno de los primeros objetivos en materia de limitación o de regulación excesiva<sup>315</sup>.

La autorregulación efectivamente es sólo una vía más de control, pero de escasa efectividad, en gran parte por la falta de compromiso real de los periodistas y los medios para con tales criterios y porque los profesionales de la información suelen atenerse al marco legal vigente, es decir, que mientras respeten el orden jurídico aplicable, no hay por qué autolimitarse más allá de lo que la norma dice.

En Argentina, esto es paradigmático, ya que no hay un solo código de autorregulación a nivel nacional y son escasos e insuficientes los logros en tal sentido. Sólo existe el Código de Ética de FOPEA (Foro Argentino de Periodistas Argentinos) que data de 2006 y sólo alcanza a los integrantes de la entidad.

---

<sup>314</sup> Muñoz Saldaña, Mercedes. “La autorregulación como espacio de la libertad informativa: el paradigma de la comunicación comercial”, en Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.. Pág. 227.

<sup>315</sup> Aznar, Hugo. “Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios”. Ariel Comunicación, Barcelona, 1999. Pág. 11.

#### **VI.1.4. Sin autorregulación comprometida, avanzan los límites impuestos externamente**

Esta falta de apego explícito a las normas éticas por parte del periodismo argentino, ha llegado a grado tal que ha devenido a lo que debió haber evitado: la imposición de pautas de diligencia periodística a través de sentencias judiciales. Así es, en Argentina hay una sentencia que ha marcado jurisprudencia hasta la actualidad: el Caso “Campillay c. La Razón” (15 de mayo de 1986).

Es necesario detenernos un momento en el análisis de esta sentencia. Los hechos fueron los siguientes: “Campillay c. La Razón” (Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 15 de mayo de 1986<sup>316</sup>): Los diarios “La Razón” y “Diario Popular” publicaron una noticia en la que informaba que el Sr. Campillay había sido detenido por la Policía Federal argentina. “Las noticias en cuestión aparecen plagadas de subjetividades e inexactitudes respecto del actor, quien era calificado como integrante de una asociación delictiva dedicada al robo y al tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos, y en diversiones con mujeres. Tal proceder de los diarios demandados, implicó un ejercicio imprudente de su derecho a informar, toda vez que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas –admitida aun la imposibilidad práctica de verificar su exactitud– imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo o potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados”, sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (Cons. 7°).

Básicamente se comprobó que los diarios demandados habían transcripto un comunicado de la Policía Federal Argentina, sin citar la fuente, y por lo tanto haciendo suyos los contenidos presentes en la información dada. No hubo contraste de fuentes, aduciendo los diarios demandados que se trataba de una fuente oficial, confiable. Como el Sr. Campillay fue sobreseído en sede penal de los delitos que se lo acusaban demandó

---

<sup>316</sup> Caso “Campillay c. La Razón y otros”. CSJN, Fallos, 308:789; LL, 1986-C-411; E.D., 118:302; J.A., 1986-III-12.

porque la errónea información dada por los diarios provocó daños y perjuicios a su derecho al honor.

A partir de este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina elaboró lo que hoy se conoce como “Doctrina Campillay” o “Test Campillay”, ya que las pautas trazadas en este caso son cotejadas con la información que es acusada de violentar el derecho al honor. Así básicamente, estos son los puntos de la doctrina:

- Cita, individualización de la fuente periodística o secreto profesional: debe estar expresamente citada en la información, no puede aducirse con posterioridad. También debe expresarse previamente el caso en el que la información haya sido obtenida bajo secreto profesional periodístico.
- Multiplicidad de fuentes: nunca una fuente es suficiente, siempre debe haber contraste de fuentes, incluso si son oficiales.
- Contraste de fuentes: una vez recabadas más de una fuente presentar las diferencias o semejanzas entre una y otra.
- Utilización de potencial, conjetural o expresiones no aseverativas: cuando no se tiene seguridad de lo que se está informando o cuando se plantean hipótesis interpretativas.
- Individualización de la persona involucrada: recaudos en su individualización completa sino se cumplen los requisitos restantes.

Esta doctrina, tal como resaltamos, se sigue aplicando hasta la actualidad en los tribunales argentinos en tanto se discuta el derecho al honor y la libertad de expresión. Por supuesto, que en muchos casos el cumplimiento de estas medidas releva de responsabilidad a periodistas y medios. Ahora bien, estas pautas que expuso la Corte argentina, sin embargo, son pautas básicas de la diligencia periodística, que debiera estar presente en normas deontológicas y hacen a la pericia informativa del sujeto cualificado de la información.

Cada vez que tratamos este tema en las aulas universitarias de periodismo y comunicación en Argentina advertimos: no hay sentencia que diga cómo un médico debe hacer una intervención quirúrgica, por más que se condene por mala praxis; no hay

sentencia que diga a un profesional de la ingeniería cómo construir un puente; no hay sentencia que establezca cómo un psicólogo debe tratar a un paciente; no hay sentencia que determine cómo es el arte de curar una caries a un odontólogo; y podríamos seguir con múltiples ejemplos. En cambio sí hay una sentencia, una doctrina que establece las pautas básicas de la profesión periodística a la hora de informar. Y formulamos una pregunta: ¿acaso no son los periodistas quiénes muchas veces, con su desdén hacia los principios éticos, su falta de diligencia, su precipitación por informar, o sus prejuicios ideológicos no terminaron provocando las hetero-regulaciones, provenientes de la justicia, la legislación y los actos de gobierno?

Ciertas pautas básicas de diligencia profesional deben ser asumidas con compromiso público en una alta tarea de interés público como lo es el periodismo, con especial dedicación para honrar una profesión que debiera enaltecer y fortalecer nuestras democracias.

Otro caso que da cuenta de este desprecio a pautas éticas en Argentina, en este caso en relación a los medios de comunicación lo constituye el caso de los avisos de oferta sexual. Se comprobó en un sinnúmero de situaciones que tales avisos constituyen una forma de atrapar mujeres para la trata de personas. Entonces, en el marco de la Ley N° 26.485<sup>317</sup>, se dictó el Decreto N° 936/11<sup>318</sup>, se prohíbe con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres. Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo

---

<sup>317</sup> La Ley N° 26.485 (B. O.: 14/03/2009), de Protección Integral para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, declara de orden público sus disposiciones y determina su aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal. En virtud de su artículo 2°, dicha ley tiene como objeto promover y garantizar, entre otros extremos la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres.

<sup>318</sup> Decreto 936/11 Poder Ejecutivo Nacional. Argentina. B.O.: 6/07/2011.



texto, haciendo referencia a actividades lícitas resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas.

De inmediato los medios protestaron y se presentaron judicialmente cuestionando el decreto, y adujeron que era un ataque a la libertad de expresión. Una doble cara o falta de ética, mientras todos los medios informan sobre la desaparición de personas que han sido víctimas de la trata, argentinas y extranjeras, como el caso de Marita Verón que llegó hasta la ONU o el caso de María Cash, o miles de mujeres que se buscan, se niegan a cumplir una pauta básica de compromiso social. ¿Por qué los medios no tomaron la decisión valiente y de servicio social de no publicar tales avisos que conducen a la trata de personas? ¿Por qué las organizaciones que nuclean a los medios privados no hicieron una declaración ética y asumieron ese compromiso moral ante la sociedad? No autorregularse en este sentido, les costó una norma prohibitiva, que se incumple disfrazada en otros rubros comerciales y que fuera finalmente establecida su constitucionalidad y su respeto al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este tema no es exclusivo de Argentina. La temática relativa a los anuncios "hot" implica un gran negocio para algunas empresas. Al decir de la periodista Mariana Carbajal, este negocio lleva a algunos diarios de Argentina a facturar más de un millón de pesos por mes, y en países europeos como España, unos cuarenta millones de euros al año<sup>319</sup>.

Recientemente se ha debatido la cuestión, sosteniendo la gran mayoría de los sectores sociales que estos avisos:

- denigran a las mujeres.
- reafirman el estereotipo de mujer-objeto sexual.
- establecen y transmiten el concepto de que el género femenino es y debe ser servil.
- pueden encubrir situaciones de trata de personas, proxenetismo y explotación sexual de personas mayores y menores.

---

<sup>319</sup> CARBAJAL, Mariana: "Un debate caliente", Diario Página 12, Buenos Aires, 3 de julio de 2011, p. 20, Sociedad.

En el seno de este debate han surgido diversas ideas contrarias, relativas a si deben seguir permitiéndose los anuncios de oferta y demanda sexual, y en su caso, si se permitieran, de qué manera o con qué protocolo de protección de los derechos del público y de la mujer.

En España, la "Ministra de la Igualdad" pidió a un consejo de Estado -órgano de consulta del Gobierno- que analizara el tópico desde un punto de vista legal; finalmente este consejo de Estado se pronunció en favor de limitar la publicidad de la prostitución en la prensa gráfica. Los principales argumentos residían en que:

Para esta postura, limitar o prohibir estos anuncios no afecta realmente la "libertad de prensa" o la libertad de expresión.

También para este organismo español, les parecía que prohibir los anuncios "hot" estaría en concordancia con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 15-11-2000, ratificada por España.

Por último, el Consejo consultivo español consideraba que estos anuncios gráficos banalizan a la prostitución y la presentan como algo común y socialmente aceptado, y pueden incitar a su ejercicio por parte de los menores<sup>320</sup>.

¿Cuántas veces la falta de pautas éticas comprometidas y de autocontrol terminan provocando controles e imposiciones hetero-regulación impuestas por los poderes públicos?

#### **VI.1.5. Razones de los códigos deontológicos y el autocontrol**

---

<sup>320</sup> Pérez Del Viso, Adela. "El decreto 936/11 y sus fundamentos. la lucha contra patrones socioculturales de dominación", 11 de Agosto de 2011 [www.microjuris.com.ar](http://www.microjuris.com.ar), MJ-DOC-5479-AR. Id Infojus: DACF110095. Disponible en: <http://www.infojus.gob.ar/adela-perez-viso-decreto-936-11-sus-fundamentos-lucha-contra-patrones-socioculturales-dominacion-dacf110095-2011-08-11/123456789-0abc-defg5900-11fcanirtcod>

“Son varias las razones que se aducen como causa de origen de los códigos deontológicos y el autocontrol, y en la mayor parte de ellas parecen subyacer intenciones que se escapan de lo que se podría llamar un estricto compromiso ético de los medios de comunicación:

- a) La propia conciencia de profesionales y empresarios de la comunicación que entienden que su labor no puede realizarse al margen de un compromiso ético profesional serio y riguroso, como forma de garantizar un trabajo de calidad; y que comprenden que el respeto a ciertas normas “morales” constituye un signo distintivo del buen profesional.
- b) Como consecuencia de la anterior, el refuerzo positivo de la relación con su audiencia o su público que reconoce en el producto/servicio que consume/usa el seguimiento de esos estándares éticos, capaces de diferenciarlo de los productos de la competencia. Sin duda, una consecuencia que se enmarca en el ámbito del utilitarismo comercial y que resulta a todas luces inseparable de cualquier relación de carácter mercantil entre oferta y demanda.
- c) Dentro de esta idea de conveniencia y propio interés, es ineludible la mención de la autorregulación como una fórmula para frenar el intervencionismo gubernamental en la actividad de los medios de comunicación por medio de leyes que restrinjan sus contenidos. Se trata de la creencia de que cualquier límite establecido por la propia profesión resultará siempre menos lesivo para sus intereses que los límites que vienen establecidos desde fuera del propio sector.
- d) Por último, es inevitable referirse al aumento del prestigio público de aquellos medios que se autorregulan y que encuentran en la formulación de sus códigos deontológicos una estupenda herramienta de marketing capaz de mejorar su imagen corporativa, no sólo frente a sus clientes actuales y/o potenciales, sino también frente al resto de la profesión y el Poder político.

Sostiene Hugo Aznar que “peso a constituir el mecanismo de autorregulación más común y extendido, los códigos no están a salvo de las críticas. Sus defensores y

detractores casi se reparten por igual<sup>321</sup>”. Por ello, pone a consideración sus ventajas y limitaciones, para evaluarlos en su justa dimensión. Así, las ventajas serían:

1. Supone el reconocimiento público de la dimensión ética de la profesión o actividad, hecho además por quienes la llevan a cabo. Contribuyen a crear una *conciencia moral colectiva en la profesión*. Junto a los conocimientos técnicos y frente a las exigencias económicas, están ahora y antes que nada los valores y los compromisos morales.
2. No sólo ponen de manifiesto de forma genérica la dimensión ética de la actividad, sino que establecen además sus contenidos morales concretos: las normas y obligaciones que la deben guiar. Esta función a su vez, tiene tres aspectos relevantes: informativo, argumentativo y de aprendizaje.
3. Ayudan a defender los criterios morales internos de una profesión frente a las presiones externas. En el caso del periodismo, no sólo a presiones de todo tipo, personales, políticas y económicas pero también no hay que desdeñar las presiones de los propietarios de medios, poco escrupulosos. Por eso también debe ser una garantía del ejercicio profesional del periodismo en el ámbito de las grandes empresas mediáticas. Allí se ve patente, entre otras cuestiones, la importancia de la cláusula de conciencia, que está garantizada en España, pero no en Argentina.
4. Acrecientan el prestigio de una profesión. Es una salvaguarda para evitar la imposición de normas externas y permite distinguir entre quienes trabajan verdaderamente por los bienes y fines propios de la profesión y quienes sólo la utilizan para obtener rendimientos económicos.
5. Es una pauta que permite a la sociedad disponer de un criterio acerca de lo que se puede esperar y exigir de los periodistas y de los medios. Constituyen una fuente de información ética no sólo para el profesional, sino también para el público.

Pero también hay críticas. La generalidad de los principios de los códigos deontológicos, “de las normas ética que se recogen en multitud de documentos autorreguladores, los convierte en textos, en ocasiones inservibles, que continúan dejando

---

<sup>321</sup> Aznar, Hugo. “Comunicación Responsable. Deontología y autorregulación de los medios”. Ariel Comunicación, Barcelona, 1999. Págs. 33 y ss.

al arbitrio de profesionales y empresarios la decisión ética de cada caso concreto. Y siendo así, ¿es posible creer en su eficacia?, ¿se justifica el autocontrol pro parte de unos profesionales y empresarios que, tradicionalmente, han venido reclamando una libertad sin límite para el ejercicio de su trabajo? Como planteaba el ya fallecido Luka Brajnovic, y de manera muy rotunda, “las fuentes de la honradez profesional no suelen ser las reglas de un Estatuto, una Ley de Prensa o un Código de Ética profesional<sup>322</sup>”. Quizá sea cierto, y el día de la profesión demuestra que se plantean mil y una vicisitudes y dilemas para los que ni las leyes, ni los códigos deontológicos, tienen respuesta, pero indiscutiblemente, menos es nada en el esfuerzo por mejorar la calidad de los productos informativos<sup>323</sup>.

En este marco, es necesario analizar cómo los diversos códigos de ética (de alcance internacional, regional, nacional o comunal) han receptado el derecho de rectificación o respuesta dentro de sus pautas de conducta, aún existiendo normas que lo consagran en el plano jurídico, e independientemente de ello.

## **V.2. Ética y derecho de rectificación o respuesta.**

### **Recepción del derecho de rectificación en Códigos de Ética Periodística, Estatutos de Redacción y declaraciones deontológicas.**

Como pone de manifiesto Zannoni<sup>324</sup>, el reconocimiento ético del derecho de respuesta incluso por quienes se oponen al instituto legal marca una contradicción de cierto sector de la doctrina y de los empresarios que rechazan esta figura. Cita para ello el razonamiento de José Escribano en el prólogo del libro de Badeni, “Libertad de prensa”, en el cual expresó: “Conjeturo que en algo podríamos haber evitado esta ola adversa si, en todos los casos, el derecho de réplica a una información falsa o errónea hubiera sido aceptado como una obligación moral irrenunciable asumida por los periodistas”. Ante esta

---

<sup>322</sup> Brajnovic, Luka. “Deontología periodística”. EUNSA, Pamplona, 1978, pág. 217.

<sup>323</sup> Rodríguez Pardo Julián, en “Autorregulación y hetero-regulación, una apuesta suficiente para el mercado actual?. El caso de Gran Bretaña” en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.. Pág. 275.

<sup>324</sup> Zannoni, E. y otro. Ob. cit. pág. 238.

afirmación, concluye acertadamente Zannoni: “¿Qué mejor argumento a favor de la reglamentación del derecho de respuesta! Si se admite que la inserción es una obligación moral irrenunciable, ¿cómo oponerse a que se torne en obligación –o deber- jurídicamente exigible, precisamente ante quienes abdican de aquel deber moral irrenunciable?

En principio, hay que tener en cuenta que en la interpretación de la sentencias de la Corte argentina, sobre el derecho de respuesta, hay alusiones y fundamentos en códigos de ética para argumentar sobre su constitucionalidad y su complementariedad y amplitud del derecho a la información. En este sentido, la cita de principios éticos que reconocen expresamente tal derecho abonan la línea argumentativa a favor del derecho de rectificación, puesto que, si los propios periodistas y medios lo reconocen para sí en el plano ético, como pauta profesional, más aun vale su reconocimiento desde lo jurídico, y lejos está de ser por ende, un instrumento descabellado, surgido del poder político para avasallar a la libertad de expresión.

En este sentido, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el caso “Petric c. Página 12”, los jueces Nazareno, Boggiano y Vázquez, y en el fallo “Ekmekdjian c. Sofovich” <sup>325</sup> traen en su análisis los siguientes documentos sobre ética periodística:

***Proyecto de Código de Honor de Periodistas de las Naciones Unidas, admitido por una Comisión de la Asamblea General de 1952:***

“cualquier información que, una vez hecha pública se revelase incorrecta o nociva, deberá ser rectificadada espontáneamente y sin demora”.

***Código de Ética del Círculo de Antioquía, de 1970***, en cuanto establece como obligación del periodista el

---

<sup>325</sup> En el mencionado caso Petric c. Página 12, podemos encontrar estas citas en el Voto del Dr. Nazareno, considerando 8, Dr. Boggiano, considerando 9; Dr. Vázquez, considerando 22. En los tres casos se corona tales citas con una remisión a la doctrina española: El Consejo de Europa ha recomendado la universalización del derecho de contestación y lo ha justificado por el derecho a la verdad del sujeto universal. (Bell Mallen, I., Corredoira y Alfonso, L., y Cousido, P. “Derecho de la información”. T. I, p. 139, Ed. Colex, Madrid, 1992. En el fallo Ekmekdjian c. Sofovich ver Consid. 13 de la sentencia.

*“poner todo su empeño en buscar la verdad y, cuando haya incurrido en error, toda su capacidad para enmendarlo”.*

***Carta del Periodista de Francia, de 1965***, categoriza las faltas profesionales y considera como las de máxima gravedad:

“la calumnia, las acusaciones no probadas, la alteración de los documentos, la deformación de los hechos”.

***Carta de Chile, de 1969***, que amplía el contenido de la réplica, bastando con que la persona afectada crea necesario dar una respuesta o aclarar una situación como para que nazca el derecho y pueda ser ejercido.

***Unión Europea de Radiodifusión, en 1969***, recomendó a sus asociados que transmitieran rectificaciones.

***Sociedad Suiza de Radiodifusión, en 1981***, dio directivas sobre las condiciones y formas de las respuestas.

En el ámbito internacional, la ***Federación Internacional de Editores de Diarios y Publicaciones (FIEJ)***, formada al término de la Segunda Guerra Mundial, definió un Código Internacional de Principios, con la recomendación de que los miembros que la integraban lo aplicasen de inmediato, entre los mismos, se destaca el Principio 7:

“Rectificación de las informaciones erróneas.

*Los hechos e informaciones que, después de haber sido publicados, se revelaran falsos, han de ser rectificadas sin limitaciones”<sup>326</sup>.*

En los últimos tiempos, se han dictado una serie de códigos deontológicos, que mencionan y reconocen expresamente el derecho de rectificación o respuesta, ya no solo

---

<sup>326</sup> Sánchez, Salvador Juan. “Periodismo. Arcanos y Laberintos”. Zeta Editores. Mendoza, Argentina, 1996. Pág. 39.

como derecho, sino también como pauta de conducta profesional, así podemos citar, entre los más actuales a los siguientes:

***Código Internacional de Ética Periodística. UNESCO*** (adoptado el 20 de noviembre de 1983)<sup>327</sup>.

5. Acceso y participación del público: El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista favorezca el acceso del público a la información y la participación del público en los “medios”, lo cual incluye la obligación de la corrección o la rectificación y el derecho de respuesta.

***Federación Internacional de Periodistas*** (adoptado por el Segundo Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas en 1954 y reformado por el 18º Congreso Mundial celebrado del 2 al 6 de junio de 1986).

*Declaración de Principios de Conducta de los Periodistas.*

5. “Los periodistas deberán hacer todo lo posible por rectificar cualquier información que se haya revelado perjudicialmente inexacta”.

***Código Interamericano de Ética Periodística. Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP, Caracas, 1979)***<sup>328</sup>.

En su fundamentos destaca que “Las normas deontológicas estatuidas en este documento se basan en principios contenidos en códigos nacionales, en declaraciones y resoluciones de la ONU y sus organismos, como también en la Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) y que proclama que la libertad de expresión se concibe como el derecho de nuestros pueblos a ser oportuna y verazmente informados y a expresar sus opiniones sin otras restricciones que las impuestas por los mismos intereses de los pueblos.

---

<sup>327</sup> En este apartado, se ha considerado como fuente bibliográfica, entre otras: Villanueva, Ernesto. “Deontología informativa”. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavijero. México, 1999.

<sup>328</sup> Disponible en [http://www.catedras.fsoc.uba.ar/loreti/dossier\\_legislativo/codigo\\_etica\\_felap.htm](http://www.catedras.fsoc.uba.ar/loreti/dossier_legislativo/codigo_etica_felap.htm)



Declara que el periodista tiene responsabilidad política e ideológica derivada de la naturaleza de su profesión, que influye en la conciencia e las masas, y que esa responsabilidad es insoslayable y constituye la esencia de su función social. La Felap está consciente de las dificultades en la aplicación de una normativa deontológica en los marcos del sistema informativo vigente regido por la tenencia privada de los medios, y la conversión de la noticia en mercancía. Considera la conciencia moral como una de las formas de conciencia social, producto histórico concreto, determinado por la estructura económica, por lo que es mutable y en cada caso prevalecen las normas de los sectores dominantes.

La Felap está convencida de la existencia del progreso moral y de que con la sucesión de etapas históricas la humanidad ha logrado e impuesto puntos de vista éticos que expresan intereses comunes y son válidos para el género humano. Segura, asimismo de que la libertad moral individual sólo es posible con la toma de conciencia sobre los intereses sociales la Felap opina que la ética profesional debe ser conquistada dentro de la batalla para alcanzar en nuestras naciones un periodismo auténticamente libre.

En su artículo 5 alude a la aceptación del derecho a réplica en estos términos:

“Artículo 5 - El periodista es responsable por sus informaciones y opiniones, aceptará la existencia de los derechos de réplica y respetará el secreto profesional relativo a sus fuentes”.

### ***Consejo de Europa***

#### ***Código Europeo de Deontología del Periodismo***

(Aprobado por la Asamblea General del Consejo de Europa, el 1º de julio de 1993).

*26. A petición de las personas afectadas, los medios de comunicación rectificarán, automática y rápidamente, con el tratamiento informativo adecuado, todas las informaciones y opiniones que se revelaran falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones adecuadas y, en caso de necesidad, indemnizaciones.*

27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los estados miembros del Consejo de Europa, conviene poner en marcha la Resolución 74-26<sup>329</sup> sobre derecho de réplica –situación del individuo en relación con la prensa, adoptada por el Comité de Ministros, el 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza.

### ***Centro Latinoamericano de Periodismo.***

#### ***Declaración de Principios del Periodismo Centroamericano***

(Adoptado por el Programa Latinoamericano de Periodismo en Nueva Orleans, el 12 de junio de 1993).

*Séptima. Debemos rendir culto a la precisión con que presentamos las informaciones. Cuando se cometan errores deberán ser rectificados con prontitud. De la forma como se acepten la réplica y la rectificación depende en gran medida su prestigio y credibilidad.*

### ***Federación Latinoamericana de Periodistas***

#### ***Código Latinoamericano de Ética Periodística.***

*Artículo 4: En su labor profesional, el periodista deberá adoptar los principios de veracidad y de la ecuanimidad, y faltará a la ética cuando silencie, falsee o tergiverse los hechos; proporcionará al público información sobre el contexto de los sucesos y acerca de las opiniones que sobre ellos se emitan, a fin de que el perceptor del mensaje noticioso pueda interpretar el origen y la perspectiva de los hechos. En la difusión de ideas y opiniones, el periodista promoverá la creación de las condiciones para que ellas puedan expresarse democráticamente y no sean coartadas por intereses comerciales, publicitarios o de otra naturaleza.*

*Artículo 5: El periodista es responsable de sus informaciones y opiniones y aceptará la existencia de los derechos de réplica...*

---

<sup>329</sup> Ver el apartado referido a “El derecho a la información en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”

## ***Sociedad Interamericana de Prensa***

### ***Contribuciones sobre los diez principios de Chapultepec***

#### ***Principio 10***

*En el ejercicio de la libertad de prensa solamente puede constituir un abuso la información que es inexacta, propagada con malicia y con pleno conocimiento de su falsedad. Además, toda limitación a la libertad de expresión y de prensa debe responder a la necesidad de sancionar la producción de un daño manifiesto, claro y presente. No es suficiente la responsabilidad objetiva ni la presunción de daño. En caso de duda, la solución debe ser favorable a la libertad de prensa por aplicación del principio democrático in dubio pro libertate.*

.....

*Aquella responsabilidad jurídica para el periodista o el medio de prensa, cuando la publicación propia de un hecho agravante se refiere a funcionarios públicos, figuras públicas o particulares involucrados en temas de interés institucional o de relevante interés público, está condicionada a la prueba fehaciente por el demandante de:*

- *el carácter agravante en el caso concreto, el cual no se presume,*
- *el perjuicio real sufrido, el cual no se presume,*
- *la falsedad de los hechos difundidos,*
- *el dolo directo del periodista o medio de prensa.*

*Estos principios también son aplicables para el caso de aquellas legislaciones en donde están previstas las sanciones que generan el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, como una imposición arbitraria de información. Pero aún en estos casos, sólo es admisible en materia de hechos y jamás cuando se emiten opiniones.*

Es de notar, en este último código citado, cómo se hace referencia al derecho de rectificación, ya que hay una remisión a su consideración jurídica y lo ven como una “sanción”. En verdad, y tal como venimos sosteniendo, esta visión es errónea, ya que el derecho de rectificación, lejos de ser una sanción, en primer lugar, es un derecho humano, que hace a la libertad de expresión y al derecho de dar y recibir información por parte del rectificante o respondiente, pero además de ello, el que rectifica es el afectado y el medio

no tiene por qué verse obligado a adueñarse de esa diferente versión de los hechos, sino publicar y dar a conocer la diferente versión de los hechos que tiene quien rectifica. No es una sanción sino una responsabilidad ulterior. No implica reconocer que la verdad está en quien responde, sino permitirle a quien responde contar su versión, darle voz a sus hechos.

Luego de haber hecho un recorrido por los códigos de ética a nivel internacional y regional, cabe presentar aunque sea un mínimo panorama de los códigos deontológicos en diversos países:

### ***Alemania***

#### ***Código de Prensa y Directrices para Secciones Redaccionales.***

(Emitida originalmente por el Consejo Alemán de Prensa en sus sesiones correspondientes al 5 y 6 de julio de 1973, actualizada con las reformas del 23 de febrero de 1994).

Directriz 3.1. Rectificación. El lector ha de poder darse cuenta de que la noticia ya dada era por completo o en parte incierta. Por eso en una rectificación en la que se reproduzcan correctamente los hechos hay que hacer referencia a la noticia incierta precedente. Debe describirse lo realmente acontecido, incluso cuando el error se haya admitido ya públicamente de otro modo. La veracidad es asunto que incumbe a la redacción. No le exime de él cualquier sugerencia y publicación de una carta de lector.

### ***Bélgica***

#### ***Código de principios periodísticos***

(Adoptado en 1982 por la Asociación de Editores de periódicos, la Asociación General de Periodistas Profesionales de Bélgica y la Federación Nacional de Semanarios de Información).

##### ***1. Rectificación de informaciones erróneas***

*Los hechos e informaciones que, después de haber sido publicados, se revelen falsos deben ser rectificadas sin restricciones y sin perjuicio de las disposiciones legales sobre el derecho de réplica.*

## ***Brasil***

### ***Código de Ética del Periodista***

(Adoptado por el Congreso Nacional de Periodistas de Brasil en 1987).

Artículo 15: El periodista debe permitir el derecho de respuesta de las personas relacionadas o mencionadas en su trabajo, cuando se demuestre la existencia de errores o inexactitudes.

## ***Cataluña***

### ***Declaración de Principios de la Profesión Periodística en Cataluña***

(Aprobado por el Colegio de Periodistas de Cataluña el 1º de noviembre de 1992)

3. Rectificar con diligencia y tratamiento adecuado a la circunstancia, las informaciones –y las opiniones que se deriven de ellas- cuya falsedad haya sido demostrada y que, por ese motivo, resulten perjudiciales para los derechos o intereses legítimos de las personas y/o organismos afectados, sin eludir, si fuera preciso, la disculpa, con independencia de lo que las leyes dispongan al respecto.

## ***Chile***

### ***Código de ética de los periodistas de Chile***

(Adoptado por el Consejo Nacional de la Asociación de Periódicos de Chile)

*11.- Las retractaciones deberán insertarse en los lugares legalmente asignados para ello, sin perjuicio del derecho a la réplica.*

## ***Colombia***

### ***Código de Ética***

(Adoptado por el Círculo de Periodistas de Bogotá, aprobado en 1990)

### ***Rectificación y réplicas***

*Artículo segundo: Es obligación del periodista rectificar pronta y adecuadamente las informaciones inexactas, así no se haya exigido aclaración por parte del perjudicado.*

## ***España***

### ***Código Deontológico de la Profesión Periodística***

(Aprobado por la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España el 28 de noviembre de 1993).

#### ***III. Principios de actuación***

*13. El compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conoce su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado. En consecuencia:*

- a) Deberá fundamentar diligentemente las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.*
- b) Advertida la difusión de material falso, engañoso o deformado, estará obligado a corregir el error sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su difusión. Asimismo, difundirá a través de su medio una disculpa cuando así proceda.*
- c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las personas físicas o jurídicas la adecuada oportunidad de replicar a las inexactitudes de forma análoga a la indicada en el párrafo anterior.*

## ***Estados Unidos***

### ***Declaración de Principios de la Sociedad Estadounidense de Editores de Diarios***<sup>330</sup>

#### ***Artículo IV – Verdad y exactitud***

---

<sup>330</sup> Adoptada por la junta de directores de ASNE, 23 de octubre de 1975; este código sustituyó a los “Cánones del Periodismo” que se adoptaron primero, por unanimidad, en 1923. Rivers, William y Mathews, Cleeve, “La ética en los medios de comunicación”, Edic. Gernika, México D.F., 1994. Pág. 364.

*La buena fe para con el lector es el fundamento del buen periodismo. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles por asegurarse de que lo que contengan las noticias es exacto, libre de tendencias y tiene un contexto, y que todos los puntos de vista se presenten con justicia. Los editoriales, los artículos de análisis y los comentarios tienen que alcanzar los mismos niveles de exactitud con respecto a los hechos, que los informes respecto de las noticias.*

Los errores de hecho significativos, como también los errores de omisión, deben corregirse pronta y prominentemente.

#### *Artículo VI – Juego limpio*

*Los periodistas deben respetar los derechos de las personas involucradas en las noticias, observar los niveles comunes de decencia y hacerse responsables ante el público por la objetividad y exactitud de sus reportajes.*

*A las personas acusadas públicamente se les debe dar pronta oportunidad de responder a los cargos.*

...

*Estos principios se establecen con la intención de preservar, proteger y fortalecer los lazos de confianza y respeto entre los periodistas y el pueblo estadounidense, vínculo que es esencial para mantener la libertad que les ha sido confiada a ambos, por los fundadores de la nación.*

### ***Italia***

#### ***Carta de los Deberes de los Periodistas***

(Adoptada por la Federación Nacional de la Prensa Italiana y el Consejo Nacional del Orden de los Periodistas el 8 de julio de 1993)

El periodista corrige oportuna y exactamente sus errores o inexactitudes de conformidad con el deber de rectificación en la forma establecida por la ley, y favorece la posibilidad de réplica.

## *Paraguay*

### ***Anteproyecto de Código de Ética***

(Sindicato de Periodistas del Paraguay, 1997)

Artículo 4: Los periodistas son responsables por sus informaciones y opiniones; aceptarán los derechos de réplica.

## ***Perú***

### ***Carta de Ética Profesional***

(Adoptada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en septiembre de 1988)

El comunicador social garantiza el derecho a la rectificación si una persona ha sido equivocada o negativamente aludida a través de los medios de información.

Ahora bien, vistos los códigos emanados del seno de los profesionales de la información, consideramos necesario abordar el estudio de los códigos de ética y declaraciones de principios emanados de los medios de información. Si bien “resulta inútil discurrir sobre ética periodística sin analizar la ética empresarial”<sup>331</sup>, consideramos necesario abordar el estudio de los principios éticos proclamados por algunos medios, al menos en relación a nuestro objeto de análisis. El abismo que hay entre el deber ser y el ser cotidiano, entre la proclama y el hacer concreto, en este sentido, puede ser una sarcástica y dolorosa indagación, ajena a estas líneas.

En algunos casos, en el ámbito de los medios, los códigos de ética toman la forma de “Manual de Estilo” que los periodistas que trabajan en ellos deben respetar en el desarrollo de su labor, o bien, en algunos casos, al ingresar laboralmente un periodista a dicho medio, deben firmar, junto con su contrato la declaración de principios que deberán seguir como dependientes de la empresa.

---

<sup>331</sup> Fontevecchia, Jorge “Moralía”, Diario Perfil 10 de mayo de 1998. Separata Manual de Estilo y Algo más. Pág. 2.



Es obvio decir que dada la reticencia con la cual los medios, como empresas tienen para con el derecho de rectificación, resulta más difícil encontrar la mención expresa del mismo como pauta de conducta. Sin embargo, aún con este enfoque, encontramos los siguientes:

***ABC España, Normas de Conducta***, tomado de El libro de estilo de ABC. Madrid. 1993.

Las peticiones ajenas de rectificación se considerarán con la máxima cortesía y ponderación y se publicarán siempre que resulten justificadas. Los casos dudosos, desproporcionados o abusivos serán sometidos a la Asesoría Jurídica del periódico para su dictamen.

***El Mundo, España, Estatuto de Redacción***

En el marco de los derechos y deberes de la redacción, se establece:

*“Las noticias se publicarán una vez que la certeza de los hechos redactados se haya constatado con el máximo de fuentes posibles. Si alguna persona, física o jurídica, resultare aludida en la información, se procurará contactar con la misma, e incluir su opinión y reacción como elemento de la información”.*

***El Periódico de Catalunya, España. Estatuto de Redacción***<sup>332</sup>

Entre los derechos y deberes profesionales, se declara que la labor de la redacción de El Periódico de Catalunya se rige por una serie de principios, entre los que se establece: “Se favorecerá la publicación sin demora de las correcciones y rectificaciones”.

Asimismo, tiene un apartado específico bajo el título de Rectificación que reza:

---

<sup>332</sup> Muro de Iscar, Francisco (Comp.) *Ética en la Información. Códigos de Conducta y estatutos profesionales* (II) Apie. Madrid. 1996.

*El Periódico de Catalunya dispondrá de un espacio abierto al público para garantizar el derecho de rectificar o matizar informaciones incompletas o erróneas, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley.*

*Instará a los medios que usen y material gráfico suyo a publicar las rectificaciones y matizaciones que sobre ellos se realicen.*

*Los miembros de la redacción tienen derecho a conocer, antes de su publicación, las rectificaciones sobre sus trabajos y a manifestar su opinión sobre la pertinencia o no de publicarlas.*

Cualquier miembro de la redacción que detecte un error en una información, sea suya o de otro, puede proponer su rectificación mediante los mecanismos establecidos en el diario. Si se confirma el error y el tema es significativo, la rectificación será publicada.

### ***El País, España. Principios***<sup>333</sup>.

En sus Principios, El País, declara que “*ha de ser el primero en subsanar los errores cometidos en sus páginas y hacerlo lo más rápidamente posible y sin tapujos. Esta tarea recae de manera muy especial en los responsables de cada área informativa*”.

Asimismo, se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido por la Constitución Española y en tal marco asume y acoge su contenido, lo cual implica también reconocer el derecho de rectificación o respuesta consagrado en el Artículo 20 de la Constitución Española.

Merece destacarse que en España, es el diario El País el pionero en aprobar un Estatuto de Redacción en 1980. La iniciativa nació como un intento de blindar la línea editorial frente a posibles nuevos socios que quisieran modificarla. Fueron necesarios dos años de complicadas negociaciones entre representantes de la Redacción y la empresa

---

<sup>333</sup> “El País. Libro de Estilo”. Madrid, 1990.

editora, dos referendums y la aprobación del Consejo de Administración, la Junta de Fundadores y la Junta General de Accionistas<sup>334</sup>.

***Estatuto de Redacción de la Agencia EFE<sup>335</sup> (Texto de consenso, 22 de marzo de 2006).***

En relación a “Correcciones y rectificaciones”, posee un apartado propio, tema al que se dedican los artículos 53 a 55:

**CORRECCIONES Y RECTIFICACIONES**

53. EFE corregirá sin demora ni subterfugios los errores observados en sus informaciones y especificará cuál es el error.

54. Si el error es de la fuente y ésta pide que se corrija, en el nuevo texto se hará constar: “a petición de la fuente informante” o “por error de la fuente informante”.

55. Cualquier corrección, rectificación o anulación de una noticia será consultada previamente con su autor siempre que sea posible. 56. Si en contra de la opinión del autor de la información, EFE corrige, rectifica o anula una información, el redactor podrá acudir al Consejo de Redacción, que estudiará el caso y emitirá un informe con la máxima urgencia.

A su vez, en el artículo 66 hay un mandato expreso a la Dirección:

“La Dirección garantizará el respeto escrupuloso a la veracidad en cada información, rechazará todo intento de influir en las coberturas o en la orientación informativa y facilitará el derecho de rectificación cuando se demuestre que una noticia no responde a la verdad”.

Es necesario aclarar, que según el artículo 62, a los efectos del Estatuto se consideran integrantes de la Dirección el presidente, el director de información, los directores y subdirectores de los departamentos informativos o de las filiales de EFE y los delegados en el territorio nacional y en el exterior.

***Estatuto de Información de la Corporación Radio y Televisión Española - RTVE<sup>336</sup> (2008).***

---

<sup>334</sup> H. Aznar, “Ética y periodismo”, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 114-116.

<sup>335</sup> Disponible en: <http://www.efe.com/FicherosDocumentosEFE/estatuto.pdf>

En sus fundamentos tiene en cuenta que la Ley N° 17/2006, de 5 de junio, configura el servicio público de la radio y la televisión de titularidad estatal como un servicio esencial para la vida democrática. La radio y la televisión estatales se rigen por el rigor, la independencia, neutralidad y objetividad y desarrollan la participación de los ciudadanos, garantizando el acceso de los grupos políticos y sociales significativos. Los Consejos de Informativos son los órganos de participación de los profesionales de la información audiovisual de la Corporación RTVE destinados a garantizar el control interno, la independencia editorial y la independencia de los profesionales de los servicios informativos.

La independencia de los profesionales de la información tiene su fundamento en la propia Constitución española. Los derechos a la libertad de expresión e información son elementos sustanciales de toda sociedad democrática: sin ellos quedarían sin contenido el resto de los derechos. Las declaraciones internacionales y los pactos y convenios de derechos humanos los reconocen de forma destacada. La Constitución Española reconoce y protege los derechos a la libertad de expresión y la libre difusión y recepción de información veraz, y nuestra jurisprudencia constitucional ha dado una precedencia a estos derechos en cuanto medios para la libre formación de la opinión pública, sin la cual no pueden funcionar las instituciones representativas. Para los informadores profesionales su derecho a expresar e informar se convierte en el deber de informar al servicio del derecho de los ciudadanos.

En todos los países de nuestro entorno han surgido instituciones de participación que, sin anular la libertad editorial de los titulares de los medios, la hacen compatible con los derechos de los profesionales de la información. Así, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda la aprobación de Estatutos de Información para garantizar

---

<sup>336</sup> Estatuto de Información de la Corporación RTVE. Aprobado en referéndum el 18 de abril de 2008. Promulgado por el Consejo de Administración el 14 de mayo de 2008. Disponible en formato digital en: <https://periodismoglobal.files.wordpress.com/2008/05/estatuto-de-informativosrgltfinal.pdf>

las libertades de los informadores frente a posibles injerencias de los titulares de los medios o de los grupos de presión.

Los profesionales de RNE y TVE han reivindicado reiteradamente durante más de un cuarto de siglo un estatuto que garantizara su independencia mediante un desarrollo de sus derechos y su participación interna. Finalmente, con este objetivo, la Ley 17/2006, de 5 de junio, en su artículo 24 crea los consejos de informativos, que tienen como funciones concretas: a) velar por la independencia de los profesionales; b) promover la independencia editorial de la Corporación; c) informar sobre la línea editorial y la programación informativa, así como participar en la elaboración de los libros de estilo; y d) informar con carácter no vinculante de los nombramientos de los directores de los servicios informativos de las sociedades de la Corporación.

La Ley atribuye al Consejo de Administración la aprobación de las normas de organización y funcionamiento de los consejos de informativos, como órganos de control interno, estableciendo que esta aprobación se haga de acuerdo con los profesionales de la información de la Corporación. En consecuencia, el Consejo de Administración aprueba el siguiente Estatuto de Información de la Corporación RTVE, elaborado conjuntamente con la Comisión Redactora elegida por los profesionales y aceptado en referéndum.

En lo que compete al presente trabajo, es necesario destacar el artículo 28 titulado: Participación en el proceso de rectificación El cual expresamente establece: *art. 28. Todos los profesionales de la información audiovisual tienen el derecho a conocer, preferentemente antes de que se hagan públicas, las rectificaciones sobre sus trabajos que deriven de la aplicación de la legislación vigente.*

A su vez el art. 38 determina: *“Los directores de los Servicios Informativos cumplirán diligentemente las obligaciones de rectificación derivadas de la legislación general y de los principios deontológicos establecidos por este Estatuto”.*

Sostiene Díaz Arias que: “El Estatuto de Información de la Corporación RTVE supone un paso más en la evolución de los estatutos profesionales. La conexión entre los aspectos subjetivos (desarrollo de derechos al servicio de la independencia profesional y deberes deontológicos al servicio del derecho del público a ser informado) y los institucionales (control interno y promoción de la independencia editorial) le convierten en un instrumento poderoso para lograr la excelencia informativa. El EIRTV se convierte en una pieza esencial de la nueva radiotelevisión pública, como garantía interna de la misión de servicio público. Pero las normas habilitan y crean el marco para el ejercicio de los derechos y eso exige compromiso y coraje. Confiamos en que las nuevas generaciones de profesionales que sustituyen a las que lucharon por el Estatuto lo hagan suyo y extraigan del mismo todas sus posibilidades, siempre al servicio del público<sup>337</sup>”.

### ***El Economista, México.***

En el marco de su “Política Editorial”, este medio realiza un apartado expreso referente a los “Derechos de los Lectores” entre los cuales contempla: *“A externar su opinión, sugerencias, inconformidades, lesiones a sus derechos o solicitar aclaraciones que considere convenientes sobre lo que se publica en las páginas de El Economista a través del Defensor del Lector”*.

La figura del “defensor del lector” o del “ombudsman del lector”, es utilizada en diversos medios. Cabe decir que este profesional, forma parte del staff del medio y por ende depende de él. Más allá de esta circunstancia que anotamos, su función consiste, para este periódico, en el caso que sea necesario *“iniciar una investigación, ...determinar con el reportero y el editor por qué motivos se manejó la información en la forma en que se hizo y, posteriormente, evaluar si tal procedimiento se ajusta a los derechos de los lectores o a las normas del periódico. Hecha la evaluación, corresponde al Defensor del Lector*

---

<sup>337</sup> Díaz Arias, Rafael. “El nuevo Estatuto de Información de la Corporación RTVE: independencia editorial e independencia profesional en un marco deontológico”. Ponencia presentada al VI Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, 7 y 8 de noviembre 2008. Área D: Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos. Disponible en: <http://derecho.org/omar/estatuto-rtve.pdf>

*elaborar un reporte en el que presenta la solicitud del lector o la propia observación, y los argumentos de redactores y editores, para finalmente pronunciarse sobre el caso”.*

El camino descripto podría dar lugar a una rectificación, pero dista de la figura propia del derecho de rectificación, en la cual quien expresa su versión de los hechos es el mismo afectado, por sí mismo, y sin intermediarios.

### ***El Tiempo, Colombia. Los principios de El Tiempo.***

Como en el caso anterior, El Tiempo, reconoce que *“procederá con diligencia, a corregir los errores que haya podido cometer y lo hará de manera clara, abierta e inequívoca. El Defensor del Lector tiene entre sus obligaciones la de asegurar que esta norma se cumpla”.*

*“Los reclamos y protestas sobre una información deben recibirse con cortesía y ser puestos de inmediato en conocimiento del Defensor del Lector y el Editor o Jefe de Redacción, quienes decidirán, conjuntamente con el periodista, la manera de atenderlos o contestarlos”.*

### ***Financial Times, Reino Unido. Normas Éticas.***

El Financial Times, adhirió y apoya el código de práctica publicado por la Comisión de Quejas contra la Prensa en el Reino Unido (PCC) y lo ha tomado como propio.

#### ***1. Exactitud***

- 1. Los diarios y periódicos deberán procurar no publicar material inexacto, equívoco o distorsionante.*
- 2. Cuando se reconozca la publicación de información con inexactitud, equívoco o distorsión de importancia, se deberá corregir con prontitud y con la debida preeminencia.*
- 3. Cuando sea lo indicado, se publicará una disculpa.*

4. *Los diarios y periódicos deberán informar imparcial y exactamente sobre cualquier acción de difamación en la que hayan sido parte.*

2. *Oportunidad de réplica.*

*Cuando personas u organizaciones soliciten con motivos razonables justa oportunidad de réplica de inexactitudes, se les deberá conceder.*

### **The Washington Post, Estados Unidos. Código de Conducta<sup>338i</sup>.**

*Errores.*

*The Washington Post está empeñado en reducir al mínimo el margen de errores que comete y en corregir los que se producen. Nuestro objetivo es la precisión; nuestra defensa, la imparcialidad. Debemos escuchar respetuosamente a las personas que nos hacen notar los errores.*

Lo cual no quiere decir que establezcan éticamente el otorgar el derecho de rectificación o respuesta.

### **Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión de Perú**

El artículo 3º establece que la prestación de los servicios de radiodifusión se rige por los diversos principios y entre ellos, en el apartado k) el respeto al derecho de rectificación. También posee un Pacto de Autorregulación que hace referencia al procedimiento del derecho de rectificación ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión de Perú.

La Secretaría Técnica es el órgano que realiza la labor de instructor del procedimiento de investigación y sanción de los actos que contravengan lo contenido en el Pacto. Entre sus atribuciones está la de considerar que “tratándose de una queja, reclamo y/o solicitud de rectificación de parte, decidir la admisión a trámite del procedimiento de investigación y sanción, pudiendo declarar inadmisibile o improcedente la queja o reclamo, según corresponda”.

---

<sup>338</sup> La Nación, Manual de Estilo y Ética periodística. Espasa. Buenos Aires, 1997.



Asimismo, el Comité de Solución de Quejas de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, es el órgano encargado de la aplicación Pacto, en ese sentido, se encarga de resolver las quejas y comunicaciones que le son remitidas por la Secretaría Técnica en cumplimiento de sus funciones. Entre sus atribuciones se encuentra la de “emitir Resoluciones en primera instancia, sobre las quejas y comunicaciones que le envíe la Secretaría Técnica en relación a la aplicación del presente Pacto, así como proveer el mecanismo para el ejercicio del derecho de rectificación establecido en las Leyes de la materia”.

Hay una segunda instancia, constituida por el Tribunal de Ética, el que, entre otras atribuciones, es quien emite resoluciones, en segunda y última instancia sobre las quejas y comunicaciones, en relación a la aplicación del Pacto, así como de proveer el mecanismo para el ejercicio del derecho de rectificación establecido en las Leyes de la materia. Luego se establece el procedimiento de solución de quejas y de rectificaciones determinándose los pasos del procedimiento sancionador. Incluso en su página web se dispone de un formulario de solicitud de rectificación para facilitar el pedido. Toda esta información está disponible en el sitio web del Servicio Nacional de Radio y Televisión de Perú <http://snrtv.org.pe/quienes.php>

## **En Argentina**

### **Código de Ética de FOPEA**

A nivel general, sólo hay una Código de Ética Periodística, y es el elaborado por el FOPEA<sup>339</sup> (Foro de Periodismo Argentino) para sus miembros, como organización no gubernamental. Según se destaca en sus propios fundamentos, el Código de Ética de FOPEA, “es un documento de referencia ética para los integrantes de FOPEA. Es el producto de un año de debate específico y de varios más de trabajo en busca de una

---

<sup>339</sup> Para más información se recomienda la consulta de la web oficial de FOPEA: <http://www.fopea.org/>

reflexión y una autocrítica que permitiera a este grupo encontrar algunos principios comunes sobre la práctica profesional.

El último tramo de esta senda comenzó en diciembre de 2005 cuando FOPEA publicó junto a la Fundación Konrad Adenauer un estudio comparativo de códigos de ética en el mundo y un análisis de la situación en la Argentina. El trabajo incluía un anteproyecto de código que fue debatido por los socios y fue puesto en la mesa de discusión en Buenos Aires y 15 provincias del país”.

El documento final fue firmado el 25 de noviembre de 2006 como cierre del Congreso Nacional de Ética Periodística realizado por FOPEA en la ciudad de Buenos Aires, y desde entonces es de carácter obligatorio para todos los que integran el FORO DE PERIODISMO ARGENTINO.

En referencia al tema de estudio, en su Punto 31, el Código de FOPEA establece la pauta que correspondería al caso de retractación:

*“31. El periodista debe rectificar la información difundida, en el caso de que así correspondiera”.*

Es el único apartado que habla de este tema, y no surge de su contenido la posibilidad de otorgar el derecho de rectificación o respuesta. De todos modos, como reiteramos en el presente trabajo, el mismo surge del contenido del artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y goza de jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Argentina.

## **Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual**

### **Ideas y Orientaciones para la Elaboración de un Código de Ética**

En julio de 2013, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovió un análisis de los diferentes códigos de ética, guías de contenido, declaraciones de principios y manuales de estilo de la Argentina y del mundo. Con el fin de que se multiplique en Argentina la autorregulación, difundieron el material del informe y

los análisis, esperando que sea un punto de partida hacia una comunicación más democrática y comprometida con las pautas éticas informativas.

El informe sostiene que un código de ética debe convertirse en un instrumento de trabajo cuya eficacia mayor consiste en ser tenido en cuenta como una de las referencias que deciden la labor diaria.

Entre los puntos promovidos o puestos como pauta se encuentra el “Derecho a réplica”. En tal sentido, recoge lo establecido por el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y a continuación releva su recepción en el ámbito latinoamericano.

Así, destaca: “Sobre este tema, la FELAP, EBC y la TV Pública de Ecuador, Radio Nacional de Venezuela, RTVE, los canales Educación, 11 y 12 de México, la guía del IMER en ese país, RCN/CARACOL y la agencia Iberia establecen en sus guías y procedimientos este derecho.

En el caso de Ecuador, lo prevé especialmente ante denuncias y críticas, igual que RNV, que además dispone la rectificación cuando se haya afectado a personas por informaciones inexactas o agraviantes.

En particular, Canal 22, establece este derecho y la necesidad de la rectificación en los mismos espacios de la emisión que lo motivaron. Coincide EBC: toda persona o institución tiene derecho a respuesta, y deben proporcionarse las mismas condiciones de espacio, horario y audiencia.

La guía del IMER dispone que este derecho deberá ser reconocido en tiempos breves, similar a lo que dicen las agencias Iberia y Radio Educación.

El IMER establece que para el ejercicio del derecho de réplica se debe actuar “a la brevedad posible” y con “celeridad”<sup>340</sup>.

### ***La Nación***

#### ***Principios Éticos y de Conducta Profesional***<sup>341</sup>

Bajo el título “Rectificación de errores”, La Nación sostiene que *“Debe ser el propio diario el que rectifique los errores en que pudo haber incurrido, aunque no lo pida el interesado. En La Nación, como se sabe, se publica una fe de erratas en la que se registran errores anteriores. Pero hay casos en que, por su importancia, las rectificaciones demandan mayor espacio, que el diario brindará espontáneamente”*.

#### **Clarín. Principios editoriales**<sup>342</sup>.

El “Gran Diario Argentino” no tiene un reconocimiento del derecho de rectificación o respuesta ni se pronuncia a su favor, pero cabe comentar que establece una serie de pautas sobre los aspectos legales que deben cuidar y tener en cuenta los periodistas del medio para evitar demandas por difamación, calumnias e injurias y explica a sus trabajadores la llamada doctrina de la real malicia que ampara a la prensa, indicándoles que ante la falsedad o inexactitud de una información referida a funcionarios o figuras públicas o a personas particulares involucradas en cuestiones de interés público, son los afectados quienes deberán demostrar que el periodista conocía la falsedad de la información o que se manejó con notoria despreocupación sobre si era falsa o no.

#### **Perfil. Manual de Estilo y algo más**<sup>343</sup>.

---

<sup>340</sup> Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Primer Informe Anual. Anexo IV. Informe 2013. Ideas y Orientaciones para la Elaboración de un Código de Ética. Buenos Aires, 2014. Pág. 167 a 183.

<sup>341</sup> La Nación, Manual de Estilo y Ética Periodística. Espasa. Buenos Aires, 1997.

<sup>342</sup> Clarín, Manual de Estilo. Buenos Aires, 1997.

<sup>343</sup> Perfil. Manual de Estilo y algo más. Domingo 10 de mayo de 1998. Buenos Aires.

“Perfil”, un diario que se lanzó en Argentina en mayo de 1998 y que no sobrevivió a ese año, presentó en el marco de una fuerte campaña publicitaria de lanzamiento, su Manual de Estilo y su Código de Ética.

Tal como reseñamos la particularidad de *El Economista* de México y *El Tiempo* de Colombia, el periódico presentó la figura del “ombudsman” del diario, como “original iniciativa de Perfil”, asignándole la *“función de representar los intereses de los lectores, para lo cual criticará al diario en forma pública y regular y responderá los reclamos que le sean acercados. Sus conclusiones y comentarios serán publicadas semanalmente en la sección Ideas”*. El código de ética no hacía mención alguna al derecho de rectificación o respuesta.

### **VI.3. Desafíos éticos comunicacionales ante los nuevos medios de comunicación.**

Las actuales tecnologías de la comunicación, que exponencialmente se desarrollaron en las últimas dos décadas del siglo XX, tienen en la actualidad una indubitable raigambre mundial. Internet; las redes sociales; wasap, celulares; i phones, i pods, la televisión digital y en fin, todo el universo de las tecnologías de la comunicación provocan, en primer lugar, tornan vetustos para muchos los viejos códigos de ética periodística del siglo pasado.

Sin embargo, no es así. Esos valores siguen presentes y se manifiestan también en Internet. Por supuesto que requiere de actualizaciones, pero no se debe desdeñar su contenido. Por caso, el derecho de rectificación o respuesta también es aplicable a Internet, sin lugar a dudas. Con un aditamento, la celeridad que ofrece Internet y los nuevos medios para la publicación de la respuesta. Los dispositivos además de estas tecnologías posibilitan una respuesta inmediata. Aunque sabemos que una vez que la información corrió por las redes sociales y por las distintas herramientas de Internet es difícil detenerla. Por ello, Internet también nos convoca a un renovado compromiso ético en la información que allí se brinda.

Las denominadas Nuevas Tecnologías han incidido fuertemente en el proceso periodístico desde el impreso al audiovisual. Desde la vieja redacción informativa del papel y la máquina de escribir se ha pasado, a lo largo de las tres últimas décadas, a la redacción cibernética donde el periodista trabaja directamente con la pantalla automatizada, cambiándose métodos y relaciones profesionales y laborales. Se ha producido una constante evolución que aún está abierta dentro de una continua innovación con incidencia en hábitos empresariales. Asistimos además a una nuevo periodista el “multiplataforma”, cuya producción es utilizada en los diferentes soportes de un grupo mediático.

Sostiene Infante Naranjo: “En el ámbito de la ética de los medios, las normas fundamentales de la “equidad” y la “solidaridad” se concretan en los “derechos de la comunicación”, a saber, las normas de la libertad universal de expresión y opinión, de la libertad y de equidad de acceso a la información, y de la autodeterminación y atribución en materia de información. Estas normas se han plasmado en muchos textos legales (la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diferentes constituciones nacionales, leyes específicas) y pueden ser entendidas como esencia de la ética en Internet. Dichas normas también coinciden con la idea de Ciudadano, como protagonista de la vida pública y, como protagonista de una “sociedad mediática”, un ciudadano libre, participativo, responsable, socialdemócrata y multicultural”. “Una ética, cuya aplicabilidad práctica no se puede demostrar, no tendrá contenido ni efecto. Debemos implementar la práctica de una ética comunicativa en Internet. Antulio Sánchez, piensa que esta se tiene que plasmar en códigos éticos o deontológicos (Camps, 2004) para individuos y medios, que operen como orientación para los usuarios en distintos ámbitos de Internet<sup>344</sup>”.

Las preocupaciones y desafíos jurídico comunicacionales que presenta Internet ha sido motivo de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, de los cuatro relatores de libertad de expresión en 2011.

---

<sup>344</sup> Infante Naranjo, Manuel J. “Aproximación a la ética emergente de Internet”, en “Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. Valencia, 21 de septiembre de 2005. Págs. 343 a 358.

El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)<sup>345</sup>.

Colaboraron en la Declaración, las organizaciones no gubernamentales *ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión* (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el *Centro para la Libertad y la Democracia* (Centre for Law and Democracy).

Se enfatizó la importancia fundamental de la libertad de expresión —incluidos los principios de independencia y diversidad— tanto en sí misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo.

Destacaron el carácter transformador de Internet, como medio que permite que miles de millones de personas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a información y fomenta el pluralismo y la divulgación de información. Se manifestaron atentos al potencial de Internet para promover la realización de otros derechos y la participación pública, asó como para facilitar el acceso a bienes y servicios. Celebraron el notable crecimiento del acceso a Internet en casi todos los países y regiones del mundo, y observando a la vez que miles de millones de personas aún no tienen acceso a Internet o cuentan con formas de acceso de menor calidad. Y continuaron sus fundamentos: *Advirtiendo* que algunos gobiernos han

---

<sup>345</sup> Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Dunja Mijatović, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; Catalina Botero Marino; Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión; Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información.

actuado o adoptado medidas con el objeto específico de restringir indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional;

*Reconociendo* que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sujeto a aquellas restricciones limitadas que estén establecidas en la ley y que resulten necesarias, por ejemplo, para la prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales de terceros, incluyendo menores, pero recordando que tales restricciones deben ser equilibradas y cumplir con las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión;

*Preocupados* porque, aun cuando se realicen de buena fe, muchas de las iniciativas de los gobiernos en respuesta a la necesidad antes mencionada no toman en cuenta las características especiales de Internet y, como resultado, restringen de manera indebida la libertad de expresión;

*Considerando* los mecanismos del enfoque multisectorial del Foro para la Gobernanza de Internet de la ONU;

*Conscientes* del amplio espectro de actores que participan como intermediarios de Internet —y brindan servicios como acceso e interconexión a Internet, transmisión, procesamiento y encaminamiento del tráfico en Internet, alojamiento de material publicado por terceros y acceso a este, referencia a contenidos o búsqueda de materiales en Internet, transacciones financieras y facilitación de redes sociales— y de los intentos de algunos Estados de responsabilizar a estos actores por contenidos nocivos o ilícitos;

*Adoptamos*, el 1 de junio de 2011, la siguiente Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet:

1. Principios generales

- a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").



- b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.
- c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades.
- d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet.
- e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.
- f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").

## 2. Responsabilidad de intermediarios

- a. Ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet como acceso, búsquedas o conservación de información en la memoria caché deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervenga específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo ("principio de mera transmisión").
- b. Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros en las mismas condiciones establecidas en el párrafo 2(a). Como mínimo, no se

debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión (como sucede con muchas de las normas sobre "notificación y retirada" que se aplican actualmente).

3. Filtrado y bloqueo

- a. El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.
- b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión.
- c. Se debe exigir que los productos destinados a facilitar el filtrado por los usuarios finales estén acompañados por información clara dirigida a dichos usuarios acerca del modo en que funcionan y las posibles desventajas si el filtrado resulta excesivo.

4. Responsabilidad penal y civil

- a. La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí y/o este se dirige específicamente al Estado en cuestión. Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como "turismo de la difamación").
- b. Las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el

interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de "lugar público de reunión" que cumple Internet).

- c. En el caso de contenidos que hayan sido publicados básicamente con el mismo formato y en el mismo lugar, los plazos para la interposición de acciones judiciales deberían computarse desde la primera vez que fueron publicados y solo debería permitirse que se presente una única acción por daños respecto de tales contenidos y, cuando corresponda, se debería permitir una única reparación por los daños sufridos en todas las jurisdicciones (regla de la "publicación única").

5. Neutralidad de la red

- a. El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación.
- b. Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información, y cualquier información relevante sobre tales prácticas debe ser puesta a disposición del público en un formato que resulte accesible para todos los interesados.

6. Acceso a Internet

- a. Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
- b. La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las

medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.

- c. La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.
- d. Otras medidas que limitan el acceso a Internet, como la imposición de obligaciones de registro u otros requisitos a proveedores de servicios, no son legítimas a menos que superen la prueba establecida por el derecho internacional para las restricciones a la libertad de expresión.
- e. Los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Como mínimo, los Estados deberían:
  - i. Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.
  - ii. Brindar apoyo directo para facilitar el acceso, incluida la creación de centros comunitarios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y otros puntos de acceso público.
  - iii. Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.
  - iv. Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.
- f. A fin de implementar las medidas anteriores, los Estados deberían adoptar planes de acción detallados de varios años de duración para

ampliar el acceso a Internet, que incluyan objetivos claros y específicos, así como estándares de transparencia, presentación de informes públicos y sistemas de monitoreo.

La doctrina y los especialistas en comunicación y derecho a la información también vienen advirtiéndolo sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el periodismo. Entre otros, González Ballesteros señala: “El periodismo tradicional, sometido a las normas de la libertad de prensa, está siendo desplazado por Internet y lo será todavía más. Cada usuario de Internet ahora puede publicar noticias y opiniones, sin verse sujeto a normas periodísticas y éticas profesionales, sino actuando simplemente en base a su derecho a la libertad de expresión y a las normas y límites resultantes de ese derecho fundamental, con unos límites jurídicos difusos y de compleja aplicación. Internet también refleja que hay bastantes menos impedimentos legales para las nuevas organizaciones de medios o para los individuos. Esto puede conducir a tendencias de concentración en diferentes medios, consolidándose los tradicionales y expandiéndose los nuevos, aunque el incremento de estos no garantiza el pluralismo informativo. A pesar del cambio tecnológico no está resuelta la cuestión de si el incremento en el número de fuentes y la superación de la escasez benefician la función que tiene asignada la libertad de expresión en una sociedad democrática<sup>346</sup>”.

Finalmente, el Catedrático español nos marca la necesidad de trabajar fuertemente en la alfabetización digital, la que es imprescindible para tomar decisiones a la hora de informarse y evaluar críticamente las fuentes de información.

---

<sup>346</sup> González Ballesteros, ob. cit. “Democracia y comunicación...”. Pág. 36.

## **Capítulo VII**

### **El status questionis**

**VII.1. El derecho de rectificación o respuesta en Argentina. Su interpretación doctrinaria y jurisprudencial. El derecho de rectificación en las constituciones provinciales.**

**VII.1.1 El derecho a la libertad de expresión y el derecho de rectificación en la Constitución Argentina. Interpretación a partir de la reforma constitucional de 1994.**

La Constitución Nacional Argentina de 1853 establece, en su artículo 14 que todos los habitantes gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Sus fuentes son: el artículo 1º del decreto sobre libertad de imprenta del 26 de octubre de 1811, el artículo 210 del proyecto de Constitución de la Sociedad Patriótica en 1812, el artículo 4º de la Carta de Mayo de San Juan de 1825 y el artículo 16 del proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, tributario de un precepto explícito de la Constitución de Chile de 1833. “No se tomó como modelo la Enmienda Primera de la Constitución de Estados Unidos”, que dispone: “El Congreso no dictará leyes acerca del establecimiento de una religión o de la prohibición de su libre ejercicio; o menoscabará la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a peticionar al gobierno la reparación de sus agravios”<sup>347</sup>. Sí la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana dejará sus huellas de presencia, como fuente directa, en el artículo 32 de la Constitución Argentina, ya en 1860. Tal incorporación hará profunda mella en el máximo tribunal constitucional del país, a punto que sus precedentes serán fuente y fundamento de las sentencias que versan sobre conflictos con el

---

<sup>347</sup> Fayt, Carlos. “La Omnipotencia de la Prensa. Su juicio de Realidad en la Jurisprudencia Argentina y Norteamericana”. Edic. La Ley. Buenos Aires, 1994.

Al respecto también señalan Gullco y Bianchi: “(...) la circunstancia de que la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense no contenga una prohibición expresa de la censura previa ha determinado una doctrina que es menos garantista en este puntos que las normas constitucionales correspondientes a nuestro país”. Bianchi, Enrique T. y Gullco, Hernán V. “El derecho a la libre expresión. Análisis de fallos nacionales y extranjeros. Librería Editora Platense S.R.L. La Plata, 1997. Pág. 24.

derecho a la libertad de expresión y otros derechos, tal como veremos en profundidad más adelante y nos llevará a tener en cuenta su análisis comparado.

Ateniéndose al análisis del artículo 14 de la Constitución Argentina, Pizarro recuerda que: “Conviene tener presente que el texto constitucional estadounidense es sensiblemente más breve que el argentino, a punto que no existe en aquél una norma que expresamente reconozca el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa, similar a nuestro artículo 14. (...) Las diferencias pueden potenciarse después de nuestra reforma constitucional, llevada a cabo en el año 1994, la cual incorpora -con jerarquía constitucional- a distintos tratados internacionales sobre derechos humanos, algunos de los cuales contienen disposiciones en materia de libertad de expresión y de prensa y no siempre coincidentes con las que imperan en el derecho estadounidense<sup>348</sup>”.

El constitucionalista argentino Adolfo G. Ziulu, a propósito del análisis del artículo 14, destaca: “Esta tutela tan marcada tiene justificación en la importancia que la prensa reviste en todo sistema republicano de gobierno, uno de cuyos caracteres es la publicidad de sus actos. Además, en la época de sanción de nuestra Constitución, la prensa constituía el medio de comunicación más relevante para la formación de la opinión pública. El otro medio, en aquellos tiempos, era el teatro, pero con un alcance mucho más restringido. (...) Sin embargo, la expresión “libertad de prensa” fue adquiriendo un alcance sumamente amplio, que comprende no sólo a cualquier medio gráfico, sino también a todos los medios de comunicación social<sup>349</sup>”.

En cuanto a la prohibición de censura, que establece el artículo 14 de la Constitución Argentina, desde su primigenio texto de 1853, refiere: “Al prohibir la censura “previa”, el constituyente pretendió desterrar el antiguo procedimiento de revisión anterior de las publicaciones por parte del gobierno. Este sistema ha sido, desde hace tiempo, reemplazado por instrumentos de censura más sofisticados y también más efectivos, como,

---

<sup>348</sup> Pizarro, Ramón Daniel. “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes”. Editorial Hammurabi. José Luis Depalma Editor. Colección Responsabilidad Civil. Volumen 8. Buenos Aires, 1999. Pág. 95.

<sup>349</sup> Ziulu, Adolfo Gabino. “Derecho Constitucional”. Abeledo-Perrot Editores. Buenos Aires, 2014. Pág. 355.

por ejemplo, la desigual distribución de la propaganda oficial, la manipulación en la distribución del papel, la violación del secreto periodístico, las amenazas y los actos intimidatorios, las interferencias en medios orales, etc. Por ello, se debe interpretar que la censura que veda el artículo 14 es aquella que se ejerce antes, durante o después de la difusión<sup>350</sup>”.

La reforma de la Constitución, en el año 1860, implicó el examen de adiciones propuestas por el Estado de Buenos Aires (hasta entonces separada de la Confederación), que se incorporó a la norma fundamental. Así se estableció en el artículo 32: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Para la redacción de esta norma sí se tomó en cuenta, siendo su fuente, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América<sup>351</sup>.

De la lectura de los preceptos normativos señalados, surge que en el sistema constitucional argentino el derecho de prensa se relaciona únicamente con la palabra impresa, en cualquiera de sus formas. Hay que tener en cuenta que la Constitución data de 1853, y de ahí su mención sólo al medio gráfico. Ahora bien, ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina, la que, con su criterio de interpretación dinámica<sup>352</sup> ha hecho extensiva a los demás medios de comunicación social la aplicación de las normas en cuestión.

---

<sup>350</sup> Ziulu, Adolfo Gabino. “Derecho Constitucional”. Abeledo-Perrot Editores. Buenos Aires, 2014. Pág. 356.

<sup>351</sup> El artículo 32 de la Constitución Nacional fue incorporado a su texto por la Convención de 1860 y se erigió en uno de los pilares sobre los cuales la Provincia de Buenos Aires condicionó su incorporación a la Confederación. Sobre este tema, ver: Linares Quintana, Tratado de la ciencia del derecho constitución, t. 4, p. 422 y ss, N° 228; Bidart Campos, Tratado de Derecho Constitucional, t. 2, p. 348 y ss, N 940 y ss.; Fayt, Carlos, “La Omnipotencia de la Prensa. Su juicio de realidad en la jurisprudencia argentina y norteamericana”, Cap. IX, p. 97 y ss.; Mayer, “El derecho público de la prensa”, Cpts. IV; V y VI, p. 69, quien realiza un minucioso estudio de las normas preconstitucionales relativas a la libertad de prensa.

<sup>352</sup> “Que el tribunal ha tenido ocasión de señalar la necesidad de practicar una interpretación dinámica de la Constitución Nacional para facilitar el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover la Ley Fundamental. A ello debe agregarse que esa lógica interpretativa resulta imperiosa cuando – como en la especie- a la clásica consagración de las garantías individuales y jurídicas, se agregan cláusulas de contenido social que requieren la exégesis concertada del conjunto (Fallos: 264:416 – La Ley, 124-685 y sus citas”. Considerando 12, voto del Dr. Fayt en Petric Domagoj c. Página 12. La Ley, Tomo 1998-C.



La Corte Suprema estableció que la verdadera esencia del derecho de prensa radica, fundamentalmente, en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por medio de la prensa sin censura previa, esto es sin el previo contralor de la autoridad sobre lo que se va a decir.

Esta afirmación que es natural y esencial para la vida democrática y que puede manifestarse como una evidencia clara, es un logro a tener especialmente en cuenta en Argentina, que vivió golpeada por sucesivos gobiernos de facto, dictatoriales, que eclipsaron toda posibilidad de libertad de expresión. Desde el fatídico golpe de Estado cívico –militar del 24 de marzo de 1976, hasta el año 1983, el país sufrió el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, que supeditaba a un Estatuto, dictado por bando militar, la vigencia de la Constitución. Más de 30.000 desaparecidos, entre ellos muchos periodistas atestiguan el genocidio perpetrado, el desprecio por la vida humana, la crueldad, la tiranía de un régimen militar para el que el derecho a la información era uno de los tantos cercenados.

En 1984, ya en democracia, se ratifica y se incorpora al Derecho interno, por la ley 23.054<sup>353</sup>, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). No obstante su indudable integración al ordenamiento jurídico argentino, la interpretación “dualista” realizada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina obstaculizó su incorporación normativa en los casos aplicables, hasta el pronunciamiento realizado recién en 1989 en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich<sup>354</sup>”, tal como analizaremos detalladamente, un *leading case* que por primera vez reconoció la operatividad del derecho de rectificación o respuesta en Argentina y al mismo tiempo, reconoció la aplicación jurídica plena del Pacto de San José de Costa Rica.

En el año 1993, el gobierno justicialista de Carlos Saúl Menem en la presidencia, suscribió con el mayor partido de la oposición (Unión Cívica Radical) el llamado Pacto de

---

<sup>353</sup> Ley N° 2.054. B.O. 27 de marzo de 1984. Aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Argentina.

<sup>354</sup> C.S.J.N. 7/07/1992. Fallos 315:1492 y en LL 1992-C, 543.

Olivos o Núcleo de Coincidencias Básicas<sup>355</sup>, por medio del cual se acordaron los puntos sujetos a modificación de la Constitución Nacional de 1853<sup>356</sup>. Así se convocó a una Asamblea Constituyente que cambió variados aspectos de la Carta Magna, sin embargo la parte dogmática de Constitución quedó inalterada y por ende los artículos sobre la libertad de expresión anteriormente citados permanecen con su primigenia redacción. Sin embargo, en cuanto nos interesa y es motivo del presente trabajo, el artículo 75 inciso 22 incorporó con rango constitucional diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre los que se destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, el derecho de rectificación o respuesta a partir de esta norma, es aplicable con jerarquía constitucional.

Así el artículo 75, inc. 22 de la CN establece:

(...) *“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre el Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.*

---

<sup>355</sup> La necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional, fue declarada por Ley 24.309, sancionada y promulgada el 29 de diciembre de 1993. B.O.: 31/12/1993.

<sup>356</sup> Con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957.

Cabe decir entonces, que todos los preceptos contenidos en estos tratados internacionales en cuanto consagran la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información también integran el derecho interno argentino con jerarquía constitucional.

Al conjunto de tratados, pactos, convenciones y declaraciones de jerarquía constitucional que establece el Art. 75 inc. 22 debe sumarse la Ley N° 25.778<sup>357</sup>, sancionada en 2003, que otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

---

<sup>357</sup> Ley 25.778, sancionada: agosto 20 de 2003. Promulgada: septiembre 2 de 2003. B.O.: 3 de septiembre de 2003.

### **VII.1.2. El derecho de rectificación o respuesta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina.**

La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en el caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo sobre Amparo”, reconoció carácter operativo al artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que reconoce el derecho de rectificación o respuesta, incorporada al ordenamiento jurídico argentino por ley 23.054 del 1ero. de marzo de 1984. La aprobación de la Convención y el reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante ley del Congreso, implicó la incorporación de tal tratado internacional de derechos humanos al derecho interno argentino.

Es necesario destacar que esta sentencia es anterior a la reforma constitucional de 1994, y hasta entonces, la mayoría de los votos de la Corte se inclinaba por una posición dualista en cuanto a los tratados internacionales ratificados por Argentina y por ende discutían sobre la incorporación de los institutos no contemplados en el ordenamiento interno. A partir de este caso, la Corte –ya con nueve miembros- se muestra con una postura monista, discusión que a esta altura y tras la reforma de 1994, está superada conforme lo veremos con el Caso “Petric”, aunque la disidencia del Dr. Belluscio en este último caso ofrece una interpretación a nuestro criterio desacertada sobre el derecho de respuesta en la Convención Americana y nuestra constitución, cuestión que trataremos.

Carlos Fayt<sup>358</sup>, comenta respecto a este fallo “Ekmekdjian c. Sofovich”, anterior a la Reforma del 94 que : “Del análisis de la norma infraconstitucional que lo consagra, surge que el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta requiere que un medio de difusión, legalmente reconocido y dirigido al público en general, publique, transmita o emita informaciones inexactas o agraviantes, en perjuicio de una persona. El afectado por esa información, tiene derecho a rectificar o dar las respuestas que estime satisfactorias en

---

<sup>358</sup> Fayt, Carlos. Ob. cit. Carlos Fayt fue uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina al momento de resolver el litigio bajo comentario.

defensa de su honra, reputación o legítimo sentimiento. El medio de difusión, ante la solicitud de la persona afectada publicará o difundirá, en forma gratuita, la rectificación o la respuesta. La negativa de la publicación o difusión, confiere al particular acción sumarísima para obtener sentencia judicial que ordene la medida, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que tuviere por el daño sufrido. Contra la incorporación y reconocimiento de este derecho, los medios de comunicación han utilizado argumentos fundados en la idea de riesgo o peligro para el derecho de prensa, el derecho de propiedad y el rechazo a la publicación comparativa, que implicaría menoscabo a las garantías que protegen a la libertad de expresión”.

Según Fayt, el fundamento teórico del derecho de rectificación o respuesta se articula tomando como base principios de justicia distributiva<sup>359</sup>, ya que representa la reparación de los perjuicios morales sufridos en la honra, reputación o legítimos sentimientos de la persona afectada por la información falsa, inexacta o difamatoria. Se une a ese principio, la potencia multiplicadora del agravio y la difusión pública, por un medio de información o comunicación social. En íntima conexión con estas magnitudes que teóricamente sirven de basamento a este derecho, se encuentra la legítima defensa de la dignidad personal, a la que se lastima tanto en la propia estima como en la estimación social, todo lo cual justifica la necesidad de que la persona ofendida tenga la posibilidad de dar a conocer, de inmediato, sus explicaciones o su versión de los hechos, en el mismo medio y en las mismas condiciones en las que se ha emitido y difundido el agravio.

Las personas y las instituciones no están libradas del agravio, descrédito o desprestigio que, dolosamente o incurriendo en culpa grave o inexcusable, difunda un medio de comunicación. La rectificación o respuesta, no sólo representa un derecho inalienable de la persona ofendida, sino una dimensión de la responsabilidad de los medios de comunicación social de brindar a la sociedad a la que sirven, un mayor grado de acercamiento a la verdad con relación al mensaje o comentario cuyo contenido afectó la dignidad de la persona designada, aludida o nombrada.

---

<sup>359</sup> Fayt, Carlos “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo. Estrategias de la prensa ante el riesgo de extinción”. Edic. La Ley. Buenos Aires, 2001. Pág. 210 y ss.

El constitucionalista argentino Germán Bidart Campos<sup>360</sup>, al tratar la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno –a un año de la sanción de la ley que incorporaba el Pacto de San José de Costa Rica al ordenamiento jurídico argentino, como ley suprema de la Nación- se ocupó, de establecer la constitucionalidad de su art. 14, que consagra el derecho de rectificación o respuesta.

Dilucidó que siempre había margen, pese a la ratificación, para que la Corte Suprema decidiera la inconstitucionalidad de la norma, toda vez que los tratados internacionales, como las leyes y los decretos, caen bajo el control judicial de constitucionalidad. Señaló que el derecho de respuesta no es una novedad en el derecho argentino, porque algunas constituciones provinciales lo contienen desde antes, habiendo recibido favorable acogida doctrinaria. Reconoce, en primer lugar, amplia libertad al director o editor de decidir lo que debe, lo que quiere o no publicar. Esto no es incompatible con el derecho de respuesta, porque el deber de publicar la respuesta viene a ser la prestación debida a favor de quien ejerce su defensa por el mismo medio que hizo alusión inexacta o agravante hacia su persona. Entiende que el deber que importa el derecho de respuesta, viene adosado a la función social y a la responsabilidad social de los medios de comunicación y al derecho a la información. Este derecho, que faculta a los medios para difundir y transmitir información, obliga a rectificar las informaciones que, por inexactas o agravantes, afectan a terceros.

Se trata de una obligación reparatoria a quien sufrió el perjuicio y en nada afecta el ejercicio del derecho de prensa. El derecho de prensa, en su sentido actual –el derecho a la información-, no es un derecho absoluto y la ley puede reglamentar su ejercicio a condición que la reglamentación sea razonable, conforme lo disponen los artículos 14 y 28 de la Constitución nacional.

---

<sup>360</sup> Bidart Campos, Germán. “El Derecho de Réplica”, Rev. El Derecho, T. 115, pág. 829.-

En cuanto al artículo 32, como restringir no quiere decir lo mismo que reglamentar, sino que es sinónimo de alterar, menoscabar, desnaturalizar y de frustrar, “una ley reglamentaria razonable” no restringe, solamente reglamenta. El derecho de prensa es susceptible de reglamentación, eso no está prohibido, lo prohibido es restringir. Considera Bidart Campos que la respuesta es un deber exigible, por consiguiente la sección “Cartas de Lectores” no es el espacio para posibles rectificaciones o respuestas. Por algo el Pacto – dice Bidart Campos-, consigna que la réplica no exime de otras responsabilidades civiles y penales. Señala, por último, que con el ejercicio de ningún derecho se puede causar daño a otros. Nadie puede invocar ese ejercicio, ni su libertad, cuando compromete intereses ajenos. No comprendemos por qué los medios de difusión han de gozar de inmunidad para el deber de acoger una respuesta respecto de algo que han hecho público, en perjuicio de un tercero. La prensa escrita y audiovisual no está al margen de la responsabilidad de remediar, lo más prontamente posible, el daño provocado a terceros.

#### **VII. 1.2.1. Caso “Fernández Valdez”<sup>361</sup>**

Si bien el presente caso data del 11 de diciembre de 1972, a pesar de su lejanía y de ser anterior al largo período del régimen de facto en Argentina, es importante considerarlo como integrador de la jurisprudencia que se expidiera sobre el derecho de rectificación. Es dable observar que en la misma no se habla de “derecho de rectificación” pero sí sobre “retractación” y esta interpretación fue abonando el terreno para la consideración judicial del instituto materia de estudio.

El Superior Tribunal de Justicia de La Rioja hizo lugar al recurso de amparo interpuesto contra la sentencia de la Cámara 3º en lo Criminal y Correccional de esa Provincia, caratulada “Guzmán, Miguel Ángel s/calumnias e injurias” y resolvió, en consecuencia, ordenar al diario local “El Independiente” que publicase, a costa del querellado, el texto íntegro del fallo recaído en dicha causa. Ese pronunciamiento motivó que se interpusiera recurso extraordinario que fue declarado procedente por la Corte.

---

<sup>361</sup> Causa “Fernández Valdez”. CSJN, Fallos, 284:345.

El Tribunal de mérito admitió la retractación que formulara Miguel Ángel Guzmán, sobreseyó definitivamente en la causa y ordenó la publicación íntegra de la sentencia en el diario “El Independiente”. Sin embargo, con posterioridad, y después de haber resuelto comunicar a la dirección del periódico- a raíz de su negativa a publicar el fallo- que debía hacerlo bajo apercibimiento de ley, dejó sin efecto la medida ordenada, por mayoría de votos, accediendo al pedido de aquella dirección, que alegó no tener convenio con el Poder Judicial para reproducir sus decisiones y no haber sido parte en el proceso, ni condenada en él, ni hallarse sujeta a la jurisdicción de ningún tribunal por el asunto en que se le requería, que la condena a publicar el pronunciamiento “es para el Señor Miguel Ángel Guzmán, pero no para El Independiente”.

Esta decisión fue a su vez dejada sin efecto por el Superior Tribunal de Justicia, en el fallo recurrido. Se sostuvo allí, en esencia, sin desconocer que “El Independiente” no fue parte en la causa ni objeto, por ende, de condena alguna, que la sentencia que dispuso su publicación en las páginas del mismo, quedó firme para los litigantes, y que, siendo ello así, no era admisible que terceros extraños al proceso pudieran modificarla. Se afirmó también que, de cualquier modo, la negativa del periódico invalidaba o desnaturalizaba **el instituto de la retractación** y significaba un verdadero abuso de derecho, en los términos del art. 1071, párr. 2º del Código Civil, habida cuenta de que no median ni fueron expresados motivos valederos que la fundamentase.

De tales consideraciones se agravió el recurrente quien, en síntesis, impugna el fallo entendiendo que, supuestas las premisas que en él se admiten, esto es, que la dirección de “El Independiente” no fue parte en el proceso ni objeto de condena, la obligación de publicar en las columnas de ese diario el pronunciamiento recaído en la querella contra Miguel Ángel Guzmán se aparta del principio de legalidad y lesiona la libertad de prensa, el derecho de propiedad, el efecto relativo de la cosa juzgada y el principio básico según el cual nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe.



Los Fundamentos Jurídicos más destacados del fallo son los siguientes:

“12) Que parece útil reiterar –a propósito de la invocación genérica de la libertad de prensa y del derecho de propiedad en que se escuda el apelante- que como lo tiene dicho esta Corte, ningún derecho es absoluto, pues todos deben operar según las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen. Y, además, que ningún derecho esencial de los que la Ley Suprema reconoce puede esgrimirse y actuar aisladamente, porque todos forman un complejo de operatividad concertada, por manera que el estado de derecho existe cuando ninguno resulta sacrificado para que otro permanezca.

13) Que el honor de las personas es un interés humano que la ley penal protege..., y por virtud de las normas que resguardan la personalidad y la libertad, todo ofendido tiene derecho a la reparación oportuna. Conceder y hacer efectiva esa reparación es función de los jueces. Acatar sus decisiones y colaborar con ellos para realizar la justicia, es deber de todos los ciudadanos, que no puede soslayarse merced a la invocación, no razonablemente motivada, de los derechos incorporados a la Constitución Nacional, ya que la tutela de estos últimos ha de armonizar con las medidas legales pertinentes para la eficaz represión de los delitos...y cualquier dificultad que resulte de la existencia de intereses legítimos contrapuestos ha de solucionarse dando preeminencia a los que revisten jerarquía superior, por su carácter superior y público...

14) Que esta Corte no encuentra que el pronunciamiento recurrido pueda calificarse de arbitrario, como lo pretende el apelante. La libertad de prensa que aduce se entiende al servicio de la información, de la ilustración, de la cultura, del perfeccionamiento y afianzamiento de las instituciones políticas y civiles. Mal puede invocársela, pues, para negar al ofendido la reparación de su honor, en la forma prevista por la ley. Y el derecho de propiedad del órgano periodístico o de su consecución de aquel alto objetivo, consustanciado con el fin mismo del derecho: lograr una comunidad educada en el conocimiento de la verdad y dignificada, de tal modo, por la instauración de un orden pacífico y justo.

15) Que, en el caso particular de autos, no se ve cómo podría justificarse que el único diario de la provincia de La Rioja rehúse su colaboración retribuida para reparar el honor del ofendido, a requerimiento de los jueces, en una causa criminal. La libertad de prensa no resulta afectada en la especie, porque ella no se concilia con la negativa irrazonable, sin motivación expresada ni legítimo interés agredido. La misión propia de esa preciosa libertad no es impedir sino manifestar la verdad, evidente en el sub iudice desde que no se trata, incluso de la sentencia que se expide en cuestión opinable, sino de la que se ha dictado por promediar retractación, en los términos y con los efectos que marca la ley.

...

17) Que no obsta a las conclusiones que anteceden el efecto relativo de la cosa juzgada, la cual, como decían los romanos, fecir ius inter partes, sin que sea verdad absoluta que no pueda alcanzar a terceros...Es cierto que el apelante no intervino en la querella ni resultó, por ende, condenado. Pero de lo que se trata en el sub iudice no es de considerarle como tal, sino de juzgar sobre la legitimidad de su oposición a que se utilicen las páginas de su periódico para hacer efectiva, en los términos de la ley, la **decisión judicial que manda hacer pública la retractación del responsable de la injuria**. Sin perjuicio de que esa publicación es de carácter reparatorio y no penal, como lo enseñan la doctrina y la jurisprudencia, resulta obvio que el requerimiento que insta a efectuarla no presupone la condición de parte en el proceso, concluido en la especie con una decisión que no fue de condena sino que sobreseyó definitivamente en la causa y dispuso la publicación a costa del querellado, en el órgano que el tribunal consideró más a propósito para llenar las finalidades de la ley. No se está, pues, ante la extensión de la cosa juzgada a un tercero, perjudicado sin razón alguna, sino ante la negativa de quien no admite ser compelido a colaborar con la justicia, en los términos del art. 114 del Código Penal y del art. 456, parr. 2º del Código local de rito”.

Este caso entonces marca la interpretación en cuanto a la publicación por parte de los medios de comunicación social de las sentencias judiciales como forma de reparación o retractación de los hechos oportunamente difundidos.

Si bien no hace referencia al ejercicio del derecho de rectificación como tal, ni constituye derecho de respuesta, sí es necesaria su consideración en cuanto la justicia puede eventualmente obligar a través de una sentencia a un medio para que publique determinada decisión judicial en pos de la reparación del honor de una persona afectada por una información, lo cual implicará una rectificación informativa.

#### **VII.1.2.2. Caso “Sarotto”<sup>362</sup>”**

Aníbal José Sarotto demandó al periódico semanal “Panadería Argentina” la publicación de su respuesta a una carta, que lo mencionaba como virtual autor de una estafa, cuya existencia o inexistencia debía decidir la justicia. El juez de primera instancia desestimó la acción de amparo, por carecer de fundamento jurídico y fáctico suficiente. En la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Eduardo A. Zannoni, a cuyo voto se adhirieron Martín de Mundo y Jorge Escuti Pizarro, sostuvo que el derecho de respuesta –aunque integra el ordenamiento jurídico argentino–, debía ser reglamentado por la ley porque así lo dispone la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo carácter “vinculante en el orden internacional, pero no es, todavía derecho positivo interno”. No obstante, y a propósito del ámbito del amparo contra actos de particulares (artículo 321 inc. 2º Código Procesal Civil), considera necesario examinar la cuestión desde la perspectiva del orden constitucional. Se pregunta concretamente si aun en ausencia de ley reglamentaria, el derecho de respuesta constituye una garantía implícita, comprendida en el art. 33 de la Constitución Nacional. Al respecto señala que, a partir de los precedentes “Siri, Ángel S.”<sup>363</sup> y “Kot Samuel S.R.L.”<sup>364</sup>, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que las garantías individuales existen y protegen al individuo por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución independientemente de las leyes reglamentarias. Obviamente, la Corte aludía entonces a leyes reglamentarias del amparo –que en el orden nacional no existieron hasta la sanción de la ley 16.986– que, como tales, hacen operativas las garantías individuales.

---

<sup>362</sup> Causa “Sarotto”. Cámara Nacional Civil, sala A, marzo 19-1986.

<sup>363</sup> Fallos, 239-459, del 27 de diciembre de 1957. Caso “Siri, Ángel S. s/ amparo”.

<sup>364</sup> Fallos, 241-291. Del 5 de octubre de 1958. “Caso Kot s/amparo”

Considera que el derecho de responder publicaciones que contienen informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en perjuicio de las personas y, correlativamente, el deber del editor responsable del medio de difusión de publicar la rectificación o respuesta, existirán en la medida en que la ley reconozca aquel derecho o imponga este deber. En otras palabras, la operatividad del amparo exigiría que el editor, obrando contra la ley – ilegalmente o arbitrariamente-, rehusase cumplir con su deber jurídico. Recién entonces se podría discurrir acerca de si esa conducta ilegítima o arbitraria, vulnera un derecho subjetivo de jerarquía constitucional. Pero mientras tal ley no exista, el editor está amparado por el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución, según el cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Sobre esta base argumental, la Cámara confirmó la sentencia rechazando el recurso interpuesto.

#### **VII.1.2.3. Caso “Sánchez Abelenda”<sup>365</sup>**

El actor, presbítero Raúl Sánchez Abelenda, promovió demanda de amparo contra Ediciones de La Urraca S.A., editora de la revista “El Periodista de Buenos Aires” y contra el director de ese semanario para que se los condenara a publicar en el mismo la rectificación, -cuya ubicación y texto el demandante indicó-, de una noticia publicada en el número 62, correspondiente a la semana del 15 al 21 de noviembre de 1985. En la tapa, bajo el título “El complot paso a paso, nombre a nombre” se incluyó al “cura Sánchez Abelenda” en una lista de personas citadas a declarar, información que fue nuevamente consignada en la página 3. El actor afirmó que nada tuvo que ver con el complot denunciado en el decreto 2049/85 y agregó constancias de las que surgía que no había sido citado a prestar declaración de ninguna clase ante el Juzgado donde aquél se investigaba. Sobre esa base –y fundado en que, a su entender el derecho de respuesta es una garantía constitucional implícita a cuya vigencia no obsta su falta de reglamentación legislativa- pidió la inserción en la tapa de la mencionada revista, de frases –cuyo tenor explicitó-, que indicaran que había estado totalmente desvinculado del aludido complot. También solicitó

---

<sup>365</sup> Causa “Sánchez Abelenda”. Fallos: 311: 2553.

que, en la sección “política nacional”, se publicaran las constancias emitidas por la justicia federal, que respaldan sus asertos. Todo ello, con caracteres tipográficos similares a los utilizados en el citado número 62 de “El Periodista de Buenos Aires”.

Después de un pedido efectuado a la revista, en el número 64 se transcribió la certificación judicial obtenida por el demandante y también el texto de una comunicación del Ministerio del Interior, según el cual resultaba requerida la declaración informativa del presbítero Sánchez Abelenda, en los términos del art. 236, segunda parte, del Código de Procedimientos en lo Penal.

El juez de primera instancia, reconoció el derecho del actor y condenó a los demandados a publicar, en la tapa del semanario, una leyenda similar a la solicitada por Sánchez Abelenda. Además, se los obligó a transcribir –en el interior de la revista-, un certificado judicial del que resultaba que el demandante estaba totalmente desvinculado de la causa caratulada “Ministerio de Educación y Justicia de la Nación s/ den. Pres. Inf. art. 210 bis del Código Penal”, como así también la constancia del desistimiento fiscal. La sentencia destacó la falsedad de las noticias que motivaron la demanda y que tal circunstancia causó un indudable menosprecio en la honra e intimidad del reclamante. Por otra parte señaló, respecto del derecho de respuesta, que “a partir de la sanción de la ley 23.054, que ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José de Costa Rica”, tal garantía ha quedado consagrada normativamente, por imperio de lo establecido por el artículo 14 de dicha Convención que consagra el “derecho de rectificación o respuesta”.

Apelada la resolución por los demandados, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la confirmó. Consideró justa la apreciación en cuanto a que la noticia dada era inexacta y, por lo tanto, constituyó una “demasía informativa”, al par que un ataque a la honra e intimidad del actor. También estimó insuficiente la declaración efectuada en el número 64 de “El Periodista de Buenos Aires” a la luz de lo que debe entenderse como “derecho de réplica”. Con relación a este último –y ya en el plano de las normas vigentes- estimó que el art. 14 de la Convención Americana forma parte de nuestro

derecho interno, aunque su carácter es sólo programático, lo que conduce a descartar que tenga condición de operativo o autoejecutorio. Esta conclusión no llevó al a quo a rechazar la demanda, porque consideró que el derecho de respuesta se encuentra implícito en el art. 33 de la Constitución Nacional, “pues éste protege derechos de la personalidad e integra un aspecto fundamental del derecho a la información, que a su vez se apoya en la libertad de expresión”. Los demandados interpusieron recurso extraordinario contra la sentencia reseñada precedentemente.

La Corte Suprema dictó sentencia el 1º de diciembre de 1988 y dejó sin efecto el pronunciamiento apelado. Los jueces Augusto César Belluscio y Jorge Antonio Bacqué sostuvieron que: “...si bien es cierto que el art. 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobado por la ley 23.054 –Pacto de San José de Costa Rica– establece que “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”, esta Corte ya se ha pronunciado respecto de que la ausencia de reglamentación legal impide tenerlo como derecho positivo interno”.

“...entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de la prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo, existiría tan solo una democracia desmedrada y puramente nominal, incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica....Por otra parte, el Tribunal ha dicho que “la libertad constitucional de prensa tiene sentido más amplio que la mera exclusión de la censura previa y que, por lo tanto, la protección constitucional debe imponer un manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones esenciales”. Que la enunciación de los principios reseñados, en el sentido de la importancia fundamental de la libertad de prensa para nuestro sistema de gobierno, lleva sin dificultad a concluir que

toda restricción de aquélla debe estar prevista expresamente en una norma jurídica sancionada por el órgano legislativo. Ello, además, se vincula estrechamente con la garantía del art. 19 de la Constitución Nacional, del cual surge que ...Toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y obligaciones de los habitantes, así como las penas de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca...”.

“(…) En consecuencia, reconocer un derecho a réplica en favor del actor, basado en el artículo 33<sup>366</sup> de la Constitución Nacional, significaría limitar sensiblemente los derechos expresamente reconocidos a la demandada por la Ley Fundamental, dejando así, en manos de los jueces la facultad de definir por sí mismos los alcances de un supuesto derecho de amplios o indefinidos contornos, sin que ninguna ley autorice expresamente dicha intervención. En tal sentido, conviene recordar que el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces no incluye, obviamente, la facultad de instituir la ley misma, siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes. Por las razones expuestas, el Tribunal entiende que un derecho de características tan especiales como el de réplica o respuesta, no puede ser encuadrado en el art. 33 de la Ley Fundamental”.

En su voto, el Juez Enrique Santiago Petracchi, expresa: “...Que el art. 33 de la Carta Magna reconoce como idea inspiradora que tanto el individuo como la sociedad son titulares de ciertos derechos de carácter tan esencial que su no enumeración no implica desconocimiento o mengua, porque la condición que ostentan los pone más allá de las vicisitudes de la legislación. Ello, además, está en consonancia con la índole del gobierno que consiste en determinados poderes limitados por su naturaleza, lo que asegura la incolumidad de aquel ámbito de derechos reservados”.

---

<sup>366</sup> Artículo 33 C.N. Argentina: Derechos y Garantías No Enumerados: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

“Que si bien es cierto que el Tribunal tiene decidido que no es acertada una interpretación estática de la Constitución Nacional porque ello dificulta la ordenada marcha y el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover la Ley Fundamental, no lo es menos que sería falsear la tarea interpretativa desarraigar a las normas de aquellas ideas rectoras a cuya luz nacieron y que, aunque no impiden enriquecer progresivamente sus contenidos, siguen siendo fuentes de éstos”.

“Que la denominada interpretación dinámica de los textos constitucionales, no debe ser entendida como la posibilidad de dar cualquier contenido a aquéllos, más allá del marco que aportan las ideas básicas que lo inspiran, pues de lo contrario interpretarlos equivaldría a adjudicarles todos los alcances que a juicio del órgano encargado de tan delicada función, pudiesen parecer meramente convenientes o deseables, con lo cual quedaría seriamente lesionado el principio de la soberanía del pueblo –justamente mentado en el art. 33- según el cual no son los tribunales los titulares del poder constituyente”.

“Que, como corolario de lo hasta aquí reseñado, el Tribunal entiende que un derecho de características tan específicas como el de réplica o respuesta, que permite al afectado el acceso gratuito al medio de comunicación que proporcionó la noticia para dar su propia versión de los hechos, no puede ser encuadrado en el art. 33 de la ley fundamental. En efecto, no puede postularse que nazca de la soberanía del pueblo y de las formas republicanas de gobierno, a no ser que se diera a estos principios una latitud tal que –aparte de desnaturalizarlos-, no se compadecería con las pautas hermenéuticas recordadas precedentemente. Por otra parte, sería forzado considerarlo comprendido en aquel grupo de derechos naturales o reservados a que se referían los redactores de la norma, que aludían a derechos y prerrogativas esenciales e intransferibles del hombre y de la sociedad. Lo expuesto se ve reforzado por la circunstancia de que el afectado por un hecho de las características apuntadas tiene, en la República, diversas vías expeditas para obtener satisfacción, puesto que, como esta Corte lo ha resuelto, nuestro ordenamiento permite que el honor afectado encuentre una protección adicional –independientemente del derecho a obtener el resarcimiento de los daños sufridos- en el artículo 1071 bis del Código Civil, que autoriza como forma de reparación no excluyente, la publicación de la sentencia”.



#### **VII.1.2.4. Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Neustadt, Bernardo y otros”<sup>367</sup>**

Miguel Ángel Ekmekdjian promovió juicio sumarísimo contra los periodistas Bernardo Neustadt, Mariano Grondona y Canal 13 Río de la Plata, S.A., solicitando que, en forma conjunta o separada, se los condene a leer en el programa televisivo “Tiempo Nuevo”, la carta documento que acompañó.

El actor sostuvo que es argentino nativo, en ejercicio de la ciudadanía, y que en la emisión del 19 de mayo de 1987 participó el ex presidente de la República Argentina, Arturo Frondizi, oportunidad en la que supeditó la existencia del sistema político organizado por la Constitución Nacional, a la eficiencia del gobierno de turno pretendiendo, de esta manera, asimilar la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio, agregando que también pretendió poner a la Patria por encima de la Constitución.

Para Ekmekdjian, tales declaraciones agravieron y afectaron sus convicciones republicanas fundamentales y por ende su personalidad, entendiendo que conforme a las afirmaciones del ex presidente, se despoja al concepto de Patria de los atributos que la Constitución le otorga, creando una entelexia vacía de contenido concreto, que puede ser llenada por cualquiera que pretenda acceder al poder por medios no legítimos.

El accionante remitió a los demandados una carta documento en la cual, ejerciendo el derecho de rectificación que le concede el art. 33 de la Constitución Nacional y el art. 14.1 del Pacto de San José de Costa Rica –aprobado por ley 23.054- expresaba su reprobación a los conceptos vertidos por Arturo Frondizi.

El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo instaurada, sobre la base de que el derecho de respuesta consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, no había sido aún objeto de reglamentación legal como para considerarlo derecho positivo interno y

---

<sup>367</sup> Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Neustadt, Bernardo y otros s/amparo”, Fallos: 311:2497.

aun en el supuesto de que lo hubiera sido, la acción correría igualmente la misma suerte en razón de no darse los presupuestos para el ejercicio de la misma. Que el derecho de respuesta, conforme la doctrina, no comprende las opiniones o temas de opinión –lo que se configura en la especie –, no pudiendo darse a su pretensión la amplitud que pretende, cuando expresa que acciona también en virtud de un interés colectivo. Por último, la tolerancia y el respeto al juicio ajeno son características esenciales de la democracia constitucional, que abarcan –inclusive –, aquellas opiniones que propician la sustitución o destrucción del sistema, todo lo cual no se compadece con el caso de autos. Apelada la sentencia, la cámara que intervino, en su decisión, - entre otras cosas- dijo que la libertad de expresión es el complemento indispensable de la libertad de pensamiento. De nada valdría la libertad de conciencia o de pensamiento, si el hombre estuviera imposibilitado o restringido de expresar lo que piensa, o sea de dar a conocer lo que quiere dar a entender por medio de palabras, sonidos, imágenes o cualquier otro medio de comunicación. De allí que no puede concebirse la una sin la otra. Los derechos individuales no constituyen otros ámbitos independientes, distintos entre sí, sino solamente diversos aspectos de la libertad en general, de la cual resulta una vinculación íntima e indestructible entre ellos.

Este nexo se hace evidente cuando se trata del derecho de prensa, considerado la clave de todos los demás derechos. Así lo ha consagrado la constitución Nacional expresa e implícitamente. Es condición esencial de la forma representativa y republicana de gobierno (art. 1º), derivada de la soberanía del pueblo (art. 33), y en tanto las ideas publicadas no perjudiquen a terceros, ni ofendan el orden ni la moral pública, que estén exentas de la autoridad de los magistrados (art. 19) y de la censura previa (art. 14), no pudiendo el gobierno federal restringirlas ni establecer la jurisdicción federal sobre ellas (art. 32). La prensa es la única institución privada a la que se le brinda tan alta y efectiva protección constitucional. Ello se alza como bastión superior a cualquier autoridad.

En cuanto al derecho de respuesta, la Cámara expresó que para que opere el mismo, que tiene como fin la defensa de los derechos personalísimos, debe haber mediado una afectación a la personalidad, a través de un medio de prensa, consistente en la difusión de hechos inexactos, falsos o desnaturalizados. No tiene, por consiguiente, por objeto imponer

a la prensa en general o a un medio en particular, la emisión de una idea propia por la sola circunstancia que ese medio haya emitido una opinión que el reclamante no comparte. Esto último, a juicio de la cámara, no condice con el fin perseguido por el actor, por lo cual concluye declarando la improcedencia del reclamo del accionante.

Apelada la sentencia de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, llegó a la Corte Suprema por la vía del recurso extraordinario y ésta, en sentencia del 1º de diciembre de 1988, firmada por los jueces Petracchi, Bacqué y , según su voto por Belluscio, confirmó la sentencia de Cámara.

La Corte sostuvo: “...Que, en primer lugar, cabe recordar que esta Corte ya ha establecido que el derecho de rectificación, contenido en el art. 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos –aprobada por ley 23.054- no ha sido objeto de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno, lo cual lleva a rechazar los agravios del apelante en este punto”.

“Que tampoco puede tener éxito el restante planteo del apelante, fundado en el art. 33 de la Constitución Nacional, toda vez que la importancia fundamental que la libertad de prensa posee para nuestro sistema democrático de gobierno, sumada a la necesidad de respetar celosamente el principio de legalidad previsto en el artículo 19, determina que toda restricción de aquélla debe estar prevista expresamente en una norma jurídica, sancionada por el órgano legislativo”. En este fundamento, la Corte recuerda lo ya dicho en el Caso “Sánchez Abelenda”.

“Que en el fallo citado en el considerando anterior también se hizo mención, para fundar el rechazo de un derecho a réplica basado en el art. 33 de la Constitución Nacional, del carácter de amplio e indefinido que poseía el citado derecho. Tal afirmación se ve ampliamente corroborada si se tienen en cuenta las dispares definiciones que se han dado del citado instituto. Así mientras algunos –como el apelante- lo consideran como un medio destinado a impedir el monopolio de los medios de difusión por parte de intereses

económicos carentes de representatividad, otros sostienen que su objetivo principal es el de reparar las ofensas dirigidas al honor de personas determinadas.

Que es, precisamente, esa falta de un criterio unívoco sobre los alcances del derecho invocado y la consecuente inexistencia a su respecto de pautas susceptibles de ser determinadas o interpretadas judicialmente lo que impide, además de los argumentos ya señalados, tener a aquél como incorporado implícitamente a nuestro derecho positivo...”

**VII. 1.2.5. Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros<sup>368</sup>”: el leading case que cambió la jurisprudencia argentina: la constitucionalidad y operatividad del derecho de rectificación o respuesta.**

Este fallo, en lo sustancial, significa un viraje total en la jurisprudencia sobre el derecho de rectificación y una significativa extensión de la protección jurisdiccional de los derechos humanos. Más allá de la neta distinción entre opinión pública, voluntad popular y fe religiosa y el carácter subjetivo de la conciencia religiosa y su potencia para desencadenar impulsos de violencia reactiva a nivel individual y social, lo esencial de la decisión está en que ocho de los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 8 de julio de 1992, reconocieron que el Pacto de San José de Costa Rica está incorporado al derecho interno argentino y que el derecho de rectificación -que consagra el artículo 14- es operativo, debiendo el Poder Judicial garantizar su aplicación.

La sentencia, como ocurre con todo *leading case*, provocó comentarios y críticas que publicaron las revistas especializadas y editorializaron los medios.

En cuanto a los antecedentes fácticos, el recurrente, lesionado profundamente en sus sentimientos religiosos promovió demanda de amparo contra Gerardo Sofovich, para que se lo condenar a leer en el programa “La noche del sábado”, - que se emitía por el Canal 2 de televisión -, una carta documento que le remitiera contestando a Dalmiro Sáenz, quien

---

<sup>368</sup> Caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros”. E.64 LXXIII. Recurso de Hecho.

expresó frases que consideraba agraviantes en relación a Jesucristo y a la Virgen María, en la audición del sábado 11 de junio de 1988. Que como la carta no fue leída, debió iniciar juicio de amparo, fundado en el derecho de rectificación que, según su criterio, le concede el art. 33 de la Constitución Nacional y el art. 14.1 del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por ley 23.054 y vigente para la República Argentina desde el depósito del instrumento de ratificación el 5 de septiembre de 1984.

De los extensos Fundamentos Jurídicos de la sentencia, cabe resaltar los siguientes:

(...) 7º) Que en este caso, ...el núcleo de la cuestión a decidir radica en la tensión entre la protección del ámbito privado de la persona de cuanto lesione el respeto a su dignidad, honor e intimidad; y el derecho de expresar libremente las ideas ejercido por medio de la prensa, la radio y la televisión. Es decir, se trata del equilibrio y armonía entre derechos de jerarquía constitucional, y en definitiva, de la tutela de la dignidad humana, en tanto se vea afectada por el ejercicio abusivo de la información. En particular, corresponde decidir si el denominado “derecho de respuesta” integra nuestro ordenamiento jurídico como un remedio legal inmediato a la situación de indefensión en que se encuentra el común de los hombres frente a las agresiones a su dignidad, honor e intimidad cuando son llevadas a cabo a través de los medios de comunicación social”.

...

15º) Que, en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho de respuesta, o rectificación ha sido establecido en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica que, al ser aprobado por ley 23.054 y ratificado por nuestro país el 5 de septiembre de 1984, es ley suprema de la Nación conforme a lo dispuesto por el art. 31 de la Constitución Nacional. Cabe, entonces, examinar si –como afirma el recurrente- aquella disposición resulta directamente operativa en nuestro derecho interno o si, por el contrario, es menester su complementación legislativa”.

...

25º) (...) “Debe advertirse –con relación al caso planteado-que se trata de un derecho subjetivo de carácter especial y reconocimiento excepcional, que requiere –para habilitar el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta- una ofensa de gravedad sustancial, es

decir, no una mera opinión disidente con la sostenida por el afectado, sino una verdadera ofensa generada en una superficial afirmación sin siquiera razonable apariencia de sustento argumental. En estas condiciones, la afirmación que provoca la rectificación o respuesta invade, como ya se dijo, los sentimientos más íntimos del afectado, convirtiéndose así –y tratándose de un sentimiento o creencia de sustancial valoración para el derecho- en un agravio al derecho subjetivo de sostener tales valores trascendentales frente a quienes, sin razón alguna, los difaman hasta llegar al nivel del insulto soez, con grave perjuicio para la libertad religiosa. Estos extremos quedarán sujetos a la severa valoración del juez de la causa, aunque no cabe duda de que, en tales condiciones, la ofensa afecta la honra personal, por tanto a uno de los derechos subjetivos que mayor protección debe recibir por parte del ordenamiento jurídico”

...

27º) “Que la defensa de los sentimientos religiosos, en el caso a través del ejercicio del derecho de respuesta, forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adoptó nuestra Constitución en su artículo 14. Es fácil advertir que, ante la injuria, burla o ridícula presentación –a través de los medios de difusión- de las personas, símbolos o dogmas que nutren la fe de las personas, estas pueden sentirse moralmente coaccionadas en la libre y pública profesión de su religión, por un razonable temor de sentirse también objeto de aquel ridículo, difundido en extraordinaria multiplicación por el poder actual de los medios de comunicación masiva”.

...

31º) Que la vía sumarísima del amparo elegida por el accionante, ante la negativa del requerido de difundir la respuesta, resulta adecuada frente a la naturaleza del derecho que busca ser protegido judicialmente. En tal sentido, corresponde una vez más evocar que esta Corte estableció que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”.

32º) Que, por tal razón, y por su propia naturaleza, el espacio que ocupará la respuesta no debe exceder del adecuado a su finalidad, y en modo alguno debe ser necesariamente de igual extensión y ubicación que el que tuvo la publicación inicial; ello,

desde luego, en un contexto de razonabilidad y buena fe, pero evitando una interpretación extensiva del instituto lo torne jurídicamente indefendible y ponga en peligro el regular ejercicio del derecho de información, pilar básico de las instituciones republicanas. En el caso, resulta suficiente con la lectura de la primera hoja de la carta del actor”.

Asimismo, el fallo de la Corte dedica varios fundamentos a remitirse a lo sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 7/86.

Con el resumen de fundamentos que anteceden, la Corte hizo lugar al recurso de queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada. De esta forma se reconoció la operatividad del derecho de rectificación o respuesta.

Ahora bien, se cree necesario destacar la disidencia de los jueces Petracchi y Moliné O'Connor por cuanto destacan que en el caso en particular no podría tratarse de una rectificación en tanto no se hablaba de hechos, sino de opiniones, las cuales no entrarían en el ámbito de la respuesta.

Es de resaltar los fundamentos que hicieron al voto de los jueces disidentes, quienes basaron sus análisis entre otros, en la legislación y la jurisprudencia española en estos términos:

**“La ley española del 24 de marzo de 1984 –refiriéndose a la LO 1/84- acuerda a toda persona el derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que la aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio (art. 1º)”.**

...

“En el sub lite el actor expresa que se ha sentido dolido como consecuencia de expresiones vertidas en un programa de televisión que habrían sido lesivas para la fe católica. Esta sería, en verdad, la eventual atacada. No lo ha sido, en cambio, el recurrente: éste no alega que se lo haya mencionado o aludido en el mencionado programa. En consecuencia, es palmaria la ausencia de legitimación del actor para ejercer el derecho de rectificación o respuesta en el presente caso”.

**“Resultan aplicables, mutatis mutandis, las afirmaciones del Tribunal Supremo de España en la causa en la cual una superviviente de un campo de concentración reclamó daños y perjuicios contra un ex-oficial nazi, a raíz de las manifestaciones realizadas por éste en la revista Tiempo y en la Televisión Española. El tribunal negó legitimación a la demandante “aun comprendiendo el impacto moral, la indignación e incluso irritación que hayan podido producir a quienes como la actora padeció personalmente los desatinos de una época como a la que se refiere la demanda”. En efecto, el demandado se había pronunciado “sobre unos hechos que hoy son historia”, en ejercicio “del derecho fundamental a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones que consagra el art. 20.1,a) de la Constitución”, por lo cual sus manifestaciones “desafortunadas como se ha dicho mas no ofensivas para el honor de ninguna persona” no podían dar origen a condena alguna (STS 5 de diciembre de 1989 en “Anuario de Derecho Civil”, ed. Centro de Publicaciones, Madrid, tomo XLIII, Fascículo IV, año 1990, pág. 1337<sup>369</sup>.)”-**

Estos votos disidentes analizan la legitimación activa del derecho de rectificación y rechazan la demanda en cuanto a este punto, por cuanto no hubo una alusión particular en la información dada hacia la persona del recurrente, y lo sostienen con estos argumentos porque en el caso no se habían vertido informaciones sino expresiones que, más allá de la intencionalidad con que las mismas fueron expuestas, en modo alguno pueden caracterizarse como informaciones, y menos aún, respecto del recurrente, quien ni siquiera fue aludido durante la emisión del citado programa.

“Que el olvido de los señalados principios en materia de legitimación para rectificar o responder, se traducirá en una inevitable mengua de la libertad de expresión que tutela la Constitución Nacional. En efecto, si se admitiese que cualquiera pueda exigir el acceso

---

<sup>369</sup> Este fallo citado por la CSJN es el conocido como “Caso Friedman”, la sentencia recogida por los argumentos del Tribunal argentino pertenece al Tribunal Supremo español, que luego fue revertido por el Tribunal Constitucional en STC 214/1991, de 11 de noviembre (Sala 1ª). Recurso de amparo núm. 101/1990, reconociendo el derecho de la recurrente al honor. Tal caso judicial, hacía referencia a la colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión y el amparo fue fundamentado en la LO 1/1982.



gratuito a los medios de comunicación con el único propósito de refutar los hipotéticos agravios inferidos a las figuras a las que se adhiere o a las opiniones que sustenta, es razonable prever que innumerables replicadores, más o menos autorizados, se sentirán llamados a dar su versión sobre un sin fin de aspectos del caudal informativo que –en un sentido psicológico, mas no jurídico- los afectarán”.

“Un periódico o una emisora no son una plaza pública en donde cualquiera puede levantar su tribuna. Lo decisivo es que los responsables de los medios de difusión son los que determinan el contenido de las informaciones, noticias o programas que publican o emiten. A este principio sólo hacen excepción motivos de orden público o institutos como el derecho de rectificación o respuesta, este último con los alcances que se han expuesto supra””

“Por el contrario, si se obligara a los medios a costear toda opinión adversa a lo que han difundido, se llegaría rápidamente al absurdo de que sólo sería posible expresarse libremente a través de aquéllos, a condición de poder financiar igual posibilidad a todos los eventuales contradictores. Parece innecesario abundar en la sinrazón de la postura. Impracticable económicamente e incoherente del punto de vista lógico, tal pretensión importaría un claro menoscabo al derecho de libre expresión. La realidad desmentiría a la utopía: no habría muchas voces, habría silencio”.

Expuesta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se puede concluir que en una primera etapa se desconocía el derecho de rectificación o respuesta por falta de una ley que lo reglamentara, más allá de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Argentina lo previera. Luego, a partir del leading case “Ekmekdjian c. Sofovich” hay un giro total en la concepción del máximo tribunal que considera la operatividad del artículo 14, aunque técnicamente no era un derecho de rectificación el petitum de tal litis, compartiéndose la postura disidente manifestada por los jueces Petracchi y Moliné O’Connor.

La falta de una ley específica que regule el derecho de rectificación obliga a la Corte a recurrir a la fundamentación de otros ordenamientos jurídicos como el español y en este sentido se basa la cita de la LO 1/1984 y la jurisprudencia del TC español.

Ahora bien, a partir de la modificación de la Constitución argentina en el año 1994, no cabe duda acerca de la jerarquía constitucional del Pacto de San José de Costa Rica, y por ende del artículo 14 de tal tratado internacional que reconoce el derecho de rectificación o respuesta.

Ello no cubre la laguna jurídica en cuanto a la carencia de una legislación específica que regule la materia, compromiso no cumplido hasta el momento y que se hace exigible en virtud del contenido del mencionado Pacto y por una cuestión básica de ofrecer la efectividad del derecho, que tiene un carácter programático conforme la misma Convención en cuanto dice “...en las condiciones que establezca la ley”.

La explicación del instituto y de su naturaleza hecha a lo largo del presente trabajo desestima todo argumento sustentado por cierto sector empresarial de los medios de comunicación, como también por parte de la doctrina argentina que afirma que el derecho de rectificación implica una violación al derecho de propiedad y conduce a la autocensura. Todo lo contrario, una regulación específica, positivizada en la norma correspondiente, haría a una garantía del ejercicio de la libertad de expresión y además posibilitaría la doble faceta del derecho a la información, en cuanto abarca el derecho a dar y recibir información que corresponde a todo ciudadano como derecho humano, así el afectado puede ejercer ese derecho activamente rectificando y su desconocimiento implicaría la vulneración del derecho humano en cuanto lo imposibilitaría en su acceso.

El aporte jurídico, normativo, doctrinario y jurisprudencial extranjero puede por una parte contribuir a un enriquecimiento del derecho interno y contribuye al afianzamiento de los derechos, pero tales remisiones no cubren la necesaria legislación que cada país debe tener conforme su procedimiento de promulgación de leyes y como expresión de vida

democrática propia, y a su vez, pueden ser una peligrosa “importación” de modelos, ajenos a las pautas culturales en las que pretende insertarse.

El andamiaje legal que el derecho de rectificación o respuesta requiere en el ordenamiento jurídico argentino es aún una deuda que los legisladores tendrán que considerar especialmente pero ello no obsta para la efectiva protección jurisdiccional de un derecho humano, contemplado como tal en el ámbito latinoamericano.

#### **VII.1.2.6. Caso “Conesa Mones Ruiz, Horacio c. Diario Pregón”<sup>370</sup>”**

Horacio Conesa Mones Ruiz interpuso, el 20 de noviembre de 1990, una acción de amparo ante la justicia de la Provincia de Jujuy con el objeto de que el diario local “Pregón” publicara gratuitamente su rectificación a una noticia difundida por el mencionado medio, que el actor consideraba como agravante a su persona y a la legislatura provincial que el mismo integraba en su carácter de diputado.

La noticia, motivo del amparo, estaba acompañada por una fotografía del actor, que informaba lo siguiente: *“El diputado del Partido Fuerza Republicana, el doctor Horacio Conesa Mones Ruiz, aparece en una lamentable pose, ya que frente al secretario del sindicato municipal, integrante de la Multisectorial, firma el acta por la que se pide la renuncia del gobernador, obedeciendo mansamente a las exigencias sindicales. Este diputado es abogado, de tradición militar y fue fiscal de estado de dos gobiernos de facto, y lamentablemente resignó sus fueros y la investidura deningrando la función que le otorgara la voluntad popular”*.

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy dictó un nuevo pronunciamiento (ya que el anterior había sido dejado sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en razón de haberse omitido examinar los planteos federales de la demandada) por el que revocó el

---

<sup>370</sup> Caso “Conesa Mones Ruiz, Horacio c. Diario Pregón”, C.S., abril 23-1996. L.L. T. 1996-C págs. 496 y ss.

fallo de la cámara local que había hecho lugar al amparo y ordenado la publicación de la rectificación del actor.

El Tribunal provincial consideró que el derecho de respuesta previsto en el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no poseía carácter operativo. Sostuvo además, con cita del pronunciamiento de la Corte en la causa “Ekmekdjian Miguel Ángel c. Sofovich Gerardo” que el derecho de rectificación sólo podía fundarse en el ataque a “derechos personalísimos” y no en la crítica a las creencias políticas o religiosas que eran patrimonio de un grupo. Contra dicho pronunciamiento, Conesa Mones Ruiz interpuso recurso extraordinario, fundado también entre otras razones, en la doctrina del citado caso “Ekmekdjian c. Sofovich”, el cual fue concedido en razón de encontrarse en juego la inteligencia de un tratado internacional.

La Corte consideró que la apelación era admisible en cuanto “cuestiona la interpretación otorgada a una norma federal –art. 14.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y la decisión del a quo ha sido contraria al derecho fundado en dicha norma (art. 14, inc. 3º, ley 48).

Asimismo, la Corte recuerda y retoma el voto mayoritario dado en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich” en cuanto expresara que el derecho de respuesta previsto en el citado artículo de la Convención Americana poseía carácter operativo, lo cual significaba que los jueces tenían la obligación de aplicarlo a los casos concretos, sin importar que el Congreso de la Nación no lo hubiese aún reglamentado.

El máximo tribunal constitucional argentino consideró que:

- resultaba evidente que la decisión del Tribunal provincial contradecía abiertamente la doctrina judicial reseñada, lo cual bastaba para su descalificación;
- la resolución era autocontradictoria, en tanto que, por un lado, cita en su apoyo el precedente “Ekmekdjian c. Sofovich” y por el otro, sostiene el carácter programático del derecho;

- por último era inconducente para la solución del caso el argumento de que la tutela que otorga el derecho de respuesta debe basarse en el ataque a los derechos de una persona determinada y no a las creencias de un grupo, pues lo que el actor alegaba era, precisamente la afectación de su honor y dignidad personales.

En virtud de tales consideraciones, la Corte declaró admisible el recurso interpuesto por Conesa Mones Ruiz, dejó sin efecto el pronunciamiento del tribunal provincial y lo devolvió para que se dictara un nuevo pronunciamiento conforme a lo resuelto por ella.

Los jueces Moliné O'Connor y Belluscio, se expidieron en este caso por separado, argumentando que “lo que el Superior Tribunal provincial debía concretamente considerar era la invocada contradicción entre el derecho de respuesta establecido en la Constitución local y determinadas garantías aseguradas por la Ley Fundamental federal, concretamente la libertad de prensa y el derecho de propiedad. Examen que debe igualmente realizarse después de haberse asignado jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa incorporación no deroga artículo alguno de la primera parte de la Constitución (art. 75 inc. 22, apart. 2º, del texto constitucional reformado en 1994) y que precisamente las impugnaciones de la demandada se basaron en preceptos de dicha parte”.

En su voto conjunto por separado, advierten que tal examen no tuvo lugar en la sentencia atacada, la cual se limita a invocar un precedente de la Corte al cual asigna un sentido contrario a sus términos, pues le atribuyó haber consagrado el carácter programático del derecho de respuesta cuando en realidad, la opinión mayoritaria consagró su carácter operativo. Por otra parte, negó que la demanda se fundara en el ataque a los derechos de una persona determinada, lo cual asimismo contradice las constancias de la causa, en las que precisamente lo impugnado es un texto que ataca directamente al actor.

Por tales motivos, Moliné O'Connor y Belluscio, concluyeron que “el pronunciamiento recurrido no constituye derivación razonada del derecho vigente con

aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, lo que importa su descalificación por aplicación de la doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias”.

Con argumentos disímiles entonces, pero con la misma derivación procesal, declararon admisible el recurso interpuesto, y resolvieron, como la mayoría, dejar sin efecto el pronunciamiento del tribunal provincial, devolviéndolo para que se dictara nuevo resolución.

#### **VII.1.2.7. Caso “Petric Domagoj, Antonio c. Diario Página 12<sup>371</sup>”.**

Antonio Petric Domagoj invocó ante el Diario Página 12 el derecho de rectificación o respuesta contenido en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo de un artículo que el periódico publicó el 20 de junio de 1993, en el que se le atribuía el carácter de asesor del Presidente de la Nación Argentina y el desarrollo de actividades de reclutamiento y organización de grupos de mercenarios para enviarlos a combatir junto a las fuerzas croatas en la guerra de Bosnia-Herzegovina. En síntesis, el actor sostuvo que lo único verídico de la nota cuya rectificación pretendía, era que colaboraba honorariamente en la “Representación de Croacia”, en prensa y cultura, mientras que las falsedades lo presentaban como un eventual transgresor de las normas que rigen la comunidad internacional. El diario rechazó el pedido sobre la base, en resumen, de que la información había sido escrita luego de una profunda investigación, que describió en una carta que había dirigido a Petric.

En tales condiciones, el actor inició demanda. El diario añadió a las defensas ya esgrimidas, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 de la Convención, pues, en la medida que esa norma obligara al periódico a publicar lo que no deseaba publicar, transgrediría los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

---

<sup>371</sup> Caso “Petric Domagoj, Antonio c. Página 12”. C.S., abril 16-1998. L.L. 1998-C págs. 282 y ss.

La demanda fue admitida en ambas instancias. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, al confirmar la decisión del juez de grado, sostuvo que:

- a) El derecho contenido en el art. 14 de la Convención era operativo no obstante la falta del dictado de la ley reglamentaria, de acuerdo con lo resuelto por la Corte en “Ekmekdjian c. Sofovich” (Fallos: 315:1492-L.L. 1992-C, 543);
- b) La aplicación de la respuesta debe hacerse en forma restrictiva a fin de evitar la violación de la libertad de prensa garantizada por el art. 14 de la Constitución Nacional, presupuesto básico del régimen republicano de gobierno;
- c) El encuadre jurídico de la respuesta no se reduce a los delitos contra el honor ni requiere el ánimo de calumniar o de injuriar, ni el presupuesto de la criminalidad delictiva, y tampoco “se trata de la querrela por calumnias e injurias, ni la acción por reconocimiento de daños y perjuicios”; y
- d) “la publicación efectuada es susceptible de afectar el honor, de perturbar la paz y la tranquilidad de espíritu del actor, al atribuirle una ilícita actividad, sin elemento de juicio corroborante” dado que de las pruebas aportadas no surgiría que el actor hubiera realizado las conductas que le atribuye la información.

Contra dicho pronunciamiento Página 12, en su carácter de vencida, interpuso recurso extraordinario en el que sostiene:

- a) la no operatividad del art. 14 de la Convención dada la ausencia de reglamentación;
- b) la inaplicabilidad de la respuesta en el caso, en atención a la naturaleza política o ideológica de la publicación;
- c) que el derecho de respuesta sólo procede respecto de los “medios de difusión legalmente reglamentados”, esto es: “cuando se trata de medios de propiedad del Estado” y no de particulares;
- d) que la prueba habría sido arbitrariamente apreciada por el a quo;
- e) la inconstitucionalidad del art. 14 de la Convención.

El recurso extraordinario fue denegado por la alzada al considerar que no debía pronunciarse sobre la arbitrariedad de su propio pronunciamiento, al tiempo que sostuvo

que la recurrente sólo cuestionaba circunstancias de hecho y prueba que no habilitan la instancia de excepción. Tal decisión negatoria motivó el recurso de hecho ante la Corte de Nación.

La Corte considera que los agravios expresados por Página 12 en los puntos a) y d) son inadmisibles. En cuanto al primero, por cuanto el apelante ha omitido hacer cargo de los fundamentos expresados por el a quo, que, recogió la doctrina del tribunal expuesta en Ekmekdjian. En cuanto al d), señaló que el agravio no excede de la mera discrepancia con la apreciación de los elementos de juicio hecha por la alzada, lo cual es insuficiente para habilitar la instancia federal de acuerdo con conocida jurisprudencia. No acoge los agravios b) y c).

Sobre el agravio b), la Corte distingue dos aspectos. Por un lado, está el carácter meramente fáctico que tienen los datos contenidos en la nota publicada por Página 12, que Petric pretende responder porque, según aduce, le “atribuye inexactamente actividades anteriores, recientes y presentes, que son totalmente falsas e inexistentes” y lo involucra en “hechos ajenos” a él. Por otro lado, está la repercusión política que la nota periodística podría suscitar, atento a la clase de “actividades” y “hechos” de que se trata.

Según la Corte, la repercusión política no tiene la virtud de convertir a la señalada cuestión en algo así como un mero choque de opuestas concepciones ideológicas, en el cual se enfrentarán distintas concepciones políticas (las del autor de la nota y la de Petric).

“No es así –sostiene la Corte-. Lo central consiste en la atribución de actividades y hechos al actor, que éste niega. Pertenece, por lo tanto, al mundo de lo comprobable y no de lo meramente valorativo u opinable, ámbito este último que sí sería ajeno al derecho de rectificación o respuesta”.

Con relación al agravio c), “aun cuando cabe reconocer que la expresión “medios de difusión legalmente reglamentados” –utilizada en el art. 14.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos- presenta dificultades de interpretación, la que al respecto realiza



la apelante es inadecuada. En efecto, no se advierte que el texto transcrito haga siquiera alusión a la propiedad de los medios; la norma habla de los órganos legalmente reglamentados y no de los que son del dominio del reglamentador”.

“Tampoco variaría la solución aunque se alegara que el derecho de rectificación o respuesta es imposible de invocar frente a los medios de difusión gráficos, por no encontrarse éstos “legalmente reglamentados” en el ámbito nacional. Esto es así, pues el inc. 3ero. del mismo artículo 14, vale decir, uno de los tres incisos que integran el artículo que lleva por título “derecho de rectificación o respuesta”, dispone que “para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial” (énfasis agregado). Es fácil advertir que la expresa mención de las “publicaciones” en un precepto destinado a regir sobre el derecho de rectificación o respuesta, arroja luz más que suficiente sobre el punto e impide aceptar la exclusión de los medios gráficos del ámbito de aquel”.

La Corte recuerda que el derecho de respuesta nació y se difundió debido exclusivamente a la existencia, multiplicación y relevancia de los medios informativos gráficos. Por lo tanto, la supuesta exclusión de éstos del ámbito del derecho reglado en el art. 14 de la convención hubiese requerido una expresión normativa clara y concluyente. Empero, a la ausencia de esta última, se suma la inequívoca mención del inc. 3ero.

En base al agravio e), considera cuestión federal suficiente, y, encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario, la Corte hace lugar a la queja con esos alcances.

Dado el carácter de las cuestiones planteadas en el juicio, la Corte considera que corresponde interpretar los alcances del derecho establecido en el art. 14 del Pacto a fin de poder dar respuesta a su impugnación constitucional. Sólo así se podrá determinar si aquél es o no compatible con la Ley Fundamental.

Para ello, cita y razona sobre los propios precedentes de la Corte, aunque tomando las consideraciones y conceptos del voto en disidencia del caso “Ekmekdjian c. Sofovich”, en cuanto a las características que hacen a la legitimación activa del ejercicio del derecho, lo cual implica un cambio que contempla la naturaleza del instituto.

En este sentido retoma lo dicho en Fallos: 315: 1492, 1538: “Un periódico o una emisora no son una plaza pública en donde cualquiera puede levantar su tribuna. Lo decisivo es que los responsables de los medios de difusión son los que determinan el contenido de las informaciones, noticias o programas que publican o emiten. A este principio sólo hacen excepción motivos de orden público o institutos como el derecho de rectificación o respuesta, este último con los alcances que se han expuesto...Por el contrario, si se obligara a los medios a costear toda opinión adversa a lo que han difundido, se llegaría rápidamente al absurdo de que sólo sería posible expresarse libremente a través de aquéllos, a condición de poder financiar igual posibilidad a todos los eventuales contradictores. Parece innecesario abundar en la sinrazón de la postura. Impracticable económicamente e incoherente desde el punto de vista lógico, tal pretensión importaría un claro menoscabo al derecho de libre expresión. La realidad desmentiría a la utopía: no habría muchas voces, habría silencio” (disidencia de los jueces Petracchi y Moliné O’Connor, cons. 25).

Nótese aquí que la perspectiva tomada en este sentido fue sustentada en parte de la disidencia del caso “Ekmekdjian c. Sofovich”, lo cual implica un cambio en la interpretación muy importante, que dejaría atrás las críticas y controversias generadas en aquel precedente.

La mayoría de la Corte, retoma el razonamiento del fallo en disidencia aludido, en el considerando 10 al decir: que una segunda limitación proviene de que el citador art. 14 del Pacto impone que la información que da origen a derecho de rectificación o respuesta se refiera directamente al presunto afectado –tal como sucede en el “sub examine”-, o, al menos, lo aluda de modo tal que resulte fácil su individualización. “El fundamento de esta posición reside en que si –por vía de hipótesis – se reconociera este derecho sin el

mencionado “requisito de individualización”, se abriría la posibilidad de infinitos cuestionamientos a expresiones ideológicas o conceptuales que, en definitiva, afectarían a la libertad de prensa”...”su institución no ha tenido el propósito de crear un foro al que pueda abordar todo aquel que crea ver atacados valores, figuras o convicciones a los que adhiera”. (Cons. 19 y 20).

“Si se admitiese que cualquier puede exigir el acceso gratuito a los medios de comunicación con el único propósito de refutar los hipotéticos agravios inferidos a las figuras a las que adhiere...es razonable prever que innumerables replicadores, más o menos autorizados, se sentirán llamados a dar su versión sobre un sinnúmero de aspectos del caudal informativo que –en un sentido psicológico, mas no jurídico- los afectarán” (Cons. 25 de los mismos jueces)

El sistema que instituye el art. 14 del Pacto es distinto. Si el diferendo llega a un tribunal, algo tiene que decir la prueba a producirse en el juicio sobre la inexactitud y el perjuicio, porque sería absurdo que la norma exigiera esos requisitos para luego diferir todo a la simple alegación de una de las partes.

“Como el a quo ha concluido, después de valorar la prueba, en la existencia de ambos requisitos –y lo ha hecho sin arbitrariedad- resulta innecesario adentrarse en la consideración de otros problemas que puedan presentarse dentro de la temática esbozada. Tales son, por ejemplo, la cuestión relativa a si el juzgador debe obtener certeza sobre los mencionados requisitos –o si basta un cierto grado de probabilidad o verosimilitud- y la atinente a las modalidades que puede presentar el “onus probandi” según la clase de los hechos consignados en la nota periodística.

Las características del derecho de rectificación o respuesta lo muestran como un medio ceñido y acotado que persigue proteger “ámbitos concernientes al honor, identidad e intimidad de personas que han sido aludidas en algún medio de comunicación de las interferencias que “prima facie” podrían haber sufrido, dando al afectado la posibilidad de

responder aquello que de él se ha dicho (aquí también la Corte retoma el cons. 20, voto en disidencia de Petracchi y Moliné O Connor en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich”).

A fin de mantener el equilibrio del diseño constitucional, el respeto a aquella libertad debe ser conjugado con el que también merecen los derechos que, como los antes nombrados, hacen a la dignidad de los que habitan el suelo argentino.

Por último, concluye el fallo, “nada indica que en los países en los que rige un derecho de características similares al reseñado precedentemente, se hayan producido efectos negativos para la libertad de expresión o se haya incrementado la autocensura de los medios periodísticos, lo que da por tierra con los pronósticos agoreros de los adversarios del instituto”.

Por todo ello, se hace lugar parcialmente a la queja, se declara inadmisibile el recurso extraordinario con los alcances indicados y se confirma la sentencia apelada. –Julio S. Nazareno (por su voto).- Eduardo Moliné O Connor (por su voto).- Carlos Fayt (por su voto) .- Augusto C. Belluscio (en disidencia).- Antonio Boggiano (por su voto).- Enrique S. Petracchi .- Guillermo A.F. López – Gustavo A. Bossert.- Adolfo R. Vázquez (por su voto).

#### Voto del Dr. Nazareno

Compartiendo los fundamentos centrales del voto de mayoría, realiza algunas consideraciones particulares vinculadas a los medios sosteniendo que “frente a los avances y al uso que se dé a los medios de comunicación no parece inapropiado considerar que el porvenir de la sociedad contemporánea depende en buena medida del “equilibrio” entre el poder de los medios y la aptitud de cada individuo para actuar en la liza a la que es llevado por la información”.

Sostiene también, criterio que es compartido por otros miembros, que el derecho de respuesta no lesiona la línea editorial del medio de prensa, toda vez que recae sobre los aspectos fácticos del asunto, siendo ajena a los campos de la opinión.

#### Voto del Dr. Moliné O'Connor

Coincide con los fundamentos 1 a 8 del voto de la mayoría, pero además agrega que la incorporación de los tratados internacionales conforme lo establece el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional no son inconstitucionales por haber sido armonizados por los constituyentes. Considerar lo contrario sería un contrasentido.

En cuanto a la rectificación la considera como un medio ceñido y acotado que persigue proteger “ámbitos concernientes al honor e intimidad de las personas” y nada autoriza a presentarlo como reñido con la garantía de la libertad de expresión.

#### Voto del Dr. Fayt

Sobre el cuestionamiento acerca de la validez constitucional del derecho de rectificación o respuesta contenido en el Art. 14 del Pacto es cuestión federal que trata de la siguiente forma:

Cita integralmente el Art. 14 del Pacto, transcribiéndolo, y a continuación sostiene que : “En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la rectificación o respuesta, tal como ha sido regulada, “se corresponde con el art. 13. 2 a) sobre libertad de pensamiento y expresión, que sujeta esta libertad al “respeto de los derechos o a la reputación de los demás”; con el art. 11.1 y 11.3 según el cual: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques; y con el art. 32.2 de acuerdo al cual: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (opinión consultiva OC-786, sobre la exigibilidad del derecho de respuesta de la Convención). Sostiene al respecto, que las cláusulas de contenido social requieren la exégesis concertada del conjunto.

Luego de un pormenorizado abordaje de los antecedentes históricos y del derecho comparado del instituto, fundamenta también su voto en la interpretación equilibrada de los derechos concurrentes: “El derecho de respuesta es un medio instrumental idóneo para que todo aquel que se sienta afectado por la difusión de noticias o hechos que lo conciernan y a los que considere falsos, erróneos, tergiversados o lesivos a sus valores esenciales, pueda difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, su propia versión de la noticia. En presencia del inmenso poder del que dispone la prensa, se ha querido establecer una herramienta que pueda devolver el prudente equilibrio que trazó la Constitución Nacional”.

#### Voto del Dr. Boggiano

“Cualesquiera hayan sido los motivos que originalmente llevaron a la consagración del derecho de rectificación o respuesta, más que centenario, lo cierto es que, por lo menos a partir de la consolidación de las sociedades democráticas modernas y del correlativo esclarecimiento de los fundamentos sobre los que éstas reposan y de las finalidades que persiguen, por un lado, y, por el otro del progresivo y particular desarrollo de los procesos de elaboración y difusión de la información, el citado art. 14 de la Convención encuentra su razón de ser y el campo de su proyección principal aunque no exclusivamente en dos ámbitos. Por lo pronto, el individual: se trata de un instituto que tiende a proteger determinados bienes de las “personas” ante informaciones “inexactas” que pudieran perjudicarlos, vertidas por los medios de difusión y dirigidas al público en general. Es, por ende, una garantía de la persona y para la persona. Empero se yuxtapone a esa dimensión, la social: es preciso que dicho público, en el supuesto anterior, pueda llegar a conocer la expresión contradictoria de la noticia, proveniente del afectado. La garantía, desde este punto de vista, sigue siendo de la persona, pero no ya para beneficio exclusivo de ésta, sino también para el de la comunidad en general”.

Y esta última circunstancia es la que, precisamente y por así decirlo, descubre un singular rasgo del nexo que media entre determinados aspectos del derecho de respuesta o

rectificación y el derecho de dar información (también contenido en la Convención en el art. 13).

Boggiano, entiende que es importante para fundamentar su voto, tener en cuenta la función de la información en la democracia: “La convivencia social es algo poco menos que impensable sin información. Dar y recibir información constituye un asunto vital para la convivencia y para la democracia, porque sólo merced a dicho intercambio los hombres forman y transmiten sus juicios e interpretaciones de la realidad, y pueden llegar a hacerse del conocimiento de esa inmensa parte de ésta, que es la no vivida directamente. “Está fuera de discusión que los que manejan los medios de comunicación social –los medios técnicos de información- ejercen influencia sobre la opinión pública y que el extraordinario poder de sugestión de esas técnicas en la elaboración de estructuras mentales, condiciona la vida humana” (Ekmekdjian c. Sofovich) . Por todo ello, uno de los supuestos del vínculo entre informador y receptor es la veracidad: el receptor espera (necesita) del emisor una información veraz, y este último espera (necesita) ser creído por el primero. “La función de la prensa en una república democrática persigue entre otros objetivos principales, informar tan objetiva y verídicamente al lector como sea posible...La prensa tiene un deber de veracidad” (“Vago c. Ediciones La Urraca S.A. y otros” – Fallos: 314:1517; La Ley, 1990-D, 191-voto de los jueces Fayt y Barra)”.

“Empero, la verdad, la objetividad, el conocimiento de la realidad, por lo menos en la arena de las cosas públicas, no es –ni es deseable que lo sea- obra de gobernantes, ni de iluminados, tampoco de determinadas mayorías o minorías. Es comprobable con evidencia cómo los miembros de una comunidad se consideran, sinceramente, portadores de criterios de validez de sus diferentes afirmaciones e interpretaciones de la realidad. De ahí que una sociedad democrática, no pueda eludir el reconocimiento –y la necesidad- de esa, por así decirlo, polifonía. Y de ahí también que una sociedad democrática, no deba olvidar que las búsquedas de verdad, objetividad y conocimiento de la realidad, son tareas colectivas, son construcciones participativas”.

El juez Boggiano, marca una diferencia cualitativa en cuanto a la consideración de teóricos de la comunicación, que hasta el momento, se restringían, a Peterson o Schramm, citando a Vattimo en estos términos:

“¿Qué sentido tendría la libertad de información, o incluso la mera existencia de más de un canal de radio y televisión, en un mundo en el que la norma fuera la reproducción exacta de la realidad, la perfecta objetividad y la total identificación del mapa con el territorio? La realidad, en tal perspectiva, pareciera ser, más bien, el resultado del entrecruzarse, del “contaminarse” (en el sentido latino) de las múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí...(Vattimo Gianni, “La sociedad transparente”, p. 81, Barcelona, 1990).

También cita a Habermas: “El objetivo, si democracia y pluralismo son términos inescindibles, es el de aproximarse, que no distanciarse, a una búsqueda cooperativa de la verdad en la que la única coerción que pudiera ejercerse fuese la coerción sin coerciones que ejercen los buenos argumentos” (Habermas, J., “Escritos sobre la moralidad y eticidad”, ps. 162/163, Ed. Paidós, Barcelona, 1991).

Boggiano también trae al fundamento de su voto, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y realiza una hermenéutica de la Convención. “Ensancha el marco reflexivo de la opinión pública”, sostiene sobre el derecho de respuesta, y esquemáticamente aborda las siguientes cuestiones en el marco del instituto bajo estudio:

- Equilibrio entre el poder de los medios y la aptitud de cada individuo para actuar en la liza a la que es llevado por la información.
- Deber de búsqueda de verdad por el informador.
- Cita de la doctrina española y de los códigos de ética (Cons. 9 = al Cons. 8 del voto del Dr. Nazareno).
- Citas de Pío XII y Juan XXIII
- Jurisprudencia de la Corte sobre la inexistencia de derechos absolutos.



“El derecho de respuesta, -sostiene Boggiano- dada su escasa antigüedad en el ordenamiento jurídico nacional, no ha recibido, todavía, un tratamiento jurisprudencial vasto y consolidado; tampoco la comunidad parece haberlo elaborado, aún, en términos que lo integren a su acervo cultural. Sí fue, y desde un tiempo muy anterior a su recepción en el derecho positivo, un instituto que originó encendidas polémicas. De ahí que dicha recepción sea vista, por algunos, con inquietante entusiasmo, y por otros, al menos con desconfianza. La Corte, que no juzga sobre el acierto de las normas, entiende que la rectificación o respuesta satisface levantados requerimientos, dado que provienen tanto del plano de los derechos humanos, cuanto del relativo al funcionamiento y perfeccionamiento de la sociedad democrática”.

En el entendimiento de este miembro de la Corte, el derecho de respuesta no lesiona la línea editorial del medio de prensa, ya que la respuesta sólo se refiere y alcanza a hechos y no a las opiniones, y hay que considerar el fin protectorio de la misma, en su doble ámbito: la protección del honor y la posibilidad de ejercitar universalmente el derecho a dar y recibir información.

Voto del Dr. Vázquez:

Vota también por la confirmación de la sentencia, compartiendo los argumentos centrales y agrega por su parte, fundamentos del derecho comparado, fundamentalmente de España y su ley orgánica sobre derecho a rectificación o respuesta.

Disidencia del Dr. Belluscio

Este magistrado, vota por la revocación de la sentencia, es el único voto disidente por medio del cual ratifica su posición relativa a que el derecho de rectificación es contrario a la libertad de prensa consagrada en la Constitución Nacional, agregando también que no se trata de un derecho implícito en la Carta Magna, considerando que la libertad de prensa es un derecho absoluto en la Norma Fundamental y citando como antecedente a la jurisprudencia norteamericana. Esta postura fue desde siempre su posición y no nos resulta nueva ya que la expresó en los casos Sanchez Abelenda, Ekmekdjian c. Neustadt y en Ekmekdjian c. Sofovich.

En líneas generales, y con respecto al fallo analizado, observamos que la Corte ha mantenido la postura ya expresada en *Ekmekdjian c. Sofovich* en cuanto al fondo de la cuestión, es decir que el derecho de rectificación es un derecho con un ejercicio operativo, sin necesidad de su reglamentación específica y susceptible de ser considerado como norma positiva en nuestro ordenamiento jurídico interno ya que se ha ratificado por ley, y luego dado jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica.

Sin embargo, reiteramos lo que ya hemos apuntado, hay una modificación de importancia respecto del antecedente “*Ekmekdjian c. Sofovich*”, al circunscribirse en la totalidad de los votos conformatorios de la sentencia al criterio de que sólo es aplicable respecto de “informaciones inexactas o agraviantes” y a solicitud del afectado particularmente.

Este cambio de posición, respecto del voto mayoritario, lo consideramos correcto y respetuoso de la naturaleza propia del derecho de rectificación, toda vez que hasta ese momento se tergiversaba el instituto permitiendo la admisión de contestar opiniones sobre temas varios y no necesariamente a requerimiento del interesado, aspecto que es fundamentalmente criticable en el *leading case*, en la medida que se permitió responder sobre dogmas de fe, sobre creencias, a un miembro de la comunidad católica y que tampoco había sido particularmente aludido ni individualizado.

#### **VII.1.2.8. Caso “*Rozenblum Horacio B. c. Vigil Constancio y otros*”<sup>372</sup>”.**

En este fallo de 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina reiteró su postura a favor de la operatividad derecho de rectificación o respuesta.

---

<sup>372</sup> Caso “*Rozenblum Horacio B. c. Vigil Constancio y otros*”. Causa 50.166 CS, agosto 25-1998. E.D. T. 188, págs. 203 y ss.

Los cinco votos de la mayoría, dados por los jueces Nazareno, Fayt, Belluscio, Petracchi y Bossert desestimaron el recurso de queja por denegación del extraordinario presentado por la demandada ya que el mismo no cumplía con un requisito procesal esencial: la fundamentación autónoma. Con lo cual confirmaron la sentencia de Cámara que hizo lugar al derecho de respuesta de Horacion Rozenblum.

Cabe destacar que los votos en disidencia de los Dres. Moliné O'Connor, López, Boggiano y Vázquez admitieron el tratamiento de la queja pero confirmando la sentencia a favor del mentado derecho.

Con lo cual, de forma implícita y explícita, la totalidad de los miembros de la Corte avalaron el derecho de rectificación o respuesta.

Los antecedentes fácticos del caso en cuestión fueron los siguientes: Horacio Rozenblum inició demanda contra Constancio Vigil, y/o quien resultare responsable de la firma “Editorial Atlántida, S.A.” , así como contra Daniel Pliner, director adjunto de la revista “Somos”, a fin de lograr una sentencia que los condenase a publicar en el medio gráfico indicado una rectificación relativa al contenido de un artículo periodístico aparecido en el ejemplar n° 830, del 24 de agosto de 1992, titulado “B.C.C.I., la conexión Alfonsín” (págs. 4/9).

Rozenblum consideró que en el mencionado artículo se deslizó un comentario notoriamente agravante para su persona, en tanto se dio a entender una vinculación suya con el Banco de Crédito y Comercio Internacional (B.C.C.I.) y con una supuesta maniobra ilícita, por lo que requirió a la editorial la publicación –en el mismo medio- de una carta documento cuyo texto desmiente la especie difundida.

La publicación le negó la solicitud al peticionante, con lo cual este inició una acción de amparo.

Tanto en primera como en segunda instancia, se condenó a Editorial Atlántida a publicar en la revista “Somos” el texto de la carta documento antes aludida, contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso el recurso extraordinario federal cuya denegación motivó la queja que finalmente fue desestimada por la Corte.

En la disidencia conjunta de los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López se reitera y se ratifica la doctrina sentada por el caso “Ekmekdjian c. Sofovich” en cuanto sostiene la operatividad del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, y que pese a la inexistencia de normas internas regulatorias de los aspectos instrumentales del derecho de rectificación o respuesta, “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución, e independientemente de las leyes reglamentarias”.

Los jueces rescatan la doble finalidad individual y social del instituto y los elementos que hacen a la naturaleza del derecho de rectificación en cuanto permite en función del derecho a la igualdad y al derecho de dar y recibir información, que el perjudicado exprese su versión de los hechos ante informaciones inexactas o agraviantes que le causen perjuicio.

Por su parte, en la disidencia del Dr. Boggiano se retoma la armonía y concordancia entre los derechos consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución, juicio realizado por la labor constituyente y que no corresponde trastocar a los poderes constituidos. Insiste en la idea de la inexistencia de derechos absolutos y en este marco dirige un mensaje a los medios, al decir que la libertad de expresión hace y fundamenta al derecho de rectificación, consolida a la democracia, y debería ser admitido “máxime cuando el medio elegido se exhibe, al par, como enriquecedor de la convivencia democrática”.

Difiere en el razonamiento del voto conjunto de López y Moliné O’Connor pues para Boggiano, el perjuicio que causa la información inexacta o agraviante al afectado no tiene por qué ser cierto ni actual, sino que basta con que “posea un potencial dañoso, vale

decir, que pudiera llegar a lesionar un interés jurídicamente protegido”. Siendo este elemento otro distintivo para con la responsabilidad civil y que hace a la particularidad de la figura.

Finalmente, la disidencia del Dr. Adolfo Vázquez, coincide con las restantes en cuanto sostiene la armonía constitucional de los derechos, la dimensión individual y social de la rectificación y la doctrina sentada en “Ekmekdjian c. Sofovich” pero además agrega puntualmente los tres presupuestos del derecho de respuesta, que fueron omitidos en la apelación federal. En este sentido sostiene que surge evidente que en la información cuestionada se aludió al actor en forma directa y expresa, por su mención con nombre y apellido. Y en cuanto al perjuicio : *“también puede considerarse cumplido, pues habiéndose vinculado al actor en la noticia como presunto partícipe (“protagonista clave”, según la calificación del artículo periodístico) de una maniobra en la que aparecería como “...lobbyista del fraudulento banco internacional...” conocido por las siglas s B.C.C.I., no cabe negar la posibilidad de que se haya afectado su integridad moral o intelectual”*. (Consid. 8).

El tratamiento, los fundamentos, los argumentos y las interpretaciones de la Corte en general, de sus votos mayoritarios, de las minorías, de las disidencias y de los votos particulares, se toman en cuenta permanentemente a lo largo de este trabajo, con lo cual, en cada uno de los puntos y elementos a analizar en el ejercicio del derecho de respuesta, consideramos y retomamos puntualmente –por razones metodológicas- las expresiones vertidas en el ámbito judicial.

#### **VII. 1.2.9. Caso “Perini, Carlos A. y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro<sup>373</sup>”.**

En el presente caso, si bien el tema central de la litis se refiere a los daños provocados al derecho al honor y a la intimidad de los actores como personas afectadas por la publicación de noticias; la responsabilidad civil de los medios de comunicación y el

---

<sup>373</sup> P. 335.XXXVI. C.S.J.N. 21 de octubre de 2003. Recurso de Hecho. “Perini, Carlos Alberto y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro”.

alcance de la doctrina de la real malicia, no puede perderse de vista que una de las defensas fundamentales de la demandada se basó en la publicación de una “rectificación” de la información en la que se advirtiera que el error se originó en las fuentes que suministraron la misma.

Antes de adentrarnos en el análisis particular que mereciera el tema de la “rectificación”, tanto en el dictamen del Procurador como en el *decidendum* de la Corte, estimamos necesario relatar los antecedentes fácticos que suscitaron la demanda de daños y perjuicios contra la directora y la empresa propietaria del diario “Clarín”.

*Antecedentes fácticos:*

Carlos Alberto Perini, y su esposa María Perini, por sí, y en representación de sus hijos menores, interpusieron demanda de daños y perjuicios, a raíz de las publicaciones aparecidas en el diario “Clarín” durante el mes de octubre de 1995, en las que se los involucraba con una organización delictiva dedicada al tráfico de niños. En las notas aludidas se daba cuenta del desbaratamiento de una banda de delincuentes implicada en el trámite de adopciones ilegales y se describía su *modus operandi* en lo referente a cómo se aprovechaban de las embarazadas o madres de precaria condición económica para lograr quedarse con sus hijos y después “darlos en adopción” mediante la intervención de un escribano público. En ese contexto, Clarín informó el 7 de octubre de 1995 que “las parejas interesadas en adoptar eran contactadas por María Perini que, según la Gendarmería, era la jefa de la banda y se encontraba prófuga”; al precisarse las funciones que cumplía cada integrante de la organización delictiva se expresó que “María Perini era la que conseguía los matrimonios compradores y hacía el pedido a Misiones”.

El 8 de octubre, el diario señaló que si bien era cierto que la información preliminar había dado cuenta de que María Perini era la jefa de la banda y que manejaba el “negocio” desde Burzaco, después había trascendido que, en realidad, ella y su marido estaban implicados en la investigación porque habrían comprado dos niños a la pandilla desbaratada por Gendarmería Nacional en la Provincia de Misiones. En la misma página, se publicó una

nota que tenía los siguientes títulos: “Tráfico de chicos”. “Se los habrían vendido en Misiones”, y con caracteres destacados: “Investigan si un corredor de autos compró dos varoncitos”, en la que se informaba que Carlos Perini estaría implicado en la investigación como uno de los compradores de los bebés.

En la nota en la que se suministraron los nombres de los menores que habrían sido “adquiridos” por Carlos Perini y su mujer, también se expresó que “altas fuentes judiciales y de inteligencia de Gendarmería” habían revelado que el deportista sería citado próximamente a declarar ante la justicia de la Provincia de Misiones y que en el expediente judicial aparecería una petición de Carlos Perini formulada a un oficial de esa fuerza de seguridad para que le consiguiera un bebé, oficial que lo habría derivado a una de las integrantes de la banda aludida.

En la investigación judicial, se comprobó que las imputaciones que se hicieron a María Perini en forma asertiva referentes a que era la jefa de la banda y a que estaba prófuga de la justicia, no tenían sustento alguno. En efecto, en las causas penales en las que se investigó el ilícito consta que sólo se la citó como testigo, y las declaraciones de los imputados, que son posteriores a la aparición del artículo impugnado, sólo dan cuenta de que María Perini los había puesto en contacto con Isabel Eleuteria González, quien sí era una de las integrantes de la banda de delincuentes, y suministrado algunos consejos sobre los pasos a seguir con la adopción, “mas resultan insuficientes para formular una aseveración de la gravedad y entidad lesiva como la que fue difundida por los demandados”<sup>374</sup>.

Estos fueron los hechos del caso. Antecedentes que motivaron a Carlos Perini y a su cónyuge a iniciar la demanda de daños y perjuicios contra la directora del medio y la empresa propietaria de Clarín.

---

<sup>374</sup> Considerando 25 de la sentencia en análisis. Conf. declaraciones de fs- 1/5 vta.; 6/9 vta. y 114/117 de la Causa Nro. 303-D año 1996 “González, Isabel Eleuteria y otros”).

La cuestión de fondo tratada por la Corte. La defensa de “Clarín”: la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, por el recurso extraordinario que interpusieron los demandados, cuya denegatoria motivó la presentación de queja.

Los demandados se agraviaron, en primer lugar, por la condena a la Directora del medio periodístico, por cuanto –sostienen- las normas citadas (arts. 1109 y 113 del Código Civil) como sustento de la decisión de la Sala “J” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, resultan equívocas para culparla, en tanto no existió conducta activa u omisiva que quepa endilgarle, ni responsabilidad objetiva o refleja por un hecho suyo o de un dependiente que pueda imputársele.

Afirman, por otra parte, que el juzgador realzó el derecho a la intimidad de los accionantes, en desmedro de la libertad de expresión y de la significativa trascendencia de la información, que poseía un innegable interés público que debía prevalecer por sobre los intereses particulares. Manifiestan que los hechos en los cuales los actores habían participado, se encontraban fuera de la esfera de su intimidad pues ya habían adquirido exteriorización al ser investigados por la justicia, y aquéllos ya habían sido apuntados como involucrados por un cable de la agencia DyN, información emanada de Gendarmería Nacional.

Sostienen, además, que, desde la contestación de la demanda, invocaron como defensa la doctrina del fallo “Campillay” (Fallos: 308:789), aseverando que las notas publicadas fueron redactadas en un tiempo de verbo potencial y que estuvieron siempre atribuidas directamente a las fuentes de información. Alegan que dichas fuentes fueron arbitrariamente desestimadas en ambas instancias, pues prescindieron de los cables de las agencias Télam y DyN adjuntados a la contestación de la demanda, cuyo contenido indica que hubo una misma fuente, Gendarmería Nacional, “madre” de la noticia que a su vez nutrió a las agencias informativas. Expresan que, además, se soslayaron las notas publicadas por los restantes medios, que también indicaron como fuente a Gendarmería Nacional. Critican el tratamiento otorgado en ambas instancias a la prueba consistente en las causas penales que motivaron los hechos objeto de la noticia.



Con cita de jurisprudencia norteamericana, aducen que para la salvaguardia de la libertad de prensa, debe aceptarse que una manifestación errónea es inevitable en los medios, y que debe ser protegida para que exista el margen de respiro (“the breathing space”) que la libertad de expresión necesita para existir.

Sostienen que, al calificar la conducta de los demandados, se soslayó el interés público que caracterizaba a la noticia publicada, y que, consecuentemente, se relacionaron figuras de carácter público o involucradas en hechos públicos, que tornan aplicable la doctrina de la “real malicia”, exonerando a los apelantes de toda responsabilidad. Agregan al respecto, que la aclaración formulada por “Clarín” en la edición del día 8 de octubre de 1995, donde se señaló que los actores no estaban involucrados como jefes de la banda, y la rectificación publicada el día 15 del mismo mes, advirtiendo que el error se originó en las fuentes que dieron la información, demostraron la ausencia de la “real malicia” en el obrar de los recurrentes, constituyendo una prueba de su buena fe.

Alegan que se ha suprimido la libertad de prensa a través de una sanción económica “a posteriori” que tiene los mismos efectos que podría tener la censura previa.

Afirman que el planteo relacionado con la censura indirecta no mereció ninguna consideración seria por parte de la Cámara, por lo que concluyen que le dio una jerarquización distinta al derecho constitucional de los actores, por encima de los derechos de los apelantes, de idéntico rango.

Desaprueban, por otra parte, la cuantificación - a su ver - excesiva de los rubros reconocidos por la sentencia, impugnando, en sustancia, la falta de una adecuada fundamentación.

*La rectificación del error informativo como argumento defensivo exculpatório por parte del medio demandado.*

Hemos advertido previamente que el fallo bajo análisis no está centrado en el tratamiento del derecho de rectificación o respuesta. La cuestión de la “rectificación” se aborda, pues la demandada, en su defensa, esgrime que “Clarín” aclara en su edición del día 8 de octubre de 1995, que los Perini no estaban involucrados como jefes de la banda, y que luego, el 15 del mismo mes, señalan que el error se originó en las fuentes que dieron la información, lo cual demuestra –a su entender- la ausencia de la “real malicia” en su obrar, constituyendo una prueba de su buena fe.

Es decir, que el medio demandado no publicó rectificación alguna por parte de Carlos Perini o su mujer, sino que, *motu proprio* reconocieron el error en el que incurrieron y publicaron una rectificación.

Ahora bien, tal defensa, fue motivo de un análisis particular y diferenciado tanto por parte del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina<sup>375</sup>, como por parte de los magistrados de la Corte.

En el dictamen del Procurador Fiscal, se destaca que “(...) *el propio medio, no solo se encargó de rectificar los hechos informados, sino que, además, en dicha rectificación, aludió expresamente a que se había manejado con fuentes que coincidieron en el error. Estimo, en consecuencia, que la atribución directa y sincera de la noticia a una fuente, unida a la posterior rectificación en la que se expresa que, contrariamente a lo informado, los actores no se encontraban procesados ni involucrados en la causa, y donde se señala, además, que el error se originó en aquella fuente, constituyen circunstancias bastantes para eximir de responsabilidad a los demandados, a la luz de la citada doctrina del Tribunal*”.

Es decir que, para el Procurador, la rectificación del error por parte del medio, es una cuestión que incide en la determinación final de eximición de responsabilidad para la demandada.

---

<sup>375</sup> Felipe Daniel Obarrio. Buenos Aires, 30 de abril de 2002.

Otra es la postura sobre tal cuestión por parte de los magistrados de la Corte<sup>376</sup> que sostienen justamente lo contrario: la rectificación por parte del diario no es una circunstancia que sirva de excusa para liberar de responsabilidad al órgano de prensa.

Así es tratada la cuestión en los considerandos pertinentes de la sentencia bajo comentario:

“Que el hecho de que el diario "Clarín" haya rectificado con fecha 8 de octubre de 1995 la información que había suministrado el día anterior referente a que la actora era la jefa de la banda y la encargada de conseguir matrimonios interesados en adoptar, para sostener después que, en realidad, se la estaba investigando junto a su marido porque habrían comprado dos bebés a la organización delictiva, no satisface ese recaudo de discurso conjetural exigido por el ya citado fallo "Campillay", máxime cuando en el artículo se tejen sospechas y se echan sombras en cuanto a que Carlos Perini habría solicitado a un oficial de Gendarmería Nacional que le consiguiera un niño en adopción y no existe ninguna prueba en la causa que avale semejante especulación periodística". (Considerando 21).

**“Que de igual modo, la posterior rectificación del diario en cuanto a que los actores serían los compradores de dos niños y a que Carlos Perini habría solicitado a un oficial de Gendarmería Nacional que se los consiguiera para poder adoptarlos, no es una circunstancia que sirva de excusa para liberar de responsabilidad al órgano de prensa, porque esa noticia —más allá de que se haya utilizado el modo potencial— no sólo no tiene sustento en las constancias de las causas penales que se han agregado como prueba, sino que tampoco fue difundida por los otros medios o agencias de noticias, motivo por el cual es un aporte subjetivo del diario que compromete su responsabilidad por el carácter difamatorio de esa información”. (Considerando 26).**

---

<sup>376</sup> Los magistrados que suscriben la sentencia en análisis son: Carlos S. Fayt, Augusto César Bulluscio (según su voto); Enrique Santiago Petracchi, Guillermo A.F. López (según su voto) y Adolfo Roberto Vázquez.

*“Que, por lo demás, la circunstancia de que con fecha 15 de octubre de 1995 el diario "Clarín" hubiese publicado una rectificación en la que se dejaba constancia de que los actores no se encontraban procesados ni involucrados en la causa por tráfico de chicos y que el error informativo era atribuible a las fuentes utilizadas, no obsta a la admisión de la responsabilidad imputada al medio periodístico pues dicha rectificación no sólo importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad, sino que por su exiguo tamaño y ubicación en el periódico no tuvo la misma trascendencia que las graves imputaciones efectuadas en los artículos cuestionados, lo que impide también considerar que dicho remedio haya sido apto para reparar el daño causado, aparte de que el art. 14, inc. 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos — ratificada por la ley 23.054— establece que en ningún caso la rectificación o la respuesta "eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido". (Considerando 28).*

Del voto del Dr. Augusto C. Belluscio<sup>377</sup>

**“Que, por lo demás, la circunstancia de que con fecha 15 de octubre de 1995 el diario "Clarín" hubiese publicado una rectificación en la que se dejaba constancia de que los actores no se encontraban procesados ni involucrados en la causa por tráfico de niños y que el error informativo era atribuible a las fuentes utilizadas, no obsta a la admisión de la responsabilidad imputada al medio periodístico pues dicha rectificación no sólo importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad, sino que por su exiguo tamaño y ubicación en el periódico no tuvo la misma trascendencia que las graves imputaciones efectuadas en los artículos cuestionados, lo que impide también considerar que dicho remedio haya sido apto para reparar el daño causado”.**

Del voto del Dr. Guillermo A. F. López.<sup>378</sup>

---

<sup>377</sup> Aclara que coincide con los considerandos 1º a 26 del voto de la mayoría, pero agrega entre otros fundamentos el considerando que se transcribe.

**“Que de igual modo, la posterior rectificación del diario en cuanto a que los actores serían los compradores de dos niños y a que Carlos Perini habría solicitado a un oficial de Gendarmería Nacional que se los consiguiera para poder adoptarlos, no es una circunstancia que sirva de excusa para liberar de responsabilidad al órgano de prensa, porque esa noticia —más allá de que se haya utilizado el modo potencial— no sólo no tiene sustento en las constancias de las causas penales que se han agregado como prueba, sino que tampoco fue difundida por los otros medios o agencias de noticias, motivo por el cual es un aporte subjetivo del diario que compromete su responsabilidad por el carácter difamatorio de esa información”. (Considerando 25).**

*“Que, por lo demás, la circunstancia de que con fecha 15 de octubre de 1995 el diario "Clarín" hubiese publicado una rectificación en la que se dejaba constancia de que los actores no se encontraban procesados ni involucrados en la causa por tráfico de chicos y que el error informativo era atribuible a las fuentes utilizadas, no obsta a la admisión de la responsabilidad imputada al medio periodístico pues dicha rectificación no sólo importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad, sino que por su exiguo tamaño y ubicación en el periódico no tuvo la misma trascendencia que las graves imputaciones efectuadas en los artículos cuestionados, lo que impide también considerar que dicho remedio haya sido apto para reparar el daño causado, aparte de que el art. 14, inc. 2º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —ratificada por la ley 23.054— establece que en ningún caso la rectificación o la respuesta "eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido". (Considerando 27).*

En fin, para la Corte, la rectificación del error por parte del medio:

- no es excusa para liberar de responsabilidad al órgano de prensa;
- importó en la práctica el reconocimiento de su culpabilidad;

---

<sup>378</sup> El Dr. Guillermo López, coincidió con los considerandos 1º a 22 del voto de la mayoría,

- no tuvo la misma trascendencia que las imputaciones efectuadas y por ende no es remedio apto para reparar el daño causado;
- conforme al Art. 14 inc. 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la rectificación o la respuesta en ningún caso exime de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Insistimos, más allá de la alusión de la Corte al derecho de rectificación o respuesta en los términos del Pacto de San José de Costa Rica, estimamos que en el presente caso, se trata de una rectificación del error por parte del medio, una *retractación*, no se da en el supuesto el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por parte de los afectados en los términos del artículo 14 Convención. Esto es, la rectificación constituye a la vez que un medio de defensa del medio demandado, un punto esencial para el tratamiento de la responsabilidad civil y la aplicación de la doctrina de la real malicia.

De esta forma, el derecho de rectificación o respuesta se constituye una parte indivisible e integradora del derecho a dar y recibir información de expansivas dimensiones en el ámbito de las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de expresión.

#### **VII.1.2.10. Caso “Tierno, Juan Carlos c. La Arena S.A. s/ Acción de amparo”. CSJN<sup>379</sup>**

Esta es la última sentencia, que a la fecha de realización del presente trabajo ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina en relación al derecho de rectificación o respuesta.

Antecedentes fácticos: Los hechos que dieron lugar a este caso fueron los siguientes: Juan Carlos Tierno, se presentó ante los tribunales de la Provincia de La Pampa y solicitó que se hiciera efectivo su derecho de réplica, previsto en el artículo 9 de la

---

<sup>379</sup> “Tierno, Juan Carlos c. “La Arena S.A.” s/ acción de amparo. CSJN Argentina. T. 423.XLIII. REX. 15/03/2011.

constitución local<sup>380</sup>, mediante una orden judicial dirigida al diario “La Arena” de esa provincia argentina, para que se publicara su carta de respuesta a una nota que el periódico difundió en su edición del 23 de abril de 2005. Como fundamento de su petición, el accionante expresó que la nota contenía falsas expresiones y que la negativa del diario a publicar su respuesta no permitía un “conocimiento de la réplica en cuanto a falseamientos y otras afectaciones que impedían a esos lectores acceder a la verdad, y no sólo a la realidad creada por el escribiente periodístico y la sociedad responsable ideológica y legalmente”.

La nota aludida estaba relacionada con diversas actuaciones judiciales promovidas por Tierno, quien por ese tiempo se encontraba a cargo del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad provincial, las que habrían culminado con pronunciamientos adversos a su interés. Además, la publicación atribuye al nombrado haber efectuado declaraciones sobre la “absoluta falta de ecuanimidad” de la jueza que absolvió a los periodistas por él querellados y formulado una denuncia contra dicha magistrada por prevaricato.

El demandante aduce que la falta de ecuanimidad fue declarada por la misma jueza al excusarse, mientras que niega terminantemente haber hecho la denuncia.

El diario demandado negó que estuviese obligado a publicar la carta enviada por el actor. En la contestación de demanda, sostuvo que la nota contra la cual se dirigía no era de las que generaba derecho de réplica, puesto que, al no incurrir en inexactitud alguna ni su contenido tener entidad para provocar deshonra o descrédito en la persona del señor Tierno, no contenía información agravante. Por lo tanto, le impidió el ejercicio de respuesta.

---

<sup>380</sup> Constitución de la Provincia de La Pampa, Argentina (Texto de 1960 con las modificaciones de 1994). Artículo 9°.-“Es inviolable la libertad de publicar las ideas que no resulten atentatorias de la moral pública y las buenas costumbres. En los juicios originados por el abuso de esta libertad, sólo podrán imputarse hechos constitutivos de delitos comunes. No se podrán secuestrar la imprenta y sus accesorios como instrumentos del delito durante la tramitación de los procesos. **Toda persona afectada en su reputación por una publicación, podrá exigir que se publique sin cargo alguno su contestación en la misma.** El juez más próximo de cualquier fuero será competente para ordenarlo”. El destacado nos pertenece ya que hace alusión a la parte del artículo 9 aplicable al presente caso. Como vemos, a diferencia de la Nación, hay provincias que consagran expresamente el derecho de rectificación o respuesta, lo que será motivo del relevamiento pertinente.

El proceso: ante la negativa del diario “La Arena” de otorgar el derecho de rectificación al Sr. Tierno, éste interpuso acción de amparo para la efectiva protección de su derecho. El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda; encontró que la publicación periodística habría sido inexacta o agravante en las siguientes cuestiones: 1) las expresiones sobre la “falta de ecuanimidad” de la jueza Fantini; 2) la inclusión en la noticia de un supuesto “conflicto de poderes” inexistente y 3) la denuncia de Tierno contra la mencionada jueza por prevaricato. Sobre lo primero, entendió que no se probó que Tierno hubiera sido el autor de tales manifestaciones; sobre lo segundo que el derecho de rectificación o respuesta no sólo opera ante hechos inexistentes o agravantes, sino que también debe ser acordado contra expresiones sobre hechos de trascendencia política y en relación con el tercer punto, el magistrado consideró probado que tal denuncia no había tenido lugar.

La Cámara de Apelaciones, al confirmar la sentencia de primera instancia, entendió que en casos como estos el medio de prensa tiene la carga de probar la verdad de la información difundida para evitar la obligación de publicar la respuesta y ello “se compadece con la idea de que lo que se protege en realidad con el derecho de réplica, es ampliar el debate y permitir que el afectado diga su verdad frente a la otra que sostiene el medio informativo”, para concluir que “la prueba producida en la causa, no demuestra con eficacia que el accionante haya manifestado exactamente” lo que se le adjudica en la publicación. Por otra parte, coincidió en que las referencias contenidas en la nota a un supuesto conflicto de poderes, debían ser calificadas como de “trascendencia política” dado el cargo que tenía Tierno al momento de la publicación, aspecto éste que habilitaba el derecho de réplica por parte del demandante.

En su recurso por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, el diario demandado insistió en que resultaba contrario al principio republicano y a la libertad de prensa otorgar el derecho de réplica a un funcionario público cuando “no se ha acreditado en modo alguno que el actor se haya visto objetivamente ‘afectado’ por las publicaciones”, requisito que venía exigido por el precedente “Petric” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.



Argumentó que también es contraria a la libertad de expresión, la decisión de transferir al medio periodístico la carga de demostrar la verdad de los extremos contenidos en la nota, cuando la Corte Suprema, tratándose de publicaciones concernientes a funcionarios públicos, ha adoptado la doctrina de la “real malicia” que supone el principio inverso. Por otro lado, con una nueva invocación del precedente “Petric”, indicó que las apreciaciones relacionadas con el “conflicto de poderes” no eran más que una opinión o interpretación contenida en la nota periodística que no podía dar lugar a derecho de rectificación o respuesta.

El Tribunal desestimó el recurso local, por razones formales, sin examinar las cuestiones constitucionales propuestas. Entendió que la parte interesada había fallado al fundar su impugnación, pues la mera disconformidad con el modo en que se había resuelto el pleito, sin precisar “en que se habían equivocado los jueces al fallar” no resultaban suficientes para habilitar la causal prevista en el artículo 261, inciso 1 del código procesal provincial y que tampoco se encontraba configurada la causal establecida en el artículo 261, inciso 2 del mismo cuerpo normativo, vinculada con la arbitrariedad del pronunciamiento impugnado.

Contra esa decisión, la demandada presentó un recurso extraordinario federal, en el que, además de replantear el mismo tipo de cuestiones que habían sido propuestas al Tribunal Superior sobre el avasallamiento de su libertad de prensa merced a una aplicación impropia del derecho de rectificación o respuesta, ataca la omisión de todo tratamiento en la máxima instancia local sobre la resolución contraria a la inteligencia de la Constitución Nacional en la que fundara su derecho a no publicar gratuitamente la carta del señor Tierno.

El Tribunal Superior concedió el remedio federal. Después de mencionar cuáles habían sido las cuestiones constitucionales planteadas expresó que “si bien el recurso extraordinario provincial ha sido declarado inadmisibile estando en presencia de un conflicto entre dos derechos de rango constitucional, el de la libertad de expresión y de imprenta, y el del actor a defender su reputación ante eventuales noticias inexactas y agraviantes, por lo que, de configurarse la cuestión federal -a la cual hace referencia la

recurrente- se estarían afectando derechos consagrados en la Carta Magna y, además, teniendo presente que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado recientemente que dicho Tribunal tiene casos a resolver vinculados al tema aquí analizado [sigue la cita de un artículo periodístico], considérase que, por vía de excepción, el recurso debe ser concedido”.

La doctrina sentada en los precedentes “Strada” y “Di Mascio” define el deber que tienen los tribunales superiores de provincia de examinar y resolver las cuestiones federales que las partes les plantean en los recursos de que disponen para acceder a esa instancia, deber que surge de la misma Ley N° 48 y que por ende no puede ser excusado por restricciones formales que impongan las leyes provinciales de procedimiento. Es iluminadora la formulación que de esta misma idea plasmó el juez Holmes de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1923 y recordada en Hart and Wechsler’s *The Federal Courts and The Federal System*, (fourth edition, pág. 581): “Cualquiera sean las trabas [springes] que los estados puedan poner a quienes están procurando defender derechos conferidos por los mismos estados, la defensa de derechos federales, cuando ha sido clara y razonablemente hecha, no puede ser abatida en nombre de esas prácticas locales” (263 U.S. 22, 24).

Cabe aclarar, sin embargo, que esta regla no tiene el propósito de relevar a las partes interesadas de cumplir con todos los recaudos establecidos por las leyes de procedimientos y las prácticas jurisprudenciales asentadas y conocidas, siempre y cuando estos requisitos no se traduzcan en obstáculos insalvables y hayan sido aplicados razonablemente. Por lo tanto, cuando la desestimación del recurso local responde a un defectuoso cumplimiento de tales exigencias atribuible a la parte interesada, no es válido invocar el precedente “Di Mascio” para revertir el resultado del pleito. En estos casos, la decisión del tribunal provincial encuentra fundamento suficiente en el derecho procesal local que reglamenta la admisibilidad de los recursos locales y, por ende, resulta aplicable el criterio utilizado reiteradamente por Corte en cuanto a que ese tema es ajeno a esta instancia.

En la presente causa (los Dres. Fayt y Argibay por su voto) juzgan que “el comportamiento seguido por el Tribunal Superior resulta, en verdad, ambivalente. Por un lado, la decisión desestimatoria del último recurso provincial puede ser atribuida tanto a fallas en su fundamentación atribuibles a la parte que lo intentó, como a la estrechez con que el artículo 261 del código procesal provincial reglamenta los motivos que habilitan la jurisdicción del Tribunal Superior. Por otra parte, el mismo Tribunal Superior concedió posteriormente el recurso extraordinario federal, para lo cual acudió a los lineamientos sentados por esta Corte en el ya mencionado precedente “Di Mascio”, admitiendo que la anterior desestimación había sido decidida “estando en presencia del conflicto entre dos derechos de rango constitucional” referido por la recurrente.

Esta última resolución implica el reconocimiento de que, bajo la doctrina “Di Mascio”, el Tribunal Superior se encontraba obligado a decidir el punto federal y no lo había hecho. Tal inferencia encuentra respaldo en la circunstancia de que, según consta en la reseña practicada precedentemente, la cuestión constitucional fue sostenida por el diario “La Arena” en todas las instancias y, especialmente, en el recurso por ante el Tribunal Superior, oportunidad en la que invocó el fallo “Petric” de esta Corte para justificar que se encontraba perjudicado en su libertad de prensa tanto por haberse reconocido derecho de réplica contra meras opiniones a quien no se hallaba en modo alguno afectado en sus derechos personales, así como por la inversión de la carga de la prueba que releva al demandante de probar las inexactitudes de la publicación”.

Por lo tanto devolvió la causa al Tribunal pampeano para que se expidiera conforme a derecho.

La Corte, por unanimidad compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos términos se dieron por reproducidos en razón de brevedad. Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas (Artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Los jueces de la Corte fueron en

este caso: Ricardo Luis Lorenzetti; Elena I. Highton de Nolasco; Carlos S. Fayt (según su voto) - Enrique Santiago Petracchi; Juan Carlos Maqueda; E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay, según su voto compartido con el Dr. Fayt.

## **VII.2. El derecho de rectificación o respuesta en las Constituciones de las Provincias Argentinas en el marco del sistema federal de gobierno.**

Si pretendemos ofrecer el abordaje integral del derecho de rectificación o respuesta en el ordenamiento jurídico argentino, no podemos omitir la importancia y el significado que ha adquirido en el ámbito del derecho público provincial, teniendo en cuenta que Argentina adoptó para sí la organización como Estado federal, forma de Estado caracterizada por la descentralización del poder con relación al territorio. Esto quiere decir que además del órgano central del poder, el Estado Nacional, existen órganos locales, que en Argentina, son las provincias, que como tales poseen cierto grado de independencia respecto del poder central que incluye la atribución de la autonomía. Por eso las provincias, entre otras atribuciones posee la de dictar su propia legislación.

El federalismo de Estados Unidos de 1787 fue un legado fundamental para el constitucionalismo federal argentino, aunque con matices propios, ya que en Argentina, la legislación de fondo es aplicable a todo el territorio nacional, léase: Código Civil y Comercial, Código Penal, Legislación Laboral, Código de Minería que es legislación común para todos los Estados Provinciales, y luego, los códigos de procedimientos y demás legislación es local, entre las que se inscribe la regulación del derecho de rectificación o respuesta.

Es necesario señalar que el federalismo argentino tuvo una génesis distinta del norteamericano. En los Estados Unidos los trece Estados que se habían independizado de Inglaterra se hallaban vinculados entre sí por los Artículos de Confederación y Unión Perpetua. En Argentina, en cambio, las provincias llegaron a la federación luego de pasar por un largo período de anarquía precedido de una hegemonía del gobierno central. Ello le permitió decir a Alberdi que nuestro sistema de organización del Estado era mixto porque

conjugaba antecedentes unitarios con precedentes federales. Estas diferencias en cuanto al origen se manifiestan también muy claramente en los respectivos textos constitucionales. El federalismo de la Constitución de Filadelfia presenta una descentralización más acentuada; mientras que el federalismo argentino es más atenuado<sup>381</sup>.

Una mirada que abarcara sólo el devenir jurídico del instituto en la legislación nacional argentina y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, implicaría una perspectiva centralista y hasta desestimatoria de los avances y perspectivas que presenta la figura en las provincias argentinas, que hacen al federalismo consagrado por la Carta Magna de la República Argentina.

Precisamente en las provincias, surgen aportes y desarrollos que pueden llegar a ser en muchos casos, vanguardistas, y que merecen consideración.

De un total de 23 provincias, y una Ciudad Autónoma (Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina), quince consagran expresamente el derecho de rectificación o respuesta, mientras que siete omiten alusión específica al instituto<sup>382</sup>, y una lo prohíbe explícitamente, aunque esto no signifique un rechazo puesto que sus textos son similares a la Constitución Nacional y su inclusión resulta entonces interpretativa, aunque indubitadamente a favor. Si imaginamos el mapa de la República Argentina, encontramos entonces más del 60% del país acepta y consagra explícitamente el derecho de respuesta, lo cual indica que en lo provincial ha ganado y extendido territorio.

---

<sup>381</sup> Ziulu, Adolfo Gabino. “Derecho Constitucional”. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014. Pág. 172.

<sup>382</sup> Las provincias que omiten una consagración específica del derecho de rectificación son: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones. Vale realizar una mención aparte sobre la Provincia de Tucumán ya que es una curiosa excepción, por negar explícitamente el derecho de rectificación o respuesta, lo cual fue considerado inconstitucional por la doctrina (Sagües, Néstor, “El Amparo Informativo”), por violar el Pacto de San José de Costa Rica, y contrariar así la escala normativa del art. 31 de la Constitución Nacional. En el mismo sentido se expidió el Dr. Germán Bidart Campos. Por su parte, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no establece explícitamente el derecho a rectificación o respuesta, si a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Al tratar los diversos proyectos de ley presentados históricamente, mencionamos el trabajo de Rafael Bielsa<sup>383</sup>, y en el marco de este apartado es necesario anotar que tal elaboración doctrinaria sirvió de fuente directa para la primera ley provincial argentina en la materia: Ley 1383 del año 1934, Provincia de San Luis<sup>384</sup>.

Ya que hablamos de los diversos intentos a nivel nacional en pos de reglamentar el derecho de respuesta, cabe tener presente que en forma constante los proyectos de ley citan en sus fundamentos a la recepción que ha tenido el instituto en las constituciones provinciales y su legislación, ya que en este sentido, se han adelantado a las previsiones y jurisprudencia nacional.

Los preceptos constitucionales provinciales<sup>385</sup> que a continuación examinaremos sobre el derecho de rectificación o respuesta, con matices propios, se caracterizan en común por:

- a) reconocer la facultad de responder o rectificar las referencias públicas que afectan la reputación ;
- b) inmediatez entre la difusión de la información y la respuesta;
- c) gratuidad de la respuesta;
- d) recurso ante la justicia en caso de negativa a difundir la rectificación.

Recorramos entonces las provincias argentinas...

**Provincia de Entre Ríos:** En el año 2008 la Provincia de Entre Ríos modificó su Constitución, consagrando el derecho de rectificación o respuesta en su artículo 13<sup>386</sup>:

---

<sup>383</sup> Ver apartado de Antecedentes Nacionales. Proyectos de Ley. El trabajo de Bielsa sobre el derecho de rectificación fue presentado en la Federación Argentina de Colegios de Abogados y publicado en la Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires en 1933. L.L. T. 1985-E, Sección Doctrina, pág. 791.

<sup>384</sup> El 15 de octubre de 1949, la ley puntana 1383, fue sustituida por la ley 2154, que también regula la rectificación de los funcionarios, siguiendo con pocas variantes el texto de la ley 2548, de la provincia de Santa Fe. Ver: Pastor, “La legislación y la libertad de imprenta”, págs. 128-129, 146-147 ; Ballester, Eliel “Derecho de Respuesta”, pág. 193.

<sup>385</sup> Para abordar una lectura conjunta y comparativa de la “Constitución Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias Argentinas” se recomienda la compilación realizada por Miguel Danielián y Claudio Ramos Feijoo, Fondo Editorial de Derecho y Economía (Fedye) La Ley, Buenos Aires, 1999.

<sup>386</sup> Texto oficial disponible en la web de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. <http://www.hcder.gov.ar/constitucion.php>

*“Se reconoce el derecho al acceso informal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna, que estuviera en poder de cualquiera de los poderes u órganos, entes o empresas del Estado, municipios, comunas y universidades. Sólo mediante una ley puede restringirse, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste, la que deberá establecer el plazo de reserva de dicha información.*

*La información será recopilada en el medio de almacenamiento de datos de acceso más universal que permita la tecnología disponible.*

*Toda persona afectada en su honra o reputación por informaciones maliciosas, inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación social de cualquier especie, tiene el derecho a obtener su rectificación o respuesta por el mismo medio. La mera crítica no está sujeta al derecho a réplica. La ley reglamentará lo previsto en la presente disposición”.*

#### **Provincia de Santa Fe: Constitución de 1962 (art. 11;<sup>387</sup>).**

“Las personas que se consideren afectadas por una publicación periodística tienen el derecho de réplica gratuita en el lugar y con la extensión máxima de aquella, con recurso de trámite sumario, en caso de negativa, ante la justicia ordinaria”.

#### **Provincia de Neuquén: Constitución de 1957<sup>388</sup>. (Art. 22)**

---

<sup>387</sup> ADLA, XXII-B 1909. B.O. 18/IV/1962. El derecho de réplica en la Constitución santafecina se consagra en el último párrafo del Artículo 11. La primera parte establece: “*Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir libremente su pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o cualquier otro medio de divulgación. El cultivo de la ciencia y del arte es libre. Queda garantido el derecho de enseñar y aprender. La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas, restrictivas de su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los abusos que por medio de ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los abusos que importen delitos comunes según el Código Penal serán castigados conforme a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños causados. No pueden clausurarse las imprentas, ni secuestrarse sus elementos como instrumentos del delito, mientras dure el proceso*”.

<sup>388</sup> ADLA, XVII-B, 2029.

*“Toda persona afectada en su reputación por una referencia o información periodística, tendrá derecho a la réplica o aclaración gratuita, por el mismo órgano que sirvió de vehículo a dicha referencia o información”.*

#### **Provincia de Chubut: Constitución de 1994 (Art. 61)<sup>389</sup>**

“La libertad de expresión por cualquier medio y sin censura previa e inclusive la de recibir o suministrar informaciones e ideas, constituye un derecho asegurado a todos los habitantes de la Provincia. Este derecho involucra el de obtener los elementos necesarios a su ejercicio y la facultad de responder o rectificar las referencias erróneas susceptibles de afectar la reputación personal, respuesta que deberá publicarse dentro del más breve plazo, gratuitamente, en igual forma y por el mismo medio en que se dieron las aludidas referencias o informaciones. El derecho de respuesta es acordado por vía judicial sumarísima. Queda garantizado el secreto profesional periodístico”.

#### **Provincia de Río Negro. Constitución de 1988<sup>390</sup> (Art. 27)**

“Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez en el trámite”.

#### **Provincia de Formosa: Constitución de 1991<sup>391</sup> (Art. 12)**

“La libertad de expresión comprende también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin y la facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación

---

<sup>389</sup> **El Artículo 15 de la Constitución de Chubut de 1957 consagró el derecho de rectificación en los siguientes términos:** “La libertad de expresión por cualquier medio y sin censura previa, e inclusive la de recibir o suministrar informaciones e ideas, constituye un derecho asegurado a todos los habitantes de la provincia. Este derecho involucra el de obtener los elementos necesarios a su ejercicio y la facultad de responder o rectificar las referencias o informaciones susceptibles de afectar la reputación personal; respuesta que deberá publicarse dentro del más breve plazo, gratuitamente en igual forma y por el mismo medio en que se hizo la referencia o información. El derecho de respuesta será acordado sumariamente por la justicia conforme a la reglamentación legal”. ADLA XVII-B, 1739. Es interesante observar con detenimiento las reformas que ha tenido la norma comparándola con el actual Artículo 61, especialmente en el agregado de informaciones “erróneas” y del establecimiento actual de la vía sumarísima.

<sup>390</sup> Río Negro. Constitución de la Provincia. Boletín Oficial del 13/6/88 (Suplemento).

<sup>391</sup> Constitución de Formosa. Sanción: 3 de abril 1991; Promulgación: 3 de abril de 1991; Publicación: B.O. 3/4/91. La **Constitución de 1958 (Art. 9)** ADLA, XVII-B, 1789 ya preveía el instituto, y con la reforma dicho texto quedó inalterado.



ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación personal, la que deberá publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley especial asegurará la protección debida a toda persona o entidad contra los ataques a su honra, reputación, vida privada y familiar, cuando ésta sea lesionada por cualquiera de los medios de difusión de las ideas del pensamiento, determinado en el art. 10”..

En 1985, Formosa sancionó la ley 516, reglamentaria del derecho que ya preveía la Constitución de 1958 en su artículo 9.

### **Provincia de La Pampa: Constitución de 1994<sup>392</sup>. (Art. 9)**

“Toda persona afectada en su reputación por una publicación, podrá exigir que se publique sin cargo alguno su contestación en la misma. El juez más próximo de cualquier fuero será competente para ordenarlo”.

### **Provincia de Santa Cruz: Constitución de 1957<sup>393</sup>. Reforma de 1994. (Art. 13)**

“Todo habitante tendrá derecho a replicar o rectificar las informaciones o referencias susceptibles de afectarlo personalmente, en forma gratuita y por el mismo medio en que se haya hecho tal referencia o información. Una ley reglamentará el ejercicio de este derecho”.

Esta provincia ha reglamentado su disposición constitucional por vía de la ley 302 sancionada el 30/11/61 y promulgada el 28/12/61.

Prolija en su reglamentación, se otorga para defender la personalidad, honor y buen concepto (art. 1º), se lo reconoce también a favor de las personas jurídicas; se impone su publicación en el término de tres días, pero sólo puede ser ejercido dentro de los 30 días de

---

<sup>392</sup> La Provincia de La Pampa ya contemplaba a la figura en idénticos términos en su Constitución de 1960 (Art. 8, segundo párrafo). ADLA, XXI-B, 1653.

<sup>393</sup> ADLA, XVII-B, 2231. La Constitución reformada en 1994 fue publicada en el Boletín Oficial del 30/9/94.

haber sido publicada la noticia agravante. La respuesta es gratuita y limitada: no puede exceder en más de 10 líneas a la publicación que se pretende rectificar.

**Provincia de Catamarca<sup>394</sup>: Constitución de 1988. (Art. 15)**

“Cualquier persona que se considere afectada por una publicación, podrá recurrir a la justicia ordinaria, para que ella, por medio de un procedimiento sumario, ordene al autor responsable o a la empresa publicitaria la inserción en sus columnas, en el mismo lugar y con la misma extensión, la réplica o rectificación pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que correspondieren”.

En consecuencia de esta previsión constitucional, Catamarca sancionó la ley 4179 del año 1984, reglamentaria del derecho de réplica.

**Provincia de Jujuy: Constitución de 1986<sup>395</sup>. (Art. 23. 4.)**

“Cualquier persona afectada en su intimidad, honra o dignidad por informaciones inexactas o agravantes, emitidas a través de medios de comunicación, tiene derecho a efectuar su rectificación o respuesta gratuitamente, en el mismo lugar y hasta su igual extensión o duración, por el mismo órgano de difusión. El incumplimiento se podrá demandar mediante un recurso de amparo ante cualquier juez letrado de la provincia, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieren corresponder”.

**Provincia de Salta: Constitución de 1986<sup>396</sup> (Art. 23)**

“Todo habitante que por causa de una información inexacta o agravante sufra perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su

---

<sup>394</sup> La Constitución de la Provincia de Catamarca reformada en 1966 incorporó el derecho de rectificación, en su artículo 14. En 1988, la provincia modificó su Constitución “a fin de adecuarla a las necesidades actuales, y especialmente, para incorporar los derechos sociales y económicos no contemplados en ella”, según expresa su Preámbulo. El derecho de respuesta se conserva con idénticos términos y no fue alterado, siendo actualmente el artículo 15 de dicha norma. B.O. 5/IX/1988.

<sup>395</sup> Boletín Oficial del 17/11/86.

<sup>396</sup> Artículo 23 de la Constitución de Salta, párrafos 4º a 6º. Boletín Oficial del 22/4/98 (Separata).

rectificación o respuesta. En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, la que deberá expedirse en trámite sumarísimo. Se excluye de este derecho a los funcionarios por informaciones referidas a su desempeño o función”.

En una línea concordante con la Constitución sanjuanina, exceptúa expresamente del ámbito de aplicación de este derecho a las informaciones referidas al desempeño de los funcionarios.

**Provincia de San Juan. Constitución de 1886<sup>397</sup> (Art. 25)**

“Toda persona que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, gratuitamente y con la misma extensión máxima de la información cuestionada; en caso de negativa, el afectado podrá recurrir a la justicia dentro de los quince días posteriores a la fecha de la publicación o emisión, transcurridos los cuales caducará su derecho. El trámite ante la justicia será el del procedimiento sumarísimo. La crítica política, deportiva, literaria y artística en general no está sujeta al derecho de réplica”.

Sustraer del derecho de respuesta a la crítica política, deportiva, literaria y artística en general, siendo plausible la exclusión, pues la gestión de los funcionarios públicos, puede ser susceptible de comentarios y observaciones sin ningún tipo de limitaciones, salvo la que importen comisión de delitos.

***Provincia de Santiago del Estero. Constitución<sup>398</sup> de 1997 (Art. 20).***

---

<sup>397</sup> Artículo 25 4º párrafo de la Constitución de San Juan. Boletín Oficial del 7/5/86.

<sup>398</sup> La Constitución de Santiago del Estero de 1986 en su Art. 20, consagraba el derecho de rectificación en estos términos:

“Toda persona que fuere afectada en su reputación por una referencia o publicación periodística tendrá derecho, dentro de los quince días de la publicación, a la réplica o aclaración gratuita por el mismo órgano que sirvió de vehículo a dicha referencia o información, en un plazo no mayor de noventa y seis horas y con el mismo espacio y en las demás condiciones y formas que la ley determine. Si el responsable del medio periodístico no admitiera la publicación de la réplica, el reclamante tendrá derecho a la acción de amparo”.

Reforma de 1997. Boletín Oficial del 29/12/97 (Edición Extraordinaria).

“Todo habitante que, por causa de una información inexacta o agravante sufra perjuicio, tiene el derecho a efectuar gratuitamente por el mismo medio de comunicación su rectificación o respuesta.

En caso de negativa el afectado puede recurrir a la instancia judicial, por vía del amparo”.

#### **Provincia de Tierra del Fuego. Constitución de 1991<sup>399</sup> (Art. 47)**

“Toda persona o entidad que se considere afectada por informaciones agraviantes o inexactas, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión de cualquier especie, tiene derecho por el mismo medio a efectuar su rectificación o respuesta, en la forma en que la ley lo determine”.

#### **Provincia de San Luis. Constitución de 1987<sup>400</sup> (Art. 21, 3º párr.)**

“La libertad de expresión comprende también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos necesarios a tal fin, y la facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación ante una referencia o información susceptible de afectar su reputación personal, la que debe publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley especial asegura la protección debida a toda persona o entidad contra los ataques a su honora, reputación, vida privada o familiar, cuando ésta es lesionada por cualquiera de los medios de difusión determinados en este artículo”.

#### ***Negación explícita del derecho de rectificación o respuesta. El extraño caso de la Constitución de la Provincia de Tucumán.***

La Constitución de la Provincia de Tucumán, incluso habiendo tenido una reforma reciente en el año 2006<sup>401</sup>, se constituye en el único caso que expresamente rechaza el derecho de rectificación o respuesta. La mayoría de la doctrina expresa, como ya hemos

---

<sup>399</sup> Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sanción: 17 de mayo de 1991. Promulgación: 17 de mayo 1991. Publicación B.O.: 28/5/91.

<sup>400</sup> Constitución de la Provincia de San Luis. Boletín Oficial del 8/4/1987 (Anexo).

<sup>401</sup> Constitución de la Provincia de Tucumán. República Argentina. Fecha de publicación en Boletín Oficial: 7 de junio de 2006.

apuntado que sería inconstitucional, al no resultar coherente con la Constitución Nacional ni con los Tratados de Derechos Humanos suscriptos por Argentina.

Su artículo 31 establece:

“Todos tienen el derecho de manifestar libremente su propio pensamiento, de palabra, por escrito o mediante cualquier otro medio de difusión. La ley no puede dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad. Tampoco podrá imponer a los medios de publicidad el deber de ser vehículo de ella, ni el de recepción de réplicas de personas que se sientan afectadas.

Durante los juicios a que dé lugar la libertad ya ejercida, no podrá entorpecerse el nuevo ejercicio de las libertades aseguradas por esta Constitución, ni secuestrarse útiles, herramientas, materiales, instrumentos o maquinarias empleables para tal fin.

Se admitirá siempre, en tales juicios la prueba como descargo, cuando se trate de la conducta oficial de los empleados o de la capacidad política de los funcionarios”. (El resaltado del primer párrafo de este artículo nos pertenece).

Se ha criticado fuertemente esta cláusula de la Constitución tucumana, y se ha advertido desde siempre la necesidad de modificación y/o anulación de la misma. Así, ya en 2001, el Dr. Oscar Flores, advertía sobre su contenido, luego de analizar la recepción del derecho en el Pacto de San José de Costa Rica y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Por lo tanto, esa norma hoy es inconstitucional, y si cualquiera de ustedes solicita derecho a réplica, ningún juez de Tucumán puede ampararse en el artículo 29<sup>402</sup> de la Constitución local para negárselos. Y aún si lo hubiere, ustedes tendrán una buena razón para llegar hasta la Corte Federal, para que sus derechos sean oídos. Por lo tanto, en el caso de que haya una reforma constitucional, esta cláusula tiene que ser necesariamente eliminada, a los efectos de poner en coordinación a la Constitución de

---

<sup>402</sup> Antes de la reforma de 2006, el Artículo 29 correspondía al texto del hoy 31 de la Constitución Tucumana ya transcripto.

Tucumán con el orden jurídico federal”<sup>403</sup>. Sin embargo, la oportunidad histórica llegó en 2006 y lamentablemente no sucedió el cambio esperado.

### **VII.3. Las Constituciones provinciales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina**

Los textos constitucionales y la legislación provincial son tenidos en cuenta como fundamentos en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, nuevamente cabe considerar el caso que implicó el cambio de criterio del máximo tribunal constitucional argentino: “Ekmekdjian c. Sofovich” (CS, julio 7-992), en cuya sentencia, expresión de la mayoría de la Corte, en el Considerando 14 del Fallo se alude y enumera a las constituciones provinciales –con el correspondiente detalle de artículos- que han incorporado el derecho de rectificación o respuesta.

Particularmente, y con un tratamiento más profundo, la disidencia de los Dres. Petracchi y Moliné O’Connor, aborda específicamente el tratamiento del derecho en el ámbito provincial con la finalidad de demostrar el requisito de la alusión personal que produzca perjuicio, para que el mencionado acredite legitimación activa para el ejercicio de su acción:

“Considerando 23) Que las normas que en varias provincias regulan el tema –sin que esto importe abrir juicio sobre la competencia con que han sido dictadas- traslucen un enfoque que no difiere sustancialmente del que resulta de compulsar la legislación extranjera. Así por ejemplo, otorgan la acción cuando una persona fuere afectada en su reputación, las Constituciones de 1986 de Santiago del Estero (art. 20), de 1957 de Neuquén (art. 22), de 1960 de La Pampa (art. 8), de 1991 de Formosa (art. 12), de 1957 de Chubut (art. 15), y de 1987 de San Luis (art. 21). La Constitución de 1986 de Jujuy la

---

<sup>403</sup> Flores, Oscar. Ponencia publicada en “Estudios sobre la reforma de la Constitución de Tucumán”. Centro de Investigación en Derecho Constitucional y Ciencia Política “Benjamín Gorostiaga”. Instituto de Derecho Público. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Tucumán. Diciembre de 2001. Disponible en formato digital:

<http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/libros/EstudiosReformaConstitucionTucuman.pdf>

Última fecha de consulta: 12 de febrero de 2015.

consagra cuando exista afección en la intimidad, honra y dignidad, por informaciones “inexactas o agraviantes” (art. 23, apart. 4). Este tipo de informaciones da lugar a la rectificación o respuesta cuando cause perjuicio al afectado, según las constituciones de 1986 de Salta (art. 23), del mismo año de San Juan (art. 25) y de 1991 de la nueva provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (art. 47). En parecidos términos se pronuncia la Constitución de 1988 de Río Negro (art. 27).

La ley 302 de Santa Cruz (año 1961) menciona a la persona “señalada o notoriamente aludida con un hecho difamatorio, injurioso u ofensivo” (Art. 1º).

24) Que lo reseñado resulta suficiente para concluir que también en el derecho comparado y en las legislaciones provinciales examinadas, por regla se exige –como requisito mínimo– que estas contengan la alusión o mención a una persona que, justamente por ello, es facultada a “responder” o “rectificar”.

#### **VII.4. Sistema interamericano de derechos humanos y derecho de rectificación o respuesta. Carácter vinculante de sus pronunciamientos.**

##### **VII.4.1. Reconocimiento del derecho de rectificación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>62</sup>.**

Aunque ya lo hemos mencionado, es pertinente aquí repetirlo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada “Pacto de San José de Costa Rica” reconoce el derecho de rectificación o respuesta en el artículo 14:

---

<sup>1</sup> Para la elaboración del presente apartado se ha tenido en cuenta la siguiente bibliografía:

1. Texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. “Tratados y Documentos Internacionales”. Recopilación y notas de José I. García Ghirelli. Ed. Zavallía. Buenos Aires, 1988.
2. “La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica”. García Belaunde, D.-Fernández Segado, F. (Coordinadores). Edit. Dykinson, Madrid. Edit. Jurídica Venezolana, Edic. Jurídicas Lima, Edit. Jurídica E.Esteva, Uruguay. Madrid, 1997.- Esta obra aborda el examen de las distintas Constituciones en el ámbito latinoamericano como así también el sistema de protección de derechos humanos en el marco del Pacto de San José de Costa Rica.
3. Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones Consultivas.
4. “Derecho Comparado de la Información”, Villanueva, Ernesto. Edic. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. México, 1998.

*“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley<sup>404405</sup>.*

*2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.*

*3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.*

Es de destacar que la Convención se erige en el único instrumento internacional que reconoce expresa y específicamente, en un artículo propio, al derecho de rectificación o respuesta.

Los Estados que han ratificado el Pacto, se comprometen a desarrollar una legislación interna que garantice tal derecho, pero aún muchos países no lo han hecho. Tal omisión generó en su momento la elevación de una Opinión Consultiva por parte del gobierno de Costa Rica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que seguidamente analizaremos.

En el caso de Argentina, que tampoco cuenta hasta el momento con una ley sobre derecho de respuesta a nivel nacional, se está dando una elaboración pretoriana del instituto, no exenta de discusiones contradictorias. Esta cuestión es motivo de un estudio particular al abordar la jurisprudencia argentina que se ha pronunciado sobre el tema, pero cabe tener en cuenta la influencia, el fundamento y el análisis que de la Opinión Consultiva sobre “Exigibilidad del Derecho de Respuesta” tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

---

<sup>2</sup> Cabe tener en cuenta que el texto inglés del artículo 14 dice " inaccurate or offensive statements or ideas ". La palabra " ideas " no aparece en los textos español, portugués ni francés de esta disposición, los cuales se refieren a " informaciones inexactas o agraviantes ", " informações inexatas ou ofensivas " y a " données inexactes ou des imputations diffamatoires ".



La carencia de una norma infraconstitucional, de rango de ley, como “asignatura pendiente” del legislador sigue provocando un sinnúmero de controversias que se evidencian en forma más palmaria ante los tribunales.

En este marco, y antes de adentrarnos al análisis del pronunciamiento sobre el tema del máximo tribunal de derechos humanos regional, resulta útil mencionar aquellas Constituciones americanas que reconocen expresamente el derecho de rectificación, con la finalidad de tener en cuenta el panorama del instituto en el ámbito latinoamericano. Es menester tener en cuenta que en los últimos años ha incorporado el derecho de rectificación en sus textos constitucionales diversos países, tales como Bolivia, México, Venezuela que se han sumado al concierto de naciones que expresamente establecen la figura, a tono con la manda de la Convención Americana de Derechos Humanos. Repasemos pues, los diversos textos constitucionales en cuanto se refieren al derecho a rectificación o a réplica según variaciones que a continuación se detallan:

### **Bolivia**

En el Capítulo Séptimo, bajo el Título “Comunicación Social”, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia<sup>406</sup> (2008), consagra el derecho a la comunicación y el derecho a rectificación y a réplica en estos términos:

*“Artículo 106. I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.*

*II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.*

### **Brasil:**

---

<sup>406</sup> Texto disponible en:

<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf> - Última consulta 12 de febrero de 2015.

Artículo 5.V.- Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen<sup>63</sup>.

## Colombia

Artículo 20. (b) Estos (los medios masivos de comunicación) son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura<sup>64</sup>.

## Chile

Artículo 19: Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida<sup>407</sup>.

## Ecuador

La Constitución del Ecuador tuvo una importante reforma en el año 2008<sup>408</sup>. Anteriormente, de todas maneras, también consagraba el derecho de rectificación o respuesta<sup>409</sup>. El artículo 66, numeral 7 de la Constitución del Ecuador establece:

*Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas:*

---

<sup>3</sup> Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Notas remissivas e índices por Juarez de Oliveira. Editora Saravia. Rio de Janeiro. 1998.

“V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”

<sup>4</sup> Constitución Política de Colombia. 1991, con reforma de 1997. Página web en Internet: Base de Datos Políticos de las Américas. Political Database of the Americas.

<sup>5</sup> Constitución de Chile de 1980, texto actualizado a octubre de 2010. [http://www.oas.org/dil/esp/constitucion\\_chile.pdf](http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf)

<sup>408</sup> Texto oficial de la Constitución del Ecuador. Última consulta: 12 de febrero de 2015. [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)

<sup>409</sup> “Artículo 19: Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la persona, el Estado garantiza:

4. (b) Toda persona que fuere afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que éstos hagan la rectificación correspondiente en forma gratuita”. Salgado Pesantes, Hernán. “La Jurisdicción Constitucional en el Ecuador”, en “La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica”, Edit. Dykinson, Madrid, 1997.

*7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.*

## **El Salvador**

Artículo 6: Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona<sup>410</sup>.

## **México**

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es la más reciente en cuanto a importantes modificaciones, ya que su reforma data del 25 de junio de 2014<sup>411</sup>. Este texto consagra expresamente el derecho a réplica (lo denomina de esta forma, tal como veremos a continuación), teniendo dos menciones: una al consagrarlo, y otra, ordenando al Congreso de la Unión reglamentar el derecho a réplica.

Así, en el artículo 6° se establece: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado<sup>412</sup>”.

Luego, en la Cláusula Tercera, transitoria, encomienda al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme a la nueva Constitución, y en el Punto IV, ordena “Regular el derecho de réplica”.

---

<sup>410</sup> Constitución de El Salvador, 1983, reformada el 31 de octubre de 1991 y 30 de enero de 1992. Texto oficial disponible en:

[http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-legislativa/constitucion/Constitucion\\_Actualizada\\_Republica\\_El\\_Salvador.pdf](http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-legislativa/constitucion/Constitucion_Actualizada_Republica_El_Salvador.pdf) - Última consulta 11 de febrero de 2015.

<sup>411</sup> Constitución de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-07-2014. Texto oficial disponible en:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm> - Web oficial de la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Última consulta 9 de febrero de 2015.

<sup>412</sup> Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013.

## Nicaragua

Artículo 68: “Los nicaragüenses tienen derecho de acceso a los medios de comunicación social y al ejercicio de la aclaración cuando sean afectados en sus derechos y garantías<sup>413</sup>”.

## Paraguay

Artículo 28: “Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios<sup>414</sup>”.

## Perú

Artículo 2. “Toda persona tiene derecho a: 7) Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agravada en su honor por publicaciones en cualquier medio de comunicación social, tiene derecho de rectificación en forma gratuita, sin perjuicio de las responsabilidades de la ley<sup>415</sup>”.

## Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela<sup>416</sup> (1999) consagra el derecho de réplica y rectificación en su artículo 58 en los siguientes términos:

*“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y*

---

<sup>413</sup> Constitución de Nicaragua, adoptada el 9 de enero de 1987. Actualizada a agosto de 2003. Disponible en: <http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2134/Constitucion.pdf> - Última fecha de consulta 14 de febrero de 2015.

<sup>414</sup> Constitución de Paraguay, adoptada el 20 de junio de 1992. Texto disponible en [http://www.oas.org/juridico/spanish/par\\_res3.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm) - Última consulta 10 de febrero de 2015.

<sup>415</sup> Constitución adoptada el 29 de diciembre de 1993. Texto oficial disponible en: <http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>

<sup>416</sup> Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860. Disponible en: [http://www.inpsasel.gob.ve/moo\\_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf](http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf) - Última consulta: 12 de febrero de 2015.

*rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”*

Como ya hemos adelantado, la exigibilidad del derecho de rectificación fue motivo de opinión consultiva por parte del gobierno de Costa Rica quien le solicitó a la Corte Interamericana que se expidiera sobre el mismo conforme se analizará seguidamente. En este sentido, la respuesta del órgano jurisdiccional del sistema se constituye en referencia y guía para los demás países que han ratificado el Pacto y que aún no han desarrollado una ley que regule el derecho de rectificación. Este punto debe ser tenido especialmente en cuenta en el abordaje de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina en la interpretación de este derecho.

#### **VII.4.1.1. La exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta para la Corte Interamericana de Derechos Humanos**

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH) emitió en agosto de 1986<sup>417</sup>, una opinión consultiva, solicitada por el Gobierno de Costa Rica en su carácter de Estado Parte en la Convención y miembro de la OEA, sobre la exigibilidad del derecho de rectificación en su país. Cabe en primer lugar tener en cuenta que el Art. 64 de la Convención Americana es la norma que regula la función consultiva de la Corte, reconociendo a los Estados miembros de la OEA la facultad de solicitar la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos; también podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos de la OEA enumerados en el Capítulo X de la carta constitutiva. En el segundo apartado de la disposición mencionada, se reconoce a los Estados miembros la atribución para solicitar a la Corte opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales<sup>418</sup>.

---

<sup>417</sup> Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986, Corte I.D.H. (Ser. A) No. 7 (1986).

<sup>418</sup> “La competencia contenciosa difiere de la competencia consultiva, a criterio de la Corte, ya que en el procedimiento consultivo no existen partes involucradas ni un litigio para resolver. El único propósito de la función consultiva es “la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”. El hecho de que la competencia consultiva de la Corte pueda ser promovida por todos los Estados Miembros de la OEA y órganos principales de ésta, establece otra distinción que debe ser subrayada.

De esta manera, en materia de derecho de rectificación, el Estado de Costa Rica fundó su consulta en el artículo 64 de la Convención, que permite que cualquier Estado Miembro de la OEA pueda solicitar "la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos". La petición de Costa Rica versa sobre la interpretación del artículo 14.1 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y, por ende, se enmarca debidamente en lo establecido por el artículo 64.

Concretamente, estas fueron las preguntas que el Estado costarricense hizo a los miembros de la Corte:

1. *"¿Debe considerarse que el derecho consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ya garantizado en su libre y pleno ejercicio a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado costarricense, según se desprende de las obligaciones que para nuestro país contiene el artículo 1 de dicha Convención?"*
2. *"De no ser así, ¿tiene el Estado costarricense el deber jurídico - internacional de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otro carácter, que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención, según las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?"*
3. *"Si se decidiese que el Estado costarricense está en el deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivo el derecho de rectificación o respuesta previsto en el artículo 14 de la Convención Americana, sería dable entonces entender que la expresión "ley" que figura al final del párrafo primero del mencionado artículo 14 está usada en sentido amplio o lato, lo que podría comprender entonces disposiciones de carácter reglamentario emitidas por decreto*

---

La competencia consultiva es multilateral y no litigiosa; si bien no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene, sin embargo, efectos jurídicos innegables", refiere Albanese, Susana, "Las opiniones consultivas en la estructura del control de convencionalidad", en "Derechos Humanos. Reflexiones desde el Sur. Infojus. Buenos Aires, 2012. pág. 23.

*ejecutivo, teniendo en cuenta la índole más bien instrumental de tales disposiciones legales? "*

Al entender la CorteIDH que las tres preguntas formuladas por Costa Rica eran admisibles, el organismo procedió al tratamiento del fondo del asunto.

En primer lugar, y teniendo en cuenta la primera pregunta, es necesario considerar el artículo 1.1 en cuanto establece:

*"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."*

Es criterio de la CorteIDH que estas normas deben ser interpretadas utilizando "los criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena, que pueden considerarse reglas de derecho internacional general sobre el tema"<sup>419</sup>.

Esos criterios interpretativos son los consagrados en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en cuyo artículo 31.1 se lee: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin".

De acuerdo con el artículo 32 de la misma Convención de Viena, solamente cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: "a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable", puede acudirse a otros medios de interpretación.

---

<sup>419</sup>Restricciones a la pena de muerte ( arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48 )."



En el caso presente, sostiene la Corte, la expresión " toda persona... tiene derecho ", que utiliza el artículo 14.1, debe interpretarse de buena fe en su sentido corriente. La Convención consagra "un derecho" de rectificación o respuesta, lo que explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean tan terminantes respecto de "las responsabilidades legales" de quienes den tales informaciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda por ellas. Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

La tesis de que la frase "en las condiciones que establezca la ley" utilizada en el artículo 14.1 solamente facultaría a los Estados Partes a crear por ley el derecho de rectificación o respuesta, sin obligarlos a garantizarlo mientras su ordenamiento jurídico interno no lo regule, no se compadece ni con el "sentido corriente" de los términos empleados ni con el "contexto" de la Convención. En efecto, la rectificación o respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general, se corresponde con el artículo 13.2.a sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al "respeto a los derechos o a la reputación de los demás" (ver La colegiación obligatoria de periodistas, supra 18, párrs. 59 y 63 ); con el artículo 11.1 y 11.3 según el cual "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques", y con el artículo 32.2 de acuerdo con el cual "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática."

Para la CorteIDH, el derecho de rectificación o respuesta es un derecho al cual son aplicables las obligaciones de los Estados Partes consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. "Y no podría ser de otra manera, ya que el sistema mismo de la Convención, está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo".

La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La

necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nulatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1.

Habiendo llegado a la conclusión de que la Convención establece un derecho de rectificación o respuesta, la Corte desarrolla las consecuencias del criterio afirmado, en estos términos:

“El artículo 14.1 no indica si los afectados tienen derecho a responder en espacio igual o mayor, cuándo debe publicarse la respuesta una vez recibida, en qué lapso puede ejercerse el derecho, qué terminología es admisible, etc. De acuerdo con el artículo 14.1, estas condiciones serán las "que establezca la ley", frase que implica un lenguaje que, a diferencia del utilizado en otros artículos de la Convención ("estará protegido por la ley", "conforme a la ley", "expresamente fijadas por ley", etc.), requiere el establecimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por medio de la "ley", cuyo contenido podrá variar de un Estado a otro, dentro de ciertos límites razonables y en el marco de los conceptos afirmados por la Corte.

...

El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no impide la exigibilidad conforme al derecho internacional de las obligaciones que aquéllos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...". En consecuencia, si por cualquier circunstancia, el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos. Esta conclusión se refuerza con lo prescrito por el artículo 2 de la Convención.

Este artículo, que es el implicado en la segunda pregunta, recoge una regla básica del derecho internacional, según la cual todo Estado Parte en un tratado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones conforme al tratado, sean dichas medidas legislativas o de otra índole. En el contexto de la Convención esta conclusión concuerda con el artículo 43: "Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención".

La Corte consideró la tercera pregunta contenida en la solicitud de Costa Rica. En ella se pide su opinión sobre el sentido de la expresión "ley" tal como se utiliza en el artículo 14.1., y citando sus propios antecedentes sostuvo que: "siempre que un convenio internacional se refiera a "leyes internas" sin calificar en forma alguna esa expresión o sin que de su contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales.

*"La Corte ha resuelto ya que el artículo 14.1 establece el derecho de rectificación o respuesta y que la frase "en las condiciones que establezca la ley" se refiere a diversas condiciones relacionadas con el ejercicio de ese derecho. Por consiguiente, esa frase atañe a la efectividad de ese derecho en el orden interno, mas no a su creación, existencia o exigibilidad internacional. Siendo éste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del artículo 2, puesto que tratan sobre el deber de los Estados Partes de "adoptar... las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades ". Si se leen conjuntamente los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención, todo Estado Parte que no haya ya garantizado el libre y pleno ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, está en la obligación de lograr ese resultado, sea por medio de legislación o cualesquiera otras medidas que fueren necesarias según su ordenamiento jurídico interno para cumplir ese fin. Este criterio justifica la conclusión de que el concepto de "ley", tal como lo utiliza el artículo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a regular el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. Pero si se tratara de restringir el derecho de rectificación o respuesta u otro cualquiera, sería siempre*

*necesaria la existencia de una ley formal, que cumpliera con todos los extremos señalados en el artículo 30 de la Convención”.*

Al regular tales condiciones, los Estados Partes están obligados a asegurar el goce de las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, incluidos los derechos a la protección judicial y a los recursos legales (arts. 8 y 25 de la Convención).

Por unanimidad, la Corte opinó:

A. Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

B. Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias

Con el voto disidente del Dr. Piza Escalante, la mayoría de la Corte entendió:

C. Que la palabra "ley", tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe adoptar el Estado Parte comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según el sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal.

En opinión separada, el Dr. Héctor Gros Espiell, expresó su postura en forma detallada: “El derecho de rectificación o respuesta está reconocido a toda "persona" – concepto determinado en el artículo 1.2 de la Convención- "afectada por informaciones

inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio". En cuanto es un derecho cuyo ejercicio supone una ineludible relación con el derecho, que poseen también todas las personas, "de buscar, recibir y difundir informaciones" (art. 13.1) –derecho que puede dar lugar a responsabilidades fijadas por la ley, necesarias para asegurar "el respeto a los derechos o a la reputación de los demás" (art. 13.2.a), y se debe tener en cuenta el derecho de toda persona al respeto de su honra (art. 11)-- la determinación del carácter inexacto o agravante de las "informaciones", deberá ser, si hay una diferencia al respecto, la consecuencia de un procedimiento judicial que asegure la existencia de estos extremos. Si "los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás" (art. 32.2), debe garantizarse el justo equilibrio y la armonización concreta, en cada caso, entre la libertad de información, el derecho de rectificación o respuesta y el derecho a la protección de la honra, por medio de un procedimiento judicial que asegure la garantía de todos los derechos en juego y que determine el carácter inexacto o agravante de la información, en el caso en que haya un conflicto o diferencia resultante del intento de hacer valer, en un caso o situación concreta, el derecho de rectificación o respuesta. Esto es fundamental, ya que sin un procedimiento judicial capaz de determinar, con plenas garantías, la existencia o no de los extremos exigibles para que el derecho de rectificación o respuesta se reconozca en un caso concreto, si hubiera un conflicto o diferencia sobre su ejercicio, se estaría violando el artículo 8 de la Convención, que reconoce el derecho a ser oído "con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Un derecho de rectificación o respuesta para cuya efectividad práctica sólo hubiera que recurrir a un procedimiento automático, sin control judicial de la verificación de los extremos indicados y sin las garantías del debido proceso, en caso de contestación, podría constituir, no una expresión de protección del derecho a la honra y a la dignidad (art. 11) y un elemento integrante de la libertad de información (art. 13), sino, por el contrario, un atentado a la libertad de pensamiento y de expresión (art. 13.1).

La información inexacta o agravante debe haberse emitido en perjuicio de la persona "a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al

público en general". La expresión "medios de difusión legalmente reglamentados", aparece en lo que es hoy el párrafo 1 del artículo 14 de la Convención, en la última etapa de redacción de texto, en la Conferencia Especializada de 1969, como propuesta del Grupo de Trabajo que redactó la versión final de este artículo, sin que se señalara la razón o el sentido de la incorporación de dicha expresión (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OEA/Ser.K/XVI/1.2, Washington, D.C.1973, repr. 1978, págs. 280 a 282 ).

Atendiendo primeramente al texto, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 31), debe concluirse que con esa expresión se individualiza a todos los medios de difusión que, de una u otra forma, están regulados, por medio de la ley, en el derecho interno de los Estados Partes. No se refiere a una forma específica o concreta de reglamentación, ni puede interpretarse en el sentido de que incluye sólo a los medios de difusión para el funcionamiento de los que la ley exige una autorización, concesión o habilitación previa. La Convención no hace esta distinción, y, por ende, no hay fundamento alguno para que el intérprete la realice. Pero, además, si se hiciera una distinción entre uno u otro medio de difusión, incluyendo por ejemplo a la radio y a la televisión y excluyendo a la prensa escrita, se estaría efectuando una discriminación, por ende prohibida, y se violaría el principio de no discriminación y el derecho a la igualdad, garantizados por la Convención (arts. 1.1 y 24).

Con acierto también, y en esta misma línea de entendimiento podemos decir que una interpretación plausible de medios legalmente reglamentados, es entenderlos como medios que tienen una estructura organizativa, con profesionales de la información y que actúan de forma habitual y regular en el tiempo.

El derecho de rectificación o respuesta sólo se comprende y se explica en función de la libertad de pensamiento, expresión e información. Estos derechos forman un complejo unitario e independiente. Como dijo la Corte:

"El artículo 13 señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no

sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a " recibir " informaciones e ideas... (La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 30)."

En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta garantiza al afectado por una información inexacta o agravante la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, la rectificación o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe con otra anterior, inexacta o agravante.

El derecho de rectificación o respuesta permite, de ese modo, el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad democrática. Este extremo es fundamental para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 29.c), cuyo propósito es consolidar en el continente las instituciones democráticas (Preámbulo, párr. 1). Y la democracia, a la que la Convención se refiere, es la democracia pluralista y representativa, que supone "un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".

La libertad de pensamiento y de expresión (art. 13) constituye uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete. Como ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, es ello una exigencia del "pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática" (Eur. Court H. R., Lingens case, judgment of 8 July 1986, Series A no. 103,

párr. 41). Pero esta libertad debe estar equilibrada, dentro de los límites posibles en una sociedad democrática, con el respeto de la reputación y de los derechos de los demás (art. 13). Este equilibrio tiene como uno de sus medios de realización el reconocimiento, en la Convención, del derecho de rectificación o respuesta (art. 14), que juega en el caso de "informaciones inexactas o agraviantes".

La existencia de un derecho de rectificación o respuesta es una vía para hacer jugar la responsabilidad prevista por el artículo 13.2, en los casos en que las libertades de pensamiento, de expresión o de información sean utilizadas de forma que ofenda el respeto "a los derechos o a la reputación de los demás".

El artículo 2 de la Convención dispone: "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades".

Es evidente que esta norma impone el deber a los Estados Partes de adoptar las medidas requeridas para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convención. El ser de estos derechos no está condicionado a la existencia de normas pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se hallan obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter, si no existieran ya, para hacer " efectivos " tales derechos y libertades. Se trata de una obligación adicional, que se suma a la impuesta por el artículo 1 de la Convención dirigida a hacer más determinante y cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convención reconoce. Por eso es que la obligación que resulta del artículo 2, complementa, pero de ninguna manera sustituye o suple, a la obligación general y no condicionada que resulta del artículo 1. Como se dijo cuando se propuso la inclusión del actual artículo 2 en el Proyecto de Convención, en las observaciones del Gobierno de Chile al Proyecto de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos:



"La argumentación de que la inclusión de esta cláusula en la Convención Interamericana podría justificar la alegación de un Estado en el sentido de no estar obligado a respetar uno o más derechos no contemplados en su legislación interna, no se sostiene dentro de los términos del proyecto; y menos aún si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia (Actas y Documentos, supra 4, pág. 38)".

El artículo 2 de la Convención, aparece en el proceso de elaboración de este instrumento en su última etapa, ya que no se halla en los proyectos iniciales ni en el elaborado finalmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello fue la consecuencia de que originalmente se pensó, con razón, que un compromiso del tipo del referido en el actual artículo 2 existe naturalmente por aplicación del Derecho Internacional, como consecuencia lógica de las obligaciones que derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando se propuso su inclusión, se aclaró que su único sentido era clarificar y precisar, haciendo más determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal obligación, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber esencial que resulta del artículo 1. Sin esta interpretación lógica de por qué se incluyó este artículo 2 en la Convención, ello carecería de sentido. Es más, conduciría al resultado irracional y absurdo de que el artículo 1 sería inaplicable si no se dictaran las medidas a que se refiere el artículo 2. Y esta conclusión es inadmisibles, porque paralizaría todo el sistema aceptable de aplicación de la Convención y quitaría prácticamente efecto, con respecto a las personas humanas protegidas, a la obligación esencial que resulta para los Estados Partes del artículo 1 de la Convención. Al respecto no puede olvidarse que la fuente del artículo 2 de la Convención Americana es el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que tanto por su ubicación como por su letra, constituye, evidentemente, un complemento de la obligación esencial impuesta por el párrafo 1 de dicho artículo 2. En cambio, la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales no contiene una disposición análoga al artículo 2 de la Convención Americana o al párrafo 2 del artículo 2 del Pacto Internacional. En su artículo 1, los Estados Partes se limitan a reconocer a toda persona sometida a la jurisdicción de esos Estados los

derechos y libertades definidas en su Título I. Pero este reconocimiento implica el deber de los Estados Partes de respetar y garantizar dichos derechos y de ser necesario, también, de adoptar las medidas requeridas en el derecho interno para el mejor y más adecuado cumplimiento de las obligaciones que son la consecuencia del reconocimiento de esos derechos y libertades.

El Dr. Héctor Gros Espiell, finaliza estimando que es a la luz de los razonamientos que preceden que la opinión emitida por la Corte, en cuanto a las preguntas formuladas por el Gobierno de Costa Rica, adquiere su verdadero significado y que el derecho de rectificación o respuesta se precisa y comprende de manera adecuada, en el marco de su relación con los demás derechos reconocidos por la Convención, teniendo en cuenta las obligaciones que los Estados Partes han adquirido a su respecto, como consecuencia de lo dispuesto en sus artículos 1.1 y 2.

Por su parte, los jueces Rafael Nieto Navia y Pedro Nikken, coincidieron en una opinión disidente conjunta<sup>420</sup>, con la cual concurrió el juez Thombas Buergenthal, no compartiendo el criterio mayoritario de la Corte sobre la cuestión de la admisibilidad de la opinión consultiva, pero de todos modos aclarando que no hay duda sobre la naturaleza de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados Parte según el artículo 14 de la Convención, así como tampoco acerca de que, en el caso en el derecho de rectificación o respuesta no fuera ejercitable por “toda persona” en la jurisdicción de Costa Rica, ello constituiría una violación de la Convención susceptible de ser reclamada internacionalmente.

---

<sup>420</sup> Más allá de la discrepancia sobre la admisibilidad de la opinión consultiva, estos dos jueces consideraron “ineludible votar favorablemente las conclusiones del fallo por las siguientes razones: A. El artículo 15.1 del Reglamento de la Corte dispone expresamente que el voto de cada juez será “afirmativo o negativo, sin abstenciones”. Esa circunstancia descarta enteramente la posibilidad de una abstención sobre el fondo. B. Como se ha expresado antes, no albergamos ninguna duda respecto de la exigibilidad internacional de las obligaciones contraídas por el artículo 14, tal como lo analiza la Corte en sus consideraciones de fondo, con las cuales estamos de acuerdo. C. Aun cuando hemos discrepado, por las razones antes mencionadas, sobre el ejercicio que la Corte ha hecho de sus facultades para la reformulación de las consultas que le sean sometidas, reconocemos que en el presente caso dicha reformulación no condujo a que la Corte entrara a considerar materias, como la interpretación del derecho interno, que están fuera de su competencia y que se limitara al análisis de la Convención, para lo cual sí está plenamente facultada”.

En lo básico, los citados jueces disienten pues consideran que las preguntas formulada por el gobierno de Costa Rica, no se referían a la interpretación de la Convención, sino a la interpretación del derecho interno costarricense, y en particular de su Constitución y del poder que ésta o la aprobación de la Asamblea Legislativa tengan para dotar de efectividad los tratados de que sea parte tal Estado, así como de la competencia de sus tribunales para aplicarlos. Como “esa función corresponde a los órganos internos costarricenses, está fuera del ámbito de jurisdicción de la Corte”.

Finalmente, el Juez Rodolfo E. Piza Escalante, se expidió en una opinión separada en la que en principio aclara haber concurrido en la votación mayoritaria de la Corte sobre la solicitud del Gobierno de Costa Rica, así como sobre la respuesta de las preguntas primera y segunda, no sobre la de la tercera”. Declara opinión separada sobre la totalidad de la consulta, por las siguientes razones:

“a ) Porque disiento de la forma en que la mayoría de la Corte ha precisado el sentido mismo de las preguntas planteadas, para efectos, tanto de admisibilidad, cuanto de su respuesta, considerándolas tan sólo como las de una consulta general sobre la interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de la Convención, en los términos del artículo 64.1 de la misma, sin referencia al derecho interno de Costa Rica o de los Estados Partes en general; precisión que, a mi juicio, soslaya la dimensión específica que también debió dárseles, de conformidad con su contexto y con la intención manifiesta del Gobierno al plantearlas, que son principalmente los de una consulta particular, en el ámbito del artículo 64.2;

b ) Porque juzgo que la solicitud, así entendida, era admisible en cualquiera de ambos sentidos, ya que en ambos se dirigía a obtener una interpretación de la Convención, en el primero en sí misma, y en el segundo en función de la compatibilidad del derecho costarricense con sus disposiciones, en el ámbito específico de la jurisdicción consultiva de la Corte. Si bien acepto que en este último sentido no podía contestarse pormenorizadamente, pero no porque fuera inadmisibile, sino porque no se ofrecieron con

ella elementos suficientes de juicio como para permitirle al Tribunal analizar cabalmente la situación del derecho de rectificación o respuesta en el orden interno de Costa Rica;

c ) Porque siento que las respuestas dadas a las preguntas primera y segunda, aunque correctas, están expresadas de manera tan general que equivalen a una simple reproducción casi textual de las normas de la Convención cuestionadas y no alcanza a responder cabalmente la consulta concreta, aunque confusa, del Gobierno de Costa Rica, aun entendiéndola solamente en su dimensión general, en el ámbito del artículo 64.1 de la misma;

d ) Porque tampoco comparto las tesis implícitas de la mayoría, de que sea materia reservada a la jurisdicción de los Estados Partes, indiferente para el derecho internacional, la manera concreta como den o hayan de dar eficacia a los derechos consagrados en la Convención o, particularmente, la cuestión de si el cumplimiento del derecho de rectificación o respuesta corresponda a su deber contraído de respetarlos y garantizar su ejercicio, de conformidad con el artículo 1.1 de aquélla, o bien al de desarrollarlos para hacerlos plenamente eficaces en el orden interno, de conformidad con su artículo 2, como especie de caras de una misma obligación internacional;

e ) Finalmente, porque disiento de la respuesta a la pregunta tercera, en cuanto supone que la regulación del derecho de rectificación o respuesta, en los términos del artículo 14.1 de la Convención, pueda hacerse mediante medidas diversas de la ley formal”.

Luego de un extenso análisis sobre la redacción y alcance de las preguntas formuladas por el gobierno de Costa Rica, considera que “en cuanto consulta particular en el ámbito del artículo 64.2 de la Convención, aunque es admisible y debió ser admitida, no se puede contestar”. Y expresa su postura acerca de cómo debería ser contestada la consulta:

“a ) Debió ser considerada por la Corte, tanto como consulta general, en el ámbito del artículo 64.1, cuanto como consulta particular, en el del artículo 64.2 de la Convención.

b ) Era admisible y debió ser admitida en ambos sentidos, en la medida en que planteaba la interpretación del artículo 14.1, en relación con los 1.1 y 2 de la Convención, y la compatibilidad del ordenamiento jurídico costarricense con esas normas internacionales.

c ) En cuanto al fondo, debió ser contestada como sigue:

#### I- COMO CONSULTA GENERAL:

Primero:

Que el artículo 14.1 de la Convención consagra un derecho de rectificación o respuesta exigible per se, como derecho de la propia Convención, cualesquiera que sean su valor y eficacia, o los de la Convención en general, en el orden interno de cada Estado, e independientemente de si éste haya establecido o no las condiciones de su ejercicio previstas por la misma disposición.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, todo Estado Parte está obligado, inmediata e incondicionalmente:

1. A garantizar el derecho de rectificación o respuesta a toda persona sometida a su jurisdicción, en los términos del artículo 14.1, frente a los medios de comunicación colectiva que el mismo se refiere, públicos o privados, así como a respetarlo directamente en los primeros, aunque no haya establecido en su orden interno las condiciones de su ejercicio previstas por la misma disposición,

2. A garantizarlo, en todo caso, de acuerdo con criterios de razonabilidad, habida cuenta de su naturaleza, objeto y fin y de la necesidad de equilibrar su ejercicio legítimo con el de los derechos fundamentales de los demás, particularmente el de libre expresión de los medios;

3. A otorgar a toda persona que se considere agraviada, en los términos del artículo 14.1, el acceso a un recurso jurisdiccional expedito y eficaz, que resuelva perentoriamente cualquier conflicto sobre la existencia del agravio y, en caso afirmativo, garantice la publicación oportuna de la rectificación o respuesta.

Segundo:

Que, complementariamente y sin perjuicio del deber inmediato e incondicional de respetar y garantizar el derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes están obligados, en virtud del artículo 2 de la Convención y del principio en general de seguridad jurídica, a establecer en su orden interno las condiciones de su ejercicio previstas por el artículo 14.1, habida cuenta de las peculiaridades del propio derecho y respetando su contenido esencial y los demás derechos reconocidos por el derecho internacional.

Tercero:

Que, en virtud del principio de que el régimen de los derechos fundamentales es materia de reserva de ley, y de que en la regulación del derecho de rectificación o respuesta están involucrados los intereses legítimos, tanto de los agraviados, como de los medios de comunicación colectiva, normalmente privados, el establecimiento de las condiciones de ejercicio de ese derecho debe hacerse en primer lugar mediante ley formal, en los términos definidos por la Corte en su Opinión Consultiva La expresión " leyes " ( supra 41 ).

## II- COMO CONSULTA PARTICULAR

Primero:

Que la República de Costa Rica, al incorporar a su ordenamiento interno los tratados internacionales aprobados por su Asamblea Legislativa, inclusive con rango superior a la ley ordinaria, ha otorgado a las normas de la Convención Americana y a los derechos consagrados en ella, inclusive el de rectificación o respuesta, el reconocimiento y exigibilidad requeridos por el Derecho Internacional.

Segundo:

Que, sin embargo, a efecto de determinar si Costa Rica está dando, en relación con el derecho de rectificación o respuesta, cumplimiento cabal a sus compromisos de respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Convención, así como de desarrollarlos en la medida necesaria para hacerlos plenamente eficaces en su orden interno, de conformidad con los artículos 1.1 y 2 de aquélla, la consulta no ofrece los elementos indispensables, entre otras cosas para clarificar:

1. Si hay o no, en el orden interno de Costa Rica, normas que desarrollen ese derecho, estableciendo las condiciones de su ejercicio previstas por el artículo 14.1 de la Convención, y cuáles sean su rango y contenido. La consulta nada dice sobre esto, aunque pueda inferirse de ella que tales normas no existen del todo;

2. Si hay o no, en el derecho costarricense, remedios expeditos y eficaces que garanticen el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta y su justo equilibrio con los otros consagrados en la Convención. Aunque la consulta también es omisa al respecto, es posible que recursos como el de amparo, tal como está consagrado comúnmente en los ordenamientos de los Estados americanos, constituiría un remedio aceptable, a condición de que se reconozca frente a una eventual denegación del derecho en cuestión o de los reconocidos por la Convención en general, y respecto de agravios cometidos por personas privadas;

3. Si hay o no en Costa Rica, de hecho, acceso expedito a tales remedios, especialmente a los recursos jurisdiccionales apropiados, en condiciones de igualdad y sin discriminación, si los mismos se resuelven sin denegación y con la urgencia que la naturaleza del derecho de rectificación o respuesta requiere, y si la respectiva resolución tiene plena e inmediata eficacia. No hay en la consulta ninguna información sobre tales extremos”.

En consecuencia, como consulta particular, para este voto en disidencia, la solicitud del Gobierno de Costa Rica, aunque admisible, no se puede contestar.

Cabe destacar aquí, que en términos de responsabilidad estatal, la CorteIDH ha señalado reiteradamente el carácter especial de la Convención Americana en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sosteniendo que la misma está inspirada en valores comunes superiores, centrados en la protección de los derechos humanos; dotado de mecanismos específicos de supervisión; se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva; consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo; y tienen una naturaleza especial que los distingue de aquellos tratados que regulan relaciones y obligaciones entre Estados Parte<sup>421</sup>.

Finalmente, y en relación al Informe anual 2013<sup>422</sup>, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión CIDH- OEA, ha dicho en cuanto al derecho de rectificación o respuesta:

“La Relatoría Especial pone de presente que el derecho de rectificación o respuesta es, al mismo tiempo, un importante mecanismo de protección de ciertos derechos y una forma de restricción del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, el derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana<sup>423</sup> es una de las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión si se la compara con las sanciones civiles o penales<sup>424</sup>. Sin embargo, a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no desea publicar, y si no existe una adecuada y cuidadosa reglamentación, ello podría dar lugar a abusos que terminen comprometiendo de manera desproporcionada e innecesaria la libertad de expresión. A este

---

<sup>421</sup> CorteIDH, Caso “Masacre de Mapiripan vs. Colombia”, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 104 y su cita completa con la referencia en la que reiteradamente ha expuesto estas afirmaciones.

<sup>422</sup> Informe Anual Relatoría para la Libertad de Expresión 2013. Relatora Catalina Botero. OEA/Ser.L/V/II.149. Doc. 50, 31 diciembre 2013. Punto 332. Pág. 156. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/anales.asp>

<sup>423</sup> El artículo 14 de la Convención Americana indica: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”.

<sup>424</sup> CIDH. [Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión](#). Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 80.



respecto, es preciso mencionar que la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los medios a difundir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean impuestos contenidos ajenos. En función de ello, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión debe ser compatibilizado con el derecho de rectificación o respuesta, de modo tal que este último sea ejercido en condiciones de equidad, cuando resulte absolutamente imprescindible para proteger derechos fundamentales de terceros<sup>425</sup>”.

Esta afirmación de la Relatoría nos presenta un reparo: es cierto que es necesario reglamentar el derecho de rectificación o respuesta acorde a los más garantistas estándares del derecho a la libertad de expresión, pero no compartimos el criterio de que el derecho de rectificación o respuesta sea una “medida restrictiva” al derecho a la libertad de expresión. Así tampoco lo ha manifestado la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 7/86. Es una responsabilidad ulterior y es un mecanismo a su vez de garantía de la libertad de expresión. Por supuesto, debe ser reglado de forma equilibrada.

El Pacto de San José de Costa Rica es esencial para la interpretación del derecho de rectificación en el ámbito latinoamericano, y más concretamente en el estudio de la jurisprudencia y de la Constitución Argentina, teniendo en cuenta su jerarquía constitucional (Artículo 75 inc. 22). Dado el carácter de las opiniones consultivas emanadas de la Corte Interamericana y porque las mismas son fuentes interpretativas vinculantes para la Corte argentina, en las cuales se basan también sus sentencias, se ha estimado importante abordar específicamente el análisis que del instituto realiza la misma.

Coincidimos con Wlasic en cuanto a que: “Si bien el sistema de protección interamericano, ha tenido flancos débiles, como ser, la tardanza de la Comisión en

---

<sup>425</sup> Corte IDH. *Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta* (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7. Párr. 25. Dicha opinión Consultiva establece que: “La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1”.

interponer un caso contencioso ante la Corte, los intereses políticos en juego, los momentos de las reelecciones y renovaciones de integrantes; que los E.E.U.U. no forme parte del sistema de protección de la Convención Americana; o la necesaria masividad de ciertas violaciones a los derechos humanos, para luego sí generar reacciones del sistema; lo cierto es que los sistemas internacionales de protección, incluido el interamericano, han permitido salir de determinados círculos de impunidad y ausencia de justicia en los Estados Miembros”<sup>426</sup>.

### **VII.5. Regulación del derecho de rectificación o respuesta en España. Su interpretación doctrinaria y jurisprudencial en el contexto del sistema europeo de derechos humanos.**

Creemos que el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español es fundamental para el entendimiento del derecho de rectificación en su operatividad y por la interpretación que la ley reguladora de la materia ha tenido en España y que ha sido tomada por la Corte de Justicia de la Nación Argentina en sus sentencias sobre derecho de respuesta como fuente y fundamento, tal como hemos reseñado.

#### **VII.5.1. Caso “Bengoechea Calvo”. STC 35/1983.**

En primer lugar, es necesario considerar la **Sentencia STC 35/1983**<sup>53</sup>, que si bien es anterior a la LO 2/1984, sus conceptos siguen estando doctrinariamente vigentes<sup>54</sup>.

---

<sup>426</sup> Wlasic, Juan Carlos. “Manuel Crítico de Derechos Humanos”. Ediciones La Ley. 2da. Edición, Buenos Aires, 2011, Pág. 441.

<sup>53</sup> STC 35/1983, de 11 de mayo de 1983. BOE núm 120, de 20 de mayo de 1983

<sup>54</sup> En este sentido: Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. “Monografías 3. Repertorio de Jurisprudencia Informativa I. Selección de Sentencias del Tribunal Constitucional”. Edic. Fundación de la Comunicación Social. Madrid, 1996. Págs. 27 a 33.- Rubio Llorente, Francisco. “Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Doctrina Jurisprudencial). Ariel Derecho. Barcelona, septiembre de 1995. Pág. 214.-

Rubio Llorente, Francisco. “Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Doctrina Jurisprudencial). Ariel Derecho. Barcelona, septiembre de 1995. Pág. 214.-

En cuanto a los antecedentes fácticos que motivan la demanda, ésta se origina en una nota difundida por los Servicios Informativos de Televisión Española de 15 de septiembre de 1981, en la que, con exhibición de la imagen de los interesados, se les atribuía determinada participación en la distribución para consumo humano de unas partidas de aceite de colza desnaturalizado. Juzgando que esta nota era errónea y que vulneraba su derecho al honor, los aludidos pretendieron, a través de su representante, que TVE la rectificara. Al escrito en que hacían esta petición respondió el Director de Televisión Española con una carta en la que manifestaba que el poder de que había hecho uso el representante no le facultaba para instar el derecho de rectificación; y que la petición no concretaba los términos de la rectificación pedida ni se acompañaba de la documentación en la que la petición se funda.

Frente a tal respuesta, que interpreta como denegación de la petición, la representación de los demandantes, señores Bengoechea Calvo y RAPSA interpuso recurso contencioso-administrativo, al amparo de la Ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, resuelto por Sentencia de 28 de enero de 1982, de la Audiencia Nacional, que lo declaró inadmisible por considerar que la respuesta de la Dirección de Televisión Española ni constituye una denegación ni era en sí misma un acto administrativo susceptible de ser recurrido en esa vía. Recurrida a su vez esa Sentencia de 30 de marzo de 1982, ante el Tribunal Supremo, éste la confirmó, por considerar que si bien puede rechazarse uno de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, que afirma que los actos de la Dirección de Televisión Española no son recurribles en la vía contencioso-administrativa, el acto concreto que se pretende anular no implica una denegación de la petición y, en consecuencia, no es susceptible de control jurisdiccional.

Los recurrentes en amparo sostienen que las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, en cuanto han desestimado el recurso interpuesto contra el acto denegatorio de Televisión Española, S.A., vulneran su derecho al honor (art. 15 de la Constitución Española), a la integridad moral (artículo 18.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

En suma, el petitum contenido en la demanda de amparo se centra en solicitar al Tribunal Constitucional que declare el derecho de los recurrentes a obtener de TVE una rectificación de la información dada, y, correlativamente, la obligación de TVE de difundirla.

El Fundamento Jurídico 4 de la Sentencia del TC motivo de análisis marca la interpretación sobre el derecho de rectificación en estos términos:

*“El acto de TVE, S.A., presuntamente lesivo, objeto de la impugnación, es el que da respuesta a la solicitud de rectificación para, a juicio de los recurrentes, denegarla. Es cierto que las afirmaciones y los juicios que éstos estiman lesivos para su honor y contrarios a la presunción de inocencia se hicieron en la información difundida por TVE, pero de la conducta de los recurrentes, que no buscaron reparación por ninguna otra vía, es forzoso entender que este daño que ellos consideraron podía ser sanado a través de la rectificación, sólo quedó consolidado cuanto ésta les fue denegada. Con ello queda dicho que, en el presente caso, el análisis de la información misma para detectar la existencia o inexistencia de elementos que vulneren el derecho al honor o (más improbablemente, tratándose de una simple información) a la presunción de inocencia, sólo resultará procedente si previamente se evidenciara que efectivamente los recurrentes se vieron impedidos en el ejercicio del derecho de rectificación.*

*Este último tiene, como es evidente, un carácter puramente instrumental en cuanto que su finalidad se agota en la rectificación de informaciones publicadas por los medios de comunicación y que aquél que solicita la rectificación considere lesivas de derechos propios. Por su naturaleza y su finalidad, el derecho de rectificación que normalmente sólo puede ejercerse con referencia a datos de hecho (incluso juicios de valor atribuidos a terceras personas), pero no frente a opiniones cuya responsabilidad asume quien las difunde, debe ser regulado y ejercitado en términos que ni frustren su finalidad ni lesionen tampoco el derecho que también la Constitución garantiza “a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.*

*En razón de la primera de estas exigencias intrínsecas, el trámite necesario para el ejercicio debe ser sumario, de manera que en lo posible se garantice la rápida publicación de la rectificación solicitada, cuya demora frustraría en muchos casos su finalidad y deben*

*considerarse ilegítimos y lesivos del derecho constitucionalmente garantizado que con la rectificación se pretendiera restablecer, los obstáculos artificiosos dirigidos simplemente a impedir o retrasar el ejercicio del derecho”.*

En atención a la segunda de las exigencias antes mencionadas, el ejercicio del derecho debe ajustarse a requisitos que, a su vez, ofrezcan al medio difusor de la información una garantía razonable de que la rectificación que se pretende se apoya en elementos de juicio que en alguna medida invalidan la que se hizo pública, está efectivamente destinada a impedir un daño que de otra manera sufriría el derecho o el interés legítimo de quien la solicita y no implica, a su vez, la difusión de noticias de dudosa veracidad o de las que se puedan seguir un perjuicio a la esfera jurídicamente protegida de terceros”.

Es dable destacar los tres últimos párrafos que anteceden pues en ellos, el TCE traza la naturaleza, la finalidad y las exigencias intrínsecas para el ejercicio del derecho de rectificación. Cabe aquí manifestar, aunque nos apartemos momentáneamente al análisis de la sentencia española, que los argumentos que anteceden fueron tomados por la Corte argentina en la sentencia del Caso “Petric Domagoj c. Página 12”, en el considerando 9, 5º párrafo. (CS, abril 16-998. La Ley T 1998-C, pág. 286).

Aplicados tales conceptos al caso concreto, el Tribunal español resolvió denegar el amparo en virtud de estas consideraciones:

*“(…) la carta del Director de TVE. S.A., al solicitante de la rectificación, no puede ser considerada ni como una denegación de esta solicitud, ni como un obstáculo artificioso que pretenda dificultar o demorar el ejercicio del derecho. Es cierto que la indicación de que la solicitud no podría ser tomada en consideración si el solicitante no la hacía amparado por otra representación que la que le otorgaban los poderes exhibidos carece manifiestamente de justificación, pues aparta otras razones y habida cuenta de la estrecha relación existente entre la empresa RAPSA y los hermanos Bengoechea Calvo, hubiera debido bastar con la inclusión, en el poder otorgado por éstos, de las facultades necesarias*

*para el ejercicio y salvaguarda de los derechos garantizados por los arts. 14 a 29 de la Constitución, para entenderse que existía legitimación suficiente para cursar la solicitud. Sin duda, si hubiera sido ésta la única razón por la que no se atendió de inmediato la solicitud de rectificación hubiéramos debido considerarla como un entorpecimiento ilícito en el ejercicio de un derecho que sirve a la defensa de un derecho fundamental. No es éste, sin embargo, el caso, pues junto a esta indebida exigencia, se hacen otras dos que en modo alguno pueden considerarse injustificadas, no sólo por dimanar directamente de la Ley (art. 25, Ley 4/1980), sino por ser también congruente con la naturaleza propia del derecho de rectificación. La petición de que se aporte la documentación que apoya la rectificación solicitada o se indique el lugar donde tal documentación se encuentra no resulta superflua ni excesiva como juzgan los recurrentes, pues no se trata, como ellos afirman, de una documentación que se encuentre “sólo y exclusivamente en los archivos de TVE”, sino de aquella documentación que fundamenta su solicitud de que se haga público que algunos o todos los extremos de la información difundida por TVE son falsos, o cuando menos, son puras hipótesis de los servicios informativos de ésta, no apoyados en prueba alguna. Tampoco resulta innecesaria la exigencia de que se precise el texto concreto de la rectificación que se pretende, pues aunque es cierto que la carta que dirige a TVE el representante de los recurrentes afirma la inexactitud de la información difundida y detalla cuál era la actividad mercantil de éstos, es lo cierto que no ofrece el texto concreto cuya difusión televisada solicita para rectificar la información que consideraba lesiva.*

*Si ambas exigencias resultan, en consecuencia, lícitas y justificadas, el solicitante de la rectificación debió atenderlas para obtener la publicación del texto que consideraba conveniente difundir. No habiéndolo hecho así, es forzoso entender que ha sido su propia falta de disposición para levantar la carga que el ejercicio del derecho implicaba, la que ha impedido directa e indirectamente ese ejercicio, que la Dirección de TVE, S.A., no negó porque su acto era un acto de trámite que no contenía aún decisión sobre el fondo de la solicitud que se le había hecho”.*

### VII.5.2. Caso “Mercorsa”. STC 168/1986

Otro de los casos trascendentes que marcan la doctrina jurisprudencial del TCE se desprende de la STC 168/1986, de 22 de diciembre <sup>55</sup>o conocida como “Caso Mercorsa” en el cual se ponen en juego la interpretación del Artículo 20.1. d) CE en cuanto a su referencia a la Libertad de información y a la integración en ésta del derecho de rectificación. Sentencia que, también es tomada por la Corte argentina en aras de la resolución del Caso “Petric” (Cons. 9 5º párrafo in fine, Considerando 12, 6º párrafo, asimismo en el voto del Dr. Vázquez: cons. 16 el cual en su totalidad se remite a esta sentencia y a doctrina española).

Los hechos, son sucintamente los siguientes: como consecuencia de un artículo publicado en el número 122 de la revista “Tiempo” relativo a la entidad mercantil MERCORSA y en el que se hacía referencia al que fue su Presidente, don Luis García García, éste remitió al Director de la revista un escrito de rectificación para su publicación. Denegada ésta, el señor García García demandó judicialmente que se ordenase la publicación de dicho escrito al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, en Sentencia de 9 de octubre de 1984, desestimó la demanda, por entender que el escrito de rectificación no se limitaba a los hechos de la información aparecida, como exige el artículo 2 de la citada Ley Orgánica, sino que encerraba una serie de juicios de valor sobre aquella información.

Apelada la Sentencia del Juzgado por el demandante, la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid dictó Sentencia revocatoria de aquélla con fecha de 14 de mayo de 1985, ordenando la publicación parcial del escrito de rectificación, limitada a los hechos contenidos en los párrafos del mismo que transcribe.

---

<sup>55</sup> STC 168/1986, 22 de diciembre. Sala 2ª. Recurso de amparo núm. 1.045/1985 (RA-553). Ponente: Magistrado don Jesús Leguina Villa. BOE de 20 de enero de 1987.-

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, que fue denegado por Auto de la Sala sentenciadora de 24 de julio de 1985, confirmado en queja por Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1985.

El recurrente (Revista “Tiempo”) alega que se ha producido una infracción del derecho, reconocido en el artículo 20.1 d) CE, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, violación que imputa a la mencionada sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, porque ésta entiende “que el derecho de rectificación, tal como se configura en la Ley Orgánica que lo regula, no se funda en la veracidad o inexactitud de los hechos contenidos o relatados en la información difundida..., sino que se basa en la mera consideración subjetiva de su inexactitud por parte del aludido en la información, cuya divulgación pueda causarle perjuicio”, por lo que, en el ejercicio de aquel derecho “no se puede discutir la veracidad de los hechos divulgados en la información”. Esta interpretación, a juicio de la Revista ignora el derecho proclamado en el artículo 20.1 d), de la Constitución y la deja inerte, en cuanto le impone la obligación de publicar la rectificación instada, aunque no sea cierto nada de lo que en ella se dice y sí lo sea la información, acreditada con pruebas documentales exhaustivas sobre su veracidad.

De los Fundamentos Jurídicos que llevan al TC a denegar el amparo solicitado por “Ediciones Tiempo S.A.”, resulta necesario detenerse en los FFJJ 4º y 5º:

*“ (...) el ordenamiento jurídico establece las acciones penales y civiles y los procedimientos necesarios para investigar la verdad de los hechos publicados o difundidos, así como para obtener la debida reparación de los perjuicios causados por informaciones inexactas o falsas; acciones y procedimientos que los interesados pueden ejercitar en cualquier caso y de los que ha de resultar, también en beneficio de la colectividad, la determinación de los hechos como ciertos o inciertos, con los efectos de la cosa juzgada. Junto a ellos, nuestro ordenamiento reconoce asimismo un derecho de rectificación, que tiene una finalidad y una eficacia diferentes”.*



He aquí la delimitación del ámbito de cada acción y la compatibilidad del reclamo, cuestión que tratamos particularmente.

*“(...) el llamado derecho de rectificación, regulado en la LO 2/1984... consiste en la facultad otorgada a toda persona, natural o jurídica de “rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio” (art. 1º). Se satisface este derecho mediante la publicación íntegra y gratuita de la rectificación, referida exclusivamente a los hechos de la información difundida, en los términos y en la forma que la ley señala (arts. 2 y 3). Configurado de este modo, el derecho de rectificación es sólo un medio de que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos. Esta legítima finalidad preventiva – que es independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que se revele objetivamente inexacta- quedaría frustrada en muchos casos por la demora en la rectificación pretendida. De ahí que, como declara la Sentencia número 35/1983, de 11 de mayo, “el trámite necesario para el ejercicio del derecho debe ser sumario, de manera que se garantice la rápida publicación de la rectificación solicitada” (fundamento jurídico 4º).*

*“...La sumariedad del procedimiento verbal, de la que es buena muestra que sólo se admitan las pruebas pertinentes que puedan practicarse en el acto (art. 6 b) exime sin duda al Juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados como de la que concierne a los contenidos en la rectificación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentados por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación procesal de los hechos efectivamente ciertos. De acuerdo con las observaciones que se acaban de exponer, no hay duda de que la rectificación, judicialmente impuesta, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984, de una*

*información que el rectificante considera inexacta y lesiva de sus intereses, no menoscaba el derecho fundamental proclamado por el art. 20.1 d) de la Constitución, ni siquiera en el caso de que la información que haya sido objeto de rectificación pudiera revelarse como cierta y ajustada a la realidad de los hechos. En efecto, el simple disenso por el rectificante de los hechos divulgados no impide al medio de comunicación social afectado difundir libremente la información veraz, ni le obliga a declarar que la información aparecida es incierta o a modificar su contenido, ni puede considerarse tampoco la inserción obligatoria de la réplica como una sanción jurídica derivada de la inexactitud de lo publicado. Por el contrario la simple inserción de una versión de los hechos distinta y contradictoria ni siquiera limita la facultad del medio de ratificarse en la información inicialmente suministrada o, en su caso, aportar y divulgar todos aquellos datos que la confirman o la avalan. El ejercicio del derecho de rectificación tampoco limita el derecho de la colectividad y de los individuos que la componen a recibir libremente información veraz”.*

Con tales fundamentos, el TCE consideró que la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid que ordenó la publicación parcial en la revista “Tiempo” de la rectificación instada por don Luis García García, sin investigar previamente y de modo exhaustivo la veracidad de la información que le aludía perjudicialmente y que éste consideraba inexacta, ni la de los hechos referidos en el escrito de rectificación, no ha lesionado el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información por cualquier medio de difusión.

En la doctrina española, quien ha criticado severamente esta sentencia ha sido el Prof. Carlos Soria, quien ha dicho: “La interpretación que la Sentencia de 22 de diciembre de 1986 hace del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, y del derecho de rectificación, es, a mi juicio, insatisfactoria: socava el fundamento del derecho de rectificación, resulta incoherente, y termina por desnaturalizar el derecho de rectificación”. Las razones por las que Soria no comparte los términos de la sentencia bajo análisis son los siguientes, expuestos en forma breve: sostiene que debe probarse la veracidad de la información; no comparte la idea expuesta por el Tribunal Constitucional

en la sentencia referida de que la versión diferente de los hechos favorece el interés colectivo porque previamente hay que probar su veracidad, sino se promueve pura y simple desinformación; sostiene que sólo si las apreciaciones subjetivas del rectificante coinciden con las apreciaciones subjetivas del director del medio llamado a rectificar, debe publicarse voluntariamente la rectificación.

Finalmente, Soria concluye que: “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de diciembre de 1986 ha desnaturalizado, a mi juicio, el derecho de rectificación regulado en la Ley orgánica 2/1984, de 26 de marzo. Al desconectar el derecho de rectificación del núcleo de la verdad en la comunicación de hechos, la Sentencia ha dado paso, más bien, a un derecho de acceso por alusiones, análogo al contemplado en el artículo 13 de la Ley francesa de 29 de julio de 1881. Esta interpretación del Tribunal Constitucional español no me parece acertada: violenta la ley reguladora del derecho de rectificación, otorga indirectamente carta de naturaleza informativa a la desinformación, y al ensanchar sin proporciones los rasgos del derecho de rectificación le ha hecho perder su propia armonía”.

En este sentido, estamos a favor de la postura del Tribunal Constitucional Español, atento las fundadas razones expuestas en su sentencia. El procedimiento del derecho de rectificación o respuesta no da lugar a la prueba de verdad de los dichos del rectificante, sino a la escucha de su versión de los hechos motivo de controversia en salvaguarda del derecho a su honor afectado. Habrá otras vías, civiles y/o penales en los que se tendrá la oportunidad de comprobar los hechos en cuestión. Pero no es la vía del derecho de rectificación la idónea para tales fines<sup>427</sup>.

---

<sup>427</sup> Soria, Carlos “El Derecho de Rectificación (Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional español de 22 de diciembre de 1986). Documentación de las Ciencias de la Información. N° 12-1989-27-40. Ed. Universidad Complutense de Madrid. Págs. 27 a 40.

### VII.5.3. Caso “Cambio 16”. TC Auto N° 1243/1988

Es necesario tener presente las diferencias del objeto, fines y procedimiento de la L.O. N° 2/1984; la Ley 1/82 de Protección Civil al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, y el artículo 1902 del Código Civil. Al respecto, en este análisis, es ilustrativa la cuestión según lo trata el propio Tribunal Constitucional Español en el Auto Número 1243/1988<sup>56</sup>, de 14 de noviembre de 1988 en el que establece claramente las diferencias en cuanto a los efectos jurídicos que cada norma conlleva.

Sobre los antecedentes que motivan la demanda, cabe relatar que Juan Tomás de Salas, José Oneto, José Díaz Herrera y Rafael Cid –quienes son los que pretenden impetrar el recurso de amparo- fueron demandados por Jesús Nieto Ródenas por presunta vulneración del derecho fundamental del actor al honor y a la propia imagen, al haberse publicado en el semanario “Cambio 16”, Número 598, de 16 de mayo de 1983, un artículo, bajo el título “El caso del Comando G”, en el que se insertaba una información que hacía referencia al demandante (según el citado antecedente primero, lo allí publicado, y reputado lesivo por el actor para su honor y propia imagen, hacía referencia a que don Jesús Nieto Ródenas, Inspector de Policía, resultó herido de bala en el curso de un asalto a determinada entidad bancaria, por más que, indicaba el reportaje periodístico, “las malas lenguas aseguran que fue casual, ya que Nieto se encontraba en el despacho del Director de la entidad con el exclusivo propósito de retirar su sueldo mensual por el servicio de protección que extraoficialmente brindaba al banco”.

Repartida la demanda civil al Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de los de Madrid, los demandados alegaron en su contestación que “en momento alguno había estado en el ánimo de los periodistas autores del texto la intromisión ilegítima en el honor del actor, sino que con el exclusivo ánimo de informar (...) publicaron la noticia, que, en lo que se refiere al actor, fue debidamente contrastada por la fuente revelada de Sindicato Profesional de Policía”. Se observa también en la demanda que “una vez publicada la

---

<sup>56</sup> Auto Num. 1243/1988, de 14 de noviembre de 1988. Número de registro: 554/1988. Asunto: Recurso de Amparo.

veracidad de los datos facilitados por las fuentes del meritado Sindicato Profesional de Policía en lo referente a don Jesús Nieto Ródenas, en el número inmediato siguiente (...) rectifican con profusión de detalle el error inicialmente cometido en el número anterior, y todo ello sin que se hubiese interesado rectificación de clase alguna por parte de don Jesús Nieto Ródenas”.

En el presente caso, los recurrentes en amparo pretenden sostener que la rectificación que la propia revista hiciera por sí misma, sin que fuera solicitada por el afectado, los exime de toda responsabilidad por “intromisión ilegítima” conforme la LO 1/1982.

Para el Ministerio Fiscal el recurso sería inadmisibile, entre otros motivos porque “hay que recordar que el art. 6 in fine de la Ley Orgánica 2/1984 deja bien claro que la rectificación es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos, encontrándonos, pues, ante una más de las “circunstancias del caso” a que se refiere el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 a la hora de valorar la indemnización”.

Siguiendo el razonamiento del Ministerio Fiscal, el TC concluye que “...la rectificación de la noticia de la que se siga daño para el honor ajeno (cuya rapidez permite dudar de que se operara efectivamente con diligencia al publicar la información errónea), no impide, en nuestro Derecho, el ejercicio por el perjudicado de las acciones judiciales que puedan corresponderle” (Fundamento Jurídico 2).

#### **VII. 5.4. Caso “Palazuelos – Informe Semanal TVE”. STC 40/1992**

Otro caso judicial que merece análisis y que se adentra en el tema de la información cierta pero no completa, la difusión de una sentencia penal condenatoria y el ejercicio del derecho de rectificación es el resuelto por la Sala 1º del Tribunal Supremo con fecha 16 de junio de 1989, que posteriormente fue tratado por el Tribunal Constitucional.

En cuanto a los hechos, cabe mencionar que la demanda es desestimada en primera instancia por el Juzgado núm. 26 de Madrid, pero la Audiencia posteriormente la acepta. La sentencia condena a los autores del programa “Informe Semanal” de TVE, a pagar 4.000.000 de pesetas al letrado demandante. El Tribunal Supremo finalmente casa la sentencia de la Audiencia, desestimando la demanda.

La base de la demanda se produce en la emisión del mencionado programa con la aparición en pantalla del rostro de una persona con los rasgos velados para hacerla irreconocible, declarando que después de haber sido detenido su hermano, un abogado les pidió una cantidad monetaria para sobornar a unos jueces con los que tenía amistad y quienes podrían dejar en libertad a su hermano. Cuando pasó el tiempo y vio que no ocurría nada, decidió denunciarlo en el Juzgado de Guardia. Posteriormente se condena al abogado por un delito de estafa a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor y a que indemnizara a los afectados.

El abogado aludido, debido a que la información se emitió cuatro años más tarde de producirse, remite una carta de rectificación en la que declaraba que la información era cierta, pero no completa, ya que la sentencia fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid, absolviéndole del delito de estafa.

Los telediarios de TVE rectificaron la información tan pronto como lo solicitó el rectificante, y la publicación de una sentencia penal condenatoria no supone agresión al derecho al honor. Por ello, el Tribunal Supremo, casa la sentencia.

Los Fundamentos de Derecho del Tribunal Supremo fueron los siguientes:

“Primero. 1. Los dos motivos subsistentes del recurso plantean, una vez más, el debatido problema del binomio honor-derecho de información, problema que no puede resolverse en forma maximalista dadas las connotaciones de la multiplicidad de supuestos que pueden presentarse.

2. La singularidad del que ahora se enjuicia tiene por base la emisión por Televisión Española, dentro de su programa Informe Semanal, y en el que aparece en pantalla el rostro de una persona con los rasgos velados para hacerla irreconocible, diciendo que –hace cuatro años detuvieron a mi hermano por atraco; a nosotros se nos presentó un abogado, un tal Sr. Palazuelos; que nos dijo que era un caso muy difícil, pero que en seis meses, con dinero todo se arreglaba, y que con 200.000 pesetas, no para sus honorarios, sino para darlas por los Juzgados, porque él tenía que ir por los Juzgados saludando con una mano y a cada persona con un billete. Nos pidió 200.000 pesetas. Le dijimos que era mucho, nos rebajó 100.000 y cuando mi hermano saliese le dábamos 50.000. Nos dijo que él tenía mucha amistad con los Jueces; que él lo quería meter todo en un Juzgado porque era familiar suyo; que con los demás tomaba cerveza y jugaba al golf. Que los papeles se podían perder porque se habían quemado más veces. Total, que pasó el tiempo, pasaron cuatro meses, pasó mucho más tiempo y como veíamos que no hacía nada, fuimos a un Juzgado de Guardia y pusimos una denuncia. Se le condenó a cuatro meses sin ejercer y a darnos una indemnización-. Por Sentencia de 23 de enero de 1984, se condenó al referido Abogado como responsable de un delito de estafa a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor y a que indemnizara a María D.A. en la cantidad de 50.000 pesetas. Posteriormente, TVE en uno de los telediarios correspondiente al 4 de octubre de 1986, aludió al reportaje emitido en Informe Semanal el 20 de septiembre anterior, manifestando que –la información es cierta pero no completa, por lo que el aludido D. Emilio P.F., ha remitido carga de rectificación, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 25 de marzo, alegando que la citada sentencia fue ulteriormente revocada por la Audiencia Provincial de Madrid, en diciembre de 1984, absolviéndose por el delito de estafa por el que fue condenado en primera instancia, con todos los pronunciamientos favorables-.

Segundo. 1. Es importante destacar la forma en que fue emitido el programa, ya que las manifestaciones supuestamente atentatorias al derecho al honor del actor y hoy recurrido, son emitidas por una persona individual que comparece ante las cámaras de Informe Semanal y suministra la noticia de la condena por delito de estafa, al paso que los locutores de TVE tan sólo se limitan a conducir el programa y no difunden la noticia. Asimismo, hay

que tener en cuenta que estas expresiones fueron vertidas en el programa –Justicia, pequeña gran corrupción-.

Tercero. 1. Un primer planteamiento obliga a puntualizar si la difusión del fallo de una sentencia penal condenatoria, supone una agresión o intromisión en el derecho al honor, dentro del ámbito de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, debiendo entenderse que el mismo es de libre difusión conforme a los cánones del art. 20 CE, mayormente si se tiene en cuenta que conforme al art. 120.1 las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean las leyes de procedimientos, y en este caso concreto, no existía prohibición alguna conforme a los cánones del art. 906 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. En otro orden de ideas, hay que entender que las actuaciones profesionales quedan fuera del ámbito de la Ley Orgánica 1/1982, y que la tutela jurídica cuando fueren vulnerados esos derechos ha de formularse por el cauce del art. 1902 del Código Civil siempre y cuando se demuestre la existencia de un daño moral, como ya puntualizó la sentencia de esta Sala de 2 de marzo último.

Cuarto. En consecuencia, procede la estimación de los dos motivos del recurso con los correspondientes pronunciamientos<sup>57</sup>.

El Sr. Palazuelos, recurre ante el Tribunal Constitucional en amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo, anteriormente tratada, por intromisión en el derecho al honor conforme lo regulado por la LO 1/82, y en el punto que nos interesa, la STC 40/1992, de 30 de marzo de 1992<sup>58</sup>, sostiene en el Fundamento Jurídico N° 2:

---

<sup>57</sup> Llamas Pombo, Eugenio (coordinador); Autores : Baquero Cardenoso, Ángel; Martínez de Yuso Sánchez, Rocío y otros. “Libertad de Expresión. Estudio Jurisprudencial”. Madrid, 1997. En este libro se hace una transcripción íntegra de los Fundamentos Jurídicos del Tribunal Supremo en la STS (Sala 1ª) de 16 de junio de 1989. Págs. 269 a 271.

<sup>58</sup> STC 40/1992, de 30 de marzo de 1992. BOE núm. 109, de 6 de mayo de 1992. Ponente: don Álvaro Rodríguez Bereijo. BOE, Madrid 1993. Tomo 32. (enero-abril de 1992) Págs. 523 a 536.



“En estos casos singulares, en que se trata no sólo de dar una información sino también de servir de soporte a una noticia u opinión manifestada por terceras personas, no cabe desconocer el hecho de la rectificación posterior de la información emitida en ese contexto, que resultaba ser incompleta. Y, si bien el derecho a la rectificación de la información no suplanta, ni, por tanto, inhabilita ya, por innecesaria, la debida protección al derecho del honor, sí la atenúa, pues constituye el mecanismo idóneo para reparar lo que sólo por omisión de los hechos relatados pudiera constituir intromisión en el derecho al honor imputable a quien sirve de soporte o vehículo para la difusión pública de tales hechos (STC 35/1983, fundamento jurídico 4º.). Rectificación a la que en este caso efectivamente se procedió tan pronto Televisión Española tuvo conocimiento, a instancia del propio recurrente, de la realidad de los hechos, completando así las declaraciones de la persona entrevistada en el programa. “Esa rectificación muestra –como ya se dijo en la STC 171/1990, fundamento jurídico 8º- que el error fáctico no fue malicioso, esto es con menosprecio a la veracidad o falsedad de lo comunicado.

Atendidas estas circunstancias, no cabe, por tanto, estimar inobservancia la regla general de la necesaria veracidad de los hechos contenidos en la información, lo que, por sí mismo, desde la estricta consideración del derecho al honor –no desde luego, desde la del derecho fundamental a la intimidad, tal como hemos señalado en la STC 197/1991, fundamento jurídico nº 2- legitimaría la intromisión en el honor, siempre que, por lo demás, se apreciase la existencia de esa intromisión”.

Aquí el Tribunal Constitucional enlaza el tema del ejercicio del derecho de rectificación –que cabe resaltar, fue permitido y hecho efectivo por TVE- con el honor supuestamente vulnerado y la veracidad informativa, exigencia constitucional, ésta última que supone una debida diligencia por parte del profesional del periodismo según la doctrina del propio TC y que en el caso fue observada. Así, el TC rechaza, por las razones anteriormente expuestas que “el hecho de la divulgación de la condena penal del solicitante de amparo, cuando lo cierto es que definitivamente no lo fue, haya supuesto una inobservancia del específico deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad que incumbe al medio informativo “Televisión Española, Sociedad Anónima”,

hemos de determinar si la mencionada información ha lesionado su derecho al honor”. Finalmente se concluye que no ha habido tal lesión y se deniega el amparo interpuesto.

Siguiendo con la línea doctrinaria afianzada, que declara la plena compatibilidad del derecho de rectificación con el ejercicio de las acciones derivadas de la LO 1/1982, y tratando la veracidad de la información junto a la debida diligencia del informador, el TC reitera en la STC 240/92 de 21 de diciembre de 1992<sup>59</sup> :

“(…) en estos casos singulares en que se trata de indagar en la actitud diligente y responsable del informador (STC 40/1992, fundamento jurídico nº 2), no cabe desconocer el hecho de la pronta corrección posterior de la información publicada, que resultó parcialmente errónea. En efecto, la incorporación de una rectificación cuando se produce de modo espontáneo por el propio autor de la información o el medio que la divulgó, por su propia iniciativa o a indicación del interesado –como aquí ha ocurrido- es sin duda reveladora de la actitud del medio de información o del periodista en la búsqueda de la veracidad de lo informado. Y aunque la rectificación de las informaciones no suplanta ni, por tanto, inhabilita ya, por innecesaria, la debida protección del derecho al honor sí la matiza o modula en supuestos como el presente (STC 40/1992, fundamento jurídico nº 2), pues constituye un mecanismo idóneo para corregir y aclarar los errores que involuntariamente, y a veces de manera inevitable, se deslizan en una información rectamente obtenida y difundida, y que no afecten a la esencia de lo informado.

Rectificación a la que, en este caso, efectivamente se procedió tan pronto como el periodista y el medio tuvieron conocimiento, a instancia de la persona afectada, que ésta no había intervenido en los hechos relatados. Insertándose el día de la semana de mayor difusión del diario mediante un artículo que únicamente tiene por objeto hacerse eco del desmentido, y con una composición y extensión de similares características a la noticia inicialmente difundida. Esta rectificación, y el alcance con que fue realizada muestra que en este caso el error fáctico no fue malicioso (STC 171/1990, fundamento jurídico 8º;

---

<sup>59</sup> STC 240/92, de 21 de diciembre de 1992, BOE, núm 17, de 20 de enero de 1993. Número de registro: 167/1990. Recurso de amparo. Ponente: Magistrado don Alvaro Rodríguez Bereijo.

40/1992, fundamento jurídico nº2) y que, por consiguiente, no actuó el informador con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado defraudando el derecho de todos a recibir información veraz.

Atendidas las circunstancias expuestas, que se refieren tanto al alcance del error cometido, como al comportamiento del autor de la noticia y del medio informativo en la contrastación o verificación de lo comunicado y a la posterior corrección del error en que inicialmente incurrieron, no cabe estimar inobservada en este caso, como, en cambio, se hace en las resoluciones judiciales impugnadas, la regla general de la necesaria veracidad en el contenido de la información, que, por lo mismo, no lesiona el honor de la persona por aquella afectada (STC 40/1992, fundamento jurídico nº 2).

En la misma línea de análisis, la STC 52/1996 sostiene “El derecho de rectificación es siempre compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles o de otra naturaleza que pudieran asistir al perjudicado por los hechos difundidos –art. 6 in fine LO 2/1984 de 26 de marzo”<sup>428</sup>.

Otra de las sentencias del Tribunal Constitucional que entra en el examen ponderativo del derecho a la información en concurrencia con el derecho al honor, y trata tangencialmente el ejercicio del derecho de rectificación, afirma, en cuanto al *petitum* de publicación de la sentencia que reconozca el derecho al honor del lesionado:

“Desestimada la demanda por los motivos expuestos, resulta innecesario entrar en la cuestión que enunciábamos como requisito complementario del otorgamiento del amparo, referente a si la decisión de la sentencia impugnada de exigir su publicación, medida ésta de reintegración directa del honor, que entronca en el derecho a recibir información veraz formadora de opinión pública y que carece de potencial disuasorio relevante de la actividad informativa, constituye una consecuencia jurídica capaz de lesionar el derecho a comunicar libremente información veraz. De igual modo deviene impertinente en este caso el mismo

---

<sup>428</sup> STC 1º 52/1996 de 26 de marzo. Ponente Sr. Cruz Villalón. La Ley, 1996, 3936.

análisis respecto de la responsabilidad civil impuesta por la sentencia impugnada, consistente en una indemnización de 3.000.000 de pesetas por daños morales”(STC 190/1996 (RTC 1996, 190) , Fundamento Jurídico nº 5)<sup>61</sup>.

#### **VII.5.5. Caso “Francisco Domínguez Galindo vs. Diario Europa Sur”. STC 66/2000<sup>429</sup>**

El recurso de amparo fue promovido por don Francisco Domínguez Galindo frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, desestimando su apelación, confirmara la denegación de su pretensión de que se rectificase una noticia referida a su persona aparecida en el diario Europa Sur. Básicamente, trata la sentencia sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial (acceso a la justicia), alegada por el actor y la apreciación de que la demanda civil de rectificación era extemporánea que incurre en error patente.

La acción de rectificación fue notoriamente extemporánea. Así, el Tribunal Constitucional recuerda su reiterada doctrina en cuanto a “que el cómputo de los plazos procesales y la apreciación de la caducidad de las acciones judiciales son cuestiones de legalidad sometidas al exclusivo conocimiento de los órganos judiciales, salvo que aquel cómputo resulte ser manifiestamente erróneo, provocando efectos negativos en la esfera jurídica de quien los sufre. De otra parte, para que ese error goce de relevancia constitucional, no sólo ha de ser palmario, sino sólo imputable al órgano judicial que en él incurre y, además, decisivo para el sentido del fallo de la resolución judicial que lo padezca (SSTC 190/1990, de 26 de noviembre, FJ 3; 201/1992, de 19 de noviembre, FJ

---

<sup>61</sup> Bastida Freijedo, Francisco J.; Villaverde Menéndez, Ignacio “Libertades de Expresión e Información y Medios de Comunicación. Prontuario de jurisprudencia constitucional 1981-1998”. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional I. Editorial Aranzadi. Pamplona, 1998.-

Estos autores ubican a la sentencia mencionada bajo el tema: “Veracidad y Derecho de Rectificación. Veracidad y Derecho de Réplica”. Hay que considerar en este punto, aunque el TC no trata el tema de fondo propuesto en este caso por la parte, que el lesionado en su derecho al honor, peticiona la publicación de sentencia que reconozca su derecho como rectificadora de la información oportunamente difundida por los medios de comunicación.

<sup>429</sup> B.O.E. Nº 90. 14/04/2000. STC 66/2000, de 13 de marzo de 2000. Sala Primera. Recurso de amparo 4.570/1996.

2; 61/1996,, de 4 de abril, FFJJ 2 y 3; 167/1999, de 27 de septiembre, FJ 3; ATC 101/1999, de 26 de abril).

“La aplicación de la anterior doctrina al caso presente conduce a la estimación del recurso de amparo. En efecto, del cotejo de las fechas que se acreditan en las actuaciones resulta patente el error cometido en el cómputo del mentado plazo. Según el sello de la tarjeta postal del acuse de recibo, y a la fecha del mismo hemos de atenernos (y que es la que se hizo constar en el acta de requerimiento notarial antes mencionada), el escrito de rectificación fue recibido por el medio de comunicación el 10 de noviembre. Contados los tres días del término fijado en el art. 3 LORDR, el 13 de noviembre finalizaba el plazo para la rectificación voluntariamente efectuada por el medio a requerimiento del rectificante. Transcurrido ese plazo sin haberlo hecho, la interposición de la demanda el 18 de noviembre habría tenido indubitadamente lugar dentro del plazo de siete días legalmente previsto (art. 4 LORDR).

Pues bien, a partir de este error manifiesto en el cómputo del plazo, la Sentencia de apelación se limitó a apreciar la extemporaneidad de la demanda de rectificación, procediendo seguidamente a la desestimación del recurso de apelación, confirmando la denegación de la rectificación acordada en la instancia, sin ofrecer razón alguna del cómputo efectuado por el órgano judicial que sirva para conocer el motivo de la intempestividad de la formulación de la demanda y la consecuente caducidad de la acción. Este error de la Audiencia Provincial motivó el que ésta no se pronunciara sobre los motivos de la apelación dirigidos a impugnar la razón de fondo que esgrimió el Juez de Primera Instancia para desestimar la demanda; a pesar de que ésta era una de las cuestiones suscitadas en la apelación. Todo lo cual ha tenido como consecuencia, la pérdida de un recurso legal, lesionando así el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 CE)”.

#### **VII.5.6. Caso “Francisco Álvarez-Cascos Fernández vs. Cadena Ser”. STC 51/2007<sup>430</sup>.**

El recurso de amparo fue promovido por Francisco Álvarez-Cascos Fernández frente al Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que denegaron la rectificación demandada a la Cadena SER y tampoco hicieron lugar a su recurso de casación. El demandante alegó supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la integridad moral y al honor y a la libertad de información: resoluciones judiciales motivadas y que respetan el acceso al recurso legal; derecho de rectificación utilizado de manera inapropiada; el derecho a recibir información veraz de los oyentes de una radio no puede ser ejercido por un particular.

En el caso se puso en discusión la resolución judicial que denegara la rectificación solicitada a la Cadena SER por el recurrente en amparo. El Tribunal Constitucional entendió que no se vulneraron los derechos del recurrente por el ejercicio de su derecho a la rectificación. El Tribunal denegó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial, dada la suficiente motivación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y la correcta fundamentación legal de la denegación de los recursos presentados por el demandante. Tampoco se concede amparo por vulneración de los derechos al honor y a la integridad moral. De un lado, la sentencia de primera instancia concedió la rectificación solicitada, aunque recortando el texto por no limitarse a los hechos de la información. De otro lado, el rechazo absoluto de tal rectificación en segunda instancia no sólo estaba razonada y suficientemente motivada teniendo en cuenta el uso inapropiado del derecho en que incurrió el actor, sino que se produjo después de que la cadena de radio demandada cumpliera la orden del Juzgado a quo. Finalmente, tampoco se otorga el amparo por vulneración del derecho a recibir libremente información veraz porque el demandante no goza de legitimación para intervenir en nombre de los oyentes.

En su Fundamento Jurídico N° 8, el Tribunal Constitucional recuerda su doctrina referente al derecho de rectificación puede recordarse que ya en la STC 35/1983, de 11 de

---

<sup>430</sup> <sup>430</sup> B.O.E: N° 92. 17/04/2007. STC 51/2007, de 12 de marzo de 2007. Sala Segunda. Recurso de amparo 2454-2004.

mayo, FJ 4, se hablaba del “carácter puramente instrumental” del mismo “en cuanto su finalidad se agota en la rectificación de informaciones publicadas”; y en la STC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 4, se afirmaba que “el derecho de rectificación es sólo un medio del que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor”. Precisamos también en la STC 40/1992, de 30 de marzo, FJ 2, que “si bien el derecho a la rectificación de la información no suplanta, ni, por tanto, inhabilita ya, por innecesaria, la debida protección al derecho del honor, sí la atenúa, pues constituye el mecanismo idóneo para reparar lo que sólo por omisión de los hechos relatados pudiera constituir intromisión en el derecho al honor imputable a quien sirve de soporte o vehículo para la difusión pública de tales hechos”.

“El derecho de rectificación aparece así, por un lado, como un derecho subjetivo que funciona como instrumento previo al ejercicio de acciones para la defensa del patrimonio moral de la persona frente a la actividad de los medios de comunicación; y, por otro, como un complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública, pues, como hemos dicho en la ya citada STC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 5, “además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone ... un complemento a la garantía de la opinión pública libre ... ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad”.

#### **VII.5.7. Caso “Pedro José Ramírez Codina vs. El Mundo”. STC 99/2011<sup>431</sup>.**

Los hechos relevantes de este caso fueron los siguientes: en su edición de 6 de septiembre de 2004 el periódico «El Mundo» publicó en portada y en la página 7 un reportaje en el que decía exponer las revelaciones de un confidente policial al Juez instructor de un procedimiento penal de la Audiencia Nacional, en las que se aludía a un

---

<sup>431</sup> B.O.E.: 19/07/2011. STC. Sala Primera. Sentencia 99/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo 8505-2006. Promovido por don Pedro José Ramírez Codina respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que ordenaron la publicación de una rectificación en el diario «El Mundo». Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de información y a la tutela judicial: decisión judicial ordenando la inserción de una rectificación que no implica pronunciamiento alguno sobre la veracidad de la información.

agente de la Guardia Civil del destacamento de la localidad madrileña de Valdemoro, llamado Pedro, de quien se afirmaba que había vendido armas a traficantes de droga y a bandas organizadas. Además de su nombre y destino, se aportaban datos relativos a su residencia, edad, vehículo que conducía, vida personal, etc. Pocos días después, el 12 de septiembre de 2004 el mismo diario recogía en la sección de opinión la denominada «Carta del Director», en la que se decía que aquella información no había sido objeto de desmentido, y que tampoco había constancia de que se hubiera abierto una investigación en la Guardia Civil para aclarar los hechos, por lo cual, añadía textualmente: «¿Qué más puede hacer un periódico que aportar el nombre o alias del picoletto, la unidad a la que está adscrito, el último borrón que mancha su hoja de servicios y hasta la calle donde vive y la marca del ostentoso automóvil que utiliza?».

Finalmente, en la edición del diario del jueves 16 de septiembre de 2004 se publicó, en portada y en la página 12, una noticia titulada «13-M: La mariscada de la infamia», en la que se daba cuenta de que el mencionado Guardia Civil, cuarenta y ocho horas después de la matanza del 11 de marzo de 2004, había acudido a celebrar un cumpleaños en una marisquería de Madrid, reunión en la que se encontraba la persona a la que vendió las armas que «después pudieron utilizar los terroristas islamistas» en el citado atentado.

El 13 de septiembre de 2004, don Pedro García Domingo remitió mediante burofax un requerimiento dirigido al director del periódico a fin de que procediera a la publicación del escrito de rectificación que acompañaba, en el que sostenía que eran falsas e inexactas las informaciones publicadas.

Transcurrido el plazo legalmente establecido para la publicación de la rectificación sin que ésta se hubiera producido, presentó demanda contra el director del periódico «El Mundo», ejercitando acción de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, para que fuera ordenada la publicación en el referido periódico de la rectificación que solicitó en su día respecto de la noticia recogida en la edición de 6 de septiembre de 2004, o, en su defecto, de otro texto que él mismo proponía como alternativo. La parte demandada opuso la excepción de falta de legitimación activa del actor, porque a su juicio



no pudo considerarse aludido en la información difundida en el periódico, al no identificársele por su nombre y apellidos; y asimismo alegaba, en segundo lugar, en cuanto al fondo del asunto, que el derecho de rectificación no puede ser de apreciación automática, sino que debe condicionarse a la veracidad de su contenido, por lo que en el caso de autos, al ser la noticia verdadera, no cabía rectificación alguna.

En cuanto a los fundamentos jurídicos para decidir en la acción de amparo, el Tribunal Constitucional consideró:

“La resolución del presente recurso de amparo requiere entrar en la consideración del alcance que debe reconocerse al derecho de rectificación, y del cometido de los órganos judiciales en cuanto a la investigación de la veracidad de lo publicado o indistintamente de la veracidad del relato del escrito de rectificación, antes de acordar la inserción de la rectificación solicitada en el medio de comunicación correspondiente. Con carácter previo al pronunciamiento sobre dicha cuestión sustantiva, cuya fundamentación en el recurso de amparo reside en la posible lesión del art. 20.1 d) CE, es necesario dar respuesta a la alegación de la posible vulneración del art. 24.1 CE. La afectación del derecho a la tutela judicial efectiva, residiría, según el demandante, en la incorrecta concreción que realizan los órganos judiciales del objeto del procedimiento de rectificación. Sin necesidad de entrar en la más que precaria invocación de ese derecho en el proceso, como prueba el escrito del recurso de apelación que obra en las actuaciones, o en el hecho de que dicha queja podría entenderse subsumida en la segunda, vinculada al art. 20.1 d) CE, al articularse con idéntico soporte argumental (exclusión en el juicio verbal sobre la rectificación del examen de la veracidad), la denuncia relativa a esta vertiente del derecho a la tutela judicial no puede prosperar.

En efecto, frente a lo alegado por el recurrente, como dijéramos ya en la STC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 6, los órganos judiciales competentes para conocer de las demandas de rectificación no se limitan a dar curso automáticamente a la pretensión formulada por el aludido, sino que ejercen una función de control jurídico de los requisitos legales de la rectificación instada. De ello es buena muestra en el presente caso la decisión judicial de reducción del texto presentado para la inserción en el periódico, excluyendo

referencias improcedentes «por no tratarse de hechos de la información o referidos directamente al actor»”.

“Más aún,-prosigue el Tribunal- la norma establece asimismo la facultad de los órganos judiciales de rechazar a limine, mediante inadmisión de la demanda, aquellas pretensiones de rectificación manifiestamente improcedentes (art. 5, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1984). Lo cual permite al órgano jurisdiccional denegar la rectificación de una información que, en el momento en que se solicita, resulte o bien totalmente inverosímil, o bien a todas luces cierta y evidente, o bien se trate de una información inocua, que en modo alguno pueda causar perjuicio al demandante. La decisión judicial, pese a la sumariedad del proceso, ha de derivar de la previa indagación y control de los presupuestos de Derecho, formales y sustantivos, y acompañarse de la explicitación de las razones que motivan la estimación o, en su caso, la desestimación de la demanda.

Por ello, debe negarse que la previsión legal, y la interpretación judicial de la norma, constituyan un expediente de «concesión automática del derecho de rectificación, automatismo que ni el derecho en general, ni las normas procesales de la Ley Orgánica aplicada permiten» (STC 264/1988, de 22 de diciembre, FJ 5).

Puesto que la indagación judicial queda limitada al examen de la «manifiesta improcedencia», es obvio que no se prejuzga la fidelidad a la verdad de la narración que ofrece la rectificación, sino su aparente verosimilitud, a expensas de ulteriores comprobaciones en otro contexto o, en su caso, en otro proceso. La garantía de la tutela judicial del art. 24.1 CE no impone la exigencia del examen de la verdad en el marco sumario del procedimiento verbal. El tiempo requerido para ello frustraría en muchos casos la propia finalidad y sentido del derecho de rectificación (STC 35/1983, de 11 de mayo, FJ 4), ya que la efectividad de éste va asociado a la inmediatez de su ejercicio. El examen de la veracidad tampoco representa una exigencia material que se deduzca de lo dispuesto en el art. 20.1 d) CE, como veremos a continuación.

La configuración normativa del proceso verbal sobre la rectificación, y la interpretación judicial de su objeto y límites de enjuiciamiento, en los términos que el recurrente censura las resoluciones impugnadas, resultan, por tanto, acordes con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”.

En el Fundamento Jurídico 3º, el Tribunal Constitucional afirma que para “ abordar la cuestión de fondo —la proyección del art. 20.1 d) CE como límite al derecho de rectificación que obligara a un examen de la veracidad de la información— es conveniente comenzar con una delimitación del objeto preciso de la queja. Se advierte, desde este análisis, que la lesión denunciada en el recurso de amparo no encuentra fundamento, ad casum, en la inveracidad, inexactitud o inverosimilitud de la rectificación que los órganos judiciales han ordenado publicar al diario «El Mundo». En efecto, las resoluciones recurridas han obligado al periódico a insertar en su edición una narración, presentada por la persona aludida, que no resulta inexacta o falsa de forma manifiesta. Por su parte, el órgano judicial cuando confirma la procedencia de la rectificación, no está otorgando ninguna carta de autenticidad a la versión ofrecida por quien ejercita el derecho. Por ello, el hecho de que la propia ley, y en consonancia, el órgano judicial en este caso, advierta que no se permiten apostillas o comentarios a la rectificación tampoco significa que el medio de comunicación tenga que desdecirse de la versión de los hechos inicialmente publicada, puesto que el órgano judicial tampoco ha prejuzgado su veracidad. En cuanto al requisito relativo al perjuicio que la publicación de la noticia ha producido o puede producir a la persona aludida, es evidente que en este caso no puede dudarse de la afectación a la reputación que deriva de la atribución de la comisión de delitos graves.

La alegación que presenta el recurrente se articula básicamente al margen de la cuestión de la veracidad de la noticia en el caso concreto (aunque ciertamente se invoque), trasladando el argumento hacia la crítica de la propia Ley Orgánica 2/1984, o más precisamente, de la interpretación judicial sobre el objeto procesal y sobre la dinámica de enjuiciamiento que no incluye la comprobación de la verdad como cometido del juicio verbal sobre la rectificación. Interpretación acogida por los órganos judiciales cuyo razonamiento discurre de forma acorde con nuestra doctrina constitucional.

A este respecto, como destaca el Ministerio Fiscal, no puede olvidarse que el ordenamiento jurídico ofrece las pertinentes acciones penales y civiles cuyo ejercicio en el marco de los respectivos procedimientos constituyen la vía adecuada para la investigación de la verdad de los hechos publicados o difundidos. A través de tales procedimientos podrá dilucidarse la certeza o la falsedad de los hechos o las informaciones, con los efectos propios de la cosa juzgada.

A diferencia del cometido propio de las vías referidas, el juicio verbal establecido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, regula el ejercicio del derecho de rectificación atendiendo a una finalidad precisa y distinta a la correspondiente a las acciones aludidas.

En efecto, hemos establecido en la STC 168/1986, de 22 de diciembre, que el llamado derecho de rectificación regulado en esa norma consiste en la facultad otorgada a toda persona, natural o jurídica, de «rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio», conforme a la dicción del art. 1 de aquella ley; y que ese derecho se satisface mediante la publicación íntegra y gratuita de la rectificación, referida exclusivamente a los hechos de la información difundida, en los términos y en la forma que la ley señala (arts. 2 y 3), de manera que el derecho de rectificación constituye un medio del que dispone la persona aludida para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son exactos; que esta legítima finalidad preventiva, independiente de la reparación del daño causado por la difusión de una información que se revele objetivamente inexacta, quedaría frustrada en muchos casos por la demora en la rectificación pretendida; y, en fin, en lo que ahora importa, que

«[l]a sumariedad del procedimiento verbal, de la que es buena muestra que sólo se admitan las pruebas pertinentes que puedan practicarse en el acto [art. 6 b)], exime sin duda al Juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados como de la que concierne a los contenidos en la

rectificación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación procesal de los hechos efectivamente ciertos» (STC 168/1986, FJ 4).

No es inexcusable, en conclusión, una indagación de la verdad, indagación que encuentra su acomodo en otros cauces procesales, ya que afectaría a la inmediatez necesaria para garantizar la efectividad del derecho de rectificación.

4. La rectificación queda conformada, ante todo, como un derecho de la persona aludida a ejercer su propia tutela, un derecho reaccional de tutela del honor, o de bienes personalísimos asociados a la dignidad, al reconocimiento social o a la autoestima frente a informaciones que incidan en la forma en que una persona es presentada o expuesta ante la opinión pública. Una forma de reacción de urgencia, que puede, en su caso, anticipar el posterior ejercicio de otras vías legales de tutela, civil o penal, en orden al enjuiciamiento de la lesión aducida, y a la reparación pertinente en su caso.

Pero junto a ese carácter, la rectificación opera como un complemento de la información que se ofrece a la opinión pública, mediante la aportación de una «contraversión» sobre hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la noticia difundida por un medio de comunicación. La relevancia pública del espacio informativo en el que queda comprometida la formación de la opinión, justifica la acogida de versiones que permitan el contraste de informaciones en ese mismo espacio mediante la aportación de datos por quien se ve implicado en alusiones que considera inciertas y lesivas de su reputación. Por ello, si bien el derecho de rectificación constituye un derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral, a la vez opera como instrumento de contraste informativo que supone «un complemento de la garantía de libre formación de la opinión pública» (SSTC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 5, y 51/2007, de 12 de marzo, FJ 8).

No puede considerarse impedimento de aquella libertad, sino favorecedora de la misma, la rectificación pertinente que permite contrastar versiones contrapuestas, en tanto ninguna haya sido acreditada como exacta, o desacreditada como falsa de forma definitiva, esto es con efectos de cosa juzgada (STC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 5, y AATC 70/1992, de 4 de marzo, FJ 1, y 49/1993, de 8 de febrero, FJ 2).

5. En cuanto al primer aspecto referido, la rectificación constituye un derecho subjetivo que, además de su función autónoma, puede ser el preludio del posterior ejercicio de las acciones civiles o penales correspondientes. La omnipresencia mediática característica de nuestro tiempo, que nos sitúa en la denominada «sociedad de la información», incrementa la incidencia y el poder de los medios de comunicación con su conocida multiplicidad y velocidad de difusión de noticias y opiniones. La exposición creciente de los ciudadanos a la interferencia de los medios, aumenta por ello la vulnerabilidad de la autonomía personal en el control de informaciones que puedan implicarla. El derecho de rectificación, en este contexto, cobra mayor significado como instrumento inmediato de tutela, que puede actuar con carácter previo, en su caso, a la activación de otros mecanismos procesales. Por ello, no puede acogerse la invocación que hace el recurrente a la transformación de la realidad social como fundamento de su pretensión de una reinterpretación restrictiva del derecho de rectificación, pues precisamente la transformación social apuntada hace aconsejable de todo punto el reforzamiento de los mecanismos de tutela frente a posibles excesos en la información que el derecho de rectificación contribuye a contener.

La rectificación reduce el riesgo de confusión entre información publicada y verdad pues no puede descartarse que una información veraz conforme a la diligencia profesional exigible, resulte a la postre, equivocada. Por ello, incluso cuando se trata de imputaciones que pudieran dar lugar a una investigación penal, como es el caso, la persona aludida conserva su derecho a la contradicción, que en el espacio informativo público encuentra su cauce a través de la petición de rectificación de una noticia que no ha podido todavía pasar el filtro de la prueba definitiva de la verdad procesal.

La presentación de una noticia constituye por lo general el resultado de una reconstrucción o interpretación de hechos reales (STC 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 10), en la que intervienen distintos factores, que pueden conducir a versiones dispares sobre una misma realidad. Desde este prisma, la configuración normativa dada al derecho de rectificación permite que la persona aludida aporte su propia versión de los hechos en salvaguarda de su honor y patrimonio moral, ofreciéndola para su contraste con aquella otras versiones vertidas en el mismo espacio público informativo a efectos de la pertinente formación de la opinión pública.

Por otro lado, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del aludido, el derecho de contestación supone un complemento de la garantía de la opinión pública libre. Garantía a la que están llamados de manera esencial y primaria, pero no exclusiva y excluyente, los medios de comunicación.

Como decíamos en nuestra STC 168/1986, de 22 de diciembre, la divulgación de dos versiones diferentes de unos mismos hechos, cuya respectiva exactitud no ha sido declarada por ningún pronunciamiento firme de los órganos judiciales competentes, no restringe el derecho a recibir información veraz, ya que, como quedó enunciado en los fundamentos jurídicos anteriores, el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece incluso el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental procura (en el mismo sentido, STC 51/2007, de 12 de marzo, FJ 8). Asimismo, hemos recordado en la STC 50/2010, de 4 de octubre, FJ 5, que la libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE no se erige únicamente en derecho privativo de su titular, sino en una pieza esencial en la configuración del Estado democrático, garantizando la formación de una opinión pública libre y la realización del pluralismo como principio básico de convivencia.

De acuerdo con las observaciones expuestas, no hay duda de que la rectificación, judicialmente ordenada, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, de una información que quien ejerce el derecho considera inexacta y lesiva de sus

intereses, no menoscaba el derecho fundamental proclamado por el art. 20.1 d) CE, ni siquiera en el caso de que la versión contenida en la rectificación pudiera revelarse a posteriori como incierta y no ajustada a la realidad de los hechos, dado que en los procesos judiciales que dieron lugar a las resoluciones recurridas, la indagación de la verdad no constituye su objeto procesal (por todas, STC 51/2007, de 12 de marzo, FJ 9).

La inserción de la rectificación en la que se disiente de los hechos divulgados no impide al medio de comunicación difundir libremente información veraz, ni le obliga a declarar que la información aparecida en sus páginas sea incierta, ni a modificar su contenido. Tampoco puede considerarse como una sanción jurídica derivada de la inexactitud de lo publicado. Al contrario, la versión de los hechos distinta y contradictoria ni siquiera limita la facultad del medio de ratificarse en la información inicialmente suministrada o, en su caso, aportar y divulgar todos aquellos datos que la confirmen o avalen, puesto que la inserción de la rectificación interesada en la publicación, como venimos reiterando, no lleva aparejada la declaración de su veracidad. Una vez excluidas todas las lesiones alegadas por el recurrente en su escrito de demanda, procede denegar el amparo solicitado.

#### **VII.5.8. Caso “Florentino c. La Razón” – STS 2044/2012<sup>432</sup>**

Si bien el presente caso se encuadra en el reclamo de protección civil del derecho al honor, cabe tener en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Supremo en relación al derecho de rectificación que previamente se había ejercitado.

Así, en cuanto a los hechos que motivaron la demanda, es dable tener en cuenta que se refirieron a una publicación en el diario La Razón de 23 de noviembre de 2005 bajo el rótulo "Empresarios marbellíes denuncian al embajador para la reforma de exteriores por tráfico de influencias", que el demandante consideró una intromisión ilegítima en su

---

<sup>432</sup> STS 2044/2012 - ECLI:ES:TS:2012:2044. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Sede: Madrid Sección: 1. Nº de Recurso: 137/2010. Nº de Resolución: 851/2011. Procedimiento: Casación. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS. Tipo de Resolución: Sentencia. Disponible en versión digital. Buscador de Jurisprudencia del Poder Judicial Español <http://www.poderjudicial.es/>



derecho al honor. Por ello D. Florentino presenta acción de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo.

En lo que aquí interesa, el Tribunal Supremo recordó que el hecho de que haya habido sentencia favorable en cuanto al ejercicio del derecho de rectificación, tal declaración, incluso judicial, mediante sentencia “no acredita necesariamente la inveracidad de la información publicada. Como señala la SAP núm. 103/2006 Navarra (Sección 3), de 30 junio "La sumariedad del procedimiento verbal establecido para su ejercicio, de la que es buena muestra que solo se admitan las pruebas pertinentes que puedan practicarse en el acto (art. 6.b), exime sin duda al juzgador de una indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados como de la que concierne a los contenidos en la rectificación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión de un escrito de réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos de cosa juzgada". En igual sentido la SAP núm. 146/2006 Barcelona (Sección 19), de 22 marzo que señala "el ejercicio del derecho de rectificación, interpretado de acuerdo con el sentido otorgado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/1986 de 22 de diciembre , y en relación con el contenido de la LO 2/1984, supone la facultad que toda persona, natural o jurídica, tiene de rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social, en relación con hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio, así artículo 1 de la norma mencionada ; la finalidad de esta acción será la publicación íntegra y gratuita de la rectificación pretendida sobre hechos incorporados en la información difundida, llevándose a cabo en el modo prevenido en los artículos 2 y 3 de la LO 2/1984 . Esta rectificación, tal y como ha destacado el mismo Tribunal Constitucional no implica menoscabo alguno para el derecho fundamental de información protegido en el artículo 20 de la CE, ni que la información objeto de rectificación no sea cierta y ajustada a la realidad sino que solo posibilita una versión de los hechos distinta y contradictoria de aquella, amparando el derecho de la colectividad y de los individuos que la componen a recibir libremente información veraz. De este modo la

decisión judicial que ordena la rectificación no ha de acreditar, por la propia naturaleza del derecho ejercitado y los límites procesales en que se desenvuelve la acción de rectificación, la veracidad de esta; en cuanto la investigación de la verdad y la declaración de los hechos ciertos siempre puede instarse y determinarse «a posteriori» mediante las acciones y procedimientos plenarios que el ordenamiento arbitra al efecto" (Cons. 6º).

#### **VII.5.9. Caso “Luis María c. ABC” - STS 3847/2014<sup>433</sup>**

El más reciente caso al término del presente trabajo, en el que se ha expedido la Sala en lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se estimó parcialmente la demanda, los hechos fueron los siguientes. D. Luis María interpuso una demanda de juicio ordinario sobre protección de su derecho al honor contra la sociedad mercantil Diario ABC, S.L.. En la demanda se relataba, en síntesis, que: a) en la edición del 11 de octubre de 2009 del diario ABC se publicó una crónica con el siguiente titular: " Olegario intentó comprar los favores de 15 políticos con cinco millones de euros"; b) en dicha crónica, con el epígrafe "favores políticos", apareció en la tercera fila, en el margen inferior derecho, una foto del demandante, "relacionándolo con un presunta 'trama de corrupción' "; c) toda la información contenida en la noticia "con referencia a la persona e imagen de Don Luis María " era falsa y atentatoria contra "su prestigio profesional, el honor, la buena imagen y la reputación"; d) el demandante remitió a la sociedad mercantil demandada el 13 de octubre de 2009 un burofax en el que ejerció su derecho de rectificación; y e) la rectificación no se habría producido en los términos que establece la LO 2/1984 pues: i) no se publicó dentro de los tres días siguientes al de la recepción de la solicitud de rectificación, sino dentro de los cinco días siguientes, el lunes 19 de octubre de 2009, a pesar de que en los días precedentes en el diario ABC se publicaron noticias relacionadas con aquélla en la que se implicaba al demandante, con la intención de "evitar la difusión de

---

<sup>433</sup> Sentencia del Tribunal Supremo TS 3847/2014 - Id Cendoj: 28079110012014100463. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid, Sección: 1, Nº de Recurso: 2579/2012; Nº de Resolución: 538/2014. Procedimiento: CIVIL; Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS; Tipo de Resolución: Sentencia. Disponible en versión digital. Buscador de Jurisprudencia del Poder Judicial Español <http://www.poderjudicial.es/>

la rectificación en fin de semana, que son días de mayor tirada y lectura de periódicos"; y ii) en la rectificación se hizo constar que la solicitaba el abogado de D. Teofilo, siendo innecesaria la mención de la relación profesional entre el demandante y D. Teofilo "y con claro ánimo de evitar que la rectificación se produjese conforme marca la Ley Orgánica de Rectificación, esto es, 'sin comentarios ni apostillas' siendo dicha mención innecesaria para cumplir con el deber de rectificación y malintencionada, pues "la forma en que se rectificó con nuevas alusiones en el medio de comunicación al cliente genera malestar en el abogado, que lejos de ver que se rectifica, se ve involucrado de nuevo en la noticia junto con el cliente, cuya identidad resultaba totalmente irrelevante para rectificar la noticia".

En el presente caso, no se trató solamente el derecho de rectificación, sino también la protección civil del derecho al honor. En lo que interesa a los fines del presente trabajo, es necesario destacar lo dicho por el Tribunal Supremo en orden al derecho de respuesta.

Al respecto, el Tribunal Supremo entendió que de la comparación del texto de rectificación enviado por el demandante al diario ABC en relación al contenido publicado por éste para comprobar que sí se efectuó la rectificación interesada, “pues se incluyó en el texto de rectificación el contenido íntegro del que el demandante incluyó en su carta. Además, las precisiones efectuadas por el diario al publicar la rectificación no la convierten en inidónea a los efectos de la valoración probatoria que ahora se analiza, pues el alegado incumplimiento de los requisitos del art. 3 de la LO 2/1984, de 26 de marzo , reguladora del ejercicio del derecho de rectificación, tendría efectos únicamente para permitir el ejercicio de la acción de rectificación ante el Juez de Primera Instancia correspondiente, tal como expresa el art. 4 de la misma LO 2/1984 , pero no para determinar si existió o no rectificación y la intensidad de esta”. (Cons. 6º, párrafo final).

Al tratar la cuantía de la indemnización, pero ya en cuanto a la lesión al honor del demandante, lo relaciona con el derecho de rectificación considerando: En este aspecto, el hecho de que el diario ABC publicara, en los términos que hemos señalado anteriormente y que hemos considerado idóneos para entender que se produjo una efectiva rectificación, el escrito de rectificación del demandante tampoco elimina la intromisión ilegítima, porque

"como declararon las sentencias del Tribunal Constitucional nº 40/92 y 52/96 el ejercicio del derecho de rectificación no suplanta la acción de protección del derecho al honor, aunque pueda influir en la cuantía de la indemnización, y ambas acciones son por tanto compatibles" ( STS 05-07-2004, rec. n.º 245/2000 , citada por la STS 23-01-2014, rec. n.º 1986/2011 ), como por demás resulta de la nueva redacción del art. 9 LO/1982, en virtud de la LO 5/2010 pero no aplicable al presente caso por razones temporales, al prever la indemnización de daños y perjuicios "sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto", quedando la cuestión más clara que en la anterior redacción cuando aludía, entre las medidas comprendidas en la tutela, "el reconocimiento del derecho a replicar".

Aplicando dicha doctrina al caso enjuiciado, teniendo en cuenta entonces que sí que hubo rectificación de la información publicada por el diario ABC, así como las pautas para la fijación de la indemnización por el daño moral contenidas en el art. 9.3 LO 1/1982 , (circunstancias del caso, gravedad de la lesión efectivamente producida y la difusión o audiencia del medio a través del que esta se ha producido) y lo alegado como fundamento del motivo único del recurso de casación de la sociedad mercantil demandada, consideramos adecuada la cifra de 4.000 euros. Este pronunciamiento determina, a su vez, la estimación del único motivo del recurso de casación, pues en este se discutía la valoración por la sentencia recurrida de las circunstancias concurrentes para determinar la cuantía de la indemnización, cuestión que se acaba de resolver” (Cons. 7º).

Abordada la jurisprudencia trazada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional es dable destacar los aspectos que marcan su evolución y su interpretación del derecho de rectificación. Así, se resalta la vigencia de la STC 35/1983, que si bien tal como se ha mencionado es anterior a la Ley Orgánica 2/1984, se adelantó en el abordaje legal que el instituto ha tenido en la norma correspondiente.

De este modo, la naturaleza instrumental de la figura objeto de análisis, su referencia sólo a hechos y la exclusión por ende de las opiniones, la necesidad de garantizar un procedimiento caracterizado por la sumariedad para hacer efectivo el derecho de

rectificación y una garantía razonable para el medio en cuanto a la fundamentación de los hechos rectificadores y sustentados por el lesionado han trasvasado el plano doctrinario jurisprudencial hasta hacerse efectivos en la Ley Orgánica reguladora de la materia, y a su vez su interpretación se mantiene vigente y es reiteradamente citada por la jurisprudencia posterior a la norma.

La finalidad y eficacia que distingue al derecho de rectificación, conformando un ámbito propio y distinto de la L.O 1/1982 y del art. 1902 del Código Civil, que fue oportuna y separadamente tratado, como así también la plena compatibilidad de todos estos medios de protección conforman doctrina reiterada de los tribunales españoles.

Asimismo, el derecho de rectificación o respuesta debe entenderse como integrador del derecho a dar y recibir información, constituye un mecanismo reparador del honor, la intimidad y la propia imagen de la persona afectada y aludida y a su vez contribuye con la veracidad de la información exigida por la Constitución Española, guía que debe presidir el ejercicio profesional de todo informador.

Los contornos del derecho de rectificación por ende se han ido afianzando y si bien la ponderación judicial en cada caso concreto hará variar la aplicabilidad del instituto de acuerdo a las circunstancias particulares, no es menos cierto que ciertas pautas interpretativas consolidan la doble faceta de un derecho que maximiza a la libertad de expresión como manifestación esencial de la vida democrática.

El desarrollo de esta interpretación del Tribunal Constitucional español, no ha quedado solamente en el ámbito judicial comunicacional de ese país, sino que también, como hemos destacado, ha sido tomado como fuente y pauta interpretativa por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

## **VII.6. El derecho de rectificación o respuesta en el sistema europeo de derechos humanos**

Centrándonos en el estudio concreto del derecho de rectificación, diremos en primer lugar que el Convenio de Roma no contempla específicamente este derecho, en comparación con la Convención Americana de Derechos Humanos que sí lo prevé expresamente en el Artículo 14 y que citamos aquí a los meros efectos de resaltar la comparación, pues ya nos hemos referido al desarrollo del mismo en el ámbito del sistema interamericano.

En segundo lugar, es necesario decir que la ausencia explícita de previsión convencional europea del instituto del derecho de rectificación no lo excluye del sistema de protección, pues el mismo sin duda, se encuentra integrado al derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en el marco de una interpretación dinámica del artículo 10 del Convenio de Roma de 1950.

Por otra parte, si bien no se ha encontrado en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo un pronunciamiento específico referido al derecho de rectificación, la jurisprudencia del TEDH elaborada sobre el artículo 10 marca una pauta interpretativa muy importante, más que nada cuando se refiere a la diferenciación entre hechos y juicios de valor, cuestión que quedó expuesta en el caso “Lingens” y que se cree oportuno analizar debido a su repercusión jurisprudencial y al trasvasamiento que se puede realizar a partir de ella con respecto al derecho de rectificación.

Si pretendemos hacer un seguimiento del tema en cuestión, diremos en primer término que la diferenciación entre hechos y juicios de valor que realiza el Tribunal Europeo ha sido tomado por la jurisprudencia española, y ésta a su vez, por la jurisprudencia argentina.

### **VII.6.1. Las críticas al Canciller B. Kreisky: la sentencia “Lingens” de 8 de julio de 1986<sup>434</sup>**

El 9 de octubre de 1975, cuatro días después de las elecciones legislativas en Austria, S. Wiesenthal, presidente del Centro de Documentación Judía, acusó al Presidente del Partido Liberal de Austria de haber servido durante la segunda guerra mundial en la primera brigada de infantería de las SS, que había tomado parte en masacres de civiles tras las líneas alemanas en Rusia. M. Peter, el aludido presidente del Partido Liberal, no negaba haber pertenecido a aquella unidad, pero afirmaba que no había estado mezclado en las atrocidades cometidas por ella.

#### **Antecedentes Fácticos**

El canciller austríaco saliente B. Kreisky había tenido reuniones en la cancillería con M. Peter, en el marco de las conversaciones habituales entre jefes de partidos a los efectos de formación del gobierno; incluso se había especulado con la posibilidad de un gobierno de coalición Kreisky-Peter. Pero las elecciones dieron la mayoría absoluta a los socialistas y no hubo necesidad de ello.

No obstante, en una entrevista concedida por Kreisky un día después de las manifestaciones de Wiesenthal sobre Peter, los periodistas le preguntaron sobre este asunto y el canciller defendió vigorosamente a Peter calificando la organización y los métodos de Wiesenthal de “mafia política” y de “métodos de mafia”. Lo que fue publicado así al día siguiente.

En relación con estas entrevistas, el periodista P.M. Lingens publicó dos artículos en la revista Profil de Viena. En el primero, titulado “El asunto Peter”, relataba los acontecimientos citados, contaba las actividades de la primera brigada de infantería de las SS, e informaba del papel jugado por Peter en los procesos seguidos contra miembros de

---

<sup>434</sup> Resolución de 8 de julio de 1986 en “Publications of the European Court of Human Rights”. Serie A. 103 (1986).

esa brigada. Concluía que si Peter tenía, sin duda, derecho a la presunción de inocencia, no era menos cierto que su pasado lo hacía inaceptable como hombre político. Por otro lado, el periodista arremetía contra la actitud de Kreisky de proteger a Peter por razones políticas. En cuanto a las críticas de Kreisky contra Wiesenthal, decía el informador que “viniendo de cualquier otro, se hablaría sin duda del oportunismo más detestable”.

El segundo artículo, publicado una semana después, se titulaba “Reconciliarse con los nazis, pero ¿cómo?”. Dedicaba muchas páginas a reflexionar sobre este asunto, y de vez en cuando, picoteaba sobre el canciller: “A decir verdad, no se puede refutar el comportamiento del Sr. Kreisky de manera racional, sino solamente de manera irracional: es inmoral y desprovisto de dignidad”, además, decía, de superfluo, pues los austríacos no pueden reconciliar su pasado sin buscar ganarse el favor de los antiguos nazis, minimizar el problema de los campos de concentración o denigrar a Wiesenthal explotando el antisemitismo. Seguía luego una larga exposición sobre los diferentes tipos de responsabilidades encontrables en toda esta triste historia y concluía: “si Bruno Kreisky hubiera usado su reputación personal, como lo ha hecho para proteger al Sr. Peter, para alumbrar esta distinta y mejor Austria, hubiera dado a este país – treinta años después- aquello de lo que tiene más necesidad para dominar su pasado: una mayor confianza en sí mismo”. El artículo se cerraba con una nueva referencia al affaire Peter y una última valoración a la reacción de Kreisky. Sostenía que las circunstancias del asunto hacían a Peter indigno de la función de diputado, de hombre político y de miembro del gobierno; esto, para el periodista, era “una exigencia mínima de ética política”. “La monstruosidad”, terminaba diciendo, no residía en que Wiesenthal hubiera puesto la cuestión sobre el tapete, sino en que Kreisky deseara retirarla de él.

El canciller B. Kreisky siguió una acción penal contra el periodista P.M. Lingens invocando el artículo 111 del Código Penal austríaco, que sanciona con penas privativas de libertad de seis meses o más, o una sanción pecuniaria, a quien acuse a otro de tener un “carácter o una disposición de espíritu despreciable o lo declare culpable de una actitud contraria al honor o a las buenas costumbres susceptible por su naturaleza de hacerlo despreciable a los ojos de la opinión pública o de rebajarlo ante ella”. Según el artículo 112



del mismo Código “la prueba de la verdad y la de la buena fe no se admiten sino cuando el autor invoque la exactitud del aserto o su buena fe”.

En marzo de 1979 el Tribunal Regional de Viena declaró a Lingens culpable de difamación por haber utilizado las expresiones “el oportunismo más detestable”, “inmoral” y “desprovisto de dignidad”. Tanto Lingens como Kreisky apelaron. El Tribunal de Apelación anuló las actuaciones por motivos formales y devolvió el asunto al Tribunal Regional. Este, subsanados los defectos, repitió exactamente su fallo añadiendo ahora, sobre la alegación del periodista de que lo que había publicado era verdad, la consideración de que aunque en este caso (por tratarse de opiniones) la prueba de la verdad no era posible, incumbía al legislador y no al juez hacer más fácil esa prueba.

El Tribunal de Apelación de Viena redujo en una sentencia de 1981 la sanción económica impuesta al periodista, pero mantuvo la declaración de que sus artículos eran difamatorios para Kreisky. Aparecía en esta nueva sentencia la afirmación de que la misión de la prensa consiste en comunicar informaciones, mientras que su interpretación debe dejarse ante todo a los lectores.

Cuando Lingens planteó el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión lo declaró admisible y lo remitió al Tribunal, que lo falló en una sentencia del 8 de julio de 1986.

#### Fundamentos Jurídicos:

La sentencia declara contrarias al artículo 10 del Convenio Europeo, que proclama la libertad de información, las resoluciones judiciales que condenaron a Lingens por difamación.

La argumentación jurídica de la sentencia gira sobre la interpretación misma del artículo 10 del Convenio. Se admiten en él las restricciones a la libertad de expresión que sean “medidas necesarias en una sociedad democrática”. El recurrente planteó, por tanto,

inmediatamente si la limitación de la libertad de información que supone condenar a un periodista por criticar a un político era una medida necesaria en una sociedad democrática.

El TEDH contesta primeramente a esta cuestión. Partiendo de sus argumentaciones en las sentencias Handyside de 7 de diciembre de 1976, Sunday Times de 26 de abril de 1979, y Barthold de 25 de marzo de 1985, explica el Tribunal que el adjetivo “necesario” debe entenderse como una exigencia de que medie una necesidad social imperiosa. Y, acto seguido, aun reconociendo el margen de discrecionalidad con que cuentan los Estados que han suscrito el Convenio Europeo para apreciar esa necesidad, reclama el Tribunal para sí la competencia para decir si la injerencia atacada es “proporcionada al fin legítimo perseguido” y si los motivos invocados para aplicarla son “pertinentes y suficientes”.

La sentencia, establecida la interpretación del artículo 10.2 del Convenio en el sentido indicado, desarrolla su argumentación para resolver el caso en tres bloques bien definidos: primero, explica la significación jurídica de la libertad de información; segundo, tiene en cuenta el objeto de la información (personas públicas, y debate público); y tercero, determina si la información consiste en hechos o en juicios de valor u opiniones, diferencia de la que extrae consecuencias acerca de la carga de la prueba.

En cuanto a lo primero, el Tribunal afirma que la libertad de expresión y de información consagrada en el artículo 10.1 del Convenio, constituye “uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno”...ello vale no solamente para las “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente y consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que hieran, choquen o inquieten. Así lo quiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin el que no existe sociedad democrática. Estos principios, sigue diciendo la sentencia, “revisten una importancia particular para la prensa: si no debe franquear los límites fijados en vista, principalmente, de la protección de la reputación de los demás, le incumbe, sin embargo, comunicar informaciones e ideas sobre cuestiones debatidas en la arena política, o sobre aquellas que conciernen a otros sectores

de interés público”. “A su función, que consiste en difundir, se suma el derecho del público de recibir esa comunicación”.

Llegado a este punto el Tribunal Europeo rechaza de forma expresa la opinión que mantuvo el Tribunal de Apelación de Viena, de que la misión de la prensa consista en comunicar informaciones, dejando su interpretación al lector, es decir, divulgar hechos sin valorarlos ni opinar.

El segundo aspecto que considera la sentencia es la diferente configuración que la libertad de información debe tener cuando se tratan asuntos públicos o se refiere a personas públicas. “La libertad de prensa proporciona a la opinión pública los mejores medios de conocer y juzgar las ideas de los dirigentes. Más generalmente, el libre juego del debate político se encuentra en el corazón mismo de la noción de sociedad democrática que domina el convenio entero”. De lo que se sigue que la libertad de información prevalece sobre los demás derechos individuales y, en particular, al honor, cuando se ejerce legítimamente en relación con los mencionados asuntos y personas públicas: “los límites de la crítica admisible son más anchos respecto de un hombre político, considerado en esta cualidad, que de un simple ciudadano: a diferencia del segundo, el primero se expone inevitable y conscientemente a un control atento de sus hechos y gestos, tanto por los periodistas como por la masa de los ciudadanos; debe, en consecuencia, mostrar mayor tolerancia”.

Todo ello no significa que el honor de los hombres públicos –aun considerados en su faceta pública- carezca de protección. Pero los derechos de éstos deben balancearse con los intereses de la libre discusión de cuestiones políticas. En esa ponderación, y antes de practicarla, debe tenerse en cuenta la singular importancia de la libre información en la sociedad democrática, para determinar si su uso se ha desenvuelto dentro de los límites legítimos en que puede imponerse al derecho al honor de un hombre público. El contenido de la información y el contexto en el que se produce (una controversia postelectoral, a juicio del Tribunal, en el caso Lingens-Kreisky) son elementos de valoración necesarios.

Las piezas que componen el núcleo preeminente de la libre información no se exponen en la sentencia con más detalle.

El tercero y último bloque de la argumentación de la sentencia se centra en aceptar la distinción entre “informaciones” y “juicios de valor” u opiniones (que como se ha visto en el párrafo 3.3.1, había rechazado la Comisión en el primer asunto Lingens). Dice la sentencia que “ha lugar a distinguir con cuidado entre hechos y juicios de valor.....si la materialidad de los primeros se puede probar, los segundos no se prestan a una demostración de su exactitud”.

Este último concepto vertido por el TEDH es de vital importancia para el entendimiento del derecho de rectificación, pues este se acciona, a partir de la mención de hechos inexactos que aludan a determinada persona y puedan ocasionarle perjuicio. He aquí la clave para la comprensión del instituto en cuestión, y si bien, prima facie, la presente apreciación puede parecer evidente, ello es así en el plano teórico, y su delimitación se torna compleja y polivalente a la hora de la presentación de un caso concreto. Por eso se ha creído necesario el análisis particular de la sentencia del caso Lingens, y también porque suele ser citada en las sentencias del Tribunal Constitucional español, valiendo como ejemplo, la STC 105/1990, de 6 de junio<sup>46</sup>.

#### **VII.6.2. La Resolución 74 del Comité de Ministros del Consejo de Europa**

Mediante la Resolución 74, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 2 de julio de 1974, encontramos en el ámbito europeo un reconocimiento expreso a nivel supranacional del derecho de rectificación o respuesta que deviene en la recomendación a los países miembros de la Unión Europea de tomar medidas que lo garanticen fácticamente en cada uno de ellos:

El Comité de Ministros, en la fundamentación de esta norma sostiene:

---

<sup>46</sup> STC 105/1990, 6 de junio. Sala 1ra. BOE de 5 de julio de 1990. Recurso de amparo núm. 1695/1987. “Caso José María García”.

“Considerando que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridad pública, y sin considerar fronteras, así como lo prevé el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Considerando que en términos de la misma disposición, el ejercicio de dicha libertad comparte los deberes y las responsabilidades en concreto respecto a la protección de la reputación o los derechos de otros.

Considerando que es deseable poner a disposición del individuo los medios adecuados para protegerle contra las informaciones que contengan hechos inexactos que le conciernan y de dotarlo de un recurso contra la publicación de informaciones, en las que se comprenden los hechos y las opiniones, que constituyan una injerencia en su vida privada o un atentado a su dignidad, a su honor o a su reputación, que estas informaciones hayan sido puestas a disposición pública por la prensa escrita, la radio, la televisión, o por cualquier otro medio de comunicación masiva con carácter periódico.

Considerando que es igualmente del interés del individuo y del público recibir informaciones de diferentes fuentes que garanticen así la posibilidad de disponer de una información completa.

Considerando que conviene, por consiguiente, que a este respecto los mismos principios se apliquen a todos los medios de comunicación masiva, con el entendimiento de que los medios que se pondrán a disposición del individuo puedan variar según se trate de la prensa escrita, la radio o la televisión.

Considerando que conviene a este respecto tener en cuenta solamente la situación del individuo de cara a los medios de comunicación con carácter periódico, tales como la prensa, la radio y la televisión, y que concierne en particular examinar la protección del individuo contra las injerencias en su vida privada o contra los atentados a su dignidad, honor o reputación”.

Se recomienda a los Estados miembros que la situación del individuo frente a los medios de comunicación sea conforme a los siguientes principios mínimos:

2. En lo que concierne a las informaciones relativas a los individuos, publicadas por un medio de comunicación, el individuo en cuestión dispondrá de la posibilidad real de

obtener la rectificación, sin demora excesiva, de los hechos inexactos que le conciernen, y para la rectificación de aquellos en los que se justifique su interés, ésta se beneficiará, en lo posible, de la misma importancia que la publicación inicial.

3. En lo que concierne a las informaciones relativas a los individuos publicadas en los medios de comunicación, el individuo en cuestión dispondrá de un recurso efectivo contra la publicación de los hechos y las opiniones que constituyen:
  - a) una injerencia en su vida privada, salvo si un interés público, legítimo y primordial lo justifica, si el individuo ha consentido expresa o tácitamente la publicación, o si la publicación es conforme a una práctica generalmente admitida y no es contraria a la ley;
  - b) un atentado a su dignidad, a su honor y reputación, a menos que la información sea publicada con el consentimiento expreso o tácito del individuo en cuestión, o que la publicación sea justificada por un interés público legítimo y primordial y que se trate de una crítica honesta basada en hechos exactos.
4. Ninguno de los principios precedentes puede ser interpretado para justificar la censura.
5. En los principios enunciados anteriormente:
  - a) El término “individuo” se aplica a toda persona física y moral, así como a toda otra entidad, sin consideración de nacionalidad o residencia, excepto el Estado y otras autoridades públicas;
  - b) El término “medio de comunicación” se aplica a todos los medios de comunicación con carácter periódico destinados a la difusión de informaciones al público, como la prensa, la radio y la televisión.
  - c) El término “posibilidad real de obtener rectificación”, significa toda posibilidad que pueda ser utilizada como un recurso, sea jurídico, sea de otra naturaleza, como el derecho de respuesta, el derecho de corrección o el derecho de recurso ante los Consejos de Prensa;
  - d) El término “recurso” significa una forma de reparación, sea jurídica, sea de otra naturaleza, como se prevé en la Ley sobre Difamación, o aquel derecho de recurso que posee todo individuo sin limitación injustificada ante los Consejos de Prensa.
6. Los principios anteriores se aplican a todos los medios de comunicación sin distinción. Esto no excluye diferencias en la aplicación de estos principios a medios de comunicación particulares, tales como la radio y la televisión, cuando esto sea necesario

o justificado por diferencias naturales. Se recomienda a los Estados miembros que cuando procedan a la adopción de medidas legislativas concernientes al derecho de respuesta, se prevea un derecho de respuesta a la prensa, la radio y la televisión frente a cualquier otro medio de comunicación con carácter periódico, de acuerdo a los principios mencionados.

## Capítulo VIII

### Procedimiento

La ausencia de ley sobre el derecho de rectificación o respuesta en Argentina, torna dificultoso el abordaje del procedimiento, entendiendo a éste como la serie de pasos jurídicos a seguir tendentes a la realización efectiva de la respuesta o rectificación.

Sobre el procedimiento el único elemento que da la Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral 1 del Artículo 14, es que la rectificación se efectúa “por el mismo órgano de difusión” y remite a las “condiciones que establezca la ley”.

La omisión legislativa, provoca en este sentido hasta el momento un vacío y el principio de un estado de indefensión que el afectado tendrá que asumir a través del intrincado camino de acceso a la justicia, con la asistencia letrada correspondiente, y con los argumentos constitucionales, jurisprudenciales y doctrinarios existentes para la defensa de tal derecho. Es decir, el abogado tendrá que laborar sobre la base de los reconocimientos judiciales que se han hecho hasta el momento y que hemos reseñado, y a partir de allí tendrá que basar el reclamo de su cliente luchando contra el tiempo, factor esencial que va aun en más detrimento del aludido. Una rectificación que llega tardíamente, que se expresa luego de años de proceso judicial, desvanece la esencia misma del derecho de respuesta. Y para la opinión pública el olvido, el prejuicio o la condena social no tendrá efecto alguno.

Es de destacar que si la persona afectada por la información dada por el medio, no logra que el mismo le permita dar su versión de los hechos, tal negativa la lleva a tomar una decisión que no estará exenta de obstáculos: o “calla y otorga” con lo cual vale reconocer la verdad de lo informado, o entra en el camino del largo proceso judicial con todo lo que ello implica. O reclama judicialmente, dependiendo del caso los daños y perjuicios que la información inexacta y agravante le ha provocado.



Entendemos, en el marco de los principios generales del Derecho que es necesaria la ley nacional correspondiente emanada del órgano natural del que debe emanar, es decir, del Congreso Nacional para que el Poder Judicial no sustituya a éste en la labor legisferante, teniendo presente lo establecido por el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para que el derecho de rectificación o respuesta sea una realidad, y no una mera declamación, la ley que regule el procedimiento, deberá considerarlo de una forma sencilla y sumaria, puesto que ese es el sentido propio del ejercicio de este derecho: posibilitar la inmediatez de la rectificación del ciudadano que se considera perjudicado por los términos vertidos en los poderosos medios de comunicación social. Aquí, habrá que considerar que el transcurso del tiempo opera siempre de manera perjudicial para los intereses de la persona afectada, con lo cual es necesario viabilizar rápidamente el ejercicio del derecho, pues es este factor el que marca la esencia del instituto.

Más allá de la mora del Congreso sobre el tema, y teniendo presente que a partir del caso “Ekmekdjian c. Sofovich” se ha reconocido judicialmente la operatividad<sup>435</sup> de este derecho, estudiaremos los aspectos procedimentales del instituto tratados por la Corte, cuyo tratamiento junto a otras aristas del derecho, como la legitimación, sientan “determinadas pautas que, a falta de reglamentación infraconstitucional por parte del Congreso, servirán de guía para la elaboración pretoriana”<sup>436</sup>.

En el aludido precedente jurisprudencial, la sentencia sostiene que la rectificación presupone la posibilidad de aclaración *“razonablemente inmediata y gratuita en el mismo medio que publicó la información considerada ofensiva, en trámite simple y expeditivo”*.

---

<sup>435</sup> Cabe tener presente, que el Dr. Belluscio, sigue sosteniendo en sus pronunciamientos la no operatividad del Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puesto que “mientras tal ley no sea dictada, la disposición carece de operatividad”. Su postura por ende, inhibe hacer tratamiento alguno sobre el procedimiento. Ver al respecto: Voto en disidencia en Petric Domagoj c. Página 12. L.L. T.1998-C. Pág. 308. Consid. 3 en el cual se remite a sus propios votos de Fallos: 311:2497, consid. 4º, y a su disidencia en Fallos:315:1492.

<sup>436</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 10 in fine. “Petric Domagoj c. Página 12”. L.L. T. 1998-C. Pág. 299.

La Corte de Justicia de la Nación Argentina asimismo avala la vía sumarísima del amparo elegida por el accionante ante la negativa del requerido de difundir su respuesta, ya que resulta adecuada frente a la naturaleza del derecho que busca ser protegido judicialmente. *“En tal sentido, corresponde una vez más evocar que esta Corte estableció que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”.* (Siri, Angel, Fallos 239:459 –La Ley. 89-532)”.

No obstante las remarcadas características de inmediatez y celeridad pronunciadas por la Corte, más allá de compartir o no el otorgamiento del derecho de respuesta a Miguel Ángel Ekmekdjian en tal caso, no le fue dado precisamente en tiempos “razonablemente inmediatos” puesto que su posibilidad de rectificación ejercida sobre un programa emitido el 11 de junio de 1988 tuvo realización recién en julio de 1992. Cuatro años después. Y no será el único caso, ni el plazo más extenso, ni la lucha vana, al menos si el derecho es reconocido.

El derecho de rectificación como “herramienta rápida”, “razonablemente inmediata”, fruto de un “trámite simple y expeditivo”, es ratificada en el voto del Dr. Boggiano en el caso “Petric c. Página 12”:

*“Hay en el comentario de los autores e, incluso, en la legislación extranjera, una llamativa coincidencia en cuanto a que la inserción de la respuesta ha de guardar una estrecha proximidad temporal con la difusión de la noticia contestada. La razón principal, en síntesis, no es otra que la de evitar o reducir los perjuicios que la nueva pudiera producir, posibilitando que el público se anoticie de la respuesta teniendo fresca la información que la motiva. No se requiere un espíritu muy agudo para advertir que dicha inmediatez es predicable del trámite –incluso extrajudicial- de la respuesta, precisamente por la innecesariedad de la acreditación de los recaudos –inexactitud de la información y perjuicio -. De no ser esto así, el proceso de respuesta –de ser llevada la cuestión a los tribunales- se convertiría en un poco provechoso remedo de, por ejemplo, un juicio de daños – “Deben establecerse límites temporales razonables:*

- a) para efectuar el reclamo ante el órgano de difusión;
- b) para que éste le dé satisfacción;
- c) para el ejercicio de la acción judicial, y preverse, para esto último, la vía “más urgente y de máxima celeridad que sea adecuada para la tutela de los derechos afectados”. Segundas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, 1987, Comisión Tercera, conclusiones, 9º y 7º-)<sup>437</sup>”.

Se precisa que “la orientación seguida por el tribunal no hace del derecho de contestación una suerte de derecho automático, esto es, uno de aquellos para cuya actuación bastara la mera y exclusiva apreciación del respondiente acerca de la inexactitud de la información y de su potencial dañoso”.

El juez Boggiano, en su voto, termina haciendo una suerte de invitación o llamado a la comprensión del derecho de rectificación, deseando arreglos extrajudiciales de los casos en los que el mismo se presente:

*“Que, finalmente, es conveniente expresar que los delicados bienes y libertades que entrelaza el derecho de rectificación o respuesta, reclama a los medios y a los eventuales afectados, un uso ponderable de la virtud de la prudencia. Y esto es así porque, además de ello, es por demás deseable que los conflictos que se sucedan entre dichas partes sean resueltos por éstas, vale decir, sean superados en el terreno extrajudicial, evitándose así que el tiempo que inevitablemente insume todo trámite antes los tribunales, termine conspirando contra los propósitos de una herramienta jurídica plenamente útil, si ágil”<sup>438</sup>.*

---

<sup>437</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 14. “Petric...” Pág. 300.

<sup>438</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 16. Ibidem.

### VIII.1. El procedimiento en la legislación española

Teniendo en cuenta la mora de los legisladores en la sanción de una ley que regule el derecho de rectificación o respuesta en Argentina, estimamos útil presentar los lineamientos del procedimiento con el derecho español con el fin de ilustrar y mostrar un parámetro comparativo<sup>439</sup>.

Siguiendo los pasos y aspectos centrales del procedimiento establecido por la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del Derecho de Rectificación o Respuesta<sup>440</sup>, se señala lo siguiente:

- ❑ El derecho de rectificación se ejercitará mediante un escrito dirigido al director del medio de comunicación en el plazo de 7 días naturales siguientes a la publicación o difusión de la información que se desea rectificar (artículo 2.1). En el supuesto de que se tratase de un medio de comunicación de titularidad pública –hoy ya inexistentes en el ámbito de la prensa escrita- no será precisa la reclamación previa (artículo 7).
- ❑ El director del medio deberá publicar o difundir *íntegramente* la rectificación dentro de los tres días siguientes al de su recepción, *con una relevancia semejante* a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin añadir comentarios o apostillas (artículo 3, párrafo 1º). Asimismo, si la información que se pretende rectificar se hubiera difundido en período de campaña electoral en una publicación cuya periodicidad no permita divulgar la rectificación en los tres días siguientes a su recepción, el director del medio de comunicación deberá hacerla publicar a su costa dentro del plazo indicado en otro medio de la misma zona y de similar difusión.

---

<sup>439</sup> No es la intención de estas líneas traer un “modelo para imitar”, puesto que consideramos necesario en toda labor legislativa tener presentes el contexto cultural y comunicacional en este caso sobre el cual se legisla. El fin no es otro que el de exponer el procedimiento de España, que siempre ha sido tenido en cuenta en la jurisprudencia argentina, teniendo también en cuenta que corresponde al derecho continental para realizar una lectura y un análisis contributiva del mismo.

<sup>440</sup> Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación. (BOE núm. 74, de 27 de marzo; rect. BOE núm. 90, de 14 de abril (RCL 1984, 841 y 1018).

- ❑ En el supuesto de que la periodicidad de la publicación no permita la divulgación en el plazo expresado, la rectificación se publicará en el número siguiente (artículo 3, 2º párrafo).
- ❑ Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o televisivo que no permita, por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, el rectificante podrá exigir que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo (artículo 3 párrafo 3º).
- ❑ Por último, la publicación o difusión de la rectificación será, obviamente, gratuita.

Respecto al contenido de esta regulación procedimental, Carrillo<sup>441</sup> realiza las siguientes consideraciones críticas, teniendo en cuenta lo que se dice, y también de lo que se omite.

- 1) “El plazo que establece la ley para ejercer este derecho es igual para todos los supuestos con independencia del lugar de residencia de la persona afectada, lo cual podría crear situaciones de desigualdad, especialmente si reside en el extranjero. Posiblemente, hubiese sido más adecuado introducir un plazo más amplio para cubrir estas eventualidades.
- 2) Sobre la extensión y forma de la rectificación. A este respecto la ley no es del todo precisa ya que sólo exige que ésta sea publicada o difundida íntegramente y con relevancia semejante a la de la noticia o información. Sin que ello sea intrínsecamente negativo, sobre todo si se tiene en cuenta que una rectificación sobre hechos considerados inexactos no habría de ser muy extensa, también es factible que el sujeto activo del derecho juzgue procedente extenderse en su contestación cuando, por ejemplo, la concatenación de los hechos así lo exigiese. ¿Qué ocurre si la rectificación es muy larga?. Evidentemente, la rectificación es indivisible porque así lo exige la propia LODR. Luego, al objeto de salvaguardar los intereses tanto del rectificante como

---

<sup>441</sup> Carrillo, Marc. “Los límites a la Libertad de Prensa en la Constitución Española de 1978”. PPU. 1987. Pág. 160.

los del medio de comunicación como sujeto pasivo de la relación, hubiese sido interesante que la ley hubiese previsto unos topes máximos proporcionales a la extensión de la información que se rectifica.

La obligación de incluir íntegro el texto de la rectificación no puede ser entendido, sin embargo, como un deber absoluto. Resulta obvio que si del contenido de la misma, el director -como responsable del medio- deduce que se infringe la Constitución o el resto del ordenamiento, sobrepasando los límites fijados por el art. 20.4, estará legitimado para negarse a insertar el texto. Ello, naturalmente, sin perjuicio de que la autoridad jurisdiccional competente resuelva posteriormente el conflicto. Por tanto, este derecho no crea en provecho de su titular ninguna situación de inmunidad. Queda claro; no obstante, que lo que no podrá exigirse al autor de la rectificación es que se abstenga de citar a terceros, especialmente cuando ello sea necesario para exponer en su integridad de matices el contenido de su escrito de respuesta”.

Ahora bien, si por el contrario, la rectificación ha sido amputada sin motivo legítimo, el juez habrá de ordenar la inserción de la parte suprimida, sin perjuicio de que de ello se deduzcan otro tipo de responsabilidades jurídicamente exigibles.

### 3) La rectificación por causa de la publicación o emisión de textos oficiales.

La LODR no hace ninguna precisión al respecto. Sin embargo, ello no obsta para que podamos afirmar que si un rotativo publica íntegro el texto de una sentencia o resolución judicial no podrá admitirse rectificación sobre la misma, aunque es costumbre que las referencias explícitas a las partes acusantes en el proceso se sustituyan por las iniciales de sus nombres, cuando no se trate de sentencia firme.

Si se tratase de una crónica sobre una vista judicial o una sesión parlamentaria, el periodista debe mantener una actitud estrictamente informativa, no obrando con ánimo injurioso o simplemente hostil. Pero en este ámbito la rectificación sería siempre factible.

Cuando sea la Administración Pública la autora de un texto publicado o emitido por un medio de comunicación, la rectificación será viable según la naturaleza de aquél. Así, no creo que plantee obstáculos, por ejemplo, la rectificación sobre un comunicado de la Secretaría del Portavoz del Gobierno que haga referencias inexactas sobre personas, o la información entregada a la prensa por la oficina de relaciones públicas de un ministerio a propósito de los hechos protagonizados por funcionarios adscritos al mismo y que a juicio de los particulares implicados no se ajusten a la verdad (piénsese, en casos como los protagonizados, en ocasiones, por las Fuerzas de Seguridad del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, etc.)”.

## **VIII.2. Garantías jurisdiccionales**

La Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación ofrece una tutela jurisdiccional expresa en caso de conflicto entre particulares cuando el procedimiento previamente explicitado tuviera un resultado adverso y el texto de la rectificación no se hubiere publicado o divulgado. La protección jurisdiccional no se agota en sí misma, porque el derecho de rectificación integra la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, y por ende, como componente de un derecho fundamental, puede ser, en su caso, reivindicado en amparo ante el Tribunal Constitucional una vez agotada la vía judicial previa.

La intervención de la autoridad jurisdiccional se inicia a partir del momento en el que el presunto perjudicado ejercita la denominada “acción de rectificación”, según lo establecido por el artículo 4to. : “Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la **acción de rectificación** dentro de los siete días hábiles siguientes

ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación”.

En cuanto a la formulación de la acción de rectificación, ésta se presenta mediante escrito, no hay necesidad de contar con la asistencia de abogado ni procurador, acompañando la rectificación y la justificación de que se remitió en el plazo señalado; se presentará igualmente la información rectificada si se difundió por escrito; y, en otro caso, reproducción o descripción de la misma tan fiel como sea posible (Art. 5, 1º apartado).

Presentada la demanda, el juez, de oficio y sin audiencia del demandado, dictará auto no admitiendo a trámite la demanda si se considera incompetente o estima la rectificación manifiestamente improcedente. En el caso de que la aceptase, convocará al rectificante, al director del medio de comunicación o a sus representantes a juicio verbal, que se celebrará dentro de los siete días siguientes al de la petición. La convocatoria se hará telegráficamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte demandada (art. 5, 2º apartado).

En el caso de que el Juez de Primera Instancia hubiese declarado su incompetencia podrá el perjudicado acudir al órgano competente dentro de los siete días hábiles siguientes al de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, en la cual se deberá expresar el órgano al que corresponda el conocimiento del asunto (art. 5, 3º apartado).

El juicio se tramita de acuerdo con lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil para los juicios verbales pero con una serie de particularidades:

- 1.- El Juez podrá reclamar que el demandado remita o presente la información enjuiciada, su grabación o reproducción escrita;
- 2.- Sólo se admitirán las pruebas que, siendo pertinentes, puedan practicarse en el acto.
- 3.- La sentencia se dictará en el mismo al siguiente día del juicio (artículo 6, párrafo 1º).



“El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación o difusión en la forma y plazos previstos en el artículo 3º de esta Ley, contados desde la notificación de la sentencia que impondrá el pago de las costas a la parte cuyos pedimentos hubiesen sido totalmente rechazados” (Artículo 6º, párrafo 2º).

La resolución judicial que estima una demanda de rectificación no garantiza en absoluto la autenticidad de la versión de los hechos, ni produce efectos de cosa juzgada respecto a una ulterior investigación procesal de los hechos realmente ciertos<sup>442</sup>.

Finalmente, la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación advierte que éste es compatible con eje ejercicio de otras acciones penales y civiles que puedan asistir al perjudicado, como las que resulten de la intromisión en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, o la persecución penal de los delitos de calumnias o injuria. Esta compatibilidad que establece la ley española con otro tipo de acciones judiciales está en sintonía con lo establecido en el Art. 14. Párrafo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La resolución será apelable en un solo efecto dentro de los tres y cinco días siguientes, según lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Civil para las apelaciones de las sentencias y autos dictados en incidentes y en los juicios que no sean de mayor cuantía (artículo 8º).

La recurribilidad en casación de las sentencias pronunciadas en el marco de la Ley Orgánica de Derecho de Rectificación, ha sido motivo de reiterado tratamiento por parte del Tribunal Supremo Español en Auto de fecha 16 de diciembre de 2008 al entender en un recurso de queja interpuesto por la representación de “Editorial Socioeconómica de

---

<sup>442</sup> Carreras Serra, Lluís de. “Régimen jurídico de la información. Periodistas y medios de comunicación”. Ariel Derecho. Barcelona, 1996. Pág. 149.

Periodistas S.L, contra el auto de fecha 10 de diciembre de 2007 de la Audiencia Provincia de Barcelona<sup>443</sup>. Al respecto ha dicho lo siguiente:

“La confusión sobre la recurribilidad en casación de tales sentencias (en referencia a las dictadas en el marco del procedimiento previsto por la Ley Orgánica 2/1984) y sobre su vía de acceso se propicia desde la propia Ley de Enjuiciamiento. Esta dispone, en su art. 249.-2 º, que las demandas que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación, se decidirán en juicio ordinario. El art. 250.1-8ª, por su parte, sujeta a los trámites del juicio verbal las demandas que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales, lo que debe entenderse, a su vez, complementado con las especialidades recogidas en el art. 6º de la L.O. 2/84 , reguladora del derecho de rectificación. Ciertamente, al referirse al derecho de rectificación junto con los derechos fundamentales, el legislador fomenta un equívoco y genera confusión, y es que permite pensar que aquel derecho participa de la naturaleza de éstos, y que, en consecuencia, las sentencias dictadas en la segunda instancia del procedimiento previsto en la Ley Orgánica que los regula tienen abierto el acceso a la casación por el cauce del ordinal 1º del art. 477.1 de la LEC 2000 , en la medida en que han sido dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales distintos de los consagrados en el art. 24 de la CE . Sin embargo, la referencia la derecho de rectificación no debe sacarse del contexto en que se produce, y debe ser entendida en sus justos y estrictos términos. Los artículos 249 y 250 de la LEC 1/2000 son normas delimitadoras del ámbito material de las dos clases de juicios que diseña la nueva ley de procedimiento, de tal manera que cuando en el ordinal 2º de su apartado primero se hace la salvedad de las demandas relativas al ejercicio del derecho de rectificación no se está introduciendo una excepción en el régimen procedimental de la tutela judicial civil de los derechos fundamentales, de suerte que uno de ellos tenga un cauce de procedimiento distinto al de los demás, sino que el legislador únicamente ha querido hacer una precisión o

---

<sup>443</sup>Idéntico criterio fue manifestado en Auto de fecha 14 de junio de 2005. ATS 7485/2005 - ECLI:ES:TS:2005:7485ª, Id Cendoj: 28079110012005201565, Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Sede: Madrid, Sección: 1, Nº de Recurso: 330/2005. Ponente: CLEMENTE AUGER LIÑAN.

especificación relativa al derecho de rectificación, no por tratarse de un derecho fundamental, sino en atención a su carácter instrumental de la protección de éstos, en la medida en que su contenido se orienta a obtener la tutela de derechos fundamentales que se han visto lesionados por una actuación externa al proceso. Que no se trata de un verdadero derecho fundamental al que el legislador haya querido dar un tratamiento procesal distinto se pone de manifiesto con la simple lectura de la Exposición de Motivos de la LEC 2000, en cuyo apartado X se deja bien claro que la voluntad legislatoris es estatuir para los derechos de tal naturaleza un cauce procedimental común -el correspondiente al juicio ordinario- cuya tramitación se considera más expeditiva que la de la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, dando así cumplimiento a las previsiones contenidas en el art. 53.2 de la CE , separando, en cambio, del conjunto de estos derechos aquellos que en sí mismos constituyen derechos y garantías procesales, para los cuales considera ilógico establecer un procedimiento especial, optando por proporcionar los mecanismos precisos para que su vulneración se remedie en el seno mismo del proceso en donde ha tenido lugar.

3.- Es la propia precisión que el legislador introduce en el art. 249.1-2ª la que explica que esta Sala, a la hora de prefijar en la Junta General de sus Magistrados del día 12 de diciembre de 2000 los criterios interpretativos de los preceptos de la nueva ley de ritos reguladores del régimen de los recursos extraordinarios, la haya tenido en cuenta a la hora de delimitar el ámbito del cauce del recurso de casación que establece el ordinal 1º del art. 477.2 de la LEC , limitándose a reproducir la letra de la ley en este punto. Ello no puede llevar al error de que las sentencias dictadas en el ejercicio del derecho de rectificación en procesos tramitados por las reglas del juicio verbal tienen abierto el acceso al recurso por esta vía. El derecho de rectificación no tenía antes, ni tiene ahora, naturaleza de derecho fundamental: para éstos la legislación anterior a la LEC 1/2000 reservaba dos vías procesales de tutela jurisdiccional, la de los juicios declarativos y la del incidental previsto en la Ley 62/78, de 26 de diciembre. Para el derecho de rectificación se establecía un tipo de juicio específico, el verbal -con las especialidades introducidas por el art. 6º de la L.O.2/84 -, como ahora se establece en el art. 250.1-8ª de la LEC 2000. Por ello, al recoger los acuerdos adoptados en la citada Junta General, esta Sala precisó, de un lado, que tendrían acceso a la casación por la vía del ordinal 1º del art. 477.2 las sentencias dictadas

en procesos relativos a la tutela judicial civil de los derechos fundamentales de la persona distintos de los declarados en el art. 24 CE seguidos por los trámites del juicio ordinario - procedimiento uniforme que el legislador establece para la protección jurisdiccional de tales derechos-, y, de otro, al tratar sobre las Disposiciones Transitorias de la LEC 2000, que serían susceptibles de acceso a los recursos extraordinarios las sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en procesos relativos a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales tramitados por el cauce del juicio declarativo o por el incidental previsto en la Ley 62/78, de 26 de diciembre (vid. AATS, entre otros, de 13-11-2001, en recurso 2050/2001, y 20-11-2001, en recurso 2032/2001).

4.- Que las sentencias de segunda instancia dictadas en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de rectificación no tengan acceso a la casación por el cauce del ordinal 1º del art. 477.2 LEC 2000 se debe, como se ha visto, a que dicho derecho no tiene el carácter de fundamental, pero ello no significa que tengan cerrada la vía de acceso al recurso en todo caso. Al contrario, es éste un juicio para cuya tramitación la ley reserva, como se ha visto, un tipo de procedimiento específico, el propio del juicio verbal con las especialidades del art. 6º de la L.O. 2/84 (cf., además de este artículo, el art. 250.1-8ª LEC 2000). En consecuencia, al tratarse de un proceso tramitado por razón de la materia litigiosa, la sentencia que le ponga término será recurrible en casación siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, bien por existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, bien, en fin, por haberse aplicado normas cuya vigencia no fuese superior a cinco años, sin que exista jurisprudencia que las hubiese interpretado; en el bien entendido que este cauce de acceso a la casación es exclusivo y excluyente de cualquier otro, tal y como esta Sala ha puesto de relieve desde que fueron adoptados los acuerdos en la antes mencionada Junta General de 12 de diciembre de 2000 en numerosos Autos resolutorios de recursos de queja (cf. AATS 23 y 30-10-2001, y 6, 13, 20 y 27-11-2001).

Esta vía de acceso a la casación exige el ineludible cumplimiento de determinados requisitos de índole formal, pues, como se ha venido indicando de forma ya reiterada, si el interés casacional se funda en la oposición de la sentencia recurrida a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, es preciso citar dos o más sentencias de la Sala Primera, razonándose cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada

una de ellas; en consecuencia, la preparación defectuosa del recurso concurrirá tanto cuando se omita la expresión de las sentencias de la Sala Primera como cuando se mencionen éstas y su contenido, pero, en cambio, no se razone la vulneración de su doctrina por la resolución recurrida, lo cual resulta imprescindible para que la Audiencia pueda examinar el supuesto de recurribilidad invocado y decidir sobre la preparación del recurso de casación (vid. AATS 20-11- 2001, en recurso 2187/2001 , y 27-11-2001, en recursos 2223/2001, 1958/2001 y 1962/2001). Si, por el contrario, el "interés casacional" se esgrime por existir "jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Provinciales", por tal debe entenderse la relativa a un punto o cuestión jurídica sobre el que exista un criterio dispar entre Audiencias Provinciales o secciones orgánicas de la misma o diferentes Audiencias, exigiéndose entonces dos sentencias firmes de uno de esos órganos jurisdiccionales, decidiendo en sentido contrario al contenido en el fallo de otras dos sentencias, también firmes, de diferente tribunal de apelación, por lo cual la diversidad de respuestas judiciales, en razón a fundamentos de derecho contrapuestos, debe producirse en controversias sustancialmente iguales, lo que requiere expresar la materia en que existe la contradicción y de qué modo se produce ésta, así como exponer la identidad entre cada punto resuelto en la sentencia que se pretende recurrir y aquel sobre el que existe la jurisprudencia contradictoria que se invoca; en estos casos la preparación defectuosa del recurso concurrirá cuando se prescinda de mencionar las sentencias firmes de Audiencias Provinciales, que deberán ser dos de un mismo órgano jurisdiccional y otras dos de otro órgano diferente, siendo rechazable la enumeración masiva de resoluciones, que habrán de limitarse a cuatro por cada punto de cuestión o contradicción (dos en cada sentido) y, en el caso de citarse más, se estará a las de fecha más reciente; asimismo será necesario recoger el contenido de las sentencias, su "ratio decidendi", con expresión de la específica materia en que se suscita la contraposición jurisprudencial y de qué modo se produce, siendo preciso razonar sobre la identidad de supuestos entre la sentencia recurrida y las que se invoquen como contradictorias entre sí, lo que igualmente resulta imprescindible para que la Audiencia efectúe el control de recurribilidad que le corresponde en la fase preparatoria ( art. 479.4 LEC) (cf . AATS 20-11-2001, en recursos 1957/2001, 1999/2001 y 2057/2001 , y 27-11-2001, en recursos 2226/2001 y 2232/2001 ). No se está, empero, en ninguno de los casos expresados, pues el recurrente funda la procedencia de su recurso en el apartado

primero del art. 477 de la LEC 2000, por tratarse de una sentencia dictada para la tutela judicial civil de un derecho fundamental distinto de los declarados en el art. 24 de la CE , y ya se ha visto que no es éste el cauce impugnatorio apropiado para preparar el recurso por no tener el derecho de rectificación ese rango constitucional. Y en ningún caso cabría tener por preparado el recurso por la vía del interés casacional recogido en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, pues además de que no ha sido éste el cauce escogido, el recurrente no ha intentado siquiera acreditar, en momento procesal oportuno, la concurrencia de ese presupuesto de recurribilidad en el modo y forma que ha quedado indicado”<sup>444</sup>.

### **VIII.3. La cuestión probatoria**

Es pertinente recordar que uno de los requisitos ineludibles para que proceda el derecho de rectificación es que los medios hayan difundido una información inexacta o agravante en perjuicio del aludido. Hemos abordado el concepto de información y su referencia al mundo de los hechos, a lo comprobable, a lo fáctico, descartando a las opiniones y a las valoraciones que hacen a la libre discusión en una vida en democracia.

Ahora bien, para indagar en la exactitud o inexactitud de la información cuya cuestión se traslada inevitablemente en el tratamiento procesal, es necesario en principio considerar las pautas interpretativas que con respecto a la prueba ha ido trazando la Corte, y asimismo realizar un análisis crítico de las mismas.

“Si el diferendo llega a un tribunal, algo tiene que decir la prueba a producirse en el juicio sobre la inexactitud y el perjuicio, porque sería absurdo que la norma exigiera esos requisitos para luego diferir todo a la simple alegación de una de las partes”<sup>445</sup>.

En el citado caso “Petric”, la sentencia se remite a la valoración de la prueba realizada en primera y segunda instancia, reafirma la existencia de los requisitos de

---

<sup>444</sup> Auto Tribunal Supremo. ATS 13259/2008 de 16 de diciembre de 2008. - ECLI:ES:TS:2008:13259<sup>a</sup>  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Sede: Madrid Sección: 1 N° de Recurso: 169/2008 Ponente:  
JUAN ANTONIO XIOL RIOS.

<sup>445</sup> Petric Domagoj c. Página 12. L.L. T. 1998-C. Consid. 11 de la sentencia. Pág. 287.

inexactitud y perjuicio, rechazando la arbitrariedad pretendida por Página 12 de la apreciación probatoria y estima “innecesario adentrarse en la consideración de otros problemas que puedan presentarse dentro de la temática esbozada. Tales son, por ejemplo, la cuestión relativa a si el juzgador debe obtener certeza sobre los mencionados requisitos – o si basta un cierto grado de probabilidad o verosimilitud- y la atinente a las modalidades que puede presentar el “onus probandi” según la clase de hechos consignados en la nota periodística”.

Tal criterio diverge del sostenido por el Dr. Boggiano en su voto particular, quien recuerda que el fin protectorio de la respuesta radica en que el afectado pueda dar su propia versión de los hechos, garantizar a la persona la posibilidad de expresarse respecto de la información emitida en su perjuicio que contradiga o discrepe con el mensaje.

*“En consecuencia, no será preciso para el ejercicio de la rectificación, acreditar que la noticia propalada haya sido realmente inexacta; ni se requerirá que el respondiente aporte los elementos de prueba que respaldarían su mentís. El presupuesto de la respuesta no es la necesaria y demostrada inexactitud del mensaje de hechos y la simétrica y no menos necesaria y demostrada veracidad de la primera. El propósito de la contestación, por lo regular, es ampliar el debate, no clausurado; es permitir que el afectado diga “su verdad, frente a la otra verdad”, la “del” medio informativo; es, también, posibilitar que el público conozca las “dos” verdades”<sup>446</sup>*

Para el juez, dada la inexistencia de derechos absolutos, ello no significa que los medios tengan que dar cabida a todas las rectificaciones que les lleguen por sus informaciones emitidas, sosteniendo que corresponde reconocer “a los medios un margen de examen de las ...circunstancias...de tal manera que puedan negarse válidamente a la inserción de la respuesta cuando ésta, v.gr., sostuviera hechos manifiestamente inexactos o inverosímiles, o se relacionara con noticias que en manera alguna pudieran encerrar

---

10 Cf. Voto Dr. Boggiano en Petric...Consid. 11. pág. 299. Este argumento es reiterado por el mismo juez en su voto disidente en “Rozenblum Horacio B. c. Vigil Constancio y otros” E.D. T. 188. Pág. Consid. 13. Asimismo, tal interpretación es sostenida en el mismo caso en el voto disidente conjunto de los Dres. Moliné O'Connor y López, Consid. 15.

*potencial dañoso. Se trata, por cierto, de una facultad del medio, de manera que tampoco la inserción traduciría manifestación alguna de aquél al respecto”. Y recuerda finalmente que “la demandada –en este caso Página 12- contó con la oportunidad de ofrecer y producir la prueba referente a su defensa fundada en la exactitud de la nota en cuestión”.*

En el caso “Rozenblum c. Vigil”, es interesante traer la interpretación sobre la prueba que realiza el Dr. Vázquez en su disidencia:

*“(…) la acción de rectificación no supone, ni mucho menos, la indagación de la veracidad de la información. En tal sentido, la vía ordinaria o civil o también el procedimiento penal ... son instrumentos más completos para conocerla, siendo evidente que el carácter sumarísimo del procedimiento de rectificación forma por sí mismo óbice para que en tal vía se investigue, al menos en forma exhaustiva, la inexactitud de lo que se ha difundido.*

*En tales condiciones, bien se advierte que cuando se exige que la información sea inexacta para dar lugar a la respuesta, no está señalando con ello que quien ejercite la acción de rectificación deba probar la veracidad de sus dichos. Por el contrario, al peticionante le basta invocar ante el medio periodístico en primer término, que considera inexacta la información suministrada por el mismo medio para, si éste no accede a su publicación, promover válidamente en su contra la acción con idéntica invocación y lograr, eventualmente, una sentencia condenatoria de rápida concreción tendiente a la inmediatez de la réplica, que de lo contrario agravaría el mal por lo extemporánea.*

*(...) la sentencia que pone fin al procedimiento iniciado por causa de una acción de rectificación no sólo no asegura la veracidad de los hechos, sino que tampoco, como es obvio, produce efectos de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación procesal sobre los hechos considerados.*

*(...) lo anterior excluye la exceptio veritatis. Es decir, si el medio que ha suministrado la información no acepta publicar la réplica, en el juicio que se le haga para remover su negativa puede alegar que lo publicado recoge la verdad y probarlo. Si así sucede, en tal caso puede no prosperar la rectificación. Pero si no prueba la veracidad, la*



*acción procederá siempre ante la sola aserción del actor de que la noticia es inexacta para él”<sup>447</sup>.*

Traídas las diversas valoraciones judiciales sobre la prueba, creemos pertinente reflexionar sobre este punto que trae no pocas controversias. Más allá de los distintos abordajes y miradas que la cuestión probatoria puede presentar, es necesario resaltar que se constituye en un elemento que hace a la existencia misma del derecho de rectificación o respuesta precisamente por la necesidad de la inexactitud ínsita en su propia definición.

En este marco cabe considerar la función que los medios de información y los periodistas tienen en una sociedad democrática, en la cual, el ejercicio de dar información no es exclusivo ni de los informadores ni de los propietarios de los medios. La diligencia y el compromiso ético profesional hace a la esencia de un ejercicio serio y responsable de la actividad periodística.

Las informaciones dadas por los medios tienen una presunción de legitimidad y de veracidad porque se las presupone como fruto de una profesionalidad en la búsqueda y emisión de la misma. Pero ello no debe llevar a confusión. Ello no significa que los medios tengan el “monopolio” de una presunción a su favor de que la verdad tenga que ser necesariamente la que ellos publiquen y no lo que el involucrado en esa información describe<sup>448</sup>. Esta no es la oportunidad ni el lugar de hablar sobre la verdad ontológica. Pero sí es apropiado decir que en la tarea informativa, dada la inevitable intermediación del periodista y del medio entre el hecho acontecido y los destinatarios de esa información, hay una construcción y una elaboración –que pasa necesariamente por lo racional y el intelecto– que implica una interpretación de determinados hechos acontecidos para darle el formato de noticia y poder transmitirlos. Esa versión de los hechos, no es “la verdad” absoluta, lisa y llana, sino “la verdad del periodista o del medio”, los hechos vistos y abordados desde su perspectiva, que no siempre coincide con la real ni es la visión que aglutina todas las

---

<sup>447</sup> Cf. Disidencia del Dr. Vázquez en “Rozenblum H. c. Vigil, C”. E.D. T. 188. Consid. 11,12 y 13. Pág. 216.

<sup>448</sup> Cf. Carmona Salgado, C. “Libertad de expresión e información y sus límites”, Madrid, 1991. Pág. 267. Ver asimismo Considerando 16 último párrafo Voto Dr. Vázquez en “Petric D. c. Página 12”. L.L. t. 1998- C. Pág. 305.

visiones. Lo mismo ocurre para quien tiene el rectificante, “su versión” necesariamente no es la única ni la verdadera. En la esencia del derecho de respuesta no se discute la verdad o falsedad de lo informado, ese será el resultado, la esencia está marcada por la posibilidad de rectificar, de responder, esto es, de expresar libremente su versión de los hechos, de ejercer el derecho de dar información.

Si volvemos nuevamente a las funciones de los medios, es necesario tener presente que los medios no administran justicia, sus informaciones no deben ser condenas ni absoluciones, ni menos hacer “cosa juzgada”, no son ni jueces que resuelven ni fiscales que acusan –que esto suceda en lo fáctico es otra cuestión- y por ende, el afectado, que fue involucrado en forma inexacta y agravante en una información, tiene el derecho a ser oído –no ante el juez-medio, sino ante el público de ese medio-, a manifestar su versión de los hechos y no tiene por qué en principio llevarle ante el “juez-medio” los elementos probatorios que hacen a la exactitud de sus asertos. *“La rectificación no presupone la veracidad ni la garantiza; sino que se basa tan sólo en la merca consideración subjetiva del afectado sobre la inexactitud de la información”*<sup>449</sup>.

Que el medio publique una rectificación, no quiere decir que acepte una suerte de “sanción” del respondiente, ni tampoco implica que el medio tenga que rectificarse ni ratificarse en la información dada. El que rectifica es el afectado, no el medio. La publicación de una respuesta no significa reconocer o dar la razón al aludido, implica solamente dejarlo expresarse, implica permitirle dar su propia versión de los hechos, implica algo tan valioso como permitirle ejercer –en una sociedad democrática- el derecho a dar información, la libertad de expresión.

Incluso en el marco de un proceso judicial iniciado por la acción de rectificación, la sentencia final, dará lugar o no a la posibilidad de rectificar, y no asegura la verdad de los hechos controvertidos como inexactos, y por ende hay otras vías procesales para investigar

---

<sup>449</sup> STC 168/1986, 22 de diciembre. Sala 2ª. Recurso de amparo núm. 1045/ 1985 (RA-553). Ponente: Magistrado don Jesús Leguina Villa. BOE de 20 de enero de 1987, conocida como “Caso Mercorsa”. España. Ver también O’ Callaghan, Xavier. “Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen”. Editoriales de Derecho Reunidas, S.A. Madrid, 1991.

procesalmente los hechos considerados. Es decir, una sentencia producto de una acción de rectificación hará cosa juzgada sobre el derecho a rectificar, pero no sobre la veracidad o falsedad, exactitud o inexactitud de la información emitida.

En el derecho de rectificación o respuesta no hay una carga probatoria sobre la veracidad de la información controvertida, la prueba está en si el medio permitió o no que se expresara el respondiente, si el rectificante tuvo o no posibilidad de rectificación. Ni el dolo, ni la culpa, ni la doctrina de la real malicia, ni la negligencia o falta de diligencia del periodista ni del medio importan aquí, esas cuestiones correrán por otras vías procesales y son ajenas al instituto. En fin, la prueba de verdad de la información emitida, no forma parte de la discusión en el marco de una acción de rectificación.

## **Capítulo IX**

**Propuesta de lege ferenda o ¿cómo regular el derecho de rectificación en Argentina de forma que la libertad y la igualdad se acrecienten? Comprobación de que la propuesta cumple los requerimientos internacionales.**

### **IX.1. Antecedentes y recopilación de proyectos, anteproyectos, propuestas e intentos de reglamentación**

En primer lugar, corresponde tener en cuenta en el marco constitucional, el Artículo 32 de nuestra Carta Magna en cuanto establece que el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ni establezcan sobre ella la jurisdicción federal.

La norma es clara en cuanto prohíbe la existencia de leyes que desnaturalicen, frustren, impidan o coarten la libertad de prensa. Distinta es pues la tarea de reglamentar y legislar sobre la materia, de modo de crear caminos garantistas del ejercicio del derecho a dar y recibir información. Una ley reglamentaria razonable no restringe ni tiene por qué restringir, sino que reglamenta el ejercicio de los derechos. La reglamentación por ende, no está prohibida, sino que lo prohibido es la restricción. Por ello es pertinente y necesaria una ley nacional que reglamente el derecho de respuesta, que establezca las condiciones en las cuales se ejercerá la rectificación ante informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio de determinada persona.

En el año 1984 Argentina ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, y nos obligamos a garantizar la protección del derecho de rectificación o respuesta, comprometiéndonos a adoptar, con arreglo a nuestros procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas necesarias para hacerlo efectivo<sup>450</sup>.

---

<sup>450</sup> Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 2.

Sin embargo, el atraso del régimen legal argentino sobre el tema, es sintomático. Los intereses en pugna cada vez que se intenta legislar el instituto se manifiestan con crudeza. Las presiones que ejercen los empresarios de los medios para evitar una ley de tales características se hace evidente. Pese a ello, los antecedentes jurisprudenciales en el ámbito nacional a favor de la operatividad del derecho de respuesta y las numerosas constituciones, legislaciones y tribunales provinciales que lo receptan hacen a una instauración fáctica del instituto. Esto último no va en desmedro de la necesidad de una ley, debatida y producto de un Congreso en el contexto de la vida democrática.

Pero mucho antes de la ratificación de Convención Americana de Derechos Humanos, en el curso de la historia jurídica argentina, varios proyectos se elaboraron para dar curso a este instrumento de expresión y respuesta. En general, sin embargo, puede observarse que tenían radio de vigencia parcial, influenciados los proyectistas por la idea de que sólo las provincias podían tratar la materia.

Creemos que los proyectos de ley, en este como en cualquier otro instituto, plasman el tan mentado y a veces mal interpretado “espíritu del legislador” y dan señales del marco social de la época en la que se presentan. Su valor como antecedentes debe reavivarse cada vez que se intenta volver sobre el tema, que por más que no haya llegado a ser ley, su fracaso o su frustración, pueden darnos señales interesantes y provechosas.

### **1857 - Proyecto Zuviría**

En 1857, Facundo de Zuviría, preocupado por la proliferación panfletaria que tres años antes le moviera a escribir un folleto sobre la calumnia, propuesto –junto con algunas medidas restrictivas de la libertad de prensa- el derecho de respuesta a favor de los lesionados por denuncias o acusaciones aparecidas en periódicos. La responsabilidad de hacer las inserciones gratuitas recaería sobre los editores.

En su artículo 7º receptaba el derecho de rectificación en estos términos: “Todo editor será obligado a publicar gratis en un tiempo dado, la contestación a toda denuncia o acusación que se hubiese dirigido por el mismo periódico”.

La relevancia de este proyecto estriba en que Facundo Zuviría fue presidente de la Convención Constituyente de 1853 y, por lo tanto, su iniciativa puede ser considerada una interpretación auténtica de la Constitución de 1853<sup>451</sup>.

“Tales son las prescripciones políticas en todas las leyes que tenemos a la vista”, decía Sarmiento, quien atacó duramente a la obra y a su autor<sup>452</sup>.

## **1929 - Proyecto Bielsa**

Es uno de los proyectos más recordados por la doctrina. Rafael Bielsa, lo presentó en la Federación Argentina de Colegios de Abogados en 1929. Consta de ocho artículos y, en el primero, se puso en juego la defensa de la personalidad, el honor o buen concepto. Esta concepción sin embargo, queda perfectamente enmarcada en el resguardo de los derechos sustanciales que proclama la Constitución Nacional y pertenece a los temas que son ley de fondo civil, acorde con el (por entonces) artículo 67 inc. 11 que encarga al Congreso nacional sancionar, con exclusión de las provincias, aunque sin dejar de respetar las jurisdicciones judiciales que correspondan por su competencia territorial.

El proyecto Bielsa no estableció plazos para peticionar la respuesta, sino sólo prevé el de tres días para que fuera cumplida por el director o administrador del periódico (Art. 5º). Contemplaba la gratuidad si la rectificación no sobrepasa las 100 líneas de una columna. La negativa podía derivar en una multa, sin perjuicio de otras penas y de los daños e intereses<sup>453</sup>.

## **1934 – Proyecto Sánchez Sorondo**

---

<sup>451</sup> Fundamentos vertidos por el Diputado Jorge O. Folloni en su proyecto de ley sobre derecho de rectificación en 1992. Diario de sesiones. Pág. 3896.

<sup>452</sup> Ballester, Eliel. “Derecho de Respuesta”. Editorial Astrea. Pág. 170.

<sup>453</sup> Cifuentes, Santos y Fernández, Marta. “Rectificación, Respuesta, Réplica”. La Ley. T. 1990-E, Sección Doctrina. Pág. 593.

El proyecto de “ley de amparo de la prensa”, de Matías G. Sánchez Sorondo, de pretensión federal, comprendía al periodismo gráfico o realizado por cualquier medio de reproducción. Un capítulo específico del mismo se refiere al derecho de rectificación, pero solo acotado a la prensa.

El dictamen de la Comisión especial del Senado de la Nación introdujo varias reformas, entre ellas, la pertinencia de las respuestas contra las imputaciones al honor, y la jurisdicción local.

El clima político del momento era desfavorable. De indudable raigambre conservadora, el proyecto, en su conjunto, suscitó recelos y tenaz oposición en la prensa y los partidos, alertados por el fraude electoral y las sucesivas vueltas de tuerca contra las libertades públicas.

Sólo eran contestables los artículos que pudieran “dañar la reputación política, científica artística o literaria”; marginaba a la mayoría de la gente y las situaciones más comunes; instituía la responsabilidad exclusiva del respondiente por el contenido del escrito; admitía la buena fe como causal exculpatoria de la no inserción; penaba con multa el incumplimiento de la sentencia que admitía la respuesta, y, en este caso, en vez de exigir la inserción en el mismo periódico, mandaba que se la hiciera en otro, a elección del respondiente y a expensas del infractor; fijaba plazo breve de prescripción y, en fin, refundía la respuesta de los particulares con la rectificación de los funcionarios, sin preferencias para éstos.

Según relata Eliel Ballester, Alfredo L. Palacios apoyó en general el proyecto.

### **1934 – Proyecto Matienzo**

José Matienzo presentó en el Senado, como alternativa del anterior, un proyecto que incorporaba el instituto al Código Penal, tomando como fuente la legislación noruega. El texto comenzaba suprimiendo las palabras “en la Capital y territorios nacionales”, del art. 114 del Código Penal (en su redacción anterior a la reforma introducida por la ley 21.338). Pretendía facilitar la aprobación del derecho de respuesta, desglosándolo del proyecto Sánchez Sorondo, y al mismo tiempo establecer en el asunto la competencia legislativa nacional. Tratado sin despacho, el debate se agotó con la problemática jurisdiccional.

## **1957 – Convención Constituyente**

El derecho en cuestión recobró actualidad en la Convención Nacional Constituyente de Santa Fe de 1957. José A. Allende y otros, en nombre del bloque demócrata cristiano, proyectaron que se extendiera el art. 32 de la Constitución a “cualquier medio de expresión” y se añadiera que “una ley especial asegurará...el ejercicio del derecho de réplica, que esta Constitución reconoce”.

El despacho en mayoría de la Comisión redactora incorporaba en el artículo 14 el derecho “de replicar”. La Convención no llegó a debatirlo<sup>454</sup>.

## **1961 – Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados**

La Cámara de Diputados trató como cuestión de privilegio el 20 de septiembre de 1961 una denuncia del diario “La Razón” sobre el tráfico de estupefacientes que envolvía a algunos legisladores, por lo cual el cuerpo encomendó a la Comisión de Asuntos Constitucionales el estudio de medidas protectoras de las personas denigradas por la prensa.

En el ámbito de dicha Comisión, el diputado Horacio Domingorena expresó un aspecto a tener en cuenta, y que pocos han considerado: *“El órgano periodístico que las acogió (se refiere a las imputaciones que hayan afectado a una persona) está obligado a insertar gratuitamente la respuesta o rectificación, siempre que ésta no sea injuriosa u ofensiva para el autor de la publicación o contraria a las leyes y a las buenas costumbres”*<sup>455</sup>.

En otras palabras, la respuesta no puede ser un medio para agraviar al responsable del medio de información. Sólo debe limitarse a asegurar un efecto reparador para el agraviado. Fuera de este límite la práctica del derecho de respuesta sería un ejercicio abusivo no amparado por la ley.

## **1964 – Proyecto Cheble**

---

<sup>454</sup> Convención Nacional Constituyente (1957), Diario de Sesiones, II-881, 891, 1524.

<sup>455</sup> Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 48ª. Reunión, 11-10-61, pág. 3788.



En la sesión del 18 de marzo de ese año, la Cámara de Diputados dio entrada a un texto de Francisco Cheble, cuyas seis cláusulas, dirigidas a la defensa del honor, tendrían efecto en todo el territorio nacional. Este proyecto no fijaba la extensión máxima de la respuesta, la que debía ser insertada íntegramente. Tampoco establecía plazo de caducidad<sup>456</sup>.

### **1975 – Proyecto Massolo**

El diputado Eduardo Massolo presentó en el mismo cuerpo un proyecto, que según se aclaraba en los fundamentos, seguía los lineamientos de los más recientes de años anteriores. Se plegaba a la concepción penal del instituto. En caso de negativa ilegítima, el editor sería castigado con inhabilitación especial de uno a seis meses, y la empresa editora con multa, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales. La aplicación de la ley se encomendaba a la justicia correccional. Pasado a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, lo frustró la ruptura del orden constitucional<sup>457</sup>.

### **1985 – Proyecto Laferriere.**

Ya ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, el proyecto del senador Laferriere obtuvo media sanción del Senado, el 11 de septiembre de 1985. Este proyecto de 14 artículos, comprende los medios de difusión escritos, radiales, televisivos y cinematográficos. Establece un plazo de prescripción anual y exige que la rectificación sea publicada en un plazo no mayor de 48 hs. de la notificación que la impone, o bien, de tratarse de revistas o publicaciones periódicas en la primera edición; regla el contenido de la respuesta, y cómo habrá de cumplirse en caso de medios radiales y televisivos y noticieros cinematográficos. Ninguna de las partes podrá hacer comentarios, juicios de valor o aditamentos; los gastos recaerán sobre el medio, sin perjuicio de su derecho de reintegro contra el causante de la

---

<sup>456</sup> Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1964, p. 2165.

<sup>457</sup> Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1973-V-3543.

información que dio motivo a la réplica. Organiza, también, la acción judicial sumarísima en caso de negativa, previendo las sanciones conminatorias o astreintes<sup>458</sup>.

Alurralde, agrega que: “A la iniciativa originada en el Senado por el senador Laferriere (6/6/85) se agregó casi inmediatamente otra remitida por el Poder Ejecutivo (26/7/85). El proyecto de Laferriere, específicamente conocido como de réplica, instrumenta la reglamentación de un derecho que se lo supone implícito en el orden jurídico interno de la Nación. El del Poder Ejecutivo sobre derechos personalísimos, también conocidos como derechos de la personalidad, pretende ampararlos mediante la reforma del actual art. 1071 del Código Civil. Como una prueba de la internacionalidad que como elementos dejamos visto que reconocen estos derechos, ambos proyectos responden a la operatividad del art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por nuestro país y ratificado en setiembre de 1984.

La polémica que ha suscitado su tratamiento sustentada en la presunta inconstitucionalidad de estos derechos en cuanto se los considera atentatorios a la libertad de expresión al primero, e implícitos ya en nuestro ordenamiento el segundo, se vio aún más agudamente desarrollada, cuando en la Cámara de Diputados el diputado Maglietti agregó otro de su autoría, favorable a la “réplica”, y casi a las postrimerías del período ordinario de sesiones, la diputada Guzmán presentó uno de su iniciativa confeccionado por un equipo de juristas sobre derechos personalísimos, que sin lugar a dudas, por el minucioso análisis que conlleva, merecerá una meditada compulsa de las comisiones pertinentes con respecto a las propuestas elevadas por el Ejecutivo”<sup>459</sup>.

---

<sup>458</sup> Cámara de Diputados de la Nación. Trámite parlamentario núm. 90, proyectos en revisión N° 11, p. 2182 y Diario de Sesiones del Senado, orden núm. 113, del 18 de junio de 1985, p. 397. Comenta Julio C. Rivera sobre este proyecto: “A partir del conocimiento del proyecto del senador Laferriere los órganos de prensa y las instituciones que los agrupan han lanzado una gran ofensiva contra el derecho de réplica. Prácticamente no pasa día en que algunos diarios de la Capital Federal publiquen informaciones, declaraciones y comentarios sobre el tema; por supuesto que no insertan ninguna opinión contraria a la que ellos sostienen, lo cual resulta verdaderamente lamentable pues es obvio que así malinterpretan su función. El día 26 de junio de 1985 hicimos llegar una carta de lectores al diario La Nación sobre este tema, defendiendo el derecho de réplica. Nunca fue publicada...”. Rivero, Julio C. Revista Jurídica La Ley, T. 1985-E-Sección Doctrina. Pág. 792.

<sup>459</sup> Márquez Alurralde, Maximiliano. “Régimen jurídico de las comunicaciones (Publicultura)”. Ediciones De Palma. Buenos Aires, Septiembre de 1986. Pág. 158.

**1986 – Segundas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal.**  
**Junín**<sup>460</sup>

En tales jornadas, la Comisión 3 sobre “Derecho de réplica y la tutela de la personalidad”, aprobó por unanimidad una recomendación que sostenía que el derecho de rectificación debe ser reglamentado por el derecho normativo, toda vez que se adecuar a los preceptos constitucionales; se refiere a la respuesta de noticias inexactas y a la respuesta de difusiones agraviantes, que, desnaturalizando la información puedan causar perjuicio a la persona y aun a los propios medios de difusión; concierne a la protección de los derechos personalísimos y también debe ser reconocido a las personas jurídicas; para el ejercicio del derecho no es necesaria la atribución de culpa; debe preverse la vía judicial más urgente y de máxima celeridad que sea adecuada para la tutela de los derechos afectados y finalmente estimó que la réplica no obsta al ejercicio de la acción de indemnización que se regirá por las normas del derecho común<sup>461</sup>.

**1992 – Proyectos varios.**

En el año 1992, con posterioridad al fallo “Ekmekdjian c. Sofovich”, que hizo notar la mora del Congreso en la reglamentación del derecho a rectificación, se presentaron diversos proyectos, entre ellos, cabe cita, por su diversidad a los siguientes:

---

<sup>460</sup> Estas Jornadas, propias del ámbito doctrinario, no fueron las únicas. Rivero, en el artículo ya citado, reseña también otras recomendaciones de Jornadas y Congresos. “Debemos destacar entre ellas las II Jornadas Provinciales de Derecho Civil de Mercedes (1983) , donde las ponencias presentadas por Santos Cifuentes y la de Alberto Bueres y nosotros lo contemplaban expresamente, obteniendo el asentimiento de los presentes, y las IXas. Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Mar del Plata, también en 1983, donde a partir de la ponencia presentada por nosotros, se aprobó por enorme mayoría la recomendación 6 de lege ferenda en la que se prevé que: “...debe consagrarse explícitamente el derecho a réplica”. Damos estos datos con fines ilustrativos, para tener en cuenta que en los diversos encuentros profesionales y académicos, se ha contemplado vastamente la temática.

<sup>461</sup> La recomendación fue redactada por los doctores Santos Cifuentes, Atilio Alterini, Manuel Cobas, Isidoro Goldenberg, Roberto López Cabana, Eduardo Monti, Héctor Negri, Julio Rivera, Ricardo Smith y Jorge A. Zago.

### **Proyecto Ibarreche**

El legislador propició un agregado en el articulado del Código Penal y del Código Civil. En cuanto al primero, refería que “Los responsables por las publicaciones y emisiones en los medios de comunicación, diarios, periódicos, emisoras radiales y de televisión quedarán exentos de las penas previstas en los arts. 109, 110 y 113 del Código Penal, extinguiéndose la acción penal y el derecho a intentar acción reparatoria en sede civil, cuando publicaren o emitieren aclaración o rectificación suficiente y razonable ex officio”. En cuanto al Código Civil, pretendía dejar “exentos del pago de indemnización” a los medios y a sus responsables cuando éste publicaba hubiere publicado la respuesta<sup>462</sup>.

Es evidente la confusión de conceptos, y la no diferenciación de lo que es y constituye ámbito propio de la responsabilidad civil, penal y el derecho de respuesta.

### **Proyecto Rodríguez Sañudo y otros.**

Acompañado además por los legisladores Néstor Varela, Juan Maqueda y Carlos Branda, este proyecto pretendió reglamentar el derecho de rectificación definiendo que “Toda persona física o jurídica nombrada, señalada o notoriamente aludida mediante expresiones falsas, incompletas, agraviantes o difamatorias que divulgadas a través de cualquier medio de comunicación social, afecten su honra, su propia imagen o su intimidad personal o familiar, tiene derecho a difundir por el mismo órgano su rectificación o respuesta en forma gratuita. En ningún caso la rectificación o respuesta exime de las otras responsabilidades legales que se hubiera incurrido”.

Excluía de su ámbito de aplicación a “los funcionarios públicos respecto de los actos propios de su área de responsabilidad”<sup>463</sup>.

### **Proyecto Soderó Nieves**

Denominaba “derecho de réplica o de respuesta al que corresponde a toda persona de existencia visible, para lograr la adecuada protección de la dignidad, la honra, la intimidad

---

<sup>462</sup> 2458-D-92. Trámite Parlamentario 74. Diario de Sesiones. Págs. 3370 a 3379.

<sup>463</sup> 2743-D-92. T.P. 84. Diario de Sesiones. Págs. 3749 a 3751.

y los sentimientos, lesionados por una publicación, información, alusión, omisión o crítica de la prensa en general”.

El proyecto establecía requisitos a demostrar para el ejercicio de la rectificación y contemplaba la creación del “ombudsman de prensa”, designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado que debía recepcionar las peticiones, quejas o reclamos vinculados con la aplicación de la ley<sup>464</sup>.

### **1993 – Proyecto de Reformas del Código Civil. Poder Ejecutivo Nacional.**

Una Comisión designada por Decreto 468/92 del Poder Ejecutivo nacional, elaboró un proyecto de Reformas al Código Civil que elevó en marzo de 1993 que incluyó el derecho de respuesta en un Título dedicado a los derechos de la personalidad (art. 110 a 125). El art. 117, proyectado, reproduce virtualmente a la letra el art. 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el art. 118 reglamenta su ejercicio:

*“1º) El pedido de divulgación de la rectificación o respuesta, debe ser dirigido al medio de difusión, dentro del plazo de caducidad de 15 días posteriores a la publicación.*

*2º) La rectificación o respuesta debe ser concisa y limitarse al tema de la publicación contestada.*

*3º) La rectificación o respuesta debe ser divulgada inmediatamente e identificada como tal. El órgano de difusión puede agregar inmediatamente una declaración por la cual indique que mantiene su versión de los hechos.*

*4º) Si el órgano de difusión rechaza la respuesta o rectificación, o no la ejecuta correctamente, el afectado puede recurrir al juez, quien resolverá con audiencia del órgano de difusión, por el procedimiento más abreviado que prevea la ley local.*

*5º) El ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, no exonera al órgano de la responsabilidad que pudiera haber incurrido por atentado a los derechos de la personalidad”.*

En la nota al texto proyectado, la comisión destaca que ha seguido, en lo fundamental, al Código suizo (art. 28, incs. g a l, texto según la reforma aprobada en 1983),

---

<sup>464</sup> 1906-D-92. T.P. 53. Diario de Sesiones. Págs. 2613 a 2616.

y las recomendaciones de la Comisión 3 de las II Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal de Junín de 1986. Asimismo se destaca que la solución del inc. 4º fue propiciada por el Congreso sobre Responsabilidad Civil en homenaje al profesor Bustamante Alsina (Buenos Aires, 1990), y la del inc. 5º por las citadas II Jornadas<sup>465</sup>.

### **1994 – Convención Nacional Constituyente.**

Como ya sabemos, la Reforma de 1994 de la Constitución Nacional determinó la jerarquía constitucional (artículo 75 inc. 22) del Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 14 consagra el derecho de rectificación o respuesta.

Pero en el ámbito de la Convención Constituyente hubo proyectos específicos sobre el instituto, que si bien no se plasmaron en el texto de la Carta Magna cabe considerarlos como importantes antecedentes.

### **Proyectos Ponce de León**

El constituyente Rodolfo Ponce de León, presentó tres proyectos sobre el derecho de respuesta. Por un lado, un proyecto a la Convención Nacional Constituyente que proponía agregar al artículo 67 inc. 11 –Atribuciones del Congreso- de la Constitución Nacional, el siguiente párrafo: *“Asimismo, dictar la ley reglamentaria del derecho de rectificación o respuesta reconocido por esta Constitución, con el alcance previsto por el artículo 14, del Pacto de San José de Costa Rica y en cumplimiento del compromiso asumido en el artículo 2º de dicha Convención Internacional”*.

Entre los fundamentos de su presentación, sostiene la necesidad del artículo “para aventar toda duda sobre quién es el organismo competente para regular el instituto del derecho de réplica frente a algunas interpretaciones que se han formulado en torno al artículo 32 de la Constitución Nacional. Existe consenso doctrinario que la ley que reglamente este derecho, debe ser de carácter nacional y corresponde al Congreso Nacional dictarla, sin que obste a ello el artículo 32 de la Constitución Nacional porque aquella ley

---

<sup>465</sup> Zannoni, Biscaro. “Responsabilidad de los medios de prensa”. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993. Págs. 212/213.

no tendría por fin restringir la libertad de prensa sino regular el ejercicio de un derecho privado frente a los órganos de comunicación social”.

Asimismo, el mencionado constituyente presentó otro proyecto que proponía agregar un artículo nuevo en el segundo capítulo de la primera parte de la Constitución Nacional que dijera: *“Toda persona física o jurídica que hubiese visto perjudicada su privacidad, su honor o el goce completo de sus derechos personalísimos ante informaciones inexactas o agraviantes vertidas a través de cualquier medio de difusión, podrá promover la acción de amparo informativo para asegurar el ejercicio de su derecho de respuesta, que se sustanciará en la forma que establezca el ordenamiento procesal respectivo para la acción de amparo común”*.

Finalmente, el tercer proyecto, mocionaba incorporar un artículo nuevo en el futuro segundo capítulo de la Primera Parte de la Constitución Nacional que rezara:

*“Todos los habitantes tienen derechos a la correcta formación de su opinión pública mediante la más amplia difusión de los hechos y acontecimientos de su interés. Toda persona física o jurídica que se considere afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de cualquier medio de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio su rectificación o respuesta, gratuitamente y con la extensión máxima de la información cuestionada. En caso de negativa, el afectado podrá recurrir a la Justicia dentro de los 15 días posteriores a la fecha de publicación o edición transcurridos los cuales caducará su derecho. El trámite ante la Justicia será el del procedimiento más abreviado que cada ordenamiento procesal prevea. La crítica política, deportiva, literaria y artística en general, no está sujeta a derecho de rectificación o respuesta”<sup>466</sup>.*

Resulta obvio decir que este último proyecto avanza en atribuciones legales y procedimentales propias del Congreso.

---

<sup>466</sup> Convención Nacional Constituyente 1994. Proyectos presentados. Diario de Sesiones. Págs. 849, 850, 1060 a 1063.

### **Proyecto Torres Molina**

Se procuró que la Constituyente sancionara la siguiente incorporación a la Constitución Nacional, como artículo nuevo de la primera parte del Capítulo II:

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación tiene el derecho a efectuar en el mismo medio en forma gratuita su rectificación o respuesta. Si el responsable del medio de comunicación no admitiese la rectificación o respuesta, la persona afectada tendrá derecho a la acción de amparo”.

Este proyecto, que pasó para su tratamiento a la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, fue presentado por los constituyentes Ramón Torres Molina, Ana M. Pizzurno, Cecilia N. Lipszyc y Juan Schröder<sup>467</sup>.

### **Proyecto Castillo-Aguirre**

Los constituyentes Fernando R. del Castillo y Mauro Aguirre, también presentaron como proyecto, en esa oportunidad, la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 67 – Atribuciones del Congreso- que habilitara:

*“Dictar la ley que reglamente el derecho de réplica o respuesta a toda persona que por las condiciones que inviste, puede considerarse afectada por manifestaciones o informaciones difundidas públicamente de carácter inexacto o agraviante.*

*El derecho de réplica o respuesta se acuerda con independencia de cualquier otro que el ofendido pueda hacer valer ante las instancias que correspondan. No depende para su ejercicio de otra condición o presupuesto, así como la utilización del mismo no significa la pérdida o caducidad de cualquier otra acción que del mismo modo pueda corresponder.*

*El carácter de la manifestación o información inexacta o agraviante, deberá considerarse como tal cuando en principio aparezca con entidad suficiente para causar un perjuicio material, moral o a la imagen pública de la persona ofendida.*

*Toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o de televisión, deberá garantizar la protección efectiva de la honra y la reputación de las personas a quienes se le reconoce este derecho, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas (48 horas),*

---

<sup>467</sup> Convención Nacional Constituyente 1994. Proyectos presentados. Diario de Sesiones. Pág. 912.



*siempre que ello sea materialmente posible y que el agraviado no solicite un plazo mayor*<sup>468</sup>”.

### **1999- Proyecto Caillet**

La legisladora Carmen del Rosario Caillet, presentó un proyecto cuyo artículo 1º reza: *“Toda vez que una persona o una institución jurídica fuera agraviada en su honra o desacreditada en su conducta social, privada o pública, o acusada de conducta dolosa o criminal u ofendida con la difusión de información cultural errónea, falsa o desnaturalizada, y cuando cualquier de estos actos precedentemente enunciados puedan ser susceptibles de ser encuadrados bajo la figura legal tipificada en el Código Penal Argentino como “calumnias” o “injurias” y fueran emitidos en cualquier medio de difusión escrito, oral o televisivo, el damnificado tendrá el derecho a réplica, pudiendo difundir por el mismo medio y en iguales condiciones, las réplicas que como afectado juzgue necesarias”*<sup>469</sup>.

Nuevamente notamos la falta de claridad conceptual en cuanto a las características y ámbito propio del derecho de rectificación o respuesta, y como también se confunde las informaciones con las opiniones, lo cual hace a un apartamiento de lo consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica.

### **2000 – Proyecto Camaño**

Con una técnica legislativa prolija, clara y que enmarca a los distintos aspectos del derecho de rectificación o respuesta, se define el ámbito material de aplicación de la ley con la siguiente regla general: “Toda persona física afectada por información o noticia inexacta o agravante, emitida en su perjuicio a través de un medio de comunicación o difusión que se dirija al público en general, cualquiera fuere la modalidad en cuya virtud la emitiera, tiene derecho a efectuar inmediata y gratuitamente, por el mismo órgano que la propalara, su rectificación o respuesta, en las condiciones establecidas en la presente ley.

---

<sup>468</sup> Convención Nacional Constituyente 1994. Proyectos presentados. Diario de Sesiones. Pág. 1487/1488.

<sup>469</sup> 4826-D-99. Diario de Sesiones. Págs. 5974/5975.

Si hubiesen sido varios los medios que la propalaron, el derecho se podrá ejercer respecto de todos, algunos o cualquiera de ellos, a elección del afectado.

Quedan comprendidos dentro del derecho reglamentado por esta ley aquellas informaciones o noticias que, sin mencionar a la persona afectada, aludan a ella de un modo que resulte fácil su individualización.

Para el ejercicio del derecho aquí reglamentado no es necesario la atribución de culpa”.

El proyecto detalla los ámbitos excluidos de la rectificación, las excepciones; las características de la etapa prejudicial: requerimiento o pedido directo de la rectificación y su comunicación; contenido general, oportunidad y modalidades de la respuesta; reglas de aplicación particular; gratuidad; negativa a publicar o difundir; y efectos, en cuanto no exime de “las demás responsabilidades legales en que se hubiera incurrido”<sup>470</sup>.

## **2000 – Proyecto Folloni/Gómez Díez**

El presente proyecto establece que “Cualquier persona, física o jurídica, afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de uno o varios medios de difusión y que se dirijan al público en general tienen derecho a efectuar, por el mismo órgano que las propaló, su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente ley”.

En el artículo 5to. se determina que “El texto de la rectificación o respuesta deberá circunscribirse a los hechos de la información que se quiere rectificar o responder. Su extensión no excederá de la de ésta excepto que ello sea absolutamente necesario. Su publicación o difusión, que deberá efectivizarse dentro de los tres días corridos de haberse

---

<sup>470</sup> 4606-D-2000. T. P. 105. Diario de Sesiones. Págs. 5854 a 5860. Proyecto presentado por: Graciela Camaño, Fernanda Bendinelli de Ferrero, José M. Díaz Bancalari, y Carlos Soria.  
21 1017-D-2000. Diario de Sesiones. Págs. 1521 a 1527. Legisladores: Jorge O. Folloni y Ricardo Gómez Díez.

accedido a la misma, será gratuita para el afectado. También su divulgación habrá de materializarse en un lugar, espacio u horario semejante al que ocupó la información cuestionada”<sup>471</sup>.

## **2000 – COMFER Bases para un Anteproyecto de Ley de Radiodifusión**

El 11 de septiembre de 2000, el COMFER, Comité Federal de Radiodifusión, bajo la intervención del Dr. Gustavo López, presentó las bases para un anteproyecto de ley de radiodifusión, cuyo Capítulo V “Obligaciones de los licenciarios”<sup>472</sup> entre otras obligaciones, establece el derecho de rectificación o respuesta.

Los artículos 45 a 51 reglamentan el derecho de respuesta para radio y televisión de la siguiente manera:

### **“Derecho de rectificación o respuesta. Plazo.**

#### **Artículo 45.-**

*Toda persona afectada por informaciones difundidos por servicios de radiodifusión que considere que lo perjudiquen por ser inexactas o agraviantes tiene derecho de rectificación o respuesta gratuita, de conformidad con lo establecido por el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos siempre que lo solicite dentro de los veinte días corridos a partir de la fecha de la emisión correspondiente.*

#### **Petición.-**

#### **Artículo 46:**

*La solicitud de rectificación o respuesta será interpuesta ante los titulares de los servicios de radiodifusión o los productores, acompañándose la grabación o el texto de la rectificación que se solicita. Ese texto no podrá tener mayor extensión que el total de la nota que difundió y comentó el hecho que motivara el pedido de rectificación. Al*

---

<sup>472</sup> COMFER, Comité Federal de Radiodifusión. Bases para un Anteproyecto de Ley de Radiodifusión. Borrador de trabajo dado por el COMFER para discusión en el ámbito de las “Jornadas Extraordinarias de Radios Universitarias Nacionales”. La Plata, 19 y 20 de septiembre de 2000. Secretaría de Medios de la UNLP.

*formularse la petición se deberá individualizar a la emisora, día, hora y programa en el cual se realizó la difusión objetada.*

### **Plazo para responder**

Artículo 47.-

*Los titulares de los servicios de radiodifusión y los productores tendrán un plazo de 72 horas hábiles para expedirse si aceptan o no difundir esa rectificación u otra análoga. En caso de aceptarse el pedido y el contenido propuesto, la rectificación debe ser difundida dentro de los diez días hábiles siguientes en el mismo programa de la emisión que la motivó.*

### **Recurso judicial**

Artículo 48.-

*En caso de silencio o negativa, la persona afectada podrá presentarse ante el juzgado con competencia en recursos de amparos requiriendo que se ordene la rectificación requerida. El magistrado, mediante el procedimiento aplicable a los recursos de amparo, determinará si la emisión objetada causó injustificado perjuicio material o moral, o invadió indebidamente la intimidad del requirente o de su familia ordenando, si correspondiere, la rectificación requerida. En la sentencia deberá expedirse respecto de la razonabilidad o irrazonabilidad de la negativa inicial a difundirse la rectificación solicitada.*

### **Reiteración de negativas: falta grave.**

Artículo 49.-

*Configurará falta grave el hecho de que una misma emisora o productora incurriese en un mismo año calendario en tres o más negativas irrazonables por la autoridad judicial, o en diez o más negativas irrazonables en un mismo quinquenio.*

### **Restricción al derecho de réplica**

Artículo 50.-

*El derecho de rectificación o respuesta no será aplicable a las opiniones, críticas o hechos de carácter artísticos presentados en las emisiones. En el caso de las emisiones de noticias de interés público el derecho de rectificación procederá sólo si se comprobare que la misma es inexacta o hubiere sido difundida sin una previa y responsable verificación de su veracidad.*

### **Resarcimiento**

Artículo 51.-

*En el caso en que se otorgare el derecho de rectificación o respuesta y, con posterioridad y mediante el procedimiento ordinario el responsable de la emisión o el productor probare en juicio ordinario la veracidad de la información emitida y el derecho a difundirla, podrá reclamar los daños y perjuicios sufridos y el valor comercial de las emisiones que hubiere destinado a difundir la rectificación”.*

Si bien es altamente necesaria la reglamentación del derecho de respuesta, creemos que la ley de radiodifusión no es el ámbito oportuno para hacerlo. Una correcta técnica reglamentaria requiere una norma independiente, propia de este derecho que abarque a todos los medios, incluyendo a la prensa y a Internet, y que no dé lugar a discriminaciones.

De darse una reglamentación del derecho sólo en el ámbito de la radiodifusión- advertimos en tal momento-, se produciría una distinción que implicaría desprotección para los lectores de los medios gráficos. Atentaría contra el principio de igualdad ante la ley. Si la ley distingue, la justicia, los justiciables y los medios distinguirán y esto atentaría contra el carácter universal del derecho. Este proyecto finalmente quedó en la historia de antecedentes del régimen legal de radiodifusión, pero afortunadamente, se ha superado la vieja norma de la dictadura, Decreto Ley N° 22.285, y se procedió a su derogación, con la sanción de la Ley N° 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que acertadamente y como correspondía, no sancionó en su contenido, norma alguna reguladora del derecho de rectificación o respuesta, la que debe ser general, igual para todos los medios de comunicación y coherente con el mandato constitucional y convencional vigente en Argentina.

Al realizar el análisis conceptual jurídico del derecho, hemos abordado el tema de los medios legalmente reglamentados y hemos considerado en el estudio del caso Petric Domagoj c. Página 12 los agravios presentados por la demanda, entre los que se esgrime la inaplicabilidad del derecho de respuesta a los medios gráficos.

**2008 – Proyecto de ley reguladora del derecho a réplica. Diputados varios.**  
**Consideración de la legislación española en sus fundamentos<sup>473</sup>.**

Art. 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la regulación del derecho a réplica o respuesta para toda persona física o jurídica afectada por informaciones agraviantes, ofensivas o erróneas que la perjudiquen, emitidas por medios de difusión hacia al público en general.

Artículo 2º.- Forma y contenido. El derecho a solicitar la rectificación o respuesta se ejercerá, mediante solicitud escrita fehaciente, dirigida al director o al responsable del medio de difusión que haya emitido la información errónea o agravante, dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la de su publicación o difusión.

Artículo 3º.- Legitimación. Podrán ejercer el derecho a réplica o respuesta: a) el perjudicado o aludido o su heredero forzoso por sí o por intermedio de sus representantes; b) el representante legal de las personas jurídicas que se consideren afectadas. Artículo 4º.- Limitación. La solicitud de rectificación debe limitarse a los hechos de la información que el afectado pretende rectificar.

Artículo 5º.- Obligación de publicar. El director o responsable del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres (3) días siguientes al de su recepción.

La rectificación en un medio gráfico se debe publicar en condiciones equivalentes a las de la publicación que dio lugar al reclamo, y debe respetar las características tipográficas, conservar similar diagramación y lugar de publicación.

La rectificación en un medio audiovisual o radial, se debe difundir en el mismo programa y horario, y con idéntica cantidad de minutos, en los que se emitieron las expresiones que dieron lugar al reclamo.

---

<sup>473</sup> PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 6715-D-2008 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 176 Fecha: 04/12/2008 DERECHO A REPLICA: OBJETO, FORMA Y CONTENIDO, LEGITIMACION, LIMITACION, PUBLICACION, RECTIFICACION, IMPROCEDENCIA, RECLAMO JUDICIAL, COSTOS, SENTENCIA, MULTA, RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. FIRMANTES: DIEZ, MARIA INES RENOVADOR DE SALTA, TORFE, MONICA LILIANA RENOVADOR DE SALTA, ARDID, MARIO ROLANDO PARTIDO NUEVO CONTRA CORRUP. POR HONEST. Y TRANSP. CORDOBA.

En el caso de difusión en libros o en películas, las empresas responsables de la edición de libros o de producciones cinematográficas, deben otorgar la rectificación o respuesta a su cargo, a través de un medio escrito o de radio y televisión, a elección del afectado.

Artículo 6º.- Imposibilidad transitoria de rectificación. Si la información que se rectifica no puede ser difundida en el plazo establecido en el artículo anterior, la rectificación deberá ser divulgada al vencimiento de ese plazo, en el número inmediato siguiente si se trata de un medio gráfico, o en el programa del espacio radiofónico o televisivo siguiente, u otro programa de similar audiencia.

Artículo 7º.- Gastos de publicación. Los gastos de la publicación o difusión de la rectificación o respuesta, serán a cargo del medio emisor, en tanto no exceda la extensión de la información que diera lugar al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta.

Artículo 8º.- Improcedencia. No procederá el derecho de rectificación o respuesta cuando la réplica se pretenda en los siguientes casos: a) sea contraria a la moral u orden público, o pueda implicar a su vez un agravio o una inexactitud en perjuicio del editor, redactor o director del medio de comunicación o de terceras personas; b) verse sobre opiniones o ideas, salvo que las expresiones se hagan a sabiendas de que su contenido falso perjudica a una persona; c) se refiera a avisos publicitarios cuyo objetivo sea meramente comercial; d) contenga temas o referencias ajenas a la información publicada considerada inexacta; e) pueda haber sido respondida por la persona aludida en forma inmediata tuvo ocasión de responder o rectificar la información inmediatamente y no lo hizo; f) se hiciera se redacte en un idioma distinto del utilizado por el medio de comunicación; g) se promueva respecto de la difusión de los discursos pronunciados en las legislaturas, o de documentos oficiales mandados a publicar por las autoridades públicas; h) se promueva respecto de la difusión de expresiones sobre la actividad de un funcionario público en el ejercicio de su cargo; i) se inicien respecto de expresiones sobre los partidos o agrupaciones políticas o sus dirigentes, miembros, afiliados o autoridades sindicales o empresarias, con respecto a la actividad ideológica, partidaria o gremial que cumplen. j) se impulsen por personas que son figuras públicas sobre expresiones que sean hechos determinantes de su notoriedad.

Artículo 9º.- Subsistencia. Subsiste la obligación de publicar la rectificación o respuesta aún cuando ésta ya haya sido publicada por otro medio de comunicación distinto al que difundió originalmente la información.

Artículo 10.- Reclamo Judicial. Si en el plazo señalado en el artículo 4° de la presente ley, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación presentada, o se hubiere publicado o divulgado sin respetar la forma y contenido de la misma, podrá el perjudicado ejercitar la acción de réplica ante la justicia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.

Artículo 11.- Competencia. La presentación podrá hacerse ante cualquier juez letrado, de primera instancia, sin distinción de fueros y sin más formalidades. Territorialmente será competente el juez del domicilio del afectado o el del lugar que corresponda al domicilio del medio de comunicación, a elección del perjudicado por la información.

Artículo 12.- Interposición de la acción. La acción se ejercitará por escrito, sin necesidad de patrocinio letrado, acompañando la rectificación y la prueba fehaciente de su presentación en término.

Artículo 13.- Admisibilidad y trámite. El Juez, de oficio y sin audiencia de las partes, analizará la admisibilidad del reclamo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentado, rechazándolo si estima que la rectificación es manifiestamente improcedente. Su resolución será apelable conforme lo establecido en el artículo 15 de la presente ley. Verificada la admisibilidad el juez competente convocará al afectado, al director del medio de comunicación o a sus representantes a una audiencia, en la que se producirá la prueba, y que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al de la presentación del reclamo. El juez resolverá sin más trámite dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la audiencia, previa la comprobación de la identidad del interesado, la autenticidad de la publicación, el texto de la rectificación o respuesta y las pruebas acreditadas por las partes, de las que sólo se admitirán las que pudieron producirse y practicarse en el acto de la audiencia.

Artículo 14.- Costos judiciales. La actividad jurisdiccional tendiente a lograr el mandato judicial para el cumplimiento del derecho de réplica será gratuita. Las actuaciones estarán exentas del pago de tasa de justicia, sellado de actuación y demás contribuciones de ley.

Artículo 15.- Sentencia. El fallo se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación en la forma prevista en esta ley, y será recurrible dentro de los tres (3) días de notificado. El recurso será concedido libremente y con efecto suspensivo. El recurso se interpondrá fundado ante la Cámara de Apelaciones correspondiente la que resolverá en el término de diez (10) días de recibido el expediente, y su sentencia será inapelable.



Artículo 16.- Multa. Una vez firme la sentencia que ordene la publicación en la forma prevista por la presente ley, el medio emisor la debe cumplir en la fecha indicada. En caso de incumplimiento, el juez le impondrá una multa diaria a favor del afectado por cada día de demora.

Artículo 17.- Reclamo administrativo previo. Cuando la información que se desea rectificar se haya divulgado o publicado en un medio de comunicación estatal, la petición escrita y fehaciente que lo solicite, establecida en el artículo 2° de la presente ley, se tendrá por el reclamo administrativo previo previsto en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.

Artículo 18.- Otras acciones. El objeto de este reclamo es compatible con el ejercicio de las acciones penales o civiles de otra naturaleza que pudieran corresponder sobre los hechos difundidos.

De la propuesta de ley se destaca que toma de la legislación española la acción de réplica, tomándola de la legislación española.

También en sus fundamentos, se basa esencialmente en el derecho comparado español, destacándose:

“Con este objetivo, rescatamos la experiencia del derecho español - Ley Orgánica 2/1984 -. En España, el derecho de réplica, denominado de rectificación, no tiene raigambre constitucional, y su reconocimiento viene dado por la Ley Orgánica referida. La misma prevé que toda persona física o jurídica mencionada por un medio de comunicación social por una información o un comentario que le pueda provocar algún daño, tiene derecho a requerir la rectificación al medio emisor, cuando el afectado que ha sido mencionado considere que la información sobre él es falsa o inexacta. Para requerir la rectificación, el aludido debe remitir una nota al director del medio emisor dentro de los siete (7) días de publicada la información a rectificar.

Corresponde confrontar los requisitos para que alguien pueda ejercer el derecho de rectificación, con los que el medio puede solicitar al afectado al momento de enviar este su escrito. En el primer caso, las condiciones son:

- a) la mención debe ser por un medio de comunicación;

b) la referencia debe ser por una información de hechos; y

c) que por medio de esa información se pueda producir un daño a la persona. En el segundo caso, el reclamo al medio para que proceda su publicación, debe contener: a) una extensión proporcionada conforme lo que el afectado procure rectificar; b) una alusión a la información inexacta y no a opiniones; c) ausencia de referencias irrespetuosas e insultos.

La Ley 2/1984 contiene expresiones que resultan importantes al momento de su aplicación: a) "considere inexactos": el término "considerar" implica que la información no es necesario que sea incorrecta, ya que es suficiente para que el afectado lo crea en este sentido. El juez, por lo tanto, no estará obligado a investigar sobre la veracidad de la información o la falta de ella. b) "pueda causarle perjuicio": significa que no es necesario que haya un perjuicio efectivo sobre el afectado porque establece que éste tiene el derecho de rectificación cuando pueda provocarle un daño. En los medios digitales el plazo de caducidad es controvertido, porque la publicación de información es atemporal. En estos casos, la jurisprudencia española ha establecido que se debe rectificar la información subida y disponible en línea en Internet y que tenga cierta permanencia, ya que es accesible en forma atemporal, por lo que el efecto es como el de una publicación continua.

La denominación que este derecho ha recibido en España "de rectificación o respuesta", no ha dejado de generar pocas controversias, por cuanto se considera imprecisa la expresión. En este sentido la denominación que recibe en la República Argentina, y que damos por título a nuestro proyecto de ley como "derecho a réplica", es más adecuada.

De la comparación con el régimen español, y con el objetivo de recepcionar la reglamentación del derecho a réplica en la legislación argentina, podemos destacar:

a) Tanto en Argentina como en España, la consagración de este derecho no se encuentra en los propios textos constitucionales.

b) En nuestro país, el derecho a réplica se encuentra internalizado por medio de un tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que a partir de la reforma de la Constitución de 1994, tiene jerarquía constitucional.

c) En España, el derecho a réplica, se estableció por una ley orgánica, del año 1984.

d) En Argentina el derecho a réplica no se encuentra reglamentado en aspectos referidos a su ejercicio concreto, por lo que su aplicación ha quedado subordinada a la interpretación que la Corte Suprema ha realizado en algunos casos.

e) En España, el procedimiento de derecho a rectificación funciona en forma adecuada, conforme a los plazos y previsiones que la inmediatez requiere.

f) En nuestro país, la satisfacción de un afectado que ejerza su derecho a réplica, puede quedar supeditada a varios años de litigio, durante los cuales puede desaparecer el medio de comunicación o el programa televisivo o radial por el que se emitió la alusión.

g) En España, el criterio planteado por la ley - aunque morigerado por la jurisprudencia - es amplio, toda vez que procede cuando alguien considere que a su juicio se pueda vulnerar su persona.

h) En nuestro país, por el artículo 14 de la Convención y por la doctrina de la Corte, el derecho queda limitado a un criterio estricto del juez, para determinar la afectación a las personas.

i) En la Argentina, existe una limitación adicional de la Corte, que sin perjuicio de la salvaguarda de eventuales abusos, lo ha limitado en época electoral. Por otra parte, teniendo en cuenta el esquema del derecho nacional, que ha adquirido una singular característica a partir de la reforma de la Constitución en 1994, entendemos que el tema no es menor en cuanto a la problemática que se plantea.

En efecto, estando la Constitución y los tratados de derechos humanos, ahora en la cúspide de la pirámide, y siendo el tema referente parte de un tratado paradigmático ratificado con la misma reforma (Pacto de San José de Costa Rica), llevado por ésta a esa jerarquía, es que creemos que la incorporación de los derechos por ese tratado previstos - no operativos plenamente -, serían de una importancia jurídica relevante”.

**2009 – Derecho de rectificación y reforma de Código Penal. Proyecto de ley del Diputado Gerónimo Vargas Aignasse<sup>474</sup>.**

---

<sup>474</sup> Diputados Expediente: 0995-D-2009 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 14 Fecha: 19/03/2009 REFORMA AL CODIGO PENAL DE LA NACION: LIMITE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION POR RECTIFICACION O ACLARACION CON RELACION A LA NOTA PERIODISTICA QUE DIO ORIGEN A LA ACCION PENAL. FIRMANTES: VARGAS

Este proyecto de ley, si bien no proponía regular el derecho de rectificación, sí proponía una modificación del Código Penal en materia de calumnias e injurias, estableciendo la exención de la pena en los casos en los que se otorgara el derecho de rectificación o respuesta. Entendemos que dicha propuesta resultaba violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto establece claramente que el derecho de rectificación o respuesta no exime de otras responsabilidades ulteriores, tal como hemos analizado en el presente trabajo.

Concretamente este era el contenido del proyecto:

“Artículo 1º .- Incorporase como segunda parte del artículo 114 del Código Penal de la Nación, que quedara redactado de la siguiente manera: Los responsables por las publicaciones y emisiones, en los medios de comunicación, diarios, periódicos, emisoras radiales y de televisión, quedaran exentos de las penas previstas en los artículos 109, 110 y 113 del Código Penal, extinguiéndose la acción penal y el derecho a intentar acción reparatoria en sede civil, cuando publicaren o emitieren aclaración o rectificación suficiente y razonable ex officio. La publicación o emisión reparatoria podrá hacerse también hasta seis días después de haber sido notificados de la existencia de la acción penal y mientras no medie resolución pasada en autoridad de cosa juzgada. Si no se considerase suficiente y razonable la publicación o emisión, la cuestión se resolverá por el tramite de las excepciones previas (titulo XXIII, libro segundo, artículos 448, 449, 450 y 451 del Código Procesal Penal). Si junto con la querella se hubiere deducido acción por indemnización de danos material y/o moral la acción y el derecho quedaran extinguidos con la resolución de la causa penal. Si no se lo hubiere hecho, quedara igualmente extinguido el derecho a intentar acción reparatoria en sede civil.

Artículo 2º .- El Poder Ejecutivo al momento de la reglamentación de la presente adoptará las medidas necesarias para adecuar el Código Procesal Penal federal a la reforma”.

Entre los fundamentos, el diputado se expresaba en contra de la reglamentación del derecho de rectificación, tomando partido por la postura empresarista argentina que rechaza a la figura. Así, expresó: “Este proyecto de ley constituye una solución para el gravísimo problema del mal llamado “Derecho de réplica”, unánimemente rechazado por los medios de comunicación escritos, orales y televisivos de la Argentina, por tratarse de un instituto foráneo que no se aviene ni con la letra ni con el espíritu de nuestra Constitución Nacional que ha consagrado la libertad de prensa como un dogma superior que se articula con el régimen republicano de gobierno. Los medios argentinos, al igual que el resto del mundo, han sido denominado el cuarto poder, también paralelamente se ha dicho que prestan una función pública. Si así fuere, de algún modo, es hora de que sean considerados en el plano del ejercicio de una libertad estratégica, como lo sostiene Linares Quintana. La concepción anglosajona que emana del artículo 32 de la Ley Fundamental siguiendo la primera enmienda de la Constitución de EE.UU., no admite en nuestro suelo, como no lo hace tampoco, el país del norte, el llamado derecho de replica que algunos proyectos intentan instaurar siguiendo el modelo francés o español. Los medios, particularmente los de la prensa escrita, han repetido hasta el cansancio que sus columnas están permanentemente abiertas a las colaboraciones de las más diversas ideologías, a las cartas de lectores, a las informaciones y a las crónicas, en suma, a las aclaraciones y rectificaciones que fueren menester, pero siempre, hay que tenerlo muy presente, porque nunca se ha resignado esta posición, bajo el libre albedrío, la determinación, la libre voluntad de sus directores y editores”.

**2010 – Proyecto de ley reglamentando el derecho de rectificación o respuesta del Diputado Pasini<sup>475</sup>. Reproducción de proyecto presentado en 2008<sup>476</sup>.**

---

<sup>475</sup> PROYECTO DE LEY Iniciado en la Cámara de Diputados. Expediente: 1768-D-2010 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 28 Fecha: 07/04/2010 DERECHO DE RECTIFICACION O RESPUESTA: CASOS INCLUIDOS, EXCEPCIONES, EJERCICIO DEL DERECHO, PROCEDIMIENTO POR VIA SUMARISIMA (REPRODUCCION DEL EXPEDIENTE 1912-D-08). FIRMANTES: PASINI, ARIEL OSVALDO ELOY FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ BUENOS AIRES.

<sup>476</sup> El proyecto mencionado anteriormente fue una réplica de idéntico proyecto presentado en 2008. Iniciado: Diputados Expediente: 1912-D-2008 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 36 Fecha: 02/05/2008

Este proyecto de ley, respetaba los parámetros que hasta el momento venimos señalando en torno a la necesidad de reglamentar el derecho de rectificación, estableciendo la vía sumaria para el proceso judicial.

El texto, que lamentablemente no prosperó, sostenía:

“Artículo 1. Toda persona física o jurídica que sea nombrada, señalada o notoriamente aludida en un medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual, radiofónico, digital u otro, con informaciones que considere presumiblemente falsas o que configuren un agravio a su persona, tiene el derecho a efectuar en el mismo medio y en forma gratuita, su respuesta o rectificación.

Artículo 2. No procederá el derecho de respuesta cuando la información original verse sobre ideas, valoraciones, opiniones, apreciaciones, creencias, ideologías o convicciones.

Artículo 3. El derecho se ejercerá personalmente y sin necesidad de patrocinio letrado. En caso de fallecimiento, podrá ser ejercido por el cónyuge o por sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Los menores o incapaces la harán por medio de sus representantes legales.

Artículo 4. El proceso se iniciará remitiendo un escrito al director del medio, en el plazo de 10 días corridos desde la publicación de la información que se desea rectificar o responder. El medio deberá publicar o difundir la respuesta en el plazo de tres días corridos desde recibido el escrito que la solicita. Podrá ser rechazada la solicitud de rectificación o respuesta cuando la misma resulte manifiestamente inexacta.

Artículo 5. Para el caso de imposibilidad de cumplir con el plazo mencionado en el artículo 4 de la presente ley, la respuesta deberá ser difundida en el número siguiente si se trata de medios gráficos, o en el programa más próximo de similar audiencia en caso de medios audiovisuales o radiofónicos.

Artículo 6. La rectificación o respuesta deberá referirse solo a los hechos publicados o difundidos que se desean rectificar o responder, y no puede contener de manera alguna agravios, vocabulario inapropiado ni involucrar a terceras persona sin causa justificada.

Artículo 7. Si quien intenta rectificar o responder viola lo establecido en el artículo precedente, el director o responsable del medio podrá suspender la publicación de la rectificación hasta que la misma sea acorde con lo establecido.

Artículo 8. La respuesta deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo. Los medios gráficos y digitales deberán procurar la misma extensión, tipografía y diseño. Los medios audiovisuales y radiofónicos deberán emitir la respuesta en el mismo programa y con igual cantidad de minutos.

Artículo 9. En caso de negarse el derecho de rectificación o respuesta o no publicarse lo solicitado, la persona perjudicada podrá recurrir judicialmente dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió ser publicada o difundida la rectificación. El reclamo en sede judicial será totalmente gratuito y por lo tanto exento del pago de tasa de justicia, sellado y otras contribuciones de la ley.

Artículo 10. El procedimiento se realizará por vía sumarísima de acuerdo con las disposiciones procesales de cada jurisdicción.

Artículo 11. La presente acción no es incompatible con las acciones civiles o penales que pudieren corresponder”.

En los fundamentos de su propuesta, el Diputado Pasini sostuvo:

“El derecho de rectificación o respuesta, conocido también como derecho a réplica, aparece en el derecho positivo argentino en el año 1992, a partir de su consagración jurisprudencial en el caso "Ekmekdjian, Miguel c. Sofovich, G. y otros". Allí, por una abrumadora mayoría de ocho jueces, se reconoce su procedencia y constitucionalidad. A partir de entonces se dictaron numerosos fallos que siguieron reconociendo la vigencia del derecho de rectificación o respuesta, difiriendo entre ellos respecto del alcance y condiciones de ejercicio de dicho derecho.

La reforma constitucional de 1994 reforzó la situación jurídica del derecho de rectificación o respuesta en nuestro plexo normativo interno, al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha Convención, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 14 dice: "1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las

condiciones que establezca la ley. 2. en ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido (...)"

Desde la ratificación del Pacto se venía discutiendo profusamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, acerca del carácter programático u operativo del derecho a réplica en nuestro ordenamiento jurídico interno. ¿Era necesario el dictado de una ley para tornar operativo dicho derecho? Si el derecho era operativo, ¿cuál era su alcance, límites y condiciones de aplicación?

La ausencia de una ley que reglamente el derecho de rectificación o respuesta constituye un incumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país. La mora, por otra parte, genera situaciones harto confusas que multiplican la conflictividad innecesariamente. Estando reconocido el derecho de rectificación o respuesta, la ausencia de la ley correspondiente hace que aumente la judicialización de situaciones que podrían encuadrarse y resolverse pacíficamente de existir una reglamentación razonable. Si bien desde "Ekmekdjian c. Sofovich" ya no es posible discutir la procedencia del derecho, quedan pendientes numerosas cuestiones que requieren su abordaje legislativo. ¿Es procedente el derecho de respuesta o rectificación respecto de juicios de valor y opiniones, como en el derecho francés? ¿Deberá, en cambio, ser acotado en relación a aserciones de tipo fáctico? ¿Quién goza de suficiente legitimación para el ejercicio del derecho? ¿Se puede admitir la legitimación de personas jurídicas como representantes de un interés colectivo? ¿Ese interés colectivo ha de ser ejercido por quien primero se presente en el tiempo, como se resolvió en Ekmekdjian c Sofovich? ¿Hay que demostrar la falsedad o inexactitud de la noticia respecto de la cual quiere ejercerse el derecho? ¿Cuál debe ser la correcta interpretación de la frase del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto se refiere a "medios de difusión legalmente reglamentados"? ¿Cuál debe ser el plazo para la materialización de la rectificación o respuesta? ¿Cuál debe ser la extensión de la misma? ¿Su ejercicio debe ser gratuito y a cargo del medio periodístico? ¿El medio puede esgrimir causales de negativa para la difusión o publicación de la rectificación o respuesta? Estas preguntas se formulan una y otra vez por la ausencia de una solución legislativa clara y precisa.



El presente proyecto se propone aportar un marco jurídico razonable que facilite y agilice el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. También procura poner fin al debate que gira alrededor del carácter operativo o programático del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Este debate ha sido zanjado por la jurisprudencia, pero la ausencia de una ley que reglamente el derecho de rectificación o respuesta hace que la cuestión vuelva, una y otra vez, a plantearse en la práctica cotidiana de los medios de comunicación.

Creemos que es importante el dictado de una ley que reglamente el derecho de rectificación o respuesta para poder realizar el ideal de vivir en una sociedad democrática. En este sentido se pronunció Bidart Campos, quien señala: "Es un instituto útil y necesario que lejos de lesionar el derecho de publicar las ideas por la prensa (art. 14, Constitución Nacional), permite la efectiva vigencia del mismo en el orden de la realidad. En efecto, si a través de un medio de difusión se transmite una inexactitud o un agravio, el afectado tiene derecho de replicar, tiene derecho a que el órgano o medio rectifique. De ahí que el derecho de réplica se denomine también de rectificación o respuesta." Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. I, p. 277, Ed. Ediar, Bs. As., 1995. Vanossi afirma "No vemos en el derecho a réplica un instituto lesivo para la expresión de ideas. Todo lo contrario. La refuerza y vitaliza contemplando todos los intereses en juego: el derecho de todos los habitantes de expresar las ideas por los medios, el derecho del afectado por una inexactitud o un agravio a lograr su corrección, y el derecho de los terceros de anoticiarse de la corrección o rectificación de una información que era inexacta. En suma, la réplica, con el alcance fijado en el Pacto, no impide a los habitantes la libre expresión de ideas." La Constitución Nacional y los derechos humanos, Ed. Eudeba, pág. 13. El derecho de rectificación o respuesta es concebido, en el derecho estadounidense, como un instrumento encaminado a brindar una oportunidad razonable de conocer la existencia de varios enfoques y puntos de vista sobre asuntos de relevancia para la comunidad. Tiene en mira el derecho del público a estar debidamente informado sobre asuntos de importancia pública, y facilita el incremento del flujo de información al facilitar la propalación de distintas miradas sobre un mismo asunto.

En el derecho europeo, el derecho de rectificación o respuesta está estructurado como un medio de defensa de derechos personalísimos como el honor. El Pacto de San José de Costa Rica, marco que define la noción de derecho de rectificación o respuesta en nuestro derecho, sigue el modelo europeo. La jurisprudencia funda el reconocimiento del derecho en razón de la necesidad de resguardar derechos personalísimos, pero va más allá y reconoce la necesidad de establecer un equilibrio entre los ciudadanos y los medios de prensa y se refiere también a la posibilidad de facilitar la búsqueda de la verdad por parte del público.

En "Ekmekdjian c. Sofovich", la Corte sostuvo que "...en el análisis valorativo del denominado 'derecho de respuesta', no sólo se encuentra en juego la tutela de la libertad de expresión o el derecho de imprimir sin censura previa, sino también la adecuada protección de la dignidad, la honra, los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y por consiguiente la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos valores de la personalidad, garantía que puede encontrar un medio apto de ejercicio a través de la rectificación, respuesta o procedimientos que se aproximen a este objeto. Ambos valores deben ser debidamente sopesados, sin perder de vista que, con la respuesta, se trata de asegurar el derecho natural, primario, elemental a la legítima defensa de la dignidad, la honra y la intimidad" (considerando 10 del voto de la mayoría).

Más adelante la Corte expresa: "Es decir, que así como todos los habitantes tienen el derecho de expresar y difundir, sin censura previa, su pensamiento -ideas, opiniones, críticas- por cualquier medio de comunicación; así también todo habitante -que por causa de una información inexacta o agravante sufra un daño en su personalidad- tiene derecho a obtener mediante trámite sumarísimo una sentencia que le permita defenderse del agravio moral mediante la respuesta o rectificación, sin perjuicio del ejercicio de las restantes acciones civiles y penales que le pudieren corresponder" (del considerando 23 del voto de la mayoría).

El derecho de rectificación o respuesta puede definírsele como aquel que "viene a ocupar un lugar intermedio para morigerar los excesos que puedan cometerse en la

utilización de los medios de prensa privados, brindando a los particulares la posibilidad de acceder a los mismos para defender su buen nombre y honor en caso de ser agraviados públicamente. Los remedios de acción privada previstos en el Código Penal no resultan suficientes cuando el agravio ha alcanzado gran difusión y, por otra parte, la ofensa puede llegar a configurarse aun cuando no alcancen a conformar una figura delictual como la injuria o la calumnia". Cuestiones que surgen en torno del derecho de réplica y el fallo de la Corte Suprema en la causa Ekmekdjian. Colección de Análisis Jurisprudencial Derecho Constitucional - Director: Alberto Ricardo Dalla Via, Editorial LA LEY 2002, pág. 434.

El presente proyecto viene a consagrar el derecho de rectificación o respuesta respecto de informaciones inexactas o agraviantes, quedando al margen las ideas, valoraciones, opiniones, apreciaciones subjetivas, creencias, ideologías y convicciones. La adopción de una definición más amplia que incorpore el derecho de rectificar o dar respuesta a opiniones o juicios de valor significaría dar lugar a un proceso interminable de rectificaciones y respuestas que, lejos de contribuir al mejor debate de ideas, obturaría la libre expresión y restringiría el derecho de pensamiento.

En "Ekmekdjian c. Sofovich", la Corte receptó el derecho de respuesta respecto de opiniones de tipo religioso, adoptando un criterio amplio. Entiendo que hay que circunscribir el ejercicio del derecho sólo a aserciones de tipo fáctico, dejando las opiniones al margen de la posibilidad de su rectificación o respuesta. La solución escogida por el presente proyecto está en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema en "Petric c. Página12". Dice allí la Corte, refiriéndose al artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que "...la clara terminología del precepto limita el derecho al ámbito de lo fáctico, lo relativo a hechos cuya existencia (o inexistencia) puede ser objeto de prueba judicial. Queda así excluido el amplio sector en el cual lo decisivo no es atinente a los hechos, sino más bien a su interpretación: es el campo de las ideas y creencias, las conjeturas, las opiniones, los juicios críticos y de valor" (considerando 9 del voto de la mayoría).

En nuestro proyecto sostenemos que para ejercer el derecho de respuesta o rectificación, la noticia inexacta o agravante debe estar referida al presunto afectado de

modo tal que resulte fácil su individualización. En el proyecto se establece la gratuidad de la respuesta o rectificación y se señalan plazos perentorios para su ejercicio. Asimismo se consagran las modalidades referidas a la extensión de que se dará a la rectificación o respuesta.

El derecho de rectificación o respuesta también goza de recepción en el derecho público provincial a partir de su consagración en las constituciones provinciales. Al respecto, el derecho de rectificación o respuesta está en las constituciones de Jujuy, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego,, San Juan, Salta, Río Negro, Chubut.

En el derecho internacional el derecho de rectificación o respuesta se encuentra consagrado legislativamente o, más aún, con rango constitucional, en Francia, Suiza, España, Dinamarca, Bélgica, Austria, Uruguay, Chile, Portugal, Perú, Guatemala, Paraguay, Colombia y Brasil.

Es necesario sancionar una ley sobre el derecho de rectificación o respuesta que nos permita cumplir con el compromiso internacional asumido por nuestro país al tiempo de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 2 de dicho instrumento jurídico internacional dice que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades previstas en la Convención. Ello aún no ha sucedido en relación al derecho de rectificación o respuesta, lo que nos coloca en una incómoda situación de mora jurídica que debemos subsanar”.

**2012 – Proyecto de ley reglamentación derecho de rectificación. Diputados varios del Frente para la Victoria<sup>477</sup>.**

---

<sup>477</sup> PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 5321-D-2012 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 98 Fecha: 08/08/2012 INFORMACIONES EMITIDAS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE HECHOS INEXACTOS O AGRAVIANTES: DERECHO A REPLICA. FIRMANTES: BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS ELORRIAGA, OSVALDO ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS SOLANAS, JULIO RODOLFO

“Artículo 1º: Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece la presente Ley. La mera crítica, las ideas y las opiniones, no están sujetas al derecho de réplica.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

Artículo 2º: La publicación de la respuesta deberá tener una extensión proporcionada a la de la información inexacta o agravante y en todos los casos será gratuita.

Artículo 3º: La persona afectada deberá reclamar al responsable la publicación de la rectificación o la respuesta dentro del plazo de treinta días contados a partir de que la noticia pudo ser conocida por aquella. Vencido ese plazo el derecho de réplica caducará.

Artículo 4º: Si el responsable de la publicación inexacta o agravante se negare a publicar la respuesta o guardare silencio durante un plazo de quince días ante el requerimiento de la persona afectada, esta podrá deducir su reclamo ante el Juez competente en su domicilio o en el del editor requerido, a su elección, por el procedimiento del amparo previsto en la ley 16.986 o la que en el futuro la supliere.

Artículo 5º: La sentencia que hiciere lugar a la demanda fijará la extensión de la respuesta y las restantes condiciones en que se dará publicidad a la misma. Si el medio fuese gráfico determinará la página y el día en que se publicará la respuesta. Si la noticia inexacta o agravante hubiese sido difundida por radio o televisión fijará la fecha en que se dará lectura a la respuesta.

---

FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS BIANCHI, MARIA DEL CARMEN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ CIUDAD de BUENOS AIRES RIOS, LILIANA MARIA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS.

PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 7932-D-2013 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 186 Fecha: 09/12/2013 INFORMACIONES EMITIDAS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE HECHOS INEXACTOS O AGRAVIANTES. DERECHO A REPLICA. FIRMANTES: BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS

Artículo 6º: La sentencia será apelable al mero efecto devolutivo pero al conceder el recurso el juez, si considerase que ella merece revisión por la naturaleza de las defensas planteadas, podrá disponer de oficio la suspensión del pronunciamiento recurrido hasta que se expida el Tribunal de grado.

Artículo 7º: Sin perjuicio de la ejecución de la sentencia, el juez podrá al hacer lugar a la demanda, imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuyo importe será a favor de la persona afectada por la información inexacta o agravante. El incumplimiento doloso de la sentencia configura una conducta reprimida por el art. 239 del Código Penal.

### **2013-2014: Encuentros de Debate sobre Derecho a Réplica. Defensoría del Público.**

En noviembre de 2013, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, promovió una serie de encuentros tendientes a debatir sobre el derecho de rectificación o respuesta en general y con vistas a la elaboración de una propuesta de ley en la materia.

Para la convocatoria, se citaron a expertos, docentes, académicos, encuentros en los que hemos participado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. También participaron periodistas, sindicatos del sector y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la libertad de expresión.

Hasta el momento se ha avanzado en borradores, no habiendo un texto oficial del borrador elaborado a partir de las ideas recabadas en dicho ámbito, esperando que ese espacio fructifique y pueda finalmente generar una propuesta superadora de la falta de ley nacional sobre el tema.

Uno de los debates interesantes en torno al tema ha considerado la rectificación “colectiva”, entendiendo por esta como la posibilidad de que un grupo de personas, en razón de su origen social, étnico o nacional, de su orientación sexual, su capacidad física o mental, o de su pertenencia a un género o religión determinada, pueda ejercer su derecho de rectificación o respuesta como colectivo afectado ante información inexacta o agravante que sin mencionar en forma directa a un destinatario, sean susceptible de comportar un atentado al derecho al honor o a la dignidad en forma grupal, teniendo en cuenta el derecho

comparado francés, y consagrado en la ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa<sup>478</sup>.

### **2014 – Proyecto de ley de Senador Castillo<sup>479</sup>**

Este proyecto establece que la acción de amparo es aplicable para garantizar el derecho de réplica, rectificación o respuesta que consagra el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

En su artículo 2, reconoce la rectificación colectiva: “Artículo 2.- Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o respuesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o difusión que la cause. Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más claramente la honra o reputación de todos los ofendidos, y, en condiciones semejantes, la que se haya

---

<sup>478</sup>Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, version consolidée au 12 mars 2008. Article 13-1 En savoir sur cet article... Créé par [Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 7 JORF 14 juillet 1990](#) “Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être exercé par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été publiée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1”.

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312>

<sup>479</sup> Proyecto de Ley presentado en el Senado de la República Argentina. Expediente N° S-4272/14. El presente proyecto de ley se encuentra vigente en su tratamiento parlamentario ya que los proyectos de ley tienen tal condición durante dos años y luego caducan si no llegan a su sanción.

presentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en caso de oposición por parte del replicante, del Juez interviniente”.

“Artículo 3.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por la persona que éstos designen una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el agravio afectaren a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior”.

Artículo 4.- Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente sobre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus accionistas, salvo la que en la sentencia de amparo se imponga por su negativa injustificada a publicarla.

Artículo 5.- El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas:

a) El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del medio de comunicación, dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la publicación o difusión que se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada en la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella.

b) La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse y destacarse en condiciones equivalentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres (3) días corridos siguientes, si se tratare de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la siguiente edición o difusión materialmente posible que se hiciere después de ese plazo.

c) El medio de comunicación podrá negarse, razonablemente, a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la publicación o difusión.

d) En caso de negativa expresa o tácita del medio de comunicación a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones o apreciaciones, el replicante podrá iniciar acción de amparo dentro de los quince días hábiles judiciales de notificado de la negativa o de vencido el plazo de que el medio de comunicación disponía para la publicación o difusión.



e) El Juez interviniente, previo traslado por cuarenta y ocho (48) horas al medio de comunicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres (3) días siguientes.

f) Si se declarare procedente el amparo, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publicación o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la forma y condiciones en que debe hacerse”.

La sucinta reseña de diversos proyectos tendientes a reglamentar el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, y también el aporte de criterios y directrices para su consagración, ponen de manifiesto los distintos esfuerzos y tentativas para plasmarlo en la norma a la que internacionalmente Argentina se ha comprometido establecer. La tarea y la concreción, siguen estando pendientes. Por eso, culminamos este trabajo ofreciendo propuestas para reglamentar el derecho de rectificación o respuesta en el contexto actual argentino.

## **IX.2. Conclusiones**

Luego de haber hecho un recorrido conceptual, histórico, doctrinario, desde la perspectiva de los sistemas interamericano y europeo protectorios de los derechos humanos, del derecho comparado, de la mirada normativa, jurisprudencial y comunicacional del derecho de rectificación o respuesta, cabe retomar algunas de las ideas presentadas a lo largo del trabajo.

De ello surge la importancia instrumental del derecho de rectificación, con su proyección individual y social, que permite, de un modo sumarisimo que el aludido acceda al medio para responder a la información inexacta o agravante que lo ha involucrado en determinado hecho ocasionándole perjuicio.

La falta de exactitud en la información transmitida, la alusión a determinada persona en concreto, y el agravio perjudicial en sus derechos se constituyen en los requerimientos básicos para el ejercicio del derecho de respuesta.

La expresión, delimitación y concurrencia de tales requisitos son vitales asimismo para que el derecho de rectificación se halle naturalmente integrado al derecho a la información, y que su práctica consolide el derecho a la comunicación en una sociedad democrática.

En este sentido, no compartimos la visión de los adversarios del instituto en cuanto argumentan que el derecho de rectificación menoscaba el derecho a la propiedad, agrede o lesiona a la libertad de expresión y promueve la autocensura<sup>480</sup>. Esto es así por el carácter no absoluto de los derechos y asimismo porque la libertad de expresión no implica impunidad para decir cuanto se desee, sino que habrá que considerar los posibles perjuicios que se pueda ocasionar y deben asumirse por ende, las responsabilidades ulteriores derivadas del ejercicio profesional o del propio acto del habla.

Tal como hemos visto, ello no implica menoscabo ni sanción para el medio ni para el periodista, no requiere retractación ni rectificación de quien ha informado. Quien rectifica es el aludido, y al rectificar permite que su versión igualmente sea atendida como información. El admitir una rectificación implica una visión amplia, pluralista, acorde a la polifonía de voces que se expresan en una sociedad democrática.

“Ese derecho a la rectificación está muy bien estructurado. Distinto es que su aplicación haya sido incierta cuando no defraudante. ¿Vale la pena acudir a tal derecho? ¿Sirve realmente para algo? Pensemos, los que somos mayores, en ese “N de R”, o nota de redacción..., en virtud de la cual el medio volverá a “machacar” al osado que se había

---

<sup>480</sup> Además de las críticas oportunamente reseñadas, Badeni sostiene con insistencia: “Obligar a un medio de prensa a publicar algo que no quiere expresar es censura. Equivale a prohibir la publicación de una nota que se quiere difundir. Por otra parte, y bajo el pretexto de preservar un derecho humano, los más fervientes defensores de la réplica han sido los dirigentes políticos y sociales que necesitan estar en la prensa para mantener viva su existencia en la opinión pública”. No es así, tal como hemos respondido, no se obliga en modo alguno ni al medio ni al periodista a rectificar, sino que el que rectifica es el afectado y además la rectificación es parte integrante del derecho a la comunicación. Esta visión, sigue respondiendo a un modelo empresarialista de la información. Badeni, Gregorio. “El derecho a réplica. Una lesión a la libertad de expresión”, publicado en La Nación, edición del 24 de febrero de 2006 y Revista ADEPA, 2006, Buenos Aires. <http://www.lanacion.com.ar/783366-una-lesion-a-la-libertad-de-prensa> y lo ha expresado también en publicación con idéntico título en la Academia Nacional de Periodismo, 2 de diciembre de 2006, páginas 4.

atrevido a protestar por alguna información a su juicio inveraz”, sostiene desde una perspectiva escéptica, Vega Ruiz<sup>481</sup>.

Estimamos que tal afirmación, además de evidenciar una actitud pesimista, desestimatoria de uno de los institutos integradores del derecho a la información atenta contra la participación y las acciones de contribución al enriquecimiento de la vida en democracia. Desde esta perspectiva, se asume una pasividad, conducente a la inacción y a la aceptación incólume a las informaciones transmitidas por los medios, aceptando las reglas propias de una “mediocracia”. A tal actitud responderíamos que sí vale la pena acudir a tal derecho, y son muchas las razones que abonan esta postura que se ha expuesto desde distintos abordajes a lo largo del presente trabajo.

En este sentido, hemos respondido a las preguntas de investigación formuladas, abordando el derecho a la información y a la comunicación en Argentina y España; la incidencia del sistema interamericano y europeo de derechos humanos en el derecho interno; el derecho de rectificación o respuesta, sus antecedentes, la terminología utilizada; su interpretación; su análisis conceptual semántico, jurídico y comunicacional; su naturaleza y estatus jurídico y el bien jurídico protegido.

Hemos asimismo abordado los fundamentos del derecho de rectificación o respuesta, su relación con el derecho a la comunicación y los desafíos ético comunicacionales ante los nuevos medios de comunicación.

Particular énfasis hemos puesto en el status questionis, tratando el derecho de rectificación o respuesta en Argentina, su interpretación doctrinaria y jurisprudencial que ocurre con el instituto en constituciones provinciales. Hemos observado en este relevamiento la incidencia del derecho comparado y los aportes del sistema interamericano y la legislación comparada, destacándose las enseñanzas de la jurisprudencia y doctrina españolas. También se ha analizado el sistema interamericano de derechos humanos y derecho de rectificación o respuesta. Carácter vinculante de sus pronunciamientos y en

---

<sup>481</sup> Vega Ruiz, José Augusto “Libertad de expresión. Información veraz. Juicios paralelos. Medios de comunicación”. Editorial Universitas S.A. Madrid, 1998.

forma comparada, la regulación de la figura en el Derecho Español, su interpretación jurisprudencial y doctrinaria. El derecho de rectificación o respuesta en el sistema europeo de derechos humanos también fue objeto de análisis.

El procedimiento del derecho de rectificación o respuesta, del cual Argentina carece y España tiene desarrollado nos ha llevado a su abordaje específico, destacándose la necesidad de la celeridad e inmediatez en el ejercicio del derecho de respuesta para su cumplimiento efectivo.

Ello contribuyó a trazar los criterios básicos tendientes a una propuesta de normativa de lege ferenda o ¿cómo regular el derecho de rectificación en Argentina de forma que la libertad y la igualdad se acrecienten?, tratando los tópicos básicos que hacen a su ejercicio tales como: supuestos para su procedencia; legitimación, procedimiento y plazos, todos ellos con la comprobación de que la propuesta cumple los requerimientos internacionales.

La posibilidad concreta de acceder al medio, el derecho a ser oído, el derecho no solamente de recibir, sino también de dar información, la inmediatez a la publicación o difusión de la información inexacta, la presentación de una versión de los hechos distinta contribuyen a ensanchar la reflexión sobre la información.

El efectivo ejercicio del derecho de respuesta hace a una alta y positiva valoración no sólo del derecho al honor del afectado que pretende dar su propia versión de los hechos de una manera sin afanes “lucrativos”, sino también del derecho a la información, desde un ejercicio activo, participativo.

Partimos de la base de la necesidad e imprescindibilidad de la libertad de expresión para la vivencia de una auténtica democracia, pero también los tiempos actuales nos hablan del poderío de los medios de comunicación, de la sociedad de la información en la que estamos insertos, de ese cuarto poder que ya no lo es tal como algunos estudiosos de los medios, que directamente lo llaman el “poder mediático” como uno de los componentes

más fuertes del gobierno, y ese poder, que fortalece y hace a la esencia de la democracia, reconozcamos, también puede causar perjuicios.

Ignacio Ramonet<sup>482</sup>, director de Le Monde Diplomatique, sostiene: “El problema es que, con las mejores intenciones, se puede hacer mucho daño. Y que hoy el propio funcionamiento de esta información dominante carece de control (...) No hay control. Nadie pilota. ¿Por qué? Porque, precisamente, este tipo de información funciona de una cierta manera que es globalmente agradable”.

Si el propio director de un medio reconoce tal problema, nos está indicando carencias y disfunciones, en el interior mismo de la producción de la información. En ese marco, creemos que es peligroso para la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información provocar interrogantes acerca de los “controles”, de los que tanto apetece la censura. Viremos la perspectiva desde el exterior hacia el interior, pensemos en las autorregulaciones y en una “opinión pública” participativa de la información.

En este planteo radica la clave y la razón de ser del derecho de respuesta.

Se podrá cuestionar: dado el poder que detentan los medios, cuando éstos dieron una información inexacta o agravante sobre determinada persona, ¿cómo hace el afectado para recuperar socialmente el honor vapuleado? ¿Cómo se supera la “condena social”? El ejercicio de este derecho, y de las otras acciones de las que dispone el ordenamiento jurídico posibilita la reparación del daño sufrido, el saberse con disponibilidad de instrumentos de protección, y vale repetirlo, la concreción del derecho universal de dar información.

Por otra parte, los profesionales de los medios, no deben concebir este derecho como un propulsor de “autocensura”, sino que al contrario, lo deben asumir como una garantía del ejercicio profesional, con una actitud aperturista que entienda que el derecho a

---

<sup>482</sup> Ramonet, Ignacio. “La tiranía de la comunicación”. Temas de Debate. Editorial Debate S.A., Madrid, mayo de 1998.

dar información no es patrimonio exclusivo. La posibilidad rectificatoria del afectado forma parte de una comprometida diligencia que redundará en su fortalecimiento profesional y que se halla en el marco de las responsabilidades que lo implican cotidianamente en su tarea informativa.

El desarrollo legal y jurisprudencial que ha tenido el derecho de respuesta en diversos países y la progresividad de su aplicación en el ámbito latinoamericano, consensuada en el marco de un tratado internacional demuestran una consolidación de las libertades no desde la mera proclama sino desde lo concreto.

España tiene una larga tradición en la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, consolidada ya por la Ley Orgánica 2/1984 reguladora de la materia, legislación que como hemos visto, incluso es tomada como ejemplo y fuente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en la interpretación constitucional del instituto.

En Argentina, pese haber suscripto la Convención Americana de Derechos Humanos en 1984 y haberle otorgado jerarquía constitucional con la reforma de la Carta Magna en 1994, sigue siendo una cuestión pendiente la ley que reglamente su ejercicio. A partir del año 2008, al comenzarse con las discusiones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el tema volvió a tomar relevancia, ya que se revitalizaron una serie de temas propios del derecho a la comunicación que hacía mucho tiempo estaban excluidos de la agenda pública.

Algunos temas tuvieron una recepción positiva, acompañada también de las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de la resolución del Caso “Kimel”<sup>483</sup> en esa instancia, Argentina reformó su Código Penal en materia de

---

<sup>483</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Fondo, Reparaciones y Costas.

calumnias e injurias<sup>484</sup>, acogiendo una postura de despenalización parcial de tales delitos ante temas de interés público.

Pero también, hay temas que quedaron rezagados, y hasta el momento pendientes, todos ellos vitales para la más amplia realización del derecho a la comunicación, tales como: la reglamentación del derecho de rectificación o respuesta, tal como tratamos en el presente estudio, pero también, una ley regulatoria del derecho de acceso a la información pública<sup>485</sup> y la cláusula de conciencia<sup>486</sup>.

Coincidimos con Gallardo en que es necesario “reforzar mecanismos que propicien el acceso y la participación real de los ciudadanos en los medios de comunicación siempre es necesario, más aún si el contexto vigente se caracteriza por el reinado de títulos o zócalos televisivos con gran poder de impacto y enorme facilidad para la construcción de sentidos, casi con exclusividad ligados a intereses de índole empresarial<sup>487</sup>”. Y no se puede negar, además la responsabilidad jurídica y social de los medios y los derechos que se vulneran por la difusión de informaciones falseadas, discriminatorias y distanciadas de la veracidad de los hechos.

Existe una especie de reflejo social hacia la necesidad de más información para tener más libertad y más democracia. La clave está en la calidad y no en la mera cantidad informativa, más aún en la Sociedad de la Información, que con el desarrollo de Internet y las redes sociales se ha posibilitado la información minuto a minuto. El desafío es que de

---

<sup>484</sup> Ley N° 26.551. Modificación del Código Penal. B.O.: 27/11/2009. Sancionada: 18 de noviembre de 2009. Promulgada: 26 de noviembre de 2009.

<sup>485</sup> Este tema lo hemos abordado in extenso en “El derecho de acceso a la información pública. Derecho humano universal e indivisible y mecanismo de realización de la vida democrática”. Revista Diálogos, FELAFACS, 2013, número dedicado al derecho de acceso a la información pública, coordinado por el Dr. Manuel Sánchez de Diego.

[http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2013/07/87\\_Revista\\_Dialogos\\_El\\_derecho\\_de\\_acceso\\_a\\_la\\_informacion\\_publica\\_Derecho\\_humano\\_universal\\_e\\_indivisible\\_y\\_mecanismo\\_de\\_realizacion\\_de\\_la\\_vida\\_democratica.pdf](http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2013/07/87_Revista_Dialogos_El_derecho_de_acceso_a_la_informacion_publica_Derecho_humano_universal_e_indivisible_y_mecanismo_de_realizacion_de_la_vida_democratica.pdf)

<sup>486</sup> Si bien hubo proyectos de ley presentados al Congreso Nacional en la materia –igualmente que en referencia a la reglamentación del derecho de acceso a la información pública y el derecho de rectificación o respuesta- hasta la actualidad no han prosperado.

<sup>487</sup> Gallardo, Juan Pedro. “Réplica y Participación ciudadana”, publicado en el diario “Página 12”, Buenos Aires, Argentina. Sección La Ventana, 4 de enero de 2010. Versión digital disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-137804-2010-01-04.html>

verdad, aumenten las libertades y se supere la confusión. En este sentido, consideramos que los nuevos medios de comunicación, internet, las redes sociales y todas las nuevas fórmulas comunicativas prácticamente instantáneas, ofrecen una posibilidad inmediata, rápida y eficaz que facilita el derecho de rectificación o respuesta. Para ello, debe fortalecerse, entre otros derechos, el derecho de rectificación o respuesta, para poder contar con la mirada más amplia y polifónica en una auténtica sociedad democrática.

### **IX.3. Propuesta de lege ferenda. Contribuciones a la reglamentación del derecho de rectificación o respuesta en Argentina. Comprobación de que la propuesta cumple los requerimientos internacionales**

Partimos de la idea, tal como venimos expresando en el presente trabajo, de que el derecho de rectificación o respuesta, lejos de ser una limitante o una restricción al derecho a la libertad de expresión se constituye en una figura que vigoriza el derecho a la comunicación, promoviendo mayor libertad, respetando el derecho a la igualdad de expresarse y fortaleciendo la democracia.

Así, ante la carencia de una ley de alcance nacional en Argentina, que reglamente el derecho de rectificación o respuesta, conforme a la manda convencional establecida en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual, tal como hemos referido posee rango constitucional en virtud del artículo 75 inc. 22 de la Carta Magna, estimamos que el presente estudio, requiere del aporte de directrices, principios, criterios y contenidos mínimos en pos de la consagración legal efectiva del mismo.

La República Argentina ha adoptado para sí la forma federal de gobierno. Ello implica que las Provincias delegan a la Nación ciertas facultades y otras las conservan. En el caso del derecho de rectificación o respuesta, se trata de un derecho cuya reglamentación no está delegada a la Nación y cada Provincia puede y debiera tener su procedimiento de derecho de rectificación o respuesta respetando la autonomía provincial. Tal como hemos repasado hay provincias que tienen reglamentado el derecho de rectificación y otras no.



Esta disparidad es otro factor que atenta contra el efectivo ejercicio del derecho a rectificar y deja en inseguridad jurídica a los aludidos en informaciones inexactas o agraviantes.

Por ello, una ley nacional, que en el marco del artículo 75 inciso 22, y teniendo como fundamento el Artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, repararía la omisión legislativa en la materia y subsanaría la negación fáctica de un procedimiento ágil e inmediato que facilite el ejercicio de la respuesta y evite acudir a un largo reclamo judicial con resultado incierto y tardío.

Si cabe alguna duda de la necesidad de una ley nacional que establezca las pautas básicas del derecho de rectificación o respuesta, cabría advertir sobre las consecuencias negativas de la existencia del derecho en unas provincias y no en otras, y la disparidad de su protección cuando la Nación Argentina ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica.

Atento a ello y para responder cabalmente al respeto del federalismo argentino y a la autonomía provincial, la ley que se propone debiera establecer los supuestos para su ejercicio, su procedimiento, alcance, legitimados activos, invitando a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de la ley para la regulación del derecho de rectificación o respuesta en sus ámbitos respectivos.

#### **a. Supuestos para el ejercicio**

El artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como hemos abordado es claro al delimitar los supuestos en los que opera el derecho de rectificación o respuesta.

Así establece que el derecho de rectificación o respuesta corresponde a la persona aludida, bien por su nombre, o que pueda ser identificada en informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio. Como hemos explicado en profundidad, en coincidencia con el texto de la Convención, la Opinión Consultiva 7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación aplicada en el caso “Petric Domagoj c. Página 12” y en el derecho comparado español, la L.O. 2/184, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo al respecto, el derecho de rectificación se dirige a rebatir “informaciones inexactas o agraviantes”, referidas a hechos, excluyendo juicios de valor, creencias, dogmas de fe, pensamientos políticos, y opiniones en general.

En este sentido, y en consonancia entonces con el sistema interamericano, y las directrices indicadas, el texto de la Ley Orgánica 2/84 es clara al establecer que toda persona “tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”.

La información se considera inexacta por el aludido en la misma, es decir, a juicio de la persona citada la información es inexacta y no se exige prueba de exactitud o verdad de la información, ya que eso discurre por canales distintos, como el reclamo de daños y perjuicios civiles o por acciones penales.

Asimismo, no hay prueba de que ocasione un perjuicio al aludido en la información, sino que el rectificante considera que lo perjudica, y dicha ofensa invade la esfera de su honor e intimidad, y no en el ámbito de sus creencias ya que éstas corresponden a ideas o pensamientos y en tal caso la rectificación no es admisible pues refiere sólo a información, tal como hemos señalado.

También cabe incluir a las personas jurídicas en la posibilidad de rectificar, pues éstas pueden verse afectadas por informaciones inexactas que agraven la trayectoria, el prestigio o la imagen pública de determinada entidad. Además en este sentido el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos alude a “toda persona”, con lo cual no hay motivo para excluir a las personas jurídicas y asimismo se abre y expande el derecho de rectificación en las discusiones de una sociedad democrática.

En síntesis, para la procedencia del del derecho de rectificación o respuesta, respetando los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, la ley que reglamente el mismo en Argentina debiera establecer como supuestos para su ejercicio los siguientes:

- Existencia de una información inexacta y agravante a través de
- cualquier medio de comunicación social que
- aluda, mencione y/o individualice a una persona física o jurídica en particular
- y que la aludida considere que su divulgación puede causarle perjuicio.
- No procederá ante la emisión de ideas, valoraciones, opiniones, apreciaciones, creencias, ideologías o convicciones.

**b. Legitimación:**

**Persona física aludida**

El mismo artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece quién es el legitimado activo para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, o en otros términos, quién puede reclamarlo, siendo “toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio”.

El titular concreto del derecho es la persona aludida, citada o involucrada en una información inexacta o agravante. El artículo se refiere, expresamente, a que “toda persona” tiene derecho a efectuar su rectificación o respuesta, y no se dice “tener derecho a solicitar y, en su caso, obtener rectificación (...)”, lo que significa que quien rectifica no es el medio de comunicación sino el ciudadano que se considera lesionado en sus derechos, agraviado por los términos inexactos vertidos por el medio de comunicación respecto a hechos. Es el ciudadano el que dice: tengo derecho a rectificarle a usted y le rectifico con este contenido que aportó y esto es lo que solicito. Esto no implica por ende que el medio o el periodista se retracten o rectifiquen por sí mismos la información emitida.

La fórmula legitimadora de la norma es amplia, es decir, si el titular del derecho es un particular, se deduce que su acción ante el medio de comunicación se justifica por un perjuicio evidente en sus legítimos derechos morales, por la afectación en sus derechos subjetivos.

Interpretamos entonces que los requisitos ineludibles de legitimación, serían los siguientes:

- a) que la información sea considerada inexacta o agravante para el reclamante;
- b) es preciso, en primer lugar, que exista una alusión o una individualización a la persona;
- c) que la alusión pueda causarle perjuicio.

Si bien el artículo expresamente no dice que la información aluda a la persona afectada, ello surge de la interpretación integral del artículo, puesto que si la información inexacta o agravante fue emitida en “su perjuicio”, va de suyo que de alguna manera la involucrará, la hará parte de esa información dada erróneamente.

Con respecto a los presupuestos normativos para el ejercicio activo del derecho de rectificación, Barroso y López Talavera<sup>488</sup> argumentan: “Por lo que respecta a la inexactitud de la información, la libertad de expresión y el derecho a una información veraz requieren

---

<sup>488</sup> Barroso, Porfirio y López Talavera....ob. cit.

el carácter de veracidad. Si no hay veracidad tampoco existe el derecho a la información, pues como varias veces ha repetido el profesor Desantes, una información falsa no es ni siquiera información. Por eso, el derecho de rectificación presupone en primer lugar, para poder ejercerlo, que haya inexactitud o falta de veracidad en la información (...)”.

En segundo lugar, mencionábamos la alusión de la información, esto quiere decir, que los hechos que integran la información aludan al que ejercita el derecho de rectificación. Esta alusión no es necesario que sea con nombres y apellidos, sino que es suficiente con la identificación de la persona por las circunstancias y detalles que rodean a la información.

Por último, la otra condición exigida para acceder al derecho de rectificación es que el rectificante considera que la información le causa perjuicio. Todo aquello que pueda causar al rectificante perjuicio es objeto de rectificación. Dicho perjuicio no se requiere que sea material, económico, profesional, basta con que sea un perjuicio moral, como puede ser algo que desacredite la fama o el honor del rectificante, y que él lo considere como perjudicial para sí. En otros términos, el perjuicio que se le cause al sujeto cae en el campo de la subjetividad, puesto que debe entenderse en el sentido lato del perjuicio moral y no al patrimonial<sup>489</sup>.

En el marco de los legitimados activos para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta encontramos a los menores de edad, quienes pueden hacerlo a través de sus representantes, conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, en su artículo 26 y el artículo 100 del Código Civil y Comercial, que determina *prima facie* como representantes legales a los padres.

En el caso de las personas incapaces puede solicitar la rectificación su curador o el Ministerio Fiscal, dependiendo si tiene capacidad restringida o total, todo ello conforme a la Sección 3°. Restricciones a la Capacidad del Código Civil y Comercial de la Nación

---

<sup>489</sup> Cfr. CARRERAS SERRA, Lluís de. “Derecho español de la información”, Barcelona, UOC, 2006, p. 248. En el mismo sentido, ABAD ALCALÁ, Leopoldo, *op. cit.*, p. 412.

Argentina. Asimismo, en los artículos 100 y siguientes determina la representación legal de los tutores.

Y en el caso de las personas fallecidas, sus causahabientes, conforme el grado de prelación que determina el Libro Quinto, Transmisión de Derechos por causa de muerte del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 14, en su numeral 1., supedita el ejercicio del derecho de efectuar la rectificación por el mismo órgano de difusión “en las condiciones que establezca la ley”. Aunque en Argentina carecemos de una ley que reglamente el derecho de rectificación o respuesta a nivel nacional, la jurisprudencia la Corte ha dado elementos para que se proceda a su reglamentación, no obstante haberse pronunciado por la operatividad del derecho pese a la omisión legislativa. También se ha pronunciado en este sentido la Corte Interamericana en Opinión Consultiva 7/86<sup>490</sup> estableciendo que la falta de ley en los Estados Parte sobre el instituto no puede ser impedimento para garantizar el ejercicio del derecho. Esto no significa resignar a la necesidad de una ley, que es necesaria para facilitar el reclamo que mayormente puede ser desistido o ejercido mediante un tortuoso camino judicial, pero mientras tanto suple inevitablemente, la carencia normativa.

Si el ataque o el agravio de la información dada afecta a una persona jurídica determinada, que actúa comercialmente en sociedad con elementos individualizadores y autonomía subjetiva, no quedaría excluida del derecho de rectificación o respuesta<sup>491</sup>. Si por hipótesis se afecta a una asociación o ente jurídico constituido para nuclear a determinado grupo, estará en juego el interés colectivo que representa la organización en particular (por ejemplo, un sindicato) y también la respuesta debe resultar protegida.

---

<sup>490</sup> Opinión Consultiva OC-7/86, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta”. (Arts. 14.1; 1.1 y 2) Serie A, N° 7.

<sup>491</sup> Cifuentes-Fernández, “Rectificación. Respuesta. Réplica”, La Ley, 1990-E-872, n° VI.

En el caso de los grupos de personas indeterminadas, titulares de intereses difusos, Zannoni<sup>492</sup>, entiende que la legitimación se presenta de manera “problemática”. Entendemos que en estos casos, no se da la posibilidad de ejercer el derecho de rectificación en la medida que éste protege intereses legítimos o derechos subjetivos y que el requisito del perjuicio individual surge claramente del texto del artículo 14 ya citado.

La cuestión sobre la legitimación del derecho de rectificación o respuesta resulta particularmente controvertida en los pronunciamientos judiciales desde el inicio, ya que es usual la interposición de una excepción de falta de legitimación por parte de los medios demandados para inhibir el camino del reclamo judicial tratando de provocar el rechazo de la demanda.

Pero más allá de la estrategia judicial, tenemos que considerar la importancia de la legitimación en un procedimiento que en principio, debe ser expedito, bilateral –entre el rectificante afectado y el medio-, y con ausencia de un tercero mediando entre las partes.

La detentación de legitimación activa, como en la defensa de cualquier otro derecho, se convierte en la clave que abre la puerta del reclamo y determina que el mismo resulte o no fructífero. Como veremos seguidamente, la jurisprudencia sobre la materia ha tratado en todos los litigios el tema en cuestión, y en alguna ocasión con un tratamiento que juzgamos distorsionante de la figura.

Si bien en el caso “Ekmekdjian, Miguel Angel c. Neustadt, Bernardo y otros” (Fallos 311:2497, 1º de diciembre de 1988) la sentencia no dio lugar al derecho de rectificación por falta de reglamentación del mismo, el voto por separado del Dr. Belluscio<sup>493</sup>, no obstante compartir el criterio de la mayoría, trató la cuestión de la legitimación, sosteniendo que el mentado derecho no es el medio idóneo para un debate entre personas que sustentan ideas diferentes, *“sino que requeriría una ofensa o ataque a la*

---

<sup>492</sup> Zannoni, Eduardo y otro “Responsabilidad de los Medios de Prensa” Editorial Astrea. Buenos Aires, 1993. Pág. 222.

<sup>493</sup> C.S. 1/12/88. “Ekmekdjian, Miguel Angel v. Neustadt, Bernardo y otros”. J.A. 1989.II. Voto del Dr. Belluscio. Considerando 5.

*personalidad del sujeto que pretende ejercerlo, la cual no se da en la especie. No debe confundirse la defensa de la dignidad vulnerada con la diferencia de opiniones. No cabe prescindir de este recaudo alegando la afectación de derechos difusos, pues en la hipótesis de ser admitidos estos derechos requerirían de un daño actual o potencial derivado de los actos de la demandada, lo cual no surge de las circunstancias del caso”.* Efectivamente, la pretensión del actor, Miguel Angel Ekmekdjian en este caso era replicar consideraciones emitidas por el ex Presidente Dr. Arturo Frondizi en el programa de televisión de “Tiempo Nuevo” conducido por B. Neustadt, pero en ningún momento el demandante fue mencionado ni involucrado en hechos que dieran lugar a una información inexacta o agravante, con lo cual no se cumplían los requisitos habilitantes del derecho de respuesta.

La reiterada negativa de la Corte a considerar el derecho de respuesta por no considerarlo como derecho positivo interno por ausencia de reglamentación impidió que el tema de la legitimación se tratara en el caso Sanchez Abelenda, Raúl c. Ediciones de La Urraca S.A y otro” (Fallos 311:2553, 1º de diciembre de 1988)<sup>494</sup>.

Creemos que el caso “Ekmekdjian c. Sofovich”, dada su trascendencia e impacto en la jurisprudencia argentina y que se constituyó en “leading case” por haberse pronunciado a favor de la operatividad del derecho de rectificación, merece un estudio particular en cuanto al aspecto de la legitimación, y es en este punto justamente, en el cual disentimos de la sentencia.

En los Considerando 24 a 27 de dicha resolución judicial final, resultado de cinco votos contra cuatro<sup>495</sup>, la Corte –ya con nueve miembros- trata puntualmente el tema de la legitimación del actor, -que le había sido denegada en primera y segunda instancia-, Miguel Ángel Ekmekdjian, quien vale recordarlo, lesionado profundamente en sus sentimientos

---

<sup>494</sup> C.S. 1/12/88 – “Sanchez Abelenda, Raúl v. Ediciones de La Urraca S.A. y otro”. J.A. 1989. II. 377.

<sup>495</sup> El cambio de criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho de rectificación o respuesta se realizó en el marco de la nueva conformación de nueve miembros del tribunal. El fallo se dividió en cinco votos contra cuatro. Los cinco miembros que votaron por la mayoría fueron Rodolfo Barra, Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Mariano Cavagna Martínez y Carlos Fayt. La minoría estuvo a su vez dividida entre los votos conjuntos de Eduardo Moliné O’Connor y Erique Petracchi, un voto coincidente del por entonces presidente de la Corte, el Dr. Ricardo Levene (h.) y un voto en disidencia de Augusto Belluscio.



religiosos, promovió demanda de amparo contra Gerardo Sofovich, para que se lo condenara a leer en el programa “La Noche del Sábado” que por entonces se emitía por Canal 2, una carta documento que le remitiera contestando a Dalmiro Sáenz, quien expresó frases que consideraba agraviantes en relación a Jesucristo y a la Virgen María, en la emisión del 11 de junio de 1988.

Para la Corte, *“parece obvio señalar que una respuesta afirmativa a la cuestión –de la legitimación- constituye condición esencial para que el Tribunal pudiera haber afrontado la trascendente temática desarrollada en este pronunciamiento. Efectivamente, en un orden lógico de la decisión, ante el señalamiento del a quo de negar legitimación al demandante, si la corte compartiera ese razonamiento debería desestimar sin más el recurso. De lo contrario, las reflexiones del tribunal acerca del derecho de rectificación o respuesta, no tendrían la autoridad de un “fallo o sentencia” (arg. Art. 2º, ley 27). Empero, no es menos cierto que la falta de legislación en el orden nacional sobre la materia, el carácter de primer pronunciamiento sobre el asunto, y la trascendencia jurídica e institucional de la cuestión, proporciona a los fundamentos de la legitimación del demandante carácter provisional, susceptible de sufrir mutaciones de acuerdo a la evolución del instituto.*

25) *Que cualquiera sea el nombre que se le hubiese asignado a la acción intentada en estos autos, por aplicación del principio iura novit curia, esta Corte está facultada a superar óbices formales cuando se trata, como el sub examine, de una persona que se ha sentido mortificada en sus sentimientos más profundos por expresiones ínsitamente agraviantes para su sistema de creencias, considerando la presencia de un acto ilícito o en su caso, de un abuso del derecho. Dalmiro Sáenz con sus expresiones vertidas en la audición de Gerardo Sofovich –quien posibilitó el uso del medio-, interfirió en el ámbito privado de Miguel A. Ekmekdjian, conmoviendo sus convicciones más profundas. Esta conducta –reconocida por el demandado- ha interferido arbitrariamente en la vida ajena, mortificando sus sentimientos, lo que implica un verdadero agravio a un derecho subjetivo tutelado por el legislador.*

*Así, en el derecho norteamericano, a los efectos de considerar la habilitación de la revisión judicial se distinguen los intereses “materiales”, los “ideológicos” y los que se refieren a la vigencia efectiva de la ley (Richard B. Stewart, “The Reformation of American Administrative Law”, Harvard Law Review, vol. 88, N° 8, junio de 1975, p. 1669). Se destacan aquí los denominados “intereses ideológicos”, que son aquellos que buscan “la afirmación de los principios morales o religiosos” (p. 1734) y aunque prima facie no deben ser acogidos a los efectos de la revisión judicial (“standing”, p. 1738) si son triviales o insustanciales, esto no supone una exclusión absoluta cuando dicho interés alcanza suficiente fuerza y compromiso en la persona que la invoca. Nótese que esta admisión (si bien por vía de excepción) del “interés ideológico” como habilitante de la tutela judicial lo es, en el derecho comentado, para accionar en orden a revisar la acción u omisión de las agencias administrativas. Cuanto más entonces cuando, como en el caso, se trata simplemente de admitir la “réplica” en reparación de un fuerte sentimiento religioso ofendido, sentimiento que encuentra en nuestra sociedad, sustanciales raíces culturales e institucionales.*

Debe advertirse –con relación al caso planteado– que se trata de un derecho subjetivo de carácter especial y reconocimiento excepcional, que requiere –para habilitar el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta– una ofensa de gravedad sustancial, es decir, no una mera opinión disidente con la sostenida por el afectado, sino una verdadera ofensa generada en una superficial afirmación sin siquiera razonable apariencia de sustento argumental. En estas condiciones, la afirmación que provoca la rectificación o respuesta, invade, como ya se dijo, los sentimientos más íntimos del afectado, convirtiéndose así –y tratándose de un sentimiento o creencia de sustancial valoración para el derecho– en un agravio al derecho subjetivo al sostener tales valores trascendentales frente a quienes, sin razón alguna, los difaman hasta llegar al nivel del insulto soez, con grave perjuicio para la libertad religiosa. Estos extremos quedarán sujetos a la severa valoración del juez de la causa, aunque no cabe duda de que, en tales condiciones, la ofensa afecta la honra personal, por tanto a uno de los derechos subjetivos que mayor protección debe recibir por parte del ordenamiento jurídico.

Ejercido este derecho de responder a los dichos del ofensor, su efecto reparador alcanza, sin duda, al conjunto de quienes pudieron sentirse con igual intensidad ofendidos por el mismo agravio, en las condiciones que el legislador establezca –o el juez, frente a la omisión del legislador, estime prudente considerar- a los efectos de evitar que el derecho que aquí se reconoce se convierta en un multiplicador de respuestas interminables.

A diferencia de quien ejerce la rectificación o respuesta en defensa de un derecho propio y exclusivo, en los casos como el presente quien replica asume una suerte de representación colectiva, que lleva a cabo en virtud de una preferencia temporal, previo reclamo al órgano emisor de la ofensa, quien podrá excepcionarse de cumplir con otras pretensiones de igual o semejante naturaleza simplemente con la acreditación de la difusión de la respuesta reparadora.

Así entonces, se logran armonizar la indudable dimensión personal de la ofensa a las profundas creencias, sentimientos o valores reconocidos como sustanciales, con la practicidad de un sistema que no está dirigido a complicar, en un nivel de absurdo, el ejercicio de la libertad de prensa y de los derechos del sujeto propietario del órgano de comunicación masiva de donde partió la ofensa.

26) *Que en los autos “Ekmekdjian, Miguel A. c. Neustadt, Bernardo y otros s/ amparo”, esta Corte por voto mayoritario reiteró el criterio expuesto en la sentencia dictada “in re”: “Costa, Héctor R. c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros”, C. 752 XIX, del 12 de marzo de 1987, según el cual “el derecho de rectificación o respuesta, contenido en el art. 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no ha sido objeto aún de reglamentación legal para ser tenido como derecho positivo interno” y que toda restricción a la prensa “debía estar prevista expresamente en una norma jurídica sancionada por el órgano legislativo”, “in re”: “Sánchez Abelenda, Raúl c. Ediciones de la Urraca S.A. y otros”, Fallos 311:2553, consids. 9º y 10 y sus citas. Si bien por las razones expuestas fundamentalmente en los anteriores considerandos 15 a 20, en su actual composición este tribunal no comparte los precedentes citados, resulta útil señalar que aquéllos guardan sólo analogía formal con el presente. En efecto, en el*

*primero de ellos, el actor trataba de obtener un espacio para replicar opiniones emitidas por el ex Presidente doctor Arturo Frondizi. En cambio, en el sub examine, el recurrente en su carácter de católico militante, se sintió agraviado en lo profundo de su personalidad y de sus convicciones por las expresiones vertidas sobre Jesucristo y la Virgen María, por Dalmiro Sáenz, en la audición del demandado y remitió carta que obra a fs. 61/67 solicitando su lectura en ejercicio del derecho de respuesta. No se trata pues de una cuestión vinculada con juicios públicos sobre materias controvertibles propias de las opiniones, sino de la ofensa a los sentimientos religiosos de una persona que afectan lo más profundo de su personalidad por su conexión con su sistema de creencias.*

*27) Que la defensa de los sentimientos religiosos, en el caso a través del ejercicio del derecho de respuesta, forma parte del sistema pluralista que en materia de cultos adoptó nuestra Constitución en su art. 14. Es fácil advertir que, ante la injuria, burla o ridícula presentación –a través de los medios de difusión- de las personas, símbolos o dogmas que nutren la fe de las personas, éstas pueden sentirse moralmente coaccionadas en la libre y pública profesión de su religión, por un razonable temor de sentirse también objeto de aquel ridículo, difundido en extraordinaria multiplicación por el poder actual de los medios de comunicación masiva.*

*Por ello las sociedades que más se destacan en la protección del pluralismo religioso, no han dejado de atender a esta delicada cuestión, estableciendo regulaciones apropiadas a aquella finalidad. Así en el Código de la Televisión, de los Estados Unidos, en el capítulo referido a “Normas generales para los programas” punto 5 se expresó que “no están permitidos los ataques contra la religión y las creencias religiosas...El oficio de pastor, sacerdote o rabino no debe ser presentado de tal suerte que ridiculice o menoscabe su dignidad”. También el código de la Radio de la Asociación Nacional de Radiodifusoras señaló, en su capítulo referido a Religión y Programas Religiosos, punto 2 que “deben evitarse los ataques contra las confesiones religiosas”. El Código de Autorregulación – Asociación Cinematográfica de Norteamérica- prevé que “se debe respetar y defender la dignidad y valores básicos de la vida humana”. “La religión no debe ser degradada. Las palabras o símbolos que desprecien a grupos raciales, religiosos o nacionales no deben ser utilizados para instigar el fanatismo o el odio...” (confr. Rivers W. y Schramm W... “Responsabilidad y comunicación de masas”, 1973).*

*En distintos ordenamientos jurídicos, por lo demás, se ha otorgado especial protección al sentimiento religioso “en su aspecto de valor, de un bien de tal importancia para ciertos sujetos que una lesión en el mismo puede comportar para el afectado una grave pérdida y aflicción” (confr. Vitale, Antonio, “Corso di diritto ecclesiastico” p. 393 y sigts., Milán, 1992).*

*“Nuestro ordenamiento –continúa el autor citado refiriéndose a la legislación italiana- considera tan importante a aquel bien, y tan graves ciertas lesiones que puede recibir de determinados comportamientos sociales, que interviene sobre estos comportamientos lesivos a través de sanciones drásticas y afflictivas, en cuanto directa o indirectamente inciden sobre la libertad personal, tal cual son las sanciones penales”.*

*“El bien a proteger es identificado con el sentimiento religioso: el título IV del segundo libro del Código Penal está dedicado a los delitos contra el sentimiento religioso...que es en sustancia, aquel sentimiento de intenso respeto y de veneración que cada fiel nutre por la doctrina, los símbolos y las personas de la propia religión, de manera que una ofensa a aquellos provoca en el fiel un profundo sufrimiento por el hecho de ver dañado un bien al que considera de gran valor, y que la Corte Constitucional considera como “entre los bienes constitucionalmente relevantes” (Corte Constitucional, 8 de julio de 1975, N° 188, ps. 1508 y sigts., Giur Cost. 1975).*

Por otra parte, la House of Lords sostuvo una decisión de la Court of Appeals que, en el caso “R. vs. Gay News” (1979) 1 QB 10 consideró delito de blasfemia a una publicación de contenido “desdeñoso, vituperante, grosero o ridiculizante, en materias relativas a Dios, Jesucristo, la Biblia, o la Iglesia de Inglaterra...”. Sin embargo se aclaró que “no es blasfemar hablar o publicar opiniones hostiles a la religión cristiana, o negar la existencia de Dios, si la publicación es expresada en un lenguaje decente y temperado. El test a ser aplicado se vincula a la manera en la cual la doctrina es sostenida y no a la sustancia de la doctrina en sí misma. Todo aquél que publique un documento blasfemo es culpable del delito de publicar un libelo Blasfemo. Todo aquél que se expresa en un lenguaje blasfemo es culpable del delito de blasfemia” (Lord Denning. “Landmarks in the law”, ps. 298 y sigts., esp. P. 304).

De la lectura y análisis de los fundamentos transcritos pronunciados por la Corte para determinar que el actor, Ekmekdjian tenía legitimación activa para ejercer el derecho de rectificación o respuesta se advierte, en primer lugar, la aclaración hecha por el propio tribunal en el sentido de que la falta de legislación nacional sobre la materia, el carácter de primer pronunciamiento a favor del derecho de rectificación y las implicancias jurídico-comunicacionales de la cuestión hacen que la legitimación del demandante revista “carácter provisional, susceptible de sufrir mutaciones de acuerdo a la evolución del instituto”.

Con este argumento, el voto mayoritario de algún modo pretende, contradictoriamente en el marco de una sentencia final y definitiva, dejar sentada una suerte de advertencia, a la manera de atención: este criterio puede cambiar, y de hecho, parece haber cambiado, conforme lo analizaremos.

Hecha la advertencia previa, el razonamiento pasa a delimitar pautas para justificar la procedencia del derecho de rectificación en el caso concreto, y por ende, la legitimación del actor en la petición de su reclamo.

En este sentido, se advierte que la sentencia amplía los requisitos para la legitimación, excediendo los límites de la protección establecida por el Artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica contra “las informaciones inexactas o agraviantes” hasta la posibilidad de rectificar opiniones o comentarios que afecten intereses ideológicos, ampliación que desvirtúa el espíritu y transgrede el texto consagratorio del derecho de rectificación en el marco del sistema latinoamericano.

Tomando como pauta la sistematización realizada por Bianchi<sup>496</sup>, las siguientes serían las conclusiones que podemos extraer de los argumentos dados por la Corte para la admisibilidad de la respuesta en este caso:

---

<sup>496</sup> Bianchi, Alberto. “Un fallo sobre derecho de réplica que pone en mora al Congreso”. *El Derecho*, 148. 339

- a) Existe la tutela de intereses ideológicos, comprendiendo ellos los principios morales y religiosos, los cuales son bienes de especial protección;
- b) En tal caso, quien rectifica asume una suerte de representación colectiva, cuyos efectos se expanden y alcanzan al conjunto de quienes pudieran sentirse agraviados;
- c) El derecho de rectificación le corresponde a toda persona mortificada en sus sentimientos más profundos por expresiones que agravien a sus creencias;
- d) Se requiere una ofensa de gravedad sustancial y no una mera opinión disidente;
- e) La ofensa debe proceder de una superficial afirmación sin razonable afirmación de sustento universal;
- f) Ampara bienes de naturaleza civil y no política ni electoral.

Examinado los argumentos sobre legitimación por parte de la mayoría, pasemos a analizar, en lo pertinente, los argumentos del voto en disidencia de los jueces Petracchi y Moliné O'Connor, con quienes coincide el Dr. Levene<sup>497</sup> aunque con voto propio. Previamente digamos que estos jueces comparten la posición de la mayoría sobre la pertenencia del derecho de respuesta al derecho interno argentino, pero disienten al entender que la Convención Americana de Derechos Humanos está destinada a proteger el honor de las personas afectadas por informaciones inexactas o agraviantes, extremo que no se acredita en el caso en cuestión por no haber sido Ekmekdjian afectado en forma individual.

*“(...) parece evidente que este derecho procede frente a informaciones inexactas o agraviantes, que, además, causen un perjuicio actual y concreto a la persona aludida.*

*De lo expuesto se desprende que el tipo de información que da origen al derecho de rectificación o respuesta es aquel que se refiere directamente al presunto afectado o, al menos, lo alude de modo tal que resulta fácil su individualización. El fundamento de esta posición reside en que si –por vía de hipótesis- se reconociera este derecho sin el*

---

<sup>497</sup> Cabe decir con respecto al voto en disidencia del Dr. Belluscio, que el mismo mantiene el criterio que sostuvo en el caso Ekmekdjian c. Neustadt, del 1 de diciembre de 1988. No obstante ello, en su Considerando 6 también sostiene el criterio de que el derecho de rectificación o respuesta corresponde ante informaciones inexactas o agraviantes emitidas en perjuicio del afectado, situación que no se da en este caso pues “el actor no ha sido aludido, agraviado ni directamente afectado por las expresiones impugnadas”.

mencionado “requisito de individualización” se abriría la posibilidad de infinitos cuestionamientos a expresiones ideológicas o conceptuales que, en definitiva, afectarían a la libertad de prensa. Libertad cuyo especial resguardo ha asumido la Corte al grado tal de efectuar cuidadosas precisiones –entre ellas- la establecida en el caso “Costa”, cit., consid. 12.

Con base en todo lo dicho, los precisos términos del Pacto en modo alguno sustentan la posición del recurrente. Ello es así en razón de que éste en ningún momento fue aludido en el programa “La Noche de Sábado”, de modo tal que pudiera ser individualizado por los telespectadores.

20) Que, asimismo, cabe puntualizar que el apelante no ha comprendido lo que es derecho de réplica, pues le asigna un alcance que no encuentra apoyo, ni en la Convención (como se ha visto) ni en el derecho comparado ni en las Constituciones de varios Estados provinciales. Efectivamente, su institución no ha tenido el propósito de crear un foro al que pueda abordar todo aquel que crea ver atacados valores, figuras o convicciones a los que adhiera. Aunque sea muy comprensible el disgusto (o aun la conmoción) que tales ataques –a veces desaprensivos- puedan producir, lo cierto es que lo que este derecho procura instituir es un modo de proteger ámbitos concernientes al honor, identidad e intimidad de personas que han sido aludidas en algún medio de comunicación, permitiéndoles acceder gratuitamente a ellos para dar su propia versión de los hechos.

(...) 25) Que el olvido de los señalados principios en materia de legitimación para rectificar o responder, se traducirá en una inevitable mengua de la libertad de expresión que tutela la Constitución Nacional. En efecto, si se admitiese que cualquiera pueda exigir el acceso gratuito a los medios de comunicación con el único propósito de refutar los hipotéticos agravios inferidos a las figuras que adhiere o a las opiniones que sustenta, es razonable prever que innumerables replicadores, más o menos autorizados, se sentirán llamados a dar su versión sobre un sin fin de aspectos de caudal informativo que –en un sentido psicológico, mas no jurídico- los afectarán”.

Como lo venimos adelantando, y tal como surge del texto expreso y claro del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, compartimos el criterio del voto minoritario de la Corte en tanto y en cuanto la rectificación cabe en determinadas circunstancias, esto es ante



informaciones inexactas o agraviantes relativas perjudicialmente a una persona, y no para discutir, rebatir, rechazar opiniones o valoraciones vertidas que afecten los sentimientos de la gente o de las personas en particular o en general, al que no le cabe por ende este instituto, y sí el disenso en el marco de una vida en democracia.

Es altamente valorable que la Corte se haya pronunciado por primera vez en forma positiva sobre la pertenencia de la Convención Americana de Derechos Humanos en el sistema jurídico argentino y que haya dado carácter operativo al derecho de rectificación, pero es criticable en cuanto a los argumentos analizados sobre la legitimación ya que la interpretación de la mayoría en este caso ha desvirtuado la esencia del instituto.

Los fundamentos sobre legitimación dados por Petracchi y Moliné O'Connor en *Ekmekdjian c. Sofovich*, son tomados por la Corte en la sentencia "*Petric Domagoj c. Página 12*" y se la cita integralmente en el Considerando 10 de la misma. Esta observación es para resaltar, puesto que se deja de lado la temática de la legitimación tal como se la tomó en el famoso y criticable antecedente, para recoger precisamente lo sostenido entonces, acertadamente, por la minoría.

Hasta al momento, y con posterioridad a "*Ekmekdjian c. Sofovich*" han llegado a la Corte casos en los que aparece en forma indubitable el perjuicio concreto hacia una persona en particular y no se han dado nuevos pronunciamientos sobre afectaciones a los sentimientos religiosos o de grupos indeterminados, o de minorías con lo cual, el criterio de legitimación no ha sido nuevamente tratado en tal marco genérico.

Sin embargo, la fundamentación de la legitimación del Caso "*Petric*" en las consideraciones del voto de la minoría en el texto de la sentencia, implicaría una revisión que devuelve al derecho de respuesta uno de los elementos que hacen a su esencia: el agravio perjudicial sobre el afectado en particular o en otros términos, el "requisito de individualización".

En cuanto al caso “Rozenblum Horacio c. Vigil Constancio y otros”, si bien el recurso fue denegado por la mayoría por falta de fundamentación autónoma, los mismos criterios sobre legitimación activa sostenidos en Ekmekdjian c. Sofovich por Petracchi y Moliné O’Connor, son reiterados y retomados por los votos en disidencia<sup>498</sup>.

### **b.1. Personas jurídicas**

Ahora bien, otro aspecto sustancial para analizar la legitimación del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta es si el mismo sólo corresponde a personas físicas o personas jurídicas aludidas en información inexacta o agravante que les cause perjuicio. Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos, parece referirse en este aspecto del ejercicio de un derecho individual y personal, no hay por qué descartar el derecho que tiene una persona natural de rectificar información inexacta que agravia a la institución. En este aspecto, es necesario tener en cuenta que el Pacto de San José de Costa Rica también consagra el derecho a la libertad de asociación en su artículo 16 delimitando que “todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”. Claro que una persona jurídica no tiene “derecho al honor” en los términos que lo poseen las personas físicas, pero tienen una trayectoria, una honorabilidad, una imagen que defender y sostener si esa persona jurídica es afectada por información inexacta o agravante. Por ello, en este sentido, también es amplia la legitimación que admite la L. O. 2/84 en España, que pone este derecho tanto en cabeza de personas físicas como jurídicas. Nada obsta a que esto también se aplique en la legislación argentina, que incluso sería más amplia y generosa en la concepción del derecho a la libertad de expresión, permitiendo rectificar información inexacta o agravante a una institución, asociación, empresa, o cualquiera sea la forma societaria.

---

<sup>498</sup> 50.166 – CS, agosto 25-1998. “Rozenblum, Horacio Bernardo c. Vigil, Constancio Carlos y otros”. Ver disidencias de Moliné O’Connor y López, Consid. 11, disidencia Boggiano Cons. 13, 14 y 15 y disidencia del Dr. Vázquez, Cons. 8.

Por ello también los representantes de esas personas jurídicas tienen legitimación para rectificar en nombre de la institución afectada. En este sentido, dependerá en cada caso de la condición estatutaria de cada organización y a quién o a quiénes autorizan para representar a la persona jurídica que se trate. Una asociación civil puede autorizar a su presidente, a su secretario o a alguna otra autoridad, que en virtud de la magnitud que posea la asociación, puede ser incluso su responsable comunicacional. Puede ser también el apoderado de la entidad, y así sucesivamente, en cada caso se tendrá en cuenta a quién se otorga facultades de representación de la persona jurídica de que se trate. Incluso puede ser el director general, el jefe de comunicación, el presidente de una empresa y por qué no también puede estar legitimado para ejercer el derecho de rectificación o respuesta el Jefe de Comunicación o el Director de Prensa o Comunicación de la entidad.

También tratándose de consumidores podrían ejercer el derecho de rectificación las asociaciones de consumidores en representación de algún asociado consumidor adherido.

En síntesis, los legitimados activos para ejercer el derecho de rectificación o respuesta son:

- La persona física aludida, mencionada o individualizada en la información que la misma considera inexacta y le causa perjuicio;
- Los representantes legales de los menores de edad, sus padres o tutores;
- Los curadores de las personas incapaces;
- Los causahabientes de las personas fallecidas;
- Los representantes, apoderados, autorizados y responsables de la comunicación de las personas jurídicas, atendiendo las facultades estatutariamente establecidas.

## **b.2. Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual**

Hemos hecho referencia, al abordar la relación entre ética y derecho de rectificación o respuesta a la promoción de un código de ética que ha realizado la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que incluye este instituto.

Aquí, es necesario recordar que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido creada en Argentina, en el marco de la Ley N° 26.522<sup>499</sup>, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por el artículo 19 de la mencionada norma:

**“ARTICULO 19.** — Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Créase la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tendrá las siguientes misiones y funciones:

- a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo su legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno;
- b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto;
- c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
- d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus resultados y publicar sus resultados<sup>37</sup>;

---

<sup>499</sup> Ley N° 26.522. B.O. : 10/10/2009.

- e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual un informe anual de sus actuaciones;
- f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las autoridades en la materia;
- g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada judicial;
- h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión las cuales serán de tratamiento obligatorio;
- i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función.

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual se expresará a través de recomendaciones públicas a los titulares, autoridades o profesionales de los medios de comunicación social contemplados en esta ley, o de presentaciones administrativas o judiciales en las que se les ordene ajustar sus comportamientos al ordenamiento jurídico en cuanto se aparten de él, en los casos ocurrentes.

Las delegaciones de la autoridad de aplicación deberán recibir actuaciones dirigidas a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, remitiendo dichas actuaciones a la Defensoría en forma inmediata”.

Entendemos entonces, que en virtud del artículo 19 incs. a) e i), la Defensoría del Público tiene legitimación suficiente para intervenir como mediador o facilitador de los reclamos de los oyentes y televidentes en el ejercicio del derecho de rectificación o

respuesta, o puede facilitar una vía sumaria, útil y previa en el caso de informaciones inexactas o agraviantes producidas por los servicios de comunicación audiovisual (radio, T.V. abierta, T.V. por suscripción; etc.).

Un caso vale como ejemplo, aunque con la diferencia que conllevó la retractación del medio, lo cual no es la esencia del derecho de rectificación, tal como lo hemos explicado, ya que quien rectifica es el aludido y no el periodista o el medio. Este caso, resuelto por la Defensoría del Público en 2013 se generó a raíz de un reclamo realizado ante la Defensoría por una docente, Margarita Rodríguez, quien expuso ante el organismo que en un informe periodístico en el programa televisivo “Informe Central” se informaba sobre el caso del Jardín Tribilín, en el que había habido denuncias de maltrato infantil por parte de los docentes. La cuestión es que para ilustrar la nota, se usaron imágenes en la que aparecía la denunciante con otra compañera docente, en una actividad con niños. Pero no era ese Jardín de Infantes ni el lugar donde había ocurrido el hecho. “Después que interviene la Defensoría –comenta la denunciante- tuvimos esta respuesta, en donde nos ofrecen un espacio para dialogar con el canal. Que haya un informe leído por los locutores o quienes estaban a cargo de esa franja horaria, que es una franja de noticias...” “Informe Central”. En el mismo tiempo y la misma frecuencia en que habían sido pasadas las imágenes”. Posteriormente, vino la rectificación por parte del Canal América TV, cuya conductora expresó: “El sábado 16 y domingo 17 pasados informamos sobre novedades en la causa judicial por el caso Tribilín, y para ilustrarlo usamos imágenes de maestras, niños y niñas que nada tenían que ver con la información. Es por eso que pedimos disculpas, porque reconocemos que las docentes Julieta Antonelli y María Margarita Rodríguez, y los alumnos de la escuela Infantil N° 7, Distrito Escolar 5 de la Ciudad de Buenos Aires, nada tienen que ver con la violencia ejercida en el jardín de San Isidro<sup>500</sup>”.

Como vemos, el caso arribó a solución, por la intermediación inmediata de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

---

<sup>500</sup> Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Argentina. Cuadernillo “Más libertad, más voces, más democracia”. Buenos Aires, 2014.

Ahora bien, queda claro que esta Defensoría sólo tiene competencias en el ámbito de los servicios audiovisuales, estando fuera de su alcance los medios gráficos. En estos casos bien podría actuar también el Defensor del Pueblo de la Nación, mediando en la realización del derecho de rectificación, apoyando el reclamo realizando e instando la celeridad de la presentación, en los casos en los que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual carece de competencia.

En síntesis: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Defensoría del Pueblo serían actores que medien y agilicen el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta.

### **c. Procedimiento y plazos**

La ausencia de ley sobre el derecho de rectificación o respuesta en Argentina, torna dificultoso el abordaje del procedimiento, entendiendo a éste como la serie de pasos jurídicos a seguir tendentes a la realización efectiva de la respuesta o rectificación.

Sobre el procedimiento el único elemento que da la Convención Americana de Derechos Humanos en el numeral 1 del artículo 14, es que la rectificación se efectúa “por el mismo órgano de difusión” y remite a las “condiciones que establezca la ley”.

En principio, queda claro que el medio de comunicación que emitió la información inexacta y agravante en perjuicio del aludido, tiene la obligación de divulgar, en determinadas condiciones, los escritos de rectificación que les dirijan los sujetos legalmente legitimados para ello. La nota fundamental del derecho de rectificación en este sentido es que su ejercicio genera una auténtica obligación jurídica en los medios de publicar la rectificación o respuesta<sup>501</sup>.

La omisión legislativa, provoca en este sentido hasta el momento un vacío y el principio de un estado de indefensión que el afectado tendrá que asumir a través del intrincado camino de acceso a la justicia, con la asistencia letrada correspondiente, y con los argumentos constitucionales, jurisprudenciales y doctrinarios existentes para la defensa de tal derecho. Es decir, el abogado tendrá que laborar sobre la base de los reconocimientos judiciales que se han hecho hasta el momento y que hemos reseñado, y a partir de allí

---

<sup>501</sup> “Es cierto que, en la práctica, existen otros mecanismos que permiten el ejercicio de la libertad de expresión o información de los ciudadanos en medios de comunicación de los que no son titulares (cartas al director, defensor del lector, foros de debate en medios digitales, posibilidad de opinar en entrevistas o debates, etc.), mecanismos que también sirven para ofrecer diferentes versiones sobre hechos que son objeto de información e, incluso, sobre las mismas opiniones o valoraciones del medio o de sus profesionales. Pero la diferencia fundamental entre el derecho de rectificación y esos otros instrumentos referidos, es que el ejercicio de aquél genera -a diferencia de estos últimos- una auténtica obligación jurídica en los medios”. Lazcano Brotóns, Iñigo. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Universidad del País Vasco. “Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del derecho de rectificación”, en “Comunicación y pluralismo”, 2010, N° 9, Universidad Pontificia de Salamanca. Págs. 150. Salamanca, 2010.



tendrá que basar el reclamo de su cliente luchando contra el tiempo, factor esencial que va aun en más detrimento del aludido.

Es de destacar que si la persona afectada por la información dada por el medio, no logra que el mismo le permita dar su versión de los hechos, tal negativa la lleva a tomar una decisión que no estará exenta de obstáculos: o “calla y otorga” con lo cual vale reconocer la verdad de lo informado, o entra en el camino del largo proceso judicial con todo lo que ello implica.

Entendemos, en el marco de los principios generales del Derecho que es necesaria la ley nacional correspondiente emanada del órgano natural del que debe emanar, es decir, del Congreso Nacional para que el Poder Judicial no sustituya a éste en la labor legisferante. En este sentido, hay que tener presente, que el artículo 2º de la Convención de Derechos Humanos ya citado.

Para que el derecho de rectificación o respuesta sea una realidad y no una mera declamación la ley que regule el procedimiento lo deberá considerar de una forma sencilla y sumaria, puesto que ese es el sentido propio del ejercicio de este derecho: posibilitar la inmediatez de la rectificación del ciudadano que se considera perjudicado por los términos vertidos en los poderosos medios de comunicación social. Aquí, habrá que considerar que el transcurso del tiempo opera siempre de manera perjudicial para los intereses de la persona afectada, con lo cual es necesario viabilizar rápidamente el ejercicio del derecho, pues es este factor el que marca la esencia del instituto.

Más allá de la mora del Congreso sobre el tema, y teniendo presente que a partir del caso “Ekmekdjian c. Sofovich” se ha reconocido judicialmente la operatividad<sup>502</sup> de este derecho, estudiaremos los aspectos procedimentales del instituto tratados por la Corte, cuyo

---

<sup>502</sup> Cabe tener presente, que el Dr. Belluscio, sigue sosteniendo en sus pronunciamientos la no operatividad del Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puesto que “mientras tal ley no sea dictada, la disposición carece de operatividad”. Su postura por ende, inhibe hacer tratamiento alguno sobre el procedimiento. Ver al respecto: Voto en disidencia en Petric Domagoj c. Página 12. L.L. T.1998-C. Pág. 308. Consid. 3 en el cual se remite a sus propios votos de Fallos: 311:2497, consid. 4º, y a su disidencia en Fallos:315:1492.

tratamiento junto a otras aristas del derecho, como la legitimación, sientan “determinadas pautas que, a falta de reglamentación infraconstitucional por parte del Congreso, servirán de guía para la elaboración pretoriana”<sup>503</sup>.

En el aludido precedente jurisprudencial, la sentencia sostiene que la rectificación presupone la posibilidad de aclaración *“razonablemente inmediata y gratuita en el mismo medio que publicó la información considerada ofensiva, en trámite simple y expeditivo”*.

La Corte asimismo avala la vía sumarísima del amparo elegida por el accionante ante la negativa del requerido de difundir su respuesta, ya que resulta adecuada frente a la naturaleza del derecho que busca ser protegido judicialmente. *“En tal sentido, corresponde una vez más evocar que esta Corte estableció “que las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias”. (Siri, Angel, Fallos 239:459 –La Ley. 89-532)”*.

No obstante las remarcadas características de inmediatez y celeridad pronunciadas por la Corte, más allá de compartir o no el otorgamiento del derecho de respuesta a Miguel Ángel Ekmekdjian en tal caso, no le fue dado precisamente en tiempos “razonablemente inmediatos” puesto su posibilidad de rectificación ejercida sobre un programa emitido el 11 de junio de 1988 tuvo realización recién en julio de 1992. Cuatro años después. Y no será el único caso, ni el plazo más extenso, ni la lucha vana, al menos si el derecho es reconocido.

El derecho de rectificación como “herramienta rápida”, “razonablemente inmediata”, fruto de un “trámite simple y expeditivo”, es ratificada en el voto del Dr. Boggiano en el caso “Petric c. Página 12”:

*“Hay en el comentario de los autores e, incluso, en la legislación extranjera, una llamativa coincidencia en cuanto a que la inserción de la respuesta ha de guardar una*

---

<sup>503</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 10 in fine. “Petric Domagoj c. Página 12”. L.L. T. 1998-C. Pág. 299.

*estrecha proximidad temporal con la difusión de la noticia contestada. La razón principal, en síntesis, no es otra que la de evitar o reducir los perjuicios que la nueva pudiera producir, posibilitando que el público se anoticie de la respuesta teniendo fresca la información que la motiva. No se requiere un espíritu muy agudo para advertir que dicha inmediatez es predicable del trámite –incluso extrajudicial- de la respuesta, precisamente por la innecesariedad de la acreditación de los recaudos –inexactitud de la información y perjuicio -. De no ser esto así, el proceso de respuesta –de ser llevada la cuestión a los tribunales- se convertiría en un poco provechoso remedo de, por ejemplo, un juicio de daños – “Deben establecerse límites temporales razonables:*

- d) para efectuar el reclamo ante el órgano de difusión;*
- e) para que éste le dé satisfacción;*
- f) para el ejercicio de la acción judicial, y preverse, para esto último, la vía “más urgente y de máxima celeridad que sea adecuada para la tutela de los derechos afectados”. Segundas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal, Junín, 1987, Comisión Tercera, conclusiones, 9º y 7º-)<sup>504</sup>”.*

Se precisa que *“la orientación seguida por el tribunal no hace del derecho de contestación una suerte de derecho automático, esto es, uno de aquellos para cuya actuación bastara la mera y exclusiva apreciación del respondiente acerca de la inexactitud de la información y de su potencial dañoso”.*

El juez Boggiano, en su voto, termina haciendo una suerte de invitación o llamado a la comprensión del derecho de rectificación, deseando arreglos extrajudiciales de los casos en los que el mismo se presente:

*“Que, finalmente, es conveniente expresar que los delicados bienes y libertades que entrelaza el derecho de rectificación o respuesta, reclama a los medios y a los eventuales afectados, un uso ponderable de la virtud de la prudencia. Y esto es así porque, además de ello, es por demás deseable que los conflictos que se sucedan entre dichas partes sean*

---

<sup>504</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 14. “Petric...” Pág. 300.

*resueltos por éstas, vale decir, sean superados en el terreno extrajudicial, evitándose así que el tiempo que inevitablemente insume todo trámite antes los tribunales, termine conspirando contra los propósitos de una herramienta jurídica plenamente útil, si ágil*<sup>505</sup>.

Como propuesta, y teniendo en cuenta el marco de los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se estima que ese procedimiento ágil de ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, requiere, en primer lugar la remisión de un escrito de rectificación al editor responsable del medio de comunicación que se trate. En este sentido, se encuentra adecuado el plazo de siete días hábiles siguientes al de la publicación, emisión o difusión de la información objeto de rectificación, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y de su recepción.

La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.

En este marco, creemos importante destacar la necesidad de desarrollar una “cultura” o una práctica de ejercicio del derecho de rectificación, circunscripta a los hechos que sean objeto de respuesta, y evitando expresiones indecorosas, descalificantes, o enjuiciadoras del medio y/o del periodista. Esto, que al parecer sería una verdad de Perogrullo, en realidad, en la práctica es difícil de encontrar, por eso hay que templar el ánimo y abocarse a la información objeto de la rectificación. Es como la cultura del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que requiere práctica y no confundir con otras peticiones al Estado. Aquí, se facilita mucho, la existencia de pro – formas, formularios, o modelos de reclamos, que no siendo excluyentes, sino meramente orientadores, faciliten el ejercicio del derecho.

Por su parte, el editor responsable del medio, deberá publicar, emitir o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquélla en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

---

<sup>505</sup> Cf. Voto del Dr. Boggiano, Consid. 16. Ibidem.

Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente.

Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita por la periodicidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencias y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo.

La publicación o difusión de la rectificación será siempre gratuita.

Si, en los plazos señalados, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar las pautas procedimentales, podrá el perjudicado ejercitar la acción de amparo, establecida en la actualidad por la Ley N° 16.986<sup>506</sup>, la cual se transcribe a continuación para ilustración del procedimiento expeditivo. Téngase presente que estamos hablando del ámbito nacional, y no de las provincias que integran la República Argentina, como país federal, cuyas constituciones y leyes hemos repasado en este trabajo.

*Artículo 1° — La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.*

*Artículo 2° — La acción de amparo no será admisible cuando:*

- a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate;*
- b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley N° 16970;*
- c) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado;*
- d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas;*
- e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.*

*Artículo 3° — Si la acción fuese manifiestamente inadmisibile, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones.*

---

<sup>506</sup> Ley N° 16.986. Acción de amparo. B.O.: 20/10/1966.

*Artículo 4° — Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiese tener efecto.*

*Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción.*

*Cuando un mismo acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.*

*Artículo 5° — La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1°. Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien público.*

*Artículo 6° — La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:*

- a) El nombre, apellido y domicilios real y constituido del accionante;*
- b) La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados;*
- c) La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional;*
- d) La petición, en términos claros y precisos.*

*Artículo 7° — Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga, o la individualizará si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre.*

*Indicará, asimismo, los demás medios de prueba de que pretenda valerse.*

*El número de testigos no podrá exceder de cinco por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa a la audiencia, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.*

*No se admitirá la prueba de absolución de posiciones.*

*Artículo 8° — Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.*

*El requerido deberá cumplir la carga de ofrecer prueba en oportunidad de contestar el informe, en la forma establecida para el actor.*

*Producido el informe o vencido el plazo otorgado sin su presentación, no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo.*

*Artículo 9° — Si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá ordenarse su inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá tener lugar dentro del tercer día.*

*Artículo 10. — Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriera, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasarán los autos para dictar sentencia.*

*Artículo 11. — Evacuado el informe a que se refiere el artículo 8 o realizada, en su caso, la audiencia de prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo.*

*Artículo 12. — La sentencia que admita la acción deberá contener:*

a) La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo;

b) La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución;

c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.

Artículo 13. — La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.

Artículo 14. — Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo.

Artículo 15. — Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3º y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido.

En caso de que fuera denegado, entenderá dicho Tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.

Artículo 16. — Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.

Artículo 17. — Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor.

Artículo 18. — Esta ley será de aplicación en la Capital Federal y en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, será aplicada por los jueces federales de las provincias en los casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional.

Tal como hemos expresado, la ausencia en Argentina de tribunales deontológicos y una acendrada cultura basada en la necesidad de intervención de la justicia como tercero imparcial, aconsejan que la opción de la acción expedita de amparo se constituye en la medida idónea para la realización efectiva del derecho de rectificación o respuesta ante la negativa del medio de otorgarlo.

De todos modos, y teniendo en cuenta el éxito con el que viene actuando la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, es dable esperar que este tipo de mecanismos, de intermediación, impulsores del diálogo, el acercamiento de las partes con una simultánea defensa de los derechos de los oyentes

y televidentes, se solidifique, se fortalezca en su labor, para que, entre otros aspectos, sea un vehículo procedimental facilitador del derecho de rectificación o respuesta.

En síntesis:

- El derecho de rectificación se ejercitará con el envío del escrito de rectificación al Director o el Editor responsable del medio en el plazo de siete días hábiles siguientes al de la publicación o difusión de la información que se desea rectificar o responder, con constancia de su recepción y fecha.
- En esta instancia, prejudicial, el derecho se ejercerá personalmente y sin necesidad de patrocinio letrado.
- Recibido el escrito de rectificación, el medio tendrá tres días corridos para la publicación del mismo. La publicación será gratuita.
- Para el caso de imposibilidad de cumplir con el plazo mencionado, la respuesta deberá ser difundida en el número siguiente si se trata de medios gráficos, o en el programa más próximo de similar audiencia en caso de medios audiovisuales o radiofónicos.
- En caso de no publicarse la rectificación en el plazo mencionado, el rectificante tiene derecho a recurrir mediante acción de amparo ante los tribunales ordinarios para solicitar judicialmente el derecho de rectificación o respuesta.  
Esto significa, que el procedimiento de rectificación tiene un doble proceso: prejudicial, sólo ante el medio y denegado el derecho de rectificación, judicial, ante el Juez.
- La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.
- La rectificación o respuesta no puede contener de manera alguna agravios, vocabulario inapropiado ni involucrar a terceras persona sin causa justificada.
- Si quien intenta rectificar o responder excede el ámbito propio de la respuesta o contiene agravios o vocabulario inapropiado, el director o editor responsable del



medio podrá suspender la publicación de la rectificación hasta que la misma sea adecuada.

- La respuesta deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo. Los medios gráficos y digitales deberán procurar la misma extensión, tipografía y diseño. Los medios audiovisuales y radiofónicos deberán emitir la respuesta en el mismo programa y con igual cantidad de minutos.
- La rectificación debe poder ser individualizada correctamente en la publicación que corresponda. En ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la comunicación no resultan improcedentes los comentarios y opiniones que pueda expresar el medio. En caso de hacerlo debe ser independiente del texto publicado de la rectificación o respuesta.
- La acción por la que se solicite la rectificación no es incompatible y es independiente de las acciones civiles o penales que pudieren corresponder.

## **Bibliografía y fuentes consultadas:**

### **1. Referencias bibliográficas en orden alfabético.**

A

- Abad-Alcalá, Leopoldo. “Sistema democrático y límites a la libertad de expresión”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y el derecho a la información”. 2004. Pág. 72.
- El derecho de rectificación, en *Derecho de la Información*, BEL MALLÉN, Ignacio, Loreto CORREDOIRA Y ALFONSO, coords. Barcelona, Ariel, 2003.
- Aberastury, Pedro: “La influencia del Derecho Continental en el Derecho Administrativo Argentino”. Conferência proferida no Seminário Internacional “A Tutela Judicial no Sistema Multinível”, realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, nos dias 20 e 21 de setembro de 2004, no auditório do Instituto Rio Branco, em Brasília-DF. R. CEJ, Brasília, n. 27, p. 38-46, out./dez. 2004.
- Abregú, Martín y Courtis, Christian (compiladores), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2004.
- ADC/Asociación por los Derechos Civiles. “La Corte y los Derechos. 2005-2007. Cómo impactan en la vida de los ciudadanos las decisiones del máximo tribunal”. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2008.
- Alexy, Robert. “Teoría de los derechos fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993
- Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Open Society Justice Initiative; “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina”, Colección Reformas Legales, Buenos Aires, 2008.
- Albanese, Susana, “Las opiniones consultivas en la estructura del control de convencionalidad”, en “Derechos Humanos. Reflexiones desde el Sur. Infojus. Buenos Aires, 2012.
- Albornoz, Luis A. “Los grandes diarios online en español”. La Crujía Revista. Año 1, Número 3, Octubre 2006. Buenos Aires. Pág. 19.
- Albornoz, Luis A. “Periodismo digital. Los grandes diarios en la red”. Editorial La Crujía, Buenos Aires, 2007.
- Alexy, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993.
- Anaya, José Perla. “Derechos y Deberes del Comunicador Peruano”. Serie Comunicaciones, Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial 2001.
- Anglarill, Elisabeth; Cortacns, Oriol; Costa, Mónica y otros. “Periodistas en peligro”. Flor del Viento Ediciones. Barcelona, España, 2001.
- Argumedo, Alcira “Los silencios y las voces en América Latina. Notas sobre el pensamiento nacional y popular”. Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 1993.
- Ávila Ordoñez, María Paz; Ávila Santamaría, Ramiro y Gómez Germano, Gustavo (Editores). “Libertad de expresión, alcances, debates y nueva agenda”. Unesco. Naciones Unidas. Derechos Humanos. Quito, Ecuador, diciembre de 2011.
- Aznar Hugo y Villanueva Ernesto. “Deontología y autorregulación informativa”. Ensayos desde una perspectiva comparada. Universidad Iberoamericana. Edic. Fundación Manuel Buendía. México, 2000.

- Aznar, Hugo. "Nuevas pautas y recomendaciones para unos medios más éticos", en "Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público". Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. Valencia, 21 de septiembre de 2005. Pág. 157 a 168.
- Aznar, Hugo. "Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios". Ariel Comunicación, Barcelona, 1999.
- AZPILLAGA, Patxi; MIGUEL DE BUSTOS, Juan Carlos; ZALLO ELGUEZABAL, Ramón; (1998): "Las industrias culturales en la economía informacional I Evolución de sus formas de trabajo y valorización ", En: ZER Revista de Estudios de Comunicación, nº5. Bilbao: UPV/EHU, pp. 53-74. Disponible en <http://www.ehu.es/zer/es/hemeroteca/articulo/las-industrias-culturales-en-la-economia-informacional-ievolucion-de-sus-formas-de-trabajo-y-valorizacion/59>
- Azurmendi Ana "Derecho de la Información". Guía Jurídica para profesionales de la Comunicación. EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1997.-

## B

- Badeni, Gregorio. "Libertad de Prensa", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.
- Badeni, Gregorio. "Un retroceso grave para la Argentina". Diario Clarín, Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48. Buenos Aires, Argentina.
- Ballester, Eliel C. "Derecho de Respuesta. Réplica y Rectificación. El público, la información y los medios". Editorial Astrea. Buenos Aires, 1987.
- Baquero Cardeñoso, Angel; Martínez de Yuso Sánchez, Rocío y otros. "Libertad de Expresión. Estudio Jurisprudencial". Coordinador: Eugenio Llamas Pombo. Madrid, 1997.-
- Barroso, Porfirio y López Talavera, María del Mar. "La Libertad de expresión y sus limitaciones constitucionales". Fragua Editorial, Madrid, 1998.
- Bastida Freijedo, Francisco J. y Villaverde Menéndez, Ignacio "Libertades de Expresión e Información y Medios de Comunicación. Prontuario de Jurisprudencia Constitucional 1981-1998". Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional 1. Aranzadi Editorial. Pamplona, 1998.-
- Bastida Francisco. "La libertad de Antena" Ariel Derecho. Barcelona, 1990.
- Bastons, Jorge Luis. "Las claves conceptuales del empleo público en Argentina", en "Derecho Público para Administrativistas", Bastons, Jorge L. Director. LEP, Librería Editora Platense. La Plata, Argentina, 2008. Pág. 289/290.
- Becerra, Marín y Mastrini, Guillermo. "Los dueños de la palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en América Latina del Siglo XXI". Prometo Libros, Buenos Aires, 2009.
- Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. "Monografías 3. Repertorio de Jurisprudencia Informativa I. Selección de Sentencias del Tribunal Constitucional". Edita: Fundación de la Comunicación Social. Madrid, 1996.
- Belinche, Marcelo. Editor. Patricia Viale, Jorge Castro y Christian Tovar. "Medios, Política y Poder", EPC, Ediciones de Periodismo y Comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Provincia de Buenos Aires, mayo de 2003.
- Beccaria, Luciano, "Leyes en sintonía. Un breve repaso por las normas regionales de comunicación";, 12 de enero de 2015, Portal del Sur. Agencia Latinoamericana de

- Noticias. <http://portaldelsur.info/2013/05/leyes-en-sintonia/>. Fecha de consulta: 16 de enero de 2015.
- Benito García, José María (2004) “*La universalización del acceso a la información en el derecho de rectificación*”. Tesis doctoral. Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo II, leída el 19-12-2001. Dirigida por Javier Fernández del Moral. Disponible en: <http://biblioteca.ucm.es/tesis/inf/ucm-t25426.pdf>
- Bernard, Antoine. “Una barrera contra la barbarie”. *El Correo de la UNESCO. Derechos Humanos: Una larga marcha*, 1994. Págs. 15-17.
- Bertoni, Eduardo. Compilador. “Internet y Derechos Humanos. Aportes para la discusión en América Latina. Universidad de Palermo. CELE. Ediciones Del Puerto, Buenos Aires, 2014.
- Biavati, Paolo, “La Corte di Giustizia dell'Unione Europea”, en Coloquio, Administración de Justicia en Iberoamérica y Sistemas Judiciales Comparados, México, Octubre de 2005.
- Bollinger, Lee C. & Stone, Geoffrey. “Eternalli Vigilant. Free Speech in the Modern Era”, The University of Chicago Press, United States, 2002.
- Benito, Angel “La socialización del poder de informar”, Ediciones Pirámide, S.A.Madrid, 1978.
- Bidart Campos, Germán. “El derecho de réplica”. E.D. 115-830. Buenos Aires, El Derecho.
- Bidart Campos, Germán. Manual de la Constitución Reformada, Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 1998.
- Bidart Campos, “Para la Corte los derechos implícitos no alojan el derecho de réplica ¿Por qué no?, El Derecho. E.D. 131-543. Buenos Aires, Argentina.
- Bianchi, Alberto. “Un fallo sobre derecho de réplica que pone en mora al Congreso”. El Derecho, Buenos Aires, 148. 339.
- Bianchi, Enrique T. y Gullco, Hernán V. “El derecho a la libre expresión. Análisis de fallos nacionales y extranjeros”. Librería Editora Platense S.R.L, La Plata, octubre de 1997.
- Bielsa, Rafael, “Estudios de derecho público”. Tomo III.
- Binder, A. “Importancia y límites del periodismo judicial”, en Justicia Penal y Estado de Derecho. Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 1993.
- Brajnovic, Luka. “Deontología periodística”. EUNSA, Pamplona, 1978.
- Bustamante Alsina, Jorge “El derecho de rectificación o respuesta como derecho individual de jerarquía constitucional no es directamente operativo”. La Ley, Tomo 1986-E-211.
- C**
- Calzado, M. y Maggio. N. “Muertes invisibles: periodismo y delincuentes muertos en enfrentamientos”, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2007.
- Camacho, Azurduy, Carlos A. “Cultura de transparencia. El derecho humano a la información en el desarrollo de la ciudadanía comunicativa en Bolivia (1997-2007), La Paz, Bolivia, 2007.
- Camps, S. y Pazos, Luis. “Justicia y televisión. La sociedad dicta sentencia”, Libros Perfil, Buenos Aires, 1999.

- Cançado Trindade, Antonio Augusto y Ventura Robles, Manuel E. "El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Tercera Edición Actualizada y ampliada. UNHCR-ACNUR. San José, Costa Rica, 2005.
- Carbajal, Mariana: "Un debate caliente", Diario Página 12, Buenos Aires, 3 de julio de 2011, p. 20, Sociedad.
- Carreras Serra, Francesc de. (edición preparada por) "Leyes Políticas" Aranzadi Editorial. Pamplona, 1997.-
- Carreras Serra, Lluís de "Régimen Jurídico de la Información. Periodistas y Medios de Comunicación". Ariel Derecho. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, marzo de 1996.
- Carreras Serra, Lluís de. "Derecho español de la información", Barcelona, UOC, 2006.
- Carrillo, Marc. "Los límites a la Libertad de Prensa en la Constitución Española de 1978". Promociones Publicaciones Universitarias PPU. 1987.
- Chaparro Escudero, Manuel. En "Los nuevos escenarios de la comunicación audiovisual y el fortalecimiento de la democracia". Libro Colección Comunicación resultado de la Jornada Internacional del mismo título celebrada en Buenos Aires, Argentina el 23 y 24 de octubre de 2008. COMFER-TELAM. Buenos Aires, 2008.
- CELS, "La información como herramienta para la protección de los derechos humanos. Ediciones del Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 2004.
- Cendan Pazos, Fernando. "Historia del Derecho Español de Prensa e Imprenta (1502-1966). Ed. Nacional, Madrid, 1974.
- CIDH- OEA. 2000. Declaración de Principios de la Libertad de Expresión.
- CIDH-OEA. "Marco Jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión". Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Washington, 30 de diciembre de 2010.
- Cifuentes, Santos y Fernández, Marta. "Rectificación. Respuesta. Réplica". La Ley, 1990 – E-872.
- Clarín, Manual de Estilo. Buenos Aires, 1997.
- Clarín. Información General. Sábado 20 de agosto de 1998. Pág. 48. Medios. Fallo contra Editorial Atlántida. La Corte decidió avalar el derecho a réplica. Columna de opinión del Dr. Gregorio Badeni "Un retroceso grave para la Argentina".
- COMFER, Comité Federal de Radiodifusión. Bases para un Anteproyecto de Ley de Radiodifusión. Borrador de trabajo dado por el COMFER para discusión en el ámbito de las "Jornadas Extraordinarias de Radios Universitarias Nacionales". La Plata, 19 y 20 de septiembre de 2000. Secretaría de Medios de la UNLP.
- Concepción Rodríguez, José Luis. "Honor, intimidad e imagen. Un análisis jurisprudencial de la Ley Orgánica 1/1982". Ediciones Bosch. Barcelona, mayo de 1996.
- Constitución de la Nación Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. Textos según reforma de 1994. Scotti. Editora. La Plata, Argentina, febrero de 1995.
- Constitución de España, 1978.
- Conti Gómez, María Eva. "Derecho de rectificación o réplica. Una conquista del sistema interamericano de derechos humanos", AEQUITAS VIRTUAL, Publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Argentina.
- <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r27452.pdf>
- Fecha de consulta: 8 de enero de 2015.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986, Corte I.D.H. (Serie A) Nro. 7 (1986). Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Cossio, Carlos. (1954a). “La polémica anti-egológica (Respuesta al prof. Hans Kelsen)”, Buenos Aires, La Ley, tomo 76, 740-760.
- Cousido González, Pilar. “Comentarios a la Ley de Secretos Oficiales y su Reglamento”. Bosch, Edic., Barcelona, octubre 1995.
- Cyranek, Günther (editor) Dirección y coordinación general: Horacio Knaeber. VIH/ SIDA. Guía para la cobertura periodística. América Latina, Proyecto auspiciado por UNESCO y la Fundación Cultura UNESCO. Buenos Aires, 2008.

## D

- Dalla Vía, Alberto R. “Poder político y libertad de expresión”, Ediciones Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2001.
- Danielián, Miguel y Ramos Feijóo, Claudio “Constituciones de la Nación Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias Argentinas”. Edic. La Ley, Buenos Aires, 1999.
- Darbishire, Helen. “Libertad de expresión, libertad primordial”, publicado en “El Correo de la UNESCO”. Marzo 1994. Año XLVII. Pág. 18 a 22.
- De Charras, Diego. “Libertad de expresión y derecho a la información. Luces y sombras en el camino hacia el ejercicio pleno de una ciudadanía comunicacional”, en CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2013. Editorial Siglo XXI, 2013.
- De Cossio, Manuel. “Derecho al Honor. Técnicas de Protección y Límites”. Editorial tirant lo blanch. Valencia, 1993.
- Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo. “Guía para la cobertura periodística responsable de desastres y catástrofes”. 1º edic. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. EUDEBA, 2014.
- Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Primer Informe Anual. Anexo IV. Informe 2013. Ideas y Orientaciones para la Elaboración de un Código de Ética. Buenos Aires, 2014.
- Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Argentina. Cuadernillo “Más libertad, más voces, más democracia”. Buenos Aires, 2014.
- De la Torre Gómez, Andrés. “El método socrático y el modelo de Van Hiele”. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Lecturas Matemáticas, Volumen 24, 2003.
- Desantes Guanter, José María. “La Información como Derecho”. Editorial Nacional, Madrid, 1974.
- Desantes Guanter, José María “La cláusula de conciencia”. Edit. EUNSA. Pamplona, 1978.
- Desantes Guanter, José María “La función de informar”. Edit. EUNSA. Pamplona, 1976.
- Díaz Arias, Rafael. “El nuevo Estatuto de Información de la Corporación RTVE: independencia editorial e independencia profesional en un marco deontológico”. Ponencia presentada al VI Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, 7 y 8 de noviembre 2008. Área D: Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos. Disponible en: <http://derechojo.org/omar/estatuto-rtve.pdf>
- Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima primera edición.

Dogoumois, Martín G.; Barrionuevo M. Gabriela y Gómez Melina. Revista de Derecho Público, Año III, N° 4, Ediciones INFOJUS, SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA, p. 221. Id Infojus: DACF130090. Buenos Aires, marzo de 2013.

Duhalde, Eduardo Luis y Allen, Luis. “Teoría jurídico-política de la comunicación”, EUDEBA, Buenos Aires, 1999.

Dumas, Roland . “Le Droit de l’ information”. P.U.F. París, 1981.

## **E**

Eliades, Analía. “Derecho humano, responsabilidad ulterior y deber ético”. Diario Tiempo Argentino. 11 de enero de 2012.

Diario Tiempo Argentino. Dos opiniones sobre el derecho a réplica. Analía Eliades. Bruno Tondini. <http://tiempo.infonews.com/nota/127061/dos-opiniones-sobre-el-derecho-a-replica>

Etheredge, Lloyd S. Human rights education and the new telecommunications technology. *En: Human rights education for the twenty-first century*. Andreopoulos, George J., ed.. Filadelfia, Pen., University of Pennsylvania Press, 1997, pp. 547-564

## **F**

Farías García, Pedro; Sánchez de Diego, Manuel. “Las libertades informativas en el mundo actual”. Actas del Congreso Conmemorativo del 25 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1999.

Fayt, Carlos. “La Omnipotencia de la Prensa. Su juicio de realidad en la Jurisprudencia Argentina y Norteamericana”. La Ley. Fondo Editorial de Derecho y Economía. Buenos Aires, 1994.-

Fayt, Carlos. “La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre Comunicación y Periodismo. Estrategias de la Prensa ante el riesgo de extinción”. Edic. La Ley. Buenos Aires, 2001.

Fernández Fernández, Pablo Alfonso. Tesis doctoral: “Estatuto Jurídico del Profesional de la información: los Colegios Profesionales de Periodistas”, dirigida por el Dr. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, presentada ante esta Universidad Complutense de Madrid, en 2010.

Disponible en formato digital en: <http://eprints.ucm.es/10659/1/T31600.pdf>

Ferrajoli, L. “Libertad de información y propiedad privada. Una propuesta no utópica”, Nexos, N° 316 (abril de 2004), México, 2004.

Ferrari Wolfenso, Gustavo y Mazzina, Constanza. “La democracia mediática y las bases del sistema republicano”, Contribuciones. Año XVIII, CIEDLA, Buenos Aires, abril-junio de 2001.

Federación Internacional de Periodistas (FIP). “La concentración mediática y su impacto en la libertad de expresión y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa”. Santiago de Chile, FIP, 3 de mayo de 2011.

Fiss, Owen. “Democracia y disenso. Una teoría de la libertad de expresión”. Ediciones AD-HOC, Buenos Aires, 2010.

Fiss, Owen. “La Ironía de la Libertad de Expresión”. Gedisa Editorial, Barcelona, 1999.

Fiss, Owen M. Yale Law School. “ The Censorship of Television” (1999). Faculty Scholarship Series, Paper 1318. [http://digitalcommons.law.yale.edu/fiss\\_papers/1318](http://digitalcommons.law.yale.edu/fiss_papers/1318)



- Fontevicchia, Jorge "Moralía", Diario Perfil 10 de mayo de 1998. Separata Manual de Estilo y Algo más. Buenos Aires, Argentina, Editorial Perfil. Pág. 2.
- Foucault, Michel. El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012.
- Frascaroli, María Susana. "Justicia Penal y Medios de Comunicación". Editorial AD-HOC. Buenos Aires, 2004.
- Freire, Paulo. ¿Comunicación o Extensión? La concientización en el medio rural. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires, 1973.
- Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. "Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información", Valencia, 2005.

## G

- Gallardo, Juan Pedro. "Réplica y Participación ciudadana", publicado en el diario "Página 12", Buenos Aires, Argentina. Sección La Ventana, 4 de enero de 2010. Versión digital disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-137804-2010-01-04.html>
- García Belaunde, D.- Fernández Segado, F. (Coordinadores) "La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica". Edit. Dykinson, Madrid. Ediciones Jurídicas Lima. Editorial Jurídica E. Esteva, Uruguay. Editorial Jurídica Venezolana. Madrid, 1997.
- García de Enterría, Eduardo. "El valor en Derecho español de la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Boletín del Colegio de Abogados de Madrid. Núm. 1 de 1987.
- García Ghirelli, José I. (Recopilador) "Tratados y Documentos Internacionales". Zavallia Editor. Buenos Aires, 1988.
- García Guadarrama, José Luis. "El debate Gadamer-Habermas: interpretan o transforman el mundo?". Contribuciones desde Coatepec, enero-junio número 010, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México, pp.11-21. Disponible en <http://www.uma.es/gadamer/resources/Garcia-Gadmer-habermas.pdf>
- García Ramírez, Sergio y Gonza, Alejandra. "La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". D. R. © 2007, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2007. También disponible en formato digital en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad\\_expresion3.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf)
- García Rey, P. y Lozano, L.M. "Hacia un ejercicio pleno de la libertad de expresión en la Argentina: el desafío de traducir los debates en políticas públicas", en CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2009, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2009.
- Gobierno de Cantabria. Vicepresidencia. Dirección General de la Mujer. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Recomendaciones", 2006. Disponible en formato digital en: [http://www.pilarlopezdiez.eu/documents/Protocolo\\_Cantabria.pdf](http://www.pilarlopezdiez.eu/documents/Protocolo_Cantabria.pdf)
- Gómez-Reino Carnota, Enrique. "Aproximación histórica al Derecho de la Imprenta y de la Prensa en España (1840-1966). I.E.A. Madrid, 1997.-
- González Ballesteros, Teodoro. Catedrático del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de



- Madrid (UCM). “Democracia y comunicación (reflexiones)”, Madrid, 2013. Lección Inaugural Curso Académico 2013/2014.  
<https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-10-09-Lecci%C3%B3n%20Inaugural%202013-2014%20%28Gonz%C3%A1les%20Ballesteros%2933.pdf>
- González Ballesteros, Teodoro. “El Derecho de Réplica y Rectificación en Prensa, Radio y Televisión”. Editorial REUS, S.A. Madrid, 1981.
- Guzmán-Brito, Alejandro. Editor Académico, *El derecho de las Indias occidentales y su pervivencia en los derechos patrios de América*. Actas del Decimosexto Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile, desde el 29 de septiembre al 2 de octubre de 2008, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2010, 1.031 págs., 2 tomos.
- H**
- Herrendorf, Daniel E. “Una auténtica dictadura ideológica privada”. *El Derecho*, 131-545.
- Herrero-Tejedor, Ferando, Fiscal ante el Tribunal Constitucional. “Honor, Intimidad y Propia Imagen”. Ed. Colex. 2da. Edición. Madrid. Enero de 1994.
- Hitters, Juan Carlos. “Los tribunales supranacionales”, publicado en *La Ley*, 16 de agosto de 2006. Tomo 2006-E, 817. Buenos Aires, Argentina.
- Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Oscar. “Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tomo 1 y 2. Editorial Ediar, Buenos Aires, 2007.
- I**
- Infante Naranjo, Manuel J. “Aproximación a la ética emergente de Internet”, en “Información para la paz. Autocrítica de los medios y responsabilidad del público”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. Valencia, 21 de septiembre de 2005.
- J**
- Jaén Vallejo, Manuel “Libertad de Expresión y delitos contra el honor”. Editorial COLEX, Madrid, 1992.
- Jareño Alarcón, Joaquín. “El itinerario filosófico para la enseñanza de la deontología”, en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005. Pág. 55.
- Jimena Quesada, L. *Sistema Europeo de Derechos Fundamentales*, Edic. Colex, Madrid 2006.
- K**
- Kelsen, H. (1953a). “Teoría pura del derecho y teoría egológica. Respuesta al artículo de Carlos Cossio: “Teoría Egológica y Teoría Pura” (Balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina), Buenos Aires, *La Ley*, t. 72, 749-764.
- L**
- La Nación*, Manual de Estilo y Ética periodística. Espasa. Buenos Aires, 1997.
- Larrondo Manuel y Eliades Analía. “Secreto periodístico: ¿debe revelarse ante un pedido de informe de un letrado? Publicado en *Revista Jurídica La Ley*, Suplemento Argentina, Buenos Aires, 6 de abril de 2007.
- La Rue, Frank, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión; Dunja Mijatović, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación; Catalina Botero Marino; Relatora Especial de la

- OEA para la Libertad de Expresión; Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. 2011.
- Lazcano Brotóns, Iñigo. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Universidad del País Vasco. “Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del derecho de rectificación”, en “Comunicación y pluralismo”, 2010, N° 9, Universidad Pontificia de Salamanca. Págs. 149-176. Salamanca, 2010.
- Lázzaro, Luis. “La batalla de la comunicación. De los tanques mediáticos a la ciudadanía de la información”, Ediciones Colihue Encrucijadas, Buenos Aires, 2010.
- López Díaz, Elviara. “El Derecho al Honor y el Derecho a la Intimidad”. Jurisprudencia y doctrina. Edit. Dykinson. 1996.
- Loreti, Damián. 1995. El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.
- Loreti, Damián (con la colaboración de Analía Eliades). “Los aportes de la CIDH en materia de prevención contra la censura previa”, CEJIL, año 1, N° 1, diciembre de 2005. San José de Costa Rica, Costa Rica.
- Loreti, Damián y Lozano, Luis. “El derecho a comunicar. Los conflictos en torno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas”. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, abril de 2014.
- Loreti, Damián; Mastrini, Guillermo y Baranchuk, Mariana. Compiladores. “Participación y democracia en la Sociedad de la Información”. Actas del III Congreso Panamericano de Comunicación. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2007.
- Lozano, L.M. “Libertad de expresión y derecho a la información: Tensiones y desafíos en torno a la democratización de la palabra”, en CELS, Derechos Humanos en Argentina, Informe 2011, Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.

## M

- MacBride, Sean y otros. UNESCO. “Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo”. Hacia un nuevo orden mundial más justo y eficaz de la Información y la Comunicación. Informe de la Comisión Internacional sobre problemas de la comunicación. Fondo de Cultura Económica, México/ UNESCO, París, 1980.
- McQuail, Denis. “Introducción a la teoría de la comunicación de masas”. Editorial Paidós, Barcelona, 1985.
- Marchante, Navarro y Rodríguez Bores, Rodrigo F. “La cláusula de conciencia de los profesionales de la información. La Ley Orgánica 2/1997”. Revista Latina de Comunicación Social 49, abril de 2002.
- Disponible en <http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina49abril/4906navarro.htm>
- Márquez Alurralde, Maximiliano. “Régimen jurídico de las comunicaciones (Publicultura)”. Ediciones De Palma. Buenos Aires, Septiembre de 1986.
- Martín-Caro Sánchez, Miguel Angel. “La radio del siglo XXI” Un servicio público en la economía global. Edic. fragua. Madrid, 2000.
- Martínez Pandiani, Gustavo. “La revancha del receptor. Política, Medios y Audiencias”, Colección Comunicación y Poder. EUS. Ediciones Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2008.
- Marx, Karl. “La miseria de la filosofía”. Sarpe. Madrid, 1984.

- Mastrini, Guillermo (Editor). “Mucho ruido, pocas leyes” Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2007). Ediciones La Crujía. Buenos Aires, 2009.
- Mastrini, Guillermo y Bolaño, César (editores) “Globalización y Monopolios en la Comunicación en América Latina. Hacia una economía política de la comunicación”. Editorial Biblos, Comunicación, Medios, Cultura. Buenos Aires, 1999.
- Mata, M. (editora). “Democracia y ciudadanía en la sociedad de la información”. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2005. Argentina.
- Mendes, Soraia da Rosa. “Esfera pública e direitos fundamentais. Estudos sobre a liberdade de comunicação”. Passo Fundo, Brasil. 2008.
- Méndez, Juan “Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Ediciones Del Puerto, Buenos Aires, 1997.
- Midón, Mario A. “El derecho de respuesta inmediata, ¿criterio editorial o dignidad humana?. E.D., 131-861.
- Miller, Jonathan M.; Gelli, María Angélica y Cayuso Susana. “Constitución y Derechos Humanos”. Jurisprudencia nacional e internacional y técnicas para su interpretación. Tomo 2. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1991.
- Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Argentina. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. “Comunicación responsable. Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios”, Buenos Aires, 2013.
- Moisset de Espanés, Luis. “La codificación española y su influencia en el Código Civil Argentino”. Investigación efectuada para presentarse en el Congreso Internacional de Lima en Homenaje al Centenario del Código civil español: 1889 - 1989, y publicada en A.D.C., 1990 - III, p. 713-735.
- Montoro Puerto, Miguel. “Jurisdicción Constitucional y Procesos Constitucionales”. Tomo II. Procesos de Protección de los Derechos Fundamentales. Editorial COLEX. Madrid. 1991.
- Moreno, Mariano. Gazeta de Buenos Ayres, N° 3, jueves 21 de junio de 1810.
- Muñoz Saldaña, Mercedes. “La autorregulación como espacio de la libertad informativa: el paradigma de la comunicación comercial“, en Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.
- Muro de Iscar, Francisco (Comp.) Ética en la Información. Códigos de Conducta y estatutos profesionales (II) Apie. Madrid. 1996.

## N

- Navas Alvear, Marco. “El derecho a rectificación en la perspectiva actual”, Revista Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Guayaquil. Ecuador.  
[http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=93&Itemid=39](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=39)

Consulta de página web: 8 de enero de 2015.

Naqvi, Yasmin. “El derecho a la verdad en el derecho internacional: ¿realidad o ficción?”, *International Review of the Red Cross*. Junio de 2006. Disponible en: [https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc\\_862\\_naqvi.pdf](https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/irrc_862_naqvi.pdf)

Consulta de página web: 8 de enero de 2015.

Nino, Carlos. “Libertad de expresión, de conciencia y de educación”, en *Fundamentos de Derecho Constitucional*. Astrea, Buenos Aires, 2000.

Nino, Carlos. “Derecho, Moral y Política I”, Gedisa Editorial. Barcelona, 2007.

Nogueira Alcalá, Humberto. “El Derecho de Declaración, aclaración o de rectificación en el ordenamiento jurídico nacional”. *Ius et Praxis* Año 7 N° 2: 327 - 356, 2001. Chile. Artículo de doctrina

[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0718-00122001000200015#titulo](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122001000200015#titulo)

Consulta de página web: 8 de enero de 2015.

## O

O’Callaghan, Xavier. “Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen”. Editoriales de Derecho Reunidas, S.A. Madrid, 1991.

Ordóñez, Jaime. “El problema de las limitaciones sociales al derecho a la información : la cuestión de la censura”. *En: Estudios básicos de derechos humanos VII*. San José, IIDH, 1996, pp. 203-224

## P

Palacio, Norberto y Monti, Eduardo J. “El derecho de réplica”. *El Derecho*, Tomo 122-881.

Parcero, Daniel. “Los trabajadores de prensa. Ladrilleros del periodismo”, Vol. I, Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 2010.

Pasquali, Antonio “Teoría de la Comunicación: Las implicaciones sociológicas entre información y cultura de masas” *Comunicación y Cultura de Masas*, Primera Parte. Monte Avila Editores, Venezuela, 1972.

Paz, Martha, *La Autorregulación periodística sí se puede*, En los zapatos de la pulga. Relato de una experiencia de la Defensoría del Lector en Bolivia, Centro para Programas de Comunicación, 2ª ed. La Paz, 2008, pág. 19-26. En <http://www.pieb.com.bo/blogs/paz/articulo1.php>

Pérez Del Viso, Adela. “El decreto 936/11 y sus fundamentos. la lucha contra patrones socioculturales de dominación”, 11 de Agosto de 2011 [www.microjuris.com.ar](http://www.microjuris.com.ar), MJ-DOC-5479-AR. Id Infojus: DACF110095. Disponible en:

<http://www.infojus.gob.ar/adela-perez-viso-decreto-936-11-sus-fundamentos-lucha-contra-patrones-socioculturales-dominacion-dacf110095-2011-08-11/123456789-0abc-defg5900-11fcanirtcod>

Pérez Royo, Javier. “Curso de Derecho Constitucional”. Segunda Edición. Marcial Pons. Madrid, 1995.

Perfil. Manual de Estilo y algo más. Domingo 10 de mayo de 1998. Buenos Aires.

Piatelli–Palmarini, M.(ed.). “Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje”, Crítica, Barcelona, 1983.

Pinto, Mónica. “Temas de Derechos Humanos”, Ediciones Del Puerto, Buenos Aires, 2012.

-----“El derecho internacional. Vigencia y desafíos en un escenario globalizado”, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (Colección Breves), 2004.

- “ Los derechos económicos, sociales y culturales y su protección en el sistema universal y en el sistema interamericano”, 40 Revista del IIDH, 2004, 25-86.
- « Las instituciones supranacionales y el rule of law» en Estado de derecho y democracia. Un debate acerca del rule of law. SELA 2000 Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, Roberto Saba (ed.), Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001, 281-294.
- « Libertad de Expresión y Derecho a la Información como Derechos Humanos» en Estudios Básicos de Derechos Humanos X, San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Fundación Ford, 2000, 17-47.
- Pizarro, Ramón Daniel. “Daño Moral. Prevención. Reparación y Punición” El daño moral en las diversas ramas del Derecho. Hammurabi, José Luis Depalma Editor. Buenos Aires, 1996.
- “Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes”, Editorial Hammurabi. Jose Luis Depalma Editor. Buenos Aires, 1999.
- Prieto Castillo, Daniel. “La comunicación EN la educación”. Editorial Stella. Ediciones La Cruzía. Buenos Aires, segunda edición, 2004.
- Post, Robert C. “El Estado frente a la libertad de expresión”, Colección de Ciencias Jurídicas. Yale Law School. Universidad de Palermo. 2011.

## **R**

- Ramonet, Ignacio. “La tiranía de la comunicación”. Temas de Debate. Madrid, 1998.
- REY, Germán, Ver desde la Ciudadanía. Observatorios y veedurías de medios de comunicación en América Latina. En Veedurías y Observatorios. Colectivo la Tribu. Ed. La Tribu, 2003.
- Rivers, William L. y Mathews, Cleeve “La ética en los medios de comunicación”, Ediciones Gernika, S.A., México D.F., 1992. Segunda edición, 1994.
- Rivera Julio C. “El derecho de réplica, rectificación o respuesta”. La Ley, 1985-E-787.
- Rivers, William L, y Schramm, Wilbur. “Responsabilidad y comunicación de masas”. Ediciones Troquel. Buenos Aires, 1973.
- Rivero, Jean. “Le libertés publiques”, Vol. II. P.U.F. París, 1980.
- Rivero, Julio C. Revista Jurídica La Ley, T. 1985-E-Sección Doctrina. Pág. 792.
- Rodríguez, Esteban. Compilador. “Contra la prensa. Antología de diatribas y apostillas”. Ediciones Colihue. Buenos Aires, mayo de 2001.
- “Justicia mediática. Las formas del espectáculo”. Editorial AD-HOC, Buenos Aires, 2000.
- “Derecho a la comunicación”. Universidad Virtual de Quilmes. Bernal, Buenos Aires, 2013.
- Rocco, Orlando. Título VI. “Régimen del Personal de Empresas Periodísticas”, en Tratado del Derecho del Trabajo. Tomo III, dirigido por Mario Deveali. La Ley. Buenos Aires, 1965.
- Rodríguez Bahamonde, Rosa; “El Secreto del Sumario y La Libertad de información en el Proceso Penal”; Ed. Dickinson, España, 1999.
- Rodríguez Pardo, Julián “Derecho de la Comunicación”. Textos Media. Laverde Ediciones. Santiago, Galicia, 1999.

- Rodríguez Pardo Julián, “Autorregulación y hetero-regulación, una apuesta suficiente para el mercado actual? El caso de Gran Bretaña” en “Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la ética y del derecho a la información”. Fundación COSO de la Comunidad Valenciana para el Desarrollo de la Comunicación y la Sociedad. 2º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información. Valencia, mayo de 2005.
- Rogel Vide, C. “Bienes de la Personalidad, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas”. Publicaciones del Real Colegio de España, Madrid, 1985.
- Romero Coloma, A.M. “Libertad de información frente a otros derechos en conflicto: honor, intimidad y presunción de inocencia”, Cuadernos CIVITAS, Madrid, 2000.
- Rosas Martínez, Alejandro. ¿Derecho de Rectificación, Derecho de respuesta o derecho a réplica? Derecho Comparado de la Información, julio-diciembre de 2011. UNAM. México. Pp.67-102.
- biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/18/art/art3.pdf
- Biblioteca Jurídica Virtual UNAM.
- Fecha de consulta de página: 8 de enero de 2014
- Rubio Llorente, Francisco. “Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales (Doctrina Jurisprudencial). Ariel Derecho. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, septiembre de 1995.-
- Ruiz Giménez, Joaquín. “Dialéctica de la libertad de comunicación y el respeto a la intimidad”. Centre d’ Investigació de la Comunicació, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 1991.
- Ruiz Vadillo, E. «El derecho constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia». En *Poder Judicial*, nº especial XII, Madrid, 1990.
- Rousseau, Jean-Jacques. “El Contrato Social”. Editorial Tecnos, S.A. Barcelona. 1988.
- S**
- Saavedra López, Modesto “La libertad de expresión en el Estado de Derecho. Entre la Utopía y la realidad”. Ariel Derecho. Barcelona, octubre de 1987.
- Sagües, Néstor P., Variables en el ejercicio del derecho de réplica, La Ley, T. 2006-A. Buenos Aires, 2006.
- Saiz García, Concepción “Objeto y sujeto del derecho de autor”. Biblioteca Jurídica Cuatrecasas. Dirigida por: F. Vicent Chuliá. Edic. tirant lo blanch. Valencia, 2000.
- Sanguinetti, Luciano Pedro. Editor. “El fin de los medios? Políticas, apropiaciones y usos de las TICs. Ediciones de Periodismo y Comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2007.
- Sánchez, Salvador Juan. “Periodismo. Arcanos y Laberintos”. Zeta Editores. Mendoza, Argentina, 1996.
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel. “Una nueva libertad de expresión para una nueva sociedad”. Revista Diálogos de la Comunicación. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Nº 82. Septiembre- Diciembre 2010. Pág. 3. Disponible en:
- <http://dialogosfelafacs.net/una-nueva-libertad-de-expresion-para-una-nueva-sociedad-2/>
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2009): “La función pública de la información como derecho fundamental”, en Pérez Herrero, Julio César et al. La



- Teoría de la Información y de la Comunicación en el marco de Bolonia: un manual. Madrid: Universitas. 77-96.
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2010a). Nuevos horizontes para el constitucionalismo del siglo XXI en Galeana, Patricia (coordinadora) et al. El constitucionalismo mexicano. Influencia continentales y trasatlánticas. México: Siglo Veintiuno Editores –Senado de la República
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2010b): “Reconocimiento constitucional de las libertades comunicativas: una necesidad personal y una exigencia pública” en Revista Derecom. Octubre 2010 de <http://derecom.com/numeros/pdf/sanchez.pdf>
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2010c): “Por una ley de acceso a la información pública” en Revista Periodistas nº 22 otoño 2010 FAPE <http://www.fape.es/ptr/gestion/usuarios/u ser676581/ fape/ files/ doc/ vfape 127309120101001135702.pdf> Pág. 20.
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel (2010d) Consumidores y Derecho a la Información. Prospectiva desde el Derecho Constitucional: El derecho de acceso a la información pública en CEACCU. [http://www.ceaccu.org/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=253&Itemid=](http://www.ceaccu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=253&Itemid=)
- Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Manuel “La función pública de la información como derecho fundamental”, en Pérez Herrero, Julio César y otros: La Teoría de la Información y de la Comunicación en el marco de Bolonia: un manual. Páginas 69 a 88. Editorial Universitas, 2009 (CL) ISBN 978-84-7991-252-9.
- Sánchez, Ruiz. “Medios de comunicación y democracia”. Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2006.
- Sánchez, Salvador Juan “Periodismo. Arcanos y Laberintos”. Zeta Editores. Mendoza, 1996.
- Sobrao Martínez, Francisco. “El derecho de rectificación”, en Revista Persona y Derecho. Vol. 05, 1978. España. Pág. 146. Disponible en Dadum. Depósito académico digital de la Universidad de Navarra. <http://dadun.unav.edu/handle/10171/12335>
- Soria, Carlos. “La crisis de identidad del periodista”, Barcelona, Ed. Mitre. 1989.
- Soria, Carlos “Derecho a la información y derecho a la honra”. Editorial ATE , Barcelona 1981.
- T**
- Travieso, Juan Antonio. “Garantismo vs. Responsabilidad Internacional. Aplicación del Derecho Internacional por la Corte Suprema de la Nación”, L.L. Tomo 1998-C. Págs. 762 y ss.
- Terrou, F. “La información”, Oikos-Tau, Barcelona, 1970.
- U**
- Universidad Austral. Master en Derecho Administrativo. Master en Derecho de la Empresa. Cuaderno de Fallos. La Ley. Buenos Aires, 1997.
- UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Manual de gestión de riesgos de desastre para comunicadores sociales. Una guía práctica para el comunicador social comprometido en informar y formar para salvar vidas. Perú, 2011.
- V**
- Vattimo, Gianni “La sociedad transparente”. Paidós/I.C.E.-U.A.B. Barcelona, 1990.

Vázquez Montalbán, Manuel. “Historia y comunicación social”, Edic. Bruguera, Barcelona, 1980.

Vega Ruiz, José Augusto de. “Libertad de Expresión. Información Veraz. Juicios Paralelos. Medios de Comunicación”. Editorial Universitas, S.A. Madrid, 1998.

Villalba, Carlos – Lipszyc, Delia. “El Derecho de Autor en la Argentina”, La Ley, Buenos Aires, 2005. Pág. 1

Villanueva, Ernesto “Derecho Comparado de la Información”. Edic. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. México, 1998.

Villanueva, Ernesto. “Deontología informativa. Códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo”. Edic. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. México. 1999.

## **W**

Wlasic, Juan Carlos. “Manual crítico de derechos humanos”, Edit. La Ley, Buenos Aires, 2011.

## **Z**

Zaffaroni, Eduardo. “Los aparatos de propaganda de los sistemas penales latinoamericanos (La fábrica de noticias), en: “En busca de las penas perdidas”, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1989.

Zaffore, Jorge “La Comunicación Masiva. Regulación, Libertad y Pluralismo”. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1990.

Zannoni, Eduardo y Bísaro. “Responsabilidad de los medios de prensa”. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1993.

Ziulu, Adolfo Gabino. “Derecho Constitucional”. Abeledo-Perrot Editores. Buenos Aires, 2014.

## **2. Legislación**

### **2.1. Constituciones**

Constitución Argentina.

Constitución Española.

Constitución de los Estados Unidos de América.

Constitución de Bolivia. Texto disponible en:

<http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf>

Última consulta 12 de febrero de 2015.

Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Notas remissivas e índices por Juarez de Oliveira. Editora Saravia. Rio de Janeiro. 1998.

“V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.”

Constitución Política de Colombia. 1991, con reforma de 1997. Página web en Internet: Base de Datos Políticos de las Américas. Political Database of the Americas.

Constitución de Chile de 1980, texto actualizado a octubre de 2010. [http://www.oas.org/dil/esp/constitucion\\_chile.pdf](http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf)

Texto oficial de la Constitución del Ecuador. Última consulta: 12 de febrero de 2015. [http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion\\_de\\_bolsillo.pdf](http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf)

en “La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica”, Edit. Dykinson, Madrid, 1997.



Constitución de El Salvador, 1983, reformada el 31 de octubre de 1991 y 30 de enero de 1992. Texto oficial disponible en:

[http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-legislativa/constitucion/Constitucion\\_Actualizada\\_Republica\\_El\\_Salvador.pdf](http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-legislativa/constitucion/Constitucion_Actualizada_Republica_El_Salvador.pdf) - Última consulta 11 de febrero de 2015.

Constitución de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-07-2014. Texto oficial disponible en:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm> - Web oficial de la Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Última consulta 9 de febrero de 2015.

Constitución de Nicaragua, adoptada el 9 de enero de 1987. Actualizada a agosto de 2003. Disponible en: <http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2134/Constitucion.pdf> - Última fecha de consulta 14 de febrero de 2015.

Constitución de Paraguay, adoptada el 20 de junio de 1992. Texto disponible en [http://www.oas.org/juridico/spanish/par\\_res3.htm](http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm) - Última consulta 10 de febrero de 2015.

Constitución de Perú, adoptada el 29 de diciembre de 1993. Texto oficial disponible en: <http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860. Disponible en: [http://www.inpsasel.gob.ve/moo\\_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf](http://www.inpsasel.gob.ve/moo_doc/ConstitucionRBV1999-ES.pdf) - Última consulta: 12 de febrero de 2015.

## **2.2. Legislación española**

“Código Penal y Leyes Penales Especiales”. Edición preparada por: José Manuel Valle Muñiz. Aranzadi Editorial. Pamplona, 1997.-

Constitución de España de 1978. Publicada en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978. Vigencia desde 29 de Diciembre de 1978. Esta revisión vigente desde 27 de Septiembre de 2011.

Constitución Política de la Monarquía Española. Manuscrito original con todas las firmas suscrito en Cádiz, el 18 de marzo de 1812. Constituciones Españolas 1812-1978. Congreso de los Diputados.

Ley Orgánica 2/1984, reguladora del derecho de rectificación. Publicada en BOE de 27 de Marzo de 1984. Vigencia desde 16 de Abril de 1984.

Ley Orgánica 2/1997 reguladora de la Cláusula de Conciencia, de 19 de junio de 1997. B.O.E.: 20 de junio de 1997.

B.O.E. Jurisprudencia. Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. (conforme citas en el texto y notas al pie).

## **2.3. Legislación argentina**

Constitución de la República Argentina. Actualizada con la última reforma de 1994.

Constituciones de las Provincias Argentinas:

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones.

Entre Ríos. Texto oficial disponible en la web de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. <http://www.hcder.gov.ar/constitucion.php>

Santa Fe. ADLA, XXII-B 1909. B.O. 18/IV/1962. El derecho de réplica en la Constitución santafecina se consagra en el último párrafo del Artículo 11.

Neuquén. ADLA, XVII-B, 2029.

Chubut

Formosa. Sanción: 3 de abril 1991; Promulgación: 3 de abril de 1991; Publicación: B.O. 3/4/91.

Río Negro

La Pampa. ADLA, XXI-B, 1653.

Santa Cruz. ADLA, XVII-B, 2231. La Constitución reformada en 1994 fue publicada en el Boletín Oficial del 30/9/94.

Catamarca. . B.O. 5/IX/1988.

Jujuy. Boletín Oficial del 17/11/86.

Salta. Boletín Oficial del 22/4/98 (Separata).

San Juan. Boletín Oficial del 7/5/86.

Santiago del Estero. Boletín Oficial del 29/12/97 (Edición Extraordinaria).

Constitución de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sanción: 17 de mayo de 1991. Promulgación: 17 de mayo 1991. Publicación B.O.: 28/5/91.

Constitución de la Provincia de Tucumán. República Argentina. Fecha de publicación en Boletín Oficial: 7 de junio de 2006.

### **Legislación nacional argentina**

Ley N° 2.054. B.O. 27 de marzo de 1984. Aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Argentina.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley N° 26.522. B.O.: 10 de octubre de 2009.

Estatuto del Periodista Profesional Decreto Ley 7618/44 de 25 de marzo de 1944 y ratificado por Ley N° 12.908. B.O.: 11-09-1947.

Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Decreto 13.839/46, de 15 de mayo de 1946, ratificado por Ley N° 12.291, con posteriores reformas por leyes 13.502 y 15.535.

Ley N° 26.032. B.O.: 17-06-2005. Servicio de Internet.

Ley N° 25.675 B.O. 28/11/2002. Ley General del Ambiente.

Ley N° 25.831. B.O. 7/01/2004. Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.

Ley 25.778. B.O.: 3/09/2003. Ratificación con jerarquía constitucional de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

Ley N° 26.485 (B. O.: 14/03/2009), de Protección Integral para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Decreto 936/11 Poder Ejecutivo Nacional. Argentina. B.O.: 6/07/2011. Prohíbe con carácter de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual.

Documentos de la Defensoría del Público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. <http://www.defensadelpublico.gob.ar/es>

Diario La Nación. <http://www.lanacion.com.ar/96335-adepa-rechazo-un-fallo-de-la-corte-sobre-el-derecho-de-replica>

Diario Judicial

<http://www.diariojudicial.com/noticias/Proponen-reglamentar-el-derecho-a-replica-20080513-0007.html>

12/0508. Proponen reglamentar el derecho a réplica. Incluye texto de proyecto de ley.

Fecha de consulta: 8 de enero de 2015

Documentos ADEPA

CELS – CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES

ADC – ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES. ARGENTINA.

### **Proyectos de ley consultados en la base de datos y Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina.**

Fundamentos vertidos por el Diputado Jorge O. Folloni en su proyecto de ley sobre derecho de rectificación en 1992. Diario de sesiones. Pág. 3896.

Convención Nacional Constituyente (1957), Diario de Sesiones, II-881, 891, 1524.

Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 48ª. Reunión, 11-10-61, pág. 3788.

Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1964, p. 2165.

Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1973-V-3543.

Cámara de Diputados de la Nación. Trámite parlamentario núm. 90, proyectos en revisión N° 11, p. 2182 y Diario de Sesiones del Senado, orden núm. 113, del 18 de junio de 1985, p. 397.

Expediente N° 2458-D-92. Trámite Parlamentario 74. Diario de Sesiones. Págs. 3370 a 3379.

Expediente N° 2743-D-92. T.P. 84. Diario de Sesiones. Págs. 3749 a 3751.

Expediente N° 1906-D-92. T.P. 53. Diario de Sesiones. Págs. 2613 a 2616.

Convención Nacional Constituyente 1994. Proyectos presentados. Diario de Sesiones. Págs. 849, 850, 1060 a 1063.

Convención Nacional Constituyente 1994. Proyectos presentados. Diario de Sesiones. Pág. 1487/1488.

4826-D-99. Diario de Sesiones. Págs. 5974/5975.

4606-D-2000. T. P. 105. Diario de Sesiones. Págs. 5854 a 5860. Proyecto presentado por: Graciela Camaño, Fernanda Bendinelli de Ferrero, José M. Díaz Bancalari, y Carlos Soria.

21 1017-D-2000. Diario de Sesiones. Págs. 1521 a 1527. Legisladores: Jorge O. Folloni y Ricardo Gómez Díez.

PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 6715-D-2008 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 176 Fecha: 04/12/2008 DERECHO A REPLICA: OBJETO, FORMA Y CONTENIDO, LEGITIMACION, LIMITACION, PUBLICACION, RECTIFICACION, IMPROCEDENCIA, RECLAMO JUDICIAL, COSTOS, SENTENCIA, MULTA, RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO. FIRMANTES: DIEZ, MARIA INES RENOVADOR DE SALTA, TORFE, MONICA LILIANA RENOVADOR DE SALTA, ARDID, MARIO

ROLANDO PARTIDO NUEVO CONTRA CORRUP. POR HONEST. Y TRANSP. CORDOBA.

Diputados Expediente: 0995-D-2009 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 14 Fecha: 19/03/2009 REFORMA AL CODIGO PENAL DE LA NACION: LIMITE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION POR RECTIFICACION O ACLARACION CON RELACION A LA NOTA PERIODISTICA QUE DIO ORIGEN A LA ACCION PENAL. FIRMANTES: VARGAS AIGNASSE, GERONIMO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ TUCUMAN GIRO A COMISIONES EN DIPUTADOS: LEGISLACION PENAL.

PROYECTO DE LEY Iniciado en la Cámara de Diputados. Expediente: 1768-D-2010 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 28 Fecha: 07/04/2010. Derecho de rectificación o respuesta. Casos incluidos, excepciones, ejercicio del derecho, procedimiento por vía sumarísima. (Reproducción del Expediente 1912-D-08). FIRMANTES: PASINI, ARIEL OSVALDO ELOY FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ BUENOS AIRES

El proyecto mencionado anteriormente fue una réplica de idéntico proyecto presentado en 2008. Iniciado: Diputados Expediente: 1912-D-2008 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 36 Fecha: 02/05/2008

PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 5321-D-2012 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 98 Fecha: 08/08/2012 INFORMACIONES EMITIDAS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE HECHOS INEXACTOS O AGRAVIANTES: DERECHO A REPLICA. FIRMANTES: BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS ELORRIAGA, OSVALDO ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS SOLANAS, JULIO RODOLFO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS BIANCHI, MARIA DEL CARMEN FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ CIUDAD de BUENOS AIRES RIOS, LILIANA MARIA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS.

PROYECTO DE LEY Iniciado: Diputados Expediente: 7932-D-2013 Publicado en: Trámite Parlamentario n° 186 Fecha: 09/12/2013 INFORMACIONES EMITIDAS A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOBRE HECHOS INEXACTOS O AGRAVIANTES. DERECHO A REPLICA. FIRMANTES: BARRANDEGUY, RAUL ENRIQUE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ ENTRE RIOS

Proyecto de Ley presentado en el Senado de la República Argentina. Expediente N° S-4272/14. El presente proyecto de ley se encuentra vigente en su tratamiento parlamentario ya que los proyectos de ley tienen tal condición durante dos años y luego caducan si no llegan a su sanción.

### **3. Referencias páginas web**

RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CIDH – OEA – OSCE- ONU

Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Fuentes: [www.scba.gov.ar](http://www.scba.gov.ar)

<http://www.cij.gov.ar/inicio.html>

Es la página web de la Agencia de Noticias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Se va actualizando diariamente, posee los fallos, sentencias y resoluciones completas y sumarios de las mismas.

Tribunal Constitucional de España.

<http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Documentos, Relatorías, Informes de admisibilidad y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Informes anuales de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: disponibles en formato digital en:

[www.oas.org/es/cidh/expresion/](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/)

<http://www.oas.org/es/cidh/>

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Web oficial incluye jurisprudencia, casos contenciosos y opiniones consultivas.

<http://www.corteidh.or.cr/>

<http://www.pakapaka.gob.ar/>

<http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=121614&referente=docentes>

<http://www.fesp.org/>

[www.consejoinfancia.gob.ar](http://www.consejoinfancia.gob.ar)

[www.afsca.gob.ar](http://www.afsca.gob.ar)

[http://www.unicef.org/spanish/media/media\\_tools\\_guidelines.html](http://www.unicef.org/spanish/media/media_tools_guidelines.html)

<http://www.ofcom.org.uk/>

Estatuto de Información de la Corporación RTVE. Aprobado en referéndum el 18 de abril de 2008. Promulgado por el Consejo de Administración el 14 de mayo de 2008.

Disponible en formato digital en:

<https://periodismoglobal.files.wordpress.com/2008/05/estatuto-de-informativosrgltfinal.pdf>

<http://www.fopea.org/> Foro de Periodismo Argentino.

Ver documentos, comunicados, ponencias a Congresos y noticias entre otra información.

<http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1160498978Ponencia2.pdf>

Entre otros, se remite al documento elaborado por Enric Bastardes (FeSP), titulado “La necesidad de una ley de regulación laboral de los periodistas en España”

<http://www.europapress.es/nacional/noticia-periodistas-lamentan-precariidad-laboral-acoso-poderes-profesion-ofertas-trabajo-indignas-20140503114134.html>

#### **4. Jurisprudencia.**

##### **4.1. Jurisprudencia sistema interamericano de derechos humanos.**

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el Asunto Martorell v. Chile, Caso 11.230, Informe No. 11/96, de 3 de mayo de 1996.

Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva 5/85, 13-11-1985. Disponible en: [http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_05\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta. (ARTS. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana de Derechos Humanos) solicitada por el gobierno de Costa Rica.

Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, sentencia del 05-02-2001. Serie C, N° 73.

Corte IDH Caso "Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay".  
 Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia Corte IDH, 31 de agosto de 2004.  
 Corte IDH Caso "Tibi". Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C N° 114  
 Corte IDH Caso de los "Hermanos Gómez Paquiyauri". Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C N° 110  
 Corte IDH Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C N° 63.  
 Corte IDH El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/97 de 14 de noviembre de 1997. Serie A N° 16.  
 Corte IDH Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A N° 18, párr. 101.  
 Corte IDH Caso "Yatama vs. Nicaragua". Sentencia de 23 de junio de 2005.  
 Corte IDH Caso "Caesar". Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C N° 123  
 Corte IDH Caso "Lori Berenson Mejía". Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C N° 119.  
 Corte IDH Caso "Instituto de Reeducción del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C N° 112.  
 Corte IDH. Caso "Palamara Iribarne vs. Chile", sentencia de 22 de noviembre de 2005.  
 Corte IDH Caso "Kimel vs. Argentina", sentencia de 2 de mayo de 2008.  
 Corte IDH. Caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de julio de 2004.

#### **4.2. Jurisprudencia sistema europeo de derechos humanos.**

Resolución Parlamento Europeo 25 de septiembre de 2008 sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea (2007/2253. INI. Diario Oficial de la Unión Europea 8 E/85, 14/01/2010.  
 Caso "Informationsverein Lentia vs. Austria". Sentencia TEDH de 24 de noviembre de 1993.  
 Caso "Sunday Times v. Reino Unido", Sentencia de TEDH de 26 de abril de 1979.  
 Caso "Handyside v. Reino Unido", 7 de diciembre de 1976, § 49, serie A n 24.  
 Caso "Lindon, Otchakovsky-Laurens y July v. Francia" [GC], Nos. 21279/02 y 36448/02, § 45, CEDDH 2007 – XI.  
 Caso "Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Suiza" (n 2) [GC], n 32772/02, § 96, CEDDH 2009.  
 Caso "Wingrove v. Reino Unido". Sentencia de TEDH de 25 de noviembre de 1996.  
 Caso "Campbell y Fell v. Reino Unido". Sentencia de TEDH de 28 de junio de 1984.  
 Caso "Plon (société) v. Francia". Sentencia de TEDH 18 de mayo de 2004.  
 Caso "Lingens v. Austria" de 8 de julio de 1986. "Publications of the European Court of Human Rights". Serie A. 103 (1986).  
 Eur. Court H.R., Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June, 1998, Reports 1998-IV.  
 Eur. Court H.R., Case of Bowman v. The United Kingdom, judgment of 19 February, 1998.  
 Caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Belgica, de 2 de marzo de 1987, Serie A no. 113. Reports 1998-I.  
 Caso "Castells c. España", Sentencia de TEDH 23 de abril de 1992, § 42, serie A n° 236.

Sentencia dictada por la Sección 3ª del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto “Otegi Mondragón c. España” (demanda nº 2034/07). La sentencia devino firme el 15 de septiembre de 2011, tras el rechazo de la Gran Sala de la petición de revisión presentada por el Gobierno español, cfr. Communiqué de Presse du Greffier de la Cour CEDH 186 (2011) de 12.10.2011.

Caso “Vació Aizsardzības Klubs c. Letonia”, n 57829/00, § 40, 27 de mayo de 2004.

Caso “Lopes Gomas DA Silva c. Portugal”, n 37698/97, § 30, CEDDH 2000 – X.

Resolution N° (74 26 on the right of reply position of the individual in relation to the press. Adopted by the Committee of Ministers on 2 July 1974 at the 233rd meeting of the Ministers' Deputies.

Recommendation Rec (2004)16<sup>1</sup> of the Committee of Ministers to member states on the right of reply in the new media environment (*Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004 at the 909th meeting of the Ministers' Deputies*)  
[https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec\(2004\)16&Sector=secCM&Language=lanEnglish&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679](https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)16&Sector=secCM&Language=lanEnglish&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679)

#### **4.3. Jurisprudencia argentina.**

Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich Gerardo y otros s/ amparo. Fallos 315:1492, L.L. 1992-C-543.

Causas M. 399.XXXII, “Monges, Analía M. C. U.B.A.-res. 2314/95, del 26 de diciembre de 1996; C.278.XXVIII, “Chocobar, Sixto Celestino c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad”, del 27 de diciembre de 1996; Petric Domagoj, Antonio c. Página 12, CS, abril 16-998.

Acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín SA, Arte Radiotelevisivo Argentino SA, Cablevisión SA, Multicanal SA, Radio Mitre SA y Teledigital SA contra los artículos 41, 45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sentencia pronunciada el 29 de octubre de 2013.

Caso Emisiones Platenses S.A. c. Municipalidad de La Plata – CSJN 12/06/1997.

Caso Diario Río Negro c. Provincia del Neuquén – CSJN 5/09/07-

Caso Editorial Perfil S.A. y otro c. Estado Nacional JGM amparo CSJN 2/03/2011.

Caso ARTEAR S.A. c. Estado Nacional, JGM y SMC s/ amparo. CSJN 11/02/2014.

Caso Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida S. A., C.S.J.N, Fallos, 306:1892.

Cuaderno de Fallos, Universidad Austral, Master en Derecho Administrativo. Master en Derecho de la Empresa. Págs. 417/418. La Ley, Buenos Aires, 1997.

En el mismo sentido, cabe mencionar los precedentes tenidos en cuenta por la Corte para la resolución del mencionado caso: A. 492. XX “Comité Federal de Radiodifusión c. Provincia del Neuquén s/ Inconstitucionalidad”, resolución del 17 de enero de 1986; y C. 706. XXI “Comité Federal de Radiodifusión c. Provincia de Formosa s/ nulidad”, resolución del 7 de julio de 1987. Ver Revista La Ley, T. 1987-E, p. 476. Fallo 37.805-S.

Corte Suprema Justicia de la Nación, CSJN. C. 1082. XXXV. Originario: “Comité Federal de Radiodifusión c. Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad”. Sentencia 29/04/2004. Publicada en RAP Provincia de Buenos Aires, N° 14, Mayo 2004 – Año II, págs. 99 a 102.



Asociación Mutual Carlos Mujica c. Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional - COMFER) s/ amparo (Radio La Ranchada, de Córdoba). CSJN, 01/09/2003. A.215. XXXVII.

Causa n° 19.480 "Incidente de Thomas Catan en autos n° 14.829/2002" Juzg. Federal n° 11 — Secretaría n° 22 Registro n° 20.377, sala II, CNFed. Crim. y Correc. 28/10/02, La Ley, 1°/11/02. Horacio R. Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Luraschi.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "Simon, Julio H. y otros", sent. 14-junio-2005, comentado por Gregorio Badeni, LA LEY, 2005-D, 639.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, "Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción", E.224.XXXIX, fallo del 23-septiembre-2004, LA LEY, 2005-B, 161.

S.C. P. N° 2297, L. XL "Patitó José Ángel y otro c. Diario La Nación y otros". Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. 24 de junio de 2008.

Caso "Morales Solá". La Ley, Buenos Aires. 1996-E, 325.

Caso "Gesualdi c. El Porteño". (Gesualdi, dora M. C. Cooperativa Periodistas Independientes Ltda. y otros. C.S. Diciembre 17 de 1996). La Ley, Buenos Aires. T. 1997-B. Incluyendo Nota al fallo: Dimensiones de la "Real Malicia" y afectación del honor en el caso "Gesualdi", por María Angélica Gelli.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. "Petric Domagoj, Antonio c. Página 12" 97.170. CS, abril 16-1998. L.L. T. 1998-C.

Caso "Fibraca Constructora S.C.A. c. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, del 7 de julio de 1993 F. 433.XXIII.

Caso "Cafés La Virginia S.A." C.S, octubre 13 de 1994, 93.495. L.L. T. 1995 – D. CSJN, Fallos, 308:789; LL, 1986-C-411; E.D., 118:302; J.A., 1986-III-12.

Fallos, 239-459, del 27 de diciembre de 1957. Caso "Siri, Angel S. s/ amparo".

Caso "Fernández Valdez" (CSJN, Fallos, 284:345)

Caso "Sarotto" (Cámara Nacional Civil, sala A, marzo 19-1986)

Caso "Sánchez Abelenda" (Fallos: 311: 2553)

Caso "Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Neustadt, Bernardo y otros s/amparo" (Fallos: 311:2497).

Caso Ekmekdjian, Miguel Ángel c. Sofovich, Gerardo y otros. (E.64 LXXIII. Recurso de Hecho).

Caso "Conesa Mones Ruiz, Horacio c. Diario Pregón", C.S, abril 23-1996. L.L. T. 1996-C págs. 496 y ss.

**Caso "Petric Domagoj, Antonio c. Diario Página 12". C.S, abril 16-1998. L.L. 1998-C págs. 282 y ss.**

Caso "Rozenblum Horacio B. c. Vigil Constancio y otros". 50.166 CS, agosto 25-1998. E.D. T. 188, págs. 203 y ss.

Caso "Perini, Carlos A. y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro" (2003). P. 335.XXXVI. C.S.J.N. 21 de octubre de 2003. Recurso de Hecho. "Perini, Carlos Alberto y otro c. Herrera de Noble, Ernestina y otro".

Caso "Tierno, Juan Carlos c. La Arena S.A. s/ Acción de amparo". CSJN (2011) T. 423.XLIII. REX. 15/03/2011.

La totalidad de los fallos señalados se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: <http://www.csjn.gov.ar/>



#### **4.4. Jurisprudencia española.**

STC 12/1982, de 31 de marzo (Pleno). Recurso de amparo núm. 227/1981 (RA-34).

Ponente: Magistrado don Luis Díez Picazo. B.O.E. de 21 de abril de 1982.

STC 73/2014. B.O.E 135. 04/062014. Texto disponible en:

<http://www.tribunalconstitucional.es/>

Sentencia STC 79/2014, de 28 de mayo de 2014. B.O.E. 158, 24/06/2014. Texto

disponible en: <http://www.tribunalconstitucional.es/>

Caso “Bengoechea Calvo”. STC 35/1983, de 11 de mayo de 1983. BOE núm 120, de 20 de mayo de 1983.

Caso “Mercorsa”. STC 168/1986, 22 de diciembre. Sala 2ª. Recurso de amparo núm. 1.045/1985 (RA-553). Ponente: Magistrado don Jesús Leguina Villa. BOE de 20 de enero de 1987.-

Caso “Cambio 16”. Auto Num. 1243/1988, de 14 de noviembre de 1988. Número de registro: 554/1988. Asunto: Recurso de Amparo.

Caso Francisco Domínguez Galindo vs. Diario “Europa Sur”. STC 66/2000. B.O.E. N° 90. 14/04/2000. STC 66/2000, de 13 de marzo de 2000. Sala Primera. Recurso de amparo.

Caso Francisco Álvarez-Cascos Fernández vs. “Cadena Ser”. STC 51/2007. B.O.E: N° 92. 17/04/2007. STC 51/2007, de 12 de marzo de 2007. Sala Segunda. Recurso de amparo 2454-2004.

Caso Pedro José Ramírez Codina vs. “El Mundo”. STC 99/2011. B.O.E.: 19/07/2011. STC. Sala Primera. Sentencia 99/2011, de 20 de junio de 2011. Recurso de amparo 8505-2006.

Caso Florentino vs. “La Razón” – STS 2044/12. STS 2044/2012 - ECLI:ES:TS:2012:2044. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Sede: Madrid Sección: 1. N° de Recurso: 137/2010. N° de Resolución: 851/2011. Procedimiento: Casación. Ponente: JUAN ANTONIO XIOL RIOS. Tipo de Resolución: Sentencia. Disponible en versión digital. Buscador de Jurisprudencia del Poder Judicial Español <http://www.poderjudicial.es/>

Caso Luis María vs. “ABC” - STS 3847/2014. Sentencia del Tribunal Supremo TS 3847/2014 - Id Cendoj: 28079110012014100463. Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid, Sección: 1, N° de Recurso: 2579/2012; N° de Resolución: 538/2014. Procedimiento: CIVIL; Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS; Tipo de Resolución: Sentencia. Disponible en versión digital. Buscador de Jurisprudencia del Poder Judicial Español <http://www.poderjudicial.es/>

#### **5. Fuentes periodísticas. Notas de prensa.**

Diario Clarín. Badeni, Gregorio. “Un retroceso grave para la Argentina”. Clarín, Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48.

Diario Clarín. “La Corte Suprema decidió avalar el derecho a réplica”. Para ADEPA, la sentencia conocida ayer implica “un avance peligrosísimo contra la libertad de prensa”. Clarín. Sábado 20 de agosto de 1998. Información General. Pág. 48. Buenos Aires, Argentina.

Diario La Nación, 19 de septiembre de 1998. “Advirtió ADEPA acerca de los embates a la libertad de prensa”. Buenos Aires, Argentina.

Diario Página 12. Entrevista realizada por Diego Martínez a Cecilia Medina Quiroga, Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicada por el diario argentino *Página 12*, 1° de julio de 2008. Buenos Aires, Argentina.

Página 12, diario argentino, “Las acciones de propaganda”, 11 de noviembre de 2014, <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259571-2014-11-11.html>

Disponible en formato digital. Consulta de información de 15 de enero de 2015

Diario “El Mundo”, España. “Más de cien mil personas se manifiestan en Francia por la libertad de expresión”. Consulta de página 12 de enero de 2015.

<http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/07/54ad63aa22601d3c1e8b456b.html>

<http://www.telam.com.ar/tags/7779-vicente-massot/noticias>

Consulta de información de 15 de enero de 2015.

Entrevista realizada por Lorena Retegui a Gustavo Granero, Secretario General de la FATPREN, realizada en 2011 en el marco de su trabajo final, “Digitalización y cambios en las rutinas laborales en la prensa gráfica: ¿qué pasa con el marco jurídico?”, dirigido por Analía Eliades en el marco de la asignatura a su cargo, Derecho a la Información, la Comunicación y la Cultura, Maestría en Industrias Culturales, Universidad Nacional de Quilmes.

---